

alerta 2025!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz



Alerta 2025! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2025!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz

Elaborado por:

Iván Navarro Milián
Josep Maria Royo Aspa
Jordi Urgell García
Pamela Urrutia Arrestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

ISBN: 978-84-10328-77-8
Depósito legal: B 10421-2003

El presente informe ha sido elaborado por:

Iván Navarro Milián, Josep Maria Royo Aspa,
Jordi Urgell García, Pamela Urrutia Arrestizábal,
Ana Villegas Ariño y María Villegas Ariño.

Diseño: Lucas Wainer Mattosso

Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB

Imprenta: Ulzama

Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja necesariamente la opinión de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Para citar este informe:

Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2025! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*
Barcelona: Icaria, 2025.

Esta obra forma parte de la serie *Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz* que anualmente publica la Escola de Cultura de Pau y está sujeta a una licencia internacional de Creative Commons.



Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con finalidades comerciales y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

Escola de Cultura de Pau

Edifici B13

Carrer de Vila Puig

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (España)

Tel: +34 93 581 14 14

Email: pr.conflictes.escolapau@uab.cat

Web: <http://escolapau.uab.cat>

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas	6
Resumen ejecutivo	7
Resumen de la conflictividad global en 2024	21

Capítulos

1. Conflictos armados	23
1.1. Conflictos armados: definición	27
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2024	27
1.2.1. Tendencias globales y regionales	27
1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil	34
1.3. Conflictos armados: evolución anual	38
1.3.1. África	38
- África Austral	38
- África Occidental	39
- África del Este	44
- África Central	52
- Magreb - Norte de África	62
1.3.2. América	64
- Centroamérica y el Caribe	64
- América del Sur	65
1.3.3. Asia y el Pacífico	67
- Asia Meridional	67
- Sudeste Asiático	72
1.3.4. Europa	78
- Europa Oriental	78
- Europa Meridional	80
1.3.5. Oriente Medio	82
- Golfo	82
- Mashreq	83
2. Tensiones	93
2.1. Tensiones: definición	93
2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2024	100
2.2.1. Tendencias globales	100
2.2.2. Tendencias regionales	104
2.3. Tensiones: evolución anual	111
2.3.1. África	111
- África Austral	111
- África Occidental	112
- África del Este	115
- África Central	117
2.3.2. América	119
- América del Norte	119
- América del Sur	121
2.3.3. Asia y el Pacífico	127
2.3.3.1 Asia	127
- Asia Meridional	127
- Asia Oriental	130
2.3.3.2 El Pacífico	138
2.3.4. Europa	139
- Cáucaso Meridional	139
- Europa Meridional	141
2.3.5. Oriente Medio	142
- Golfo	142
- Mashreq	144
3. Género, paz y seguridad	149
3.1. Desigualdades de género	150
3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género	151
3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones	151
3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados	157
3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado	158
3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género	161
3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad	161
3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz	163
3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil	164
4. Oportunidades de paz	167
4.1. Una nueva oportunidad para la paz entre la República Democrática del Congo y Rwanda	168
4.2. La crisis política de Bangladesh, una oportunidad de transición	170
4.3. Las negociaciones acerca del estatus político de la isla de Bougainville	172
4.4. Nuevo diálogo Türkiye-PKK	174
4.5. ¿Una oportunidad para la paz en Siria?: perspectivas ante una frágil transición	176
5. Escenarios de riesgo	179
5.1. Sudán al borde del colapso: guerra civil, crisis humanitaria y diplomacia fallida	180
5.2. El incremento de la tensión política y militar entre China y Taiwán	182
5.3. India y Pakistán al borde de un conflicto armado a gran escala	185
5.4. La escalada militarista en la Unión Europea	187
Glosario	191
Escola de Cultura de Pau	197

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1.	Conflictos armados	22
Tabla 1.1.	Resumen de los conflictos armados en 2024	24
Gráfico 1.1.	Evolución en la cifra anual de conflictos armados desde 2010	28
Gráfico 1.2.	Distribución regional del número de conflictos armados en 2024	28
Gráfico 1.3.	Intensidad de los conflictos armados en 2024	32
Gráfico 1.4.	Proporción de conflictos armados de alta intensidad desde 2010	32
Gráfico 1.5.	Intensidad de los conflictos por regiones	32
Cuadro 1.1.	Tendencias regionales en materia de conflictividad armada	33
Mapa 1.2.	Países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflictos y violencia en 2024	37
Gráfico 1.6.	Evolución del desplazamiento forzado a nivel mundial (2015-2024)	37
Mapa 2.1.	Tensiones	92
Tabla 2.1.	Resumen de las tensiones en 2024	94
Gráfico 2.1.	Evolución del número de tensiones 2010-2024	101
Gráfico 2.2.	Distribución regional del número de tensiones en 2024	101
Gráfico 2.3.	Intensidad de las tensiones por regiones	101
Gráfico 2.4.	Intensidad de las tensiones en 2024	101
Cuadro 2.1.	Tensiones de alta intensidad en 2024	101
Gráfico 2.5.	Evolución de las tensiones en 2024	102
Cuadro 2.2.	Tensiones que se agravaron en 2024	102
Cuadro 2.3.	Casos de alta intensidad y en los que la tensión se agravó en 2024	102
Gráfico 2.6.	Factores de causalidad en las tensiones en 2024	103
Gráfico 2.7.	Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en 2024	103
Cuadro 2.4.	Tensiones internacionales de alta intensidad en 2024	103
Gráfico 2.8.	Subregiones con un mayor número de tensiones en 2024	104
Gráfico 2.9.	Países como actores principales en mayor número de tensiones en 2024	104
Gráfico 2.10.	Intensidad de las tensiones en África en 2024	105
Gráfico 2.11.	Evolución de las tensiones en África en 2024	105
Gráfico 2.12.	Factores de causalidad en las tensiones en África en 2024	105
Gráfico 2.13.	Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en África en 2024	105
Gráfico 2.14.	Intensidad de las tensiones en América en 2024	106
Gráfico 2.15.	Evolución de las tensiones en América en 2024	106
Gráfico 2.16.	Factores de causalidad en las tensiones en América en 2024	106
Gráfico 2.17.	Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en América en 2024	106
Gráfico 2.18.	Intensidad de las tensiones en Asia y el Pacífico en 2024	107
Gráfico 2.19.	Evolución de las tensiones en Asia y el Pacífico en 2024	107
Gráfico 2.20.	Factores de causalidad en las tensiones en Asia y el Pacífico en 2024	107
Gráfico 2.21.	Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en Asia y el Pacífico en 2024	107
Gráfico 2.22.	Intensidad de las tensiones en Europa en 2024	109
Gráfico 2.23.	Evolución de las tensiones en Europa en 2024	109
Gráfico 2.24.	Factores de causalidad en las tensiones en Europa en 2024	109
Gráfico 2.25.	Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en Europa en 2024	109
Gráfico 2.26.	Intensidad de las tensiones en Oriente Medio en 2024	110
Gráfico 2.27.	Evolución de las tensiones en Oriente Medio en 2024	110
Gráfico 2.28.	Factores de causalidad en las tensiones en Oriente Medio en 2024	110
Gráfico 2.29.	Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en Oriente Medio en 2024	110
Mapa 3.1.	Género, paz y seguridad	148
Tabla 3.1.	Países que son escenario de conflicto armado con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género	150
Tabla 3.2.	Países que son escenario de tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género	151
Tabla 3.3.	Actores armados y violencia sexual en conflictos	153
Mapa 3.2.	Países en conflicto armado con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+	160
Tabla 3.4.	Conflictos armados en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+	160
Tabla 3.5.	Países con Planes de Acción Nacional 1325 que participan en negociaciones y procesos de paz	162
Mapa 4.1.	Oportunidades de paz	167
Mapa 5.1.	Escenarios de riesgo	179

Resumen ejecutivo

Alerta 2025! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2024 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes del informe *Alerta 2025!* son las siguientes:

- En 2024 se registraron 37 conflictos armados, un balance superior que en 2023 (36 casos) y la cifra más alta en los últimos 12 años.
- La mayoría de conflictos armados se concentró en África (17), mientras que el resto se distribuyó entre Asia y el Pacífico (10), Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (dos).
- Las dinámicas de violencia motivaron que dos nuevos contextos pasaran a ser considerados como conflictos armados: Haití e Indonesia (Papúa Occidental). En Oriente Medio, al finalizar el año Egipto (Sinaí) dejó de ser considerado como un conflicto armado activo.
- Más de la mitad de los conflictos armados en 2024 (57%) eran de alta intensidad y tuvieron graves consecuencias en términos de letalidad e impactos en seguridad humana.
- El 60% de los conflictos armados experimentaron mayores niveles de violencia en 2024, un porcentaje

muy superior al registrado en años anteriores: 42% en 2023 y 30% en 2022.

- 27 de los 37 conflictos armados (73%) tuvo entre sus principales causas el cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o las disputas en torno a las políticas internas o internacionales de los respectivos gobiernos.
- De acuerdo con los registros de Naciones Unidas hechos públicos en 2024, en 2023 hubo un aumento del 22% respecto a 2022 del número de civiles muertos en conflictos armados.
- Según ACNUR la población desplazada forzosamente durante los seis primeros meses del año superaba ya los 122 millones de personas. Los niveles de desplazamiento forzado han aumentado de manera incesante en los últimos 12 años.
- El IDMC estimaba que al finalizar el año el número de personas desplazadas ascendía a 83,4 millones, más del doble que hace una década, de los cuales 73,5 millones correspondían a desplazamientos por conflictos y violencia (10% más que en 2023).
- Durante 2024 se registraron 116 escenarios de tensión a nivel global, dos más que en 2023.
- Las tensiones se concentraron principalmente en África (38) y Asia y el Pacífico (31), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron entre América (20), Europa (15) y Oriente Medio (12).
- El 38% de las tensiones (44 casos) se agravaron respecto de 2023 lo que confirmaría una tendencia de los últimos años en la que el número de casos que escalan es claramente superior al del número de casos en los que la tensión se reduce.
- Las tensiones internacionales se incrementaron del 23% en 2023 al 27% en 2024 y casi la mitad de las tensiones de máxima intensidad (14 de 32) fueron de carácter internacional: Chad-Sudán; Eritrea-Etiopía; RDC-Rwanda; Rwanda-Burundi; Venezuela-Guayana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; Irán (programa nuclear); Israel-Irán; Israel-Siria; y Yemen (al-houthistas)-Israel, EEUU, Reino Unido.
- 22 de los 37 conflictos armados que tuvieron lugar en 2024 se dieron en países donde existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad de género. El 79% de los conflictos de alta intensidad transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajo de igualdad de género.

- En 2024 Naciones Unidas señaló que se había registrado una cifra récord de casos de violencia sexual durante 2023, con un aumento del 50% respecto al año anterior.
- 16 de los 21 conflictos armados de alta intensidad de 2024 (76% de los casos) tuvieron lugar en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+.
- Naciones Unidas señaló que partiendo del análisis de más de 50 procesos de paz durante 2023, las mujeres constituían el 9,6% de los negociadores, el 13,7% de los mediadores y el 26,6% de los firmantes de acuerdos de paz y alto el fuego.
- El informe *Alerta 2025!* identifica cinco oportunidades de paz: RDC-Rwanda; Bangladesh; isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea; Türkiye; y Siria.
- El informe destaca cuatro escenarios de riesgo: Sudán; India-Pakistán; China-Taiwán; y en la escalada militarista en Europa.

Estructura

El informe consta de cinco capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global –causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo analiza los impactos de género de conflictos y tensiones así como iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. El cuarto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los cinco capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado y tensión sociopolítica.

Conflictos armados

En el primer capítulo (Conflictos armados)¹ se describe la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas

En 2024 se contabilizaron 37 conflictos armados, la cifra más alta desde 2012

de los conflictos armados activos durante el año, se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2024, así como los impactos de los conflictos en la población civil.

Durante 2024 se contabilizaron 37 conflictos armados, frente a los 36 registrados en 2023, 33 en 2022 y 32 en 2021. Se trata de la cifra más alta desde 2012, es decir, la más elevada en 12 años según los recuentos de la Escola de Cultura de Pau. La dinámica de incremento en el número de conflictos armados en los últimos años ha ido en paralelo a un significativo aumento en la cifra de tensiones sociopolíticas a nivel mundial, un total de 116 en 2024 (véase capítulo 2).

En 2024, las dinámicas de violencia motivaron que dos nuevos contextos pasaran a ser considerados como conflictos armados. En América, el caso de Haití, donde se produjo un aumento alarmante en los niveles de violencia y un grave deterioro de la situación humanitaria, en paralelo a una agudización de la crisis política que atraviesa el país. En la región de Asia y el Pacífico, la escalada en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Indonesia y el brazo armado de la Organización de la Liberación de Papúa (OPM),

ataques contra la población civil y hechos de violencia intercomunitaria también motivaron que el caso de Indonesia (Papúa Occidental) pasara a ser considerado como conflicto armado. Cabe mencionar que, al finalizar el año, Egipto (Sinaí) en Oriente Medio dejó de ser considerado como un conflicto armado activo por la reducción significativa de las hostilidades que en los últimos años habían enfrentado a combatientes de la filial de Estado Islámico en la región con el Ejército apoyado por milicias tribales, aunque persistían múltiples retos vinculados al retorno de población desplazada y a la rendición de cuentas por crímenes de guerra y vulneraciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto.

Respecto a la distribución geográfica, como en años previos África continuó concentrando el mayor número de conflictos a nivel mundial, prácticamente la mitad –17 casos, que representaron un 46%–, seguida de Asia y el Pacífico –10 conflictos, equivalentes al 27%–, Oriente Medio –seis casos que suponen un 16% del total– y América y Europa –con dos conflictos cada región, que representan el 5,5%, respectivamente.

En cuanto a la relación de los actores implicados en la contienda y el escenario de las hostilidades, el

1 Se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
 - demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
 - oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder
 - o control de los recursos o del territorio.

Conflictos armados en 2024*

ÁFRICA (17)	ASIA Y EL PACÍFICO (10)	ORIENTE MEDIO (6)
Burundi -2015- Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018- Etiopía (Amhara) -2023- Etiopía (Oromiya) -2022- Libia -2011- Malí -2012- Mozambique (Norte) -2019- RCA -2006- RDC (este) -1998- RDC (este – ADF) -2014- RDC (oeste) -2023- Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011- Región Sahel Occidental -2018- Somalia -1988- Somalia (Somalilandia – SSC Khatumo) -2023- Sudán -2023- Sudán del Sur -2009-	Afganistán -2001- Filipinas (NPA) -1969- Filipinas (Mindanao) -1991- India (Jammu y Cachemira) -1989- India (CPI-M) -1967- Indonesia (Papúa Occidental) -2024- Myanmar -1948- Pakistán -2001- Pakistán (Baluchistán) -2005- Tailandia (sur) -2004-	Egipto (Sinaí) -2014-** Iraq -2003- Israel-Hezbollah -2023- Israel-Palestina -2000- Siria -2011- Yemen -2004-
		EUROPA (2)
		Türkiye (PKK) -1984- Rusia – Ucrania -2022-

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado.

** Conflicto armado finalizado en 2024.

análisis de la Escola de Cultura de Pau identifica tres tipos de conflictos armados: internos, internos internacionalizados e internacionales. Durante 2024 la distribución de casos según estas categorías fue muy similar a la del año anterior. Se identificaron siete (19%) de carácter interno –uno más que en 2023–, que se repartieron entre África (tres) y la región Asia y el Pacífico (cuatro): Etiopía (Oromiya), RDC (oeste) y Somalia (Somalilandia-SSC Kathumo), India (CPI-M), Filipinas (NPA), Tailandia (sur) y también Indonesia (Papúa Occidental), que se añadió como conflicto armado en 2024. Asia y el Pacífico volvió a situarse así como la zona del mundo que concentra un mayor número de conflictos de carácter eminentemente interno. La cifra de conflictos armados internacionales se mantuvo estable respecto a 2023, con un total de cinco contextos, equivalentes al 13% del total de casos y distribuidos entre África (dos), Europa (uno) y Oriente Medio (dos): el conflicto armado que transcurre en la Región Sahel Occidental, el de RDC (este) –considerado como internacional por la implicación directa de Rwanda en las hostilidades–, el de Rusia-Ucrania, el de Israel-Hezbollah y el de Israel-Palestina. El resto de conflictos armados –25 de los 37, lo que representa un 68%– fueron de carácter interno internacionalizado. Este porcentaje sigue la tendencia observada ya en 2023 (69%), pero supone una disminución respecto a años previos, en los cuales los conflictos de este tipo representaban en torno a un 80% de los casos. Los conflictos armados internos internacionalizados se caracterizan porque, aunque parte de las dinámicas sean internas, alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación

de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados, grupos armados de acción transfronteriza y empresas internacionales de seguridad privada, entre otros.

En lo que se refiere a las causas, en 2024 se confirmó la naturaleza multicausal de los conflictos armados. Siguiendo la tendencia de años previos, la mayor parte de los conflictos –27 de los 37, equivalente a un 73%– tuvo entre sus principales causas el cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o las disputas en torno a las políticas internas o internacionales de los respectivos gobiernos. En consonancia con la tendencia observada en los últimos años, en 2024 tuvo relevancia el factor causal vinculado a las disputas en torno al sistema, presente en 18 de los 37 casos (46%) y relacionado en la mayoría de ellos con la presencia de actores armados con agendas políticas que reivindican una presunta inspiración yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos grupos se encuentran, por ejemplo, las facciones de Boko Haram (JAS y ISWAP) en la Región del Lago Chad, las milicias talibán pakistaníes de TTP o los distintos grupos que se han reivindicado como filiales y/o “provincias” de ISIS más allá de su área de origen en Iraq y Siria, en contextos como en la región del Lago Chad, Somalia, Libia, Egipto (Sinaí), Afganistán, Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Filipinas (Mindanao) o Yemen. En algunos de estos casos –como Libia, Afganistán, Filipinas (Mindanao), Egipto (Sinaí) o Yemen– estos grupos han reducido sus actividades respecto a años previos. En contraste, han ganado protagonismo actores yihadistas en conflictos armados africanos, principalmente en la zona de Sahel Occidental, entre los que destacan grupos como

la coalición Jama'at Nusra al Islam wal Muslimin (JNIM) –vinculada con la red de al-Qaeda– y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). En otros casos –Colombia, Filipinas (NPA), India (CPI-M)– la dimensión de disputa de sistema estaba asociada a otra tipología de insurgencias, con una línea ideológica vinculada al marxismo y al maoísmo. Por otra parte, los conflictos armados con motivaciones relacionadas a las políticas internas o internacionales de los respectivos gobiernos, que derivan en luchas por erosionar o acceder al poder –y en algunos casos en la instalación de estructuras de gobierno rivales–, estuvieron presentes en 13 de los 37 casos (38%). Entre ellos, cabe mencionar contextos como el de Burundi, Libia, RCA, Somalia, Sudán, Haití, Rusia-Ucrania, Israel-Hezbollah, Yemen o Siria. En este último caso, la ofensiva concertada de fuerzas rebeldes motivó la caída de al-Assad 14 años después del inicio de las revueltas contra el régimen en el país.

Entre las causas principales de los conflictos armados también es posible identificar disputas en torno a demandas identitarias y/o de autogobierno, presentes en 22 de los 37 conflictos armados en 2024, es decir, en un 59% del total de casos (en todas las regiones, a excepción de América). Siguiendo la tendencia de años precedentes, entre estas motivaciones tuvo mayor relevancia el factor asociado a las demandas identitarias, presentes en 22 de los 37 casos (59% del total) y en muchos casos este elemento estuvo estrechamente vinculado a reivindicaciones de autogobierno –15 de los 37 conflictos, equivalente al 41% de contextos. Entre los contextos con motivaciones vinculadas a cuestiones de identidad y/o autogobierno se cuentan casos de larga trayectoria –como el de Türkiye (PKK), el de India (Jammu y Cachemira) o Myanmar–, pero también algunos que han devenido conflictos armados más recientemente (en el último lustro) –como el de Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Amhara), Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) o Indonesia (Papúa Occidental), este último considerado conflicto armado a partir de 2024 en parte por la intensificación de los enfrentamientos entre el Gobierno y el brazo armado del grupo secesionista Organización de la Liberación de Papúa (OPM).

Finalmente, en lo que respecta a factores de causalidad, cabe mencionar también que numerosos conflictos armados tuvieron entre sus motivaciones principales el control de territorios y/o de recursos. Este tipo de factores se identificaron en 17 de los 37 casos, equivalentes a un 46%. En este binomio destacó el peso de las disputas en torno a recursos, identificadas en 14 de los 37 casos (38%) en 2024. La mayoría de los conflictos armados que involucraron disputas por recursos se concentraron en África, en línea con lo observado en años anteriores, aunque es relevante

Distribución regional del número de conflictos armados en 2024



mencionar que este elemento también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

El análisis de la evolución de los conflictos armados en 2024 ofrece una de las conclusiones más significativas del año. Más de la mitad de casos –22 de los 37 o un 60%– evolucionó hacia mayores niveles de violencia e inestabilidad, un porcentaje significativamente superior al registrado en años anteriores: 42% en 2023 y 30% en 2022. Los contextos en los que se observó un deterioro en los niveles de violencia y un incremento en las hostilidades e impactos de los conflictos armados en 2024 fueron, en África, la mayoría de casos: Burundi, Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Mozambique (norte), RCA, RDC (este), Sudán y Sudán del Sur; en América, en los dos casos de la región: Colombia y Haití; en Asia y el Pacífico, en la mayor parte de casos: Afganistán, India (CPI-M), Indonesia (Papúa Occidental), Myanmar, Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Tailandia (sur); en Europa en uno de los dos casos: Rusia-Ucrania; y en Oriente Medio en la mitad de los casos: Israel-Hezbollah, Israel-Palestina y Siria. En un 24% de los casos –nueve de 37– los conflictos armados presentaron niveles de violencia similares al año anterior, mientras que solo en el 19% –siete de los 37 casos– se identificó una reducción en los enfrentamientos y niveles violencia.

Entre los casos que evolucionaron hacia una disminución en las hostilidades, esta tendencia respondió a diversas dinámicas. En algunos casos, estuvo relacionada con la reducción de la actividad y/o aparente debilitamiento de algunos de los actores armados involucrados en el conflicto. Fue el caso, por ejemplo, de Egipto (Sinaí) que, como se ha mencionado, dejó de ser considerado como conflicto armado a finales de 2024 por la reducción sostenida de las hostilidades en los últimos años. También fue el caso de Iraq que, a pesar

de seguir siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad, ha registrado una disminución en los niveles de letalidad asociados a la violencia armada en los últimos años. En el caso de Somalia (Somalilandia) también se observó una reducción en las hostilidades en 2024, aunque hacia finales de año los enfrentamientos volvieron a incrementarse. Otros dos ejemplos se dieron en Filipinas. En el conflicto armado que afecta a las áreas de mayoría musulmana en el sur del país, en Mindanao, se redujo notablemente la violencia y el Gobierno anunció la “neutralización” de dos de las organizaciones armadas más importantes de la región. Paralelamente, el conflicto que enfrenta a las fuerzas gubernamentales con el NPA también presentó un descenso en las hostilidades que las autoridades filipinas atribuyeron al debilitamiento del grupo armado. En otros contextos, la reducción en los niveles de violencia estuvo relacionada, al menos parcialmente, con las repercusiones de procesos de negociación en marcha. En el caso del conflicto que enfrenta a Türkiye con el PKK, la disminución de las hostilidades y niveles de letalidad se produjo en paralelo a contactos exploratorios entre las partes que apuntaban entonces al posible establecimiento de un nuevo proceso de diálogo. En algunos casos que evolucionaron de manera similar al año anterior, la estabilización en los niveles de violencia también puede atribuirse, al menos en parte, a la vigencia formal y/o de facto de acuerdos de alto el fuego, como se exemplifica en los casos de Libia y Yemen.

En cuanto a la intensidad de los conflictos armados, en 2024 los casos graves se incrementaron notoriamente, confirmando la tendencia observada en los últimos años de aumento en este tipo de escenarios. Los conflictos armados de alta intensidad –caracterizados por elevados niveles de letalidad (más de mil víctimas mortales anuales) y severos impactos en términos de desplazamiento de población, destrucción de infraestructuras y consecuencias en el territorio– representaron un 57% de los casos en 2024. Este porcentaje es significativamente superior al 47% registrado en 2023 y el más alto registrado en los últimos 15 años, según los datos de la Escola de Cultura de Pau. Como queda expuesto en la gráfica, los conflictos armados de alta intensidad solían representar menos de un tercio del total de casos a nivel global, pero desde 2020 se sitúan en torno a la mitad.

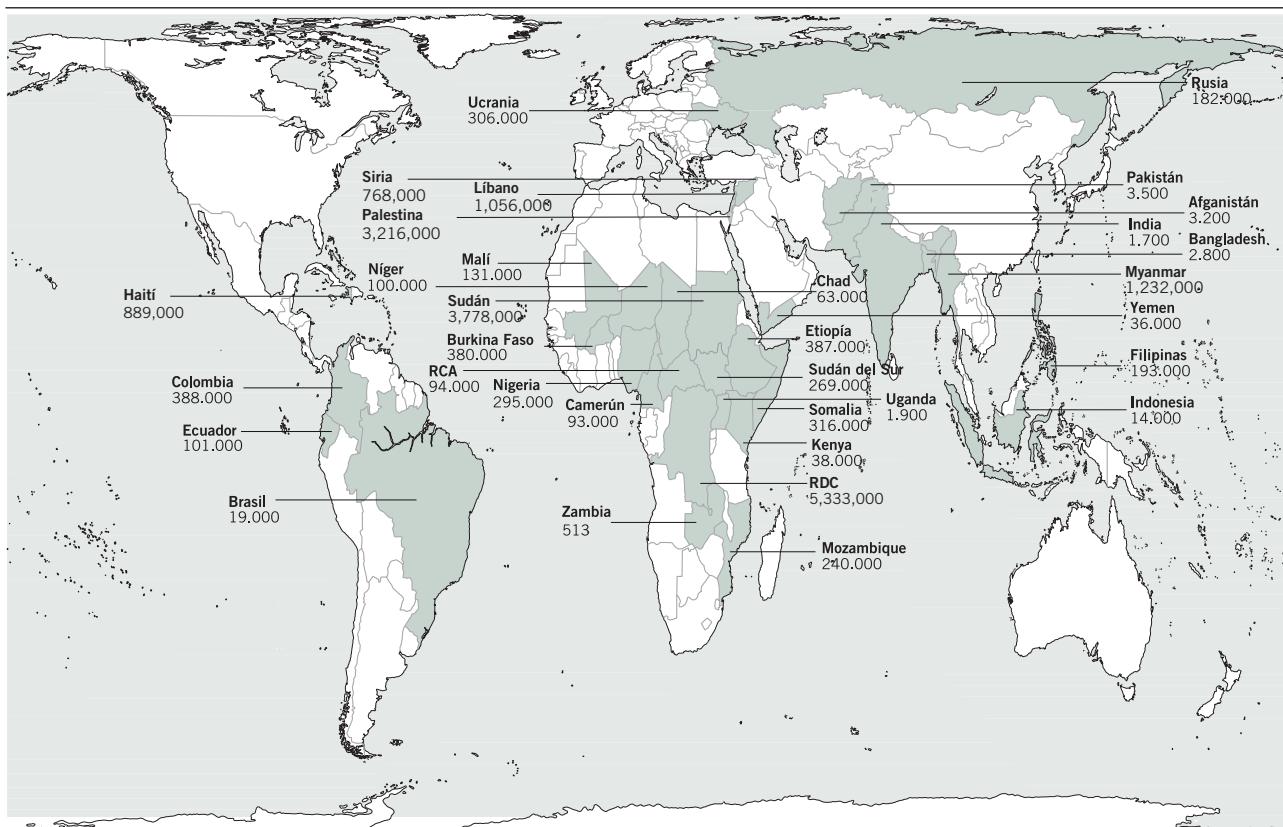
En 2024 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados, cuyos efectos se interrelacionaron en muchos casos con otras crisis como la emergencia climática, las desigualdades y situaciones de inseguridad alimentaria que agravaron las vulneraciones de derechos en estos contextos. En su informe anual sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en mayo de 2024 y que hace referencia a los hechos acontecidos

en 2023, el secretario general de la ONU alertaba de una situación “rotundamente nefasta”. En un año, el 2024, en que se conmemoraba el 75º aniversario de los Convenios de Ginebra (1949) y 25 años de la primera sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que abordó la protección de la población civil en conflictos, el panorama era desolador por las graves y extendidas agresiones a civiles y el incumplimiento sistemático del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. António Guterres destacó especialmente las consecuencias en civiles en Gaza, Sudán, Myanmar, Nigeria, Siria, RDC, la región del Sahel, Somalia y Ucrania. En su diagnóstico, el informe de la ONU subrayó que en 2023 cientos de miles de civiles había muerto o sufrido heridas en ataques deliberados o indiscriminados. De acuerdo con los registros de Naciones Unidas, en 2023 murieron al menos 33.443 civiles en conflictos armados, cifra que supone un aumento del 22% respecto de 2022. También en comparación con 2022, la proporción de mujeres muertas a causa de la violencia de conflictos armados se multiplicó por dos en 2023, mientras que la de niñas y niños fallecidos en estas circunstancias se triplicó. Siete de cada diez muertes de civiles registradas se produjeron en el marco del conflicto Israel-Palestina –la inmensa mayoría en Gaza–, por lo que este caso fue señalado como el más mortífero para los civiles en 2023. El año 2023 también fue el más letal para la población palestina de Cisjordania y Jerusalén Oriental desde que en 2005 se inició un registro de víctimas.

Respecto a la violencia sexual en los conflictos armados, cabe subrayar que a nivel general las investigaciones de Naciones Unidas también han identificado un incremento significativo. Según los datos del informe del secretario general publicado en abril de 2024 y que abarca el año 2023, el número de casos verificados de violencia sexual relacionada con los conflictos fue un 50% mayor que en 2022. El informe reiteró que la proliferación y amplia disponibilidad de armas pequeñas y ligeras constituía un elemento clave para crear las condiciones para perpetrar violencia sexual con impunidad. Entre el 70% y el 90% de los incidentes cometidos en las zonas de las que se disponían datos se identificó el uso de armas pequeñas y ligeras. En 2024, la violencia sexual volvió a estar presente en numerosos contextos, entre ellos Somalia, RCA, RDC (este), Sudán, Haití, Israel-Palestina y Yemen.

Cabe destacar que los conflictos armados también continuaron teniendo entre sus impactos más notorios los desplazamientos forzados de población. Según el informe de ACNUR publicado en octubre de 2024, y que contempla datos recopilados durante el primer semestre del año, la población desplazada forzosamente –tanto refugiadas como desplazadas internas– superaba ya los 122 millones de personas. Es decir, un número

Países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflictos y violencia en 2024

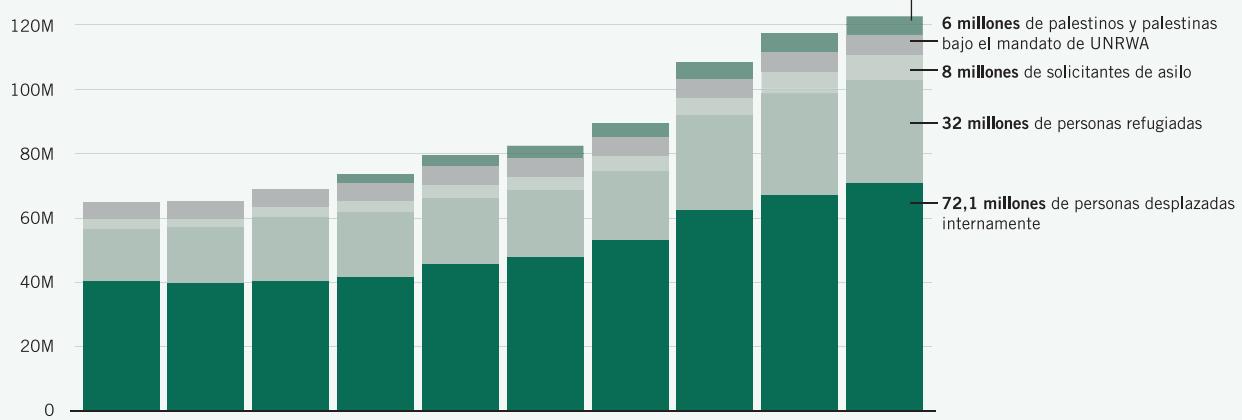


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *Global Report on Internal Displacement 2025*, 13 de mayo de 2025.

Evolución del desplazamiento forzado a nivel mundial (2015-2024)

122,6 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo

Hasta finales de junio de 2024, como resultado de persecución, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos o eventos que afectan seriamente el orden público.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ACNUR.

muy superior a la población de España (48 millones) y equivalente a la población de países como Japón (124 millones) o México (128 millones). Los niveles de desplazamiento forzado han aumentado de manera incesante en los últimos 12 años y la cifra de personas desplazadas por situaciones de conflicto, violencia y persecución se ha más que duplicado desde 2015,

año en el cual ya se había superado el umbral del desplazamiento forzoso registrado durante la II Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que el informe de ACNUR recoge solo los datos relativos a la primera mitad del año, se esperaba que el registro de todo el año 2024 sea superior debido a la intensificación de algunas crisis derivadas de conflictos armados en la segunda mitad del año.

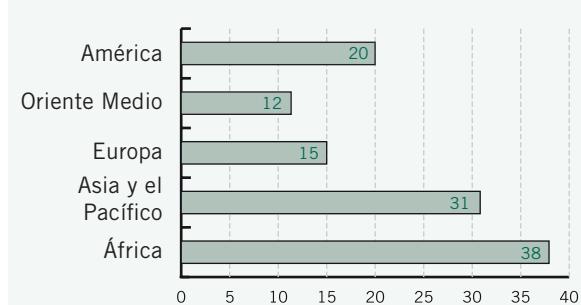
Tensiones

En el segundo capítulo (Tensiones)² se analizan los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales y regionales. En 2024 se identificaron 116 escenarios de tensión en todo el mundo, dos más que en 2023, confirmando la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años (33 casos más desde el año 2018). África y Asia y el Pacífico fueron las regiones del mundo con mayor número de tensiones (38 y 31 respectivamente), seguidas de América (20), Europa (15) y Oriente Medio (12). Respecto a la variación de casos en comparación con el año anterior, se identificaron 12 nuevos escenarios de tensión, mientras que otros diez casos dejaron de ser considerados como tal. Los nuevos casos se distribuyeron de manera bastante homogénea entre todas las regiones del mundo: en África, Chad-Sudán y Sudáfrica; en América, Trinidad y Tobago y las Islas Turcas y Caicos; en Asia y el Pacífico, Indonesia, Corea del Sur y China-Corea del Sur; en Europa, Georgia y Serbia; y en Oriente Medio, Israel-Irán, Israel-Siria y Yemen (al-houthistas)-Israel, EEUU, Reino Unido. Por otro lado, de los diez casos que dejaron de ser calificados como tensión, dos escalaron a situación de conflicto armado –Haití e Indonesia (Papúa Occidental)–, mientras que los otros ocho experimentaron una reducción de la intensidad: Madagascar y Sierra Leona en África; Panamá en América; Fiji, Indonesia (Sulawesi), Tailandia y China (Hong Kong) en Asia y el Pacífico; e Iraq (Kurdistán) en Oriente Medio.

En cuanto a la intensidad de las tensiones, el 42% fue de baja intensidad, el 30% de intensidad media, y el 28% de alta intensidad, pasando los de esta última tipología de 31 casos en 2023 a 32 casos en 2024. Tales porcentajes son similares a los del año anterior, con una ligera disminución de los casos de intensidad media y un pequeño incremento de las tensiones de baja de intensidad y de las de alta intensidad. África fue el continente que albergó un mayor número de tensiones de máxima intensidad (12 casos), pero la región del mundo con un mayor porcentaje de tales casos fue Oriente Medio (42%).

En cuanto a la evolución de los casos, un 21% (24 casos) experimentó una reducción de la tensión respecto del año anterior, un 41% (48 casos) no observó cambios significativos y un 38% (44 casos) se agravó respecto de 2023. Aunque el porcentaje de casos en los que

Distribución regional del número de tensiones en 2024



escaló la tensión en 2024 (38%) fue significativamente inferior al del 2023 (49%), los datos parecen confirmar una tendencia de los últimos años en la que el número de casos que escalan es claramente superior al del número de casos en los que la tensión se reduce. Cabe destacar especialmente la región de Europa, en la que el 73% de los casos se agudizaron en 2024 y el 85% lo había hecho en 2023. Dentro de Asia y el Pacífico, la subregión de Asia Oriental también experimentó un claro incremento de la conflictividad, especialmente en el continuum geográfico entre el Mar Amarillo, el Mar de China Oriental, el Estrecho de Taiwán y el Mar de la China Meridional. En Oriente Medio también se vivió una importante escalada de la tensión militar, especialmente entre Israel y otros países de la región (como Siria, Irán o Yemen), y también con un rol destacado de Irán. En un sentido inverso, casi la mitad de los escenarios de tensión en América (concretamente un 45%) se redujo respecto del 2023, con una sensible reducción en la tasa de homicidios en países afectados por dinámicas vinculadas a grupos de crimen organizado, como El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador o Jamaica, o bien por la disminución de las movilizaciones masivas en países como Argentina, Perú, Chile o Paraguay. Por otra parte, merece la pena destacar aquellos casos de alta intensidad que experimentaron un deterioro de la situación en 2024, siendo Asia y el Pacífico la región que albergó un mayor número de tales casos, seguida de América.

Durante 2024 se identificaron 116 escenarios de tensión, 38 en África, 31 en Asia y el Pacífico, 20 en América, 15 en Europa y 12 en Oriente Medio

En cuanto a los principales factores de causalidad, las tensiones continuaron siendo predominantemente multicausales, como así lo demuestra el hecho de que en el 62% de los casos concurrieran dos o más causas. El cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o de las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos estuvo

2 Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

presente en 89 de los 116 casos (un 77%). Las tensiones vinculadas a cuestiones identitarias y/o de autogobierno como una de las causas principales se elevaron a 36 casos (un 31%), mientras que el control del territorio y/o el control de los recursos

fue un factor de causalidad relevante en 41 casos (un 35%). En un análisis más pormenorizado de factores, ordenados de mayor a menor prevalencia, la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno volvió a ser el factor con mayor preponderancia y estuvo presente en el 70% de los 116 escenarios de tensión, siendo un porcentaje ligeramente superior al del año anterior. La presencia de tal factor de causalidad osciló claramente entre regiones, estando presente en el 95% y el 79% de los casos en América y en África respectivamente, pero solamente en el 45% de los escenarios en Asia y el Pacífico. El segundo factor con mayor prevalencia fue la reivindicación de aspiraciones de tipo identitario (30%), un porcentaje inferior al del 2023 (33%). Tal factor fue especialmente relevante en Europa (52%), pero en América, en cambio, solamente estuvo presente en el 10% de los casos. La competencia por el control de los recursos tuvo la misma presencia que la identidad, siendo un factor explicativo relevante en el 30% de los casos, un notable incremento respecto del año anterior (24%). En este caso, también se observó una importante oscilación entre regiones, pues este factor estuvo presente en el 60% de los casos en América —una región en la que operan numerosos grupos de crimen organizado y provocan altas tasas de homicidios— y solamente en un caso en Oriente Medio.

A continuación, con porcentajes muy parecidos, se situaron las cuestiones relacionadas con la oposición al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto (22%), el control del territorio (21%) y las demandas de autodeterminación y autogobierno (18%). En cuanto a la oposición al sistema –factor que incrementó ligeramente su presencia respecto del año anterior–, estuvo presente en 11 casos en Asia, especialmente en Asia Oriental, y fue una causa proporcionalmente muy preponderante en Oriente Medio (42% de los casos). En relación al control del territorio, fue un elemento presente en casi la mitad de los casos en Asia y el Pacífico, pero solamente en un caso en América (Venezuela-Guyana). Finalmente, en el caso de demandas de autodeterminación y autogobierno, cabe destacar que su importancia relativa disminuyó notablemente en comparación con el año anterior, en el que estuvo presente en un 22% de los casos. Mientras

que dicha causa fue relevante en casi la mitad de los escenarios de Europa, especialmente en el Cáucaso y en los Balcanes, en América solo estuvo presente en el 10% de los casos.

Un 38% de las tensiones identificadas en 2024 se agravaron respecto del año anterior y solo en un 21% se observó una reducción

Aunque la mayoría de las tensiones en todo el mundo tuvo un carácter interno (40%), tal cifra se redujo notablemente respecto del año anterior (49%). El 60% de los casos en Asia y el Pacífico fueron tensiones de naturaleza interna, pero en Europa, en cambio, tal porcentaje se redujo al 13%. Por otra parte, un tercio del total de las tensiones en todo el mundo fueron internas internacionalizadas –aquellas en las que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos–, un sensible incremento respecto del año anterior (28%). Finalmente, las tensiones internacionales se incrementaron del 23% en 2023 al 27% en 2024. Además del aumento en el número de tensiones internacionales, cabe destacar que buena parte de ellas se contaron entre las más graves de todo el mundo. De hecho, casi la mitad de las tensiones de máxima intensidad (14 de 32) fueron de carácter internacional: Chad-Sudán; Eritrea-Etiopía; RDC-Rwanda; Rwanda-Burundi; Venezuela-Guayana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; Irán (programa nuclear); Israel-Irán; Israel-Siria; y Yemen (al-houthistas)-Israel, EEUU, Reino Unido.

Género, paz y seguridad

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género³ en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales. Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre la población como consecuencia de las desigualdades de género y la intersección con otros ejes de desigualdad y también cuáles son las aportaciones que las mujeres y la población LGTBIQ+ están haciendo a la

3 El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales. Esta aproximación debe ir unida a un análisis interseccional que relacione el género con otros factores que estructuran el poder en una sociedad, como la clase social, la raza, la etnicidad, la edad, o la sexualidad, entre otros aspectos que generan desigualdades, discriminaciones y privilegios.

Países que son escenario de conflicto armado con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género

Nivel bajo de igualdad		
Afganistán	Malí (2) Malí Región Sahel Occidental	RDC (3) RDC (este) RDC (este-ADF) RDC (oeste)
Burkina Faso Región Sahel	Níger (2) Región Lago Chad Región Sahel Occidental	Siria
Chad Región Lago Chad	Nigeria Región Lago Chad	Somalia (2) Somalia Somalia (Somalilandia-SCC Khamuto)
Egipto Egipto (Sinaí)	Palestina Israel – Palestina	Sudán
Iraq	Pakistán (2) Pakistán Pakistán (Baluchistán)	Yemen
India (2) India (Jammu y Cachemira) India (CPI-M)		
Nivel medio-bajo de igualdad		
Camerún (2) Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) Región Lago Chad	Etiopía (2) Etiopía (Amhara) Etiopía (Oromiya)	

Países que son escenario de tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género

Nivel bajo de igualdad		
Afganistán Afganistán – Pakistán	Irán (5) Irán Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán) Irán (programa nuclear) Israel – Irán	Pakistán (3) Pakistán Afganistán – Pakistán India – Pakistán
Argelia	Malí	RDC (2) RDC RDC – Rwanda
Benín	Marruecos Marruecos – Sáhara Occidental	Siria Israel – Siria
Burkina Faso	Níger	Sudán Sudán – Sudán del Sur
Chad (2) Chad Chad – Sudán	Nigeria (3) Nigeria Nigeria (Biafra) Nigeria (Delta del Níger)	Togo
Côte d'Ivoire	Palestina	Uganda
Djibouti		Yemen Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido
Egipto (2) Egipto Etiopía – Egipto – Sudán		
Guinea		
Guinea Bissau		
India (4) India (Manipur) India (Nagalandia) India – China India – Pakistán		
Nivel medio-bajo de igualdad		
Bangladesh	Laos	Uzbekistán (2) Uzbekistán Uzbekistán (Karakalpakistán)
Etiopía (5) Etiopía Etiopía – Egipto – Sudán Etiopía – Somalia Etiopía – Sudán Eritrea – Etiopía	Rwanda (3) Rwanda Rwanda – Burundi RDC – Rwanda	Tayikistán (3) Tayikistán Tayikistán (Gorno-Badakhshan) Kirguistán – Tayikistán

construcción de la paz. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Desarrollo de Género; en segundo lugar

se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen

señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Desarrollo de Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

22 de los 37 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2024 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de género—Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), RDC (oeste), Somalia, Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo), Sudán, Afganistán, India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M), Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Egipto (Sinaí), Iraq, Israel-Palestina, Siria, Yemen— y nivel medio-bajo de igualdad de género —Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya). No existían datos sobre RCA y Sudán del Sur, países en los que transcurrió un conflicto armado respectivamente. En cuanto a intensidad de los conflictos, 15 de los 19 conflictos armados de violencia de alta intensidad de 2024 (79% de los casos) transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajo de igualdad y en el caso de Sudán del Sur no había datos del IDG. Asimismo, en otros ocho países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles altos de igualdad (Libia, Colombia, Tailandia, Rusia, Ucrania, Israel) o medios (Burundi, Mozambique, Filipinas, Myanmar, Türkiye), de acuerdo con el IDG. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, 48 de las 116 tensiones activas durante el año 2024 transcurrieron en países en los que existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad.

Al igual que en años anteriores, durante 2024 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos. Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales.

En abril se celebró el debate abierto anual en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados y el secretario general presentó su informe anual sobre esta cuestión. La representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, señaló en 2024 que durante 2023 se había registrado una cifra récord de casos de violencia sexual verificados por Naciones Unidas, 3.688 casos, lo que implicaba

un aumento del 50% con respecto al año anterior. Las mujeres y las niñas representaron el 95% de los casos verificados. Patten señaló que mientras las cifras de gasto militar no cesaban de aumentar, los presupuestos destinados a ayuda humanitaria y apoyo a las víctimas se habían visto seriamente reducidos.

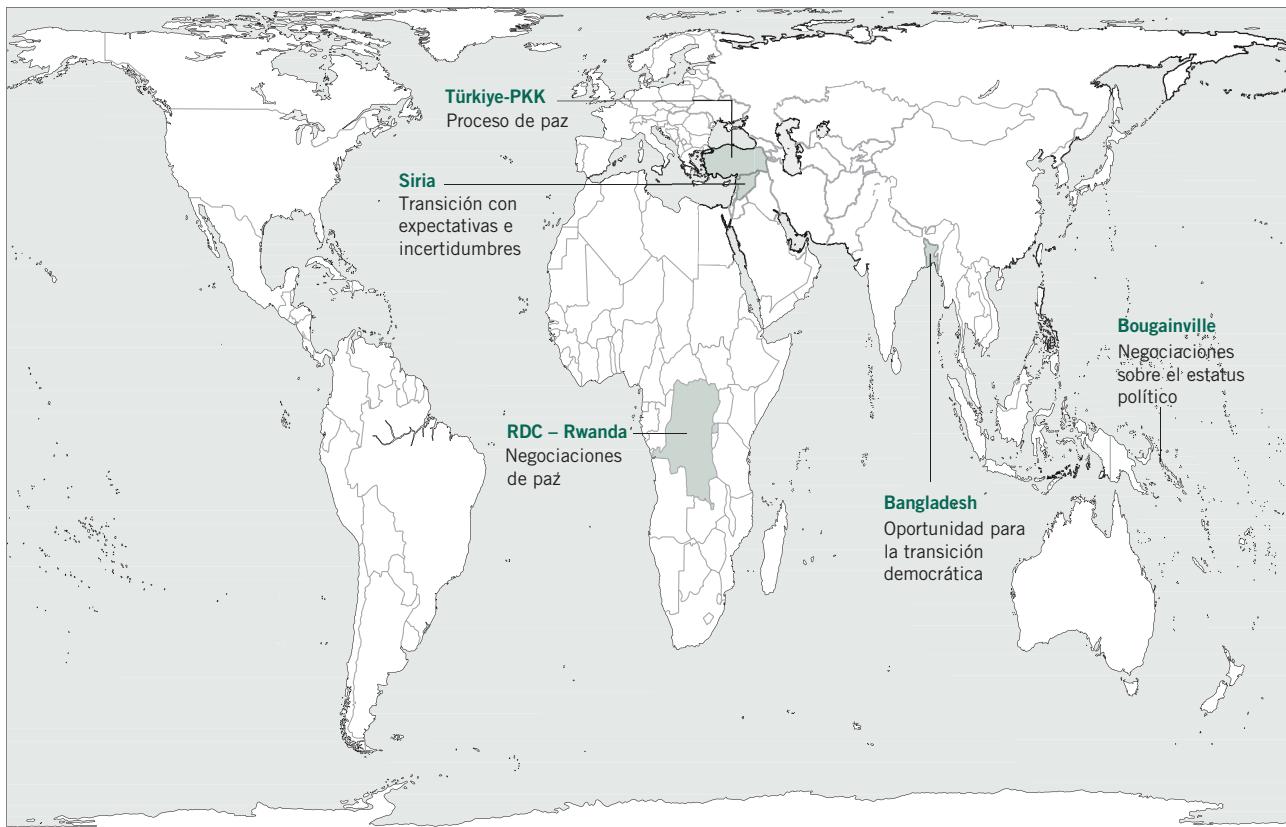
22 de los 37 conflictos armados que tuvieron lugar en 2024 se dieron en países donde existían niveles bajos o medio- bajos de igualdad de género

Naciones Unidas alertó en 2024 de un aumento del 50% en los casos de violencia sexual verificada por la organización el año anterior

El secretario general en su informe sobre violencia sexual en conflictos armados de 2024 —que abarcaba el periodo entre enero y diciembre de 2023— advirtió de que el surgimiento de nuevos conflictos durante el año y la intensificación de otros conflictos previamente activos y agravados por la proliferación de armamento y la creciente militarización, incrementaron significativamente la exposición de la población civil a situaciones de violencia sexual en contextos de conflicto. Tanto actores armados estatales como no estatales perpetraron violaciones, violaciones múltiples y secuestros contra civiles, en un contexto marcado por niveles históricos de desplazamientos tanto internos como internacionales. El secretario general señaló que la violencia sexual afectó de manera profunda los medios de subsistencia de las mujeres y obstaculizó el acceso de las niñas a la educación. Paralelamente, generó beneficios ilícitos para grupos armados y organizaciones extremistas violentas, que recurrieron, entre otras prácticas, a la trata de personas con fines de explotación sexual en el marco de dichos conflictos.

En el informe también se constató el impacto de la proliferación de armas pequeñas y ligeras y de municiones en actos de violencia sexual perpetrados por actores armados en conflictos en la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán y Sudán del Sur, contribuyendo de manera directa a su incremento. La circulación indiscriminada de armamento fomentó la persistencia de conflictos armados y generó condiciones propicias para la comisión de actos de violencia sexual con un alto grado de impunidad. El secretario general apuntó a investigaciones de Naciones Unidas realizadas en zonas con datos disponibles, que certificaban que en aproximadamente entre el 70% y el 90% de los incidentes de violencia sexual relacionada con conflictos se emplearon armas pequeñas o ligeras. También destacó el papel relevante que la violencia sexual desempeñó en la economía política de la guerra, al proporcionar beneficios económicos a los grupos armados mediante la trata de personas con fines de explotación sexual y, de forma creciente, a través de secuestros, en los cuales las amenazas o actos de violencia sexual eran utilizados para exigir rescates de mayor cuantía.

Oportunidades de paz



Oportunidades de paz y escenarios de riesgo

En el **cuarto capítulo (Oportunidades de paz)**, el informe identifica y analiza cinco escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz de cara al futuro. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades identificadas hacen referencia a diferentes regiones y temas.

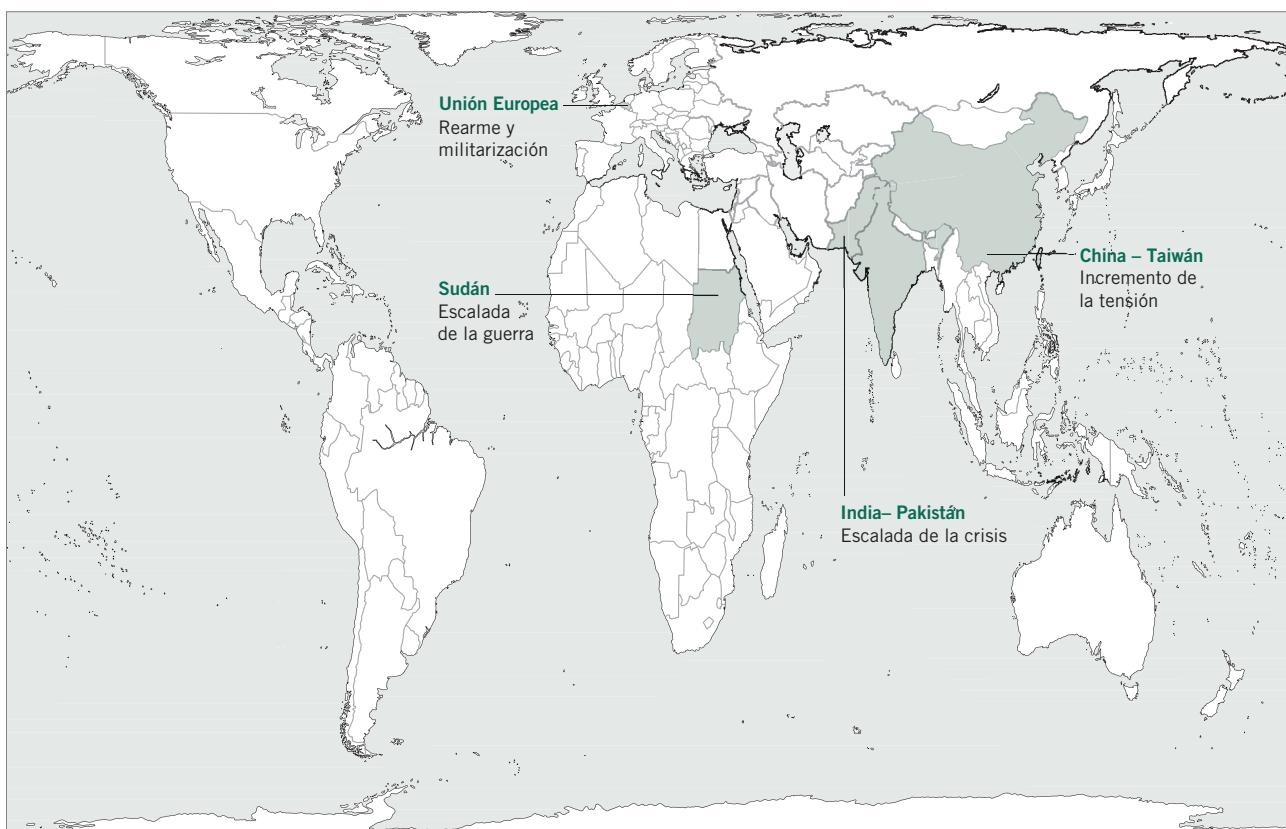
- **RDC-Rwanda:** Las recientes negociaciones entre la República Democrática del Congo (RDC) y Rwanda en Doha y Washington han abierto una ventana de oportunidad que podría transformar el conflicto prolongado del este de la RDC. Aunque los enfrentamientos persisten sobre el terreno y los actores involucrados han violado repetidamente treguas previas, estos pasos representan un nuevo impulso para resolver uno de los conflictos más prolongados y devastadores de África. No obstante, esta nueva oportunidad también presenta riesgos considerables entre los que destaca el profundo déficit de confianza entre las partes.

El informe Alerta! analiza cinco contextos propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz

- **Bangladesh:** La crisis política que atravesó el país en julio de 2024, con las mayores movilizaciones sociales de las últimas décadas, lideradas por el movimiento estudiantil, desembocaron en una crisis de Gobierno y la dimisión de la primera ministra, Sheik Hasina. Más de 1.400 personas murieron en las protestas, en un contexto de enorme represión policial. La conformación de un Gobierno interino, encabezado por el premio Nobel Muhammad Yunus permitió una salida de la crisis y ha abierto una oportunidad de transición, que culminará con las elecciones que tendrán lugar entre diciembre de 2025 y junio de 2026.

- **Bougainville:** En 2024 y en los primeros meses de 2025 la designación de un moderador independiente, unida a otros factores como la proximidad de las elecciones y un contexto regional favorable, apuntaban a una posible aceleración del proceso de negociación entre los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno Autónomo de Bougainville para determinar el estatus político de la isla de Bougainville. No obstante, algunos análisis también han destacado las dificultades que enfrenta tal proceso. El más importante de todos ellos, sin duda, es el desacuerdo profundo respecto del estatus político de la isla. Sin embargo, a pesar de las dificultades para un acuerdo definitivo a corto

Escenarios de riesgo



plazo, las perspectivas son más optimistas que en etapas anteriores.

- **Türkiye-PKK:** En 2024 se inició un nuevo proceso de paz en relación con el conflicto armado que desde 1984 ha enfrentado al Estado turco y al movimiento armado kurdo PKK. Convergen elementos de oportunidad como el acumulado de aprendizajes de experiencias previas, la voluntad de las partes de negociar, y primeros resultados en el ámbito de finalización de la lucha armada, entre otros. No obstante, hay también riesgos internos y regionales, en un contexto de represión en Türkiye y de volatilidad en Oriente Medio. En conjunto está por ver qué alcance tendrá la iniciativa en relación con el abordaje de las causas de fondo del conflicto y la consecución de derechos y libertades para la población kurda.
- **Siria:** La nueva era post-Assad no está exenta de riesgos y amenazas, pero también ha despertado esperanzas en amplios sectores de la población siria que aspiran a escribir un capítulo diferente en el país tras años de violencia y devastación. Las posibilidades de cambio en positivo estarán determinadas, entre otros factores, por la evolución de la transición política –y su grado de inclusividad–; por la activación de mecanismos de rendición de cuentas, justicia transicional y reconciliación; y por las perspectivas de recuperación económica.

En el **quinto capítulo (Escenarios de riesgo)**, el informe identifica y analiza cuatro escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2025 e incluso a más largo plazo.

- **Sudán:** La guerra civil en Sudán, iniciada en abril de 2023 entre el Ejército Nacional y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), ha desencadenado una grave crisis humanitaria con más de 12 millones de personas desplazadas y 25 millones en situación de inseguridad alimentaria. A pesar de los esfuerzos internacionales de mediación, la paz sigue distante debido a la fragmentación política, la intervención extranjera y la falta de voluntad de las partes. El conflicto amenaza con una partición de facto del país y sigue intensificándose, con múltiples denuncias de crímenes de guerra. Las perspectivas de resolución en el corto plazo son extremadamente limitadas.
- **India-Pakistán:** Ambos países se situaron al borde de un conflicto armado a gran escala. La respuesta militar india al atentado que tuvo lugar en Cachemira en el mes de abril de 2025 y en el que murieron 26 personas llevó a una importante escalada de la tensión bilateral. India y Pakistán lanzaron ataques contra instalaciones militares respectivas, incluyendo en las inmediaciones de equipamientos

vinculados al arsenal militar pakistaní. Si bien se logró un acuerdo de alto el fuego que permitió rebajar la confrontación militar y la tensión diplomática, persiste el riesgo de confrontación abierta ante nuevas crisis.

- **China-Taiwán:** En 2024 y en la primera mitad de 2025 se incrementó notablemente la tensión política y militar entre China y Taiwán, así como la confrontación entre China y EEUU acerca de la posición de Washington hacia Taiwán. China incrementó las incursiones aéreas y navales alrededor de la isla, y reiteró en varias ocasiones su intención de lograr la reunificación, sin descartar el uso de la fuerza. Por su parte, EEUU intensificó su retórica contra China, explicitó su apoyo a Taiwán, y reiteró la necesidad de incrementar las capacidades de disuasión contra cualquier intento

El informe analiza cuatro escenarios que por sus condiciones y dinámicas pueden agravarse en el futuro inmediato o a largo plazo

de Beijing de alterar unilateralmente y por la fuerza el estatus quo en el Estrecho de Taiwán.

- **UE/rearme:** La UE y los Gobiernos de los Estados miembro promueven un plan de rearme masivo, con medidas para movilizar 800.000 millones de euros en cuatro años, principalmente de los presupuestos públicos estatales. El Plan parece considerar el militarismo como único o principal camino posible en el actual contexto geopolítico, frente al abanico de vías de acción no militares para hacer frente a retos en seguridad. El plan llega en un contexto global de récord de gasto militar y con presión de la OTAN para que sus Estados miembro aumenten el gasto. Análisis críticos han señalado la influencia de la industria armamentística en el rumbo de militarización adoptado por la UE.

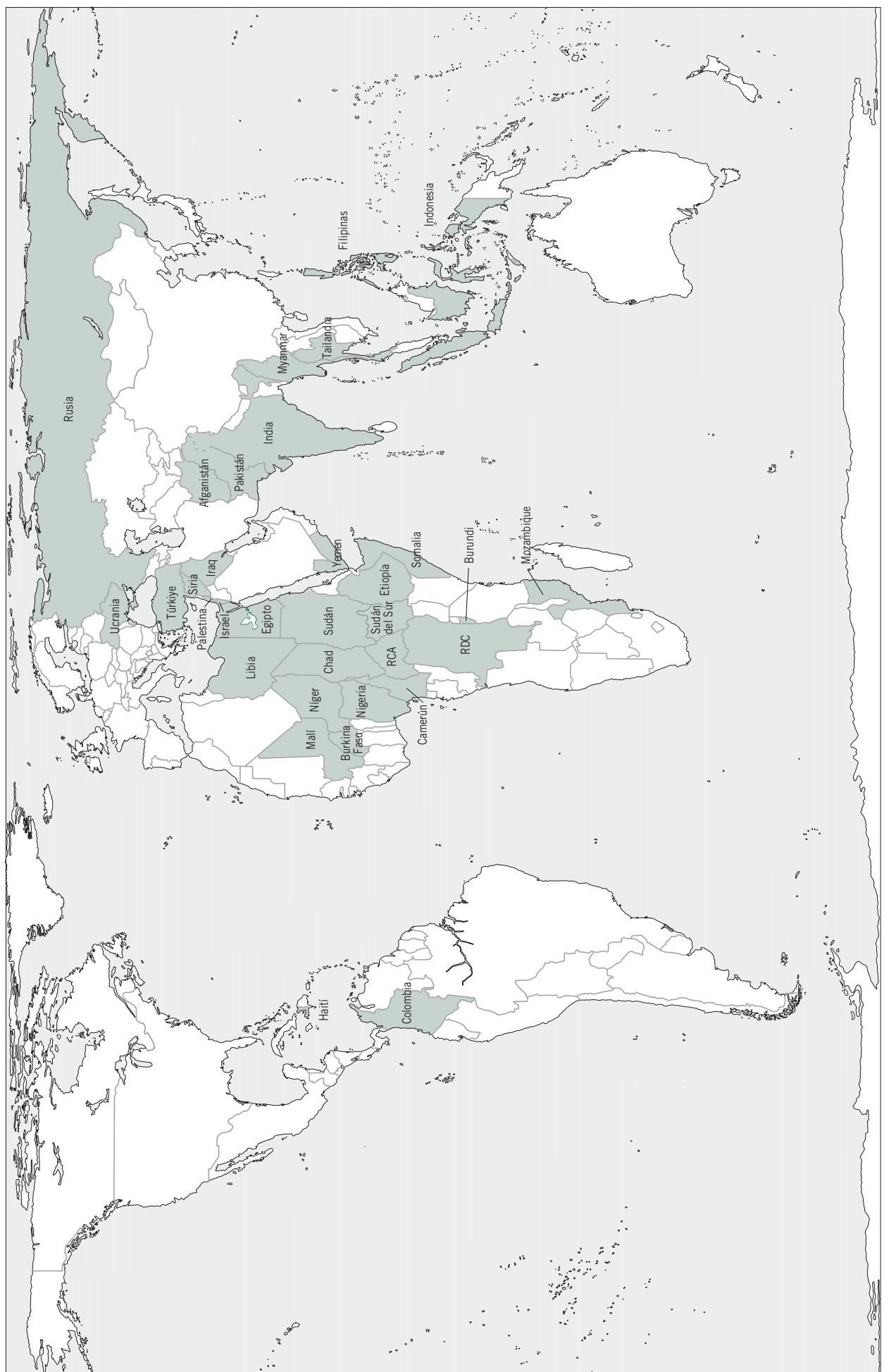
Resumen de la conflictividad global en 2024

Continente	Conflictivo armado			Tensión			TOTAL	
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja		
África	<i>Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste)</i> <i>Etiopía (Oromiya)</i> <i>Etiopía (Amhara)</i> <i>Malí</i> <i>RDC (este)</i> <i>RDC (este-ADF)</i> Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental <i>Somalia</i> <i>Sudán</i> <i>Sudán del Sur</i>	Mozambique (norte) RCA	Burundi <i>Libia</i> RDC (oeste) Somalia (Somalilandia – SSC) Khatumo	<i>Chad</i> Chad – Sudán <i>Eritrea – Etiopía</i> <i>Etiopía</i> Kenya <i>Mozambique</i> Níger Nigeria Nigeria (Biafra) RDC <i>RDC – Rwanda</i> Rwanda – Burundi	Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire <i>Etiopía – Egipto – Sudán</i> Guinea <i>Malí</i> Marruecos – Sáhara Occ. <i>Sudán – Sudán del Sur</i> Túnez Uganda	Argelia Djibouti Eritrea <i>Etiopía – Somalia</i> Etiopía – Sudán Gabón Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Nigeria (Delta Níger) Rwanda Senegal <i>Senegal (Casamance)</i> Sudáfrica Tanzania Togo Zimbabwe		
SUBTOTAL	11	2	4	12	10	16	55	
América	<i>Colombia</i> <i>Haití</i>			Bolivia Brasil Ecuador México Perú <i>Venezuela</i> <i>Venezuela – Guyana</i>	Chile Guatemala Honduras Nicaragua	Argentina Colombia Cuba EEUU El Salvador Isla de las Turcas y Caicos Jamaica Paraguay Trinidad y Tobago		
SUBTOTAL	2			7	4	9	22	
Asia y Pacífico	<i>Myanmar</i> Pakistán	Afganistán India (CPI-M) Pakistán (Baluchistán)	<i>Filipinas (Mindanao)</i> <i>Filipinas (NPA)</i> India (Jammu y Cachemira) Indonesia (Papúa Occidental) <i>Tailandia (sur)</i>	Afganistán – Pakistán Bangladesh China – Filipinas China – Japón China – Taiwán <i>Corea del Norte – EEUU, Japón, Corea del Sur</i> <i>Corea del Norte – Corea del Sur</i> <i>Papúa Nueva Guinea</i>	China – EEUU Corea del Sur India (Manipur) <i>India – China</i> India – Pakistán Mar de la China Meridional Pakistán Tayikistán	<i>China (Tíbet)</i> China (Xinjiang) China – Corea del Sur Corea del Norte <i>India (Nagalandia)</i> Indonesia Japón – Rusia (Isla de las Kuriles) Kazajistán Kirguistán Kirguistán – Tayikistán Laos Sri Lanka Tayikistán (Gorno-Badakhshan) Uzbekistán Uzbekistán (Karakalpakistán)		
SUBTOTAL	2	3	5	8	8	15	41	
Europa	<i>Rusia – Ucrania</i>		Türkiye (PKK)	Rusia	<i>Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)</i> Belarús Bosnia y Herzegovina Georgia <i>Moldova (Transnistria)</i> Rusia (norte del Cáucaso) Rusia – EEUU, OTAN, UE <i>Serbia – Kosovo</i> Türkiye	<i>Georgia (Abjasia)</i> <i>Georgia (Osetia del Sur)</i> Moldova Serbia <i>Türkiye - Grecia, Chipre</i>		
SUBTOTAL	1		1	1	9	5	17	
Oriente Medio	Iraq Israel – Hezbollah Israel – Palestina Siria Yemen		Egipto (Sinaí)*	Irán <i>Irán (programa nuclear)</i> Israel – Irán Israel – Siria Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido	Egipto Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán)	Arabia Saudita Bahrein Líbano <i>Palestina</i>		
SUBTOTAL	5		1	5	3	4	18	
TOTAL	21		5	11	33	34	49	153

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas.

*Este conflicto armado finalizó durante 2024

Mapa 1.1 Conflictos armados



1. Conflictos armados

- En 2024 se registraron 37 conflictos armados, un balance superior que en 2023 (36 casos) y la cifra más alta en los últimos 12 años.
- La mayoría de conflictos armados se concentró en África (17), mientras que el resto se distribuyó entre Asia y el Pacífico (10), Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (dos).
- Más de la mitad de los conflictos armados en 2024 (57%) eran de alta intensidad y tuvieron graves consecuencias en términos de letalidad e impactos en seguridad humana.
- El 60% de los conflictos armados experimentaron mayores niveles de violencia en 2024, un porcentaje muy superior al registrado en años anteriores: 42% en 2023 y 30% en 2022.
- La región de Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso) volvió a convertirse en el epicentro de la violencia perpetrada por actores con agendas yihadistas en todo el continente africano.
- El conflicto armado en la región etíope de Amhara se complejizó y escaló durante 2024, convirtiéndose en uno de los más graves de África.
- La grave ofensiva del M23 y de Rwanda en RDC transcurrió ante la incapacidad de la UA para lograr un acuerdo de alto el fuego.
- En Sudán la guerra provocó la mayor crisis de desplazamiento forzado y de hambre del mundo en 2024.
- Haití vivió un grave deterioro de la situación humanitaria y de violencia y un incremento de la acción coordinada de las bandas armadas que controlan una parte importante del país.
- Se agravó notablemente la situación de seguridad en Pakistán con una intensificación de la violencia tanto en el conflicto contra la insurgencia talibán como en la provincia de Baluchistán.
- Se redujeron notablemente los niveles de violencia en Mindanao y el Gobierno anunció la desarticulación de dos de las organizaciones armadas más importantes en la región.
- El número total de civiles fallecidos y heridos en 2024 en la guerra Rusia-Ucrania fue un 30% mayor que en 2023, alcanzando la cifra de 11.154.
- Los impactos de la campaña militar israelí sobre Gaza continuaron agravándose, con niveles extremos de letalidad, denuncias contra Israel por genocidio.
- El derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad en diciembre abrió una nueva etapa en Siria, con incertidumbres respecto a la evolución del conflicto y el proceso político en el país.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2024. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2024, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2024.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2024

Conflictos ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
ÁFRICA			
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-Tabara, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		↑
Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018-	Interno internacionalizado	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Etiopía (Amhara) -2023-	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Amhara, milicia amhárica Fano	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Etiopía (Oromiya) -2022-	Interno	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA), milicia amhárica Fano	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli, Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN) con sede en Tobruk, grupos armados de diverso signo –incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) (también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia o ALAF), ISIS, AQMI, mercenarios, Africa Corps (antes Grupo Wagner)–, Rusia, Türkiye	1
	Gobierno, Recursos, Sistema		=
Malí -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, Marco Estratégico Permanente para la Defensa del Pueblo de Azawad (CSP-DPA), Frente de Liberación Azawad, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Katiba Macina, grupo paramilitar ruso Cuerpo de África (antes Grupo Wagner), Alianza de Estados del Sahel (AES)	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		=

- En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquél en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
- En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
- La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2024 con la del 2023, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2024 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Conflictos -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Mozambique (Norte) -2017-	Interno internacionalizado	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Provincia de Mozambique del Estado Islámico (ISMP)—anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)—, al-Qaeda, Tanzania, Ruanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales “Naparama”	2
	Sistema, Identidad		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Mali, Níger, Costa d'Ivoire, Togo, Benín, Alianza de Estados del Sahel (AES), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia	3
	Sistema, Identidad, Recursos		=
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), coalición armada opositora Siriri, milicia étnica AAKG, otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Rusia, Africa Corps (antes Grupo Wagner)	2
	Gobierno, Recursos		↑
RDC (este) -1998-	Internacional	RDC, Burundi, Angola, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (Burundi, Kenya, Uganda y Sudán del Sur), SAMIDRC (Fuerza regional de la SADC, compuesta por Sudáfrica, Malawi y Tanzania), milicias progubernamentales Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP, conocidos como Wazalendo, compuestos por decenas de antiguas milicias Mai Mai y otros grupos armados de Kivu Norte y Kivu Sur, como APCLS, PARECO-FF, Nyatura, Raia Mutomboki), FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), empresas militares privadas (Agemira RDC y Congo Protection); Movimiento 23 de Marzo (M23), Twirwaneho, Rwanda; otros grupos armados no adscritos en Wazalendo, grupos armados burundeses; grupo armado de origen ugandés LRA; grupos y milicias comunitarias de Ituri (entre otros, CODECO/URDPC, FPIC, FRPI, MAPI, Zaire)	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	3
	Sistema, Recursos		=
RDC (oeste) -2023-	Interno	RDC, milicias comunitarias teke, milicias comunitarias yaka (entre otros, el grupo armado Mobondo) y otras milicias de comunidades aliadas	1
	Identidad, Recursos, Territorio		=
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, Türkiye, ATMIS, EUNAVFOR Somalia (Operación Atalanta), Combined Task Force 151, al-Shabaab, Estado Islámico en Somalia (ISS o ISIS-Somalia)	3
	Gobierno, Sistema		=
Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) -2023-	Interno	República de Somalilandia, administración SSC-Khatumo (estado de Khatumo), estado de Puntlandia, al-Shabaab	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Sudán -2023 ⁶	Interno internacionalizado	Nacional: Gobierno (Sudan Armed Forces), Rapid Support Forces (RSF) Darfur: Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, RSF, coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, milicias comunitarias.	3
	Gobierno, Autogobierno, Recursos, Identidad	Kordofán Sur y Nilo Azul: Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, RSF, Sudán del Sur Este: Gobierno, RSF, Eastern Sudan Liberation Forces, United Popular Front for Liberation and Justice, Beja National Congress, Beja Armed Congress.	↑
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony (“Agwalek”), SPLM-FD, SSLLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNL, REMNASA, NAS (Cirillo), NAS (Loburon), SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSOG) –antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC, Sudán, Uganda, UNMISS.	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↑

6 En años anteriores en Sudán se identificaban dos conflictos armados diferenciados: Sudán (Darfur) -2003- y Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2012-. Ambos conflictos, caracterizados como internos-internacionalizados y motivados por Autogobierno, Recursos e Identidad, se analizan en la presente edición conjuntamente dentro del conflicto armado Sudán -2023-. Este hecho se debe a que las dinámicas del conflicto armado iniciado en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), afectan a una gran parte del país y, de forma particular, a las regiones de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul. Además, los actores armados irregulares de estas regiones también participan activamente en las hostilidades, tomando parte activa en la contienda.

Conflictos -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
AMÉRICA			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia, grupos narcoparamilitares	3
	Sistema		↑
Haití -2024-	Interno internacionalizado	Gobierno, Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS), bandas armadas (incluyendo a Viv Ansanm, una alianza entre dos coaliciones de grupos armados --GPèp y Fuerzas Revolucionarias de la Familia G9 y Aliados)	3
	Gobierno, Recursos, Territorio		↑
ASIA			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Frente Nacional de Resistencia (NRF), ISIS-KP, Afghanistan Freedom Front (AFF)	2
	Sistema		↑
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		↓
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, facciones del MILF y el MNLF	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	2
	Sistema		↑
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)	1
	Autogobierno, Identidad		=
Indonesia (Papúa Occidental) -2024-	Interna	Gobierno, OPM	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF	3
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), ISIS-KP	3
	Sistema		↑
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, BLA, BNA, BLF y BLT; LeJ, TTP, ISIS-KP	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↑
EUROPA			
Türkkiye (PKK) ⁷ -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Rusia – Ucrania -2022 ⁸	Internacional	Rusia, milicias del Donbás, Ucrania	3
	Gobierno, Territorio		↑
ORIENTE MEDIO			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)	1
	Sistema		Fin
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (entre ellas Harakat al-Nujaba, la coalición Hashd al-Shaabi, Kataib Hezbollah y la coalición/plataforma Resistencia Islámica de Iraq), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Türkiye, Israel	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		↓

7 En anteriores ediciones de este informe este caso era analizado con la denominación de Türkiye (sudeste). La denominación “Türkkiye (PKK)” recoge el cambio oficial de nombre del país realizada por el Gobierno en 2022 y la expresión de las hostilidades Gobierno-PKK desde años anteriores en otras áreas fuera del sudeste de Türkiye –foco territorial histórico del conflicto.

8 Entre 2014 y 2021 la guerra en el este de Ucrania era analizada como un conflicto interno internacionalizado, dentro del caso de análisis “Ucrania (este)”. Véase ediciones anteriores a 2022 de este informe.

Conflictos -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ORIENTE MEDIO			
Israel – Hezbollah -2023-	Internacional	Israel, Hezbollah, otras organizaciones armadas libanesas (Fuerzas al-Fajr, Movimiento Amal) y palestinas con presencia en Líbano (Brigadas al-Qassam de Hamas y Brigadas al-Quds de la Jihad Islámica)	3
	Gobierno, Territorio		↑
Israel – Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar alSham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Türkiye, Hezbollah, Irán, Rusia, ex Grupo Wagner, Israel	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Yemen -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), Security Belt Forces, AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU)	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; =: sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado causado por situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

Durante 2024, y siguiendo la tendencia de los últimos años, aumentó la cifra global de conflictos armados. **Durante el año se contabilizaron 37 conflictos armados, frente a los 36 registrados en 2023, 33 en 2022 y 32 en 2021. Se trata de la cifra más alta desde 2012**, es decir, la más elevada en 12 años según los recuentos de la Escola de Cultura de Pau (véase gráfico 1.1). La dinámica de incremento en el número de conflictos armados en los últimos años ha ido en paralelo a un significativo aumento en la cifra de tensiones sociopolíticas a nivel mundial, un total de 116 en 2024 (véase capítulo 2).

En 2024, las dinámicas de violencia motivaron que dos nuevos contextos pasaran a ser considerados como conflictos armados. En América, el caso de **Haití**, donde se produjo un aumento alarmante en los niveles de violencia y un grave deterioro de la situación humanitaria, en paralelo a una agudización de la crisis política que atraviesa el país. En la región de Asia y el Pacífico, la escalada en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Indonesia y el brazo armado de la Organización de la Liberación Papúa (OPM), ataques contra la población civil y hechos de violencia

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2024

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2024, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales

intercomunitaria también motivaron que el caso de **Indonesia (Papúa Occidental)** pasara a ser considerado como conflicto armado. Cabe mencionar que, al finalizar el año, **Egipto (Sinaí) en Oriente Medio dejó de ser considerado como un conflicto armado activo** por la reducción significativa de las hostilidades que en los últimos años habían enfrentado a combatientes de la filial de Estado Islámico en la región con el Ejército apoyado por milicias tribales, aunque persistían múltiples retos vinculados al retorno de población desplazada y a la rendición de cuentas por crímenes de guerra y vulneraciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto.

Respecto a la distribución geográfica, como en años previos África continuó concentrando el mayor número de conflictos a nivel mundial, prácticamente la mitad –17 casos, que representaron un 46%–, seguida de Asia y el Pacífico –10 conflictos, equivalentes al 27%–, Oriente Medio –seis casos que suponen un 16% del total– y América y Europa –con dos conflictos cada región, que representan el 5,5%, respectivamente (véase gráfico 1.2.).

En cuanto a la relación de los actores implicados en la contienda y el escenario de las hostilidades, el análisis de la Escola de Cultura de Pau identifica tres tipos de conflictos armados: internos, internos internacionalizados e internacionales. Durante 2024 la distribución de casos según estas categorías fue muy similar a la del año anterior. Se identificaron siete (19%) de carácter interno –uno más que en 2023–, que se repartieron entre África (tres) y la región Asia y el Pacífico (cuatro): Etiopía (Oromiya), RDC (oeste) y Somalia (Somalilandia-SSC Kathumo), India (CPI-M), Filipinas (NPA), Tailandia (sur) y también Indonesia (Papúa Occidental), que se añadió como conflicto armado en 2024. Asia y el Pacífico volvió a situarse así como la zona del mundo que concentra un mayor número de conflictos de carácter eminentemente interno. La cifra de conflictos armados internacionales se mantuvo estable respecto a 2023, con un total de cinco contextos, equivalentes al 13% del total de casos y distribuidos entre África (dos), Europa (uno) y Oriente Medio (dos): el conflicto armado que transcurre en la Región Sahel Occidental, el de RDC (este) –considerado como internacional por la implicación directa de Rwanda en las hostilidades–, el de Rusia-Ucrania, el de Israel-Hezbollah y el de Israel-Palestina. El resto de conflictos armados –25 de los 37, lo que representa un 68%– fueron de carácter interno internacionalizado. Este porcentaje sigue la tendencia observada ya en 2023 (69%), pero supone una disminución respecto a años previos, en los cuales los conflictos de este tipo representaban en torno a un 80% de los casos. Los conflictos armados internos internacionalizados se caracterizan porque, aunque parte de las dinámicas

Gráfico 1.1: Evolución en la cifra anual de conflictos armados desde 2010

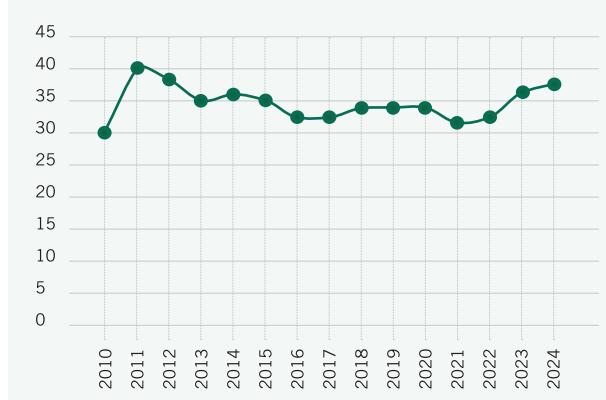


Gráfico 1.2. Distribución regional del número de conflictos armados en 2024



sean internas, alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados, grupos armados de acción transfronteriza y empresas internacionales de seguridad privada, entre otros.

En 2024 la mayor parte de los conflictos armados continúaran concentrándose en África (17), seguida de Asia (10), Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (dos)

En 2024 las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU siguieron presentes en algunos contextos, pero con cambios respecto a años previos tras la retirada o inicio del repliegue (total o parcial) de algunas de ellas, en especial en África, ya desde 2023. Tras la salida de la MINUSMA de Malí ese año, a principios de 2024 se inició la retirada parcial de la MONUSCO de la RDC. En junio de 2024 sus fuerzas se habían replegado totalmente de Kivu Sur, según lo acordado con el Gobierno congolés, aunque la misión siguió operando en otras áreas del país. Aunque se trata de una misión de carácter político y no militar, en febrero de 2024, y debido a la guerra que desde abril de 2023 enfrenta

al Ejército con el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), también finalizó sus funciones la Misión de Asistencia para la Transición en Sudán (UNITAMS). En esta misma línea, en 2024 las autoridades de Iraq también solicitaron a la ONU que pusiera fin a su misión en el país, UNAMI (también de carácter político), bajo el argumento de que su presencia ya no era necesaria para asegurar la estabilidad del país. Su mandato fue renovado en 2024 por última vez y se espera que acabe sus funciones a finales de 2025. Pese a estos cambios, las misiones de la ONU continuaron siendo actores relevantes en otros escenarios de conflicto armado internos internacionalizados, como en la RCA (MINUSCA), Sudán del Sur (UNMISS) o en RDC (la ya mencionada MONUSCO). Adicionalmente, aunque no se trata de una misión de la ONU, cabe mencionar que a partir de junio se desplegó en Haití la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que había sido autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023 ante la situación de extrema violencia e inestabilidad en el país centroamericano. Por otro lado, y aunque se trata de un conflicto armado de carácter internacional, cabe destacar que en 2024 la misión que históricamente supervisa el alto el fuego en la zona fronteriza de facto entre Israel y Líbano, la UNIFIL, fue objeto de presiones y ataques por parte de Israel para forzar su salida de su zona de operaciones, motivando denuncias de la propia misión y la condena de decenas de países.

Como en años anteriores, **organizaciones regionales también continuaron involucradas en numerosos conflictos en formato de misiones o de operaciones militares**. Entre estos casos se cuentan las desplegadas por la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en RDC (SAMIDRC) y en Mozambique (SAMIM) –aunque esta última cerró sus operaciones en el país el 15 de julio– o la misión de la UE en Somalia (EUNAVFOR). En el marco de la reconfiguración de alianzas y acercamiento a otros actores, en especial Rusia, en zonas como el Sahel Occidental, la UE puso fin a la misión de entrenamiento militar en Malí (EUTM Malí) y a la misión de cooperación militar con Níger (EUMPM). En 2024, como en años previos, también prosiguieron las actividades de misiones de carácter híbrido, que aglutinan tanto a organizaciones regionales como a Estados. Fue el caso de la operación marítima que actúa en el Cuerno de África y el Océano Índico, la denominada Combined Task Force 151, que está liderada por EEUU y opera en coordinación con la EUNAVFOR en el marco del conflicto armado en Somalia.⁹ Otra iniciativa de naturaleza similar y también liderada por EEUU es la coalición internacional contra Estado Islámico, integrada por diversos actores, entre ellos también la UE y la Liga Árabe.

La implicación de terceros países y la acción transfronteriza de grupos armados también fueron elementos clave en numerosos conflictos internos internacionalizados y añadieron complejidad en numerosos escenarios. En África, esta dinámica se ilustra en el caso de Mozambique, donde la retirada de la misión SAMIM a mediados de año dio paso a una mayor implicación de varios actores estatales en apoyo al Gobierno mozambiqueño. Principalmente Rwanda, quien desplegó tropas adicionales y se involucró activamente en ofensivas con las fuerzas gubernamentales de Mozambique –en paralelo al papel clave que jugó también en el conflicto (internacional) en RDC (este). También en Oriente Medio durante 2024 continuó haciéndose evidente la internacionalización e interrelación entre diversos conflictos armados activos en la región, así como las repercusiones en toda la zona de la crisis de Gaza. Iraq y Siria, por ejemplo, fueron escenario de enfrentamientos entre múltiples actores estatales y no estatales, en el marco de la confrontación en la que participan principalmente Israel, EEUU y actores afines, por un lado, e Irán y grupos armados del llamado “eje de resistencia”, por otro –adicionalmente, las hostilidades entre Türkiye y el PKK también se libraron principalmente en territorio iraquí. La escalada de algunas de estas dinámicas de violencia derivó en la intensificación y/o activación de nuevas tensiones, como la disputa bilateral entre Israel e Irán, la de Israel y Siria en torno a los Altos del Golán o la de los al-houthistas de Yemen contra Israel, EEUU y Reino Unido que tuvo como uno de sus escenarios principales el Mar Rojo.¹⁰ Al finalizar el año, el caso de Siria también ilustró la relevancia de la implicación de terceros países en el devenir de algunos conflictos armados, ya que la caída de Bashar al-Assad se atribuyó en parte a la decisión de sus hasta entonces aliados, Rusia e Irán, de no priorizar su respaldo al régimen de Damasco.

Otro ejemplo significativo de la implicación de terceros países fue el caso de Rusia, que intensificó su presencia y sus acuerdos de colaboración estratégica y militar en varios países africanos. En Malí, algunos hechos de violencia incluso apuntaron a una proyección de la disputa entre Rusia y Ucrania librada en territorio africano. Adicionalmente, cabe destacar que en los últimos años el Grupo Wagner se había convertido en un ejemplo paradigmático de la implicación de empresas de seguridad privadas en diversos conflictos armados. El alzamiento militar contra Moscú protagonizado por el líder del Grupo Wagner a mediados de 2023 y su muerte poco después en un incidente aéreo (atribuido a Rusia) derivó en la reconversión de esta organización y en un control más directo por el Gobierno ruso. Según diversos análisis e informaciones de prensa, una parte importante de los mercenarios

9 Además de la misión Combined Task Force 151 (CFT-151), existen otras cuatro operaciones de coaliciones de países activas en Oriente Medio y el Mar Rojo. Véase <https://combinedmaritimeforces.com/>

10 Véase el resumen sobre estos casos en el capítulo 2 (Tensiones).

de la organización se han integrado al ministerio de Defensa ruso –algunos a través de empresas privadas y organizaciones paramilitares subordinadas a este ministerio– y Moscú ha reconocido los vínculos que mantiene con las fuerzas del antiguo grupo Wagner.¹¹ En sus operaciones en África, los integrantes del grupo han pasado a actuar con una nueva denominación, Africa Corps. Bajo esta nueva dirección, los paramilitares rusos han continuado operando en Libia, Malí, en algunos de los países afectados por el conflicto en la Región del Sahel Occidental –además de Malí, también Burkina Faso y Níger–, en RCA y en menor medida también en Sudán. Durante 2024, los paramilitares rusos apoyaron activamente a las Fuerzas Armadas malienses y también fueron determinantes en el respaldo a las fuerzas de seguridad de RCA. En Libia, en tanto, se identificó una creciente presencia de militares rusos –incluyendo fuerzas especiales y tropas regulares, algunos procedentes de Ucrania– que se sumaron a los miembros del ex Grupo Wagner que ya se encontraban en el país, en un contexto de intensificación de la cooperación y contactos de Moscú con el líder militar que domina el este de Libia, Khalifa Haftar. Tras la caída de Bashar al-Assad en Siria, Rusia aceleró la transferencia de efectivos militares a Libia, evidenciando una vez más las complejas interconexiones entre algunos de los conflictos armados actuales.

En lo que se refiere a las causas, en 2024 se confirmó la naturaleza multicausal de los conflictos armados. Siguiendo la tendencia de años previos, la mayor parte de los conflictos –27 de los 37, equivalente a un 73%– tuvo entre sus principales causas el cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o las disputas en torno a las políticas internas o internacionales de los respectivos gobiernos. En consonancia con la tendencia observada en los últimos años, en 2024 tuvo relevancia el factor causal vinculado a las disputas en torno al sistema, presente en 18 de los 37 casos (46%) y relacionado en la mayoría de ellos con la presencia de actores armados con agendas políticas que reivindican una presunta inspiración yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos.¹² Entre estos grupos se encuentran, por ejemplo, las facciones de Boko Haram (JAS y ISWAP) en la Región del Lago Chad, las milicias talibán pakistaníes de TTP o los distintos grupos que se han reivindicado como filiales y/o “provincias” de ISIS más allá de su área de origen en Iraq y Siria, en contextos como en la región del Lago Chad, Somalia, Libia, Egipto (Sinaí), Afganistán, Pakistán, Pakistán (Baluchistán),

Filipinas (Mindanao) o Yemen. En algunos de estos casos –como Libia, Afganistán, Filipinas (Mindanao), Egipto (Sinaí) o Yemen– estos grupos han reducido sus actividades respecto a años previos. En contraste, han ganado protagonismo actores yihadistas en conflictos armados africanos, principalmente en la zona de Sahel Occidental, entre los que destacan grupos como la coalición Jama'at Nusra al Islam wal Muslimin (JNIM) –vinculada con la red de al-Qaeda– y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). En otros casos –Colombia, Filipinas (NPA), India (CPI-M)– la dimensión de disputa de sistema estaba asociada a otra tipología de insurgencias, con una línea ideológica vinculada al marxismo y al maoísmo. Por otra parte, los conflictos armados con motivaciones relacionadas a las políticas internas o internacionales de los respectivos gobiernos, que derivan en luchas por erosionar o acceder al poder –y en algunos casos en la instalación de estructuras de gobierno rivales–, estuvieron presentes en 13 de los 37 casos (38%). Entre ellos, cabe mencionar contextos como el de Burundi, Libia, RCA, Somalia, Sudán, Haití, Rusia-Ucrania, Israel-Hezbollah, Yemen o Siria. En este último caso, la ofensiva concertada de fuerzas rebeldes motivó la caída de al-Assad 14 años después del inicio de las revueltas contra el régimen en el país.

Entre las causas principales de los conflictos armados también es posible identificar **disputas en torno a demandas identitarias y/o de autogobierno, presentes en 22 de los 37 conflictos armados en 2024**, es decir, **en un 59% del total de casos** (en todas las regiones, a excepción de América). Siguiendo la tendencia de años precedentes, entre estas motivaciones tuvo mayor relevancia el factor asociado a las demandas identitarias, presentes en 22 de los 37 casos (59% del total) y en muchos casos este elemento estuvo estrechamente vinculado a reivindicaciones de autogobierno –15 de los 37 conflictos, equivalente al 41% de contextos. Entre los contextos con motivaciones vinculadas a cuestiones de identidad y/o autogobierno se cuentan casos de larga trayectoria –como el de Türkiye (PKK), el de India (Jammu y Cachemira) o Myanmar–, pero también algunos que han devenido conflictos armados más recientemente (en el último lustro) –como el de Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Amhara), Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) o Indonesia (Papúa Occidental), este último considerado conflicto armado a partir de 2024 en parte por la intensificación de los enfrentamientos entre el Gobierno y el brazo armado del grupo secesionista Organización de la Liberación de Papúa (OPM).

11 Para más información, véase Egbejule, Eromo, “[Del grupo Wagner a Africa Corps: la transformación de los mercenarios rusos un año después de la muerte de Prigozhin](#)”, *El Diario.es*, 22 de agosto de 2024; Ehl, David, “[How the Russian Wagner Group is entrenching itself in Africa](#)”, *DW*, 27 de octubre de 2024; Peltier, Elian, “[Year After Failed Mutiny, Russia Tightens Grip on Wagner Units in Africa](#)”, *The New York Times*, 25 de junio 2024; Lechner, John A., “[Is Africa Corps a Rebranded Wagner Group?](#)”, *Foreign Policy*, 7 de febrero 2024; Sukhankin, Sergey, “[After Prigozhin: The Anatomy of Russia's Evolving Private Military and Mercenary Industry](#)”, The Jamestown Foundation, 3 de marzo de 2024.

12 El concepto de yihad tiene y ha tenido históricamente múltiples connotaciones. El término entraña la idea de “esfuerzo” y muchos musulmanes y estudiosos del Islam rechazan su uso para calificar a grupos armados por considerar que utilizan un concepto religioso para justificar una violencia ilegítima. Teniendo en cuenta estos debates y, al mismo tiempo, el extendido uso del término en el ámbito de las relaciones internacionales y estudios de paz y seguridad, en este informe se alude a “grupos con agendas yihadistas” cuando son las propias organizaciones armadas las que en sus narrativas y declaración de intenciones apelan a su particular interpretación de los preceptos islámicos.

Finalmente, en lo que respecta a factores de causalidad, cabe mencionar también que **numerosos conflictos armados tuvieron entre sus motivaciones principales el control de territorios y/o de recursos. Este tipo de factores se identificaron en 17 de los 37 casos, equivalentes a un 46%**. En este binomio destacó el peso de las disputas en torno a recursos, identificadas en 14 de los 37 casos (38%) en 2024. La mayoría de los conflictos armados que involucraron disputas por recursos se concentraron en África, en línea con lo observado en años anteriores, aunque es relevante mencionar que este elemento también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra. A lo largo de 2024, las dinámicas de violencia en torno a disputas por recursos volvió a ser especialmente relevante en RDC (este), donde la escalada del conflicto armado aumentó la explotación ilegal de recursos naturales, derivó en un mayor control de territorios ricos en minerales por parte de los grupos armados AFC/M23 y las Fuerzas Armadas Rwandesas (FDR) y en la exportación fraudulenta de más de 150 toneladas de coltán desde la RDC a Rwanda. En paralelo, en Ituri, continuó la explotación de oro al margen del Estado por parte de grupos armados y redes delictivas. Fuera de África, destacaron casos como el de Pakistán (Baluchistán) –donde grupos insurgentes lanzaron diversos ataques contra infraestructuras de proyectos mineros impulsados por empresas chinas en la provincia, bajo acusaciones de apropiación de recursos naturales– o el de Indonesia (Papúa Occidental) –donde el rechazo a las actividades de la transnacional extractiva Freeport es uno de los ejes del conflicto.

En tanto, las cuestiones vinculadas al control de territorios estuvieron presentes en seis de los 37 conflictos armados (16%), incluyendo dos casos de baja intensidad en África –RDC (oeste) y Somalia (Somalilandia SSC Khatumo)– y en cuatro casos de alta intensidad en 2024. Uno de ellos fue Haití, donde uno de los temas clave de la disputa es el control del territorio que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país. La cuestión territorial también fue determinante en el conflicto armado Israel-Hezbollah –que se libra principalmente en la frontera de facto entre Israel y Líbano y que en 2024 estuvo marcado por la invasión terrestre de las fuerzas israelíes del sur libanés a partir de octubre– y en el de Israel-Palestina. En este último caso, Israel prosiguió con su campaña militar para controlar Gaza, forzando masivos desplazamientos a través de acciones que fueron señaladas como genocidio e intento de limpieza étnica del territorio. En paralelo, durante 2024 el Gobierno israelí también continuó con sus políticas para ampliar su anexión de facto de territorios en Cisjordania. Cabe destacar que en algunos contextos donde el factor territorial no es la causa central, las dinámicas de las

hostilidades también involucran aspectos de control territorial. En 2024, por ejemplo, los grupos armados en Myanmar consiguieron importantes avances en el control de territorios en el marco de su disputa con el gobierno, mientras que en RDC (este) las conquistas territoriales del M23 con apoyo de Rwanda fueron uno de los elementos determinantes del conflicto.

El análisis de la **evolución** de los conflictos armados en 2024 ofrece una de las conclusiones más significativas del año. **Más de la mitad de casos –22 de los 37 o un 60%– evolucionó hacia mayores niveles de violencia e inestabilidad, un porcentaje significativamente superior al registrado en años anteriores: 42% en 2023 y 30% en 2022**. Los contextos en los que se observó un deterioro en los niveles de violencia y un incremento en las hostilidades e impactos de los conflictos armados en 2024 fueron, en África, la mayoría de casos: Burundi, Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Mozambique (norte), RCA, RDC (este), Sudán y Sudán del Sur; en América, en los dos casos de la región: Colombia y Haití; en Asia y el Pacífico, en la mayor parte de los casos: Afganistán, India (CPI-M), Indonesia (Papúa Occidental), Myanmar, Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Tailandia (sur); en Europa en uno de los dos casos: Rusia-Ucrania; y en Oriente Medio en la mitad de los casos: Israel-Hezbollah, Israel-Palestina y Siria. En un 24% de los casos –nueve de 37– los conflictos armados presentaron niveles de violencia similares al año anterior, mientras que solo en el 19% –siete de los 37 casos– se identificó una reducción en los enfrentamientos y niveles violencia.

Entre los casos que evolucionaron hacia una disminución en las hostilidades, esta tendencia respondió a diversas dinámicas. En algunos casos, estuvo relacionada con la reducción de la actividad y/o aparente debilitamiento de algunos de los actores armados involucrados en el conflicto. Fue el caso, por ejemplo, de Egipto (Sinaí) que, como se ha mencionado, dejó de ser considerado como conflicto armado a finales de 2024 por la reducción sostenida de las hostilidades en los últimos años. También fue el caso de Iraq que, a pesar de seguir siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad, ha registrado una disminución en los niveles de letalidad asociados a la violencia armada en los últimos años. En el caso de Somalia (Somalilandia) también se observó una reducción en las hostilidades en 2024, aunque hacia finales de año los enfrentamientos volvieron a incrementarse. Otros dos ejemplos se dieron en Filipinas. En el conflicto armado que afecta a las áreas de mayoría musulmana en el sur del país, en Mindanao, se redujo notablemente la violencia y el Gobierno anunció la “neutralización” de dos de las organizaciones armadas más importantes de la región. Paralelamente, el conflicto que enfrenta a las fuerzas gubernamentales con el NPA también presentó

La mayor parte de los conflictos armados (60%) evolucionaron negativamente en 2024 hacia mayores niveles de violencia, un porcentaje muy superior al de años previos

un descenso en las hostilidades que las autoridades filipinas atribuyeron al debilitamiento del grupo armado. En otros contextos, la reducción en los niveles de violencia estuvo relacionada, al menos parcialmente, con las repercusiones de procesos de negociación en marcha. En el caso del conflicto que enfrenta a Türkiye con el PKK, la disminución de las hostilidades y niveles de letalidad se produjo en paralelo a contactos exploratorios entre las partes que apuntaban entonces al posible establecimiento de un nuevo proceso de diálogo.¹³ En algunos casos que evolucionaron de manera similar al año anterior, la estabilización en los niveles de violencia también puede atribuirse, al menos en parte, a la vigencia formal y/o de facto de acuerdos de alto el fuego, como se ejemplifica en los casos de Libia y Yemen.¹⁴

En cuanto a la intensidad de los conflictos armados, en 2024 los casos graves se incrementaron notoriamente, confirmando la tendencia observada en los últimos años de aumento en este tipo de escenarios. Los conflictos armados de alta intensidad –caracterizados por elevados niveles de letalidad (más de mil víctimas mortales anuales) y severos impactos en términos de desplazamiento de población, destrucción de infraestructuras y consecuencias en el territorio– representaron un 57% de los casos en 2024 (Gráfico 1.3). Este porcentaje es significativamente superior al 47% registrado en 2023 y el más alto registrado en los últimos 15 años, según los datos de la Escola de Cultura de Pau (Gráfico 1.4). Como queda expuesto en la gráfica, los conflictos armados de alta intensidad solían representar menos de un tercio del total de casos a nivel global, pero desde 2020 se sitúan en torno a la mitad.

De los 21 conflictos armados de alta intensidad en 2024 –y siguiendo la tendencia de años anteriores–, el mayor número se concentró en África, continente en el que se contabilizaron 11 casos de este tipo (52%). Pese a lo elevado del porcentaje, esta cifra es menor a la de 2023 (59%) y dista de la de 2022, cuando siete de cada diez conflictos armados graves tenía lugar en el continente. Respecto al total de casos de conflicto armado en África, 11 de los 17 contextos eran de alta intensidad (65%), un porcentaje superior al de 2023 (55%), pero menor en comparación a años previos: 75% en 2022 y 80% en 2021. La segunda región que albergó un mayor número de conflictos armados de alta intensidad fue Oriente Medio, con cinco casos, que representaron un 24% del total de conflictos graves a nivel mundial y que, a su vez, equivalen a 83% del total de casos en la región (cinco de seis). Este último porcentaje representa un

Los conflictos armados de alta intensidad se incrementaron en 2024 y pasaron a representar un 57% del total de casos a nivel global

Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos armados en 2024

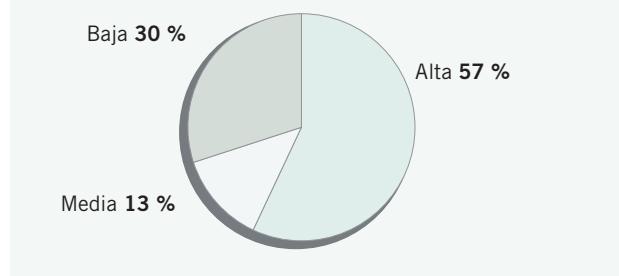


Gráfico 1.4. Proporción de conflictos armados de alta intensidad desde 2010

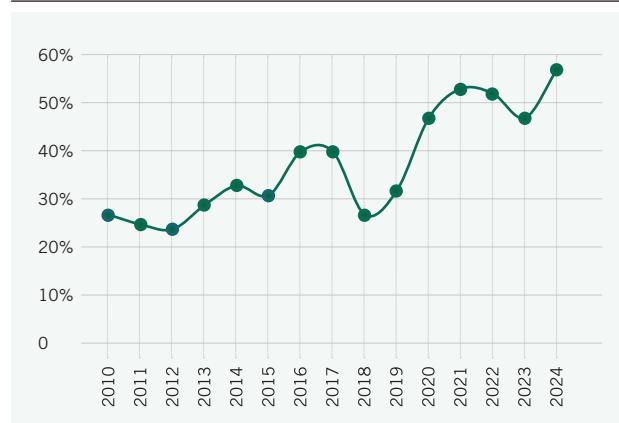
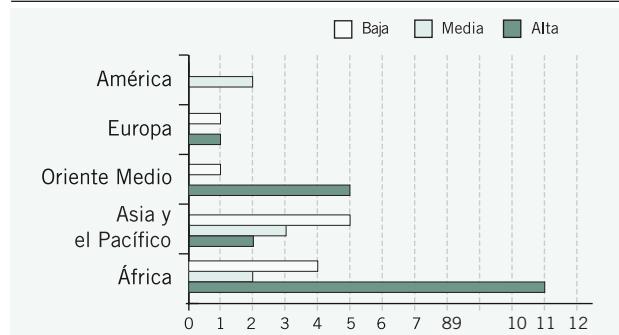


Gráfico 1.5. Intensidad de los conflictos por regiones



aumento respecto al año anterior. Asia y el Pacífico y Europa mantuvieron el mismo número de conflictos armados graves que en 2023, albergando dos casos y un caso, respectivamente. En América, en cambio, la región pasó de uno a dos casos de conflicto armado en 2024 y ambos fueron catalogados como de alta intensidad en el último año. Los 21 conflictos armados de alta intensidad en 2024 fueron: Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán, Sudán

13 Para más información, véase el resumen sobre Türkiye (PKK) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

14 Para más información, véase el resumen sobre Libia y Yemen en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

del Sur, Colombia, Haití, Myanmar, Pakistán, Rusia-Ucrania, Iraq, Israel-Hezbollah, Israel-Palestina, Siria y Yemen.

Cabe destacar que en **muchos de los conflictos armados de alta intensidad se viene superando con creces el umbral de mil víctimas mortales anuales**. 2024 no fue una excepción y en numerosos contextos las hostilidades y dinámicas de violencia provocaron cifras de letalidad que estuvieron muy por encima de ese límite, además de generar otros múltiples impactos en términos de seguridad humana. En diversos contextos las hostilidades causaron más de 3.000 víctimas mortales. Fue el caso del conflicto armado que afecta a la región de Oromiya, en Etiopía, donde los enfrentamientos entre

Los conflictos armados con mayores niveles de letalidad en 2024 fueron el de Rusia-Ucrania y el de Israel-Palestina, principalmente por el impacto de la violencia en Gaza

las fuerzas de seguridad federales y el grupo Ejército de Liberación Oromo dejaron más de 3.300 personas fallecidas. En RDC (este), en un contexto de empeoramiento de la situación de seguridad desde la intensificación de la ofensiva del grupo armado M23 y Rwanda en territorio congolés, otras 3.500 personas perdieron la vida en hechos de violencia. En la Región de Lago Chad, las actividades de las dos principales facciones de Boko Haram y las acciones contrainsurgentes en toda la cuenca dejaron unas 3.650 personas fallecidas. En Malí, en tanto, la ruptura del acuerdo de paz en el norte y la extensión de las acciones de grupos con agendas yihadistas en el país resultaron en la muerte de casi 4.000 personas durante el año. En Oriente Medio, el agravamiento del conflicto entre Israel y Hezbollah y la

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

ÁFRICA	<ul style="list-style-type: none"> Siguiendo la tendencia de años previos, África albergó el mayor número de conflictos armados a nivel global con 17 casos, que representan el 46% del total. En 2024 prácticamente dos tercios de los conflictos armados fueron de alta intensidad –11 de los 17 casos, que representan un 65%–, un porcentaje mayor al registrado en 2023 (55%), pero menor al observado en 2022 (75%). Casi la mitad de los conflictos armados africanos evolucionaron negativamente en 2024 hacia mayores niveles de violencia –nueve de los 17 casos–, en siete casos la situación fue similar a la del año anterior y solo en un contexto –Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) se identificó una reducción en las hostilidades. La inmensa mayoría de los conflictos armados africanos fueron internos internacionalizados –12 de los 17 casos–, pero a nivel comparativo con otras regiones África también concentró un porcentaje significativo de los contextos de carácter eminentemente interno –tres de los siete casos identificados a nivel global.
AMÉRICA	<ul style="list-style-type: none"> El continente pasó de uno a dos conflictos armados en 2024, después de que Haití se sumara al histórico conflicto armado en Colombia. Los casos en la región representaron así el 5,5% del total global, el mismo porcentaje que Europa. Tanto el conflicto de Colombia como el de Haití fueron considerados de alta intensidad y experimentaron mayores niveles de violencia durante 2024. Aunque en América solo se contabilizaron dos conflictos armados, la región continuó registrando elevadísimos niveles de violencia producto de otras dinámicas de tensión y criminalidad y destacó por sus altas tasas de homicidios.¹⁵
ASIA Y EL PACÍFICO	<ul style="list-style-type: none"> Siguiendo la tendencia de años previos, Asia fue, después de África, la región que concentró un mayor número de conflictos armados, con un total de 10 casos (27% del total). En 2024 Indonesia (Papúa Occidental) se sumó a la lista de conflictos armados de la región, debido a la escalada de violencia en este contexto. Una de las tendencias destacadas en Asia fue el incremento de casos que registraron mayores niveles de enfrentamientos y violencia –siete de los 10 casos en 2024, frente a un tercio en 2023. La región continuó concentrando el mayor número de conflictos de baja intensidad –cinco de los 11 casos contabilizados a nivel global–, que representaron también la mitad de los contextos de la región (cinco de los 10 casos). Asia fue la región con mayor presencia de conflictos armados de carácter interno (cuatro de diez).
EUROPA	<ul style="list-style-type: none"> El continente fue escenario de dos conflictos armados –Rusia-Ucrania y Türkiye (PKK)–, que representan el 5,5% del total de casos a nivel global. El conflicto de Rusia-Ucrania, de alta intensidad, evolucionó hacia mayores niveles de violencia en 2024; mientras que el caso de Türkiye (PKK), considerado de baja intensidad, registró un descenso en las hostilidades, en línea con la tendencia identificada en los últimos años. El conflicto armado de Rusia-Ucrania fue internacional y el de Türkiye (PKK) interno internacionalizado. En este último caso, de hecho, la mayor parte de los enfrentamientos se libraron entre las fuerzas turcas y el PKK en territorio iraquí.
ORIENTE MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> En la región se registraron seis conflictos armados, que representaron un 16% del total a nivel global. Después de África, Oriente Medio fue la zona del mundo que albergó un mayor número de conflictos armados de alta intensidad: cinco de los seis casos de la región fueron de este tipo. Respecto a la evolución, en la mitad de los casos se observó un deterioro y una intensificación en los niveles de violencia en comparación con el año anterior –Israel-Hezbollah, Israel-Palestina y Siria. En dos casos se observó una evolución a menores niveles de violencia: Iraq y Egipto (Sinaí). Este último caso dejó de ser conflicto armado en 2024.

15 Véase el apartado de América en el capítulo 2 (Tensiones).

escalada en la campaña aérea y terrestre israelí en el segundo semestre dejaron un balance de más de 4.000 personas fallecidas. En otros casos se superó el umbral de las 5.000 víctimas mortales a causa de la violencia. En Somalia, a pesar de que se detectó una disminución en los niveles de violencia en comparación con otros años, las hostilidades causaron casi 5.400 muertes en 2024. En Haití, al menos 5.600 personas murieron a causa de la violencia de las bandas armadas que operan en el país. Mientras, en la región de Amhara, en Etiopía, la escalada de violencia costó la vida a casi 6.400 personas.

Durante 2024 también hubo varios conflictos armados que causaron la muerte a más de 10.000 personas. En la región del Sahel Occidental murieron casi 13.000 personas en la zona de la triple frontera de Liptako-Gourma (que incluye Malí, Burkina Faso y el suroeste de Níger). En Sudán, los combates entre las Fuerzas Armadas Sudanenses (SAF) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) dejaron casi 15.600 muertes. En Myanmar la intensificación de los enfrentamientos y las operaciones militares e insurgentes llevaron a la muerte de casi 20.000 personas. **Los conflictos armados con mayores niveles de letalidad en 2024 fueron el de Rusia-Ucrania y el de Israel-Palestina, principalmente por el impacto de la violencia en Gaza.** En el caso de Rusia-Ucrania, algunos balances apuntaban a que durante el año y solo en Ucrania el número de víctimas mortales a causa de la guerra ascendía a casi 73.000. En Gaza, desde el inicio de la campaña israelí tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y hasta finales de 2024 habían muerto unas 46.000 personas. De este total, al menos la mitad perdió la vida en 2024. Sin embargo, este balance se considera conservador teniendo en cuenta el número de personas que seguían sepultadas bajo los escombros, que se estima en al menos 10.000. Además, los resultados de algunas investigaciones apuntaban a que las cifras de letalidad en Gaza se habían subestimado –un estudio de la Universidad de Yale señalaba que podrían ser hasta un 40% más altas– y que si se tienen en cuenta las muertes indirectas en Gaza la cifra estimada de personas fallecidas podría ascender hasta las 186.000 personas. La magnitud e intensidad de la violencia y destrucción en Gaza también queda de manifiesto si se tiene en consideración que se trata de un territorio de una superficie muy limitada –365 kilómetros cuadrados– y que se encuentra entre los más densamente poblados a nivel mundial. O si se compara con las cifras de letalidad provocadas por todos los actores con agendas yihadistas en el continente africano (Boko Haram, filiales del Estado Islámico, filiales

de al-Qaeda, al Shabaab, etc.) en todo el año 2024, que causaron la muerte de alrededor de unas 19.000 personas en todos los países donde tienen presencia: Argelia, Libia, Mali, Burkina Faso, Níger, Benín, Togo, Costa d'Ivoiri, Nigeria, Chad, Camerún, Somalia, Kenya y Mozambique.¹⁶

1.2.2. Impactos de los conflictos armados en la población civil

En 2024 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados, cuyos efectos se interrelacionaron en muchos casos con otras crisis como la emergencia climática, las desigualdades y situaciones de inseguridad alimentaria que agravaron las vulneraciones de derechos en estos contextos. En su informe anual sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en mayo de 2024 y que hace referencia a los hechos acontecidos

en 2023, el secretario general de la ONU alertaba de una situación “rotundamente nefasta”.¹⁷ En un año, el 2024, en que se conmemoraba el 75º aniversario de los Convenios de Ginebra (1949) y 25 años de la primera sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que abordó la protección de la población civil en conflictos, el panorama era desolador por las graves y extendidas agresiones a civiles y el incumplimiento sistemático del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. António Guterres destacó especialmente las consecuencias en civiles en Gaza,

Sudán, Myanmar, Nigeria, Siria, RDC, la región del Sahel, Somalia y Ucrania. En su diagnóstico, el informe de la ONU subrayó que en 2023 cientos de miles de civiles había muerto o sufrido heridas en ataques deliberados o indiscriminados. **De acuerdo con los registros de Naciones Unidas, en 2023 murieron al menos 33.443 civiles en conflictos armados, cifra que supone un aumento del 22% respecto de 2022.** También en comparación con 2022, la proporción de mujeres muertas a causa de la violencia de conflictos armados se multiplicó por dos en 2023, mientras que la de niñas y niños fallecidos en estas circunstancias se triplicó. Siete de cada diez muertes de civiles registradas se produjeron en el marco del conflicto Israel-Palestina –la inmensa mayoría en Gaza–, por lo que este caso fue señalado como el más mortífero para los civiles en 2023. El año 2023 también fue el más letal para la población palestina de Cisjordania y Jerusalén Oriental desde que en 2005 se inició un registro de víctimas.

El informe de la ONU volvió a subrayar que los impactos en la población civil fueron especialmente graves

16 Africa Center for Strategic Studies, “Militant Islamist Groups in Africa Sustain High Pace of Lethality”, 18 de febrero de 2025.

17 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, *Protección de los civiles en los conflictos armados. Informe del secretario general*, S/2024/385, 14 de mayo de 2024.

cuando los enfrentamientos y ataques se produjeron en zonas densamente pobladas y con armas explosivas, por lo que el secretario general exhortó a los Estados a que reforzaran la protección de los civiles en zonas urbanas. Guterres incluyó esta demanda en su propuesta sobre una Nueva Agenda de Paz, publicada en julio de 2023,¹⁸ en la que también incluyó una interpelación a evitar los impactos de los conflictos en los servicios esenciales. Los conflictos armados –insiste el informe– destruyeron o dañaron infraestructura crítica, incluyendo instalaciones clave para el suministro de agua, electricidad y atención de salud, suspendiendo o interrumpiendo la provisión de estos servicios a la población. Impactos de esta naturaleza fueron especialmente ilustrativos en 2023 en casos como el de Gaza, Sudán o Ucrania. El informe de la ONU también advirtió sobre las consecuencias inmediatas y de largo plazo de las minas terrestres y explosivos de guerra, que continuaron afectando a civiles en numerosos contextos, entre ellos Afganistán, Colombia, Libia, Malí, Myanmar, Níger, Nigeria, Siria, RDC, Somalia, Sudán del Sur, Palestina, Ucrania y Yemen.

El análisis de los conflictos armados en 2024 por parte de la Escola de Cultura de Pau constata la continuidad de las preocupantes tendencias señaladas en el informe del secretario general de la ONU. Durante 2024, la población civil siguió viéndose severamente afectada por la violencia de los conflictos armados. Ejemplo de ello fueron casos como el de Ucrania, donde el total de civiles fallecidos y heridos a causa del conflicto aumentó en un 30% respecto a 2023, superando la cifra de 11.000 víctimas civiles en 2024. En Myanmar se estimaba que del total de víctimas mortales por el conflicto armado en 2024 –unas 20.000– aproximadamente un 17% eran civiles. En Haití, en el último trimestre de 2024 bandas armadas lanzaron ataques coordinados y perpetraron algunas de las masacres de civiles más graves en la historia del país. En Haití, pero también en otros contextos como RDC (este) y (este-ADF), se registraron ejecuciones de civiles acusados de colaborar con actores rivales. Grupos armados también intensificaron el uso de la violencia contra población civil como mecanismo para obtener financiación para sus actividades, por ejemplo a través del secuestro de civiles para conseguir el pago de rescates –como en Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste). En Colombia, el ELN anunció que retomaba esta práctica tras haberla suspendido en el marco del acuerdo de alto el fuego. Cabe destacar que las organizaciones armadas irregulares no fueron las únicas ni principales responsables de la violencia contra civiles en numerosos contextos. Así lo ilustra el caso de la Región del Sahel Occidental, donde los actores estatales involucrados en el conflicto –las Fuerzas Armadas de Malí, Burkina Faso, Níger y sus

aliados– fueron responsables de la muerte de un mayor número de civiles que las fuerzas de línea yihadista. En diversos escenarios, la población civil fue objeto de violencia en el marco de operaciones contrainsurgentes bajo acusaciones de complicidad con milicias –como en el caso de Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya). En RCA, las acciones contra población civil tuvieron una dimensión intercomunitaria, vinculada al predominio de un grupo (azandé) en las fuerzas de seguridad que aprovechó su posición para atacar a la comunidad fulani de mayoría musulmana.

Cabe destacar que en algunos contextos el incremento en las cifras de civiles muertos por la violencia armada se atribuyó en buena parte a la utilización de armamento y tecnología militar de alto impacto. Fue el caso de Rusia-Ucrania, donde investigaciones

de organismos de derechos humanos de la ONU señalaron específicamente el impacto de la utilización de bombas planeadoras (*glide bombs*). En el caso de Israel-Palestina, en tanto, se alertó sobre el recurso a la inteligencia artificial para identificar objetivos a atacar, con programas diseñados para afectar a personas en el momento en que se encontraban con sus familias o cuando acudían a auxiliar a otras aparentemente heridas. A estas dinámicas

se añade el extendido uso de drones en numerosos contextos y la denuncia sobre el uso de armas prohibidas en zonas pobladas, como en el caso de la utilización de fósforo blanco en las operaciones israelíes en Líbano, que también usó en Gaza. Los ataques sistemáticos contra población e infraestructuras civiles de Gaza y la adopción de medidas con múltiples consecuencias en civiles llevaron a que durante 2024 se multiplicaran las voces –incluyendo personas expertas y organizaciones de derechos humanos de referencia– que denunciaron a Israel por la comisión de actos constitutivos de genocidio contra la población palestina. Una de las tácticas utilizadas en este contexto fue el recurso al hambre como arma de guerra. Más allá de su uso deliberado, los conflictos armados provocaron y agravaron situaciones de crisis humanitaria y, como advertía el informe del secretario general de la ONU, en 2023 fueron la principal causa de inseguridad aguda. En 2024, Sudán se convirtió en la principal crisis de hambre del mundo como resultado de la destrucción de sistemas agrícolas y cadenas de suministro a causa del conflicto: la mitad de la población del país, casi 26 millones de personas, padecía inseguridad alimentaria aguda.

Los conflictos armados también continuaron teniendo impactos específicos en algunos grupos de población que afrontan situaciones de especial vulnerabilidad. En sus informes periódicos sobre las consecuencias de los conflictos en la población civil, el secretario general de la ONU viene alertando sobre los efectos

18. Más información en UN Political and Peacebuilding Affairs, [A New Agenda for Peace](#).

desproporcionados que padecen las personas de mayor edad, que muchas veces no pueden abandonar las zonas afectadas por las hostilidades y se ven obligadas a afrontar un mayor riesgo de morir, resultar heridas o no tener acceso a servicios básicos o redes de apoyo. Asimismo, se viene advirtiendo sobre las extraordinarias dificultades que afrontan las personas con discapacidad.

Los conflictos armados continuaron teniendo extraordinarios impactos en los niños y las niñas. Según el informe del secretario general de la ONU sobre la situación de los menores en este tipo de contextos, publicado en junio de 2024 y que abarca los hechos acontecidos en 2023, la violencia contra los niños y las niñas ha alcanzado niveles extremos.¹⁹

El diagnóstico apunta a un 21% de incremento en las vulneraciones graves contra menores en conflictos armados, evidenciando un extendido desprecio por los derechos de la infancia, incluyendo el derecho a la vida. El número de muertes y mutilaciones aumentó en un 35% en 2023, especialmente en Gaza, Burkina Faso, RDC, Myanmar, Somalia, Sudán, Siria y Ucrania. Las violaciones más recurrentes fueron la matanza y mutilación, el reclutamiento de menores, la denegación de acceso humanitario y el secuestro de menores. El caso de Israel-Palestina registró un incremento sin precedentes en la escala e intensidad de violaciones graves contra niños y niñas, con un aumento del 155%. En Myanmar se identificó un incremento del 123%, mientras que en Sudán se produjo un alarmante aumento del 480%. Las fuerzas gubernamentales involucradas en los conflictos fueron las principales responsables de las matanzas y mutilaciones de menores, así como de los ataques a escuelas y denegación en la ayuda humanitaria.

El análisis de los hechos de 2024 en los distintos escenarios de conflicto armado ratifica este diagnóstico. En Gaza, por ejemplo, se estima que desde el 7 de octubre de 2023 hasta finales de 2024 habían muerto más de 13.000 niños y niñas a causa de la campaña militar israelí. Diversos casos ratificaron también la persistencia de la conscripción de menores, entre ellos Etiopía (Oromiya), Somalia, RDC (este), Yemen, Colombia o Haití. En este último país, UNICEF advirtió que en 2024 se había producido un aumento del 70% en el número de menores reclutados por los grupos armados –se estima que entre un tercio y la mitad de estas organizaciones estaban integradas por menores. El acceso a la educación de niños y niñas se vio comprometido en numerosos contextos de conflicto armado. Así, por ejemplo, en la región

de Amhara, en Etiopía, el clima general de violencia y los continuos ataques provocaron el cierre de miles de escuelas, dejando a más de cuatro millones de menores sin poder asistir con normalidad a los centros educativos. Otro tanto sucedió en el conflicto en las regiones anglófonas de Camerún, con miles de menores afectados por la interrupción de la escolarización en numerosos momentos del año. En Haití, se estima que la situación de violencia impedía la escolarización de más de 300.000 menores. En Afganistán persistió la prohibición de la educación escolar para las niñas mayores de 12 años. La violencia sexual contra menores también se ha incrementado. El informe del secretario general sobre los menores y los conflictos alertaba que en 2023 los casos verificados de violencia sexual contra niños y niñas se incrementaron en un 25%.

Las niñas se vieron desproporcionadamente más afectadas por esta violencia. En 2024, en casos como el de Haití, se advirtió de un incremento de más de 1.000% en los casos de violencia sexual contra menores.

Respecto a la violencia sexual en los conflictos armados,²⁰ cabe subrayar que a nivel general las investigaciones de Naciones Unidas también han identificado un incremento significativo. Según los datos del informe del secretario general publicado en abril de 2024 y que abarca el año 2023, **el número de casos verificados de violencia sexual relacionada con los conflictos fue un 50% mayor que en 2022.**²¹ El informe reiteró que la proliferación y amplia disponibilidad de armas pequeñas y ligeras constituía un elemento clave para crear las condiciones para perpetrar violencia sexual con impunidad. Entre el 70% y el 90% de los incidentes cometidos en las zonas de las que se disponían datos se identificó el uso de armas pequeñas y ligeras. En 2024, la violencia sexual volvió a estar presente en numerosos contextos, entre ellos Somalia, RCA, RDC (este), Sudán, Haití, Israel-Palestina y Yemen.

Cabe destacar que los conflictos armados también continuaron teniendo entre sus impactos más notorios los desplazamientos forzados de población. **Según el informe de ACNUR publicado en octubre de 2024, y que contempla datos recopilados durante el primer semestre del año, la población desplazada forzosamente –tanto refugiadas como desplazadas internas– superaba ya los 122 millones de personas.**²² Es decir, un número muy superior a la población de España (48 millones) y equivalente a la población de países como Japón (124 millones) o México (128 millones). **Los niveles de desplazamiento forzado han aumentado de manera incesante en los últimos 12 años** y, tal y como indica

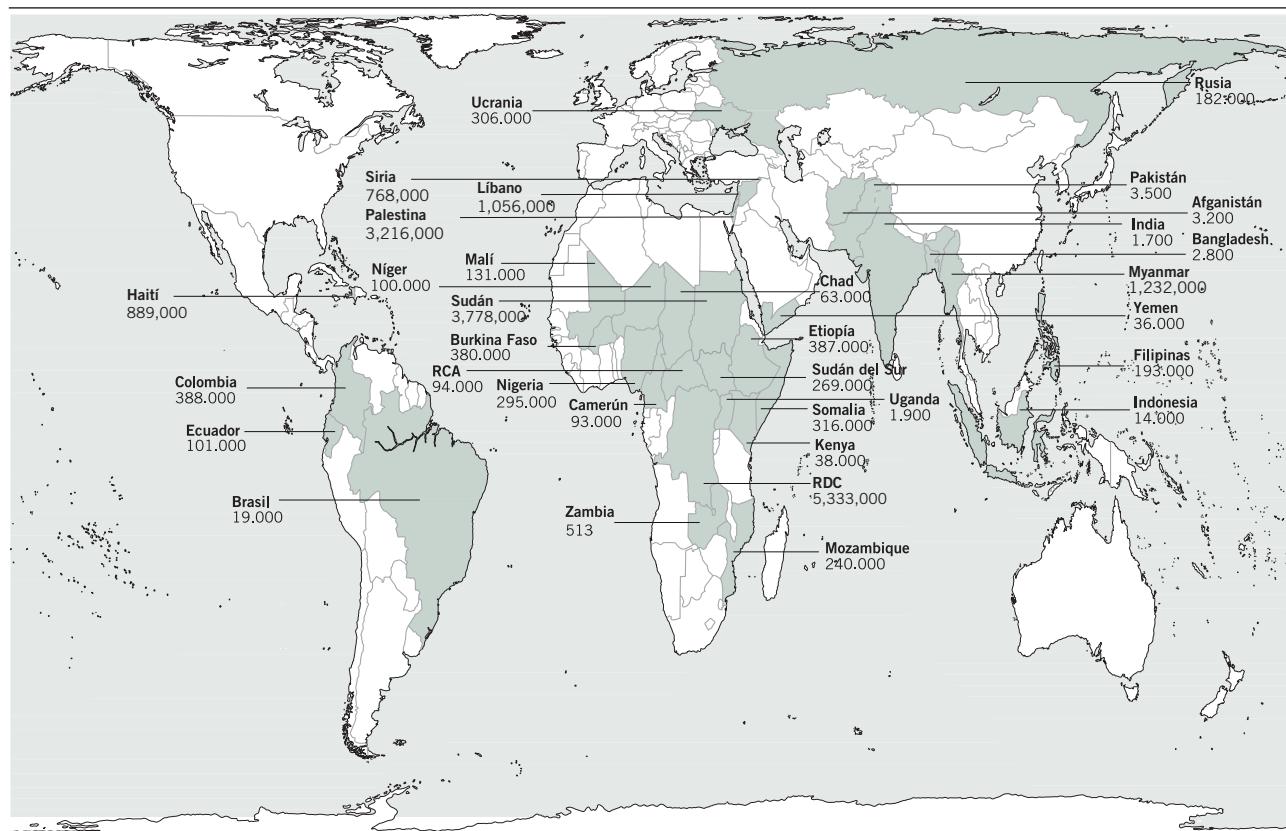
19 Asamblea General y Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, *Los niños y los conflictos armados. Informe del secretario general*, A/78/842-S/2024/384, 3 de junio de 2024.

20 Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

21 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del secretario general*, S/2024/292, 4 de abril de 2024.

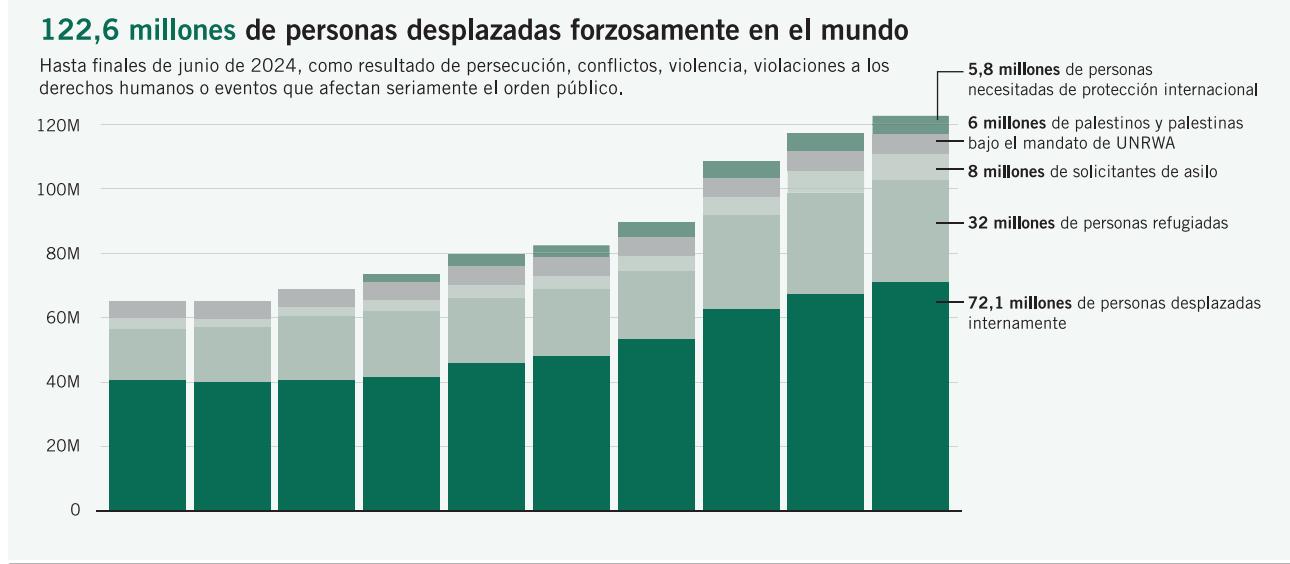
22 UNHCR, *Mid-Year Trends 2024*, 29 de octubre de 2024.

Mapa 1.2. Países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflictos y violencia en 2024



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *Global Report on Internal Displacement 2025*, 13 de mayo de 2025.

Gráfico 1.6. Evolución del desplazamiento forzado a nivel mundial (2015-2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ACNUR.

el gráfico 1.6., la cifra de personas desplazadas por situaciones de conflicto, violencia y persecución se ha más que duplicado desde 2015, año en el cual ya se había superado el umbral del desplazamiento forzoso registrado durante la II Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que el informe de ACNUR recoge solo los datos relativos a la primera mitad del año, se esperaba que el

registro de todo el año 2024 sea superior debido a la intensificación de algunas crisis derivadas de conflictos armados en la segunda mitad del año.

Algunas de las situaciones de desplazamiento que causaron especial preocupación en 2024 fueron las de Sudán –hasta mediados de año se estimaba que la

población desplazada dentro y fuera del país a causa del conflicto ascendía a casi 13 millones–, Myanmar –desde junio de 2023 y hasta mediados de 2024 el número de personas desplazadas internas se aproximaba al millón, mientras que otras 1,4 millones habían huido del país, principalmente a Bangladesh–, RDC –donde la intensificación de las hostilidades en Kivu Norte causaron el desplazamiento forzado de unas 850.000 en el primer semestre, elevando a 8,7 millones el total de personas desplazadas por el conflicto hasta mediados de 2024– y Gaza –donde más de 1,7 millones del total de 2,2 millones de habitantes de la Franja se habían visto forzados a desplazarse, en algunos casos en múltiples ocasiones.

Los datos del informe de International Displacement Monitoring Centre (IDMC) arrojaron conclusiones similares. El décimo informe de la organización sobre desplazamiento forzado interno, que analiza el año 2024, constató la tendencia de aumento.²³ IDMC estimaba que al finalizar el año el número de personas desplazadas ascendía a 83,4 millones, más del doble que hace una década, de los cuales 9,8 millones correspondían a desplazamientos por desastres y 73,5 millones a desplazamientos por conflictos y violencia (10% más que en 2023). Según IDMC, los cinco casos en los que se produjeron mayores niveles de desplazamiento forzado interno por conflictos y violencia en 2024 fueron RDC, Sudan, Palestina, Myanmar y Líbano. El caso de Líbano sirve para recordar que en algunos casos las poblaciones afectadas por un nuevo desplazamiento forzado ya se habían visto obligadas en el pasado a abandonar sus hogares a causa de otros conflictos. Así, durante el segundo semestre de 2024 miles de personas refugiadas sirias radicadas en Líbano tuvieron que abandonar el país y cruzaron la frontera hacia Siria, junto a población libanesa. En años anteriores, población palestina refugiada en Siria durante años también se vio obligada a abandonar ese país por el estallido y agravamiento del conflicto armado.

Finalmente, cabe destacar que este panorama de intensificación de la conflictividad armada y sus graves impactos en civiles se dio en un contexto de incremento de las tensiones geopolíticas a nivel mundial, en un escenario de cambio en el orden global y de creciente militarismo y militarización. En línea con las tendencias observadas en años precedentes, el diagnóstico anual de SIPRI confirmó un incremento sin precedentes del gasto militar a nivel mundial.²⁴ Este gasto alcanzó los 2.718 millones de dólares en 2024, un aumento del 9,4% en términos comparativos con 2023, el incremento anual más pronunciado desde, al menos, el fin de la Guerra Fría.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

Africa Austral

Mozambique (norte)	
Inicio:	2017
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Provincia de Mozambique del Estado Islámico (ISMP)—anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)—, al-Qaeda, Tanzania, Ruanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales “Naparama”
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22% de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incidiendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones, generando el despliegue, a mediados de 2021, de fuerzas internacionales en el país para ayudar al Gobierno mozambiqueño a combatir la insurgencia (Rwanda y la Misión de la Fuerza de Reserva en Mozambique (SAMIM) de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC))

La provincia norteña de Cabo Delgado registró un recrudecimiento del conflicto armado. Durante el año, según datos de ACLED, se reportaron un total de 252

23 IDMC, *2025 Global Report on Internal Displacement (GRID)*, 13 de mayo de 2025.

24 SIPRI, “Unprecedented rise in global military expenditure as European and Middle East spending surges”, SIPRI, 28 de abril de 2025.

eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) que ocasionaron 401 muertes. Estos datos representan un significativo aumento en relación con los 170 eventos y las 261 muertes registradas el año anterior, aunque lejos de los registrados en el año 2022 cuando se contabilizaron 875 muertes o los reportados en los años más mortíferos del conflicto, 1.768 muertes en el año 2021 o 1.717 muertes en 2020. En total, desde el inicio del conflicto armado en diciembre de 2017, ACLED estima que 5.832 personas han perdido la vida por este tipo de eventos.²⁵ La violencia también ha tenido un impacto en el desplazamiento forzado de personas, principalmente en el desplazamiento interno, registrando ACNUR a mediados de año, un total de 577.545 personas desplazadas.²⁶

A lo largo del 2024 la violencia en la provincia de Cabo Delgado se incrementó debido a ataques provocados por el Estado Islámico en la Provincia de Mozambique (ISMP), así como a los esfuerzos de las fuerzas internacionales y nacionales por contrarrestarlos, como las tropas ruandesas o las de la Misión de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional en Mozambique (SAMIM). Entre finales de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024, ISMP llevó a cabo al menos 14 ataques en los distritos de Mocímboa da Praia, Macomia y Muidumbe, resultando en decenas de muertes y el desplazamiento de miles de personas. En febrero ISMP intensificó su ofensiva en varios distritos, principalmente en Chiúre. El avance insurgente se vio facilitado por la confusión generada en el terreno debido a la retirada gradual de las fuerzas internacionales de la SAMIM, que dejó un vacío de seguridad. El 8 de marzo la ONU informó de más de 110.000 personas desplazadas desde que comenzó el repunte de las operaciones del ISMP a finales de diciembre. En los meses siguientes, si bien la violencia continuó, los ataques se ralentizaron, en parte debido al Ramadán, así como a las lluvias torrenciales en el país. Asimismo, su reducción, según analistas locales, se debió a que las fuerzas gubernamentales, de la SAMIM y ruandesas lograron contener el impacto. Posteriormente, el 15 de julio concluyó la retirada de SAMIM tras tres años desplegada en Cabo Delgado. Sin embargo, la persistencia de la inseguridad en la provincia generó que varios actores comprometieran nuevos apoyos en materia de defensa al país: Sudáfrica anunció que mantendría sus tropas (1.500 soldados) hasta finales de año; Rwanda se comprometió a enviar 2.000 soldados adicionales; Tanzania anunció que mantendría su apoyo en la lucha contra el ISMP en sus fronteras; y la UE anunció un apoyo financiero de 20 millones de

euros a las tropas ruandesas en la provincia, en medio de las preocupaciones de algunos Estados miembros sobre el respaldo de Kigali al grupo rebelde congoleño M23. El 1 de septiembre la UE inició una misión de asistencia militar en el país (EUMAM) diseñada para ofrecer formación y asesoramiento a las fuerzas locales y garantizar su autosuficiencia en la lucha contra la insurgencia.

La violencia en la provincia de Cabo Delgado en el norte de Mozambique se recrudeció durante el año

Tras la retirada de la SAMIM se anunció una ofensiva de las fuerzas gubernamentales y las tropas ruandesas contra la insurgencia con el objetivo de desalojarla de bastiones como el bosque de Catupa y las aldeas costeras del distrito de Macomia. En septiembre, las operaciones avanzaron y obligaron al desalojo del ISMP de sus refugios en el distrito de Macomia, aunque continuaron activos en otras áreas, como Nangade. En octubre, los ataques del ISMP disminuyeron significativamente, pero a partir del 17 de noviembre avanzó hacia los distritos de Ancuabe y Chiúre, provocando el desplazamiento de alrededor de 16.000 personas. El mantenimiento de la violencia en Cabo Delgado durante el año generó un aumento de los debates sobre la necesidad de abrir un diálogo con la insurgencia.

Finalmente, y en lo referente a la dimensión de género, paz y seguridad, según recoge el Women, Peace and Security Conflict Tracker²⁷, durante el año se registró un aumento de la violencia de género por parte de grupos armados no estatales en la región de Cabo Delgado, representando las mujeres y las niñas el 98% de las víctimas denunciadas. Tres cuartas partes de las denuncias se debieron a incidentes vinculados con matrimonios forzados y agresiones sexuales.

Africa Occidental

Malí	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Marco Estratégico Permanente para la Defensa del Pueblo de Azawad (CSP-DPA), Frente de Liberación Azawad, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Katiba Macina, Africa Corps (antes Grupo Wagner), Alianza de Estados del Sahel (AES)
Intensidad:	3
Evolución:	=

25 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 10 de febrero de 2025].

26 UNHCR, *Refugee Data Finder* [consultado el 18 de febrero de 2025].

27 Georgetown Institute for Women, *Peace and Security, Women, Peace and Security Conflict Tracker* [consultado el 10 de febrero de 2025].

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuaregs designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país. Si bien en 2015 se logró la firma de un acuerdo de paz en el norte del país entre los grupos árabe-tuareg (CMA y Plataforma), la exclusión de las negociaciones de paz de los grupos con agendas yihadistas ha mantenido la guerra y extendido sus dinámicas a la región central del país.

La ruptura del acuerdo de paz en el norte y la extensión de las acciones de los grupos con agendas yihadistas en el país siguió deteriorando la situación de seguridad en Malí. Según datos del centro de investigación ACLED, durante el año se registraron 1.470 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) en todo el país, aunque concentrados en las regiones norte y centro, que dejaron un balance de cerca de cuatro mil personas fallecidas.²⁸ Estos datos vuelven a mostrar una cierta continuidad con las dinámicas de violencia registradas en los dos años anteriores, aunque con menor mortandad (1.544 eventos violentos y 4.288 personas fallecidas en 2023 y 1.340 eventos y 4.842 muertes asociadas en 2022). El mantenimiento de la inestabilidad y la inseguridad siguió incidiendo en la crisis de **desplazamiento forzado en el país**, estimando ACNUR que a mediados de año había 327.838 personas refugiadas por la violencia y 330.713 desplazadas internas.²⁹

El deterioro de la situación de seguridad en el norte de Malí coincidió con el reinicio de los enfrentamientos armados en agosto de 2023 entre las Fuerzas Armadas malienses –apoyadas por el grupo paramilitar ruso Cuerpo Africano (estructura creada para reemplazar

a la estructura del Grupo Wagner que operaba en el continente africano– y los grupos armados árabe-tuareg signatarios del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí de 2015. Este reinicio de las hostilidades provocó que el 25 de enero, la **Junta Militar maliense declarase oficialmente la finalización inmediata del Acuerdo de Paz de 2015**.³⁰ En respuesta, Mohamed Elmaouloud Ramadane, portavoz de la coalición rebelde Marco Estratégico Permanente (CSP por sus siglas en francés), que aglutina a los grupos signatarios del Acuerdo de Paz de 2015, reconoció el fin del acuerdo de paz y solicitó a sus miembros actualizar sus objetivos político-militares a la luz de la nueva situación. En medio del deterioro de la situación de seguridad y del reinicio de la guerra en el norte, a principios de enero la ONU informó de la retirada total de la misión de la MINUSMA desplegada en el país desde 2013 y de la transferencia de todos sus activos al Estado. Posteriormente, el 6 de marzo la Alianza de Estados del Sahel (AES), conformada por Malí, Burkina Faso y Níger, anunció la creación de una fuerza conjunta antiterrorista para combatir la insurgencia yihadista regional y abordar las necesidades de seguridad compartidas, iniciando el 20 de mayo ejercicios militares conjuntos junto a las tropas chadianas y togoleñas en el oeste de Níger.

Dos de los principales incidentes registrados en el país a lo largo del año se produjeron en el segundo semestre. A finales de julio tuvo lugar en Tinzaouatène, cerca de la frontera con Argelia, una emboscada protagonizada por rebeldes tuareg y miembros de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), vinculado con al-Qaeda, contra fuerzas malienses apoyadas por miembros del grupo paramilitar ruso Cuerpo de África. La emboscada, según anunciaron los rebeldes de la alianza CSP, se saldó con al menos 84 paramilitares rusos y 47 soldados malienses muertos, y decenas de heridos. La coalición rebelde informó que utilizó armas pesadas, aviones no tripulados y suicidas en su emboscada. Tras el incidente, Andriy Yusov, portavoz de la agencia de espionaje militar de Ucrania (GUR), declaró que les facilitaron información a los rebeldes que permitió la operación militar. Estas declaraciones provocaron que la Junta Militar de Malí rompiera relaciones diplomáticas con Ucrania y, posteriormente, hiciera lo mismo la Junta Militar de Níger, acusando a Kiev de dar apoyo a los grupos involucrados en los combates en Malí. El 19 de agosto la AES solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU tomar medidas contra lo que calificó de “acciones subversivas” por parte de Ucrania, acusándolo de apoyar el terrorismo internacional en el Sahel.

A finales de enero, la Junta Militar maliense declaró el fin inmediato del Acuerdo de Paz de 2015

Otro episodio destacado del año lo volvió a protagonizar JNIM el 17 de septiembre en un ataque coordinado en

28 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 10 de febrero de 2025].

29 UNHCR, *Refugee Data Finder* [consultado el 11 de febrero de 2025].

30 Para más información, véase el resumen sobre Malí en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

la capital Bamako, atacando el aeropuerto internacional, la base aérea militar adyacente y la escuela de entrenamiento policial cercana, en lo que resultó el primer ataque de estas características en la ciudad desde el año 2017. Más de 70 personas perdieron la vida y otras 250 resultaron heridas en la ofensiva.

Finalmente, cabe destacar que a finales de noviembre los grupos armados separatistas del Marco Estratégico Permanente –que en abril había sido rebautizada con el nombre de Marco Estratégico Permanente para la Defensa del Pueblo de Azawad (CSP-DPA)– anunciaron que se unían formalmente bajo el paraguas del Frente de Liberación Azawad, cuyo objetivo declarado es luchar por la independencia del territorio de “Azawad”.

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La secta de inspiración yihadista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se amplió a la cuenca del Lago Chad, afectando también a territorios fronterizos de los países vecinos con la región nigeriana: la región de Extrème Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad. Desde mediados de 2016 Nigeria, Níger, Chad y Camerún han desarrollado una estrategia regional de presión militar sobre BH a través de la implementación de una fuerza militar conjunta regional (MNJTF), lo que ha puesto de manifiesto la resiliencia del grupo y también la falta de voluntad de las autoridades políticas y militares

nigerianas para hacer frente a la situación, además de las deficiencias de las Fuerzas Armadas nigerianas, con graves problemas de corrupción internos. BH se ha dividido en cuatro facciones: Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (JAS), facción liderada por Abubakar Shekau, líder de BH desde 2009; Ansaru, alineada con al-Qaeda en 2012, Islamic State West Africa Province o Islamic State in West Africa (ISWAP o ISWA), escindida de JAS en 2016; y finalmente Bakura, escisión de ISWAP en 2018 que posteriormente se aproximó a Shekau en oposición a ISWAP. La muerte del líder de BH a manos de ISWAP en 2021 desató una escalada de los enfrentamientos entre ambos grupos por la supremacía en la zona.

Durante el año continuaron las actividades de las dos principales facciones de Boko Haram (JAS³¹ y Estado Islámico de la Provincia de África Occidental, ISWAP) y las acciones contrainsurgentes en la región de la cuenca del Lago Chad, que comprende el noreste de Nigeria (principalmente en el estado de Borno), la región de Extrème Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad. A pesar de un leve incremento de las acciones armadas, **las cifras de víctimas mortales fueron similares a las de los años anteriores. Persistieron los enfrentamientos entre ambas facciones, en un intento de conseguir la supremacía en la zona**. La región de Nigeria que acumuló más víctimas mortales como consecuencia de las acciones de las ramas de BH continuó siendo Borno, seguida de la provincia camerunesa de Extrème Nord, donde se produjeron 2.137 y 793 víctimas mortales, respectivamente, según el centro de investigación ACLED. De acuerdo con ACLED, en 2024 se constataron 3.650 víctimas mortales en el conjunto de la región de la cuenca del Lago Chad, cifra que se redujo ligeramente respecto a 2023 (3.828), 2022 (3.782) y 2021 (4.163). Durante 2024 se produjeron 1.521 eventos de violencia organizada, cifra superior a los 1.310 eventos violentos de 2023, y notablemente superior a los 1.002 de 2022 y a los 982 de 2021.³² Cabe destacar que, por primera vez, **la mayoría de estos hechos violentos tuvieron lugar en la región camerunesa de Extrème Nord** (789), por encima del estado nigeriano de Borno (528), epicentro del conflicto. Cabe destacar que continuó la tendencia a la reducción de las acciones de BH y ISWAP en otros estados del centro-norte del país. Solo se produjeron víctimas mortales vinculadas a acciones de grupos de corte yihadista en los estados de Yobe (130), Níger (60) y Kaduna (54), mientras que en Adamawa y Bauchi no se produjeron eventos violentos vinculados con la insurgencia.

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)³³ señaló que las víctimas mortales vinculadas a las acciones de las diferentes facciones insurgentes de corte yihadista se redujeron en un 4% respecto al año 2023 (3.627 víctimas mortales), lo que da continuidad a

31 El grupo armado JAS corresponde a la facción del histórico líder de BH, por lo que comúnmente se le conoce como BH. En adelante, se utiliza el término BH para hacer referencia a JAS.

32 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 31 de enero de 2025].

33 Africa Center for Strategic Studies, “*Militant Islamist Groups in Africa Sustain High Pace of Lethality*”, ACSS, 18 de febrero de 2025.

la disminución del 27% observada en esta región desde 2020. Sin embargo, la cuenca del lago Chad sigue siendo la tercera zona más violenta y letal del continente, representando el 21% de todos los eventos violentos y el 19 % de todas las muertes relacionadas con grupos insurgentes de corte yihadista. El noreste de Nigeria sigue siendo el foco de la actividad de estos grupos en la cuenca del Lago Chad, representando el 66% de todas las muertes en la zona. En los últimos años, se ha producido un marcado aumento de eventos violentos en el norte de Camerún, incluyendo un incremento del 51% durante 2024. Según ACSS, Boko Haram e ISWAP estuvieron vinculados a un número aproximadamente igual de eventos violentos y muertes en 2024, continuando una tendencia observada desde 2022. Ambos grupos continúan luchando por el control del territorio, los recursos y los combatientes, lo que resulta en un elevado número de víctimas entre ellos, hacia la población civil y los cuerpos de seguridad vinculados a la operación regional MNJTF. Ansaru, facción de BH ubicada en el norte de Nigeria, estuvo prácticamente ausente.

A pesar de la intensidad de la violencia y de la actividad insurgente contra la población civil y los cuerpos de seguridad, el gobernador del estado de Borno afirmó en diciembre que las operaciones militares habían reducido a BH en un 90%. Durante todo el año los cuerpos de seguridad informaron de numerosas pérdidas en las filas insurgentes como consecuencia de operaciones militares (con uso de artillería y ataques aéreos) y de la destrucción de bases y feudos de ambos grupos en los alrededores del Lago Chad y del bosque de Sambisa (Borno), operaciones en las que se liberaron a centenares de personas cautivas. A pesar de las numerosas pérdidas, ambos grupos tuvieron la capacidad de reorganizarse, lo que pone de manifiesto su resiliencia, según el ACSS. Cabe destacar, entre otras, la muerte de un centenar de insurgentes de ISWAP en bases cercanas a las localidades de Bama, Ngala y Marte y (estado de Borno, las dos últimas en el extremo noreste del estado, muy cercanas a la triple frontera con Níger, Camerún y Chad) en diversas acciones a principios de junio, y de un comandante de ISWAP junto con 50 combatientes en una operación militar a finales de octubre en Marte. En enero, ISWAP reivindicó su primer ataque fuera de la cuenca del Lago Chad desde abril de 2022 al perpetrar un ataque contra cuatro personas de confesión cristiana en el estado de Nasarawa, cerca de Abuja, en respuesta con la situación en Gaza. A finales de 2024, ACNUR cifró en prácticamente 3,1 millones el número de personas desplazadas internas en el conjunto de la región de la cuenca del Lago Chad y en alrededor de 324.000 las personas refugiadas y demandantes de asilo.³⁴

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacionales
Actores:	Burkina Faso, Mali, Níger, Costa d'Ivoire, Togo, Benín, Alianza de Estados del Sahel (AES), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia, Africa Corps (antes Grupo Wagner)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La región occidental del Sahel (norte y centro de Malí, norte de Burkina Faso y suroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011. A todo esto, se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región, afectando también a países del Golfo de Guinea (Costa d'Ivoire, Togo, Benín). Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

Un año más la situación de inseguridad en la región de la triple frontera de Liptako-Gourma (que incluye Malí, Burkina Faso y el suroeste de Níger, regiones de Tillabéri, Dosso y Tahoua) continuó siendo crítica. Según datos recopilados por ACLED, durante el año los niveles de violencia se mantuvieron similares a los del año anterior, contabilizándose 3.067 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos

34 ACNUR, *Operational Data Portal*, 20 de enero de 2025.

improvisados) –3.504 en 2023– que causaron la muerte a 12.944 personas (frente a las 13.634 registradas en 2023). Estos datos, si bien muestran una ligera reducción con relación al año anterior, siguen estando lejos de los registrados en años previos (9.702 personas asesinadas en 2022 o 5.279 de 2021). Por país, un año más Burkina Faso y Malí presentaron cifras de eventos violentos similares (1.311 y 1.470 respectivamente), sin embargo, nuevamente en Burkina Faso la letalidad de estos hechos volvió a ser muy superior (7.518 muertes frente a las 3.999 registradas en Malí), concentrando el 58% de todas las muertes provocadas por el conflicto en la región. Por su parte, en las regiones del suroeste de Níger (Tillabéri, Dosso y Tahoua) el impacto de la violencia siguió siendo menor, comparativamente hablando, registrando 286 eventos que causaron 1.427 víctimas mortales.³⁵ También los países limítrofes del Golfo de Guinea, principalmente Benín y Togo, siguieron sufriendo ataques violentos en las regiones fronterizas con Malí y Burkina Faso. En Benín, el número de víctimas mortales en 2024 (153) fue aproximadamente el mismo que en 2023 (160), mientras que en Togo se registró un aumento del 45% en las muertes (pasando de 66 a 96).

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS) volvió a señalar a **la región como el epicentro de la violencia perpetrada por actores con agendas yihadistas en todo el continente**.³⁶ En 2024 la zona concentró más de la mitad de todos los eventos violentos generados por estos grupos armados en África y las muertes se triplicaron con relación a las registradas en el año 2020. Nuevamente el principal actor perpetrador de violencia fue la coalición Jama'at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), a quien se le atribuyen el 85% de todos los eventos violentos y las muertes vinculadas a estos grupos en el Sahel, en particular al Frente de Liberación de Macina y Ansaroul Islam. El otro actor es el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS), responsable del 15% de los eventos violentos y las muertes en la región.³⁷ Por otro lado, ACSS también denunció que las fuerzas de seguridad en el Sahel, incluidas las milicias aliadas y las fuerzas del grupo paramilitar ruso Cuerpo Africano, han intensificado los ataques contra civiles. En los últimos tres años (2022-2024) los ataques han aumentado un 76%, provocando en total más de 4.740 civiles asesinados. **En 2024, estos actores estatales en el Sahel y sus aliados habían sido responsables de más muertes de civiles (2.430) que los grupos yihadistas (2.050)**.

Como consecuencia del aumento de la violencia se mantuvo la tendencia del **desplazamiento forzado de personas**. Las estimaciones más fiables indicaron que habría más de 4 millones de personas desplazadas de

Burkina Faso, Malí y Níger. A mediados de año, ACNUR estimó que el número de personas refugiadas producto de la violencia en cada país era el siguiente: 327.838 personas de Malí, 88.372 de Burkina Faso y 27.237 de Níger (incluyendo en este último todas las personas refugiadas del país). Por otro lado, el IDMC a finales de 2023 estimaba que más de dos millones de personas se encontraban desplazadas internas en Burkina Faso, 330.713 en Malí y 407.430 en todo el territorio de Níger, que también incluye las personas desplazadas por el conflicto armado del Lago Chad.³⁸ Por otro lado, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se prevé que 25,8 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria en 2025.³⁹

A lo largo del año, las tres juntas militares que gobiernan Malí, Níger y Burkina Faso **prosiguieron con su política de reconfiguración de alianzas en la región**. En enero, los tres países emitieron una declaración conjunta acusando a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de doblegarse ante “potencias extranjeras” y de aplicarles “sanciones ilegales, ilegítimas, inhumanas e irresponsables”, anunciando su salida inmediata del organismo regional, hecho que ratificaron en julio. En marzo anunciaron la creación de una fuerza militar conjunta en el marco de la Alianza de Estados del Sahel (AES) que habían conformado en septiembre de 2023. AES inició el 20 de mayo los primeros ejercicios militares conjuntos junto a las tropas chadianas y togoleñas en el oeste de Níger. Por otro lado, las tensiones entre las juntas militares y los exsocios occidentales se mantuvieron, provocando la no renovación de la misión de entrenamiento militar de la UE en Malí (EUTM Malí) que concluyó el 18 de mayo y el cierre de la Misión de Asociación Militar en Níger (EUMPM) el 27 de mayo. Níger también anunció la ruptura del acuerdo de seguridad que mantenía con EEUU desde 2012 que incluyó la retirada de las tropas estadounidenses en el país (alrededor de un millar de militares) a mediados de septiembre. De forma paralela, las juntas militares prosiguieron con la generación de alianzas de seguridad y defensa con otros actores, principalmente Rusia. En abril, Níger formalizó un acuerdo de colaboración militar con Rusia e inició conversaciones con China para lograr un acuerdo de cooperación en materia de defensa. Sin embargo, la retirada de las tropas occidentales y la mayor presencia rusa en la región no ha logrado reducir la violencia provocada por los grupos yihadistas, principalmente por JNIM, que, según un informe del Equipo de Monitoreo de Sanciones de la ONU, se ha convertido en “la amenaza más significativa en el Sahel”.⁴⁰ El informe

35 ACLED, [ACLED Explorer](#) [consultado el 11 de febrero de 2025].

36 Africa Center for Strategic Studies, [Africa's 2024 Security Trends in 10 Graphics](#), 17 de diciembre de 2024.

37 Africa Center for Strategic Studies, [Militant Islamist Groups in Africa Sustain High Pace of Lethality](#), 18 de febrero de 2025.

38 UNHCR, [Refugee Data Finder](#) [consultado el 11 de febrero de 2025].

39 Consejo de Seguridad de la ONU “Actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel. Informe del Secretario General”, S/2024/871, 2 de diciembre de 2024.

40 Consejo de Seguridad de la ONU, “Carta de fecha 19 de julio de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados”, S/2024/556, 22 de julio de 2024.

también advierte que el Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP), que opera principalmente en Nigeria, ha crecido en importancia como en capacidad, centrándose ahora también su atención en apoyar al Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) que opera en Malí y las regiones fronterizas de Burkina Faso y Níger.

África del Este

Etiopía (Amhara)	
Inicio:	2023
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Amhara, milicia amhárica Fano, grupo armado oromo OLA
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Durante las movilizaciones entre 2015 y 2018 que llevaron al poder a Abiy Ahmed, de la comunidad oromo, se produjo un proceso de reactivación del nacionalismo amhara, grupo étnico que se ha sentido marginado dentro de esta fase de transformación del país y que vive mayoritariamente en la región de Amhara, aunque está presente en otras regiones del país. La escalada de la violencia y la represión en 2023 se remonta al acuerdo de paz firmado en 2022 por el Gobierno Federal y el Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) para poner fin a la guerra (2020-2022). El acuerdo suscitó preocupación en la comunidad amhara, excluida de las conversaciones a pesar de que las milicias nacionalistas Fano y las fuerzas especiales amhara –un grupo paramilitar vinculado al gobierno regional– lucharon del lado del Ejército Federal, al igual que Eritrea –que también fue excluida del acuerdo. Todos los actores implicados cometieron crímenes contra la humanidad contra la población de la comunidad tigré durante el conflicto en Tigré. La percepción de traición se extendió en la región de Amhara, especialmente después de que Abiy anunciará planes para desmantelar las fuerzas especiales presentes en cada una de las 11 regiones étnicas de Etiopía. El primer ministro propuso que las fuerzas especiales, que suman decenas de miles de combatientes, se integraran en el Ejército y la policía federales para fomentar la unidad interétnica y evitar que las fuerzas regionales fueran instrumentalizadas políticamente y se vieran arrastradas a conflictos, como fue el caso en Tigré. Pero muchos amharas vieron su plan como una señal de alerta, argumentando que los dejaría vulnerables a los ataques del vecino Tigré, sus rivales históricos en Etiopía, y también de la comunidad oromo, que forman el grupo étnico más grande de Etiopía, seguidos por los amhara. El grupo armado oromo OLA también ha sido acusado de atrocidades generalizadas contra los amharas en Oromiya, lo que genera temores de que quiera expulsarlos de la región. Aunque algunas de las fuerzas especiales amhara aceptaron integrarse en el Ejército y la Policía, muchos desertaron y se unieron a las milicias Fano. Además, este movimiento nacionalista amhara aprovechó la guerra en la región de Tigré para, a través de estas milicias paramilitares, recuperar y ocupar dos territorios en disputa histórica que forman parte de Tigré

(Tigré Occidental y Meridional, llamados por el nacionalismo amhara Welkait-Tsegede y Raya, respectivamente) donde se estableció una administración provisional amhara que el Gobierno Federal declaró ilegal al finalizar el conflicto.

El conflicto armado iniciado en abril de 2023 y agravado a partir de agosto de ese año en la región de Amhara continuó su escalada y adquirió un mayor grado de complejidad durante 2024. Según datos de ACLED,⁴¹ durante el 2024 se registraron 1.444 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Amhara que costaron la vida a 6.383 personas. Estas cifras son notablemente superiores a las registradas el año anterior (1.730 víctimas mortales en 575 eventos violentos) cuando se produjo el inicio del conflicto armado. Esta cifra no incluye las víctimas de los ataques en la región vecina de Oromiya.

La ofensiva que tuvo lugar durante 2024 por parte de los cuerpos de seguridad etíopes convirtió a esta región en la más afectada por la violencia del conjunto del país y en uno de los conflictos armados más graves del continente africano. Las operaciones contrainsurgentes no solo fueron dirigidas contra las milicias amhara Fano, sino también contra la población civil, acusada de complicidad con estas milicias. Las acciones bélicas alcanzaron por primera vez las principales ciudades de la región, como Bahir Dar, a finales de febrero. El Gobierno federal enroló a milicias de otras comunidades de la región en su lucha contra las milicias Fano, como la comunidad agaw en la zona de Gondar Oeste, lo que contribuyó a agravar la situación, debido a que generó tensiones entre ambas comunidades y ataques entre sus respectivas milicias. Aunque en un inicio en 2023 los enfrentamientos se habían concentrado en la zona de Gojjam Oeste y Gondar⁴² posteriormente se fueron expandiendo a otras áreas, principalmente Gojjam Este y Gojjam Norte; Wollo Sur y Wollo Norte (afectando a Lalibela, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO); Shewa Norte; y en Gondar Oeste, Central y Norte. En septiembre las milicias Fano intensificaron sus ataques contra los cuerpos de seguridad, en especial en Gondar (y sus alrededores), la cuarta ciudad del país con más de 350.000 habitantes. Diferentes organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos alertaron de la escalada de la situación. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, medios de comunicación internacionales e incluso la Comisión Etíope de Derechos Humanos documentaron violaciones de derechos humanos y crímenes atroces cometidos por las fuerzas gubernamentales etíopes en la región de Amhara. Estas violaciones incluyen ataques contra escuelas, centros de salud y viviendas de población civil, así como la muerte de civiles mediante continuos ataques con drones. El clima general de violencia y los

41 ACLED, [ACLED Explorer](#) [consultado el 31 de enero de 2025].

42 Ethiopia Peace Observatory, [Amhara conflict: Fano insurgency](#), ACLED, 20 de agosto de 2024.

ataques provocaron el cierre de miles de escuelas en toda la región, dejando a cuatro millones de menores sin poder asistir con normalidad a los centros educativos.

Asimismo, personas del grupo étnico amhara sufrieron detenciones, tortura, tratos inhumanos, desapariciones forzadas y asesinatos. Entre finales de septiembre y principios de octubre, el Ejército etíope y las fuerzas de seguridad regionales de Amhara detuvieron arbitrariamente a miles de personas en la región y las llevaron a cuatro centros de detención masiva. Entre las personas detenidas se encontraban académicos y miembros del poder judicial, incluyendo jueces y fiscales. Las detenciones se produjeron en medio de duros combates entre el Ejército etíope y milicias Fano en importantes localidades como Woldia (zona Wollo Norte) y Dessie (zona Wollo Sur). En enero de 2025, las autoridades liberaron a cientos de personas, entre ellas tres jueces, mujeres, ancianos y personas con problemas de salud crónicos, aunque miles de personas siguieron detenidas arbitrariamente.

Por último, se constataron acciones armadas de las milicias Fano en las zonas fronterizas con la región de Oromiya y en el interior de esta durante el año. En junio se produjeron los primeros enfrentamientos directos entre las milicias Fano y el grupo armado oromo OLA en la zona de Shewa Norte, lo que también contribuyó a complejizar el conflicto. A esto se añadieron tensiones y enfrentamientos relativos a la disputa territorial entre Tigré y Amhara en las zonas de Tigré Occidental y Meridional. En ambos territorios se desmanteló la administración local de Amhara, pero se fue posponiendo el reasentamiento de la población desplazada tigrayana debido a la inseguridad, ya que también aumentaron los enfrentamientos entre las fuerzas regionales de Tigré y milicias amhara. Incluso se produjeron choques puntuales en Addis Abeba entre los cuerpos de seguridad etíopes y las milicias Fano.

Cabe destacar que se produjo un intento de explorar posibles contactos entre las partes que no fructificó. A finales de junio líderes militares, federales y regionales de Etiopía celebraron una conferencia de paz en la capital regional, Bahir Dar, que resultó en la formación del llamado Consejo Regional de Paz, compuesto por 15 personas, con el apoyo del Gobierno Federal, y con el encargo de explorar conversaciones de paz con las milicias Fano. En julio algunas facciones de las milicias Fano crearon la Organización Popular Amhara Fano y escogieron como líder al periodista Eskinder Nega, que había manifestado la necesidad de crear un frente unificado antes de que se produjeran posibles conversaciones con el Gobierno. Sin embargo, estas iniciativas no prosperaron y no se tuvo informaciones de contactos entre las partes.

Etiopía (Oromiya)	
Inicio:	2022
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA), milicia amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos secesionistas desde los años setenta. El movimiento político-militar Oromo Liberation Front (OLF) surgió entre 1973 y 1974 en la región de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participaron junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, en 1992 el OLF se desmarcó del Gobierno de coalición del EPRDF e inició una rebelión contra este y contra otros movimientos nacionalistas oromos exigiendo la independencia de la región. En paralelo, Oromiya ha vivido un ciclo de protestas –iniciadas por el movimiento estudiantil en 2014 contra el régimen etíope debido a reivindicaciones vinculadas a la percepción de marginación del pueblo oromo– que fueron fuertemente reprimidas y que causaron miles de víctimas mortales. La movilización contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn en 2018 y la designación de Abiy Ahmed, de la comunidad oromo, quien emprendió una serie de reformas políticas encaminadas a la unidad y la reconciliación nacional, alcanzando un acuerdo de paz con el OLF y otros grupos político-militares lo que facilitó su retorno del exilio. Además, el nacionalismo oromo asumió que la llegada al poder de Abiy Ahmed, de su misma comunidad, significaría un impulso a la autonomía de la región; no obstante, Abiy se ha decantado por un Estado más centralizado en lugar de promover el federalismo étnico. Además, aunque el OLF se convirtió en partido político, su Ala militar, el Oromo Liberation Army (OLA), rechazó el acuerdo e inició una nueva rebelión, lo que llevó al Gobierno a designarla en mayo de 2021 como grupo terrorista. Desde entonces la violencia ha ido en aumento. También cabe destacar los recurrentes enfrentamientos entre comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo en las zonas fronterizas entre Oromiya y Somalí por la competencia de recursos y la demarcación de los territorios de ambas comunidades, donde la emergencia climática y la intervención represiva del cuerpo policial gubernamental Liyu contribuye a exacerbar la situación.

El conflicto armado que padece la región de Oromiya siguió activo durante el año. Las principales dinámicas de violencia hacían referencia a los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad federales y el Ejército de Liberación Oromo (OLA, denominado por el Gobierno como OLF-Shane), en diferentes partes de la región, y por otra parte, a la violencia cometida contra la

población civil perpetrada por los cuerpos de seguridad federales, el OLA y las milicias Fano, de la comunidad amhara. Esta última violencia se concentró en las áreas occidentales y norte de la región, donde el OLA tiene una mayor presencia e influencia, aunque ninguna zona escapó del conflicto.⁴³ A la vez, el Gobierno entrenó a milicias locales para combatir al OLA. Todos los actores armados implicados en el conflicto llevaron a cabo la conscripción forzosa de jóvenes, incluyendo menores, para nutrir sus filas, según un informe de la Comisión Etiope de Derechos Humanos publicado en diciembre, y en especial el Ejército, que habría llevado a cabo centenares de detenciones arbitrarias de jóvenes para alistarlos a las milicias que combaten al OLA, y habría extorsionado a las familias como condición para su liberación.⁴⁴ Amnistía Internacional y HRW también señalaron al Gobierno por los graves abusos que estaban cometiendo los cuerpos de seguridad federales y los cuerpos de seguridad y milicias de la región en persecución del OLA y que estarían teniendo graves repercusiones sobre la población civil. ACLED⁴⁵ señaló que cerca de seis millones de personas se vieron expuestas al conflicto armado durante el año, siendo las zonas más afectadas Shewa Norte, Shewa Oeste, Wollega Este y Horo Guduru Wollega. Según datos de la organización,⁴⁶ durante el 2024 se registraron 847 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Oromiya que costaron la vida a 3.332 personas, cifras superiores a las registradas en 2023, cuando se produjeron 604 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región, en los que murieron 1.716 personas. Sin embargo, estas cifras continúan siendo inferiores a las del año 2022, en el que se cometieron menos eventos violentos (707), aunque murieron un mayor número de personas (4.533).⁴⁷

Durante el año el Gobierno intentó debilitar al OLA haciendo llamamientos de rendición o de reintegración de sus combatientes e intentando explotar las divisiones existentes en el seno del liderazgo del OLA, que se evidenciaron en diversas ocasiones durante el año. En este sentido, en octubre el presidente de Oromiya, Shimelis Abdisa, indicó la posibilidad de celebrar conversaciones con una facción de OLA, encabezada por Jaal Sagni Negasa, que se había separado de la

insurgencia del OLA a finales de septiembre. Estos contactos fructificaron y el 3 de diciembre el Gobierno federal anunció un acuerdo con esta facción escindida del OLA, del que no trascendieron detalles.⁴⁸ Cabe destacar que durante el año, especialmente en agosto y noviembre, se produjeron movilizaciones ciudadanas en diferentes localidades de la región que reclamaban el fin de la violencia y llamamientos al diálogo, que fueron calificadas por parte del OLA como iniciativas orquestadas por el Gobierno, según el ICG.⁴⁹ Estas movilizaciones, en las que participaron líderes comunitarios, representantes gubernamentales locales y ancianos líderes tradicionales, tuvieron lugar en las zonas de Shewa Norte,⁵⁰ Shewa Este, Shewa Oeste, Wollega Oeste, Kelem Wollega, Arsi y Guji.⁵¹

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, Türkiye, ATMIS, EUNAVFOR Somalia (Operación Atalanta), Combined Task Force 151, al-Shabaab, Estado Islámico en Somalia (ISS o ISIS-Somalia)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social

43 Ethiopia Peace Observatory, "Oromia. Regional Profile", ACLED, 8 de agosto y 19 de noviembre de 2024.

44 Addis Standard, "News: EHRC reports forced conscription, arbitrary detentions and extortion in Oromia with victims including minors as young as 11", Addis Standard, 6 de diciembre de 2024.

45 ACLED, "Unrest in Amhara and Oromia threatens Ethiopia's stability", ACLED, 13 de diciembre de 2024.

46 ACLED, ACLED Explorer [consultado el 31 de enero de 2025].

47 Estas cifras deben tomarse con cautela ya que combinan violencia directamente vinculada con el conflicto armado, además de actos de represión de movilizaciones sociales contra la actuación gubernamental y actos de limpieza étnica contra la población civil. En esta cifra también se incluyen actos de violencia contra la minoría de la comunidad amhara presente en la región de Oromiya perpetrados por elementos del gobierno regional de Oromiya y del OLA, así como enfrentamientos entre milicias de carácter comunitario de las comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo que cada año se cobran cientos de víctimas mortales, por lo que existen dificultades relevantes de cara a precisar el número real de víctimas mortales vinculadas a este conflicto armado.

48 Véase el resumen de Etiopía (Oromiya) en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

49 International Crisis Group, Ethiopia Crisis Watch November, International Crisis Group, noviembre de 2024.

50 Addis Standard, "News: Public rallies in North Shewa Zone call for peace amid conflict in Oromia region," Addis Standard, 27 de agosto de 2024.

51 Ethiopia Peace Observatory, Ethiopia Weekly Update, ACLED, 19 de noviembre de 2024.

somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y keniatas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

El conflicto armado en Somalia continuó siendo uno de los más graves del continente africano. Según ACLED, la cifra de letalidad ascendió a 5.396 víctimas mortales en 2024 y se contabilizaron 2.712 eventos violentos.⁵² Este balance supuso una reducción respecto a la tendencia ascendente de los años 2023 (7.912 víctimas mortales) y 2022 (6.418 víctimas mortales), aunque siguió siendo superior a las cifras de 2021 (3.286) y 2020 (3.236). Las regiones más afectadas siguieron siendo las situadas en el centro-sur del país (Galgaduud, el Bajo Juba, Shabelle Bajo y Shabelle Medio, Mudug y Banadir), aunque el conjunto del país se vio impactado por el conflicto armado.

Por su parte, el Africa Center for Strategic Studies (ACSS)⁵³ también señaló que Somalia había experimentado una disminución del 41% en las muertes en 2024 respecto a 2023, lo que redujo el número de víctimas mortales (4.482) a los niveles anteriores a 2022, cuando el Gobierno Federal había lanzado una importante ofensiva contra al-Shabaab que había provocado una escalada del conflicto. Sin embargo, el número de víctimas mortales en 2024 fue un 72% mayor que en 2020. La disminución de los incidentes violentos y las muertes relacionadas con al-Shabaab en Somalia se reflejó en las zonas fronterizas con Kenia, donde se registró una disminución del 11% en la actividad violenta relacionada con al-Shabaab (con 109 eventos violentos) y una disminución del 32% en las muertes (situándose en 188) en comparación con 2023. Según el ACSS, el Estado Islámico en Somalia (ISS, o ISIS-Somalia) se ha convertido en un canal financiero cada vez más importante para la red mundial de ISIS en los últimos años, tras haber establecido un centro neurálgico para sus operaciones en la región de Puntlandia, en el noreste de Somalia. Esto ha venido acompañado de una

afluencia de combatientes extranjeros procedentes del norte de África, el Golfo Pérsico y África Oriental. ISS ha mantenido un perfil bajo en Somalia en los últimos años, salvo algunos enfrentamientos con las fuerzas de al-Shabaab en las ciudades costeras de Bossaso y Qandala, en Puntlandia. Los ataques aéreos estadounidenses contra las bases de ISS a mediados de 2024 y principios de 2025 tuvieron como objetivo desmantelar esta red. El Grupo de Expertos de la ONU también investigó la evolución de ISS,⁵⁴ en particular el resurgimiento de la oficina de Al-Karrar como centro administrativo y financiero clave para ISIS a nivel mundial. La presencia del ISS se concentraba en la región de Bari (Puntlandia), donde se intensificaron la extorsión y el contrabando y se registró una afluencia de combatientes extranjeros, lo cual plantea nuevos riesgos en materia de seguridad para Somalia y para la región.

Durante el año 2024 se produjo una reducción del número de víctimas mortales en el conflicto en Somalia, aunque continuó siendo uno de los más graves del continente africano

Por otra parte, el Grupo de Expertos de la ONU en Somalia señaló en septiembre que al-Shabaab siguió mostrando resiliencia ante las operaciones militares del Gobierno. Al-Shabaab siguió llevando a cabo ataques contra el Gobierno, la misión de transición de la UA en Somalia (ATMIS) y las fuerzas internacionales, así como contra civiles y contra la comunidad empresarial, incluso dentro de las zonas protegidas de Mogadiscio. Al-Shabaab mantiene una sólida base financiera gracias a sus muy sofisticadas estrategias comerciales. Según la ONU, el grupo explota medios tanto lícitos como ilícitos para generar ingresos para sus operaciones, como los puestos de control, la extorsión de empresas y los impuestos forzados, y también utiliza empresas y cuentas de terceros. El Grupo recibió información según la cual los ingresos financieros totales de al-Shabaab para 2023 superaron los 150 millones de dólares. **El 2 de agosto al-Shabaab perpetró el ataque más grave contra civiles de los últimos dos años, que tuvo como objetivo al restaurante Beach View de la playa de Lido, en Mogadiscio**, causando 37 víctimas mortales civiles y 200 heridos. Cabe destacar también la persistencia de enfrentamientos entre milicias de clanes y entre milicias y tropas federales en diferentes partes del país durante todo el año, lo que contribuyó a debilitar la lucha contra al-Shabaab.

El conflicto, sumado a la sequía y las inundaciones, fenómenos vinculados en mayor o menor medida al cambio climático, provocó que 4,4 millones de personas (el 22% de la población) se enfrentaran a graves niveles de inseguridad alimentaria. Se calculaba que a finales de 2024 había en Somalia 6,9 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria,

52 Esta cifra tiene en cuenta los eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en el conjunto de Somalia, excluyendo las cinco regiones que conforman Somalilandia (Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sool, Sanaag). Esta cifra se incrementaría a 2.803 eventos violentos y 5.541 víctimas mortales para 2024 para el conjunto de Somalia. ACLED, [ACLED Explorer](#) [consultado el 31 de enero de 2025].

53 Africa Center for Strategic Studies, [Militant Islamist Groups in Africa Sustain High Pace of Lethality](#), 18 de febrero de 2025.

54 Consejo de Seguridad de la ONU, [Carta de fecha 17 de septiembre de 2024 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 2713 \(2023\)](#) relativa a Al-Shabaab por el Grupo de Expertos sobre Somalia, Naciones Unidas, S/2024/748 de 28 de octubre de 2024.

entre ellas 3,9 millones de desplazadas internas, según ACNUR. Diversas organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos constataron un elevado número de denuncias de violencia sexual y de género, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, y de graves violaciones contra menores. Según el Grupo de Expertos, al-Shabaab continuó siendo el perpetrador que registra el mayor número de incidentes de reclutamiento y utilización de menores, secuestro y matrimonio forzado en el país. El Grupo señaló que persiste el modus operandi del contrabando de armas y municiones en dhows (embarcaciones de vela tradicionales) cargueros y pesqueros a través del mar Arábigo, destinadas a grupos armados no estatales de Somalia o Yemen. El Grupo observó que a partir del 24 de noviembre de 2023 se produjo un resurgimiento de los ataques a buques que circulan por o cerca de aguas somalíes, con más de 25 ataques contra buques comerciales y dhows, en particular secuestros, entre esa fecha y septiembre de 2024.⁵⁵

En lo concerniente a la sustitución de la ATMIS por la nueva misión de la UA en Somalia, la Misión de Apoyo y Estabilización de la UA en Somalia (AUSSOM), esta empezó su mandato a partir del 1 de enero de 2025, tras la adopción el 27 de diciembre de 2024 de la resolución 2767 del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque siguieron sin resolverse diversas cuestiones críticas para la misión. Durante el año se transfirieron sus últimas bases militares al Ejército somalí, pero los desacuerdos en torno a la financiación de la futura operación y países contribuyentes de tropas siguieron sin resolverse, ya que la crisis entre Etiopía y Somalia puso en entredicho la participación de Etiopía en la futura AUSSOM, y a la vez Egipto se ofreció a participar en ella –lo que podría trasladar la crisis regional entre Egipto y Etiopía al seno de la misión, según análisis.

En último lugar, cabe destacar la ruptura de las relaciones durante el año entre Etiopía y Somalia como consecuencia del acuerdo entre Etiopía y Somalilandia.⁵⁶ Además, las tensiones y desacuerdos crecientes entre Mogadiscio⁵⁷ y algunos estados miembros de la federación en el marco del proceso de revisión constitucional se agravaron durante el año, como fue el caso entre Puntlandia y el Gobierno Federal, o como en el caso de Jubalandia, con la ruptura de relaciones con el Gobierno Federal en noviembre y enfrentamientos en diciembre. Mientras que el Gobierno Federal había propuesto posponer las

El Estado Islámico en Somalia se ha convertido en un canal financiero cada vez más importante para la red mundial de ISIS en los últimos años, tras haber establecido una base en Puntlandia

elecciones regionales a septiembre de 2025 bajo el modelo de una persona, un voto, Jubalandia decidió unilateralmente celebrar elecciones bajo un modelo de elección indirecta, contradiciendo al Gobierno Federal, y suspendió la cooperación con Mogadiscio. El 25 de noviembre fue reelegido Ahmed Madobe como presidente del estado. Este proceso fue declarado ilegal por el Gobierno Federal y a pesar de los intentos de mediación de Kenya, ambas partes movilizaron su respectivos Ejércitos. En diciembre se desencadenaron enfrentamientos que causaron al menos 75 víctimas mortales en la localidad de Ras Kamboni y retirada de los soldados federales de la región de Lower Juba. A finales de año persistieron los enfrentamientos en la región de Gedo, donde se incrementó la presencia de tropas federales.

Somalia (Somalilandia – SSC-Khatumo)

Inicio:	2023
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Interno
Actores:	República de Somalilandia, administración SSC-Khatumo (estado de Khatumo), estado de Puntlandia, al-Shabaab
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

A principios de 2023 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia (región de Somalia autoproclamada independiente cuyo estatus sigue siendo motivo de disputa) y las milicias de las regiones de Sool, Sannag y Cayn, que forman parte de Somalilandia y que se han autodenominado estado SSC-Khatumo. A su vez, Somalilandia y Puntlandia han mantenido una disputa histórica desde 1998 –año en el que Puntlandia se constituyó como república autónoma– por el control de estas regiones fronterizas entre ambos estados que ha derivado en la actualidad en un conflicto armado entre las milicias de estas regiones y Somalilandia. Estas tres regiones –Sool, Sannag, Cayn– se encuentran geográficamente dentro de las fronteras de Somalilandia, aunque la mayoría de clanes de esta zona formada por Sool, Sannag y Cayn, denominada SSC (por sus iniciales) se encuentran asociados a los de Puntlandia, por lo que SSC es una aliado de Puntlandia. Desde los años noventa se han producido choques esporádicos e intentos de mediación entre Puntlandia y Somalilandia y entre Somalilandia y las milicias de SSC. En 2012 se creó el estado de Khatumo incluyendo parte de las regiones de Sool, Sanaag y Cayn,

55 La llamada “piratería” en Somalia está directamente relacionada con la inseguridad y la guerra que padece el país y los problemas económicos que existen en tierra, y durante varios años se ha reprimido esta práctica con medidas de seguridad como el despliegue de armadas extranjeras, la aplicación de las mejores prácticas de gestión en los buques y la presencia de equipos de seguridad privada armados en los buques, aunque en los últimos años estas medidas se han reducido. Ninguno de los buques secuestrados y abordados durante la actual oleada de piratería llevaba a bordo a un equipo de seguridad privada armado, según datos del Grupo de Expertos de la ONU.

56 Véase el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

57 Ibid.

autodenominado SSC-Khatumo, lo que añadió más complejidad a la situación. SSC-Khatumo se encuentra dentro de Somalilandia, que pretende ser independiente, a lo que se oponen estas regiones, que progresivamente han manifestado su voluntad de convertirse en un nuevo estado de Somalia. En 2016 la administración de SSC-Khatumo y Somalilandia iniciaron conversaciones de paz. Sin embargo, las tensiones y enfrentamientos esporádicos continuaron de forma intermitente entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia y las milicias de SSC-Khatumo, hasta que en 2023 se produjo una escalada de la situación, con centenares de víctimas mortales.

Persistió el conflicto entre las fuerzas de seguridad de Somalilandia y las milicias locales de SSC Khatumo, principalmente del clan Dhulbahante, aunque se redujo su intensidad. Durante la primera parte del año el frente se mantuvo mayoritariamente en calma, aunque a partir de agosto se reanudaron los enfrentamientos de forma esporádica y se incrementaron a finales de año, principalmente en Sool y Sanaag, y en especial en la capital de la región de Sanaag, Erigabo, donde conviven dos de los clanes enfrentados, el Dhulbahante (que lidera la administración de SSC Khatumo), y el Haber Yonis (cuyas milicias reciben el apoyo de las fuerzas de seguridad de Somalilandia). La escalada de los enfrentamientos coincidió con el fin del proceso electoral en Somalilandia, que había concentrado la atención de los actores políticos de Somalilandia. Según ACLED, en 2024 se produjeron 141 víctimas mortales en un total de 83 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados), cifras que se redujeron respecto a las de 2023, que ascendieron a 454 víctimas mortales en un total de 141 eventos violentos.⁵⁸

En lo concerniente al tenso proceso electoral en Somalilandia, el opositor Abdirahman “Irro” (64%) derrotó al presidente Muse Bihi (35%) en las elecciones presidenciales del 13 de noviembre. Irro juró su cargo el 12 de diciembre, poniendo fin a un ciclo tenso –con un retraso de dos años de la convocatoria– que culminó en las elecciones de noviembre en un clima de estabilidad y alternancia política. El presidente saliente Bihi felicitó a su adversario y se comprometió a una transición pacífica. Djibouti, Etiopía y Somalia celebraron el proceso. Irro anunció su intención de intensificar los esfuerzos para lograr el reconocimiento internacional de Somalilandia. La elección presidencial se celebró simultáneamente con otra elección para determinar los tres partidos políticos nacionales para la próxima década, que resultaron en la victoria de Waddani, Kulmiye y Kaah. Kaah había manifestado su apoyo a Waddani en las elecciones presidenciales, y los tres partidos coincidían en el objetivo del reconocimiento internacional. El embajador de EEUU en Somalia asistió a la toma de posesión de Irro en medio de crecientes especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente entrante de

EEUU, Donald Trump, estrechase lazos con el Gobierno e incluso anunciara el reconocimiento diplomático de Somalilandia tras asumir el cargo en enero de 2025.

Días después de la toma de posesión del presidente Irro, se produjeron duros enfrentamientos en Erigabo, la capital de Sanaag, entre las fuerzas gubernamentales y las milicias del clan Dulbahante.⁵⁹ Observadores internacionales y organizaciones humanitarias hicieron un llamamiento al diálogo y al fin de la violencia, que había provocado el desplazamiento de 43.000 personas, según la ONU. A finales de diciembre de 2024 se celebró una reunión entre los líderes de SSC Khatumo y una delegación del estado etíope de Somalí, que confirmaron que estaban trabajando en la búsqueda de una solución al conflicto entre Somalilandia y SSC Khatumo.⁶⁰

Sudán	
Inicio:	2023
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Nacional: Gobierno (Sudan Armed Forces), Rapid Support Forces (RSF) Darfur: Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, RSF, coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, milicias comunitarias. Kordofán Sur y Nilo Azul: Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, RSF, Sudán del Sur Este: Gobierno, RSF, Eastern Sudan Liberation Forces, United Popular Front for Liberation and Justice, Beja National Congress, Beja Armed Congress
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	Tras treinta años en el poder, el régimen de Omar al-Bashir cayó en abril de 2019 después de masivas movilizaciones populares que fueron aprovechadas por las fuerzas de seguridad para dar un golpe de Estado. Tras meses de gobierno de la Junta Militar e importantes tensiones nacionales, a finales de 2019 se logró conformar un gobierno transicional cívico-militar. Sin embargo, el 25 de octubre de 2021 un nuevo golpe militar por parte del ala militar del gobierno transicional acabó con la transición política. Fue seguido de un periodo de amplias movilizaciones ciudadanas contra la Junta Militar (Consejo Soberano) presidida por el jefe de las Fuerzas Armadas Sudanésas (SAF), teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y vicepresidida por el líder del grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), teniente

58 Para el recuento, se tienen en cuenta las víctimas mortales producidas en el conjunto de las regiones de Sool, Sanaag y Togdheer. ACLED, [Dashboard](#) [consultado el 31 de enero de 2025].

59 Shabelle Media Network, “Somalia: Deadly Clashes Escalate in Somalia’s Eerigabo, Seven Killed”, Allafrica, 189 de diciembre de 2024.

60 Somali Dispatch, “SSC-Khatumo says it’s ready to discuss peace with Somaliland”, SD, 28 de diciembre de 2024.

general Mohammed Hamdan Dagalo "Hemedti". A finales de 2022, tras un año de negociaciones, se logró un acuerdo marco en el cual los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político y devolverlo a actores civiles. Sin embargo, las desavenencias entre las partes militares (SAF y RSF) en las negociaciones sobre la reforma del sector de seguridad, especialmente en lo relativo a los plazos para la integración de las RSF en el Ejército nacional unificado y el establecimiento de la estructura de mando, acabaron por detonar, el 15 de abril de 2023, un nuevo conflicto armado en el país. Este nuevo escenario de violencia se concentró en un principio en la capital, Jartum, pero con el paso de los meses se intensificó y amplió a gran parte del país, afectando a las dinámicas de conflictividad armada preexistentes en las regiones de Darfur y las Dos Áreas (Kordofán Sur y Nilo Azul), y a la región este del país. En la región de Darfur, el conflicto armado se remonta al año 2003 y gira en torno a demandas de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM de mayor descentralización y desarrollo de la región. El Gobierno respondió al levantamiento armado en Darfur utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes *janjaweed*. Por su parte, en relación a Kordofán Sur y Nilo Azul, la reconfiguración estatal de Sudán tras la secesión del sur en julio de 2011 agravó las tensiones del Gobierno sudanés con ambas regiones fronterizas, que durante el conflicto armado sudanés (1983-2005) apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. A partir de ese momento se conformó el SPLA-Norte en las Dos Áreas, iniciándose un conflicto armado en torno a la demanda de la insurgencia de reconocimiento de la pluralidad étnica y política.

Tras más de 20 meses de combates incsesantes desde que estallara el conflicto armado en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas

(SAF) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), la guerra en Sudán no mostró señales de desaceleración. Según datos de ACLED los combates entre las partes y sus grupos armados aliados provocaron la muerte de 15.597 personas durante 2024, registrando 5.324 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados).⁶¹ Asimismo, la guerra provocó la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo con millones de personas en situación de una grave escasez de alimentos y partes de la región de Darfur padeciendo hambruna. En este sentido, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que aproximadamente una de cada cinco personas se encontraba desplazada en el país, con 10,7 millones de personas desplazadas internamente y 2,3 millones que han huido a través de las fronteras. La destrucción de los sistemas agrícolas y las cadenas de suministro de alimentos, y la restricción del acceso humanitario, crearon la mayor crisis de hambre del mundo, según la ONU, en la que la mitad de la población del país (cerca de 26 millones de personas) padece inseguridad alimentaria

aguda.⁶² Al respecto la OIM denunció que solo recibió el 21% del apoyo que requiere para proporcionar la ayuda necesaria a la población sudanesa.⁶³

En lo alusivo al **desarrollo de la guerra**, durante el año la dinámica generalizada estuvo marcada por intensos combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las RSF, extendiéndose estos a la mayor parte del país. El secretario general de la ONU expresó en diferentes ocasiones su preocupación por que la guerra se extienda a los países vecinos, lo que provocaría nuevos flujos de personas desplazadas y alimentaría aún más la economía de guerra regional. También denunció la práctica generalizada de la violencia sexual en el conflicto, así como la intensificación alarmante de la violencia intercomunitaria e identitaria, alimentada por un aumento del discurso de odio y las campañas para incitar a la violencia. Asimismo, se denunciaron en múltiples ocasiones violaciones y abusos flagrantes de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes, las cuales podrían constituir crímenes de guerra y otros crímenes atroces.⁶⁴ De hecho, a principios de año un informe del Grupo de Expertos de la ONU en Sudán denunció que las RSF y sus milicias aliadas llevaron a cabo asesinatos étnicos y violaciones generalizadas en su ofensiva sobre Darfur occidental, lo que podría constituir crímenes de guerra y contra la humanidad. A finales de año, Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, anunció que su Gobierno había declarado formalmente que las RSF cometieron genocidio durante la actual guerra civil, anunciando la imposición de sanciones al comandante de las RSF, Mohammad Hamdan Dagalo.⁶⁵

La guerra en Sudán ha provocado que el país padezca la mayor crisis de desplazamiento forzado y de hambre del mundo

Durante el año **diferentes actores armados irregulares se siguieron posicionando en algún bando de la guerra**. En Darfur, el Movimiento de Liberación de Sudán, bajo el mando del gobernador, Minni Minawi, anunció el 24 de marzo que el grupo se unía a las Fuerzas Armadas. Lo mismo hicieron el 12 de abril tres miembros de una coalición de grupos armados no árabes, la Fuerza Conjunta de Movimientos de Lucha Armada. En diciembre, el comandante superior del Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán dirigido por Abdelwahid al-Nur, grupo armado de Darfur que había mantenido la neutralidad en el conflicto, anunció su deserción y la creación de una nueva facción alineada también con el Ejército. Por su parte, las milicias árabes darfuríes se alinearon con las RSF. Asimismo, en Kordofán del Sur, el grupo rebelde Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (al-Hilu) y en la región este de Kassala

61 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 10 de febrero de 2025].

62 Farouk Chothia, "Sudan slides deeper into famine, experts say" BBC News, 24 de diciembre de 2024.

63 Khalid Abdelaziz, Ryan McNeill, Nafisa Eltahir, Steve Stecklow and Lena Masri, "Sudan drops out of hunger-monitor system on eve of famine report", Reuters, 24 de diciembre de 2024.

64 Consejo de Seguridad de la ONU "Recomendaciones para la protección de los civiles en el Sudán. Informe del secretario general", S/2024/759, 21 de octubre de 2024.

65 Joseph Gedeon and Peter Beaumont, "US declares Sudan's paramilitary forces have committed genocide during civil war", The Guardian, 7 de enero de 2025.

diferentes milicias denominadas “Cuerpo Oriental” y afiliadas al Frente Popular para la Liberación y la Justicia, que en ambos casos se rumoreaba que eran apoyadas por Eritrea, también se alinearon del lado de las Fuerzas Armadas.

De forma paralela a la guerra, se siguieron explorando diferentes vías de mediación y negociación de paz que no lograron poner fin al conflicto armado.⁶⁶ A lo largo de este período, mediadores internacionales, especialmente de la región, intentaron facilitar los diálogos entre las partes en conflicto, pero sus diferencias dificultaron los esfuerzos de resolución de la crisis. Asimismo, las partes en conflicto no cumplieron sus compromisos contraídos en la Declaración de Jeddah firmada en 2023 relativos a la protección de los civiles. A nivel internacional las presiones tampoco surgieron efecto, sobre todo debido al bloqueo en el Consejo de Seguridad de la ONU a finales de año por parte de Rusia de una resolución presentada por Reino Unido y Sierra Leona en la que se hacía un llamamiento a las partes a cesar inmediatamente las hostilidades e iniciar conversaciones de paz. Anteriormente, el Consejo de Seguridad había extendido el embargo de armas a Darfur por un año. China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se abstuvieron la última vez que se renovó el embargo en 2023, esta vez votaron a favor.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony (“Agwalek”), SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS (Cirillo), NAS (Loburon), SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) -antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRMA, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudánés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudánés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del exvicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificado en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Durante el año se registró un aumento de la inseguridad debido al recrudescimiento de las dinámicas de violencia intercomunitaria que afectaron a múltiples regiones del país. Según datos de ACLED, durante el 2024 se registraron unos mil eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 2.024 personas. Estos datos representan una escalada significativa de la violencia en el país en relación con el año anterior, cuando se había registrado un descenso de la violencia con 464 eventos violentos y 1.262 víctimas mortales.⁶⁷ El incremento de la inestabilidad en el país siguió repercutiendo negativamente en la **crisis humanitaria y de desplazamiento forzado**. Según los datos de ACNUR, a mediados de 2024 más de 2,3 millones de personas seguían refugiadas, y más de un millón estaban desplazadas internamente.⁶⁸ A ello hay que sumarle que desde que comenzó el conflicto en Sudán en abril de 2023, cerca de un millón de personas retornadas, refugiadas y solicitantes de asilo habían cruzado a Sudán del Sur desde Sudán, incrementando las necesidades de asistencia humanitaria. En este sentido, y según el informe Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) publicado el 18 de noviembre, se estima que 6,3 millones de personas experimentaban altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en el país.⁶⁹

⁶⁶ Para más información, véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

⁶⁷ ACLED, ACLED Explorer [consultado el 26 de febrero de 2025].

⁶⁸ UNHCR, *Refugee Data Finder* [consultado el 26 de febrero de 2025].

⁶⁹ Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “La situación en Sudán del Sur. Informe del secretario general”, S/2025/54, 24 de enero de 2025.

Con relación a las dinámicas de violencia en el país, estas volvieron a estar marcadas por los enfrentamientos intercomunitarios que incluyeron múltiples disputas durante todo el año entre miembros de distintos grupos, principalmente: lou nuer y bor dinka (Jonglei); murle y lou nuer (Jonglei); dinka twic (Warrap) y ngok dinka (Abyei); nuer y misseriya (Unidad); balanda y azande (Ecuatoria Occidental); lou (Warrap). De todas ellas, al inicio de año destacó la intensificación de la violencia intercomunitaria en el estado de Warrap y la zona administrativa de Abyei, así como

en el estado de Jonglei. Los combates entre miembros de las comunidades twik dinka, del estado de Warrap, y ngok dinka, de la disputada región de Abyei, produjeron cientos de víctimas mortales. En Jonglei también se intensificó la violencia intercomunitaria registrándose múltiples enfrentamientos entre miembros de las comunidades murle, dinka y nuer, poniendo en peligro la estabilidad en la zona. La inestabilidad en Jonglei obligó a la UNMISS a desplegar, el 30 de abril, fuerzas de mantenimiento de la paz adicionales para disuadir de más violencia. En el último trimestre del año la violencia intercomunitaria aumentó en otros estados, principalmente en Warrap, registrando enfrentamientos entre dos secciones de la comunidad lou en el condado de Tonj Norte que dejaron decenas de muertos; o en Ecuatoria Occidental, en el condado de Tambura, donde se produjeron hostilidades entre miembros de las comunidades azande y balanda. Por otro lado, en otros eventos destacados, en junio surgió un nuevo grupo armado producto de una escisión en el Frente de Salvación Nacional (NAS, por sus siglas en inglés) liderado por Thomas Cirillo (grupo armado que no participa en las conversaciones de paz en Kenia). Las disputas internas entre los líderes del NAS, Cirillo y Kohn Kenyi Loburon, dieron pie a su fragmentación, surgiendo el autodenominado Fuerzas Unidas de Salvación Nacional dirigido por Loburon, hecho que aumentó el riesgo de enfrentamientos entre las dos facciones.

Durante 2024 también se registraron **efectos de las crisis de diferentes países vecinos en Sudán del Sur que amenazaron con producir mayor inestabilidad**. A mediados de año, medios locales denunciaron la presencia de fuerzas ugandesas en el sur del territorio sursudanés. Asimismo, a finales de año la guerra en la vecina Sudán afectó al estado del Alto Nilo, fronterizo con Sudán. El aumento de los enfrentamientos armados entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en los estados sudaneses de Nilo Azul y Nilo Blanco, que limitan con el Alto Nilo, hizo temer una mayor propagación de los efectos de la guerra sudanesa en Sudán del Sur.

Las dinámicas de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur volvieron a afectar la seguridad en múltiples regiones del país

Finalmente, en otros eventos destacados del año, el Consejo de Seguridad de la ONU, el 29 de abril renovó por un año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y el 30 de mayo prorrogó las sanciones a Sudán del Sur, incluido el embargo de armas, la prohibición de viajar y la congelación de activos. Por otro lado, en lo relativo a la **implementación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur de 2018 (R-ARCSS)** y sobre las conversaciones de paz que desde el año 2019 mantiene el Ejecutivo sursudanés con los grupos no signatarios del R-ARCSS, que durante 2024 se trasladaron de Roma a Nairobi, en ambos casos se registraron tímidos avances.⁷⁰

África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-Tabara, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Pierre Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. En 2020 el histórico líder Nkurunziza falleció, aunque la aproximación hacia la oposición política y armada del nuevo líder, Évariste Ndayishimiye, siguió siendo similar a la de su predecesor.

70 Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

Durante el año persistieron los actos de violencia por parte de los cuerpos de seguridad y los grupos insurgentes del país, así como las acciones de los cuerpos de seguridad burundeses en la provincia congoleña fronteriza de Kivu Sur en persecución de la insurgencia burundesa. Además, el Gobierno aumentó la presión hacia la oposición política y social y las restricciones a la libertad de expresión en el marco de las elecciones legislativas de 2025. El centro de investigación ACLED dio un balance de 147 víctimas mortales del conflicto en Burundi durante el año 2024, cifra similar a la del año 2023 (151 víctimas mortales) aunque inferior a la de años precedentes (245 en 2022 y 285 en 2021).⁷¹ Estos datos muestran una cierta continuidad con los años anteriores. La cifra de víctimas mortales en la provincia de Kivu Sur ascendió a 282, y aunque no todas son atribuibles a los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas burundeses apoyadas por milicias locales congoleñas contra las insurgencias burundesas presentes en la provincia, sí una gran parte (172 fueron atribuibles a RED-Tabara, una de las diversas insurgencias burundesas presentes en la provincia). Estas acciones en Kivu Sur no fueron confirmadas por las Fuerzas Armadas burundeses. A la vez, también hubo informaciones según las cuales miembros de las Imbonerakure, las juventudes del partido en el poder, el CNDD-FDD, habrían recibido entrenamiento militar para ser desplegados en RDC.⁷² El grupo armado RED-Tabara reivindicó diversos ataques contra tropas burundesas desplegadas en Kivu Sur, concretamente, en los territorios de Uvira y Mwenga, incluido el ataque del 5 al 6 de diciembre a una base del Ejército en Mwenga, y en especial en las montañas Itombwe.

Por otro lado, surgieron informes sobre la presencia de insurgentes rwandeses y enfrentamientos cerca de la frontera trilateral entre Burundi, RDC y Rwanda. Aumentó la preocupación por los grupos armados que operan en las porosas zonas fronterizas entre los tres países después de que a finales de noviembre se encontraran siete cadáveres con uniformes del Ejército congolés en el bosque de Kibira en Burundi. Este descubrimiento se produjo en medio de la aparente presencia en la zona de grupos de contrabandistas y movimientos insurgentes ruandeses (FDLR) y burundeses (FNL). En este sentido, hubo informaciones sobre posibles contactos entre los cuerpos de seguridad burundeses y las FDLR, incluida una facción de las FDLR denominada FNL, cuestión que estaría provocando un incremento de la tensión entre Burundi y Rwanda. También se produjeron contactos entre RDC y Burundi para incrementar la presencia de los cuerpos

de seguridad burundeses en Kivu Sur, tanto para combatir a las insurgencias burundesas presentes en el territorio como para apoyar a los cuerpos de seguridad congoleños y a las milicias que le dan apoyo contra el grupo armado M23 y Rwanda. El presidente congolés Tshisekedi visitó el 22 de diciembre al presidente burundés Ndayishimiye en la ciudad de Bujumbura para profundizar en las relaciones entre ambos países en medio de tensiones mutuas con Rwanda, debido a que tropas burundesas y las ruandesas se estarían enfrentando en territorio congolés.⁷³

El 30 de diciembre, el tribunal de apelaciones condenó a 272 soldados que se negaron a ser desplegados en RDC a penas de entre tres años y cadena perpetua; ninguno fue puesto en libertad. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, que fue renovado en octubre, reportó sobre la creciente impunidad en el país, y durante el año aparecieron diversos informes sobre muertes bajo custodia y torturas y sobre la falta de cooperación del Gobierno para investigar los casos. Destacó el caso de la periodista Sandra Muhoza, sentenciada a 12 años de prisión. La UE prorrogó hasta octubre de 2025 las sanciones contra los miembros de los servicios de inteligencia acusados de represión y uso excesivo de la fuerza en las protestas de 2015.

En el ámbito político, cabe destacar que el Gobierno continuó limitando el espacio político de cara a las elecciones de 2025, de la mano del partido gubernamental CNDD-FDD y de las Imbonerakure. Las juventudes del CNDD-FDD llevaron a cabo acciones de extorsión para financiar la campaña electoral del CNDD-FDD en diferentes provincias, incluyendo la denegación de acceso a servicios públicos en caso de rechazar apoyar la campaña. Los partidos opositores Frodebu y CNL denunciaron prácticas totalitarias y alertaron del probable fraude y aumento de la violencia de cara a las elecciones de 2025. En un duro golpe a la posibilidad de elecciones inclusivas, según señaló el think tank International Crisis Group, la comisión electoral rechazó el 31 de diciembre todas las listas de la coalición opositora Burundi Bwa Bose, que se formó el 17 de diciembre, para las próximas elecciones legislativas; Burundi Bwa Bose declaró que apelaría la decisión ante el Tribunal Constitucional. La comisión citó irregularidades en los expedientes de los candidatos y, en particular, que el líder de la oposición Agathon Rwasa (histórico exlíder insurgente, líder del partido CNL) no podía presentarse a la coalición porque es miembro del parlamento por otro partido.

71 ACLED, [Dashboard](#) [consultado el 31 de enero de 2025].

72 Sos Médias Burundi, “[Cibitoke : paramilitary training for Imbonerakure before their deployment in the DRC](#)”, 17 de agosto de 2024.

73 Véase el resumen sobre RDC (este) en este capítulo.

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, aliado del IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	
<p>Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de Noroeste y Suroeste) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglofona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglofonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.</p>	

El conflicto armado entre los cuerpos de seguridad del Estado y los movimientos político-militares secesionistas en las dos provincias anglofonas del suroeste de Camerún sufrió una escalada de la violencia

durante todo el año. Diversos análisis señalaron que el conflicto se está intensificando y que su fragmentación está incrementando los niveles de violencia, pero también está debilitando la capacidad negociadora del movimiento separatista.⁷⁴ De acuerdo con datos de ACLED,⁷⁵ entre 2018 y 2023 el conflicto había causado la muerte de más de 8.000 personas. Según la organización, en 2024 se produjeron otras 1.380 víctimas mortales en un total de casi 2.000 eventos de violencia organizada (batallas, violencia contra civiles y explosiones/violencia remota). Esto supone un elevado incremento respecto de las cifras de 2023, cuando se produjeron 429 víctimas mortales en un total de 262 eventos de violencia organizada, año en el que se había producido una ligera reducción respecto a las cifras de 2022 (525 víctimas mortales en 343 eventos violentos). Las cifras de desplazamiento forzado superaron el millón de personas desplazadas internas y 400.000 personas refugiadas a finales de 2024, según ACNUR. Según algunos análisis,⁷⁶ los grupos insurgentes están ahondando en el uso de la violencia contra la población civil y en las actividades ilícitas como mecanismo para financiar sus actividades, como el secuestro de civiles para obtener el pago de rescates. La caída del apoyo popular a la insurgencia ha comportado la proliferación de la extorsión, la llamada “liberation tax” exigida por la insurgencia. Otras actividades ilícitas incluían el robo de propiedades, la venta ilegal de gasolina y la proliferación de puestos de control por parte de la insurgencia en ambas provincias. Además, estos análisis han puesto de manifiesto el surgimiento de conflictos hasta ahora latentes en el ámbito comunitario, especialmente entre agricultores y ganaderos. Los ganaderos, predominantemente de la comunidad mbororo, inicialmente no apoyaron a la insurgencia y, en consecuencia, sufrieron extorsión y robos de ganado por parte de los grupos armados, lo que les empujó a apoyar a los cuerpos de seguridad, incrementando la complejidad del conflicto al sumarle tensiones entre ganaderos y agricultores, y sus respectivas milicias y grupos de autodefensa, y entre ganaderos y la insurgencia.

Proliferaron las emboscadas por parte de los grupos insurgentes a destacamentos del Ejército y patrullas durante todo el año. El conflicto se amplió a la comunidad de taxistas de ambas provincias, con la quema de taxis por parte de la insurgencia y movilizaciones por parte de los conductores, así como la división en el seno de la insurgencia en torno a la represión hacia ese colectivo de conductores. El Gobierno había suspendido la circulación nocturna de taxis para limitar los movimientos de la insurgencia, por lo que los taxistas que secundaban la decisión del Gobierno eran vistos como colaboracionistas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

⁷⁴ Véase el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

⁷⁵ ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 31 de enero de 2025].

⁷⁶ Serwat, Ladd, “Q&A: The evolution of Ambazonian separatist groups in Anglophone Cameroon”, ACLED, 11 de octubre de 2024.

Derechos Humanos, Volker Türk, se reunió del 5 al 7 de agosto con el primer ministro, Dion Ngute, y otros ministros clave, denunciando las violaciones tanto de los insurgentes como del Ejército. Coincidiendo con el inicio del año escolar, los principales grupos político-militares decretaron la suspensión de la actividad escolar en ambas provincias entre el 9 y el 23 de septiembre. Además, como viene siendo habitual en los últimos siete años, los movimientos político-militares conmemoraron la declaración de independencia realizada en 2017 decretando la suspensión de todas las actividades en ambas provincias el 1 de octubre. El presidente Paul Biya hizo un llamamiento a la rendición de la insurgencia el 31 de diciembre.

La coalición político-militar AGovC reafirmó la alianza con los separatistas nigerianos de los estados del sureste de Nigeria (que conforman la región denominada Biafra) en la llamada conferencia del Gobierno de la República de Biafra en el Exilio en Finlandia, celebrada entre el 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2024, extendiendo el pacto de octubre de 2023. No obstante, los movimientos político-militares separatistas de las regiones anglófonas continuaron divididos en torno a la estrategia a seguir para conseguir sus objetivos. Cabe destacar que Noruega arrestó en Oslo a Ayaba Cho, líder de la AGovC, acusado de incitación a cometer crímenes contra la humanidad.

La parálisis en las negociaciones de paz que había promovido Canadá transcurrió en medio de una creciente tensión como consecuencia, de los preparativos para la celebración de elecciones presidenciales que se espera que tengan lugar en octubre de 2025, a las que concurriría el actual presidente, Paul Biya, con 92 años, y 43 al frente del país. Desde principios de septiembre hasta el 21 de octubre Biya no había realizado apariciones públicas, por lo que incluso se especuló en torno a su posible muerte debido a su frágil estado de salud. A principios de octubre se prohibió informar oficialmente de su condición como una cuestión de seguridad nacional. En relación con las elecciones, el clima político empeoró como consecuencia de decisiones de calado autoritario que fueron denunciadas por la oposición, como el aplazamiento de los comicios legislativos y locales hasta 2026, la posibilidad de que se prohibiera concurrir al líder opositor Maurice Kamto por el hecho de que su partido no dispone de representación parlamentaria, restricciones a la libertad de expresión, la prohibición de celebrar manifestaciones, o la prohibición de debates electorales. También se anunciaron restricciones al registro de votantes, sobre todo en el extranjero, donde se estima que viven más de seis millones de personas con derecho a voto, que se sumarían a los ocho millones de personas en territorio nacional.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), coalición armada opositora Siriri, milicia étnica azandé AAKG, milicias sudanesas Rapid Support Forces (RSF), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Rusia, Africa Corps (antes Grupo Wagner)
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Síntesis:	
Desde su independencia en 1960, RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, tomó el poder en 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurrecciones. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para coordinar esta coalición rebelde, que utilizó la violencia para controlar el país, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana ("antibalaka"). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del expresidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo. Tras un breve periodo de reducción de la inestabilidad y de diferentes acuerdos de paz, los grupos armados siguieron controlando la mayor parte del país. Ni los reducidos cuerpos de seguridad centroafricanos ni la MINUSCA, fueron capaces de revertir la situación. Nuevas iniciativas de la UA y de la CEEAC contribuyeron a alcanzar el acuerdo de paz de febrero de 2019. No obstante, diversos grupos abandonaron el acuerdo a finales de 2020 e iniciaron una nueva rebelión, la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC). La incapacidad del Gobierno para hacer frente a la situación le llevó a solicitar el apoyo bilateral de Rwanda y de la empresa de seguridad rusa Wagner, que complejizó la situación, por la proliferación de actores armados en el país.	

En 2024, RCA continuó enfrentando un conflicto armado complejo, caracterizado por enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad gubernamentales, respaldadas por el cuerpo de seguridad ruso Africa Corps, anteriormente conocido como Grupo Wagner. Según el centro de investigación ACLED,⁷⁷ en 2024 se produjeron 300 eventos de violencia organizada (batallas, violencia contra civiles y explosiones/violencia remota) que costaron la vida a 641 personas, cifra ligeramente superior a la de 2023 (581 víctimas mortales en 299 eventos violentos), pero inferior a la de 2022 (837) y a la de 2021 (1.700).⁷⁸ Aunque las cifras de víctimas mortales y eventos violentos de 2024 fueron relativamente similares a las del año 2023, el análisis de la evolución del conflicto y sus impactos en relación con el año anterior indican un empeoramiento de la situación. Este deterioro de la situación, vinculado a una mayor fragmentación de actores armados, así como a un incremento de las tensiones de carácter comunitario, fue destacado por diferentes actores locales e internacionales, como la ONU.⁷⁹

Fueron frecuentes tanto los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas gubernamentales y diversos grupos armados, como la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) y el grupo 3R (Retorno, Recuperación, Rehabilitación), como también los ataques entre milicias comunitarias, que ocurrieron principalmente en el interior del país y las zonas fronterizas. El conflicto fue incorporando un nuevo factor de complejidad al sumar una dimensión étnica, debido a que la desmovilización de milicias de la comunidad azandé y posterior alistamiento y entrenamiento de sus combatientes en las Fuerzas Armadas derivó en tensiones comunitarias. Estos cuerpos de seguridad con presencia de la comunidad azandé perpetraron actos de venganza contra la población civil de la comunidad fulani. La comunidad fulani es acusada de respaldar a los rebeldes del grupo armado UPC, parte de la coalición CPC. La comunidad fulani es mayoritariamente musulmana, por lo que la población civil de esta confesión se convirtió progresivamente en foco de ataques y represalias por parte de las Fuerzas Armadas y las milicias azandé. Africa Corps, sucesor del Grupo Wagner, proporcionó apoyo significativo a los cuerpos de seguridad en los enfrentamientos en todo el país. A la vez, se evidenciaron tensiones por la violencia paramilitar rusa, como puso de manifiesto la huelga de transportistas cameruneses entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre ante la creciente tensión por la reiterada intimidación y violencia de los

paramilitares rusos hacia ellos. Esta huelga provocó una crisis temporal de suministro en Bangui, que depende en gran medida de las exportaciones del vecino Camerún. También aumentaron las preocupaciones por las repercusiones en RCA del conflicto en Sudán, después de que fuentes locales informaran a finales de noviembre sobre el regreso de más de mil combatientes rebeldes que luchaban para ambas partes beligerantes sudanesas. La insurgencia en la RCA ha estado marcada por alianzas fluctuantes y divisiones internas en diferentes etapas del conflicto. La CPC, coalición de grupos armados creada en 2020, experimentó tensiones internas durante 2024 debido a diferencias estratégicas y también relativas a sus orígenes y pertenencia étnica. Estas divisiones debilitaron su capacidad operativa, permitiendo al Gobierno recuperar ciertas áreas anteriormente bajo control rebelde. Sin embargo, la fragmentación también llevó al surgimiento de facciones más radicales, complicando los esfuerzos para promover la resolución del conflicto.⁸⁰ La división entre grupos y la restructuración de la insurgencia estuvo acompañada de una escalada de los enfrentamientos por parte de las Fuerzas Armadas con apoyo de los mercenarios de Africa Corps durante el año. En agosto, el líder del grupo armado UPC, Ali Darassa, miembro de la coalición CPC, anunció un alto el fuego y su disposición a entablar negociaciones de paz con el Gobierno, lo que fue calificado de traición por parte del líder de la CPC, el expresidente François Bozizé –exiliado en Guinea-Bissau– y generó divisiones en el seno de la CPC. En paralelo, surgió una facción de la CPC, la CPC-F que, junto al anuncio de la UPC, contribuyó a sumir en una situación de fragilidad a la CPC. Según fuentes locales, en mayo se configuró una nueva alianza llamada Coalición Militar para la Salvación y Recuperación del Pueblo (CMSPR), liderada por el ex coronel del Ejército Armel Sayo, cuyo liderazgo en el seno del Ejército le permitió reclutar tanto a ex miembros de los movimientos Séléka como a anti-balaka.⁸¹ Cabe destacar que en noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la extensión por un nuevo año del mandato de la MINUSCA dada la gravedad de la situación y en medio de la competencia geopolítica de Rusia, EEUU y Francia por afianzar su alianza con las autoridades centroafricanas.⁸²

En RCA la coalición de grupos armados CPC experimentó tensiones internas que fueron aprovechadas por el Gobierno para recuperar áreas anteriormente bajo control rebelde

La crisis humanitaria en la RCA siguió afectando a millones de personas. Según OCHA, la RCA sigue siendo uno de los países con mayor dependencia de la ayuda humanitaria, con alrededor del 40% de la población que depende de la asistencia humanitaria para sobrevivir, por lo que más de

77 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 31 de enero de 2025].

78 Esta escalada de la violencia coincidió con el intento de golpe de Estado y la ofensiva rebelde que cobró un fuerte impulso a finales de 2020 y principios de 2021.

79 Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 5 de junio de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana*, Naciones Unidas, S/2024/444, 10 de junio de 2024.

80 Véase el resumen sobre RCA en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

81 Corbeau News, “Centrafrrique : création d'une nouvelle coalition des groupes armés... la CMSPR”, *Corbeau News*, 19 de noviembre de 2024.

82 Véase el resumen sobre RCA en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

2,4 millones de personas eran consideradas vulnerables y necesitaban asistencia humanitaria debido al conflicto, el desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria, de un total de 5,3 millones de habitantes en 2024.⁸³ ACNUR cifró en casi 679.566 las personas refugiadas y demandantes de asilo, y en 436.511 las desplazadas internas. Eran cifras similares a los últimos cuatro años en el caso de la población refugiada, e inferiores en lo relativo a la población desplazada interna, que se habría reducido en 300.000 desplazados internos en los últimos tres años.⁸⁴ Las violaciones de derechos humanos continuaron siendo generalizadas y cometidas por todas las partes involucradas en el conflicto. Amnistía Internacional documentó restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica, especialmente en el contexto de la adopción de una nueva Constitución, aprobada en referéndum en julio de 2023, que permite al presidente optar a un tercer mandato en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2025. Además, se registraron ejecuciones sumarias, violencia sexual y de género, y ataques contra civiles y trabajadores humanitarios. La violencia sexual y de género sigue siendo alarmantemente alta, con miles de casos reportados en 2024, siguiendo la tendencia también observada en 2023.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Internacionales
Actores:	RDC, Burundi, Angola, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (Burundi, Kenya, Uganda y Sudán del Sur), SAMIDRC (Fuerza regional de la SADC, compuesta por Sudáfrica, Malawi y Tanzania), milicias progubernamentales Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP, compuestos por decenas de antiguas milicias Mai Mai y otros grupos armados de Kivu Norte y Kivu Sur, como APCLS, PARECO-FF, Nyatura, Raia Mutomboki, y otras milicias progubernamentales conocidas como Wazalendo), FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), empresas militares privadas (Agemira RDC y Congo Protection); Movimiento 23 de Marzo (M23), Twirwaneho, Rwanda; otros grupos armados no adscritos en Wazalendo, grupos armados burundeses; grupo armado de origen ugandés LRA; grupos y milicias comunitarias de Ituri (entre otros, CODECO/URDPC, FPIC, FRPI, MAPI, Zaïre), coalición AFC y aliados
Intensidad:	3
Evolución:	↑

⁸³ NRC, *Central African Republic: Humanitarian Response Plan, January 2024*, 18 de septiembre de 2024; OCHA, *Central African Republic: Situation Report*, 5 de diciembre de 2024.

⁸⁴ UNHCR, *Operational Data Portal - CAR Situation* [consultado el 31 de enero de 2025].

⁸⁵ Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 31 de mayo de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Naciones Unidas, S/2024/432 de 4 de junio de 2024, y Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 27 de diciembre de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Naciones Unidas, S/2024/969 de 27 de diciembre de 2024.

⁸⁶ ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 31 de enero de 2025].

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en la rebelión que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de este en 1997. Posteriormente, se desencadenó la llamada Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), en la que Burundi, Ruanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y, posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país (principalmente en las provincias de Kivu Norte y Sur) debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio ruandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la deserción de los militares del antiguo grupo armado CNDP de origen tutsi integrados en el Ejército congoleño, que organizaron una nueva rebelión, el Movimiento 23 de Marzo (M23). A finales de 2013 dicha rebelión fue derrotada y parte de sus combatientes se refugiaron en Uganda y Rwanda. No obstante, en 2022 el M23 se reorganizó provocando una escalada de la violencia con el apoyo de Rwanda, lo que agravó las relaciones entre RDC y Rwanda. Rwanda envió contingentes militares para apoyar la rebelión y conseguir la expansión territorial de la ofensiva del M23 y promover la ocupación y explotación del territorio y de sus recursos, así como afianzar sus objetivos de seguridad.

La situación en el este de la RDC durante el último año estuvo marcada por el empeoramiento de la ofensiva del grupo armado M23 y de Rwanda en territorio congoleño iniciada a finales de 2021. Naciones Unidas constató la presencia de entre 4.000 y 7.000 soldados rwandeses en territorio congoleño,⁸⁵ así como la presencia de tropas de Burundi en apoyo de RDC. Esta ofensiva fue ampliando su control y a principios de enero de 2025 se encontraba a las puertas de Goma, la capital de la provincia de Kivu Norte. Las iniciativas diplomáticas regionales, lideradas por Angola en nombre de la Unión Africana (UA) a lo largo de 2024 fracasaron en su intento de facilitar un diálogo entre RDC y Rwanda y entre RDC y el M23. El grupo armado y Rwanda tomaron el control de gran parte de la provincia de Kivu Norte, y ocuparon diversas zonas de la provincia de Kivu Sur, ante el fracaso de la UA y la pasividad internacional, causando centenares de víctimas. Según datos de ACLED,⁸⁶ durante 2024 se registraron 1.652 eventos de violencia organizada (batallas, violencia contra civiles y explosiones/violencia remota) en las tres provincias del este del país (Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur) que costaron la vida a 3.484

personas, la mayoría de ellas concentradas en Ituri y Kivu Norte, con 1.267 y 1.918 víctimas mortales, respectivamente, y 299 víctimas mortales en Kivu Sur. Estas cifras son muy similares a las acontecidas en 2023, cuando se registraron 1.778 eventos de violencia organizada en estas mismas tres provincias que costaron la vida a 3.433 personas. En el conjunto del país la cifra de víctimas de la violencia de los diferentes conflictos armados fue similar en comparación a la cifra de 2023 y de 2022. ACLED contabilizó 4.192 víctimas mortales en el conjunto del país en 2024, cifra muy similar a las 4.045 víctimas mortales en el conjunto del país en 2023, con alrededor de 2.000 episodios de violencia organizada.

La rebelión del M23 intentó sumar adeptos a su causa. En diciembre de 2023 el antiguo presidente de la CENI, Corneille Nangaa, creó en Nairobi la coalición político-militar Alianza Río Congo (AFC) que pretendía unir a diferentes grupos armados y actores políticos en su objetivo de derrocar al Gobierno congolés, y estableció una alianza con el M23 y otras milicias, y recabó apoyos entre sectores políticos opositores. Según el Grupo de Expertos sobre RDC, el M23 y el Gobierno de Rwanda consideraron la alianza entre la AFC y el M23 como una oportunidad de legitimar el M23 y sus reivindicaciones en contra del Gobierno congolés y de reducir al mínimo el papel de Rwanda en la crisis, y así no ser visto como un actor externo a RDC dependiente de Rwanda. AFC persiguió adhesiones o pactos de no agresión por parte de milicias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, e incluso se establecieron contactos con las ADF. En paralelo, el M23 continuó su ofensiva en Kivu Norte, mientras persistían infructuosamente los intentos para promover el diálogo entre RDC y Rwanda.

En julio RDC y Rwanda acordaron una tregua humanitaria facilitada por EEUU y Angola, que fue prolongada mediante un nuevo acuerdo de alto el fuego entre RDC y Rwanda, que entró en vigor el 4 de agosto. Sin embargo, AFC/M23 alegó que no [quedaba] automáticamente obligada por las conclusiones del acuerdo, ya que no figuraba entre las partes signatarias. Si bien las Fuerzas Armadas Rwandesas (FDR) y las FARDC respetaron inicialmente el acuerdo, sus agentes subsidiarios, el M23 –por el bando de Rwanda, así

como otras milicias locales aliadas y antiguos miembros de las FDLR desmovilizados– y la coalición de grupos y milicias progubernamentales congoleñas Wazalendo, junto con las FDLR –por el bando congolés–, no tardaron en reanudar los enfrentamientos. Todas las partes en conflicto aprovecharon para reforzar sus contingentes y reponer armamento. En paralelo, RDC y Rwanda intentaron negociar un acuerdo que incluyera un plan para neutralizar a las FDLR y otro para la retirada de las FDR. La existencia de profundos desacuerdos y la desconfianza mutua en lo que respecta a la aplicación y la secuencia de ambos planes impidieron la concertación de un acuerdo de paz global, que Angola intentó promover sin éxito.⁸⁷

La ofensiva del M23 y de Rwanda en RDC transcurrió en paralelo al fracaso de la UA y ante la pasividad internacional para promover un acuerdo de alto el fuego

Durante todo el año, el M23, con el apoyo del Ejército de Rwanda, fue logrando importantes avances territoriales y fortaleció su control sobre las zonas ocupadas, mientras que en paralelo las FARDC, así como todas las milicias asociadas,⁸⁸ se fueron retirando de posiciones y bases militares. Un ejemplo de ello fue el caso de la base militar en Rwindi, donde se había desplegado la brigada de intervención de la MONUSCO (UN FIB) en octubre de 2023 para frenar militarmente el avance del M23, pero su inacción ante la llegada en marzo de 2024 del M23 y del Ejército de Rwanda (FDR) fue duramente criticada. La UN FIB señaló que tras la retirada de las FARDC, decidió no intervenir ante el potencial militar altamente superior de las FDR, que hubiera implicado graves pérdidas humanas, y también se retiró de la posición. Ese patrón se mantuvo a pesar de la tregua y del alto el fuego, lo cual sugiere, según el Grupo de Expertos, que el verdadero objetivo del M23 siguió siendo la expansión territorial y la ocupación y explotación de los territorios conquistados a largo plazo. A la vez, el Grupo de Expertos constató la presencia de contingentes de las Fuerzas Armadas de Burundi (FNDB) que combatieron junto a las FARDC y Wazalendo en zonas de Kivu Norte, fuera del marco de la misión de la EAC, aunque ni Burundi ni RDC reconocieron este hecho.⁸⁹ En paralelo, cumpliendo con el mandato de retirada de la MONUSCO en fases, tal y como había acordado el Gobierno con la ONU, la MONUSCO se retiró totalmente de la provincia de Kivu Sur en junio de 2024. El hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado no pudieran desplegarse ni operar plenamente en las zonas de las que se retiró la MONUSCO, por estar

87 Véase RDC en capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

88 En septiembre de 2023, el Gobierno creó los Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP) a partir de miembros seleccionados de grupos armados Wazalendo (grupos y milicias progubernamentales) de Kivu Norte para que actuaran como su fuerza asociada “oficial”. Con la nueva denominación se pretendía distinguirlos de otros grupos que también habían adoptado la bandera de los Wazalendo. No obstante, en algunos momentos el término VDP y Wazalendo fue utilizado indistintamente. El Grupo de Expertos señaló que esta dependencia de los grupos armados refleja la desorganización estructural y la debilidad de las FARDC. A la vez, aunque existían mecanismos de coordinación entre los VDP, Wazalendo y las FARDC, los VDP siguieron siendo una coalición poco unificada en que cada grupo armado mantenía su propia estructura de mando independiente, su propia recaudación de impuestos en los territorios bajo su control y su interés en beneficiarse al máximo de los recursos proporcionados por el Gobierno. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 31 de mayo de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Naciones Unidas, S/2024/432 de 4 de junio de 2024.

89 Véase el resumen de RDC (este) en capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2024, informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2024.

concentradas en Kivu Norte, dejó a la población civil en una situación más vulnerable ante los ataques y abusos, que incluyeron saqueos, robos, acoso, violencia sexual, asesinatos y extorsión por parte de grupos armados y fuerzas de seguridad del Estado. Además, en algunas zonas de la provincia se evidenció un vacío de seguridad que fue rápidamente ocupado por grupos armados.

Rwanda siguió negando estar apoyando al M23 o tener presencia en territorio congolés, aunque la firma de la tregua de julio en condición de beligerante era un reconocimiento a esta presencia. Desde 2021 la ONU la había acusado de apoyar militarmente al grupo y en 2023 denunció la participación directa de tropas rwandenses en territorio congolés, que fue en aumento, hasta disponer de entre 4.000 y 7.000 soldados, cifras incluso superiores al contingente militar del M23.⁹⁰ Sin embargo, las denuncias no derivaron en presiones creíbles que modifiquaran la situación. El M23 también ha recibido apoyo y entrenamiento en Uganda, según el Grupo de Expertos de la ONU. La ONU, RDC, EEUU y la UE también condenaron el apoyo y la presencia de Rwanda en territorio congolés, y en el caso de EEUU y la UE sancionaron a algunos de sus líderes políticos y militares, presión insuficiente dada la evolución de la situación. En diciembre de 2023 la organización regional EAC⁹¹ retiró la operación desplegada a inicios de 2023 con la que pretendía apoyar un posible alto el fuego, y ante su fracaso, fue sustituida por una misión sudafricana, la SAMIDRC,⁹² con un mandato ofensivo de apoyo a las FARDC para combatir al M23, aunque sin resultados. A principios de 2025 Rwanda y el M23 habían rodeado de facto Goma, controlando todas las rutas de acceso y abastecimiento, y amenazaban con tomar Sake, la vía de comunicación con Kivu Sur. La expansión territorial del M23 y las FDR desembocó en continuos enfrentamientos e intensos bombardeos de artillería entre el M23/FDR y la coalición de las FARDC en múltiples frentes de la provincia de Kivu Norte. Las FDR se posicionaron en primera línea del frente militar, operaron con armamento de alta tecnología, como sistemas de defensa antiaérea, y participaron directamente en operaciones de combate. El uso de drones por ambas partes también se generalizó. Si hasta febrero de 2024 solo se había documentado el uso de drones por parte de las FARDC, a partir de esa fecha también se identificaron en el bando M23/FDR.

Más de 25 millones de personas, una cuarta parte de la población, necesitó asistencia humanitaria durante

2024 y la violencia y la inseguridad provocaron que la cifra de población desplazada en el país se elevara a más de siete millones de personas a finales de 2024, según diversas organizaciones.⁹³ Menores y mujeres constituyan la mayoría de la población desplazada y se enfrentaban a múltiples violencias superpuestas, ya que además de exacerbar el desplazamiento y la inseguridad alimentaria, la escalada del conflicto también dio lugar a una catástrofe humanitaria y tasas récord de reclutamiento de menores y de violencia de género.⁹⁴ Ambas partes enfrentadas atacaron con asiduidad zonas densamente pobladas e incluso campos de desplazados, y cometieron graves violaciones, como secuestros para obtener rescate, extorsiones, saqueos, encarcelamientos ilegales, torturas, violaciones, asesinatos, homicidios en represalia y ejecuciones de civiles acusados de colaborar con el enemigo. La asistencia humanitaria limitada y las oportunidades de subsistencia empujaron a muchas mujeres y niñas a recurrir al trabajo sexual de supervivencia y también dio lugar a un aumento de las tasas de matrimonio infantil: fuentes de la ONU estiman que el 37% de las niñas en RDC se casan a la fuerza antes de los 18 años.⁹⁵ La violencia sexual siguió siendo muy elevada y los servicios de atención sanitaria para supervivientes, incluida la salud sexual y reproductiva, espacios seguros, mecanismos de protección y vigilancia comunitarios fueron gravemente deficientes.⁹⁶

Cabe destacar que, como consecuencia de la escalada del conflicto, aumentó la explotación ilegal de recursos naturales y colapsó el procedimiento de diligencia debida en diversos yacimientos mineros nuevamente controlados por los grupos armados y en especial, por AFC/M23 y Rwanda. Además, el contrabando hacia Rwanda volvió a aumentar. La coalición AFC/M23 y las FDR pasaron a controlar el territorio de Walikale, rico en minerales, y también Rubaya, en el territorio de Masisi, donde se encuentra la mayor mina de coltán de la región de los Grandes Lagos. AFC/M23 estableció una administración paralela que se encargó de controlar las actividades mineras, el comercio, el transporte y el cobro de impuestos por los minerales producidos. Al menos 150 toneladas de coltán se exportaron fraudulentamente a Rwanda y se mezclaron con la producción rwandesa, según el Grupo de Expertos. En Ituri continuó la explotación del oro al margen del control del Estado, una actividad que generó al menos 140 millones de dólares anuales para grupos armados y redes delictivas.

90 Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 27 de diciembre de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Naciones Unidas, S/2024/969 de 27 de diciembre de 2024.

91 East African Community, East African Community Regional Force (EACRF), [consultado el 15 de diciembre de 2024].

92 SADC, *Deployment of the SADC Mission in the Democratic Republic of Congo*, 4 de enero de 2024.

93 UNHCR, *Democratic Republic of the Congo situation*. [consultado el 31 de enero de 2025].

94 Cone, Devon, Boru Halakhe, Abdullahe, *Ensuring Women's Protection Amid Rising Conflict in Eastern DRC*, Refugees International, abril de 2024.

95 Press Release, "UNICEF calls for urgent action to respond to alarming levels of increasing sexual violence against girls and women in eastern DRC", UNICEF, 18 de mayo de 2023; News and Press Release, "Briefing to the Security Council on the Situation in the Great Lakes Region", OCHA, 24 de abril de 2024.

96 Inter-Agency Standing Committee, *Statement by principals of the Inter-Agency Standing Committee on the Democratic Republic of the Congo – Crushing levels of violence, displacement fuel unprecedented civilian suffering*, UN Women, 30 de abril de 2024.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congoleños que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización de signo yihadista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tablíq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también por Kabila) para presionar a Uganda, y gozaba también del apoyo de Kenia y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congoleña, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil. Desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas congoleñas en 2019 en la región, se ha producido una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil.

Persistieron las acciones insurgentes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el norte de la provincia de Kivu Norte (la región conocida como Grand Nord) y en el sur de la provincia de Ituri, en el este del país, a pesar de las operaciones militares de las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) en su ofensiva en solitario o dando apoyo a las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC) contra las ADF, en el marco de la Operación Shujaa.⁹⁷ Además, cabe destacar que el Grupo de Expertos de la ONU constató un **incremento de contactos entre ISIS y las ADF. La cuarta fase de la operación, que comenzó en noviembre de 2023 y tuvo un éxito limitado, se reinició el 20 de mayo de 2024 e intensificó los asaltos terrestres y aéreos contra las ADF, principalmente**

Las acciones militares debilitaron a las ADF pero también provocaron su disseminación hacia otras zonas de RDC y actos de represalia contra la población civil

al oeste de la carretera RN4. A diferencia de las fases anteriores, que tuvieron un alcance menor, **las operaciones recientes debilitaron notablemente a las ADF**, según señaló el Grupo de Expertos de la ONU sobre RDC en diciembre,⁹⁸ ya que destruyeron sus bastiones y causaron considerables bajas entre sus combatientes y sus líderes, lo que facilitó la huida de cientos de rehenes. Murieron varios comandantes de las ADF, entre ellos los comandantes Braida y Amigo. Las ADF se vieron obligadas a desplazarse constantemente, lo que las debilitó, dificultó su capacidad operacional y sus cadenas de suministro. En respuesta a la intensificación de los ataques, las ADF recurrieron a sus tácticas habituales: aumentar la movilidad, reubicarse para eludir los enfrentamientos directos y desviar la atención de los campamentos principales, y atacar a civiles. Los ataques selectivos de la Operación Shujaa no solo debilitaron al grupo sino que provocaron su expansión hacia la provincia de Ituri, el territorio de Lubero (Kivu Norte) y hacia el oeste de Kivu Norte, hacia zonas donde la presencia de los cuerpos de seguridad era mínima. La Operación Shujaa se extendió más allá de sus fronteras oficiales para perseguir a células de las ADF. No obstante, a pesar de sus pérdidas infligidas por la operación militar ugandesa, las ADF demostraron resiliencia, lo cual plantea interrogantes acerca de la eficacia de la operación para reducir las amenazas a la población civil en la RDC.

En represalia a la ofensiva militar, las ADF lanzaron ataques contra civiles, lo que hizo que en el mes de junio registrara el número más elevado de muertes de civiles. En este sentido, los enfrentamientos y las acciones de represalia de las ADF causaron centenares de bajas, principalmente de la población civil. Según el informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre la RDC de junio,⁹⁹ pese a una reducción significativa del número de ataques de las ADF contra las FARDC y las UPDF desde que comenzó la operación Shujaa en noviembre de 2021, se había producido un aumento simultáneo del número de civiles asesinados por las ADF, lo que se ajusta a la estrategia de las ADF de realizar represalias contra civiles en respuesta a las operaciones militares contra las ADF. Así, aumentaron los asesinatos por venganza, secuestros, saqueos y ataques selectivos contra personal médico e instalaciones sanitarias. Según fuentes de la ONU, las ADF habían matado a más de 1.000 personas en 2023, principalmente civiles, y entre junio y noviembre de 2024 las ADF fueron responsables de la muerte de más de 650 civiles.

97 La operación Shujaa consiste en una ofensiva militar de las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) en territorio congolés en coordinación con las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC) contra el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en represalia por las explosiones perpetradas en Kampala reivindicadas por las ADF el 16 de noviembre de 2021.

98 Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 27 de diciembre de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Naciones Unidas, S/2024/969 de 27 de diciembre de 2024.

99 Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 31 de mayo de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Naciones Unidas, S/2024/432 de 4 de junio de 2024.

En tanto que los ataques de las ADF en territorio ugandés cesaron a finales de 2023, las acciones dentro de la RDC se intensificaron, lo que plantea graves preocupaciones respecto del impacto de la Operación Shujaa en la población civil. A la vez, se produjeron tensiones entre las UPDF y las FARDC debido a la ampliación de las operaciones por parte de las UPDF más allá de las zonas designadas, y acciones bélicas ugandesas que no fueron notificadas a las FARDC. En consecuencia, las FARDC retrasaron e incluso frenaron los despliegues ugandeses más allá del río Ituri, donde se encuentra el cuartel general Madina, centro de operaciones de las ADF, trasladado durante 2024, por temor a que Uganda tuviese una agenda oculta vinculada a sus intereses históricos en Ituri, según destacó el Grupo de Expertos. Debido a la movilidad y diseminación del grupo armado como consecuencia de los ataques, la Operación Shujaa tuvo que cubrir una zona de operaciones más amplia. A esto se sumó el hecho de que la Operación perdió efectivos de las FARDC que fueron redeployados hacia el sur para combatir al M23, lo que provocó en algunas zonas un vacío de seguridad que las ADF pudieron aprovechar. A pesar de las pérdidas infligidas al grupo, este evidenció una capacidad de resistencia al mantener su red de colaboradores en Butembo (Kivu Norte) y ampliarla a Ituri, en particular aprovechando las mismas redes de la comunidad nande de empresarios y personas destacadas de Grand Nord con las que había forjado vínculos a lo largo de los años. Además, mantuvo activas sus redes de apoyo, reclutamiento y adiestramiento a combatientes dentro y fuera de las cárceles, a menudo usando lazos familiares y de amistad.

Por último, cabe destacar el incremento de contactos y relación entre ISIS y las ADF, ya que a partir de junio se produjo un incremento de ataques de las ADF reivindicados por ISIS, disminuyendo el tiempo transcurrido entre los ataques y la reivindicación, lo que sugirió una mayor colaboración y una comunicación más rápida y directa.

RDC (oeste)	
Inicio:	2023
Tipología:	Identidad, Recursos, Territorio Interno
Actores:	RDC, milicias de la comunidad teke, milicias de las comunidades yaka y suku (entre otros, el grupo armado Mobondo) y otras milicias de comunidades aliadas
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El origen del conflicto en la provincia de Mai-Ndombe (oeste) se remonta a mediados de 2022 a partir de un desacuerdo sobre un impuesto tradicional (en el marco de la ley consuetudinaria) sobre los productos agrícolas establecido por los llamados “nativos”¹⁰⁰ de la comunidad teke (comunidad considerada como los terratenientes tradicionales) que se asentaron en la zona antes que las comunidades “no nativas”, en su mayoría yaka, y también los suku, mbala y songe (originarios de las provincias de Kwango y Kwilu). Estas comunidades llegaron a trabajar como agricultores a la meseta de Bateke hace más de cinco décadas. Los agricultores sobrevenidos arrendaron la tierra a los jefes teke a cambio del pago de este impuesto consuetudinario. Hasta hace poco, las comunidades convivían con normalidad y se habían generado vínculos entre ellas. Según fuentes locales recabadas por la ONU, los primeros desacuerdos surgieron ya en 2021 y se intensificaron a principios de 2022 cuando las comunidades “no nativas” se negaron a pagar el aumento del impuesto. Los teke intentaron recuperar por la fuerza el impuesto, con el apoyo de algunos miembros locales de la Policía Nacional Congoleña (PNC) y elementos de las FARDC, y los jefes teke comenzaron a pedir a los agricultores que no querían pagar que abandonaran sus tierras. A mediados de 2022 se desencadenaron los primeros enfrentamientos intercomunitarios, que han ido en aumento durante 2023. La cuestión del pago de impuestos pronto se transformó en una cuestión de control de tierras, y los agricultores, principalmente de la comunidad yaka, comenzaron a reclamar las tierras propiedad de los teke. Otra queja de los agricultores yaka fue que los terratenientes de la comunidad teke habían estado vendiendo la tierra a inversores, aunque esa tierra ya pertenecía a los yaka.¹⁰¹ Los ataques de los teke contra lo que consideraban comunidades “no nativas” provocaron violentas represalias por parte de los yaka, que empezaron a organizar el grupo de combatientes Mobondo, al que se incorporaron miembros de otras comunidades aliadas, que durante 2023 elevó su grado de organización, aumentó sus capacidades militares y ejecutó ataques armados.

La violencia iniciada a mediados de 2022 en el territorio de Kwamouth, en la provincia de Mai-Ndombe (oeste del país), que enfrentaba entre sí a miembros de las comunidades teke y yaka, a la que se sumó la intervención militar gubernamental contra la insurgencia Mobondo (perteneciente a la comunidad yaka), se mantuvo activa durante 2024. Según ACLED,¹⁰² en 2024 se produjeron 246 víctimas mortales en un total de 68 eventos de violencia organizada (batallas, violencia contra civiles y explosiones/violencia remota) en las cinco provincias afectadas en 2024 (Mai-Ndombe, epicentro del conflicto, y Kinshasa, Kwango, Kwilu y Kongo-Central). Estas cifras son sensiblemente inferiores a las contabilizadas en el año 2023 (346 víctimas mortales en un total de 94 eventos violentos), pero siguen poniendo de manifiesto la gravedad de la situación, que lejos de remitir, podría enquistar, según diversos análisis. En 2023 los actos de violencia

¹⁰⁰ La consideración de “nativos” y “no nativos” hace referencia a la denominación del Grupo de Expertos de la ONU en sus dos últimos informes sobre la cuestión, S/2023/431, 13 de junio de 2023, y en especial, al anexo 2 del informe S/2023/990, 30 de diciembre de 2023.

¹⁰¹ Véase el Anexo 2 del informe del Grupo de Expertos. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 15 de diciembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, S/2023/990 de 30 de diciembre de 2023.

¹⁰² ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 31 de enero de 2025].

organizada estuvieron más distribuidos entre las cinco provincias (92 víctimas mortales en Mai-Ndombe, 102 en Kwango, 69 en Kinshasa, 55 en Kongo-Central, 28 en Kwilu), mientras que en 2024 la mitad de los eventos violentos (34 de los 68) se localizaron en la provincia de Mai-Ndombe, epicentro del conflicto, donde se contabilizaron 159 víctimas mortales de un total de 246 (50 en Kwango, 21 en Kinshasa, 12 en Kwilu y 4 en Kongo-Central), cifras que evidencian una reducción y concentración de las acciones en Mai-Ndombe y Kwango.

El conflicto, originado por disputas territoriales y desacuerdos sobre impuestos consuetudinarios, continuó activo en 2024 y la milicia Mobondo siguió ocupando varias agrupaciones tekes en el territorio de Kwamouth. Mobondo siguió atacando a civiles y participó en enfrentamientos violentos con las FARDC y la Guardia Republicana, y aumentó significativamente sus capacidades mediante ataques contra posiciones militares, según destacó el Grupo de Expertos sobre RDC.¹⁰³ Entre los hechos más destacados, en enero de 2024, ataques de las milicias Mobondo en las localidades de Fadiaka y Mbusie, provincia de Mai-Ndombe, provocaron el desplazamiento de más de 5.000 personas hacia la provincia de Kwilu. Estas personas desplazadas, en su mayoría mujeres y menores, se refugiaron en escuelas, iglesias y edificios en construcción, careciendo de alimentos, atención sanitaria y seguridad. El 15 de julio, en la aldea de Kinsele, provincia de Mai-Ndombe, un enfrentamiento resultó en la muerte de 70 personas, incluyendo nueve soldados. Posteriormente, en diciembre murieron más de 40 personas, cuando se produjo una emboscada por parte de la milicia Mobondo contra un destacamento del Ejército en la provincia de Kwango, en el que murieron al menos 21 milicianos y dos soldados, acción que desencadenó una nueva espiral de violencia comunitaria en la que milicianos de Mobondo perpetraron un ataque en el territorio de Kwamouth, en Mai-Ndombe, en el que murieron al menos 12 personas, principalmente mujeres y menores, que fueron quemadas vivas tras ser encerradas en una choza que luego fue incendiada.¹⁰⁴ Este acto de extrema violencia subrayó la brutalidad del conflicto y su impacto devastador en la población civil.¹⁰⁵ A pesar de las dificultades para recabar información y datos, ya que diversos desplazamientos no fueron contabilizados, la organización ACAPS señaló que había al menos 146.000 personas desplazadas como consecuencia de la violencia hasta octubre de 2024.¹⁰⁶

Cabe destacar que, a mediados de marzo, el presidente Félix Tshisekedi, encabezó un intento por explorar negociaciones de paz en que participaron jefes

tradicionales de las comunidades teke y yaka y miembros de la milicia Mobondo, que dieron lugar a un acuerdo de alto el fuego en abril. Sin embargo, la viabilidad del alto el fuego se puso en entredicho cuando las milicias Mobondo mataron a varios civiles el día después de que se firmara el acuerdo, y posteriormente se produjeron nuevos enfrentamientos. Varios jefes teke cuestionaron o se retiraron de la iniciativa de paz por considerarla no suficientemente inclusiva o justa.

Magreb - Norte de África

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli, Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN) con sede en Tobruk, grupos armados de diverso signo – incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) (también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia o ALAF), ISIS, AQMI, mercenarios, Africa Corps (exGrupo Wagner)–, Rusia, Türkiye
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	
En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto obstaculizados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.	

103 Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 31 de mayo de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Naciones Unidas, S/2024/432 de 4 de junio de 2024.

104 Kombi, Yassin, “Communal attacks kill more than 40 people in western DR Congo”, Reuters, 11 de diciembre de 2024.

105 OCHA, “République démocratique du Congo - Maï-Ndombe, Kwango et Kwilu : Aperçu de la situation humanitaire - janvier à septembre 2024”, Reliefweb, 18 de octubre de 2024.

106 ACAPS, “Democratic Republic of Congo. Conflict across the West”, ACAPS, 19 de diciembre de 2024.

En línea con la tendencia registrada en los últimos años, **Libia continuó siendo escenario de un conflicto armado de baja intensidad, con unos niveles de letalidad de la violencia armada muy inferiores a los que se observaban antes del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2020**. De acuerdo con el balance de ACLED, en 2024 se contabilizaron 146 muertes en hechos de violencia organizada vinculados al conflicto libio (batallas, explosiones/violencia remota y violencia contra civiles). La cifra es muy similar a la de 2023 (86 muertes), 2022 (157) y 2021 (115).¹⁰⁷ Anteriormente, en 2020 y 2019, la violencia causaba un número de víctimas mortales mucho mayor –1.500 y 2.000, respectivamente. Esta tendencia se produjo, sin embargo, en un contexto de extrema fragilidad y riesgos asociados a la persistencia de las divisiones y el bloqueo político. Durante el año no hubo avances en las negociaciones para abordar el conflicto y convocar elecciones presidenciales y parlamentarias (postergadas desde 2021). **La fractura institucional siguió materializándose en la coexistencia de dos gobiernos:** por un lado, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede en Trípoli, reconocido por la ONU y con apoyo del Alto Consejo de Estado y, por otro, el Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN), con sede en Tobruk, respaldado por la Cámara de Representantes y el autoproclamado Ejército Nacional de Libia liderado por el exmilitar Khalifa Haftar. El impasse en las negociaciones persistió en un contexto de implicación de actores regionales e internacionales y de la ONU.¹⁰⁸ **En mayo, el enviado especial de la ONU para Libia, Abdoulaye Bathily, dimitió denunciando la falta de voluntad política de los dirigentes libios** y prácticas dilatorias para mantener sus cuotas de poder a expensas de la población libia.

En cuanto a los episodios de violencia, cabe destacar que se produjeron principalmente por **enfrentamientos y competencia por control territorial entre algunos de los numerosos grupos armados que continúan operando en el país**. Las hostilidades se registraron principalmente en la capital, Trípoli, y en sus alrededores, y también en la zona de Zuwara, fronteriza con Túnez, y en las montañas de Kilinja, cerca del límite con Chad. A mediados de año, en medio de las disputas en torno al liderazgo del Banco Central de Libia, milicias rivales se desplegaron en Trípoli en apoyo a ambos bandos, motivando llamamientos de la misión de la ONU en el país (UNSMIL) y otros actores para evitar una escalada. **Durante 2024, diversas informaciones apuntaron también a una creciente presencia de militares rusos** –incluyendo fuerzas especiales y tropas regulares, algunos procedentes de Ucrania– que se sumó a la de miembros del ex Grupo Wagner (a partir de 2024 las fuerzas de esta organización en el continente pasaron a denominarse

Africa Corps). Esta presencia se ha intensificado tras los contactos entre Moscú y el líder militar del este, Khalifa Haftar. En mayo, la prensa alertaba de la presencia de militares y equipamiento de Moscú en al menos 10 localidades del este de Libia. **A lo largo del año, también se informó en diversas ocasiones de la llegada de armas y vehículos militares desde Moscú y del envío de efectivos libios para entrenamiento en Rusia**. Estos movimientos derivaron en expresiones de inquietud de EEUU y en visitas de altos cargos, tanto de Washington, como de la UE, a las autoridades de los dos gobiernos que coexisten en Libia. Paralelamente, en el marco del proceso de Berlín –negociaciones en distintos ámbitos sobre el futuro de Libia promovidas por diversos actores regionales e internacionales–, continuó funcionando el grupo de trabajo sobre seguridad que celebró en Sirte, en octubre, su primera reunión plenaria desde julio de 2023, con participación de la Comisión Militar Conjunta 5+5 (con representantes de ambos bandos). En este encuentro se insistió en la necesidad de unificar las instituciones militares y reorganizar a los múltiples grupos armados que operan en el país, así como avanzar en el repliegue de mercenarios y combatientes extranjeros presentes en el territorio. Al finalizar 2024, sin embargo, se encendieron las alertas por hechos que apuntan en sentido contrario: **Rusia aceleró la transferencia de efectivos militares al país norteafricano desde Siria, tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad** en diciembre, alentando especulaciones sobre un crecimiento de las tropas rusas en el este y sur de Libia.¹⁰⁹

En consonancia con años previos, **Libia también fue objeto de preocupación por la persistencia de múltiples vulneraciones a los derechos humanos**, incluyendo secuestros, desapariciones, detenciones arbitrarias y persecución de activistas, voces críticas y periodistas. La ONU reiteró sus denuncias sobre la violencia sexual en el país, en particular la que padecen las mujeres y niñas migrantes y alertó que la proliferación de armas ilícitas, las divisiones entre actores políticos y los problemas de gobernanza han creado un clima de impunidad en torno a la violencia sexual relacionada con el conflicto. Esta violencia también ha sido utilizada por agentes estatales y no estatales como una táctica para silenciar a periodistas, personas privadas de libertad y mujeres activas en la vida pública con la intención de impedir su participación política. La violencia sexual también ha afectado a personas LGTBIQ+, en especial en centros de detención. Al finalizar el año, grupos de derechos humanos también alertaron de la intención del Gobierno con sede en Trípoli de reactivar la “policía moral” para regular los códigos de vestimenta y comportamiento, en especial de las mujeres, en el oeste del país.¹¹⁰

107 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 14 de febrero de 2025].

108 Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2025.

109 Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

110 Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

1.3.2. América

Centroamérica y el Caribe

Haití	
Inicio:	1964
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS), bandas armadas (incluyendo a Viv Ansanm, una alianza entre dos coaliciones de grupos armados --GPèp y Fuerzas Revolucionarias de la Familia G9 y Aliados)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La grave crisis multidimensional que atraviesa el país –con altos niveles de violencia, movilizaciones masivas, parálisis institucional, fragilidad económica, crisis sociopolítica y humanitaria, control de áreas significativas del país por parte de bandas armadas– se agudizó con el asesinato del Jovenel Moïse en 2021 y el fortalecimiento y alianza de las numerosas bandas armadas que operan en el país. Sin embargo, la fragilidad sociopolítica e institucional del país se remonta a la dictadura de François y Jean-Claude Duvalier (1957-86), el golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide en 1991 tras las primeras elecciones democráticas en la historia del país, la deriva autocrática del mismo Aristide tras su reinstauración en el poder (1994) y su salida abrupta y forzada del país en 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de varias fuerzas y misiones internacionales –Fuerza Multinacional Provisional (2004), MINUSTAH (2004), MINUJUSTH (2017), BINUH (2019), Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (2023)–, la aplicación de sanciones y embargos de armas por parte de Naciones Unidas, o el desembolso de cuantiosos recursos por parte de la cooperación internacional no han logrado revertir la inestabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

En 2024, en paralelo a la agudización de la crisis política, se produjo un incremento sin precedentes en los niveles de violencia y un grave deterioro de la crisis humanitaria que enfrenta el país.¹¹¹ El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk declaró que en 2024 como mínimo 5.601 personas murieron como consecuencia de la violencia de las bandas armadas que operan en el país, un 20% más que en 2023 y la cifra más alta de la historia del país. Según un informe del International Crisis Group publicado en noviembre, en los últimos tres años, las bandas armadas han sido responsables de la muerte de más de 10.000 personas. Además, Naciones Unidas también documentó un importante incremento en el número

de secuestros en 2024 (unos 1.500), linchamientos de miembros de bandas armadas y personas asociadas con ellas (315) y ejecuciones sumarias (281 casos, en algunos casos con presunta participación de unidades policiales). La tasa de homicidios (62 cada 100.000 habitantes) se incrementó en un 52% respecto del año anterior y fue de las más altas del mundo y la segunda en América Latina y el Caribe (solamente superada por Islas Turcas y Caicos). En cuanto a las consecuencias humanitarias de la situación de violencia que vive el país, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) declaró que a finales de año más de un millón de personas (9% del total de la población, más de la mitad menores) estaban desplazadas a causa de la violencia, más del triple que en diciembre de 2023. Naciones Unidas también advirtió que el 48% de la población padecía altos niveles de inseguridad alimentaria, que menos de una cuarta parte de los hospitales del país estaban operando con normalidad, que la situación de violencia impedía la escolarización de más de 300.000 menores y que en 2024 se incrementaron en más del 1.000% los casos de violencia sexual contra menores. UNICEF declaró que el número de menores reclutados por grupos armados había aumentado un 70% en 2024, y que entre un tercio y la mitad de los miembros de los grupos armados eran menores. En términos de **patrones de conflictividad**, los dos factores más determinantes del año fueron el **despliegue operacional a partir de junio de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad** (MSS, autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en octubre de 2023), y la **creación de una alianza (Viv Ansanm) entre las dos principales coaliciones de bandas armadas del país**, la GPèp (liderada por Gabriel Jean Pierre, 'Ti Gabriel') y la Familia G-9 y Aliados (liderada por Jimmy Chérizier, 'Barbecue'), que controlan el 85% de la región metropolitana de la capital. Según algunas estimaciones, en Haití operan unas 300 bandas armadas, una cifra que, según el centro de investigación ACLED,¹¹² se ha duplicado desde el asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021. Según dicho centro, el 56% de la población se halla expuesta a la violencia, la mayoría en el departamento Oeste (3,3 millones de personas, especialmente en la región metropolitana), seguido de los departamentos de Artibonite (casi 800.000), Centro (280.000), Nippes (220.000) y Noroeste (150.000).

Aunque la alianza Viv Ansanm se creó en septiembre de 2023, no empezó a operar hasta febrero de 2024. Según ACLED, la alianza entre bandas que hasta entonces eran rivales permitió que se redujeran significativamente los enfrentamientos entre ellas –la principal fuente de violencia en los años anteriores– y que estas pudieran expandirse territorialmente, consolidar su potencial económico a través de actividades ilícitas, incrementar su capacidad de confrontar militarmente al Estado y articular de manera más clara sus demandas políticas.

¹¹¹ En ediciones anteriores de esta publicación, Haití era analizado en el capítulo de Tensiones, pero en 2024 fue considerado como un conflicto armado por el claro incremento de la violencia, la mayor coordinación bandas armadas, la articulación de demandas políticas por parte de estas y el despliegue operacional y entrada en combate de la MSS, entre otras cuestiones.

¹¹² ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 31 de enero de 2025].

A finales de febrero, Viv Ansanm inició una oleada de violencia masiva, saqueos y ataques a puestos de policía, edificios gubernamentales, comercios, instalaciones del puerto, hospitales, escuelas, prisiones (el 5 de marzo fueron liberados unos 4.000 reclusos de dos cárceles) o el palacio presidencial. Dichos ataques, durante los que cientos de personas murieron, se produjeron coincidiendo con un viaje del entonces primer ministro Ariel Henry a Kenia para concretar el despliegue de la MSS. En ausencia del primer ministro, el líder de la coalición G-9, Jimmy Chérizier declaró que si Henry no dimitía y la comunidad internacional seguía brindándole apoyo, Viv Ansanm iniciaríaría una guerra civil que conduciría a un genocidio. A pesar de declarar el estado de emergencia, las fuerzas de seguridad no pudieron revertir la situación y las bandas armadas tomaron el control del principal aeropuerto y negaron la entrada de Henry al país a su regreso de Kenia, por lo que este se vio obligado a aterrizar y permanecer en Puerto Rico. Ante tal situación y la constatación de haber perdido el apoyo de las principales fuerzas políticas en Haití y de la comunidad internacional, el 11 de marzo Henry anunció su dimisión y CARICOM, tras una reunión de emergencia en Jamaica, anunció la conformación de un gobierno de transición cuyas principales funciones eran la creación de las condiciones para la celebración de elecciones y el despliegue de la MSS. Tras la dimisión de Henry, en los meses siguientes se redujo la actividad de algunas bandas, permitiendo así que la Policía y la MSS retomaran el control de algunas zonas controladas por dichas pandillas.

En el último trimestre de 2024, después de que Viv Ansanm diera por finalizado el periodo de observación y repliegue por el despliegue de la MSS, las bandas armadas retomaron con fuerza sus ataques coordinados en Puerto Príncipe y en otras ciudades, perpetrando algunas de las masacres de civiles más importantes de la historia del país y provocando un drástico incremento de la violencia y de los enfrentamientos con la Policía, el Ejército y la MSS. Así, las bandas armadas lanzaron una nueva oleada de ataques en la capital y varias zonas de la región metropolitanas, provocando la muerte de cientos de personas, el desplazamiento de decenas de miles de personas, el cierre de cientos de cientos de escuelas, hospitales, tiendas y embajadas, la evacuación de parte del personal de Naciones Unidas y la suspensión de vuelos, después de que tres aviones que sobrevolaban la capital y un helicóptero de Naciones Unidas fueran impactados por balas. A finales de noviembre, más de 100 miembros de las bandas murieron en un período de tres días durante los intentos de ocupar uno de los barrios de la capital, Pétion-Ville. En diciembre, en Cité Soléil (Puerto Príncipe), la banda Wharf Jérémie asesinó a 207 personas acusadas de practicar vudú y causar la enfermedad y muerte del hijo del líder de la banda –Wa Mikanò– o bien de filtrar información a las autoridades. Fuera de la capital, también se registraron

atrocidades. En octubre, en la ciudad de Pont-Sondé (departamento de Artibonite), 115 personas fueron asesinadas y otras 350 resultaron heridas por la banda Gran Griff, que acusó a parte de la población civil de colaborar con el grupo de autodefensa ‘La Coalición’. En noviembre, en la ciudad de Petite-Rivière de Artibonite, más de 100 personas murieron y unas 10.000 tuvieron que desplazarse en dos días por los enfrentamientos entre la Policía, la MSS y las bandas armadas Gran Grief, Palmis y Lika.

En paralelo a la acción de Viv Ansanm y otras bandas armadas, también se incrementó la preocupación por la creciente actividad política y subversiva del excomandante de Policía, exlíder rebelde y antiguo senador Guy Philippe, que a finales de 2023 fue deportado a Haití tras haber cumplido una pena de seis años de cárcel en EEUU por narcotráfico y blanqueo de

capitales. Tras su regreso, Philippe –clave en el derrocamiento del antiguo presidente Jean-Bertrand Aristide en 2004– fundó el partido Fuerza Revolucionaria del Acuerdo Nacional y estuvo muy activo en las movilizaciones para forzar la dimisión de Henry –incluso se postuló para encabezar un gobierno provisional, una opción que fue valorada por algunos sectores de la oposición. Además de las especulaciones sobre sus vínculos con las bandas armadas del país –declaró la

posibilidad de concederles una amnistía si lograba el poder–, uno de los principales focos de preocupación fue su ascendencia sobre cientos de exmilitares desmovilizados y, especialmente, sus vínculos con la Brigada de Seguridad de las Áreas Protegidas, una agencia gubernamental encargada de la protección de zonas expuestas a riesgos ambientales. Buena parte de los miembros de dicha agencia, que algunas fuentes estiman en entre 2.000 y 6.000 miembros, desertaron, participaron en protestas antigubernamentales y en enfrentamientos con la Policía e incluso escoltaron a Philippe en apariciones públicas. En octubre, Philippe instó a la población a incrementar las protestas y anunció su intención de liderar una “revolución” para liberar a Haití y derrocar el sistema.

América del Sur

Colombia

Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia, grupos narcoparamilitares
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del *status quo* mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

El conflicto armado en Colombia se mantuvo activo durante todo el año generando importantes impactos en la población civil del país. A pesar de los diferentes procesos de paz e iniciativas de diálogo activos entre el Gobierno de Colombia y diversos grupos armados, la violencia fue una constante durante todo el año, si bien los acuerdos de alto el fuego que estuvieron vigentes en distintos momentos del año lograron aminorar su intensidad e impactos.¹¹³ Se produjeron enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad y también entre los propios grupos armados entre sí, así como acciones dirigidas específicamente contra la población civil de las zonas más afectadas por el conflicto armado. El centro de investigación ACLED registró un total de 1.720 víctimas mortales como consecuencia de la violencia por parte de los diferentes actores armados que operan en el país.¹¹⁴ Por otra parte, la organización Indepaz documentó el asesinato de 173 líderes sociales durante el año, así como el de 31 firmantes del acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC.¹¹⁵ Además, de acuerdo con las investigaciones de esta organización, en 2024 se produjeron 76 masacres que resultaron en la muerte de 267 personas. En paralelo, OCHA señaló que como consecuencia del conflicto armado 176.000 personas tuvieron que desplazarse de manera forzada, cifra que podría ser inferior a la real dado el elevado subregistro del desplazamiento. A esto se unió que más de 137.000 personas fueron víctimas de confinamientos forzados como consecuencia de las amenazas por parte de los grupos armados. OCHA señaló que el fenómeno de los confinamientos estaba en aumento. Además, se constató la persistencia del reclutamiento de menores. Naciones Unidas señaló que las zonas del país más afectadas por la violencia

fueron los departamentos de Antioquia, Arauca, el sur de Bolívar, el Caquetá, el Cauca, el Chocó, el Meta, Nariño, Norte de Santander, el Putumayo y el Valle del Cauca.

El año se inició con negociaciones en marcha entre el Gobierno y el ELN y un acuerdo de alto el fuego vigente, lo que limitó la violencia en los primeros meses del año al no producirse choques directos entre las fuerzas de seguridad colombianas y la guerrilla. No obstante, sí **se repitieron los enfrentamientos entre diferentes grupos armados por el control del territorio**. Así, desde principios de año se constataron choques armados entre integrantes del grupo EMC y la Segunda Marquetalia, estos últimos en alianza con el ELN, especialmente en el departamento de Nariño, donde además hizo aparición un nuevo grupo paramilitar, las Autodefensas Unidas de Nariño. Posteriormente se produjo la fragmentación del ELN en este departamento, con la desvinculación del frente Comuneros del Sur y se apuntó a un posible acuerdo entre Segunda Marquetalia, Comuneros del Sur y Autodefensas Unidas de Nariño para confrontar militarmente al EMC. También se produjeron enfrentamientos entre el ELN y el EMC en Arauca, así como entre diferentes facciones rivales del EMC. El asesinato de una líder indígena en el Cauca por parte del EMC derivó en la orden por parte del presidente Gustavo Petro de suspensión del acuerdo de alto el fuego en Nariño, Cauca y Valle con el EMC y en la posterior división del grupo armado después de que se confirmara que Iván Mordisco, uno de sus principales dirigentes, había abandonado las negociaciones. El Gobierno anunció en abril que retomaba las operaciones militares ofensivas contra todos los bloques del EMC que habían abandonado la mesa de las negociaciones. En los meses siguientes se produjo un considerable deterioro de la situación de seguridad, especialmente en la zona del Pacífico, donde se repitieron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad colombianas e integrantes de las facciones del EMC contrarias a las negociaciones de paz. El EMC llevó a cabo varios atentados que dejaron muertos y heridos. En uno de los más graves, en mayo, cuatro personas murieron incluyendo dos policías como consecuencia de un atentado contra una estación de policía en el departamento del Cauca, en el suroeste del país. También se registraron enfrentamientos entre facciones rivales del propio EMC, como los que tuvieron lugar entre el Frente 57 y el Dagoberto Ramos, este último uno de los más activos y contrarios al proceso de paz. En junio continuó la escalada e incluso se produjo un tiroteo contra el vehículo en el que se desplazaba el padre de la vicepresidenta Francia Márquez y un sobrino menor de edad que resultaron ilesos y que fue atribuido

113 Véase el resumen sobre los diferentes procesos de paz en Colombia en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

114 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 5 de marzo de 2025].

115 La terminología firmantes del acuerdo de paz hace referencia a los antiguos integrantes del grupo armado FARC-EP que se desmovilizaron tras la firma del acuerdo de 2016.

también a facciones del EMC. **En julio el Gobierno puso fin al acuerdo de alto el fuego con el EMC**, a excepción de la facción liderada por “Calarcá”, con quien mantuvo una mesa de diálogo.

En paralelo, **tras el fin de la vigencia del acuerdo de alto el fuego con el ELN en agosto no se logró negociar una nueva prórroga y por el contrario se produjeron episodios de violencia**, como las convocatorias de “paros armados” con importantes impactos en la población civil, especialmente en lo que respecta a la restricción de la movilidad y la actividad económica. En los meses siguientes hasta finalizar el año, la situación de violencia se deterioró en las zonas más afectadas por el conflicto armado. A pesar de los intentos por reactivar el proceso de paz con el ELN se repitieron los enfrentamientos armados y atentados que dejaron decenas de muertos tanto en las filas insurgentes como en las fuerzas de seguridad colombianas e importantes consecuencias sobre la población civil, con desplazamientos y confinamientos forzados. Naciones Unidas señaló que tras la no renovación del alto el fuego y como resultado de los enfrentamientos armados entre fuerza pública y ELN se produjeron al menos 66 muertes, frente a las cuatro que se habían producido mientras estuvo vigente el alto el fuego.

1.3.3. Asia y el Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Frente Nacional de Resistencia (NRF), ISIS-KP, Afghanistan Freedom Front (AFF)
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidines al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente reprendido por las urnas.

Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral, hasta la conformación de un gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”. En 2021, tras una importante intensificación de la violencia, los talibanes ascendieron de nuevo al poder y se produjo la retirada de todas las tropas internacionales en el país. Desde 2014 está activa en el país la rama regional de ISIS, conocida como ISIS-KP, cuya actividad ha ido en ascenso a lo largo de la última década.

Durante el año se continuaron registrando elevados niveles de violencia en Afganistán y se produjeron enfrentamientos esporádicos entre diferentes grupos armados y las fuerzas de seguridad talibanes, así como ataques armados y atentados que ocasionaron un importante número de víctimas mortales. ACLED registró un total de 1.282 muertes como consecuencia de la violencia durante el año 2024, lo que representó un aumento con respecto al año anterior en que la cifra quedó por debajo del umbral de 1.000 muertes violentas.¹¹⁶ No obstante, diferentes análisis señalaron que a pesar de que en 2024 se registró un repunte de la violencia reflejado en un mayor número de víctimas mortales, la actividad armada de los principales actores de oposición al régimen talibán descendió. Naciones Unidas destacó la incapacidad de los grupos armados de oposición como el NRF o el AFF para lograr el control sobre territorio afgano, aunque durante todo el año se repitieron enfrentamientos de carácter esporádico con las fuerzas de seguridad y también ataques y atentados en diferentes zonas del país. Además, el deterioro de la relación con Pakistán llevó a episodios de violencia en la zona fronteriza entre ambos países.¹¹⁷

Cabe destacar que persistió la actividad del ISIS-KP con varios atentados en el país, si bien su actividad se redujo durante 2024. El año empezó con varios atentados por parte de ISIS. En un ataque contra un autobús en un barrio hazara de Kabul murieron cinco personas y 20 resultaron heridas, todas ellas civiles. En marzo se produjo un atentado de enorme gravedad en Kandahar, contra un banco en el momento en el que numerosas personas se dirigían a cobrar su salario y en el que habrían resultado muertas al menos 20 personas. En abril, un atentado contra una mezquita shíí en la provincia de Herat causó la muerte de seis personas, incluyendo al imam de la mezquita, y otra resultó herida, en una acción reivindicada por ISIS-KP. En mayo, seis personas murieron tiroteadas en la ciudad de Bamyan. Tres de las personas fallecidas eran turistas españoles que viajaban en el país. En

116 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 5 de marzo de 2025].

117 Véase el resumen sobre Afganistán-Pakistán en el capítulo 2 (Tensiones).

septiembre, ISIS-KP reivindicó un atentado contra la comunidad shíí hazara en el que murieron 14 personas y otras cuatro resultaron heridas. El ataque tuvo lugar en la provincia de Daikundi cuando hombres armados tirotearon a un grupo de personas que regresaban de una peregrinación religiosa. La comunidad hazara ha sido objeto de persecución constante en Afganistán. También en septiembre se produjo otro ataque de ISIS contra instalaciones gubernamentales en Kabul. El grupo armado lo reivindicó señalando que se trataba de un acto de venganza por sus integrantes presos.

Por otra parte, si bien de forma muy limitada, continuó la actividad de las principales organizaciones de oposición al régimen talibán, el National Resistance Front (NRF) y el Afghanistan Freedom Front (AFF). Según señalaron algunos medios de comunicación, en abril se produjo un primer encuentro entre los líderes de ambos grupos, Ahmad Massoud (NRF) y Yasin Zia (AFF). En octubre el AFF habría llevado a cabo varios ataques, como el lanzamiento de proyectiles contra el aeropuerto de Kabul e instalaciones militares en la provincia de Faryab. El ataque de mayor gravedad se habría producido contra el ministerio de Interior el 18 de octubre en Kabul, ocasionando la muerte de cuatro talibanes. Por su parte, el NRF reivindicó también en este mismo mes la muerte de tres talibanes en otro ataque diferente en la provincia de Faryab. El NRF reivindicó en diciembre otro ataque contra el ministerio de Interior en el que habrían muerto 10 talibanes y otros cuatro habrían resultado heridos.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad india con la insurgencia naxalita liderada por el grupo armado CPI-M continuó activo en varios estados de la India e incrementó notablemente su intensidad durante el año. El incremento de la violencia se produjo coincidiendo con el cambio de gobierno del estado de Chhattisgarh, que pasó a manos del partido nacionalista hindú BJP en diciembre de 2023. De acuerdo con las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal, 400 personas resultaron muertas durante el año 2024, de las que 296 eran integrantes del grupo armado, 80 civiles y 24 miembros de las fuerzas de seguridad.¹¹⁸ Esta cifra representó un aumento considerable con respecto a la de años anteriores, ya que en 2023 habían muerto 148 personas y en 2022 fallecieron 135 personas según los datos recogidos por este portal de internet. Desde 2018, cuando se produjeron 411 fallecimientos en el marco del conflicto armado, no se registraba una cifra tan elevada. Durante todo el año se produjeron enfrentamientos armados entre integrantes del CPI-M y miembros de las fuerzas de seguridad y algunas zonas resultaron especialmente afectadas por la violencia. Cabe destacar el estado de Chhattisgarh, que fue epicentro de los enfrentamientos y que concentró la mayor parte de incidentes en los que se produjeron muertes, y particularmente el distrito de Bijapur. 313 personas murieron en este estado a lo largo de 2024. Otros estados en los que también se registraron enfrentamientos y muertes fueron Jharkhand, Odissa y Maharashtra.

El año empezó con una operación de las fuerzas de seguridad en Chhattisgarh denominada Surya Shakti, en la que murieron dos insurgentes y otros 65 fueron arrestados y que tuvo como respuesta un ataque insurgente contra instalaciones policiales en el distrito de Bijapur. Al menos cuatro policías murieron como consecuencia de este ataque, aunque desde el grupo armado se señaló que habían muerto 35 policías, lo que fue negado oficialmente. El ministro de interior señaló que las fuerzas de seguridad se habían marcado el objetivo de acabar con la violencia y la ideología naxalita en tres años, afirmaciones que volvieron a repetirse en diferentes momentos del año. Varios de los ataques naxalitas que se repitieron en los siguientes meses tenían como objetivo impedir el despliegue de campamentos de las fuerzas de seguridad. Estos campamentos se han venido estableciendo desde 2019 con el objetivo de poner fin a la acción naxalita, pero han sido objeto de fuerte contestación por las comunidades locales, que han denunciado la militarización de las zonas en las que habita la población adivasi (indígena) con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos naturales a diferentes empresas. La población adivasi ha denunciado asimismo que gran parte de las víctimas de las operaciones de las fuerzas de seguridad no son insurgentes naxalitas,

118 SATP, *Maoist insurgency datasheet*, [consultado el 10 de marzo de 2025].

sino población civil a la que se acusa falsamente de pertenecer a la organización armada. Varios niños y niñas murieron o resultaron heridos durante el año como consecuencia de los enfrentamientos armados. Organizaciones de derechos humanos locales denunciaron que el aumento de campamentos de seguridad en el estado desde 2019 que ha venido unido a un incremento de ejecuciones extrajudiciales y que no se han investigado de forma independiente numerosas operaciones de seguridad contra la insurgencia maoísta en las que se han denunciado muertes de civiles que habrían sido acusados falsamente de ser insurgentes. Entre abril y mayo se produjo una nueva escalada de la violencia en Chhattisgarh y las fuerzas de seguridad anunciaron varias operaciones de seguridad que resultaron en numerosas bajas en las filas maoístas. El 10 de mayo 12 naxalitas murieron en enfrentamientos armados en el distrito de Bijapur; el 30 de abril 10 naxalitas murieron en enfrentamientos armados y el 16 de abril, en la operación de seguridad más mortífera en el estado hasta ese momento, las fuerzas de seguridad señalaron que habían matado a 29 naxalitas en el distrito de Kanker. Los enfrentamientos persistieron en los meses siguientes y en octubre volvió a repetirse una operación de seguridad a gran escala en el distrito de Narayanpur que ocasionó la muerte a 38 insurgentes, convirtiéndose así en la operación con más víctimas naxalitas en el estado.

India (Jammu y Cachemira)

Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

El conflicto armado en Jammu y Cachemira se mantuvo en niveles similares al año anterior, con un ligero descenso en el número de personas fallecidas como consecuencia de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad indias y los diferentes grupos armados que operan en el territorio. Según las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal, durante 2024 murieron 127 personas como consecuencia del conflicto armado, mientras que el centro de investigación ACLED registró una mortalidad de 155 personas durante todo el año.¹¹⁹ Si bien la violencia persistió a lo largo de todo 2024, durante en los meses de invierno –como consecuencia de las condiciones meteorológicas extremas de las zonas más afectadas por la violencia– se produjo una notable reducción tanto en los enfrentamientos como en los ataques insurgentes y las operaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Se registraron enfrentamientos y acciones armadas por parte de grupos como Lashkar-e- Tayyaba y Hizbul Mujahideen y las fuerzas de seguridad señalaron que se produjeron infiltraciones de insurgentes procedentes de territorio pakistaní. Además, se llevaron a cabo ataques armados contra población no autóctona de Jammu y Cachemira, como ya sucediera en años anteriores en los que se incrementaron los ataques armados y asesinatos de población migrante. Julio y agosto fueron meses en los que se concentraron un elevado número de eventos violentos, con ataques insurgentes contra las fuerzas de seguridad y operaciones policiales y militares que dejaron decenas de personas muertas.

En paralelo a la persistencia de la violencia, cabe destacar algunos acontecimientos políticos relevantes para el conflicto. En marzo se produjo la primera visita al territorio de Jammu y Cachemira del primer ministro, Narendra Modi, desde que Cachemira fuera despojada de su estatus de estado y reorganizada en dos unidades administrativas calificadas de Territorios de la Unión: Jammu y Cachemira por un lado y Ladakh por otro. Modi anunció la celebración de elecciones regionales para el mes de septiembre de 2024 y se comprometió a restaurar la condición de estado. Por otra parte, en mayo se llevaron a cabo las elecciones generales indias, siendo los primeros comicios desde la retirada del estatus de estado a Jammu y Cachemira. En julio el Gobierno indio amplió los poderes del Teniente Gobernador de Jammu y Cachemira, representante del Gobierno central en la región, otorgándole en exclusiva la competencia sobre la policía y el orden público, con el objetivo de incrementar el control sobre la seguridad en el marco de la celebración de elecciones regionales. Estas tuvieron lugar finalmente en septiembre y en ellas resultó victoriosa la formación política Conferencia Nacional, en cuyo programa se incluía la restauración de la condición de estado para Jammu y Cachemira.

¹¹⁹ SATP, *Jammu & Kashmir Datasheet*, [consultado el 5 de marzo de 2025]; ACLED, *ACLED Explorer*, [consultado el 5 de marzo de 2025].

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), ISIS-KP
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufies y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación Zarb-e Azb para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur. Tras el ascenso de los talibanes al Gobierno en Afganistán en 2021, el conflicto armado en Pakistán se intensificó.

El conflicto armado en Pakistán experimentó una notable escalada durante todo el año, con un aumento importante tanto de los enfrentamientos armados como de las muertes derivadas de estos eventos violentos. Diversos medios de comunicación señalaron que 2024 había sido el año con más mortalidad registrada como consecuencia del conflicto armado en una década. De acuerdo con las cifras recopiladas por el Center for Research and Security Studies (CRSS) de Pakistán, durante 2024 murieron como consecuencia de la violencia 2.546 personas en el conjunto del país.¹²⁰ De estas, 1.616 tuvieron lugar en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, epicentro del conflicto armado entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y la insurgencia talibán pakistaní del TTP. No obstante, la acción armada de este grupo no se restringió a esta

El conflicto armado en Pakistán sufrió un grave deterioro y se intensificó notablemente la violencia

provincia y se registraron ataques armados en otras zonas del país también. Así pues, se produjo un notable incremento de la violencia con respecto al año anterior, cuando según el CRSS se habían producido 1.524 muertes como resultado del conflicto en todo el país. El centro de investigación ACLED registró un total de 1.957 muertes como consecuencia del conflicto armado en 2024 en el conjunto de Pakistán.¹²¹ Además, en lo relativo a la dimensión de internacionalización del conflicto, cabe destacar el deterioro de las relaciones entre Pakistán y Afganistán, con múltiples episodios de violencia en la zona fronteriza entre ambos países y con acusaciones de Pakistán a Afganistán de dar cobijo y facilitar la acción armada del TTP en Pakistán desde sus bases en Afganistán. Si bien en algunos momentos hubo intentos de negociación de altos el fuego de carácter local entre los líderes tribales y la insurgencia, estos no fructificaron o su alcance fue muy limitado. Además, el Gobierno anunció el inicio de la operación de seguridad denominada Azm-e-Istehkam (“Determinación para la estabilidad” en urdu), con el objetivo de hacer frente a la creciente acción de la insurgencia y muy enfocada a la acción transfronteriza desde Afganistán. El Ejecutivo anunció la aprobación de presupuesto adicional (60.000 millones de rupias, cerca de 200 millones de euros) para mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Ante las críticas que se produjeron tras el anuncio, en un contexto de fuerte crisis política en el país como consecuencia de las elecciones de febrero, el Gobierno señaló que no se trataba exclusivamente de una operación de carácter militar, sino que estaría complementada con otras medidas socioeconómicas, así como iniciativas diplomáticas para presionar al régimen talibán de Afganistán. Además, destacó que esta operación no provocaría el desplazamiento de grandes cantidades de población, como había sucedido en operaciones de seguridad anteriores, como Zarb-e-Azb, que se inició en 2014, después de un atentado insurgente contra el aeropuerto de Karachi y que dio lugar a operaciones aéreas en las zonas fronterizas con Afganistán.

Se produjeron centenares de enfrentamientos armados durante todo el año y cada mes murieron decenas de personas como consecuencia de estos. La mayor parte de la violencia por parte del grupo armado TTP se concentró en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, especialmente en los distritos de Waziristán Norte y Sur, así como en Bajaur y Khyber. Previamente a las elecciones de febrero se produjeron algunos incidentes violentos. Durante los meses siguientes se produjeron múltiples enfrentamientos y se constató la expansión de la acción armada del TTP hacia la provincia de Punjab. La mayor parte de las acciones armadas del TTP tuvieron como objetivo las fuerzas de seguridad, en un intento de ampliar el control territorial en las zonas tribales.

120 CRSS, *Annual Security Report 2024*, CRSS 2024.

121 ACLED, Explorer, <https://acleddata.com/explorer/> [consultado el 5 de marzo de 2024].

En marzo, cinco ingenieros chinos murieron como consecuencia de un atentado del TTP. En diciembre, en uno de los ataques de mayor gravedad del año, 16 soldados murieron después de que el TTP dirigiera una acción armada contra un puesto de control en Makeen, en el distrito de Waziristán Sur. En respuesta a este ataque, las fuerzas de seguridad pakistaníes respondieron con bombardeos aéreos en territorio afgano que causaron decenas de muertes, incluyendo civiles según la UNAMA, misión de Naciones Unidas en Afganistán. Además de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el TTP, también se produjeron episodios de violencia sectaria. En noviembre, un autobús en el que viajaban pasajeros chiitas en el distrito de Kurram fue atacado por hombres armados sin identificar y más de 40 personas murieron, desatándose la violencia en los días posteriores en diferentes poblaciones resultando en la muerte de más de 100 personas. Posteriormente, el grupo armado ISIS-KP hizo un llamamiento a proteger a la población suní de los ataques chiitas. Este grupo también fue responsable de varios actos de violencia en el país en diferentes momentos del año. En paralelo, se produjeron acciones armadas tanto de las fuerzas de seguridad pakistaníes contra objetivos talibanes en Afganistán, como de las fuerzas talibanes afganas en Pakistán, apuntando a las bases del ISIS-KP.

Pakistán (Baluchistán)

Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, BLA, BNA, BLF y BLT; LeJ, TTP, ISIS-KP
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro períodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revertiera en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, sino miles, de baluchis a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto armado en la provincia pakistaní de Baluchistán experimentó una nueva escalada y aumentó considerablemente el número de personas muertas como consecuencia de la violencia, consolidándose la tendencia al alza que se había registrado el año anterior. Según las cifras recogidas por el Center for Research and Security Studies (CRSS) de Pakistán, durante 2024 murieron como consecuencia de la violencia asociada al conflicto armado en la provincia de Baluchistán 782 personas, frente a las 399 que murieron el año anterior.¹²² El centro de investigación ACLED registró 1.086 muertes como consecuencia de la violencia en esta provincia durante 2024.¹²³ Además de la insurgencia baluchi, integrada por diferentes grupos armados, también se registraron acciones armadas por parte de los talibanes pakistaníes y del ISIS-KP, si bien estos grupos centraron sus acciones armadas en otras zonas del país mayoritariamente. El año se inició con varios eventos violentos vinculados a la celebración de las elecciones generales en Pakistán que tuvieron lugar en febrero. Los hechos más graves tuvieron lugar la víspera de la cita electoral, cuando dos atentados en las sedes del partido Jamiat Ulema-e-Islam en el distrito de Killa Saifullah y de un candidato independiente en el distrito de Pishin causaron la muerte de 30 personas e hirieron a otras 50. ISIS-KP reivindicó la autoría de estos atentados. En los meses siguientes persistió la violencia, tanto en enfrentamientos entre insurgentes y fuerzas de seguridad como a través de atentados dirigidos a diferentes objetivos. En varios momentos del año el grupo armado BLA reivindicó haber llevado ataques contra población punjabí en la provincia. En abril, nueve trabajadores de origen punjabí fueron secuestrados y posteriormente tiroteados; en mayo siete personas murieron en similares circunstancias y en agosto, más de 70 personas incluyendo civiles y militares murieron como consecuencia de diferentes ataques llevados a cabo por el BLA. El grupo armado señaló que los ataques estaban dirigidos contra las fuerzas de seguridad y que su intención era tomar el control de las principales carreteras de la provincia. Existe la percepción de que las fuerzas de seguridad pakistaníes están conformadas mayoritariamente por población de origen punjabí, lo que habría motivado las acciones de la insurgencia baluchi contra este grupo de población. A estos ataques se unieron otros contra trabajadores de origen chino que participan en diferentes proyectos de construcción de infraestructura por parte de empresas chinas en la provincia y que han sido objeto de atentados en los últimos años por parte de la insurgencia, ante las acusaciones de apropiación de los recursos naturales de la provincia. En noviembre se produjo otro de los atentados más graves del año, con la explosión de una bomba en la estación de tren de Quetta, capital de Baluchistán. Como consecuencia de este atentado suicida murieron 26 personas, de las

122 CRSS, *Annual Security Report 2024*, CRSS 2024.

123 ACLED, Explorer, <https://acleddata.com/explorer/> [consultado el 5 de marzo de 2024].

que al menos 12 eran soldados. El grupo armado BLA reivindicó la acción en la que resultaron heridas otras 60 personas. El atentado tenía como objetivo una unidad militar que se hallaba en la estación en este momento. En paralelo a las acciones de la insurgencia armada, se repitieron las denuncias de graves violaciones de derechos humanos contra las fuerzas de seguridad por parte de organizaciones de la sociedad civil, que en los últimos años han incrementado su actividad en la provincia. Así, se produjeron denuncias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras formas de represión contra activistas políticos y de derechos humanos. Estas organizaciones expresaron su preocupación por el inicio de una operación de seguridad a gran escala en el país, denominada Azm-e-Istehkam, cuyo objetivo no es únicamente hacer frente a la insurgencia talibán, sino también a las organizaciones insurgentes baluchis. A pesar de que las autoridades señalaron que en paralelo a las operaciones militares contra la insurgencia se llevarían a cabo medidas de carácter socioeconómico y político, la represión contra la sociedad civil baluchi persistió. En julio al menos cuatro personas murieron y cientos resultaron heridas como consecuencia de la respuesta de las fuerzas de seguridad durante varias protestas convocadas por la organización de derechos humanos Baloch Yakjehti Committee, acusada de terrorismo por las autoridades pakistaníes. Esta organización había convocado un gran encuentro nacional a finales de julio, cuya celebración fue reprimida por las fuerzas de seguridad.

Sudeste Asiático

Filipinas (Mindanao)

Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones que luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato.

Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por primera vez un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

Se redujeron notablemente los niveles de violencia en las áreas de mayoría musulmana del sur de Filipinas y el Gobierno anunció la neutralización de dos de las organizaciones armadas más importantes en la región de Mindanao, pero siguieron registrándose frecuentes enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos armados de distinta índole, o incluso entre estos. Según el centro de investigación ACLED,¹²⁴ solamente en la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulman (RABMM) en 2024 se registró la muerte de 157 personas como consecuencia de episodios de violencia política, una cifra claramente inferior a las 235 víctimas mortales de 2023 o a las 202 del 2022. Sin embargo, cabe considerar que, históricamente, el conflicto armado en Mindanao también ha afectado a regiones que no forman parte de la RABMM, de modo que la mortalidad asociada al mismo podría ser superior a la que indican las mencionadas cifras. En paralelo a la implementación del acuerdo de paz de 2014 y al despliegue institucional del Gobierno de la RABMM (liderado de manera provisional por el MILF, la principal organización insurgente en Mindanao en las últimas décadas), **Manila destacó el debilitamiento –incluso el desmantelamiento– de algunos de los grupos más armados con mayor capacidad operativa en la región.** Así, a finales de marzo, el jefe del Comando de Mindanao Occidental (Westmincom) declaró que, aunque todavía quedaban activos algunos miembros de Abu Sayyaf en las provincias de Sulu y Basilan, **la estructura del grupo había sido desmantelada después de más de tres décadas de actividad armada.** En enero, unos 100 miembros de Abu Sayyaf en la provincia de Sulu habían depuesto las armas y acordado su participación en los programas de reintegración del Gobierno. En diciembre, el Gobierno anunció la rendición del grupo liderado por Tawakkal Bayali, declarando que finalmente ya no había actividad de Abu Sayyaf en la provincia de Basilan, uno de los bastiones históricos del grupo. Las autoridades reconocieron que, además de las operaciones de contrainsurgencia del Estado, tal rendición había sido posible gracias a los esfuerzos del MILF y el MNLF en la región. A finales de 2023 el Ejército ya había

124 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 31 de enero de 2025].

anunciado la rendición de 966 miembros del grupo en Basilan y había declarado a la provincia de Sulu libre de la influencia de Abu Sayyaf. Durante un operativo en diciembre de 2023 en Basilan ya había muerto el líder de Abu Sayyaf, Mudzimar Sawadjaan, máximo responsable del atentado en la catedral de Jolo en 2019, que mató a 20 personas e hirió a 102.

En la misma línea, en febrero las Fuerzas Armadas declararon que el Grupo Maute (otro de los grupos más activos en los últimos años) estaba al borde del colapso militar y anticiparon su desmantelamiento a lo largo del año. Poco antes, el Gobierno había informado que 12 miembros del grupo habían muerto y otros seis más habían sido detenidos tras una serie de operaciones de contrainsurgencia en las que también habría muerto el líder del grupo, Khadafi Mimbesa, alias “El Ingeniero”. La ofensiva contra el Grupo Maute se había intensificado notablemente desde diciembre de 2023, poco después del atentado durante una misa católica en la Mindanao State University, en el que cuatro personas murieron y otras 45 resultaron heridas. Durante tales operativos a finales de 2023 habían fallecido algunos destacados dirigentes del Grupo Maute, como Abdullah Sapal –en ese momento líder del grupo y “emir” de la región. A pesar de tales declaraciones del Ejército sobre el estado terminal del grupo, se siguieron registrando enfrentamientos el resto del año. En abril, por ejemplo, ocho combatientes del grupo murieron y varios soldados resultaron heridos durante los enfrentamientos en Lanao del Sur –bastión del grupo– entre las Fuerzas Armadas y una facción del grupo encabezada por su nuevo líder, Nasser Daud. En cuanto al BIFF, el grupo más activo en los últimos años en Mindanao (especialmente en Maguindanao), en abril el Ejército anunció la muerte de Mohiden Animbang –alias “Kagui Karialan”–, el líder de una de las facciones del grupo con mayor capacidad militar y que en su momento declaró lealtad a ISIS. La muerte de Karialan en la provincia de Maguindanao se produjo en el marco de una serie de ofensivas aéreas del Estado en las que también murieron otros 11 combatientes del grupo. Previamente, en marzo la facción de Karialan había incrementado sus ataques a las Fuerzas Armadas en Maguindanao del Sur tras varios meses de inactividad. El Gobierno también declaró que durante el año se había incrementado el número de combatientes del BIFF que habían decidido entregarse y acceder a los programas de desmovilización y reintegración gubernamentales. Por otra parte, el centro de investigación Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) publicó que la organización yihadista de origen indonesia Yemaah Islamiyah habría tomado la decisión de disolverse, aunque no descartaba la posibilidad de que surgieran facciones que siguieran apostando por la lucha armada. En varias ocasiones en

las últimas décadas Manila ha denunciado la presencia de miembros de Yemaah Islamiyah en Mindanao, o la alianza de esta con algunos de los grupos armados que operan en la región.

Se redujeron notablemente los niveles de violencia en Mindanao y el Gobierno filipino anunció la neutralización de dos de las organizaciones armadas más importantes en la región

Finalmente, en Mindanao se produjeron numerosos hechos de violencia que involucraron a milicias al servicio de políticos o clanes locales o redes de crimen organizado; algunos episodios de “rido” –enfrentamientos comunitarios o clánicos–; escaramuzas entre unidades distintas del MILF –o entre estas y facciones del MNLF o del BIFF–, así como choques entre facciones distintas del MNLF. Varios de estos enfrentamientos fueron protagonizados por unidades del MILF pendientes de desmovilización. El acuerdo de paz de 2014 contemplaba el desarme, desmovilización y reincisión de unos 40.000 excombatientes. Aunque ya se han completado varias fases de dicho proceso, a finales de año el MILF advirtió que no se procedería al desarme de los 13.000 excombatientes pendientes hasta que no hubiera avances en otras dimensiones del acuerdo, como la asistencia socioeconómica a los excombatientes del MILF o el desmantelamiento de milicias privadas.

Filipinas (NPA)

Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inició la lucha armada en 1969 y alcanzó su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas (CCP) y al Frente Democrático Nacional (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

A pesar de que la mortalidad vinculada al conflicto armado entre el Estado y el NPA se redujo levemente

respecto del año anterior y de que el Gobierno aseguró en varias ocasiones que el grupo armado estaba sumamente debilitado, en 2024 siguieron registrándose numerosos enfrentamientos entre ambas partes. Según el centro de investigación ACLED,¹²⁵ 173 personas murieron como consecuencia del conflicto armado. Por su parte, las Fuerzas Armadas declararon a principios de diciembre que hasta el momento 146 combatientes del NPA habían muerto durante operaciones de contrainsurgencia mientras que más de 2.200 miembros o simpatizantes del NPA habían sido neutralizados (2.087 se habían entregado y 149 habían sido detenidos). Aunque tales cifras no contemplan la muerte de soldados, policías o civiles, algunos análisis consideran que las cifras de mortalidad del conflicto se han reducido respecto de los años anteriores, con unas 250 y unas 220 víctimas mortales en 2022 y 2023, respectivamente. Cabe considerar la posibilidad de que tal reducción de la violencia estuviera vinculada al comunicado conjunto de noviembre de 2023 –en el que ambas partes se comprometían a intentar resolver el conflicto armado a través del diálogo y cauces políticos– y al hecho de que durante buena parte del 2024 el Gobierno y el NDF hubieran mantenido conversaciones exploratorias para intentar concretar los términos del mencionado comunicado. A finales de año, el Consejo de Seguridad Nacional y el Grupo de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ECLAC, por sus siglas en inglés, el organismo que coordina la estrategia de contrainsurgencia de varias agencias del Estado) **anticipó la derrota militar del NPA durante 2025 porque consideraba que el grupo estaba muy debilitado, con menos de 1.100 combatientes – aunque otras fuentes elevaban considerablemente tal cifra – y solamente 22 frentes –aunque 20 de ellos casi sin actividad—respecto de los 89 frentes que el NPA tenía en 2018.** Además, el Gobierno señaló que los niveles de violencia se habían reducido ostensiblemente en algunos de los principales bastiones del grupo –como Bicol, Samar, Negros y varias partes de Mindanao– y que había declarado varias provincias “libres” de la presencia del movimiento comunista. El Gobierno declaró que cientos de combatientes del grupo también se estaban rindiendo para acogerse a los programas reinserción y amnistía. A mediados de año, el NTF-ECLAC declaró que desde el 2018 más de 44.500 combatientes o simpatizantes del movimiento comunista se han desmovilizado, aunque tales cifras son cuestionadas por varios actores. En este sentido, Manila declaró que solamente en el mes de julio unos 300 excombatientes del NPA se habían acogido a su programa de amnistía. Por su parte, **el Partido Comunista de Filipinas (PCF) no solamente rechazó las declaraciones del Gobierno sobre una eventual derrota militar del NPA, sino que reafirmó la fortaleza política y militar del movimiento,** asegurando que los 14 comandos regionales del NPA

permanecen intactos y que mantiene presencia activa en alrededor de 70 de las 82 provincias del país. El PCF ordenó al NPA que tomara la iniciativa en el conflicto, lanzando nuevas ofensivas tácticas y también reconstruyendo el movimiento clandestino de apoyo a la insurgencia armada.

En cuanto a las dinámicas de violencia, **se registraron enfrentamientos en 42 provincias, la mayor parte en el norte de Mindanao, en el sur de Luzón y algunas de las islas de Visayas.** Cabe destacar especialmente la muerte de 10 combatientes del NPA –incluidos tres comandantes– a finales de junio en la provincia de Nueva Ecija; la muerte de ocho combatientes del NPA en Negros Occidental y siete militares en Masbate en noviembre; o la muerte de cinco altos cargos del NPA en agosto en Iloilo. Uno de los hechos más destacables fue la detención en octubre de Wigberto “Baylon” Villarico, la persona que según el Gobierno había liderado el Partido Comunista de Filipinas (PCF) desde la muerte de Benito Tiamzon y Wilma Austria en agosto de 2022. El NDF exigió su liberación por considerar que está cubierto por el acuerdo de garantías de seguridad e inmunidad, pero el Gobierno consideró que Villarico era un terrorista fugitivo responsable de varias atrocidades y declaró que dicho acuerdo dejó de ser efectivo cuando el expresidente Duterte puso fin a las conversaciones de paz en noviembre de 2017. Por otra parte, tanto el PCF como organizaciones de derechos humanos acusaron al Gobierno de incurrir en violaciones sistemáticas de derechos humanos, enfatizando el fenómeno del “red-tagging”, consistente en vincular a personas críticas con el Gobierno con el movimiento comunista, comportando ello su identificación pública, acoso, intimidación y en ocasiones tortura o incluso asesinato. Human Rights Watch denunció que el Gobierno filipino ha utilizado durante mucho tiempo el “red-tagging” como parte de su estrategia de contrainsurgencia y que tal práctica ha afectado particularmente a grupos de izquierda y organizaciones religiosas, indígenas, sindicales, estudiantiles, ambientalistas o de derechos humanos. Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, realizó una visita al país y pidió al Estado que pusiera fin a tal práctica por considerar que es una forma de suprimir la libertad de expresión, el activismo o la crítica al Gobierno. Khan también destacó que Filipinas es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y declaró que en los últimos 30 años han sido asesinados 117 periodistas, de los cuales 81 casos siguen sin resolverse. En la misma línea, la organización local de derechos humanos Karapatan denunció que durante la Administración de Marcos persistían violaciones de los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas –14 activistas han desaparecido bajo el actual Gobierno.

125 ACLED, [ACLED Explorer](#) [consultado el 31 de enero de 2025].

Indonesia (Papúa Occidental)	
Inicio:	2024
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

Durante el año siguieron registrándose altos niveles de enfrentamientos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el bazo armado de la Organización de la Liberación de papúa (OPM, por sus siglas en indonesio), así como ataques contra población civil, episodios de violencia comunitaria y numerosas acusaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Según el centro de investigación ACLED,¹²⁶ durante el año se produjeron 176 episodios de violencia política que provocaron la muerte de 92 personas. En una línea parecida a la de ACLED, el centro de investigación Human Rights Monitor declaró que en 2024 se registró la muerte de 99 personas –44 de ellas civiles– en los 135 ataques armados que se produjeron en la región, una cifra de ataques superior a la del año anterior (110) y que se ha triplicado desde el año 2018

(44). Por su parte, la Policía declaró que en 2024 se habían registrado 203 actos de perturbación del orden público y la seguridad que habrían provocado la muerte de 92 personas. Aunque la mayor parte de análisis del conflicto identifican al OPM –y su brazo armado TPBN, por sus siglas en indonesio– como el principal actor armado que confronta al Estado en la región, algunos informes han puesto de relieve la naturaleza fragmentada del movimiento. En este sentido, la Policía

declaró que en Papúa operan 24 redes de grupos criminales armados (KKB, por sus siglas en indonesio) que llevan a cabo actos terroristas, así como seis redes de grupos criminales políticos (KKP) que promueven movilizaciones y actos de propaganda. Además de los enfrentamientos directos entre el OPM y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en 2024, como en años anteriores, en Papúa hubo otras formas de violencia –como represión policial de protestas, violencia intercomunitaria y ejecuciones extrajudiciales– que podrían hacer incrementar de manera significativa la mortalidad asociada al conflicto. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, en 2023 el centro Human Rights Monitor y Amnistía Internacional documentaron 42 y 82 casos respectivamente. En cuanto al alcance territorial del conflicto armado, en 2024 el conflicto se extendió a áreas que anteriormente no se habían visto afectadas, habiéndose registrado episodios de violencia en 18 regencias o distritos. La regencia más afectada fue Intan Jaya (35 episodios), seguida de Puncak, Nduga, Puncak Jaya, Yahukimo y Panai (entre 10 y 20), y Mimika, Pegunungan Bintang, Dogiyai y Tambrauw (cuatro cada una).

Varias agencias de Naciones Unidas denunciaron que la agudización del conflicto que se ha vivido en la región desde diciembre de 2018 –tras el asesinato de 20 personas que construían una carretera– ha empeorado la crisis humanitaria de la región. Human Rights Monitor declaró que a **finales de año había más de 85.000 personas desplazadas internas** en las seis provincias que conforman la región de Papúa Occidental –más de dos terceras partes de estas en la regencia de Nduga (provincia de Papúa de las Tierras Altas)– y que tal fenómeno podría verse agravado por la destrucción deliberada de viviendas y ganado de población civil por parte del Ejército, cuyo objetivo sería la interrupción de suministros al OPM. Dicho centro también denunció que la mayoría de personas desplazadas enfrentaban serias dificultades de subsistencia y que más de 1.200 de ellas habrían muerto desde diciembre de 2018 por las precarias condiciones en las que viven. En cuanto a las dinámicas de conflicto, algunos de los episodios de violencia más virulentos se

Naciones Unidas denunció que la agudización del conflicto que se ha vivido en la región indonesia de Papúa Occidental desde diciembre de 2018 ha empeorado la crisis humanitaria

produjeron en el marco de los operativos de rescate de un piloto neozelandés capturado por el OPM en febrero de 2023. Durante tales operaciones, que provocaron la destrucción de cuatro campamentos del OPM en Nduga, el Ejército utilizó ataques aéreos con aviones militares, helicópteros y drones. En septiembre dicho piloto fue liberado tras una negociación en la que participaron líderes religiosos y comunitarios. En la misma línea, otro episodio que provocó atención internacional fue el asesinato de otro piloto neozelandés

en agosto, poco después de que el helicóptero que pilotaba aterrizará en el distrito de Mimika (provincia de Papúa Central) y de que sus cuatro pasajeros –papús– fueran liberados. El OPM negó cualquier participación en tal asesinato pero a la vez advirtió a las compañías de aviación civil sobre la prohibición de aterrizar en la región por considerar que está en conflicto armado.

Algunas voces del movimiento nacionalista papú se mostraron críticas con la elección en los comicios presidenciales de febrero del general Prabowo –acusado de violaciones de derechos humanos tanto el Papúa como el Timor-Leste y de ejercer puestos de responsabilidad en la dictadura de Suharto, de quien es su ex yerno. Dichas voces criticaron el anuncio del nuevo Gobierno de desplegar cinco nuevos batallones –unos 5.000 soldados– en Papúa para proteger proyectos de infraestructuras. Además, otros líderes papús advirtieron sobre los efectos que podría tener en las dinámicas del conflicto el anuncio del Ejecutivo de reanudar –tras 24 años– el programa de transmigración de población hacia las regiones orientales del archipiélago menos pobladas, incluyendo Papúa. Según cifras oficiales, entre 1964 y 1999 se produjo una migración a Papúa de entre 312.000 y 390.000 personas. Varios análisis consideran dicho programa de transmigración una de las causas profundas del conflicto que se vive en la región porque provocó profundos cambios demográficos y una creciente desposesión y marginación de la población indígena. En paralelo, **varios líderes de la región criticaron las políticas medioambientales de Yakarta, calificándolas de ecocidio.** En su primera visita oficial, Prabowo se desplazó a la región de Merauke (Papúa) para supervisar proyectos de suficiencia alimentaria, considerados por algunas organizaciones como el megaproyecto de deforestación más grande del mundo –dos millones de hectáreas para la plantación de caña de azúcar y arroz. A pesar de todo ello, a finales de año Benny Wenda –presidente del Gobierno provisional de Papúa Occidental y del Movimiento Unido para la Liberación de Papúa Occidental– presentó a Prabowo sus condiciones para negociar la resolución del conflicto: retirada de las Fuerzas Armadas y retorno de la población desplazada; libre acceso a Papúa a prensa nacional e internacional; autorización para una visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y celebración de un referéndum de autodeterminación supervisado internacionalmente. Aunque Yakarta no respondió a dicho llamado, sí anunció su intención de indultar a 44.000 personas para aliviar el hacinamiento en las cárceles, incluyendo a 18 personas en Papúa para fomentar la reconciliación

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados. En febrero de 2021 la cúpula militar del país llevó a cabo un golpe de Estado que puso fin a la transición a la democracia en el país y dio lugar a una intensificación del conflicto armado y a la aparición de las Fuerzas de Defensa Popular (PDF), organización que agrupa a decenas de grupos armados opuestos al régimen militar, mientras persistían los enfrentamientos con las insurrecciones étnicas.

El conflicto armado escaló en Myanmar durante el 2024 y se produjo una importante intensificación de los enfrentamientos armados y las operaciones militares e insurgentes, con victorias de suma importancia para la oposición armada. De acuerdo con los datos recopilados por el centro de investigación ACLED, durante 2024 murieron 19.727 personas como consecuencia de la violencia asociada al conflicto armado.¹²⁷ Algunos análisis señalaron la gravedad de las cifras de mortalidad de este conflicto, así como el enorme impacto que estaba teniendo sobre la población civil, que representaría aproximadamente el 17% de las personas fallecidas como consecuencia de la violencia.¹²⁸ Estos análisis señalaron que Myanmar se situaría solo por detrás de Palestina, Nigeria y RDC en términos de víctimas civiles del conflicto. Los bombardeos de las Fuerzas Armadas tuvieron un impacto especialmente grave en la población

127 ACLED, [ACLED Explorer](#), [consultado el 5 de marzo de 2024].

128 Casey Johnson, *The Civilian Cost of Myanmar's Civil War: An Accounting of the First Three Years*. Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance (CFE-DM).

civil, provocando numerosas muertes y heridos. La escalada de la violencia se debió fundamentalmente a la continuación de la operación 1027, iniciada en octubre de 2023 por los grupos armados integrantes de la Alianza de los Tres Hermanos –conformada por el MNDAA (grupo armado kokang), el TNLA (grupo ta'ang) y el AA (grupo rakáin). La segunda fase de esta operación se concentró en la región de Mandalay, con enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales por el control de la segunda ciudad del país. **Los grupos armados lograron importantes avances y el control de diferentes territorios en el país, si bien los altos al fuego que se acordaron en diferentes momentos del año promovidos por China frenaron un mayor avance de la insurgencia y permitieron al Gobierno birmano reorganizar sus acciones de contraofensiva.** El Gobierno de Myanmar perdió el control de territorios en el noreste del país y los enfrentamientos armados continuaron en los estados Rakhine, Kachin, Shan, Chin, Karenni y en la región Tanintharyi y además reactivó la ley sobre conscripción en un intento de reforzar sus Fuerzas Armadas.

El año se inició con fuertes enfrentamientos tras el colapso del alto el fuego que se había pactado el 23 de diciembre de 2023. Estos enfrentamientos, protagonizados fundamentalmente por las fuerzas de seguridad birmanas y el grupo armado MNDAA permitieron importantes avances a la insurgencia, que logró capturar la ciudad de Laukkai tras la rendición de 2.400 soldados. Al mismo tiempo el AA amplió sus acciones armadas en el estado de Rakhine, tomando el control de varias ciudades. Esta ofensiva se prolongó en los meses siguientes y el AA logró ampliar su control territorial, capturando amplias zonas del estado. El AA logró rodear la ciudad de Ann, sede del cuartel general del comando occidental. En diferentes momentos del año se especuló con la capacidad del grupo armado de expandir su acción militar más allá del territorio del estado Rakhine hacia el centro del país. Especialmente importantes fueron los enfrentamientos en el estado Rakhine, donde el régimen birmano casi perdió el control del Comando Oeste y se produjeron múltiples avances por parte del grupo armado rakáin AA, que logró capturar amplias zonas del estado. Según el USIP, al finalizar 2024 el AA controlaba aproximadamente el 88% de este estado. Este centro sostenía que en paralelo, el KIA había logrado tomar más de 200 bases militares y 14 ciudades en el estado Kachin y prácticamente todo el norte del estado Shan estaba en manos de tres grupos armados, TNLA, MNDAA y UWSA. Por su parte, la BBC publicó un estudio en el que señalaba que el Gobierno solo tenía el control completo del 21% de territorio del país, aunque mantenía el control de las principales ciudades y la mayoría de las zonas urbanas.¹²⁹ Durante todo el año se incrementó

notablemente la coordinación y comunicación entre los diferentes grupos armados que operan en el país, tanto entre las tradicionales insurgencias étnicas como con los grupos de autodefensa, conocidos como PDF, surgidos tras el golpe de Estado de 2021, algunos de los cuales reciben instrucciones del Gobierno en el exilio.

Los grupos armados lograron importantes avances y el control de diferentes territorios en Myanmar

En diciembre los grupos armados lograron consolidar avances importantes, y el AA ostentaba el control sobre la totalidad de la frontera con Bangladesh, además de haber logrado el control completo de la ciudad de Ann, sede del Comando Oeste de las Fuerzas Armadas birmanas. También el KIA logró importantes éxitos en diciembre. Al finalizar el año se planteaba la posibilidad de que los grupos armados pudieran tratar de entrar en Yangon y Naypyidaw, aunque persistían las incertidumbres por el papel de China y su capacidad para poner freno a las acciones de la insurgencia. Así pues, 2024 concluía con los grupos armados en posición de fuerza frente al régimen militar, habiendo consolidado importantes logros territoriales y poniendo en jaque al Gobierno birmano, si bien el papel de China podría desequilibrar las fuerzas en 2025.

Tailandia (sur)

Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Pattani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

En el sur de Tailandia, en paralelo a la crisis política del país y al lento avance de las negociaciones de paz

129 Rebecca Henschke, Ko Ko Aung, Jack Aung & Data Journalism Team, “[Soldier-spies in Myanmar help pro-democracy rebels make crucial gains](#)” BBC Eye Investigations & BBC Verify, 20 de diciembre de 2024.

entre el Gobierno y el grupo armado de oposición BRN, se vivió un incremento de los niveles de violencia en las provincias de mayoría musulmana. Según el centro de investigación Deep South Watch, 129 personas murieron y 357 resultaron heridas en los 632 episodios de violencia que se registraron en las provincias sureñas de Pattani, Narathiwat, Yala y Songkhla –ordenadas por número de eventos del conflicto armado. Tales cifras suponen un incremento significativo respecto de los 481 episodios de violencia del año anterior –en los que 116 personas murieron y otras 217 resultaron heridas– y el número más alto de ataques desde el año 2016. Desde el año 2012, en el que se registraron 1.850 episodios de violencia en todo el año, el número de tales episodios se redujo de forma continua hasta alcanzar su mínimo histórico en 2020. Desde entonces, el número de episodios de violencia protagonizados principalmente por el BRN y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se incrementó progresivamente cada año. Aunque en dicho periodo el número de víctimas mortales no se incrementó significativamente, el número de personas heridas cada año sí aumentó de manera importante –161 en 2020 y 357 en 2024. Según Deep South Watch,¹³⁰ desde el inicio de la violencia en 2004 se han registrado 22.949 episodios de violencia, en los que 7.682 personas han muerto y otras 14.418 han resultado heridas.

Como en años anteriores, durante 2024 siguieron produciéndose ataques coordinados, como el estallido simultáneo de tres artefactos explosivos en agosto en la provincia de Pattani en el que nueve policías resultaron heridos; el ataque coordinado de artefactos explosivos e incendios en 45 localidades de las tres provincias a finales de marzo; el estallido de cuatro bombas a mediados de octubre en la región de Sungai Padi –hirieron a cinco guardias forestales y a dos agentes de policía–; o la explosión de otras cuatro bombas simultáneas en el distrito de Muang a finales de noviembre. Según varios medios de comunicación, tales ataques tenían el objetivo demostrar que el BRN, a pesar de estar negociando desde hace años con el Gobierno, mantiene su capacidad operativa en el sur del país. También cabe destacar el incremento de los episodios de violencia en el mes de octubre, coincidiendo con el 20º aniversario del llamado incidente de Tak Bai, considerado por varios análisis como el detonante de inicio del conflicto armado en 2004. En tal fecha, cientos de personas se concentraron en las afueras de un puesto de Policía de Tak Bai (Narathiwat) para exigir la liberación de varias personas detenidas. En su intento de dispersar a la multitud por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, siete personas murieron y más de 1.300 fueron detenidas e introducidas en camiones militares para ser trasladadas a la provincia de Pattani. Cuando llegaron a destinación, 78 de dichas personas habían muerto de asfixia por las condiciones de hacinamiento en el traslado. Cabe destacar, por sus connotaciones religiosas,

otros dos eventos de violencia. En el primero, en abril, dos guardias forestales murieron y otros diez resultaron heridos cuando construían un arco de celebración Hari Raya Aidilfitri (festividad de finalización del Ramadán, que en 2024 fue el más virulento de los últimos años). En el segundo, a finales de noviembre, el Gobierno acusó al BRN de detonar un artefacto explosivo en el lugar de construcción de una estatua de la diosa budista Guan Yin en la provincia de Songkhla, hiriendo a tres personas, incluido un niño. Dicho ataque, el primero contra un santuario chino en la región y el primer ataque insurgente en cinco años contra un lugar religioso no islámico, fue condenado por Human Rights Watch, que lo consideró un posible crimen de guerra. En la misma línea, organizaciones nacionales e internacionales denunciaron un año más la vigencia en el sur de Tailandia del decreto de emergencia que el Estado aprobó en julio de 2005 y que ha sido prorrogado trimestralmente en 78 ocasiones desde entonces. Además del decreto de emergencia, en el sur del país está vigente la ley marcial. Varias organizaciones han denunciado en numerosas ocasiones que este decreto es contrario a varias de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, que posibilita abusos y violaciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, detenciones prolongadas y casos de tortura y malos tratos.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Rusia - Ucrania	
Inicio:	2022
Tipología:	Gobierno, Territorio Internacional
Actores:	Rusia, milicias del Donbás, Ucrania
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Rusia bajo liderazgo de Vladimir Putin inició en febrero de 2022 una invasión militar contra Ucrania, que resultó en la ocupación militar de áreas del sur y este del país, y afectó a otras zonas también con bombardeos y ataques, y generó graves impactos en seguridad humana, como desplazamiento forzado masivo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violencia sexual, inseguridad alimentaria y energética, entre otros. La invasión rusa de Ucrania estuvo precedida de ciclos anteriores de conflicto y de diálogo fallidos: protestas antigubernamentales entre finales de 2013 y principios de 2014 que llevaron a la caída del gobierno del presidente Víctor Yanukóvich; anexión de Crimea por Rusia en marzo de 2014 y guerra en el este de Ucrania desde abril de 2014 entre milicias locales apoyadas por Rusia y el Ejército ucraniano. La invasión de 2022 y guerra interestatal transcurrió en torno a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, puesta en cuestión por

130 Deep South Watch, *Conflict Incident Database*, [consultado el 31 de enero de 2025].

Rusia con una invasión, contraria a derecho internacional. El antagonismo entre EEUU, la UE y la OTAN, por un lado, y Rusia, por otro, y la fallida arquitectura de seguridad continental influían también sobre el contexto del conflicto y las perspectivas de resolución. Entre finales de febrero y abril de 2022 Rusia y Ucrania mantuvieron negociaciones político-militares, que resultaron fallidas. La invasión tuvo repercusiones globales multidimensionales, incluyendo entre otros en inseguridad alimentaria de países de la región MENA y de África, así como en un orden internacional tensionado y mayor militarización del continente europeo.

La guerra entre Rusia y Ucrania, causada por la invasión rusa de 2022 contra el país vecino, se intensificó en 2024. Según ACLED,¹³¹ en 2024 se produjeron 72.857 víctimas mortales en Ucrania (35.996 en 2023, según ACLED; aunque el balance de la Universidad de Uppsala de víctimas mortales relacionadas con el conflicto Rusia-Ucrania en 2023 era de 70.697¹³²). Estimaciones publicadas por The Economist en noviembre cifraron en entre 60.000 y 100.000 los militares ucranianos fallecidos y 400.000 heridos desde el inicio de la invasión.¹³³ Estimaciones del WSJ de septiembre cifraron en 200.000 las bajas militares rusas y en 400.000 los heridos desde 2022.¹³⁴ En diciembre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio un balance de 43.000 soldados ucranianos fallecidos –un incremento respecto a los 31.000 a fecha de febrero–, y otros 370.000 heridos desde el inicio de la invasión. El número total de civiles fallecidos y heridos en 2024 fue un 30% mayor que en 2023 y se debió en gran parte al incremento de uso de bombas planeadoras (*glide bombs*) por Rusia, según ACNUDH. De acuerdo con datos verificados de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU), al menos 2.064 civiles murieron y otros 9.090 resultaron heridos en 2024 (frente a 1.971 y 6.626 en 2023, respectivamente).

En paralelo, continuó la **grave crisis humanitaria causada por la guerra**. Según OCHA, 3,7 millones de personas seguían en situación de desplazamiento interno en Ucrania y otras 6,9 millones eran refugiadas. Además, se estimaba que un 36% de la población del país requeriría asistencia humanitaria (12,7 millones de personas) en 2025. Según la ONU, aunque esta cifra suponía una reducción respecto a los 14,6 millones de 2024 –debido a una mejora en el acceso a servicios en los principales centros urbanos–, la situación humanitaria en las regiones de la línea del frente militar se había deteriorado.

Un año más se puso de manifiesto un patrón de ataques indiscriminados de Rusia contra viviendas, instalaciones

médicas y educativas y contra el sector energético. En 2024 Moscú triplicó el número de ataques aéreos contra civiles (“air/drone strikes”), de los cuales una cuarta parte se combinaban con bombardeos y misiles, según datos de ACLED. Los ataques aéreos y bombardeos rusos fueron más predominantes en áreas del este y noreste, pero afectaron también a zonas del centro y sur y, prácticamente, del conjunto del país.

En 2024 Rusia llevó a cabo avances militares más rápidos que en la mayor parte de la guerra desde el inicio de la invasión, con un coste “exorbitante” en víctimas propias y en pérdidas materiales, según los datos del Institute for the Study of War (ISW). En conjunto, en 2024 ACLED contabilizó 51.647 eventos de violencia organizada (explosiones, batallas y violencia contra civiles), frente a los 50.303 de 2023, con un marcado incremento del número de batallas (17.064 en 2024, frente a 10.102 en 2023), aunque con una disminución de explosiones/violencia remota. De acuerdo con el ISW, en 2024 las fuerzas rusas tomaron un total de 4.168 km², principalmente campos y localidades pequeñas y, en gran parte, pertenecientes a la región de Donetsk. En conjunto, durante el año, el Ejército ruso lanzó ofensivas en el eje Járkov-Lugansk, en torno a áreas de Donetsk y en torno a la frontera norte de Járkov. Como parte de ello, Rusia tomó las localidades de Avdiivka (febrero), Selídove y Vugledar (octubre) y Jurajóve (primeros días de enero de 2025), todas ellas en Donetsk, y avanzó hacia Pokrovsk –localidad que constituye un centro de transporte y logística y que podría ser epicentro en 2025 de batalla de alta intensidad como la que afrontó Bajmut, tomada en mayo de 2023. La inmensa mayoría de la población de Pokrovsk (60.000 antes de la guerra) fue evacuada, aunque en diciembre en torno a 10.000 civiles permanecían en esta ciudad. Rusia también avanzó y asedió Toretsk, localidad en el eje hacia Kostiantinivka –municipio de 70.000 habitantes antes de la guerra–, así como combatía también por la toma total de la devastada localidad minera de Chasiv Yar –municipio a su vez en ruta hacia Kostiantinivka, Druzhkivka y Kramatorsk, y desde esta última hacia la región de Dnipro.

Entre las dinámicas militares de 2024, Ucrania lanzó una invasión en la región rusa de Kursk en agosto. Entre sus objetivos anunciados por las fuerzas armadas ucranianas se incluía el desviar tropas rusas de otras zonas, en el contexto de ofensivas rusas en Donetsk. No obstante, Rusia mantuvo su ofensiva allí. El presidente ucraniano también enmarcó la invasión de Kursk como parte de la estrategia ucraniana de fortalecer su posición

131 ACLED, [ACLED Explorer](#) [consultado el 31 de enero de 2025].

132 El Uppsala Conflict Data Program (UCDP) ofrece diferentes estimaciones de víctimas mortales (estimación “baja”, “alta” y “mejor”). La cifra de 70.697 corresponde a la “mejor estimación”, definida por el UCDP en su [codebook](#) como la cifra agregada más fiable durante un año. Davies, Shawn, Garoun Engström, Therese Pettersson & Magnus Öberg (2024). Organized violence 1989-2023, and the prevalence of organized crime groups. *Journal of Peace Research* 61(4).

133 The Economist, “[How many Ukrainian soldiers have died?](#)”, *The Economist*, 26 de noviembre de 2024.

134 Pancevski, Bojan, “[One Million Are Now Dead or Injured in the Russia-Ukraine War](#)”, *The Wall Street Journal*, 17 de septiembre de 2024.

en futuras negociaciones. Rusia cifró en 130.000 los residentes rusos de la región desplazados por la invasión ucraniana, mientras varios miles permanecían en las localidades tomadas por Ucrania. En octubre Ucrania denunció el despliegue de 11.000-12.000 tropas norcoreanas en Rusia para apoyar en la recuperación del control de Kursk, alegaciones también sostenidas por el Pentágono y Corea del Sur y recogidas por *think tanks* como el ISW. Rusia no confirmó ese despliegue. A un mes del inicio de la invasión en Kursk, Ucrania controlaba 1.300 kilómetros cuadrados de esa región y a finales de año Rusia había recuperado la mitad de las áreas tomadas por Ucrania. Por otra parte, Ucrania continuó lanzando ataques contra la flota rusa del Mar Negro –lo que llevó a Rusia a reubicarla y dispersarla–, y contra infraestructura militar, energética y de transporte dentro de Rusia. En agosto las autoridades de la región rusa de Belgorod dieron un balance de 120 civiles rusos fallecidos y 651 civiles heridos por ataques de Ucrania en esa región desde 2022. Por otra parte, en 2024 Ucrania aprobó una ley de movilización que endurece las sanciones a los civiles que evaden el alistamiento militar y, por otra parte, ratificó otra que reduce la edad de reclutamiento de los 27 años a los 25, mientras se incrementaron las evasiones y deserciones.

En el último trimestre escaló la tensión internacional. EEUU autorizó en noviembre a Ucrania a utilizar armamento de largo alcance para atacar territorio ruso, principalmente contra la región de Kursk, según informaciones de prensa. La decisión, que se justificó como una respuesta al despliegue norcoreano en Kursk, se produjo ya en fase de transición política tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en EEUU. Tras la autorización –precedida de una luz verde similar de Francia y Reino Unido–, Ucrania llevó a cabo varios ataques con misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS y con misiles británicos Storm Shadow, en las regiones fronterizas rusas de Briansk y de Kursk. Rusia advirtió contra el uso de ese armamento contra su territorio y, en respuesta a los primeros ataques, lanzó un ataque con un nuevo misil balístico capaz de transportar armas nucleares (misil Oréshnik), contra una instalación militar en la ciudad de Dnipró. Además, después de la luz verde de EEUU, Rusia aprobó los cambios a su doctrina nuclear preparados ya en septiembre, que amplían las circunstancias en las que el Kremlin permitiría el uso de armas nucleares.¹³⁵ Por otra parte, en los últimos meses del año se intensificaron las discusiones sobre eventuales futuras negociaciones de paz.¹³⁶ La elección de Trump como nuevo presidente de EEUU generó incertidumbre sobre el rumbo que tomaría en 2025 el principal aliado de Ucrania en la guerra.

Europa Meridional

Türkiye (PKK)¹³⁷

Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Türkiye, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Türkiye. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imralı 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años ochenta ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Türkiye y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

Se redujeron un año más la letalidad y el grado de hostilidades armadas entre Türkiye y el PKK, que principalmente tuvieron lugar en Iraq. Además, se dieron pasos exploratorios que podrían desembocar en un nuevo proceso de diálogo, aunque en conjunto se mantuvo la represión política contra actores políticos y sociales kurdos. En 2024 ACLED contabilizó 212 víctimas mortales en Türkiye e Iraq incluyendo miembros del PKK,¹³⁸ fuerzas de seguridad turcas y civiles de Türkiye en actos de violencia organizada, frente a las 428 de 2023. De las 212 personas fallecidas, 167 murieron en Iraq y las otras 45 en Türkiye (297 y 131, respectivamente en 2023). El International Crisis Group contabilizó 188 víctimas mortales del conflicto Türkiye-PKK en 2024, incluyendo 136 miembros del PKK, 27 fuerzas de seguridad y 25 civiles.¹³⁹ Como en años anteriores, los actores en conflicto dieron cifras mucho

135 Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, *Fundamentals of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence*, 3 de diciembre de 2024.

136 Véase el resumen sobre Rusia-Ucrania en el capítulo 5 (Negociaciones de paz en Europa) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

137 En anteriores ediciones de este informe este caso era analizado con la denominación de Türkiye (sudeste). La denominación “Türkiye (PKK)” recoge el cambio oficial de nombre del país realizada por el Gobierno en 2022 y la expansión desde años anteriores de las hostilidades Gobierno-PKK a otras áreas fuera del sudeste de Türkiye –foco territorial histórico del conflicto.

138 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 31 de enero de 2025].

139 International Crisis Group, *Turkey's PKK Conflict: A Visual Explainer* [Consultado el 31 de enero de 2025].

más altas. Türkiye afirmó haber “neutralizado” (término que usa para referirse a muertes y detenciones) a 3.038 miembros del PKK y de las milicias kurdas de Siria YPG –con vínculos con el PKK y a las que Ankara considera como un mismo actor. El PKK admitió 134 víctimas mortales propias (98 en Iraq y 36 en Türkiye) y cifró en 478 las bajas militares de Türkiye, incluyendo nueve comandantes de diverso rango. Cabe destacar que, históricamente, las alegaciones de las partes en conflicto sobre las bajas ocasionadas a la otra parte han tendido a estar sobredimensionadas.

Como en años anteriores, las hostilidades armadas se produjeron principalmente en Iraq, con acciones militares de ambas partes. ACLED contabilizó 5.948 eventos de violencia organizada en 2024 en Iraq y Türkiye que involucraron a las fuerzas de seguridad de Türkiye y al PKK. La mayoría fueron explosiones y violencia remota (5.230 eventos, de los cuales 5.184 en Iraq), frente a un número mucho menor de batallas (635 en Iraq y 49 en Türkiye) y de violencia contra civiles (27 en Türkiye y siete en Iraq). El PKK se atribuyó 18 derribos de drones armados en 2024 y un total de 99 acciones militares aéreas y 1.025 terrestres (incluyendo 229 con uso de francotiradores, 302 de ataque y fuga y 409 con uso de armamento pesado). Por su parte, a lo largo del año el Ejército llevó a cabo numerosos bombardeos contra objetivos del PKK en el norte de Iraq, así como algunas operaciones militares en áreas del sudeste de Türkiye. El Gobierno de Türkiye intensificó su acercamiento al Gobierno iraquí en ámbitos de cooperación militar y económica. Como parte de ello, Bagdad designó en marzo al PKK como “organización ilegal”. Además, ambos gobiernos establecieron una comisión permanente sobre antiterrorismo y en agosto firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en seguridad, asuntos militares y antiterrorismo.¹⁴⁰ Entre las acciones armadas en Türkiye, el PKK reivindicó un atentado en octubre contra una fábrica de armas en la capital del país, Ankara, que causó cinco muertos y 22 heridos.

Pese a la continuación en 2024 del conflicto armado de baja intensidad, se dieron pasos exploratorios en Türkiye que podrían desembocar en un nuevo proceso de diálogo para la resolución del conflicto armado con el PKK, aunque confluían dificultades e incertidumbre sobre la dirección futura de la incipiente iniciativa. Entre las medidas, Al-Monitor informó en octubre

Se dieron pasos exploratorios en Türkiye que podrían desembocar en un nuevo proceso de diálogo

de conversaciones exploratorias no públicas entre representantes del Gobierno turco y el líder del PKK, Abdullah Öcalan, quien permanece en prisión desde 1999. Según esas fuentes, el diálogo estaría encaminado a una posible reanudación de negociaciones con el grupo y Öcalan habría transmitido al liderazgo del PKK que era tiempo de discutir el abandono de las armas. Además, a partir de octubre de 2024 se produjeron algunos gestos políticos conciliatorios y la autorización de dos visitas a Öcalan (una familiar en octubre y otra política el 28 de diciembre con una delegación del partido prokurdo

DEM). El DEM trasladó a posteriori el enfoque de Öcalan, con siete puntos, que incluía su disposición a dar los pasos necesarios y realizar un “llamamiento”, en referencia a instar al fin de la lucha armada. El año finalizó con la previsión de reuniones en los primeros días de enero de 2025 entre la delegación del DEM con los partidos políticos parlamentarios, y de posibles nuevas visitas a Öcalan.

No obstante, la posibilidad de un nuevo diálogo y de una vía a la finalización de la lucha armada contrastaba con la continuación de la represión por las autoridades turcas contra actores políticos y sociales kurdos. Según señaló HRW, cientos de activistas y ex parlamentarios, alcaldes y representantes políticos kurdos permanecían en prisión con y sin sentencias con acusaciones de terrorismo por actividades no violentas.¹⁴¹ Desde las elecciones locales de marzo de 2024 y hasta mediados de noviembre, ocho alcaldes electos del DEM y dos del CHP fueron destituidos y sustituidos por funcionarios designados por el Gobierno. Desde 2016 hasta 2024, 149 alcaldías se han visto afectadas por estas medidas, dirigidas contra alcaldías de partidos del movimiento kurdo.¹⁴² Además, el rumbo incierto de la incipiente iniciativa de diálogo se veía influido también por los interrogantes sobre el futuro de la cuestión kurda en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre¹⁴³ y el fortalecimiento subsiguiente de Türkiye en la región. Türkiye y las facciones del SNA –apoyadas por Ankara– intensificaron los ataques contra áreas del noreste bajo control de las milicias kurdas YPG/YPJ (predominantes en la coalición SDF, apoyada por EEUU; y con vínculos con el PKK) y exigieron su disolución y desarme. En diciembre, por primera vez, las SDF reconocieron la existencia de combatientes del PKK entre sus filas. Las SDF iniciaron contactos y diálogo con las nuevas autoridades sirias y, en paralelo, mantenían contacto indirecto con Türkiye.

140 Véase el resumen sobre Iraq en este capítulo.

141 Human Rights Watch. “Türkiye” en *World Report 2025*, 2025.

142 Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

143 Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), Security Belt Forces, AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíí, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha cobrado miles de víctimas mortales y ha provocado también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país en 2014 agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno de transición, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán. Adicionalmente, Yemen es escenario desde los años 1990 de actividades de al-Qaeda, en especial desde la fusión de las ramas saudí y yemení que en 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). A partir de 2014 el grupo ha aprovechado el clima de inestabilidad en el país para avanzar en sus objetivos y sus milicianos se han visto involucrados en choques con

los al-houthistas, con las fuerzas gubernamentales, con tropas de EAU y milicias tribales. Desde el ataque de al-Qaeda al USS Cole en 2000, EEUU se ha visto implicado en periódicos ataques contra el grupo. El escenario de conflicto en Yemen también ha favorecido la actividad de ISIS en el territorio. En 2023 la crisis en Gaza y sus repercusiones en toda la región impactaron también en Yemen, en especial tras la decisión de los al-houthistas de lanzar ataques contra Israel y naves israelíes o con destino a Israel en el Mar Rojo, ruta que concentra el 15% del transporte marítimo mundial. Las acciones al-houthistas motivaron el establecimiento de una operación militar internacional en la zona (Guardián de la Prosperidad), integrada por una veintena de países y liderada por EEUU.

En línea con la tendencia observada en años anteriores, en 2024 se registró un descenso relativo en los niveles de letalidad asociados al conflicto armado en Yemen, pero las hostilidades se multiplicaron a lo largo de las líneas de frente y la cifra de personas fallecidas continuó siendo elevada. En consecuencia, este conflicto continuó siendo catalogado como de alta intensidad. Según el balance de ACLED, a lo largo del año murieron en Yemen al menos 1.781 personas en diversos hechos de violencia (batallas, explosiones, violencia remota, violencia contra civiles),¹⁴⁴ frente a las 3.174 contabilizadas en 2023, las 6.721 de 2022 y las más de 20.000 víctimas mortales anuales entre 2019 y 2021. De acuerdo con los datos del Civilian Impact Monitoring Project (CIMP), que documenta las muertes de civiles en hechos de violencia armada en Yemen, en 2024 murieron 337 civiles, mientras que otras 864 personas resultaron heridas –en 2023, las cifras fueron de 501 y 1.174 respectivamente, según CIMP. La cifra total de 1.201 civiles afectados en 2024 es la más baja desde que CIMP inició sus registros, pero una proporción significativa de las víctimas se produjo como resultado de ataques aéreos, que se reactivaron en el último año.¹⁴⁵ Cabe recordar que desde 2022 Yemen presenta un descenso relativo en las hostilidades por la vigencia de facto de una tregua promovida por la ONU. Sin embargo, a lo largo de 2024 diversos análisis alertaron sobre la fragilidad de la tregua y la escalada de enfrentamientos en distintos puntos de Yemen entre los múltiples actores armados que operan en el país. Al clima volátil también contribuyó la escalada protagonizada por los al-houthistas en el Mar Rojo, vinculada a las repercusiones regionales de la crisis de Gaza, que derivó en constantes intercambios armados del grupo yemení con Israel, EEUU y Reino Unido durante todo el año.¹⁴⁶

Se produjeron hostilidades entre los al-houthistas y fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido en las provincias de Hodeida, al-Dahle, al-Jawf, Saada y Taiz. Los al-houthistas –que controlan la capital y la mayor parte del norte del país– también se enfrentaron

144 ACLED, [ACLED Explorer](#) [consultado el 14 de febrero de 2025].

145 Civilian Impact Monitoring Project (CIMP), [2024 Annual Report: 1 January – 31 December 2024](#), CIMP – Protection Cluster Yemen, enero de 2025.

146 Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido en el capítulo 2 (Tensiones).

a las Shabwa Defence Forces en Maarib, a la Giants Brigade –alineada con el Gobierno– en Shabwa y a fuerzas del Southern Transitional Council (STC) –que forma parte también del Gobierno internacionalmente reconocido encabezado por el Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP)– en la zona de Adén, en el sur del país, y en la provincia de Lahj. El STC también se enfrentó a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Los al-houthistas también bombardearon edificios residenciales en la provincia de al-Bayda. Durante el año también se produjeron escaramuzas entre fuerzas respaldadas por Arabia Saudita –National Shield Forces– y grupos apoyados por Emiratos Árabes Unidos –Hadrami Elite Forces– evidenciando la dimensión regional del conflicto y la competencia por influencia entre Riad y Abu Dhabi. Al finalizar el año, informaciones apuntaban a los intentos del CLP por obtener apoyos para una operación militar de mayor escala contra los al-houthistas en Hodeida. Esta última provincia, junto con Taiz y Saada fueron las que concentraron un mayor número de víctimas civiles. En un informe publicado en octubre, y que cubre el período de septiembre de 2023 a julio de 2024, el Panel de Expertos sobre Yemen alertó sobre la creciente colaboración de los al-houthistas con actores del llamado “eje de la resistencia” –Irán, Hezbollah y milicias iraquíes–, pero también de los indicios de entendimiento con AQPA –ambos grupos habrían pactado cesar los ataques mutuos y coordinar sus ofensivas contra las fuerzas gubernamentales– y con el grupo armado somalí al-Shabaab –con el que compartiría suministrador de material militar. El informe también denuncia la persistencia de vulneraciones del derecho internacional y los derechos humanos en el país –sobre todo por los al-houthistas–, incluyendo ataques indiscriminados contra civiles, torturas y otros tratos degradantes como forma de castigo, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. El Panel de Expertos advirtió también sobre el reclutamiento de menores por parte de los al-houthistas, así como de la violencia sexual y de género vinculada al conflicto, que continuaba siendo generalizada.¹⁴⁷ Un tema que causó especial revuelo en 2024 fue la detención en junio, por los al-houthistas, de decenas de personas vinculadas a ONG locales e internacionales y organismos de la ONU bajo acusaciones de espionaje y colaboración con EEUU y otros gobiernos occidentales. Estas personas permanecían retenidas al finalizar el año a pesar de los esfuerzos de diversos actores, incluida la ONU, por conseguir su liberación.

En paralelo a estas dinámicas de violencia y sus impactos, la situación humanitaria en Yemen –severamente afectada por el conflicto en los últimos años– se agravó durante 2024. La ONU alertó que la cifra de personas necesitadas de ayuda humanitaria se

había incrementado de 18,2 millones en enero a 19,5 millones a finales de 2024. Diversas voces alertaron sobre un nuevo empeoramiento de la inseguridad alimentaria en el país. Un estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) concluyó que 61% de los hogares encuestados tenía problemas para conseguir alimentos suficientes y OCHA anticipaba al finalizar el año que 17 millones de personas (50% de población) enfrentaría inseguridad alimentaria severa en 2025. La expansión de la epidemia de cólera también era objeto de gran preocupación. El país concentraba el 35% de todos los casos en el mundo de esta enfermedad y 18% de las muertes a nivel global. La situación humanitaria también se vio afectada por las súbitas inundaciones y desprendimientos en septiembre, que provocaron la muerte de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de unas 250.000 en el norte del país, evidenciando una vez más las vulnerabilidades interconectadas derivadas de la conjunción de conflicto armado, cambio climático y problemas de gobernanza. Cabe destacar también que la escalada de violencia en el Mar Rojo repercutió en las perspectivas para una solución negociada del conflicto yemení, llevando a que las expectativas generadas por una serie de acontecimientos y dinámicas en 2023 se frenaran en 2024.¹⁴⁸

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)
Intensidad:	1
Evolución:	Fin

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la

147 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, *Letter dated 11 October 2024 from the Panel of Experts on Yemen addressed to the President of the Security Council*, S/2024/731, 11 de octubre de 2024.

148 Para más información, véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona. La crisis en Gaza en 2023 añadió incertidumbre y desafíos a la situación en el Sinaí.

Durante 2024 se confirmó la tendencia observada en 2023 de reducción significativa de los hechos de violencia en el marco del conflicto en la zona del Sinaí que en los últimos años ha enfrentado a combatientes de la filial del grupo armado Estado Islámico, autodenominada Wilayat Sinai (Provincia del Sinaí), y al Ejército egipcio apoyado por milicias tribales. A pesar de las dificultades para acceder a información sobre las dinámicas de este conflicto por la falta de acceso de medios independientes, los indicios apuntan a una disminución significativa de las hostilidades. El balance de ACLED apuntaba a una decena de víctimas mortales en 2024, cifra similar a la contabilizada en 2023, frente a las 272 registradas en 2022 y a las entre 150 y 220 muertes producidas en 2021.¹⁴⁹ Teniendo en cuenta esta tendencia, **este caso dejó de ser considerado como un conflicto armado activo**. Pese a ello, cabe destacar que persistían múltiples retos. Grupos locales e internacionales de derechos humanos alertaron en mayo que las autoridades egipcias habrían llegado a algunos de acuerdos de amnistía con miembros de ISIS a cambio de que renunciaran a las armas y se entregaran, pero sin clarificar públicamente las condiciones. En consecuencia, estos pactos –no anunciados formalmente por El Cairo– podrían haber beneficiado a individuos involucrados en la comisión de crímenes de guerra. Tras una investigación, Human Rights Watch y Sinai Foundation for Human Rights denunciaron los riesgos de impunidad ante graves abusos, incluyendo asesinatos masivos de civiles y ejecuciones extrajudiciales.¹⁵⁰ Las autoridades egipcias habrían promovido esta estrategia para obtener la rendición de combatientes de ISIS desde 2020 y para ello habrían contado con la colaboración de líderes tribales del Sinaí. Esta aproximación habría influido en la desescalada en la región que, sin embargo, sigue siendo considerada una zona militar cerrada en la que no se permite el trabajo de medios independientes. El Ejército también continuaba impidiendo que decenas de miles de residentes expulsados desde 2013 pudieran regresar a sus tierras. Human Rights Watch destacó que la estrategia de amnistía a los combatientes sospechosos de crímenes se había producido en paralelo a la detención y abusos de mujeres y niñas familiares de miembros

de Wilayat Sinai –ya denunciada en 2023–, como una estrategia de presión para conseguir rendiciones de integrantes del grupo. Según antecedentes recopilados por organizaciones de derechos humanos, varios excombatientes de Provincia del Sinaí se han trasladado junto a sus familias a la vecina provincia de Ismailia, donde recibirían apoyo económico y documentación que les permite la movilidad en una determinada área.

Cabe destacar que a finales de 2023 no se descartaba el impacto de la crisis en Gaza en la situación del Sinaí y una mayor inestabilidad y/o militarización de la zona. Pese a la evolución de la campaña armada israelí contra la Franja en 2024 y a que se cruzaron supuestas “líneas rojas” anunciadas por las autoridades egipcias –como la campaña militar terrestre en Rafah o la presencia de fuerzas israelíes en el corredor Philadelphi/Salaheddin (franja de 14 kilómetros supuestamente desmilitarizada en la zona fronteriza)–, El Cairo no adoptó medidas contra Israel ni se puso en entredicho la vigencia del acuerdo bilateral suscrito en 1979. La ONG Sinai Foundation for Human Rights informó en febrero que las autoridades egipcias estaban construyendo una zona fortificada a lo largo de la frontera con Gaza para albergar a población palestina en caso de desplazamiento masivo desde Gaza y para aislarles del resto del Sinaí. Esta organización y su director, radicado en Reino Unido, fueron objeto de campañas de difamación y amenazas de dirigentes tribales del Sinaí vinculados con el Gobierno.

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (entre ellas Harakat al-Nujaba, la coalición Hashd al-Shaabi, Kataib Hezbollah y la coalición/plataforma Resistencia Islámica de Iraq), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Türkiye, Israel
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Síntesis:	
La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de	

149 ACLED, [ACLED Explorer](#) [consultado el 14 de febrero de 2025].

150 Human Rights Watch, “[Egypt: Questionable Amnesty Deals for ISIS Members. Risk of Impunity for Grave Human Rights Abuses](#)”, HRW, 13 de marzo de 2024.

poder entre grupos sunnies, chiies y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Saddam Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiies y sunnies, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio del Gobierno de victoria contra ISIS el año anterior, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes y, desde finales de 2023, por las repercusiones en toda la región de la crisis en Gaza.

Durante el año Iraq siguió siendo escenario de hostilidades entre numerosos actores armados locales, regionales e internacionales y se vio afectado por la intensificación de conflictos y tensiones en Oriente Medio. No obstante, **a nivel general, se mantuvo la tendencia observada en los últimos años respecto a la reducción en los niveles de letalidad asociados a la violencia armada**. Según los datos de ACLED, en 2024 se produjeron 963 muertes producto de hechos de violencia organizada (batallas, violencia contra civiles y explosiones/violencia remota), frente a las 1.334 contabilizadas en 2023 y las 4.427 en 2022.¹⁵¹ Los datos de Iraq Body Count apuntan a una evolución similar, al identificar un total de 419 víctimas mortales civiles en 2024 frente a 537 en 2023 y 740 en 2022.¹⁵² Como en años previos, **las dinámicas de violencia en el país involucraron a múltiples actores y algunas de ellas estuvieron condicionadas por la confrontación entre Israel y EEUU, por un lado, e Irán y los integrantes del llamado “eje de resistencia”, por otro, bajo el trasfondo de la crisis en Gaza**. Así, por ejemplo, a principios de año, Irán lanzó un ataque en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, contra un presunto objetivo del Mossad en el que murieron cuatro personas –el KRG negó la presencia de la agencia de inteligencia israelí en su territorio. EEUU lanzó diversos ataques contra milicias shiíes respaldadas por Irán, entre ellas Harakat al-Nujaba, la coalición Hashd al-Shaabi y Kataib Hezbollah y bases e instalaciones vinculadas a la Guardia Republicana iraní (IRGC). La ofensiva estadounidense más intensa se produjo en febrero,

después de que un ataque con drones reivindicado por la coalición de milicias conocido como Resistencia Islámica de Iraq¹⁵³ –desde sus posiciones en Siria– provocara la muerte de tres soldados en el noreste de Jordania. Esta coalición también lanzó ataques desde Iraq contra la base estadounidense de Ain al-Asad en la provincia de Anbar (oeste de Iraq) y contra posiciones de EEUU en el este de Siria. Resistencia Islámica de Iraq también reivindicó ataques contra diversas ciudades de Israel, en su mayoría no confirmados por el Gobierno de Benjamin Netanyahu. En julio, este grupo iraquí también aseguró haber lanzado ataques en el Mediterráneo y contra Israel coordinados con los al-houthistas de Yemen.¹⁵⁴ Las ofensivas se intensificaron coincidiendo con la nueva fase de la campaña israelí contra Hezbollah en Líbano a partir de septiembre,¹⁵⁵ y, luego, coincidiendo con el segundo ataque directo de Irán a Israel (1 de octubre) en represalia por los asesinatos de los líderes de Hamas (julio) y de Hezbollah (septiembre). Durante el primer ataque directo de Irán a Israel en abril –entonces en respuesta al ataque previo israelí contra la delegación diplomática de Teherán en Siria– Iraq cerró su espacio aéreo durante dos días (13 y 14 de abril).¹⁵⁶

Al finalizar el año, tras un nuevo ataque de Israel contra Irán (25 de octubre) algunas informaciones apuntaban a transferencias de armas desde Irán a Iraq, lo que alimentó especulaciones sobre una posible intensificación de los ataques contra Israel protagonizados por las milicias iraquíes. Hasta octubre la coalición Resistencia Islámica de Iraq había reivindicado más de 200 ataques contra bases de EEUU en Iraq y Siria e Israel. Israel exigió en noviembre a las autoridades iraquíes que previniera ofensivas desde su territorio y advirtió sobre un riesgo de escalada. Bagdad acusó a Israel de buscar pretextos para una agresión que podría expandir la guerra en la región. Análisis destacaron que las autoridades iraquíes han tenido que realizar esfuerzos en los últimos años para balancear sus relaciones con EEUU e Irán y que más recientemente han presionado a los grupos armados shiíes para evitar arrastrar al país a un nuevo ciclo de conflicto. En varios momentos de 2024 autoridades políticas y religiosas de Iraq lograron convencer a las milicias de una pausa en los ataques contra bases de EEUU, pero las ofensivas se reanudaron tras la invasión israelí terrestre de Líbano. Si bien en Iraq existe una amplia simpatía por la causa palestina y solidaridad con Líbano, también hay una creciente hostilidad ante la interferencia de Irán en los asuntos domésticos iraquíes. El Ayatollah iraquí Alí al-Sistani instó en noviembre a los

151 ACLED, [ACLED Explorer](#) [consultado el 14 de febrero de 2025].

152 Iraq Body Count, [Database: Monthly civilian deaths from violence, 2003 onwards](#) [consultado el 14 de febrero de 2025].

153 El conglomerado conocido como Resistencia Islámica de Iraq (IRI, por sus siglas en inglés) surgió en octubre de 2023 como mecanismo para reivindicar de manera colectiva los ataques realizados por diferentes grupos menores –designados como terroristas por EEUU– como Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al-Haq, Harakat Hezbollah al-Nujaba, Kataib Sayyid al-Shuhada y Ansar Allah al-Awfiya. Michael Knights, Amir al-Kaabi y Hamdi Malik, “[Tracking Anti-U.S. and Anti-Israel Strikes From Iraq and Syria During the Gaza Crisis](#)”, *The Washington Institute for Near East Policy*, 14 de octubre de 2024.

154 Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido en el capítulo 2 (Tensiones).

155 Véase el resumen sobre Israel – Hezbollah en este capítulo.

156 Véase el resumen sobre Israel-Irán en el capítulo 2 (Tensiones).

grupos militares a someterse a la autoridad de Bagdad, y no de Teherán. Cabe destacar que los ataques de EEUU contra las milicias en Iraq también motivaron renovadas críticas de sectores que denunciaron la extralimitación de su mandato como líder de la coalición internacional anti-ISIS y que insistieron en acelerar la salida de las 2.500 fuerzas estadounidenses presentes en el país. Así, **en septiembre, EEUU e Iraq anunciaron un plan de transición según el cual la mayor parte de las fuerzas estadounidenses abandonarán Iraq en septiembre de 2025 y las últimas a finales de 2026.**

Representantes de Washington insistieron en que no se trataba de una retirada sino de una transición a un acuerdo de seguridad bilateral a través del cual EEUU continuaría asesorando a Bagdad en sus operaciones contra ISIS. En 2024 ISIS continuó protagonizado ofensivas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad iraquíes y con milicias shíes, principalmente en las provincias de Salah al-Din, Diyala y Kirkuk. En julio el CENTCOM alertó de un incremento de las actividades de ISIS en Iraq y Siria.¹⁵⁷ En paralelo, **el norte de Iraq continuó siendo escenario del conflicto entre Türkiye y el PKK.**¹⁵⁸ Durante el año Ankara lanzó numerosas ofensivas contra posiciones del PKK –principalmente en Dohuk, Nineva y Sinjar– y también contra el partido kurdo iraquí Unión Patriótica del Kurdistán (PUK) –por sus vínculos con el PKK. Las hostilidades dejaron más de 160 muertos soldados turcos y efectivos del PKK en territorio iraquí y también causaron muertes y desplazamientos forzados de civiles iraquíes. En 2024 los Gobiernos iraquí y turco estrecharon lazos que se materializaron en la primera visita de Erdogan a Iraq desde 2011, acuerdos en materia de seguridad y en la decisión de Bagdad de prohibir al PKK.

En 2024 Bagdad solicitó a la ONU que pusiera fin a la misión de asistencia en Iraq (UNAMI) a finales de 2025, bajo el argumento de que su presencia ya no era necesaria para asegurar la estabilidad política en el país. Sin embargo, algunos sectores expresaron su desacuerdo por el papel de la UNAMI en la resolución de disputas territoriales y en abordar las tensiones presupuestarias entre las autoridades del Kurdistán iraquí (KRG) y las de Bagdad. A finales de mayo, la ONU aprobó la resolución 2732 que renueva el mandato de la UNAMI por última vez por un período final de 19 meses. También a petición de las autoridades iraquíes, cesó el trabajo del equipo de investigación de la ONU para promover la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por ISIS en Iraq (UNITAD). Este equipo presentó su último informe en mayo y a partir de septiembre finalizó su mandato. En 2024 otro tema relevante fue la situación de la población desplazada internamente. A principios

de año el Gobierno anunció el cierre de todos los campos aún existentes e incentivos para el retorno.

En 2024 se anunció un acuerdo según el cual la mayor parte de las tropas estadounidenses en Iraq abandonarán el país en septiembre de 2025

Aunque el plazo se extendió luego hasta finales de año, organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad, económicas y tensiones no resueltas que encontrarían las poblaciones obligadas a retornar. Desde el punto de vista de género y derechos humanos, también causó especial inquietud la aprobación durante el año de una ley que criminaliza la homosexualidad y otra que favorece el matrimonio infantil, fenómeno que afecta especialmente a las niñas y que se ha incrementado significativamente en los últimos años.¹⁵⁹

Israel – Hezbollah

Inicio:	2003
Tipología:	Gobierno, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Hezbollah, otras organizaciones armadas libanesas (Fuerzas al-Fajr, Movimiento Amal) y palestinas con presencia en Líbano (Brigadas al-Qassam de Hamas y Brigadas al-Quds de la Jihad Islámica)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto tiene como telón de fondo la cuestión palestino-israelí y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país. Las fuerzas israelíes invadieron el sur del Líbano en 1978 y de nuevo en 1982 bajo el argumento de expulsar a las milicias palestinas que usaban la región para lanzar ataques a Israel. El nacimiento del grupo político y armado shíí Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano –en el marco de la guerra civil en el país–, con una agenda de oposición a Israel, rechazo a la presencia occidental en Oriente Medio y liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala contra Líbano de julio de 2006. Considerado como uno de los actores armados no estatales más poderosos de la región, Hezbollah cuenta con Irán como su principal respaldo exterior y en los últimos años se ha implicado en operaciones bélicas en Siria e Iraq y en la asistencia militar a otros grupos armados con agendas afines en la región. En 2023, la crisis en Gaza y la consiguiente intensificación de las tensiones en todo Oriente Próximo derivaron en una nueva fase del conflicto armado entre Israel y Hezbollah. Desde 1978, en la zona fronteriza de facto entre Líbano e Israel se encuentra desplegada una misión de la ONU, la UNIFIL, con un mandato que ha ido evolucionando y que incluye la supervisión del repliegue de las fuerzas israelíes del sur de Líbano (2000) y del cese de hostilidades (tras la guerra de 2006).

157 Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

158 Véase el resumen sobre Türkiye (PKK) en este capítulo.

159 Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

La confrontación entre Israel y Hezbollah se incrementó significativamente en 2024, con severos impactos tras la intensificación de la campaña aérea y el inicio de una operación terrestre israelí en el sur de Líbano en el segundo semestre. Los altos niveles de violencia –que convirtieron el caso en un conflicto armado de alta intensidad– se redujeron a partir de noviembre tras la consecución de un acuerdo de alto el fuego, pero el balance de las hostilidades desde octubre de 2023 y hasta finales de 2024 ascendía a más de 4.000 víctimas mortales y un millón de personas desplazadas forzosamente en Líbano. En el mismo período, habían muerto 72 israelíes, 30 de ellos en enfrentamientos con Hezbollah. Otros 60.000 israelíes permanecían desplazados de la zona norte desde el inicio de los intercambios armados entre Israel y la milicia libanesa. Dichos intercambios aumentaron en periodicidad en el marco de la crisis en Gaza –a finales de 2023 el caso ya era considerado un conflicto armado de baja intensidad y había provocado unas 165 víctimas mortales¹⁶⁰–, pero a principios de 2024 aún parecía que las partes seguían intentando calibrar sus acciones para evitar un enfrentamiento abierto de mayor escala. Con el transcurso de las semanas, sin embargo, la situación fue escalando. Los intercambios de fuego fueron aumentando en frecuencia e intensidad y se fue ampliando el alcance geográfico de las hostilidades. El Gobierno de Netanyahu lanzó una serie de ataques que a lo largo

de los meses resultaron en la muerte de numerosos altos cargos de Hezbollah y, a partir de febrero, amplió el rango, alcanzando zonas más alejadas de la frontera de facto entre Israel y Líbano, entre ellas ciudades como Tiro y la capital, Beirut. Las ofensivas causaron la destrucción de numerosas infraestructuras e incendios en el sur de Líbano. A mediados de año Human Rights Watch alertaba sobre la utilización de fósforo blanco por parte de Israel y Naciones Unidas advertía sobre la contaminación con material explosivo en nuevas áreas a lo largo de la línea fronteriza. Hezbollah, por su parte, continuó con sus ofensivas contra posiciones y bases israelíes próximas al área limítrofe y a partir de abril –en paralelo a la escalada en el conflicto entre Israel e Irán¹⁶¹– también lanzó ataques contra los Altos del Golán ocupados y localidades como Acre y Kiryat Shmona. Según investigaciones, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 se habían producido más de 10.000 ataques transfronterizos, la inmensa mayoría (tres cuartas partes) lanzados por Israel. El resto de las ofensivas involucraron a otras organizaciones armadas libanesas –Fuerzas al-Fajr, Movimiento Amal– y palestinas con presencia en Líbano –Brigadas al-Qassam de Hamas y Brigadas al-Quds de la Jihad Islámica.

La ofensiva militar terrestre de Israel en Líbano a partir de octubre causó la muerte de más de 2.700 personas y el desplazamiento forzado de más de un millón

A mediados de año la retórica de amenazas contribuyó a incrementar las tensiones. Autoridades israelíes amenazaron con llevar al Líbano a “la edad de piedra”, mientras que el líder de Hezbollah alertó sobre una guerra sin contención y advirtió a Chipre –a unos 200 kilómetros de Líbano– que podría ser objeto de ataques si abría sus bases y aeropuertos a Israel. Sin embargo, **no fue hasta septiembre que la situación se agravó notoriamente, después de que las autoridades israelíes anunciaran el 16 de septiembre su intención de poner el foco en el “frente norte”**, mientras en paralelo continuaban sus ofensivas sobre Gaza. En los dos días siguientes al anuncio de Netanyahu, miles de aparatos de comunicación de miembros de Hezbollah (buscas y *walkie-talkies*) fueron detonados de manera simultánea en todo Líbano, en una sofisticada operación atribuida a Israel. Decenas de integrantes de la organización y civiles murieron y cientos quedaron ciegos o mutilados en la acción. Israel intensificó entonces sus ataques aéreos en el sur de Líbano y también en la capital, Beirut, en operaciones en las que murieron al menos 16 comandantes de élite de la milicia y otros altos dirigentes del grupo, incluyendo quien había sido el líder de la organización durante tres décadas, Hassan Nasrallah. El histórico dirigente falleció el 27 de septiembre tras un devastador ataque israelí en el barrio de Dahiye, bastión de Hezbollah en la capital libanesa. La muerte de Nasrallah –en una operación que Israel bautizó como “Nuevo Orden”– no frenó las ofensivas israelíes ni tampoco los ataques de Hezbollah y se produjo en un momento en que se intentaba promover un acuerdo de alto el fuego entre las partes.¹⁶²

A partir del 1 de octubre, Israel amplió su ofensiva aérea e inició una operación terrestre en el sur del territorio libanés, con graves impactos en la población civil. Según datos de OCHA entre el 8 y el 28 de octubre un total de 2.710 personas habían muerto en Líbano producto de los ataques israelíes. Más de una decena de hospitales fueron dañados y el acceso al agua potable también se vio comprometido por la ofensiva. Hezbollah, en tanto, continuó lanzando cohetes y misiles hacia Israel, penetró hasta áreas más lejanas de la frontera y reivindicó un ataque con dron contra la residencia vacacional de Netanyahu. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur de Líbano, UNIFIL, alertó de combates en su zona de operaciones. Bajo el argumento de evitar peligros, Israel intentó que la misión abandonara la zona, pero la UNIFIL respondió que se mantendría en el área para cumplir con su mandato. **Israel atacó reiteradamente posiciones e infraestructuras de la UNIFIL para forzar su salida**, lo que motivó denuncias de la propia misión y una condena de más de 40 países.¹⁶³

160 Véase el resumen sobre Israel-Palestina en este capítulo.

161 Véase el resumen sobre Israel-Irán en el capítulo 2 (Tensiones).

162 Para más información, véase el resumen sobre Israel – Líbano (Hezbollah) en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

163 Para más información, véase Statement by countries contributors to UNIFIL following recent attacks on the UN peacekeepers in Lebanon, 12 de octubre de 2024; IPI, *What Is Behind Israel's Deliberate Attacks on UN Peacekeepers in Lebanon? An Interview with Karim Makdisi*, 30 de octubre de 2024; y al-Jazeera, *UN peacekeepers accuse Israel of 'deliberate and direct' attack in Lebanon*, 8 de noviembre de 2024.

Las dinámicas del conflicto no cambiaron hasta finales de noviembre, cuando entró en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano mediado por EEUU y Francia.¹⁶⁴ Según el pacto –con términos que se asemejan a las disposiciones de la resolución 1701 de la ONU que puso fin a la guerra entre Israel y Hezbollah de 2006–, el Gobierno libanés debe evitar que Hezbollah y otros grupos armados lancen ataques contra Israel y desmantelar las infraestructuras militares en el sur de Líbano. Israel, por su parte, debe suspender sus ataques contra Líbano, retirarse del sur del país y dejar paso a que el territorio sea controlado por las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) y la UNIFIL en un plazo de 60 días. La milicia shíí no participó en las negociaciones, pero aceptó los términos, que exigen su repliegue. Con su adhesión al alto el fuego, Hezbollah renunció a la condición que había exigido hasta entonces –y reiterada en diversas ocasiones por Nasrallah–, de condicionar el cese de hostilidades a que Israel pusiera fin a sus ofensivas contra Gaza. El Gobierno de Netanyahu, por su parte, necesitaba dar un respiro a sus tropas, reducir sus necesidades de conscripción –en un contexto de resistencias al reclutamiento de sectores ultraortodoxos– y contaba con una opinión pública más favorable tras descabezar a Hezbollah. A nivel general, los niveles de violencia se redujeron tras el acuerdo, pero en un contexto de fragilidad y acusaciones cruzadas de Israel y Hezbollah por vulneraciones a lo pactado. A finales de diciembre se produjeron múltiples hechos de violencia que resultaron en la muerte de varias personas y UNIFIL alertó que Israel continuaba destruyendo áreas residenciales, tierras agrícolas y redes de carreteras en el sur de Líbano. A comienzos de 2025, Israel se había retirado de tan solo dos de las dos docenas de localidades que había ocupado en territorio libanés desde octubre. Cabe destacar que en diciembre la situación de Hezbollah –debilitada por las hostilidades y la muerte de numerosos altos cargos– se vio afectada también por la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, uno de sus principales aliados regionales y clave para sus líneas de suministro y comunicación con Irán.¹⁶⁵

Israel – Palestina

Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinició en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclamó el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexionó Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasaron a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo (1993) que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se vio impedita por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

Durante 2024 el conflicto armado continuó agravándose, con extraordinarios niveles de letalidad y devastadores impactos en la población civil palestina.¹⁶⁶ Desde los ataques de Hamas el 7 de octubre (7-O) de 2023 y el inmediato inicio de la campaña militar israelí hasta finales de 2024 habían muerto en Gaza unas 46.000 personas –16.735 hombres, 7.216 mujeres, 13.319 menores y 3.447 mayores–, según los datos de OCHA basados en las informaciones proporcionadas por las autoridades de la Franja. De esta cifra, prácticamente la mitad perecieron en 2024. A este balance habría que sumar miles de personas fallecidas –al menos 10.000– que seguían sepultadas bajo los escombros tras los intensos ataques israelíes. Algunas investigaciones apuntaron cifras mucho más elevadas. Un estudio liderado por la Universidad de Yale concluyó que las muertes en Gaza se habían subestimado y que serían un 40% más elevadas –64.260 entre octubre de 2023 y junio de 2024, frente a las casi 38.000 reportadas por las autoridades de Gaza hasta ese momento. Otro estudio del que se hizo eco la revista The Lancet apuntaba que, teniendo en cuenta la proporción de víctimas mortales indirectas respecto a las directas que suele existir en los conflictos armados actuales, la cifra de personas fallecidas a causa de la violencia en Gaza podría ascender hasta las 186.000 personas y este número era considerado como una estimación “conservadora”. Israel aseguró haber dado muerte a 17.000 milicianos palestinos, pero no aportó evidencias ni proporcionó una estimación de las bajas civiles provocadas por sus ofensivas. Según OCHA, desde el inicio de la operación terrestre en Gaza en noviembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024 habrían muerto un total de 393 soldados israelíes en las hostilidades en la Franja.

Israel continuó con su campaña de ataques indiscriminados y deliberados contra la población de

¹⁶⁴ Para más información, véase el resumen sobre Israel – Líbano (Hezbollah) en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

¹⁶⁵ Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

¹⁶⁶ Para una descripción más pormenorizada de los acontecimientos de este contexto a lo largo del año, véase las ediciones trimestrales de la publicación de la Escola de Cultura de Pau *Oportunidades de paz y escenarios de riesgo* en 2024.

Gaza. A lo largo del año se produjeron numerosos ataques israelíes con un alto número de muertes civiles, entre ellos la bautizada como “masacre de la harina” –al menos 118 personas murieron y más de 760 resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego contra personas que buscaban alimentos de los camiones de ayuda en Ciudad de Gaza en febrero–; el cruento asedio y destrucción del hospital Al-Shifa –tras semanas de cerco, que acabó en abril, se encontraron fosas comunes con cuerpos con señales de torturas y ejecuciones extrajudiciales–; la operación israelí para liberar a cuatro rehenes retenidos en el campo de refugiados de Nuseirat que se saldó con la muerte de más de 270 palestinos y palestinas en junio y varias ofensivas que afectaron a tiendas en campamentos de población desplazada, derivaron en incendios y causaron la muerte de decenas de personas. A partir de octubre, el Gobierno israelí decidió intensificar su ofensiva en el norte de Gaza, especialmente en torno al campo de refugiados de Jabalia. En un contexto de devastación y sin sitios seguros en toda la Franja, decenas de miles de personas decidieron permanecer en la zona a pesar de las “órdenes de evacuación” –desplazamiento forzado– de Israel, que con sus ataques mató a más de 770 personas en menos de 20 días. En 2024 investigaciones periodísticas también alertaron sobre el uso de programas de inteligencia artificial como el llamado *Lavender, Where is daddy?* para identificar y ejecutar a objetivos de Hamas y la Jihad Islámica –pese a las incertezas sobre la relación de las personas señaladas con estos grupos y el hecho de que estuvieran acompañadas de sus familias– y drones con grabaciones de voces de mujeres y niños para atacar a las personas que acudían en su auxilio. Adicionalmente, durante el año se deterioraron aún más las condiciones de vida de la población palestina, en un contexto de bloqueo persistente por parte de Israel a la entrada de ayuda humanitaria y estancamiento de las negociaciones para un alto el fuego.¹⁶⁷ Ello, a pesar de las señales de alerta lanzadas por diversas organizaciones sobre los extraordinarios niveles de devastación en Gaza –70% de las infraestructuras del territorio están destruidas o dañadas–, la falta de los insumos más básicos, las consecuencias derivadas de los sucesivos desplazamientos forzados que han afectado a 90% de la población de la Franja, los gravísimos impactos de la violencia en la salud física y mental de los menores palestinos, la hambruna que asolaba a prácticamente toda la población palestina de la Franja o la proliferación de enfermedades, como la poliomielitis. La situación humanitaria también se vio afectada por la persecución y criminalización de la UNRWA por parte de Israel, que en octubre aprobó leyes para prohibir las actividades de esta agencia de la ONU –clave para la asistencia a la población palestina– en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.

En paralelo, la situación en Cisjordania continuó deteriorándose, en un contexto de intensificación de la violencia y de las políticas de ocupación israelíes. Según

OCHA, más de 500 palestinos murieron en distintos hechos de violencia –498 en Cisjordania y cinco en Israel. La cifra de letalidad en 2024 es ligeramente inferior a la de 2023 –cuando se registraron 548 muertes–, pero muy superior a la de años precedentes –191 en 2022, 328 en 2021, 30 en 2020. En 2024 murieron 34 israelíes, 21 en Cisjordania y 13 en Israel. De este total, 15 eran miembros de las fuerzas de seguridad y siete eran colonos. A lo largo del año Israel también impuso restricciones adicionales de movimiento a la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este e intensificó sus políticas de expansión de asentamientos y anexión de facto de territorio. Israel aprobó medidas para “legalizar” asentamientos declarados ilegales previamente por los propios tribunales israelíes –según la ley internacional todos los asentamientos son ilegales–, transfirió competencias a autoridades civiles israelíes para el control de la zona C de Cisjordania –bajo control militar israelí, según los acuerdos de Oslo– y anunció planes para la construcción de nuevas colonias. Adicionalmente, a finales de junio, las autoridades israelíes formalizaron la apropiación ilegal de más de 1.200 hectáreas en la zona del Valle del Jordán, cerca de Jericó, en el mayor movimiento de este tipo desde los acuerdos de Oslo de 1993.

En este contexto, durante el año se multiplicaron las voces que denunciaron y presentaron evidencias contra Israel por la comisión de genocidio. En marzo la relatora especial para los derechos humanos en el territorio ocupado palestino, Francesca Albanese, señaló a Israel por perpetrar al menos tres de los actos prohibidos por la Convención: asesinar a miembros de un grupo de población, causar daños corporales o psíquicos graves a los integrantes de un grupo, e infiijir deliberadamente al grupo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial. Hasta finales de 2024, organizaciones de referencia en el ámbito humanitario y de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras también publicaron informes en los que alertaron sobre la comisión de actos constitutivos de genocidio contra la población palestina de Gaza. En paralelo, siguieron activas las vías judiciales internacionales. Por un lado, continuó el proceso por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras la demanda presentada por Sudáfrica a finales de 2023. En enero la CIJ decidió iniciar una investigación –tras valorar que algunos de los hechos expuestos en la demanda son “plausibles”– y, aunque no solicitó un alto el fuego inmediato, dictaminó una serie de medidas provisionales para prevenir la comisión de actos de genocidio. La CIJ emitió nuevas medidas provisionales en marzo ante el empeoramiento de las condiciones de vida en Gaza y la propagación de la hambruna –exigiendo que Israel garantizara la entrega de ayuda humanitaria– y otra vez en mayo, cuando exigió a Israel que detuviera su ofensiva militar en Rafah, donde se había concentrado la mayor parte de la población de Gaza. Israel no implementó estas medidas. En julio, en el marco de otro proceso

¹⁶⁷ Para más información, véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

iniciado ante este tribunal, la CIJ se pronunció sobre la ilegalidad de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, dictaminando que estas colonias y el régimen asociado a ellas se habían establecido y continuaban existiendo en violación del derecho internacional, que con ellas Israel pretendía una anexión permanente y que Israel debía poner fin a la ocupación lo antes posible. Por otro lado, el proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) también arrojó novedades. En mayo, la fiscalía solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra tres dirigentes de Hamas –Yahia Sinwar, jefe de la milicia en Gaza; Mohamed Diab Ibrahim al Marsi, comandante del ala militar del grupo; y contra Ismail Haniyah, su máximo dirigente político– por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. En noviembre la CPI dio curso a estas órdenes, pero para entonces Israel ya había dado muerte a Haniyeh (julio) y Sinwar (octubre).

Cabe destacar que **la crisis en Gaza alentó una intensificación de conflictos y tensiones en toda la región** –conflicto armado entre Israel y Hezbollah, confrontación directa entre Israel e Irán, hostilidades entre Israel y los al-houthistas en Yemen– y que las negociaciones para un alto el fuego no desembocaron en un acuerdo hasta principios de 2025. El pacto de tres fases anunciado entonces presenta un esquema muy similar al de las propuestas discutidas en mayo y julio de 2024, que no prosperaron principalmente por objeciones del Gobierno de Netanyahu y su insistencia en continuar su ofensiva hasta la erradicación total de Hamas. EUU continuó siendo un soporte político y militar clave para Israel y, en paralelo a su implicación como mediador en las negociaciones, siguió suministrándole ingentes cantidades de armas a lo largo de todo el año.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Türkiye, Hezbollah, Irán, Rusia, ex Grupo Wagner, Israel
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos

presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio y con un papel destacado en el conflicto árabe-israelí, en el plano interno se ha caracterizado por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

Durante 2024 Siria registró un incremento en los niveles de violencia, con una escalada de especial magnitud al finalizar el año que desembocó en el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad el 8 de diciembre. Según los datos de ACLED, las hostilidades en el país provocaron la muerte de al menos 6.887 personas en 2024, un balance superior a las 6.254 contabilizadas por este *think tank* el año anterior.¹⁶⁸ Las cifras del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés) apuntan a más de 7.400 víctimas mortales en 2024, un balance notoriamente mayor al de 2023, cuando esta organización registró 4.361 personas fallecidas. Tras la caída del Gobierno de al-Assad, y basándose en documentos encontrados en las cárceles del régimen, SOHR certificó además la muerte de al menos 14.000 personas bajo tortura en estas prisiones. Por ello, el balance de SOHR sobre las muertes documentadas en Siria en 2024 asciende a más de 21.000 personas fallecidas, de las cuales la inmensa mayoría –unas 18.000– serían civiles.¹⁶⁹

Como en años previos, **la situación en Siria se caracterizó por enfrentamientos entre numerosos actores armados, en un contexto agravado desde finales de 2023 por la intensificación de los conflictos y tensiones regionales derivados de la situación en Gaza.** La internacionalización del conflicto continuó haciéndose patente, entre otros elementos, en la implicación de fuerzas militares de seis países –Rusia, Irán, Türkiye, EEUU, Israel y Jordania– a través de intervenciones directas y/o presencia en territorio sirio. A lo largo del año, volvieron a identificarse diversas dinámicas de confrontación en distintas áreas del país entre actores locales, regionales e internacionales. La zona del noreste de Siria fue escenario de ataques y contrataques de EEUU y milicias con respaldo de Irán que operan en territorio sirio e iraquí. También se produjeron continuas ofensivas de Israel en distintos puntos de Siria contra posiciones de milicias pro-iraníes, miembros de la Guardia Republicana iraní, Hezbollah y Hamas. Algunos de estos grupos lanzaron ataques contra los Altos del Golán ocupados por Israel. Cabe destacar que uno de los ataques israelíes en Siria, la ofensiva

168 ACLED, ACLED Explorer [consultado el 14 de febrero de 2025].

169 SOHR, Including over 18,000 civilians, SOHR verifies the death of 21,402 people across Syria in 2024, 1 de enero de 2025.

contra el consulado iraní en Damasco en abril, supuso un punto de inflexión y llevó a un enfrentamiento directo de Israel con Irán.¹⁷⁰ También que, según SOHR, los ataques israelíes en Siria alcanzaron un nivel sin precedentes en 2024 y provocaron la muerte a 482 personas –414 combatientes y 68 civiles.¹⁷¹ Paralelamente, en el norte continuaron los ataques de Türkiye y grupos armados afines, como el Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés) contra milicias kurdas integradas en las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés), que a su vez también se enfrentaron con grupos armados pro-iraníes y milicias tribales apoyadas por el régimen de Assad. Türkiye, que continuó advirtiendo sobre la creación de un corredor de unos 40 kilómetros a lo largo de la frontera, intensificó sus ofensivas en noviembre, tras un ataque del PKK en Ankara.¹⁷² En el noroeste continuaron las hostilidades entre las fuerzas del Gobierno y Hayat al-Sham (HTS) y en el sur choques entre diferentes facciones armadas. También hubo enfrentamientos y tensiones entre distintos grupos alineados con Türkiye. ISIS también continuó operando en el país e incrementó su actividad. Entre enero y junio el grupo yihadista había reivindicado 153 ataques en Iraq y Siria, el doble que en 2023.¹⁷³

Tras analizar la situación en el país durante el primer semestre, la Comisión de Investigación Independiente de la ONU sobre Siria alertó en agosto sobre la prevalencia de la fragmentación, la ausencia del imperio de la ley, la acción de grupos armados que utilizan la violencia y extorsionan a la población civil, las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes de personas detenidas. También subrayó que las necesidades humanitarias habían alcanzado el nivel más alto desde el inicio del conflicto armado en 2011. En el segundo semestre, la situación en el país también se vio afectada por la escalada de violencia en Líbano, después de que Israel decidiera intensificar sus operaciones aéreas y terrestres contra Hezbollah y también en Siria. Según datos de la ONU, entre septiembre y noviembre más de medio millón de personas habían cruzado la frontera desde Líbano a Siria, incluyendo libaneses y población refugiada siria hasta entonces radicada en el vecino país.

En este contexto, a finales de noviembre HTS lideró una ofensiva desde el norte del país y con apoyo del SNA avanzó en el control de territorios hacia el sur. En pocos días tomaron el control de ciudades clave como Aleppo, Hama y Homs. Las SDF se sumaron desde el noreste, mientras que desde la zona meridional otros grupos lanzaron ataques contra las fuerzas del régimen. Las fuerzas opositoras encontraron escasa resistencia de las tropas sirias y tomaron el control de la capital, Damasco,

en tan solo diez días. De esta manera, **13 años después del inicio de la revuelta contra Bashar al-Assad se puso fin a su régimen y a más de cinco décadas de gobierno autoritario iniciado por su padre, Hafez al-Assad.**¹⁷⁴ Hasta ese momento, pese a la persistencia de las hostilidades, las líneas del frente se mantenían estables y al-Assad se había proyectado como el vencedor de facto –había recuperado el control de la mayor parte del territorio del país– y en el último tiempo se había visto beneficiado por la “normalización” de relaciones con múltiples actores internacionales, como escenificó su reincorporación a la Liga Árabe en 2023. Los hechos transcurridos entre el 27 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024 provocaron más de 500 muertes y el desplazamiento de un millón de personas. La rápida caída del régimen se atribuyó a diversos factores, entre otros, la falta de apoyo de actores que habían sido sus principales soportes: Hezbollah e Irán –concentrados y debilitados en su confrontación con Israel– y Rusia –enfocada en la guerra en Ucrania. HTS –organización sucesora del antiguo Frente al-Nusra, el ex brazo armado de al-Qaeda en Siria y clasificada como grupo terrorista por diversos actores– asumió el liderazgo de la transición en un clima de incertidumbre, en parte por los vínculos previos del grupo y las críticas al estilo de gobernanza en el área bajo su control, Idlib –que en 2024 incluyeron protestas por denuncias de torturas en prisiones y secuestro de activistas. El líder de HTS, Ahmed al-Sharaa –que abandonó su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Jolani– anunció que el hasta entonces responsable de la administración en Idlib asumiría el gobierno en funciones. HTS también avanzó en acuerdos con otros grupos armados de oposición para su desmantelamiento e integración en una fuerza militar unificada. Al finalizar el año la situación de seguridad seguía siendo extremadamente frágil. Se denunciaron acciones de venganza y ejecuciones extrajudiciales en localidades como Hama, Homs y Latakia y ataques de grupos leales a al-Assad contra fuerzas del gobierno de transición en zonas como Tartous. En paralelo, Türkiye lanzó una ofensiva contra SDF y arrebató a las fuerzas kurdas el control de localidades estratégicas como Tal Rifaat (cerca de Aleppo) o Manbij. ISIS también intentó aprovechar el vacío de poder y EEUU y Francia lanzaron ataques contra posiciones del grupo. Horas después de la caída de Assad, el Gobierno de Netanyahu también avanzó posiciones en torno a los Altos del Golán más allá de la zona desmilitarizada, ocupó nuevos territorios en Siria bajo el argumento de prevenir posibles ataques contra Israel y lanzó una amplia ofensiva contra los arsenales sirios.¹⁷⁵ Ante el cambio de escenario también se multiplicaron las iniciativas de diversos actores que intentaban establecer relación con las nuevas autoridades e influir en la evolución del proceso político en el país.¹⁷⁶

170 Véase el análisis sobre Israel-Irán en este capítulo.

171 SOHR, *Highest annual toll ever! Israel attacks Syria on 373 occasions in 2024, destroying over 1,000 targets and killing and injuring nearly 845 combatants and civilians*, 2 de enero de 2025.

172 Véase el resumen sobre Türkiye (PKK) en este capítulo.

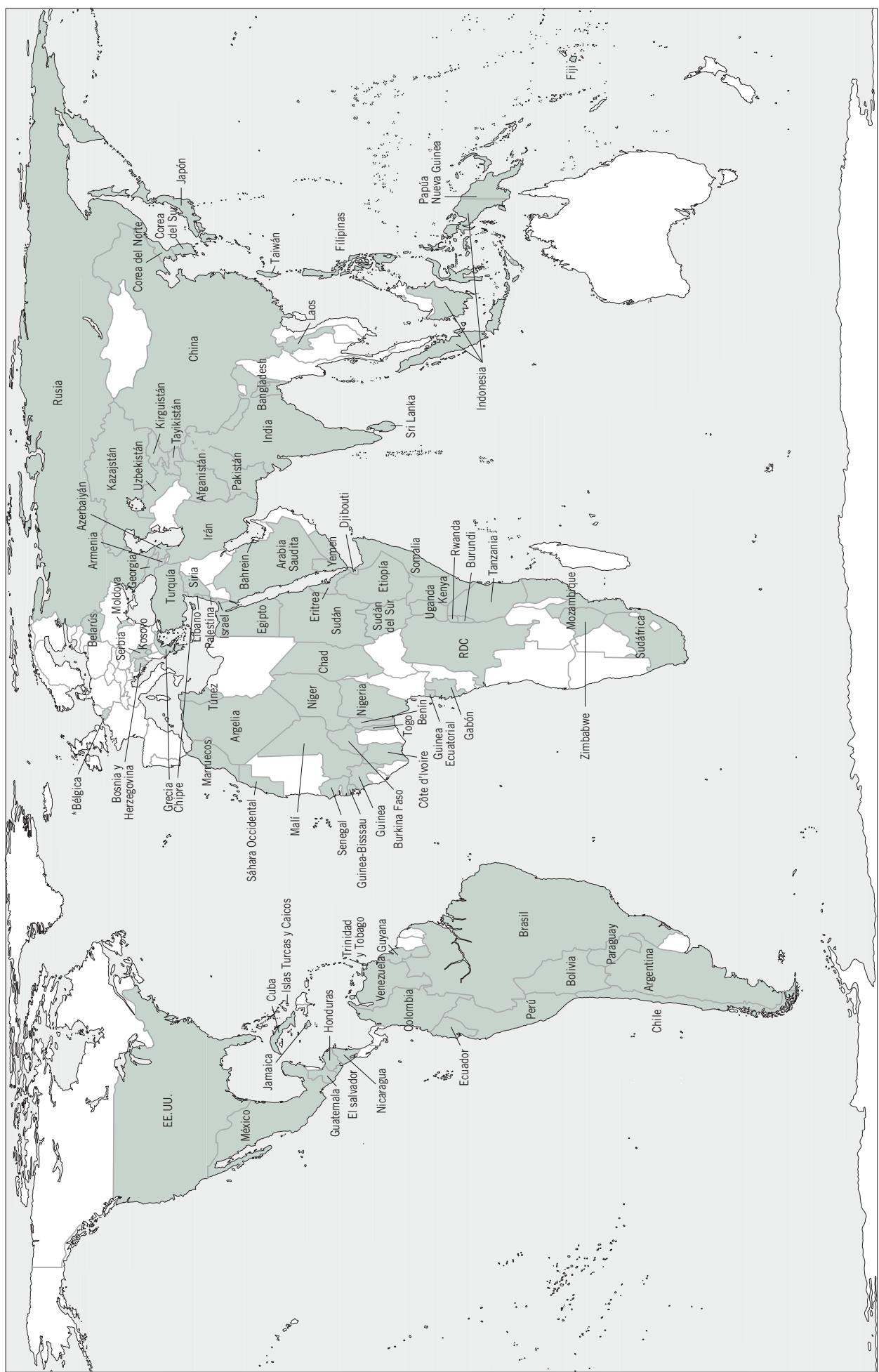
173 CENTCOM, *Defeat ISIS Mission in Iraq and Syria for January – June 2024*, 16 de julio de 2024.

174 Para más información y análisis sobre la caída del régimen de Bashar al-Assad, véase la edición de enero de 2025 de la publicación trimestral de la Escuela de Cultura de Pau *Oportunidades de paz y escenarios de riesgo*.

175 Véase el resumen sobre Israel-Siria en el capítulo 2 (Tensiones).

176 Para más información, véase el resumen sobre Siria en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

Mapa 2.1. Tensiones



Países con situaciones de tensión en 2024

* La tensión Rusia – EE.UU., OTAN, UE aparece señalada en este mapa de manera simplificada, por razones de representación gráfica. No se han marcado todos los países que integran la OTAN ni los que integran la UE, sino Bélgica como país que acoge las sedes de la UE y de la OTAN, Rusia y EE.UU.

2. Tensiones

- Durante 2024 se registraron 116 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (38) y Asia y el Pacífico (31), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron entre América (20), Europa (15) y Oriente Medio (12).
- En Mozambique la crisis postelectoral dejó un saldo de al menos 225 personas muertas y más de 4.000 detenidas.
- En Bolivia se incrementó la tensión por un golpe de Estado fallido y por las movilizaciones de seguidores del expresidente Morales y del actual mandatario.
- Tras las elecciones presidenciales se incrementó la tensión en Venezuela, con protestas masivas y denuncias de represión y violaciones de derechos humanos del Estado.
- Se produjo un deterioro de la tensión entre Afganistán y Pakistán y tuvieron lugar episodios de violencia en la frontera entre las fuerzas de seguridad de ambos países.
- Las protestas sociales en Bangladesh, con más de 1.400 muertes, forzaron la dimisión de la primera ministra y el nombramiento de un Gobierno interino en la crisis política más grave de los últimos años.
- Se incrementó la tensión entre China y Taiwán por la celebración de elecciones presidenciales en Taiwán y por el aumento de las actividades militares de China alrededor de la isla.
- Se incrementó la tensión entre Serbia y Kosovo y en el norte de Kosovo, con incidentes de seguridad y medidas unilaterales que incrementaron la desconfianza.
- En 2024 Israel e Irán cruzaron una línea roja en su relación de rivalidad e intercambiaron ataques directos.
- Tras la caída de Bashar al-Assad, Israel amplió la ocupación de territorios sirios y declaró su desvinculación del acuerdo de 1974 sobre la zona del Golán.
- Los intercambios armados del grupo armado yemení al-houthistas con Israel y luego con EEUU y Reino Unido que se iniciaron en 2023 se intensificaron y ampliaron más allá del Mar Rojo a lo largo de 2024.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2024. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2024. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2024.

2.1 Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2024

Tensión ¹	Tipología ²	Actores principales	Intensidad ³
			Evolución ⁴
ÁFRICA			
Argelia	Interno	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak, grupos armados con agendas yihadistas	1
	Gobierno, Sistema		↑
Benín	Interna internacionalizada	Gobierno, actores armados regionales	2
	Gobierno		=
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, sectores del Ejército	2
	Gobierno		=
Chad	Interna internacionalizada	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Transformateurs), grupos armados chadianos (entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas, Francia, MNJTF	3
	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad		=
Chad – Sudán	Internacional	Chad, Sudán (Sudan Armed Forces), Rapid Support Forces (RSF), EAU	3
	Gobierno, identidad		↑
Côte d'Ivoire	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, actores armados regionales	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
Djibouti	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupo armado FRUD-armé	1
	Gobierno		=
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	1
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía ⁵	Internacional	Eritrea, Etiopía	3
	Territorio		=
Etiopía ⁶	Interna	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		=
Etiopía – Egipto – Sudán	Internacional	Etiopía, Egipto, Sudán	2
	Recursos		↓
Etiopía – Somalia	Internacional	Etiopía, Somalia, Somalilandia	1
	Gobierno, Territorio, Recursos		↓
Etiopía – Sudán	Internacional	Etiopía, Sudán, milicias comunitarias	1
	Recursos		↓
Gabón	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓

- En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
- La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2024 con la del año 2023 apareciendo el símbolo (↑) si la situación general durante 2023 es más grave que la del año anterior, (↓) si es mejor y (=) si no ha experimentado cambios significativos.
- Aunque no se desarrolla en este capítulo la tensión entre Eritrea y Etiopía, elementos de esta crisis se incluyen en el resumen de Eritrea – Etiopía en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) de Escola de Cultura de Pau. *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenario* Barcelona: Icaria, 2025.
- Aunque no se desarrolla en este capítulo la tensión de Etiopía, elementos de esta crisis se incluyen en el resumen de Etiopía (Oromiya) y Etiopía (Amhara) en el capítulo 1 (Conflictos armados), y en Etiopía en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) de Escola de Cultura de Pau. *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenario*, Barcelona: Icaria, 2025.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	2
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		↑
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenya	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Malí	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, CEDEAO	2
	Gobierno		=
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁷	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Mozambique	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno, sistema		↑
Níger ⁸	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↑
Nigeria (Biafra)	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)	3
	Identidad, Autogobierno		=
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	1
	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno liderado por la coalición Union Sacré (liderada por Félix Tshisekedi e integrada por diferentes actores políticos, incluidos disidentes de la coalición Front Commun pour le Congo del ex presidente Joseph Kabila), oposición política (entre otros, Front Commun pour le Congo y Lamuka) y social	3
	Gobierno		=
RDC – Rwanda ⁹	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado ruandés FDLR, grupo armado congolés pro ruandés M23 (ex CNDP)	3
	Identidad, Gobierno, Recursos		↑
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado ruandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora ruandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		=
Rwanda – Burundi	Internacional	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados	3
	Gobierno		↑
Senegal	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	1
	Autogobierno		↓
Sudáfrica	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑

7 A pesar de que el Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera esta tensión entre Marruecos y el Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

8 Aunque no se desarrolla en este capítulo la tensión en Níger, elementos de esta crisis se incluyen en el resumen de región Sahel Occidental en el capítulo 1 (Conflictos armados).

9 Aunque no se desarrolla en este capítulo la tensión RDC-Rwanda, elementos de esta crisis se incluyen en el resumen de RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados). También se incluyen elementos de análisis de esta tensión en el resumen de RDC en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau. *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur, milicias comunitarias	2
	Recursos, Identidad		=
Tanzania	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	1
	Interna		↑
Togo	Interna internacionalizada	Gobierno, actores armados regionales	1
	Gobierno		↓
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados con agendas yihadistas	2
	Gobierno, Sistema		=
Uganda	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ADF	2
	Gobierno		=
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
AMÉRICA			
Argentina	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Brasil	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	3
	Gobierno, Recursos		↑
Chile	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↓
Colombia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Cuba	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Sistema		=
Ecuador	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	3
	Gobierno, Recursos		↓
EEUU	Interna	Gobierno, oposición política y social, milicias ciudadanas	1
	Gobierno		=
El Salvador	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	1
	Gobierno, Recursos		↓
Guatemala	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	2
	Gobierno, Recursos		↓
Honduras	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	2
	Gobierno, Recursos		↓
Islas Turcas y Caicos ¹⁰	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	1
	Gobierno, Recursos		↑
Jamaica	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	1
	Gobierno, Recursos		↓

10 Las Islas Turcas y Caicos figuran en la lista de Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas desde 1946. A pesar de que forman parte de los Territorios de Ultramar del Reino Unido, que ejerce de potencia administradora, la Asamblea General adopta todos los años una decisión sobre las Islas Turcas y Caicos. Debido a la ubicación geográfica de la isla, el caso se incluye el capítulo de América y no de Europa.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
AMÉRICA			
México	Internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↑
Nicaragua	Internas	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Sistema		=
Paraguay	Internas	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Perú	Internas	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	2
	Gobierno, Recursos		↓
Trinidad y Tobago	Internas	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	1
	Gobierno, Recursos		↑
Venezuela	Internacionalizada	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno, Sistema		↑
Venezuela – Guyana	Internacional	Venezuela, Guyana	3
	Territorio, Recursos		↑
ASIA Y EL PACÍFICO			
Afganistán – Pakistán	Internacional	Afganistán, Pakistán	3
	Gobierno		↑
Bangladesh	Internas	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)	3
	Gobierno		↑
China (Tíbet)	Internas internacionalizadas	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China (Xinjiang)	Internas internacionalizadas	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China – Corea del Sur	Internacional	China, Corea del Sur	1
	Territorio, Recursos		↑
China - EEUU	Internacional	China, EEUU	2
	Sistema, Gobierno, Territorio		=
China – Filipinas	Internacional	China, Filipinas, EEUU	3
	Territorio, Recursos		=
China – Japón	Internacional	China, Japón, Taiwán, EEUU	3
	Territorio, Recursos		↑
China – Taiwán	Internacional	China, Taiwán, EEUU	3
	Territorio, Recursos, Sistema		↑
Corea del Norte	Internas	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Sistema		=
Corea del Sur	Internas	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Corea del Norte – EEUU, Japón, Corea del Sur ¹¹	Internacional	Corea del Norte, EEUU, Japón, Corea del Sur, China, Rusia	3
	Gobierno		=

11 Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano y afecta a otros países más allá de los que aparecen en la denominación del caso.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA Y EL PACÍFICO			
Corea del Norte – Corea del Sur	Internacional	Corea del Norte, Corea del Sur	3
	Sistema, Territorio		↑
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	2
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		=
India – China	Internacional	India, China	2
	Territorio		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	2
	Identidad, Territorio		=
Indonesia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Japón – Rusia (Islas Kuriles)	Internacional	Japón, Rusia	1
	Territorio, Recursos		=
Kazajstán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, actores armados regionales	1
	Sistema, Gobierno		↑
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, actores armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Kirguistán – Tayikistán	Internacional	Kirguistán, Tayikistán	1
	Territorio, Recursos		↓
Laos	Interna	Gobierno, oposición política y social, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		↑
Mar de la China Meridional	Internacional	China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei Darussalam	2
	Territorio, Recursos		↑
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=
Papúa Nueva Guinea	Interna	Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bougainville	3
	Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno		=
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, actores armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=
Tayikistán (Gorno-Badakhshan)	Interna	Gobierno, oposición social pamiri al Gobierno central en la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan (GBAO), China	1
	Identidad, Gobierno		=
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, actores armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, Territorio		=
Uzbekistán (Karakalpakistán)	Interna	Gobierno, oposición social en la región autónoma de Karakalpakistán	1
	Autogobierno, Identidad		=

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
EUROPA			
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Türkiye	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Belarús	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, UE, Polonia, Letonia, Lituania, EEUU, Ucrania, OTAN, Rusia	2
	Gobierno		↑
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Instituciones estatales, instituciones de las entidades sub-estatales (República Sprksa y Federación de Bosnia y Herzegovina), alto representante de la comunidad internacional, EEUU, UE, OTAN, Serbia, Rusia	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia	Interna internacionalizada	Georgia, oposición política y social, Rusia	2
	Gobierno		↑
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Moldova	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política, Rusia, UE, Ucrania, OTAN	1
	Gobierno		↓
Moldova (Transnistria)	Interna internacionalizada	Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia, Ucrania	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Rusia	Interna internacionalizada	Gobierno, empresas de seguridad privada y actores paramilitares, oposición política y social, actores armados de oposición (Legión Libertad de Rusia, Cuerpo de Voluntarios Rusos, Batallón Siberia), ISIS-K	3
	Gobierno		↑
Rusia (norte del Cáucaso)	Interna	Gobierno federal ruso, gobiernos de las repúblicas de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, actores armados de oposición, ISIS, oposición social en la diáspora	2
	Sistema, Identidad, Gobierno		↑
Rusia – EEUU, OTAN, UE	Internacional	Rusia, Belarús, EEUU, OTAN, UE, Reino Unido, Ucrania	2
	Sistema, Gobierno, Territorio, Recursos		↑
Serbia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Serbia – Kosovo	Internacional ¹²	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Türkiye	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS	2
	Gobierno, Sistema		↑
Türkiye – Grecia, Chipre	Internacional	Türkiye, Grecia, República de Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre	1
	Territorio, Recursos, Autogobierno, Identidad		↓
ORIENTE MEDIO			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	1
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=

12 La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia emitió en 2010 una opinión consultiva en la que estableció que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ORIENTE MEDIO			
Irán	Internacional	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán (noroeste)	Internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados (PJAK, PDKI, Komala) Gobierno Regional del Kurdistán iraquí (KRG), Iraq	2
	Autogobierno, Identidad		=
Irán (Sistán Baluchistán)	Internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán (programa nuclear) ¹³	Internacional	Irán, EEUU, Israel, países europeos del E3 suscriptores del acuerdo sobre el programa nuclear iraní de 2015 (Alemania, Francia y Reino Unido)	3
	Sistema, Gobierno		=
Israel – Irán	Internacional	Israel, Irán	3
	Sistema, Gobierno		↑
Israel – Siria	Internacional	Israel, Siria, UNDOF	3
	Sistema, Recursos, Territorio		↑
Líbano	Internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social	1
	Gobierno, Sistema		↓
Palestina	Internacional	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=
Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido	Internacional	Al-houthistas/Ansar Allah, Israel, EEUU, Reino Unido, Resistencia Islámica de Iraq, Irán	3
	Sistema, Gobierno		↑

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.

↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; =: sin cambios.
Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2024

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2024, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

En 2024 se identificaron 116 escenarios de tensión en todo el mundo, dos más que en 2023, confirmando la tendencia

al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años (33 casos más desde el año 2018). África y Asia y el Pacífico fueron las regiones del mundo con mayor número de tensiones (38 y 31 respectivamente), seguidas de América (20), Europa (15) y Oriente Medio (12). Respecto a la variación de casos en comparación con el año anterior, se identificaron 12 nuevos escenarios de tensión, mientras que otros

Durante 2024 se identificaron 116 escenarios de tensión, 38 en África, 31 en Asia y el Pacífico, 20 en América, 15 en Europa y 12 en Oriente Medio

diez casos dejaron de ser considerados como tal. Los nuevos casos se distribuyeron de manera bastante homogénea entre todas las regiones del mundo: en África, Chad-Sudán y Sudáfrica; en América, Trinidad y Tobago y las Islas Turcas y Caicos; en Asia y el Pacífico, Indonesia, Corea del Sur y China-Corea del Sur; en Europa, Georgia y Serbia; y en Oriente Medio, Israel-Irán; Israel-Siria y Yemen (al-houthistas)-Israel, EEUU, Reino Unido. Por otro lado, de los diez casos que dejaron de ser calificados como tensión, dos escalaron a situación de conflicto armado –Haití e Indonesia (Papúa Occidental)–, mientras que los otros ocho experimentaron una reducción de la intensidad: Madagascar y Sierra Leona en África; Panamá en América; Fiji, Indonesia (Sulawesi), Tailandia y China (Hong Kong) en Asia y el Pacífico; e Iraq (Kurdistán) en Oriente Medio.

13 En anteriores ediciones de este informe, este caso era denominado “Irán – Israel, EEUU”. La nueva denominación pretende distinguir este caso de la confrontación estrictamente bilateral entre Israel e Irán, que escaló en 2024 y pasó a ser considerada como un nuevo contexto de tensión.

Gráfico 2.1. Evolución del número de tensiones 2010-2024



Gráfico 2.2. Distribución regional del número de tensiones en 2024

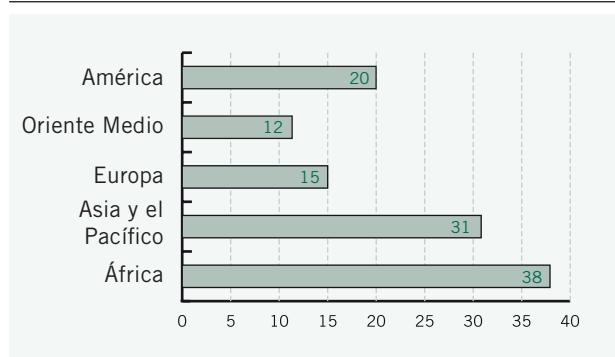


Gráfico 2.4. Intensidad de las tensiones en 2024

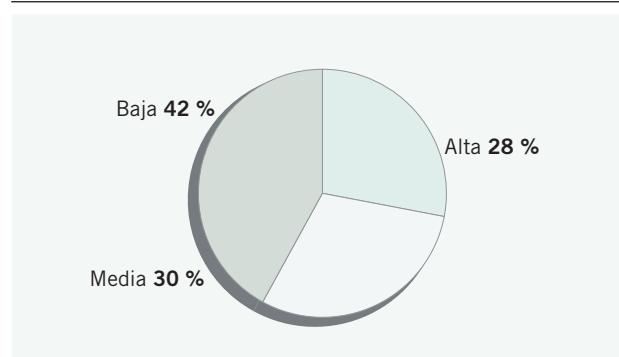
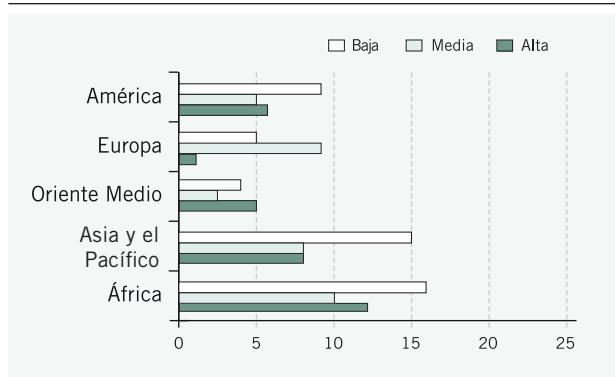


Gráfico 2.3. Intensidad de las tensiones por regiones



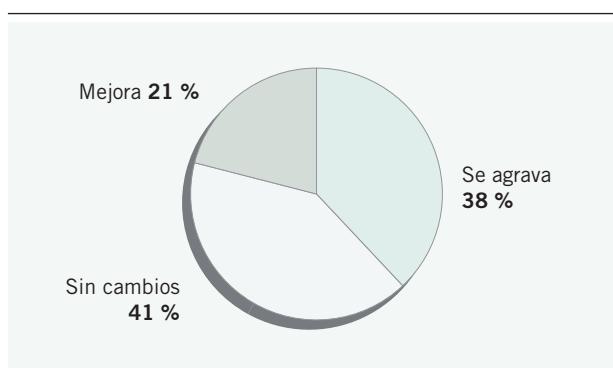
En cuanto a la **intensidad** de las tensiones, el 42% fue de baja intensidad, el 30% de intensidad media, y el 28% de alta intensidad, pasando los de esta última tipología de 31 casos en 2023 a 32 casos en 2024. Tales porcentajes son similares a los del año anterior, con una ligera disminución de los casos de intensidad media y un pequeño incremento de las tensiones de baja de intensidad y de las de alta intensidad. África fue el continente que albergó un mayor número de tensiones de máxima intensidad (12 casos), pero la región del mundo con un mayor porcentaje de tales casos fue Oriente Medio (42%).

Cuadro 2.1. Tensiones de alta intensidad en 2024

ÁFRICA (12)	ASIA Y EL PACÍFICO (8)	ORIENTE MEDIO (5)	AMÉRICA (6)	EUROPA (1)
Chad	Afganistán – Pakistán	Irán	Bolivia	
Chad – Sudán	Bangladesh	Irán (programa nuclear)	Brasil	
Eritrea – Etiopía	China – Japón	Israel – Irán	Ecuador	
Etiopía	China – Taiwán	Israel – Siria	México	
Kenya	China – Filipinas	Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido	Venezuela	
Mozambique	Corea del Norte – EEUU, Japón, Corea del Sur		Venezuela – Guyana	
Níger	Corea del Norte – Corea del Sur			
Nigeria	Papúa Nueva Guinea			
Nigeria (Biafra)				
RDC				
RDC – Rwanda				
Rwanda – Burundi				

En cuanto a la **evolución** de los casos, un 21% (24 casos) experimentó una reducción de la tensión respecto del año anterior, un 41% (48 casos) no observó cambios significativos y un 38% (44 casos) se agravó respecto de 2023. Aunque el porcentaje de casos en los que escaló la tensión en 2024 (38%) fue significativamente inferior al del 2023 (49%), los datos parecen confirmar una tendencia de los últimos años en la que el número de casos que escalan es claramente superior al del número de casos en los que la tensión se reduce. Cabe destacar especialmente la región de Europa, en la que el 73% de los casos se agudizaron en 2024 y el 85% lo había hecho en 2023. Dentro de Asia y el Pacífico, la subregión de Asia Oriental también experimentó un claro incremento de la conflictividad, especialmente en el continuum geográfico entre el Mar Amarillo, el Mar de China Oriental, el Estrecho de Taiwán y el Mar de la China Meridional. En Oriente Medio también se vivió una importante escalada de la tensión militar, especialmente entre Israel y otros países de la región (como Siria, Irán o Yemen), y también con un rol destacado de Irán. En un sentido inverso, casi la mitad de los escenarios de tensión en América (concretamente un 45%) se redujo respecto del 2023, con una sensible reducción en la tasa de homicidios en países afectados por dinámicas vinculadas a grupos de crimen organizado, como El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador o Jamaica, o bien por la disminución de las movilizaciones masivas en

Gráfico 2.5. Evolución de las tensiones en 2024



países como Argentina, Perú, Chile o Paraguay. Por otra parte, merece la pena destacar aquellos casos de alta intensidad que experimentaron un deterioro de la situación en 2024 (véase cuadro 2.3). Asia y el Pacífico fue la región que albergó un mayor número de tales casos, seguida de América.

Un 38% de los casos identificados en 2024 se agravaron respecto del año anterior y solo en un 21% se observó una reducción de la tensión

En cuanto a los principales **factores de causalidad**, las tensiones continuaron siendo predominantemente multicausales, como así lo demuestra el hecho de que en el 62% de los casos concurrieran dos o más causas. El cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o de las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos estuvo presente en 89 de los 116 casos (un

Cuadro 2.2. Tensiones que se agravaron en 2024

ÁFRICA (11)	ASIA Y EL PACÍFICO (11)	ORIENTE MEDIO (4)	AMÉRICA (7)	EUROPA (11)
Argelia	Afganistán – Pakistán	Irán (Sistán Baluchistán)	Bolivia	Belarús
Chad – Sudán	Bangladesh	Israel – Irán	Brasil	Bosnia y Herzegovina
Guinea	China – Japón	Israel – Siria	Islas Turcas y Caicos	Georgia
Guinea-Bissau	China – Taiwán	Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido	México	Georgia (Abjasia)
Kenya	China – Corea del Sur		Trinidad y Tobago	Moldova (Transnistria)
Mozambique	Corea del Norte – Corea del Sur		Venezuela	Rusia
Nigeria	Corea del Sur		Venezuela – Guyana	Rusia (Norte del Cáucaso)
RDC – Rwanda	Indonesia			Rusia – EEUU, OTAN, UE
Rwanda – Burundi	Kazajstán			Serbia
Sudáfrica	Laos			Serbia – Kosovo
Tanzania	Mar de la China Meridional			Türkiye

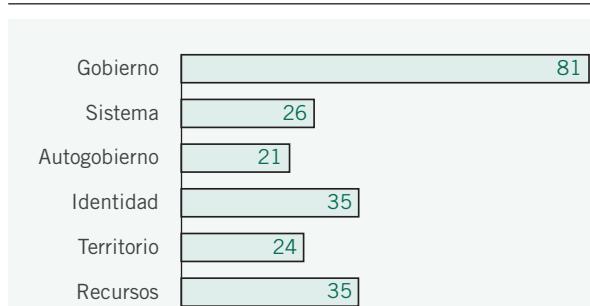
Cuadro 2.3. Casos de alta intensidad y en los que la tensión se agravó en 2024

ÁFRICA (4)	ASIA Y EL PACÍFICO (6)	ORIENTE MEDIO (3)	AMÉRICA (5)	EUROPA (1)
Chad – Sudán	Afganistán – Pakistán	Israel – Irán	Bolivia	Rusia
Nigeria	Bangladesh	Israel – Siria	Brasil	
RDC – Rwanda	China – Japón	Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido	México	
Rwanda – Burundi	China – Taiwán		Venezuela	
	Corea del Norte – Corea del Sur		Venezuela-Guyana	
	Corea del Norte – EEUU, Japón, Corea del Sur			

77%). Las tensiones vinculadas a cuestiones identitarias y/o de autogobierno como una de las causas principales se elevaron a 36 casos (un 31%), mientras que el control del territorio y/o el control de los recursos fue un factor de causalidad relevante en 41 casos (un 35%). En un análisis más pormenorizado de factores, ordenados de mayor a menor prevalencia, la oposición a las políticas internas o internacionales del **gobierno** volvió a ser el factor con mayor preponderancia y estuvo presente en el 70% de los 116 escenarios de tensión, siendo un porcentaje ligeramente superior al del año anterior. La presencia de tal factor de causalidad osciló claramente entre regiones, estando presente en el 95% y el 79% de los casos en América y en África respectivamente, pero solamente en el 45% de los escenarios en Asia y el Pacífico. El segundo factor con mayor prevalencia fue la reivindicación de **aspiraciones de tipo identitario** (30%), un porcentaje inferior al del 2023 (33%). Tal factor fue especialmente relevante en Europa (52%), pero en América, en cambio, solamente estuvo presente en el 10% de los casos. La competencia por el **control de los recursos** tuvo la misma presencia que la identidad, siendo un factor explicativo relevante en el 30% de los casos, un notable incremento respecto del año anterior (24%). En este caso, también se observó una importante oscilación entre regiones, pues este factor estuvo presente en el 60% de los casos en América –una región en la que operan numerosos grupos de crimen organizado y provocan altas tasas de homicidios—y solamente en un caso en Oriente Medio.

A continuación, con porcentajes muy parecidos, se situaron las cuestiones relacionadas con la **oposición** al **sistema** político, social o ideológico del Estado en su conjunto (22%), el **control del territorio** (21%) y las **demandas de autodeterminación y autogobierno** (18%). En cuanto a la oposición al sistema –factor que incrementó ligeramente su presencia respecto del año anterior–, estuvo presente en 11 casos en Asia, especialmente en Asia Oriental, y fue una causa proporcionalmente muy preponderante en Oriente Medio (42% de los casos). En relación al control del territorio, fue un elemento presente en casi la mitad de los casos en Asia y el Pacífico, pero solamente en un caso en América (Venezuela-Guyana). Finalmente, en el caso de demandas de autodeterminación y autogobierno,

Gráfico 2.6. Factores de causalidad en las tensiones en 2024

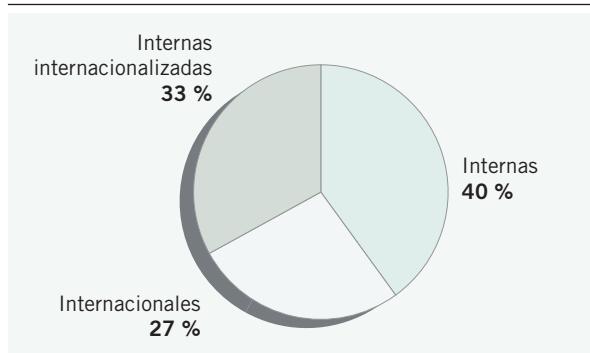


cabe destacar que su importancia relativa disminuyó notablemente en comparación con el año anterior, en el que estuvo presente en un 22% de los casos. Mientras que dicha causa fue relevante en casi la mitad de los escenarios de Europa, especialmente en el Cáucaso y en los Balcanes, en América solo estuvo presente en el 10% de los casos.

En 2024 continuó la tendencia al alza de los últimos años en el número de tensiones (116), 33 casos más en comparación con 2018

Aunque la mayoría de las tensiones en todo el mundo tuvo un **carácter interno** (40%), tal cifra se redujo notablemente respecto del año anterior (49%). El 60% de los casos en Asia y el Pacífico fueron tensiones de naturaleza interna, pero en Europa, en cambio, tal porcentaje se redujo al 13%. Por otra parte, un tercio del total de las tensiones en todo el mundo fueron **internas internacionalizadas** –aquellas en las que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando

Gráfico 2.7. Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en 2024



Cuadro 2.4. Tensiones internacionales de alta intensidad en 2024

ÁFRICA (4)	ASIA Y EL PACÍFICO (6)	ORIENTE MEDIO (3)	AMÉRICA (1)	EUROPA (0)
Chad – Sudán	Afganistán – Pakistán	Israel – Irán	Venezuela – Guyana	--
Eritrea – Etiopía	China – Japón	Israel – Siria		
RDC – Rwanda	China – Taiwán	Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido		
Rwanda – Burundi	China – Filipinas			
	Corea del Norte – Corea del Sur			
	Corea del Norte – EEUU, Japón, Corea del Sur			

la tensión se extiende al territorio de países vecinos—, un sensible incremento respecto del año anterior (28%). Finalmente, las tensiones **internacionales** se incrementaron del 23% en 2023 al 27% en 2024. Además del aumento en el número de tensiones internacionales, cabe destacar que buena parte de ellas se contaron entre las más graves de todo el mundo. De hecho, casi la mitad de las tensiones de máxima intensidad (14 de 32) fueron de carácter internacional: Chad-Sudán; Eritrea-Etiopía; RDC-Rwanda; Rwanda-Burundi; Venezuela-Guayana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU; Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; Irán (programa nuclear); Israel-Irán; Israel-Siria; y Yemen (al-houthistas)-Israel, EEUU, Reino Unido.

En un análisis geográfico más pormenorizado, las **subregiones** con un mayor número de casos fueron, por este orden, África Occidental y África del Este (13 casos cada una); Asia Oriental (12); América del Sur (10); Asia Meridional y Centroamérica y el Caribe (ocho cada una); Asia Central y Golfo (siete cada una); África Central (seis); Mashreq y Europa Meridional (cinco); Cáucaso Meridional (cuatro); África Austral, Magreb, Sudeste Asiático, Europa Oriental, Rusia (tres cada una); América del Norte (dos) y el Pacífico (una). Los **países** que padecieron más tensiones en su territorio o cuyos gobiernos fueron actores principales en un mayor número de disputas foráneas fueron, por este orden, Rusia (13 casos); China y EEUU (11); Irán (seis); Etiopía y Tayikistán (cinco); Sudán, India, Corea del Sur, Israel, Ucrania, Pakistán, Uzbekistán y Kirguistán (cuatro); Türkiye, Nigeria, Rwanda y Japón (tres).¹⁴

2.2.2. Tendencias regionales

Como en los últimos años, en 2024 **África** fue la región que concentró un mayor número de tensiones (38), manteniendo el mismo porcentaje sobre el total de casos que los años anteriores (33%). Durante el año, dos casos dejaron de ser considerados tensiones –Madagascar y Sierra Leona– mientras que se incluyeron otros dos casos nuevos: Chad-Sudán y Sudáfrica. De estas dos nuevas tensiones, cabe destacar especialmente por su gravedad el caso de Chad-Sudán, en el que las relaciones entre ambos países se deterioraron notablemente por el supuesto apoyo por parte de Chad al grupo paramilitar sudanés Rapid Support Forces (RSF) y de Sudán a insurgencias chadianas, así como por las acusaciones de apoyo de EAU a las RSF a través de Chad. Como en años anteriores, hubo algunos países que albergaron varios escenarios de tensión, como Etiopía (cinco casos), Sudán (cuatro), Nigeria y Rwanda (tres casos) o RDC, Chad o Senegal (dos). Además de ser el continente con mayor número de tensiones, también fue la región

Gráfico 2.8. Subregiones con un mayor número de tensiones en 2024

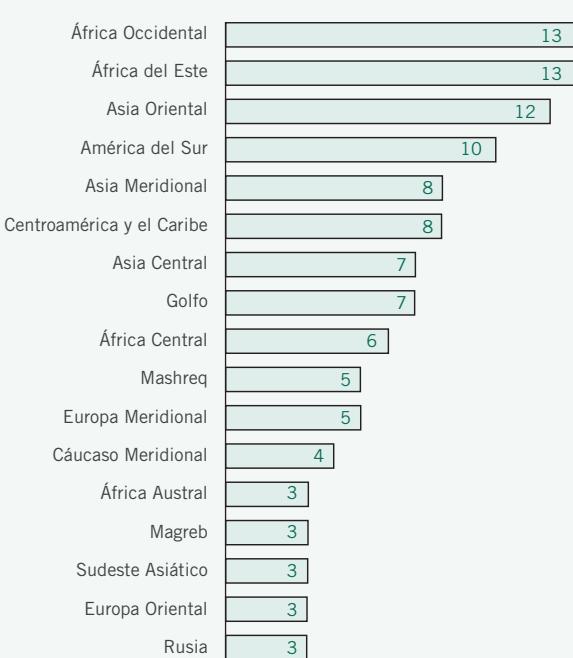
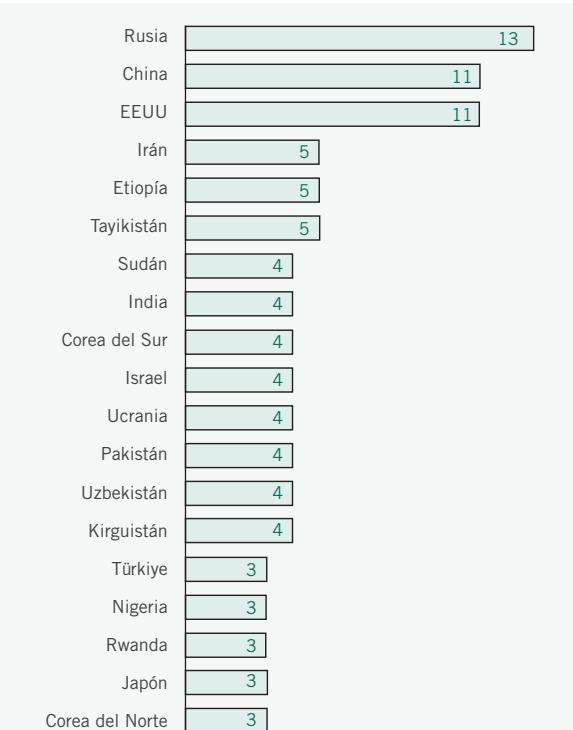


Gráfico 2.9. Países como actores principales en mayor número de tensiones en 2024



con un número más elevado de tensiones de máxima intensidad (12): Chad; Chad-Sudán; Eritrea-Etiopía; Etiopía; Kenya; Mozambique; Níger; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC; RDC-Rwanda; Rwanda-Burundi.

14 Se incluyen en el recuento los actores que aparecen en la tabla como actores principales de la tensión.

Gráfico 2.10. Intensidad de las tensiones en África en 2024

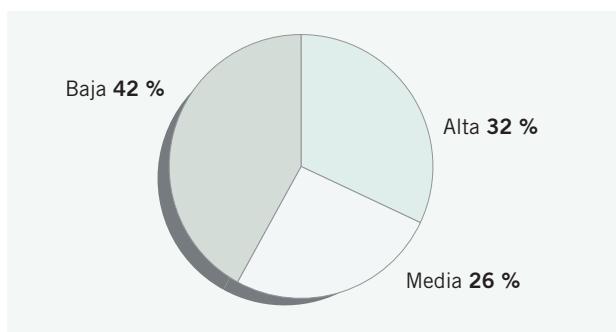
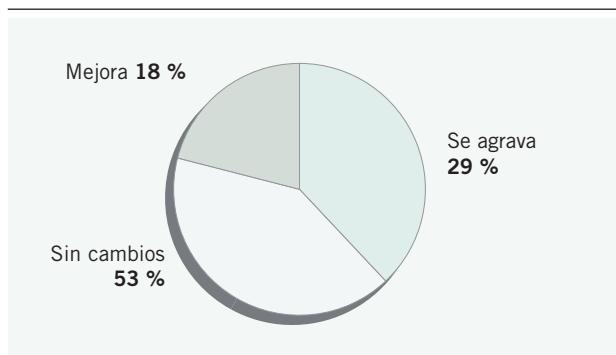


Gráfico 2.11. Evolución de las tensiones en África en 2024



En cuanto a la evolución de los casos, hubo 11 escenarios (el 29% del total en la región) que se deterioraron en relación al año anterior: Argelia; Chad-Sudán; Guinea-Bissau; Kenya; Mozambique; Nigeria; RDC-Rwanda; Rwanda-Burundi; Sudáfrica y Tanzania. Algunas de las tensiones que escalaron durante el año revistieron especial gravedad, como el caso de Mozambique, donde las elecciones –con una nueva victoria del partido gobernante, FRELIMO– provocaron un aumento de las tensiones políticas y de la represión de las protestas, con un saldo de a finales de año de al menos 225 personas muertas y más de 4.000 detenidas. En Nigeria hubo importantes movilizaciones de protesta antigubernamentales por la grave crisis económica del país; siguieron activas las dos principales facciones de Boko Haram (JAS e ISWAP); y se incrementó notablemente la actividad de grupos criminales en el norte y centro-norte del país, provocando cientos de víctimas mortales. Kenya fue otro de los países de África en los que se registró una escalada de la tensión, en este caso por las protestas masivas contra medidas económicas impopulares, un aumento alarmante de los feminicidios, un incremento de violencia intercomunitaria y de disputas por recursos naturales, especialmente en las regiones del norte y oeste del país; o una intensificación de los ataques del

La subregión de África Occidental fue la zona del mundo que concentró un mayor número de tensiones (13 casos)

Gráfico 2.12. Factores de causalidad en las tensiones en África en 2024

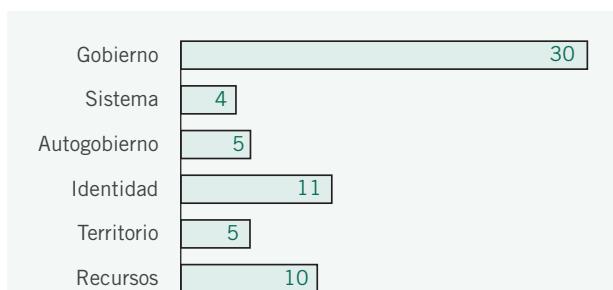
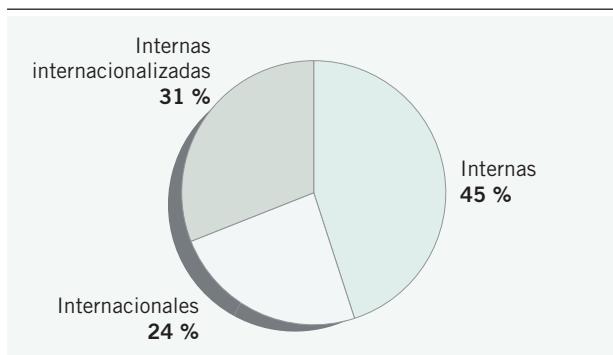


Gráfico 2.13. Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en África en 2024



grupo armado somalí al-Shabaab en el noreste del país. En relación con las causas de las disputas más preponderantes en la región, casi cuatro de cada cinco casos (79%) estuvieron vinculados a la oposición al Gobierno. Muy por detrás, las tensiones relacionadas con la identidad o con el control de los recursos estuvieron presentes en un 29% y 26% de los casos en la región respectivamente. En última instancia, con porcentajes

muy parecidos, se situaron las demandas de autogobierno y autodeterminación y las disputas vinculadas al control del territorio (un 13% en cada caso) y la oposición al sistema (un 11%). Estos datos guardan cierta continuidad con los del año anterior. Finalmente, las tensiones de naturaleza interna supusieron el 45% de los casos (47% en 2023 y un 50% en 2022); las internas internacionalizadas un 32% (el mismo porcentaje que el año anterior) y las internacionales un 24% (un 21% en 2023). Como sucede a escala global, algunas de las tensiones internacionales fueron de alta intensidad, como los casos de Chad-Sudán, RDC-Rwanda o Rwanda-Burundi.

En América se registraron 20 escenarios de tensión (17% del total), el mismo número que en 2023. Hubo dos casos que dejaron de ser considerados como tensión –Panamá, por la reducción de las movilizaciones y la

Gráfico 2.14. Intensidad de las tensiones en América en 2024

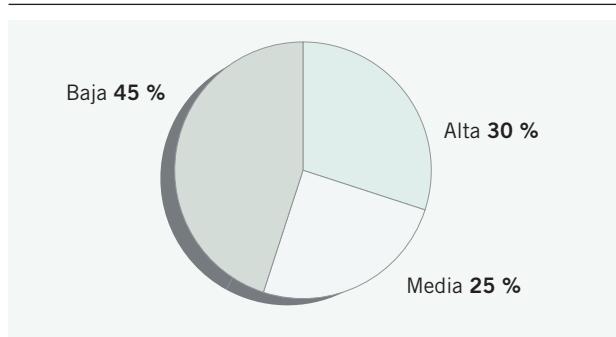
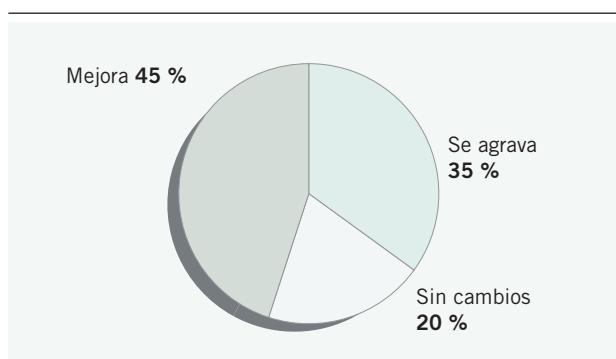


Gráfico 2.15. Evolución de las tensiones en América en 2024



conflictividad registrada en 2023, y Haití, que pasó a ser considerado como conflicto armado–, mientras que hubo otros dos escenarios que pasaron a ser catalogados como tensión: Trinidad y Tobago –con una creciente implantación de grupos de crimen organizado– y las Islas Turcas y Caicos –con la tasa de homicidios más alta del mundo. De los 20 casos, la mitad se ubicaron en América del Sur (10), seguida de Centroamérica y el Caribe (8) y América del Norte (2).

En cuanto a la intensidad de las tensiones, el 45% fueron de intensidad baja, el 25% media y el 30% alta. Los seis casos de alta intensidad fueron México y Brasil, dos de los países del mundo con un número más alto de asesinatos; Ecuador, uno de los países en los que tanto la implantación territorial de grupos de crimen organizado como la tasa de homicidios más ha crecido en la región e incluso a escala global; Bolivia y Venezuela, por las protestas masivas durante el año; y el conflicto entre Venezuela y Guyana, que generó tensiones políticas y militares en la región. En términos comparativos, si bien en 2023 América había sido la región del mundo con una mayor proporción de casos de máxima intensidad, en 2024 tanto Oriente Medio como África tuvieron un mayor porcentaje de casos de alta intensidad. En la misma línea, si en 2023 el 75%

América fue la región en la que hubo un mayor porcentaje de casos que desescalaron, por la reducción en las tasas de homicidios o en número o intensidad de movilizaciones

Gráfico 2.16. Factores de causalidad en las tensiones en América en 2024

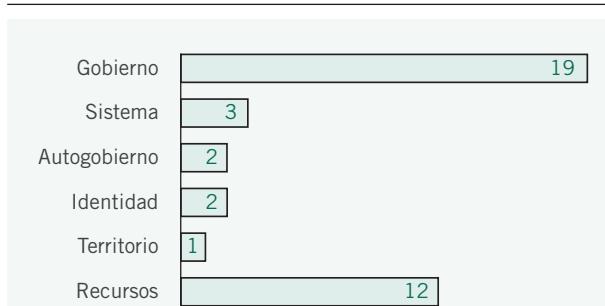
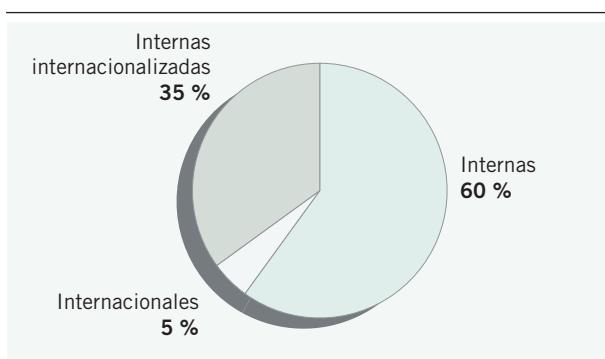


Gráfico 2.17. Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en América en 2024



de los casos en América experimentó una escalada, en 2024 tal porcentaje se redujo al 35%. Los escenarios que se deterioraron respecto del año anterior fueron Bolivia, Brasil, Islas Turcas y Caicos, México, Trinidad y Tobago, Venezuela y Venezuela-Guyana. Un 20% de los casos no registró cambios significativos y un 45% observó una mejoría de la situación. De hecho, en 2024 América fue la región en todo el mundo en la que hubo un mayor porcentaje de casos que desescalaron, bien sea por la reducción en las tasas de homicidios – como en Centroamérica o Ecuador – o por la disminución en número o intensidad de movilizaciones y actos de protesta, como en Argentina, Perú, Chile o Paraguay. A pesar de la reducción de la tasa de homicidios en países históricamente muy afectados por la acción de grupos de crimen organizado (como en el llamado “Triángulo Norte”, en el Caribe hubo países o territorios que experimentaron incrementos alarmantes en dicha tasa, como Surinam, Puerto Rico, Barbados o Bahamas. De hecho, además de los casos que ya aparecen identificadas como escenario de tensión (Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Trinidad y Tobago) o bien de conflicto armado (Haití), el Caribe alberga algunos de los países con mayores tasas de homicidios del mundo, como San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas o Santa Lucía.

En cuanto a las causas, casi la mitad (19 de los 20 casos) estaban vinculados a la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno. El segundo factor con mayor prevalencia en la región fue el del control de los recursos (12 casos). En el caso de América, todos los casos vinculados a este factor lo fueron por la actividad de grupos de crimen organizado en relación al narcotráfico y al control de otras economías ilícitas o bien, en el caso de Bolivia y Perú, por los efectos del extractivismo. El resto de factores tuvo una incidencia relativa en los casos de la región. Las demandas vinculadas al cambio de sistema fueron relevantes en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los factores relacionados con la identidad y el autogobierno estuvieron presentes en los casos de Chile –por las reivindicaciones relacionadas con el pueblo mapuche– y Bolivia –por las demandas de los departamentos de la llamada “media luna”. El único contexto relacionado con el control del territorio fue la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, un territorio históricamente reivindicado por Venezuela pero que está formalmente bajo el control efectivo y administración del Gobierno de Guyana. Por otra parte, cabe destacar que 17 de las 20 tensiones en la región fueron internas, una proporción muy superior a la media mundial (41%). Siete casos fueron tensiones internas internacionalizadas, especialmente por la naturaleza transnacional de algunos grupos de crimen organizado que operan en Centroamérica y el Caribe o en países como Brasil, México o Ecuador, así como por la dimensión regional que ha adquirido la crisis en

Venezuela. Únicamente el caso de Venezuela-Guyana fue de carácter internacional.

En **Asia y el Pacífico** se registraron 31 tensiones –el 27% del total a nivel global–, dos menos que en 2023. En relación con año pasado, se contabilizaron tres nuevos casos –Indonesia, Corea del Sur y China-Corea del Sur– mientras que otros cinco casos dejaron de ser considerados en situación de tensión: Fiji, Indonesia (Sulawesi), Tailandia, China (Hong Kong) e Indonesia (Papúa Occidental), que pasó a ser catalogado como conflicto amado. Por subregiones, 12 de las tensiones estaban en Asia Oriental –China (Xinjiang); China (Tíbet); China-Filipinas; China-Japón; China-Taiwán; China-EEUU; China-Corea del Sur; Corea de Sur, Corea del Norte; Corea del Norte-Corea del Sur; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Japón-Rusia (Islas Kuriles)–, ocho en Asia Meridional –Afganistán-Pakistán; Bangladesh; India (Manipur); India (Nagalandia); India-China; India-Pakistán; Pakistán y Sri Lanka–; siete en Asia Central –Kazajstán; Kirguistán; Kirguistán – Tayikistán; Tayikistán, Tayikistán (Gorno-Badakhshan); Uzbekistán, Uzbekistán (Karakalpakistán)–, tres en el Sudeste asiático –Indonesia, Mar de la China Meridional y Laos– y una en el Pacífico –Papúa Nueva Guinea. Como en años anteriores, hubo algunos países que fueron escenario de varias tensiones, como China (11 casos), Tayikistán (cinco), Uzbekistán, Kirguistán, Corea del Sur, India y Pakistán (cuatro) o Japón y Corea del Norte (tres).

Gráfico 2.18. Intensidad de las tensiones en Asia y el Pacífico en 2024

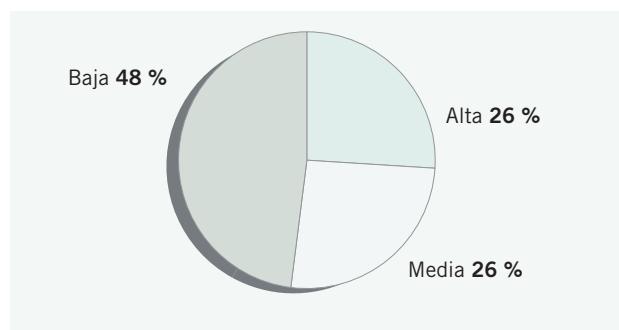


Gráfico 2.19. Evolución de las tensiones en Asia y el Pacífico en 2024

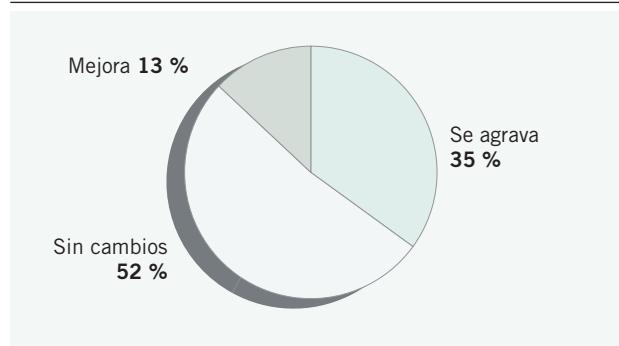


Gráfico 2.20. Factores de causalidad en las tensiones en Asia y el Pacífico en 2024

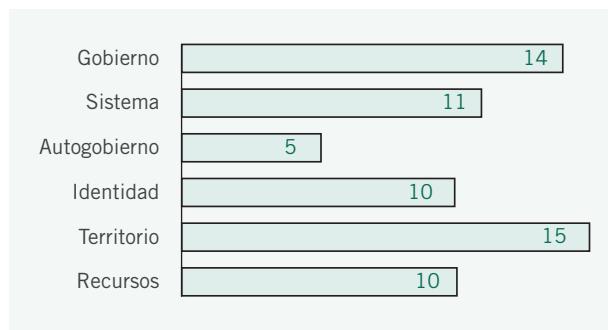
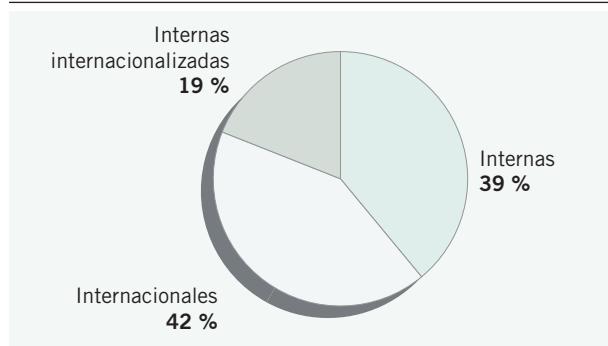


Gráfico 2.21. Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en Asia y el Pacífico en 2024



Prácticamente la mitad de los casos (48%) fueron de intensidad baja, el 26% de intensidad media y el 26% restante de alta intensidad. Los ocho casos de alta intensidad fueron Afganistán-Pakistán; Bangladesh; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; y Papúa Nueva Guinea. A excepción de Bangladesh y Papúa Nueva Guinea, todos los casos de máxima intensidad en la región fueron tensiones internacionales. Por otra parte, el 35% de los casos identificados en Asia y el Pacífico escalaron en 2023 respecto del año anterior, mientras que un 13% de los casos disminuyeron en intensidad y en el 52% restante no se observaron cambios significativos. Los 11 casos que escalaron en relación al 2023 fueron Afganistán-Pakistán; Bangladesh; China-Japón; China-Taiwán; China-Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; Corea del Sur; Indonesia; Kazajstán; Laos; Mar de la China Meridional. Como en años anteriores, la región de Asia Oriental –con continuidad geográfica con el Mar de la China Meridional– experimentó un notable incremento de la tensión política y militar entre varios países, con un protagonismo importante por parte de China. También cabe destacar las crisis políticas en Bangladesh y Corea del Sur –con protestas masivas y la destitución de la primera ministra bangladesí y del presidente surcoreano–; las protestas generalizadas en Indonesia o el incremento de la tensión política y militar entre Afganistán y Pakistán.

En cuanto a las causas de fondo, el factor con mayor relevancia en la región fue el control del territorio, presente en el 48% de los casos. La mayor parte de casos relacionados con tal causa son contenciosos territoriales entre Estados, como entre China y varios Estados (Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, EEUU, varios estados del Sudeste Asiático con costa en el Mar de la China Meridional); India y China o India y Pakistán; Corea del Norte y Corea del Sur; Japón y Rusia (por las islas Kuriles); o Kirguistán-Tayikistán. Con una prevalencia parecida, la oposición al Gobierno fue importante en el 45% de los casos. Cabe destacar, sin embargo, que la prevalencia de dicha causa es claramente inferior a la del resto de regiones del mundo y a la media global (70%). En cambio, las tensiones vinculadas al sistema representaron un 35% del total en la región, un porcentaje claramente más elevado que la mayoría de regiones. Un buen número de tales tensiones acontecieron en países autoritarios, de partido único o con posición baja en índices sobre democracia,¹⁵ como China, Laos, Kazajstán, Uzbekistán o Tayikistán. Los factores identitarios fueron un factor clave en casi un tercio de los casos, en muchos casos relacionados con agravios o demandas por parte de minorías nacionales, como en China (Xinjiang o Tíbet), India (Manipur,

Nagalandia), Tayikistán (Gorno-Badakhshan), Uzbekistán (Karakalpakistán), minorías reprimidas (hmong en Laos) o enfrentamientos comunitarios (Papúa Nueva Guinea). El control de los recursos también estuvo presente en el 32% de los casos, mientras que las disputas relacionadas con el autogobierno representaron el 16% de todos los escenarios de tensión en Asia y el Pacífico. Finalmente, casi la mitad de las tensiones fueron de carácter interno (39%), un poco menos de una quinta parte (19%) de carácter interno internacionalizado, y un 42% internacionales, siendo así Asia y el Pacífico la región del mundo con un porcentaje más alto de tensiones internacionales. La mayor parte de las mismas se sitúan en la zona comprendida entre el mar de Ojotsk y el norte del Océano Pacífico y el Mar de la China Meridional: la disputa histórica entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles; el contencioso entre China y Corea del Sur en el Mar Amarillo; la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur en el Mar Amarillo y también entre Corea del Norte y varios países acerca de su programa armamentístico; la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu); el conflicto de soberanía entre China-Taiwán; la rivalidad geopolítica entre China y EEUU, que tiene uno de sus principales escenarios en Asia Oriental, o las escaramuzas militares entre China y Filipinas en el marco del conflicto interestatal en el Mar de la China Meridional, que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam.

El 42% de las tensiones en Asia y el Pacífico fueron internacionales, el porcentaje más alto en todo el mundo

En Europa se registraron 15 casos, el 13% del total. Respecto del año anterior, los casos de Georgia y Serbia pasaron a ser analizados como tensión. Por subregiones, Europa Meridional albergó cinco casos, seguida de Cáucaso Meridional (cuatro), Europa Oriental y Rusia (tres). Por países, cabe destacar que Rusia fue un actor relevante en 13 casos de tensión en todo el mundo, especialmente en Europa y en África. En cuanto a la intensidad de los casos, cinco fueron de intensidad baja, nueve de intensidad media y solamente uno –Rusia– de intensidad alta. En relación a la evolución de los escenarios de tensión, un año más Europa fue la región del mundo en la que, proporcionalmente, escalaron un mayor número de casos. Si en 2023 el 85% de escenarios se deterioraron con respecto al año anterior, en 2024 tal cifra fue del 73%, el doble de la media mundial. Los casos que se agravaron en 2024 fueron Belarús; Bosnia y Herzegovina; Georgia; Georgia (Abjasia); Moldova (Transnistria); Rusia; Rusia (Norte del Cáucaso); Rusia-EEUU, OTAN, UE; Serbia; Serbia-Kosovo; Türkiye. Cabe destacar la escalada de la tensión en los tres casos que acontecieron en Rusia. En todo el mundo, Rusia tuvo un papel relevante en 13 escenarios de tensión, siendo a escala global, juntamente con EEUU

15 International IDEA, *Global State of Democracy Indices* [consultado el 31 de enero de 2025].

Gráfico 2.22. Intensidad de las tensiones en Europa en 2024

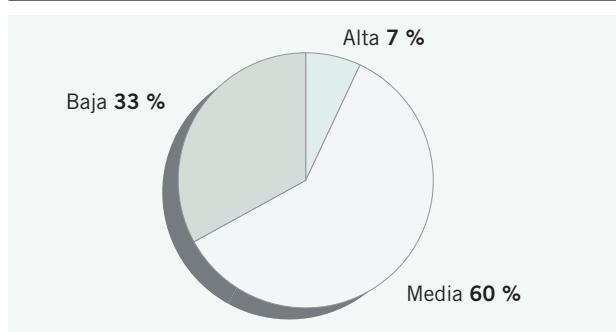
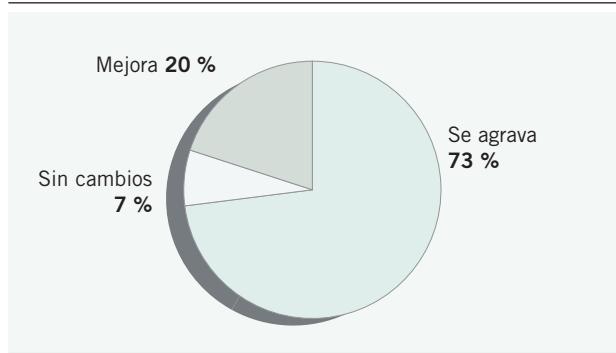


Gráfico 2.23. Evolución de las tensiones en Europa en 2024



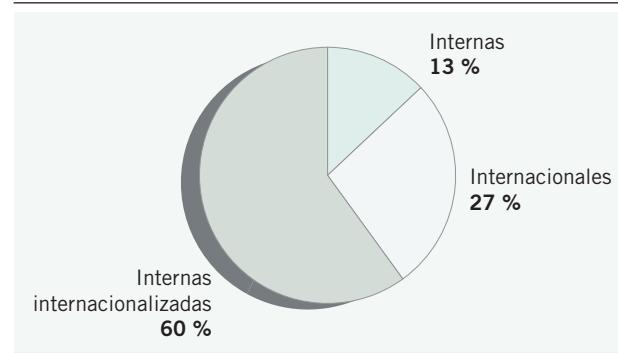
(14 casos), el país que participó como actor principal en un mayor número de escenarios de tensión.

En cuanto a los factores de causalidad, la oposición al gobierno estuvo presente en el 60% de los casos, un porcentaje inferior al de otras regiones. Los factores relacionados con la identidad fueron una cuestión relevante en el 53% de los casos en Europa, el porcentaje más elevado en todo el mundo. Los temas relacionados con el autogobierno y la autodeterminación en un sentido amplio también fueron relevantes en casi la mitad de los casos en la región (concretamente, un 47%). Como en el caso de los factores identitarios, Europa fue la región del mundo en la que las disputas de autogobierno tuvieron una mayor importancia relativa. Las otras dos regiones en las que dicho factor tuvo una mayor prevalencia fueron Oriente Medio y Asia y el Pacífico, con un 17% y un 16% respectivamente. A continuación, las disputas en torno al sistema estuvieron presentes en tres casos –Rusia (norte del Cáucaso); Rusia-EEUU, OTAN, UE; Türkiye–. Las disputas en torno al control de territorio y de recursos como una de las causas principales de las tensiones tuvieron una incidencia menor, ambos presentes en dos casos, si bien eran dimensiones que se proyectaban de diferentes

Gráfico 2.24. Factores de causalidad en las tensiones en Europa en 2024



Gráfico 2.25. Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en Europa en 2024



formas en diversas tensiones, incluyendo a través de la instrumentalización de la energía como elemento de disputa, como en Moldova, Moldova (Transnistria) y Rusia-EEUU, OTAN, UE, y a través de control territorial de regiones con estatus en disputa, como en Georgia (Abjasia y Osetia del Sur) y Moldova (Transnistria).

Finalmente, cabe destacar que el 60% de los casos fueron tensiones internas internacionalizadas, un 27% internacionales y 13% internas. Así como a nivel global el mayor número de casos son tensiones internas (47 de 116, es decir, un 41%), en Europa solamente hubo dos casos de esta tipología: Rusia (norte del Cáucaso) y Serbia. En un sentido inverso, Europa fue la región del mundo en la que las tensiones internas internacionalizadas tuvieron una mayor incidencia relativa, casi el doble que la media mundial (60% versus 33%).

En **Oriente Medio** se identificaron 12 escenarios de tensión, un 10% del total. Con relación al año anterior, en el que hubo 10 casos, un caso –Irak (Kurdistán)– dejó de ser considerado tensión, mientras que otros tres casos pasaron a ser catalogados como tensión –Israel-Irán; Israel-Siria y Yemen (al-houthistas)-Israel, EEUU, Reino Unido. De los 12 casos identificados,

Gráfico 2.26. Intensidad de las tensiones en Oriente Medio en 2024

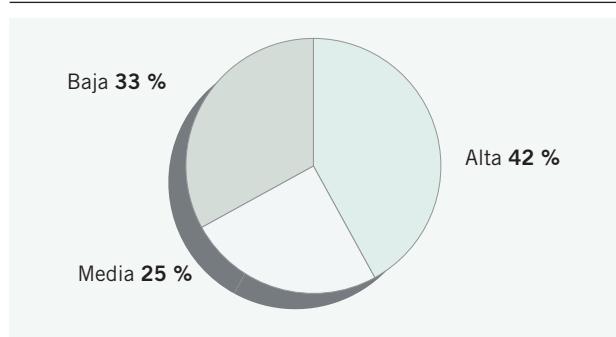
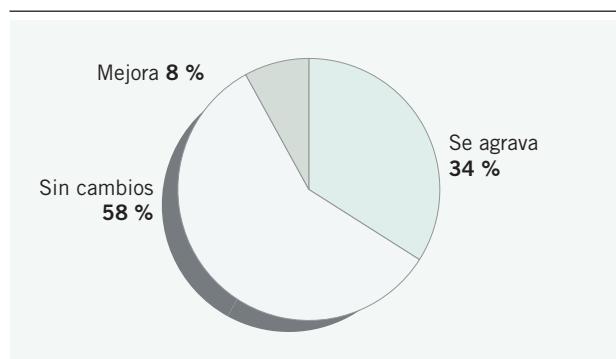


Gráfico 2.27. Evolución de las tensiones en Oriente Medio en 2024



siete se concentraron en el Golfo y los cinco restantes en el Mashreq. Por países, Irán e Israel (con seis y cuatro casos respectivamente) fueron los dos países que jugaron un papel relevante en un mayor número de tensiones en la región. En cuanto a la intensidad de las tensiones, un 33% de los casos fueron de baja intensidad, un 25% de intensidad media y un 42% de alta intensidad. Respecto de los casos de alta intensidad –Irán; Irán (programa nuclear); Israel - Irán; Israel-Siria; Yemen (al-houthistas)-Israel, EEUU, Reino Unido–, cabe señalar que el porcentaje de 2024 (42%) es más del doble que el de 2023 (20%). De hecho, a nivel global Oriente Medio es la región en la que hay un mayor porcentaje de tensiones de alta intensidad. Como también sucede en otros continentes, una proporción muy amplia de las tensiones de máxima intensidad fueron internacionales. En cuanto a la evolución de los casos, cabe destacar que si en 2023 no hubo ningún caso en el que se observara una escalada de la situación, en 2024 hubo cuatro casos: Irán (Sistán Baluchistán); Israel-Irán; Israel-Siria; Yemen (al-houthistas)-Israel, EEUU, Reino Unido. Tanto Israel como Irán jugaron un papel preponderante en tres de los cuatro casos que experimentaron una escalada de la tensión. En otros siete casos no hubo cambios significativos respecto de la situación en 2023 y en un caso (Líbano) la tensión política interna disminuyó relativamente ante los

**Oriente Medio fue la
región del mundo con
una mayor proporción
de tensiones de alta
intensidad**

Gráfico 2.28. Factores de causalidad en Oriente Medio en 2024

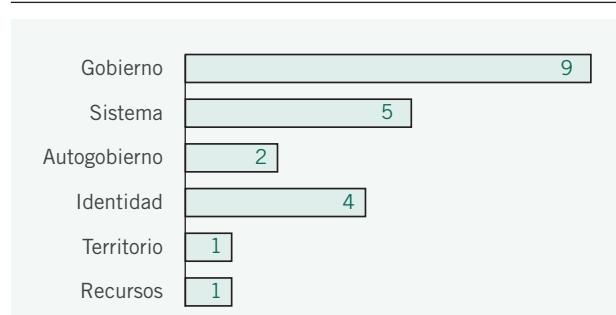
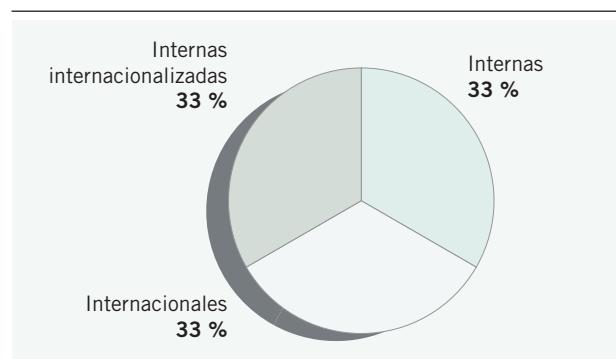


Gráfico 2.29. Tensiones internas, internacionales o internas internacionalizadas en Oriente Medio en 2024



impactos en el país del conflicto armado entre Israel y Hezbollah, situación que condujo –después de años– a un consenso para la conformación de un nuevo gobierno a principios de 2025.

En cuanto a las causas de las tensiones, el factor con mayor prevalencia en la región fue la oposición al Gobierno, relevante en un 75% de los casos. El segundo factor, la oposición al sistema, estuvo presente en el

42% de las tensiones en Oriente Medio, siendo el mayor porcentaje de todas las regiones del mundo. Concretamente los casos vinculados a dicho factor fueron Irán (programa nuclear); Israel-Irán; Israel-Siria; Líbano y Yemen (al-houthistas)-Israel, EEUU, Reino Unido. Las cuestiones identitarias fueron una de las causas de las tensiones en una tercera parte de los casos, mientras que el autogobierno y la autodeterminación fueron relevantes en un 17% de los casos. Finalmente, el control del territorio y el control de los recursos fueron factores presentes solamente en el caso de Israel-Siria. Finalmente, cabe destacar que un tercio de las tensiones fueron internas, un tercio internacionales y otro tercio internas internacionalizadas. Tal patrón es sensiblemente distinto al del año anterior, en el que el 50% de las tensiones fueron internas internacionalizadas, el 40% internas, y el 10% internacionales.

2.3 Tensiones: evolución anual

2.3.1 África

África Austral

Mozambique	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Interna Gobierno, Sistema
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista FRELIMO condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado RENAMO, apoyado por las minorías blancas gobernantes en Rhodesia (antigua Zimbabwe) y la Sudáfrica del apartheid, en el contexto de la Guerra Fría. Además, el país sufrió las consecuencias de una grave hambruna y una pésima gestión económica. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de guerra, tras un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico, aunque con elevados niveles de desigualdad en el país. Desde entonces las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas por un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO.

El año estuvo marcado por el aumento de las tensiones políticas en el país debido a la celebración de las elecciones generales que derivaron en una nueva victoria del partido gobernante, FRELIMO, hecho que generó una profunda crisis política y protestas ciudadanas en el país que fueron duramente reprimidas. Al finalizar el año, la represión dejó un saldo de al menos 225 personas muertas y más de 4.000 detenidas.

En mayo, los dos principales partidos mozambiqueños (FRELIMO y RENAMO) anunciaron sus candidatos para las elecciones presidenciales. El gobernante FRELIMO eligió al gobernador de la provincia sureña de Inhambane, Daniel Chopo, mientras que el principal partido de la oposición, RENAMO, reelegió a Ossufo Momade. Por su parte, Venâncio Mondlane, quien fuera anteriormente candidato de RENAMO, se presentó encabezando la coalición de partidos de oposición Coligaçao Aliança Democrática (CAD). Posteriormente, en el mes de julio, la Comisión Electoral

prohibió el registro de la CAD para presentarse a los comicios legislativos y provinciales, aunque permitió que su candidato pudiera presentarse a la elección presidencial. Esta decisión fue ratificada en agosto por el Consejo Constitucional, aumentando las tensiones en el país. Finalmente, en un clima marcado por la creciente tensión política, el 9 de octubre se celebraron los comicios. La jornada electoral se desarrolló mayormente de forma pacífica, aunque los observadores y la oposición informaron de irregularidades generalizadas. Las elecciones estuvieron marcadas por una baja participación (43%), especialmente en el norte del país, y por acusaciones de fraude como urnas rellenas, "votantes fantasma" y el uso de recursos del Estado para favorecer a FRELIMO. Los resultados electorales, que dieron la victoria a Daniel Chopo (FRELIMO), fueron ampliamente impugnados por la oposición, encabezada por Mondlane (CAD), quien afirmó haber ganado las mismas y denunció fraude masivo. Las tensiones aumentaron cuando el 19 de octubre, Elvino Dias, abogado de Mondlane, y Paulo Guamebe, trabajador del CAD, fueron asesinados. Días después, el 24 de octubre, la Comisión Electoral publicó los resultados definitivos que confirmaron que FRELIMO mantuvo la mayoría de dos tercios en el Parlamento y su candidato Daniel Chopo ganó la votación presidencial, quedando Mondlane y el partido CAD en segundo lugar. El anuncio de los resultados desató protestas y manifestaciones en todo el país, que fueron respondidas con una gran represión policial, siendo las provincias de Maputo, Nampula, Sofala y Zambezia, los principales focos de tensión. A finales de octubre, los enfrentamientos provocaron la muerte de decenas de personas y las tensiones aumentaron durante las primeras semanas de noviembre, con los opositores convocando huelgas y protestas masivas que fueron duramente reprimidas por el Gobierno. El malestar continuó creciendo en diciembre, especialmente después de que el Consejo Constitucional ratificara los resultados electorales, lo que intensificó los ataques contra edificios gubernamentales y fuerzas de seguridad. A principios de diciembre los opositores llamaron a nuevas manifestaciones que fueron respondidas por el Gobierno con una política de "tolerancia cero". Los ataques a infraestructuras claves, como minas y plantas de energía, aumentaron, paralizando la economía y generando más represión. Entre el 23 y el 26 de diciembre, al menos 134 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. A pesar de los esfuerzos internacionales por mediar en la crisis, como los llamamientos realizados por Sudáfrica, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), la UE o EEUU para lograr un diálogo y la desescalada de la violencia, el Gobierno mozambiqueño descartó la intervención extranjera y abogó por una solución interna a la crisis.

La crisis postelectoral dejó un saldo de al menos 225 personas muertas y más de 4.000 detenidas en Mozambique

África Occidental

Guinea	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Internas Gobierno
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos

Síntesis:

La muerte del presidente Lansana Conté en diciembre de 2008, tras más de dos décadas en el poder, fue aprovechada por el Ejército para dar un nuevo golpe de Estado y conformar una Junta Militar. En 2010 la celebración de elecciones permitió el retorno al sistema democrático, con la presidencia del opositor Alpha Condé. Sin embargo, los comicios se vieron empañados por la violencia y por el auge de los sentimientos identitarios enfrentados entre las principales comunidades étnicas del país. La ausencia de una estrategia para la reconciliación nacional y los obstáculos a la reforma del sector de seguridad, con un Ejército omnipresente en la actividad política guineana, mantuvieron al país en una situación de inestabilidad. En el año 2020, Alpha Condé volvió a ser reelegido presidente, en lo que sería su tercer mandato. La oposición denunció la inconstitucionalidad del mismo y las tensiones políticas en el país se volvieron a incrementar. Como resultado, el 5 de septiembre de 2021 miembros del Ejército, encabezados por el coronel Mamay Doumbouya, dieron un nuevo golpe de Estado que derrocó al Gobierno presidido por Condé. En respuesta la CEDEAO impuso sanciones al país y demandó la vuelta al orden constitucional, sin embargo, la nueva Junta Militar decretó tres años de transición.

Guinea vivió un año marcado por una creciente tensión política y restricciones a las libertades civiles en el contexto de una transición que no siguió la hoja de ruta definida por las autoridades militares. Desde el inicio del año, la Junta Militar de transición encabezada por el coronel Mamadi Doumbouya –que llegó al poder en un golpe de Estado en 2021– había prometido cumplir con la hoja de ruta que establecía la restauración del gobierno civil con la celebración de elecciones a finales de 2024. En este contexto, el bloque regional de África Occidental, la CEDEAO, anunció el 24 de febrero el levantamiento de las sanciones financieras y económicas contra la Junta Militar, en un gesto que parecía invitar a la Junta a normalizar sus relaciones y a facilitar el proceso transicional en el país. Sin embargo, durante todo el año, el creciente autoritarismo de la Junta, la represión contra la oposición y el deterioro de las condiciones de vida provocaron que aumentara el descontento social y las protestas y manifestaciones. Entre el 26 y 28 de febrero los sindicatos convocaron una huelga general para exigir la liberación de Sékou Jamal Pendessa, secretario general del Sindicato de Profesionales de la Prensa de Guinea, que había sido detenido en enero. En marzo estallaron manifestaciones en la ciudad de Kindia debido a cortes de energía. En julio la represión alcanzó un punto crítico con

las desapariciones de los activistas Foniké Menguè y Mamadou Billo, miembros del grupo de la sociedad civil Frente Nacional para la Defensa de la Constitución, lo que desató un llamamiento a la movilización por parte de las fuerzas de oposición. El 6 de agosto el principal colectivo de la oposición, las Fuerzas Vivas de Guinea (FVG), convocó una huelga general en la capital, Conakry, para protestar contra las autoridades militares y demandar el retorno al gobierno civil. Posteriormente, en octubre, Doumbouya intensificó su control en el país, promoviendo su candidatura para las elecciones presidenciales no anunciadas y estableciendo medidas autoritarias, como la disolución de partidos políticos (al menos 53) y la prohibición de viajes internacionales para ministros. En noviembre, el líder de la Junta se consolidó aún más al ascender a 16 oficiales del Ejército en un intento de fortalecer su red de aliados, según denunciaron organizaciones de la sociedad civil. Estos movimientos se interpretaron como medidas puestas en práctica debido a tensiones internas crecientes dentro del propio Gobierno y del Ejército. Finalmente, el 14 de diciembre las autoridades anunciaron que no se cumpliría el calendario originalmente establecido para el retorno a la democracia, postergando las elecciones presidenciales previstas bajo el argumento de que las condiciones aún no eran las adecuadas. Este hecho generó un rechazo generalizado por parte de la oposición, liderada por las FVG, quienes convocaron manifestaciones de protesta. El presidente Doumbouya, en un intento de calmar las tensiones, anunció el 31 de diciembre que el proceso electoral y el referéndum constitucional se celebrarían a principios de 2025. Anteriormente, en agosto, se había presentado un proyecto de Constitución que incluía cambios significativos, como un límite a los mandatos presidenciales y la creación de un sistema legislativo bicameral. Sin embargo, esta nueva Constitución no impedía que Doumbouya pudiera postularse como candidato presidencial en el futuro, lo que había aumentado la desconfianza de la oposición, que acusó al Gobierno de usar el proceso constitucional como una herramienta para perpetuar su poder. Al finalizar el año la incertidumbre sobre el futuro proceso electoral y la promesa de una transición pacífica continuaban siendo puntos críticos en el escenario político de Guinea.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN, milicias y cuerpos de seguridad privados locales, Lakurawa

Síntesis:

Tras la independencia en 1960, la incapacidad de los sucesivos gobiernos para abordar los problemas asociados con ciudadanía, etnia, religión o distribución de recursos ha agravado las percepciones de agravios y descontento, lo que ha llevado al surgimiento de demandas separatistas en varias regiones. Además, desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas. Paralelamente, las acciones de grupos criminales en el norte del país, de origen multicausal, se han multiplicado desde 2018.

En Nigeria persistió el clima de violencia política y también por parte de grupos criminales en el norte y centro-norte del país, mientras que las actividades de las dos principales facciones de Boko Haram (JAS e ISWAP) así como las acciones contrainsurgentes en la región de la Cuenca del Lago Chad (noreste)¹⁶ fueron similares a las de los años anteriores en lo concerniente a la cifra de víctimas mortales. A esta situación se le añadía el clima recurrente de violencia intercomunitaria entre ganaderos y agricultores del cinturón central del país (principalmente en los estados de Plateau, Kogi y Benue), la persistencia de los enfrentamientos y acciones insurgentes en el estado de Biafra¹⁷ así como la proliferación de milicias y cuerpos de seguridad privados locales que ha tenido lugar en los últimos años en Nigeria.¹⁸ Además, también destacaron las importantes movilizaciones de protesta contra la gestión gubernamental ante la grave crisis económica que tuvieron lugar en agosto, y que fueron duramente reprimidas.

En el conjunto del país se contabilizaron 4.071 eventos violentos que provocaron 9.440 víctimas mortales en 2024, según ACLED, si bien estas cifras incluían también la violencia asociada al conflicto armado con

Boko Haram.¹⁹ En los cuatro estados del norte del país (Zamfara, Katsina, Kaduna y Níger) –epicentro de la violencia de los grupos criminales– los actos de violencia provocaron 4.079 víctimas mortales, según ACLED –cifra que ascendía a 4.450 víctimas mortales si se incluye los estados de Kebbi y Sokoto, estados que han sufrido un incremento de la violencia en los últimos años. Estas cifras son muy superiores a las del año 2023 (2.344 víctimas mortales, 2.869 víctimas mortales incluyendo a Kebbi y Sokoto) volviendo a equipararse a los niveles registrados en 2022 (4.481 víctimas mortales, 4.920 incluyendo a Kebbi y Sokoto) y en año 2021 (3.918, 4.484 incluyendo a Kebbi y Sokoto).²⁰

Entre los grupos criminales del norte del país cabe destacar la **escalada de la violencia por parte de un grupo conocido como Lakurawa**, según señalaron fuentes militares. Este grupo, cuyos miembros proceden de Malí y Níger, previamente se dedicaba a proteger a la población civil de los grupos criminales y en 2024 llevó a cabo acciones armadas contra los cuerpos de seguridad y contra la población civil en los estados de Kebbi y Sokoto, lo que provocó el incremento de acciones contrainsurgentes por parte de los cuerpos de seguridad. Estos enfrentamientos causaron decenas de víctimas mortales en el grupo y también la destrucción en diciembre de 22 campos de entrenamiento de este grupo, según las Fuerzas Armadas nigerianas. También cabe destacar la existencia de enfrentamientos entre grupos criminales rivales. El 13 de octubre se produjo la muerte del líder criminal Ibrahim Daji, como consecuencia de estos enfrentamientos, en el área de Gusau, en el estado de Zamfara. En agosto, grupos criminales ejecutaron al emir de la localidad de Gobir, en el estado de Sokoto, quien había sido secuestrado en julio. En junio las autoridades anunciaron la muerte del líder criminal conocido como Buharin Yadi junto con 40 milicianos en las áreas de Giwa y Sabuwa, en el estado de Kaduna. Centenares de personas fueron secuestradas en diferentes momentos del año para conseguir el pago de rescates. Una de las zonas que vio incrementados los secuestros fue la capital federal, Abuja, y sus alrededores, además de los estados del norte y el centro del país.

La ONU alertó que 31,8 millones de personas se encontraban en una situación de crisis alimentaria o de

16 Véase resumen de región Lago Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados).

17 Véase resumen de Nigeria (Biafra) en este capítulo.

18 Véase resumen de Nigeria en el capítulo 2 (Tensiones) en Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2023. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2023.

19 ACLED, *ACLED Explorer* [Consultado el 31 de enero de 2025]. Esta cifra incluye eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados). Si incluimos las categorías de uso excesivo de la fuerza y disturbios y protestas, la cifra asciende a 9.624 víctimas mortales en 4.375 eventos violentos, cifra superior al año 2023 (8.764).

20 Esta cifra, no obstante, se debe relativizar dadas las dificultades para diferenciar las acciones de estos grupos de bandas de criminales de otras dinámicas de violencia, debido a la multiplicidad de actores, entre ellos cuerpos de seguridad, actores armados yihadistas, grupos vinculados a comunidades ganaderas y milicias de autodefensa civiles.

Nigeria se vio afectada por las inundaciones más graves de los últimos años que agravaron la inseguridad alimentaria e importantes movilizaciones juveniles en protesta por la crisis económica

inseguridad alimentaria aguda entre junio y agosto de 2024, cifra que se incrementó respecto al año anterior.²¹ Según ACNUR, la cifra de desplazamiento forzado en el conjunto del país se elevó a más de 3,57 millones de personas, de las cuales más 1,32 millones correspondían a los estados del norte y centro-norte, y 2,25 millones correspondían a los estados del noreste, cifra global que se incrementó en más de 100.000 personas respecto a 2023.²² Esta situación se agravó en septiembre, cuando **el país se vio afectado por las inundaciones más graves de los últimos años**, que provocaron la muerte de 200 personas y el desplazamiento forzado de 600.000 personas. La destrucción de cosechas e insumos agrícolas desencadenaron un incremento de la inseguridad alimentaria que afectó a más de 1,2 millones de personas. En paralelo, persistió un elevado coste de la vida y una inflación de más del 30% en numerosos momentos del año, alcanzando incluso el 40%, superando las cifras de 2023 y en línea con los últimos años –cifras que no se veían en el país desde los años noventa, incremento vinculado a la subida de precios de los productos básicos y la retirada del subsidio a la gasolina–, lo que provocó un incremento del descontento social en diferentes momentos del año. **Este descontento cristalizó en importantes movilizaciones de jóvenes** entre el 1 y el 10 de agosto en todo el país (bajo el lema #EndBadGovernance) en protesta por la gestión gubernamental ante la crisis que en algunas partes derivaron en actos de saqueo y represión por parte de los cuerpos de seguridad. Las autoridades establecieron toques de queda y utilizaron gases lacrimógenos y munición real para frenar las movilizaciones. Amnistía Internacional denunció la vulneración de la libertad de expresión y reunión durante las movilizaciones, y afirmó que el 7 de agosto murieron 22 personas,²³ mientras que los organizadores denunciaron que fueron detenidos 1.400 manifestantes. El presidente Tinubu el 4 de agosto hizo un llamamiento al diálogo pero no ofreció respuesta a las demandas de la organización de las protestas.

Nigeria (Biafra)

Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)

Síntesis:

Tras la independencia en 1960, el Estado nigeriano se ha enfrentado al reto de articular las diferentes nacionalidades étnicas. El ejemplo más paradigmático fue la guerra civil

entre el Estado y la autoproclamada República de Biafra (1967-1970), en la que murieron entre 1 y 3 millones de personas. Después de tres décadas de gobierno militar, el advenimiento de la democracia en 1999 generó nuevas expectativas de acomodación de identidades y demandas de reestructuración política que no se han hecho realidad, alimentando los agravios separatistas. En este contexto, las demandas de autodeterminación han resurgido en el sureste del país –denominado como Biafra por los movimientos independentistas– a través de organizaciones noviolentas, principalmente con el Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra (MASSOB), creado en 1999 y luego por otros movimientos secesionistas incluido el Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), creado en 2012. El ascenso al poder de Muhammadu Buhari en 2015, percibido como una amenaza en las regiones del sur, ha contribuido a un incremento de la tensión. El encarcelamiento en 2015 del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, provocó un incremento de las movilizaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad nigerianos, que desde entonces emprendieron una campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales, situación que se agravó con la ilegalización del IPOB en 2017 y el incremento de la violencia en la segunda mitad del 2020, especialmente en el contexto de la prohibición del IPOB. Un tribunal dictaminó en 2021 que el arresto de Kanu en Kenia y posterior traslado a Nigeria había sido ilegal pero permaneció bajo custodia policial.

En el sureste de Nigeria persistieron los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la insurgencia, que causaron decenas de víctimas mortales. El brazo armado del movimiento independentista IPOB, la Red de Seguridad del Este (ESN), continuó llevando a cabo acciones armadas durante todo el año. Según el centro de investigación ACLED, en 2024 se produjeron 724 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 875 personas en el conjunto de los 10 estados que componen la autodenominada república de Biafra (Enugu, Anambra, Ebonyi, Imo, Abia, Rivers, Bayelsa, Akwa Ibom, Delta y Cross River, aunque fue en los cinco primeros, en los que la comunidad ibo es mayoritaria, donde se concentraron la mayoría de las víctimas mortales vinculadas al conflicto). En 2023 el número de eventos ascendía a 660 y las víctimas mortales a 776. En 2022 el número de eventos ascendía a 703 y las víctimas mortales a 985. Esta cifra de ACLED incluía la violencia vinculada a los enfrentamientos armados de Biafra entre el Gobierno y grupos armados independentistas, que causaron decenas de víctimas mortales, pero también los múltiples ataques en esos estados cometidos por grupos criminales, así como los enfrentamientos de carácter intercomunitario por los usos y la propiedad de la tierra, así como por el acceso al agua, que causan cada año centenares de víctimas mortales. Decenas de personas murieron durante el año como consecuencia del clima de inestabilidad, la recurrencia de las operaciones militares y los ataques contra puestos de policía y destacamentos militares.

21 WFP y FAO, *Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: November 2024 to May 2025 outlook*. Roma, 2024.

22 UNHCR, *Refugee Data Finder – Nigeria*, [consultado el 31 de enero de 2025].

23 Amnesty International, “Bloody August: Nigerian government’s violent crackdown on #EndBadGovernance protests,” 28 de noviembre de 2024.

Entre los hechos más destacados, cabe señalar que en octubre el IPOB afirmó que miembros de los cuerpos de seguridad ejecutaron a uno de sus líderes, Ikechukwu Ugwuoha en Aba (estado de Abia). En agosto las fuerzas de seguridad afirmaron que habían ejecutado a 27 milicianos de la facción de IPOB liderada por Simon Ekpa. El 7 de mayo los cuerpos de seguridad anunciaron la muerte de un comandante del ESN, Tochukwu, alias Ojoto, y dos de sus lugartenientes en Iheteukwa, en el estado de Imo.²⁴ El movimiento IPOB el 1 de diciembre denunció la declaración de independencia de Biafra realizada a fines de noviembre por la facción de IPOB liderada por Simon Ekpa, con base en Finlandia, afirmando que la única ruta legítima sería un referéndum patrocinado por la ONU. El líder esta facción, Simon Ekpa, fue detenido el 21 de noviembre junto con otras cuatro personas por la policía finlandesa por presunta financiación y promoción de acciones violentas e incitación a la violencia letal en el sureste de Nigeria.²⁵ Ekpa había reivindicado repetidamente la responsabilidad de su grupo por la violencia letal en la región. La policía finlandesa declaró la existencia de una investigación en marcha y su juicio podría tener lugar en mayo de 2025. En paralelo, la coalición político-militar camerunesa AGovC reafirmó la alianza con los movimientos opositores político-militares de los estados del sureste de Nigeria (que conforman Biafra) en la llamada conferencia del Gobierno de la República de Biafra en el Exilio en Finlandia, celebrada entre el 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2024, extendiendo el pacto de octubre de 2023.

Africa del Este

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS

Síntesis:

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. El padre de la independencia y fundador de KANU, Jomo Kenyatta, gobernó el país desde 1964 hasta su muerte en 1978,

y fue sucedido por el autocrático Daniel Arap Moi. En 1991 Moi inició una transición hacia el fin del régimen de partido único, y en 1992 se celebraron las primeras elecciones multipartidistas, también ganadas por KANU. A partir de 2002, el proceso clientelar para suceder a Moi se interrumpió por la victoria de Mwai Kibaki, que junto a desafectos de KANU y otros, crearon la National Alliance of Rainbow Coalition (NARC) y derrotaron a Uhuru Kenyatta, hijo del líder de la independencia y candidato oficialista de KANU. Desde entonces, han aflorado diferentes conflictos etnopolíticos en el país lo que ha provocado un clima de violencia política instrumentalizado durante los diferentes ciclos electorales. El fraude electoral de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.500 personas y unas 600.000 se vieron desplazadas. Tras ese proceso electoral se formó un frágil Gobierno de unidad nacional entre Mwai Kibabi y Raila Odinga (hijo del histórico líder opositor Oginga Odinga). En las elecciones de 2013 Uhuru Kenyatta obtuvo la presidencia del país y William Ruto la vicepresidencia, proceso electoral cuestionado por la oposición liderada por Raila Odinga, al igual que en 2017, cuando Kenyatta revalidó el poder. Ruto y Odinga se enfrentaron en las elecciones de 2022, también afectadas por irregularidades y en medio de un clima de violencia política, como en los anteriores procesos, en las que obtuvo la victoria Ruto. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por el robo de ganado y la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, la intervención militar de Kenya en Somalia desencadenó ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenya, la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, y tensiones entre Kenya y Somalia a causa de sus diferentes agendas políticas, lo que suponen retos añadidos a la estabilidad del país.

Durante el año 2024 el país vivió una profunda crisis política y social marcada por protestas masivas contra medidas económicas impopulares, un aumento alarmante de los feminicidios, tensiones institucionales y una intensificación de los ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en el noreste del país. La aprobación del Proyecto de Ley de Finanzas de 2024 (Finance Bill 2024), que proponía aumentos de impuestos para reducir el déficit fiscal, desató una ola de protestas lideradas por jóvenes, especialmente de la llamada generación Z. Estas manifestaciones, conocidas como #RejectFinanceBill2024, comenzaron en mayo, impulsadas en gran medida por jóvenes de clase media que se organizaban en las redes sociales²⁶ contra el controvertido proyecto de ley de finanzas, enormemente impopular, que contenía nuevos impuestos que muchos temían que aumentarían el ya alto costo de vida y provocarían pérdidas de empleo. La Policía arrestó a decenas y utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua, hiriendo a varios manifestantes. El comité de finanzas parlamentario anunció ese mismo día que eliminaría ciertas cláusulas, aunque se mantuvieron muchos impuestos controvertidos, incluidos los que gravaban tratamientos contra el cáncer y los productos de higiene

24 Igwe, Ignatius, "Troops Kill Notorious Terrorist Ojoto, Two Others In Imo," ChannelsTV, 7 de mayo de 2024.

25 Kabir, Adejumo, "Simon Ekpa: A Timeline of Events Leading up to IPOB Factional Leader's Detention", HumAngle, 22 de noviembre de 2024.

26 Princewill, Nimi, "Mass arrests in Kenya as angry citizens protest against tax hikes", CNN, 19 de junio de 2024.

menstrual. Cuando las protestas del 20 de junio se reanudaron y se extendieron a pueblos y ciudades de todo el país, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron al menos 200 heridos. En Nairobi, la policía presuntamente mató a tiros a un manifestante, mientras que otro murió al ser alcanzado por un bote de gas lacrimógeno.

Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, alcanzaron su punto álgido el 25 de junio cuando los legisladores aprobaron aumentos de impuestos profundamente impopulares, tras la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Después del anuncio de la votación, una multitud irrumpió en el complejo del Parlamento en Nairobi y se produjo un incendio en enfrentamientos sin precedentes en la historia del país desde su independencia de Gran Bretaña en 1963. Los cuerpos de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza según fuentes locales e internacionales, con al menos 23 personas muertas y más de 300 heridas solo en la capital, represión en la que se utilizó gases lacrimógenos y munición real. Human Rights Watch elevó el balance a al menos 30 víctimas mortales.²⁷ Ante la presión popular, que se extendió al conjunto del país, el presidente William Ruto vetó el proyecto de ley el 26 de junio y anunció recortes presupuestarios significativos. Sin embargo, las protestas continuaron, exigiendo su renuncia y denunciando la brutalidad policial. En respuesta, Ruto disolvió su gabinete el 11 de julio, manteniendo solo al ministro de Asuntos Exteriores y al vicepresidente, y prometió formar un gobierno de base amplia para abordar la situación económica. Según el presidente, las medidas fiscales propuestas formaban parte de los esfuerzos por reducir la carga de la deuda de más de 80.000 millones de dólares. Alrededor del 60% de los ingresos recaudados de Kenya se destinan al servicio de la deuda. La respuesta del presidente Ruto a las manifestaciones juveniles fue construir una coalición de élites políticas, cooptar a individuos y grupos influyentes e intimidar a organizadores y participantes, según señaló ACLED.²⁸ Para construir una coalición política tradicional se acercó a su principal oponente, Raila Odinga, quien mientras en 2023 lideró las manifestaciones en contra de la subida de impuestos, en julio de 2024 estuvo completamente ausente. Ruto se había granjeado el apoyo de Odinga al nominarle como candidato de la región de África del Este a liderar la Comisión de la UA, aunque esta decisión le supuso importantes críticas a Odinga en el seno de la coalición Azimio la Umoja y en

su partido, el ODM. A pesar de que en julio se redujo el empuje de las movilizaciones, estas continuaron durante el resto del año. En noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que habían muerto al menos 60 personas durante las movilizaciones de junio, y pidió al jefe de Policía que reconociera las muertes ocurridas y agilizara las investigaciones. Decenas de activistas permanecieron desaparecidos.

Por otra parte, según datos de ACLED,²⁹ durante 2024 se produjeron 1.070 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles, explosivos improvisados, movilizaciones y protestas) en el conjunto del país, que costaron la vida a 708 personas. De estos, 132 eventos violentos tuvieron

Las movilizaciones inicialmente pacíficas en Kenya contra de la Ley de Finanzas de 2024 derivaron en enfrentamientos sin precedentes desde su independencia en 1963, en las que la represión gubernamental causó decenas de víctimas

lugar en los cuatro condados fronterizos con Somalia (Mandera, Wajir, Garissa y Lamu), donde se concentra la mayoría de los hechos de violencia vinculados con acciones del grupo armado de corte yihadista al-Shabaab, que costaron la vida a 196 personas, mientras que en 2023 fueron 154 eventos y 297 víctimas mortales. Estos ataques incluyeron emboscadas a convoyes militares, atentados con explosivos improvisados y ataques a comunidades locales, resultando en numerosas muertes y desplazamientos. La inseguridad en estas áreas complicó aún más la situación humanitaria y de seguridad en el país. El balance global de ACLED para 2023 ascendía a 1.100 eventos violentos y 971 víctimas mortales (cifra superior a los 994 eventos y a las 685 víctimas mortales registrados en 2022).

Además, cabe destacar que **en los últimos años se ha producido un incremento de la violencia sexual y de género en el país**. Entre septiembre de 2023 y enero de 2024, se registraron 7.107 casos de violencia sexual y de género.³⁰ Según el Africa Data Hub, al menos 546 mujeres fueron asesinadas entre 2016 y 2023. En los primeros cuatro meses de 2024, al menos 100 mujeres fueron asesinadas, principalmente por parejas o conocidos. En enero, tras la muerte de 14 mujeres, se estima que unas 10.000 mujeres salieron a las calles de Kenya, en lo que se convirtió en la mayor manifestación contra la violencia de género de la historia del país.³¹ Entre el 39 y el 47% de las mujeres del país han sufrido violencia de género en algún momento de su vida, según análisis.³² Como consecuencia de ello, el Gobierno declaró la violencia de género como la amenaza de seguridad más urgente del país y estableció una unidad policial especializada, además de un grupo de trabajo presidencial para abordar el problema.³³

27 HRW, "Kenya: Witnesses Describe Police Killing Protesters", 28 de junio de 2024.

28 ACLED, *Ruto settles with Odinga to quell unrest in Kenya*, 23 de septiembre de 2024.

29 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 10 de febrero de 2025].

30 Africanews, *Kenya's response to gender violence: a plan for women's protection*, 20 de diciembre de 2024.

31 Al Jazeera, "Stop killing us!: Thousands march to protest against femicide in Kenya", 27 de enero de 2024.

32 Sidibé, Safourata, "Kenya's urgent battle against femicide", Equal Measures 2030, 27 de noviembre de 2024.

33 Star, *DCI boss Amin forms special team to probe femicide cases*, 30 de enero de 2024.

En 2024, Kenya también enfrentó un **aumento en la violencia intercomunitaria**, especialmente en las regiones del norte y oeste del país. Disputas por recursos naturales, como tierras y agua, exacerbadas por el cambio climático y la escasez de recursos, provocaron enfrentamientos intercomunitarios que causaron centenares de víctimas mortales. Entre marzo y mayo, intensas lluvias e inundaciones devastaron el país, desbordando los ríos Nairobi y Athi, y causando la muerte y desplazamiento de miles de personas. Más de 306.000 personas resultaron damnificadas y 315 murieron solo en Nairobi. El cambio drástico en patrones meteorológicos, incluyendo una prolongada sequía y lluvias intensas, exacerbadas por el fenómeno El Niño, contribuyeron a esta situación. Además, las sequías seguidas de inundaciones en la región de Busia, cerca del lago Victoria, crearon condiciones ideales para la proliferación de malaria.

África Central

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Transformateurs), grupos armados chadianos (entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas, Francia, MNJTF

Síntesis:

Con frecuencia clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, Chad enfrenta un complejo clima de inestabilidad y violencia desde su independencia en 1960. La diversidad étnica del país se ha visto instrumentalizada por una tradición de faccionalismo. El colonialismo francés también exacerbó la animosidad entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista, división instrumentalizada políticamente y que forma parte del núcleo del conflicto. Los sucesivos gobiernos desde 1966 se han visto confrontados por insurgencias que pretendían acceder al poder. Libia y Francia históricamente han estado presentes en los asuntos internos chadianos, apoyando, respectivamente, a insurgencias y gobiernos. Idriss Déby alcanzó el poder tras un golpe de Estado en 1990. La reforma de la Constitución en 2005 le permitió convertirse en uno de los líderes más longevos del continente, pero fue el germe de una insurgencia compuesta por desafectos al régimen. Tras su muerte en 2021 una junta militar dio un golpe de Estado e instaló a su hijo, Mahamat Idriss Déby, como nuevo presidente. Durante 2022 Déby hijo alcanzó

un acuerdo con parte de la insurgencia en Doha y celebró el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (DNIS) que le permitió prolongar su mandato más allá de la promesa inicial de una transición de 18 meses. A esta situación se añaden otros focos internos de inestabilidad como son los periódicos brotes de violencia intercomunitaria por robo de ganado y la propiedad y usos de la tierra, la persistencia de acciones insurgentes en el norte y la minería ilegal. Y desde una perspectiva regional, el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra de la vecina Sudán, así como la participación en la ofensiva regional contra Boko Haram en la región del Lago Chad.

Persistió la inestabilidad en Chad durante el año 2024. La actuación represiva de los cuerpos de seguridad, las acciones de Boko Haram y la actividad contrainsurgente de las Fuerzas Armadas chadianas y de fuerza multinacional MNJTF, los brotes esporádicos de violencia en torno al robo de ganado y usos de la tierra fueron una constante durante el año. En paralelo, **se incrementó la tensión con Sudán.³⁴** En el conjunto del país se contabilizaron 99 eventos violentos que provocaron 523 víctimas mortales en 2024, según ACLED,³⁵ la mayoría concentrados en la provincia de Lac –324 víctimas mortales, vinculadas a las acciones armadas de Boko Haram y la respuesta de los cuerpos de seguridad– y en menor medida, en las provincias del este, en Sila y Ouaddaï (46 y 31 víctimas mortales), fronterizas con Sudán. Estas cifras fueron superiores a las contabilizadas en 2023. En el conjunto del país se contabilizaron 108 eventos violentos que provocaron 288 víctimas mortales en 2023,³⁶ cifras inferiores a los 132 eventos violentos y 642 víctimas mortales de 2022.

Durante el año 2024 se celebraron las elecciones que marcaron el fin del proceso de transición política que comenzó en abril de 2021 tras la muerte del presidente Idriss Déby y el subsiguiente golpe de Estado por parte de un consejo militar que instaló a su hijo, Mahamat Idriss Déby, como presidente. Tras el golpe de Estado, Déby hijo se había comprometido con la UA a celebrar elecciones tras 18 meses de transición y a no presentarse a las elecciones, aunque el Acuerdo de paz de Doha para la Paz y la Participación de los Movimientos Político-Militares en el diálogo nacional firmado en agosto de 2022 y el posterior Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (DNIS) de 2022 comportaron la prolongación del mandato del Consejo Militar de Transición (CMT) por un periodo de otros 24 meses, y permitieron la elección de Déby hijo en las elecciones de mayo de 2024. Las elecciones presidenciales tuvieron lugar el 6 de mayo de 2024, y el 29 de diciembre se celebraron las elecciones parlamentarias, regionales y municipales, por primera vez en una década. No obstante, ambos procesos

34 Véase el resumen de Sudán en el capítulo 1 (Conflictos armados).

35 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 10 de febrero de 2025].

36 ACLED, *ACLED Explorer* [consultado el 10 de febrero de 2025]. Esta cifra incluye cinco tipos de eventos violentos (batallas, violencia contra civiles, acciones con artefactos explosivos improvisados, disturbios y protestas).

fueron cuestionados y calificados de fraudulentos por organizaciones locales e internacionales, y boicoteados por los principales partidos opositores. Previamente, en diciembre de 2023 se había celebrado el referéndum constitucional que permitía al presidente Déby presentarse a las elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales de mayo Déby obtuvo la victoria con el 61% de los votos. El segundo candidato, Succès Masra, líder del partido opositor Les Transformateurs, obtuvo el 18,5% de los votos. Masra había regresado al país en enero de 2024 tras un acuerdo con Déby y fue nombrado primer ministro, en lo que muchos vieron un intento de Déby de ganarse el apoyo de los miembros de la oposición, lo que también le restó credibilidad a Masra.³⁷

La presión sobre la oposición había aumentado en los últimos meses, alcanzando su punto álgido el 28 de febrero con la ejecución del opositor Yaya Dillo, líder del Partido Socialista Sin Fronteras (PSF) y primo de Mahamat Déby. El Gobierno afirmó que Dillo murió por resistirse a la detención, pero la oposición afirmó que fue asesinado extrajudicialmente en una operación militar. Durante la misma operación, también fue detenido el tío del presidente de transición y hermano del difunto presidente, Saleh Déby. A principios de febrero, este había abandonado el partido gobernante, el partido Movimiento Patriótico de Salvación (MPS) para unirse al PSF de Yaya Dillo.³⁸ La deserción, junto con las expresiones de disidencia de otros miembros del clan zaghawa –el grupo étnico de la familia Déby–, aumentaron las tensiones dentro de la élite gobernante. La muerte de Dillo, según el International Crisis Group, fue un ejemplo flagrante de la creciente discordia en el seno del clan zaghawa.³⁹ Este clan representa poco más del 5% de la población chadiana, pero controla el país desde hace 30 años con el apoyo de otras élites del norte pertenecientes a las etnias gorane y árabe. Además, el Tribunal Constitucional excluyó 10 candidaturas, entre los cuales dos importantes opositores, Nassour Ibrahim Neguy Koursami y Rakhis Ahmat Saleh, por supuestas irregularidades en sus candidaturas.

Cabe destacar que varios grupos armados no signatarios del Acuerdo de Doha manifestaron su interés en el desarme, mientras que los que firmaron el acuerdo se sintieron frustrados por la lentitud de los avances en su aplicación en lo relativo al DDR y otras disposiciones. Varios cientos de combatientes afiliados a grupos

rebeldes chadianos con base en Libia (tanto signatarios como no signatarios del acuerdo de paz) habrían regresado de Libia durante el año 2024 para sumarse a las iniciativas de desarme. En paralelo, varios grupos armados chadianos con presencia en Libia, Sudán y la RCA, alineados en la coalición Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR), entre ellos el FACT y el CCSMR, siguen suponiendo una amenaza a la estabilidad de Chad.

Por otro lado, las protestas iniciadas en 2023 contra la presencia de las tropas francesas en el país por la muerte de un soldado chadiano a manos de un soldado francés y que derivaron en una carta de la oposición política y social exigiendo a Déby la retirada de las tropas francesas de Chad, culminaron con su retirada entre finales de 2024 y principios de 2025.

A esta decisión contribuyó la investigación abierta en julio en Francia contra Mahamat Déby, por apropiación de fondos públicos, que también fue utilizada como munición contra Francia por la supuesta injerencia de la justicia francesa a la soberanía chadiana. Otros análisis vincularon este juicio como medida de presión francesa a Chad por la aproximación chadiana a Rusia. El 19 de diciembre el Gobierno chadiano exigió a Francia la retirada de la presencia militar francesa en el país el 31 de enero,⁴⁰ en una decisión que diferentes análisis calificaron como un intento del presidente Déby de capitalizar el apoyo ciudadano. Chad reclamó la retirada del

contingente de 1.000 militares y diversos aviones de combate establecido en el país desde hacía más de 50 años, tras el fin del acuerdo de cooperación militar en noviembre.⁴¹ Dicho contingente ha dado apoyo a los diferentes líderes del país, incluido el padre del actual presidente, Idriss Déby, para mantenerse en su cargo, en contextos de inestabilidad y amenazas insurgentes. No obstante, fuentes oficiales del Gobierno señalaron que la retirada de tropas no implica la ruptura de las relaciones con Francia, destacando que la situación es totalmente diferente en relación con la Alianza de Estados del Sahel (AES). Ambos países manifestaron la importancia de las relaciones entre ellos, y el ministro de Exteriores chadiano calificó a Francia como un socio esencial. Por último, el presidente de Hungría, Viktor Orban, abrió una misión diplomática en el país y anunció la entrega de apoyo humanitario y militar a Chad, incluyendo el envío de militares húngaros,⁴² como una forma de frenar la migración y apoyar a su nuevo aliado en el centro de África. Esta decisión fue

Las elecciones en Chad, tachadas de fraudulentas por organismos locales e internacionales, marcaron el fin del proceso de transición política con la victoria de Mahamat Déby y su permanencia en la jefatura del Estado

37 Véase el resumen de Chad en el capítulo 1 (Procesos de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz. Análisis de tendencias y escenarios*, Icaria: Barcelona, 2025.

38 RFI, “Tchad: pourquoi Saleh Déby Itno, oncle du président de la transition, rallie l’opposant Yaya Dillo?”, RFI, 12 de febrero de 2024.

39 International Crisis Group, *Chad: Averting the Risk of Post-transition Instability*, 3 de mayo de 2024.

40 RFI, “Chad orders French troops to leave within six weeks as relations sour”, 20 de diciembre de 2024.

41 Al Jazeera, “Chad ends military cooperation with France”, 29 de noviembre de 2024.

42 Lawal, Shola, “Why is Hungary’s Orban sending soldiers to Chad?”, Al Jazeera, 23 de octubre de 2024.

calificada de populista y oportunista en el marco de la reconfiguración de relaciones entre Francia y los países del Sahel.

Por último, cabe destacar el incremento de la tensión con Sudán. En este sentido, se produjo **un tiroteo en el palacio presidencial el 8 de enero de 2025 que algunos análisis lo interpretaron como un posible intento de golpe de Estado**, en el que murieron 18 personas y resultaron heridas otras seis como consecuencia de la respuesta desproporcionada de los cuerpos de seguridad. Las dinámicas locales y regionales, incluyendo el descontento entre el grupo étnico zaghawa, al que pertenece el presidente Déby, por su aproximación a EAU y al grupo paramilitar sudanés Rappid Support Forces (RSF), al que le estaría dando apoyo –en contra de la voluntad de la comunidad zaghawa, aliada de las Fuerzas Armadas sudanesas, adversarias de las RSF– podrían encontrarse entre las causas, según el International Crisis Group. En este sentido, las relaciones entre Chad y Sudán se deterioraron durante el año 2024, con acusaciones de apoyo por parte de Chad a las RSF y de Sudán a insurgencias chadianas, y del apoyo de EAU a las RSF a través de Chad. Las tensiones internas entre clanes también se intensificaron tras la muerte a finales de diciembre, en circunstancias poco claras, de Saleh Déby, figura de la oposición zaghawa y tío del presidente, a quien las autoridades encarcelaron durante cinco meses en febrero de 2024.

2.3.2. América

América del Norte

México	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición

Síntesis:

Desde el inicio en 2006 de la llamada “guerra al narcotráfico” por parte del presidente Felipe Calderón, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios y desapariciones forzadas en todo el mundo. Desde entonces, los grupos de crimen organizado se han multiplicado, han incrementado su capacidad bélica, presencia territorial y vínculos transnacionales, y han diversificado sus actividades ilícitas más allá del narcotráfico. Aunque la mayor parte de hechos de violencia están vinculados a los enfrentamientos

entre grupos de crimen organizado por el control de actividades, territorios y rutas, también son frecuentes los enfrentamientos entre fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y carteles, o entre estos últimos y grupos de autodefensa comunitarios. Numerosos análisis también han señalado la existencia de altos niveles de violencia y violaciones de derechos humanos contra la población civil, especialmente por parte de grupos de crimen organizado. Además, en las últimas décadas ha habido algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –EPR, ERPI o FAR-LP– o Chiapas, donde se han mantenido ciertos niveles de tensión en algunas comunidades tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994

En 2024 se incrementaron notablemente tanto el número como el alcance geográfico de los episodios de violencia entre carteles de la droga, los enfrentamientos entre éstos y las fuerzas de seguridad del Estado y los ataques contra población civil. Además, algunos análisis consideraron que las elecciones presidenciales del mes de junio, en las que Claudia Sheinbaum (del partido MORENA) obtuvo casi el 60% de los votos, habían sido las más violentas de la historia del país. El Gobierno declaró que en 2024 se registraron 30.057 homicidios en México, un 1,1% más que en 2023 (29.713). Siete estados concentraron casi el 50% de los homicidios: Guanajuato (3.151 asesinatos, 10,5%); Baja California (2.368 asesinatos, 7,9%); estado de México (2.258 homicidios, 7,5%); Chihuahua (2.004 asesinatos, 6,7%); Jalisco (1.804 homicidios, 6%); Guerrero (1.738 asesinatos, 5,8%) y Nuevo León (1.539 homicidios, 5,1%). El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fue el más violento de la historia reciente del país, con 188.987 homicidios. Tal cifra es un 38% mayor a la que se registró durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018, con 137.289 homicidios), un 84% superior a la de Felipe Calderón (2006-2012, con 102.859 asesinatos), y un 153% superior a la de Vicente Fox (2000-2006, con 74.577 homicidios).

En cuanto a los niveles de violencia vinculada a las organizaciones de crimen organizado, según el informe Índice de Paz México 2024⁴³, **entre 2015 y 2022 el número de homicidios relacionados con el crimen organizado pasó de alrededor de 8.000 a unos 20.000**, mientras que el número de homicidios no relacionados con el crimen organizado se ha mantenido relativamente estable, con entre 10.000 y 12.500 homicidios al año. Por su parte, el centro de investigación **ACLED señaló que en 2024 México fue el cuarto país del mundo con un nivel más extremo de conflicto en el mundo, solamente por detrás Palestina, Myanmar y Siria.** ACLED⁴⁴ sostiene que México fue el país sin una guerra regular o formalmente declarada más peligroso del mundo. Según dicho centro, entre enero y noviembre 8.110 personas

43 Instituto para la Economía y la Paz, Índice de Paz México 2024, mayo de 2024.

44 ACLED, México, el país sin guerra más peligroso y violento del mundo, 12 de diciembre de 2024.

murieron como consecuencia de 7.327 eventos de violencia política. Además, se registraron 5.828 eventos de ataques contra población civil, el segundo país del mundo con cifras más altas. Según ACLED, en 2024 la letalidad de los enfrentamientos entre organizaciones de crimen organizado se incrementó en un 18% y la violencia aumentó en 14 de los 32 estados del país, especialmente en Chiapas, Tabasco y Sinaloa. Según la organización Causa en Común⁴⁵, entre enero y noviembre de 2024 hubo 4.708 atrocidades⁴⁶ –provocando 8.960 víctimas–, y se registraron 466 masacres. Además, según dicha organización, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se registró el homicidio de 2.456 policías –la gran mayoría de ámbito municipal y estatal–, 320 de ellos en 2024. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advirtió que en 2024 se registró el asesinato de 2.243 menores –456 niñas y 1.787 niños, un incremento del 6,5% respecto del 2023– y que hubo 73 casos de feminicidios de niñas y adolescentes. Reporteros Sin Fronteras advirtió que México siguió siendo en 2024 uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, pues es el tercer país del mundo (solamente por detrás de Palestina y Pakistán) con mayor número de periodistas asesinados y concentra casi una tercera parte (30 sobre un total de 95) de periodistas secuestrados en el mundo. Según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2024, entre 2014 y 2023 la inseguridad y la violencia criminal provocaron el desplazamiento forzado de 392.000 personas, la segunda cifra más alta de América Latina.

En 2024, la violencia vinculada a las organizaciones de crimen afectó a una parte muy significativa del territorio mexicano. Según un informe⁴⁷, en México existen 175 organizaciones y bandas delincuenciales, algunas de ellas operando en pequeñas regiones y otras en varios estados del país. En conjunto, **se registró la presencia de carteles en el 81% del territorio del país, en 1.488 municipios**. Además de los dos grandes carteles del país –el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa–, cabe destacar Cártel del Pacífico, Cártel del Golfo, Los Arellano Félix, La Familia Michoacana; el Cártel de los Beltrán Leyva; Los Rusos; el Cártel del Noreste; el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Nueva Plaza. El CJNG y el Cártel de Sinaloa tienen presencia en 28 estados y 24 estados del país, respectivamente, y operan de manera transnacional en numerosos países. Según el Gobierno de EEUU, los dos mencionados carteles tienen presencia en los 50 estados del país y están involucrados en tráfico de armas, drogas o migrantes, blanqueo de capitales, extorsión y otras actividades delictivas, con operaciones en Europa, África, Asia y Oceanía. En esta línea, en diciembre el presidente

electo de EEUU, Donald Trump, anunció su intención de designar a los carteles mexicanos como grupos terroristas extranjeros. Algunos análisis sugirieron que tal decisión podría añadir presión al Gobierno de México para llevar a cabo acciones conjuntas para combatir a los carteles de forma más agresiva, condicionando la nueva estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Además, el entorno de Trump esbozó un plan de deportación masiva de personas en situación irregular que podría afectar, según algunas estimaciones, a unos cuatro millones de personas mexicanas residentes en EEUU sin documentación. Según ACLED⁴⁸, las principales dinámicas que explican el incremento y extensión territorial de la violencia relacionada con el crimen organizado son la fragmentación del Cartel de Sinaloa y su pugna con el CJNG; la reconfiguración de alianzas estratégicas entre organizaciones delictivas; la lucha por la diversificación de actividades delictivas de algunos carteles –como la extorsión, el tráfico de personas o el robo de combustible; la mayor sofisticación del armamento utilizado por dichas organizaciones; o la emergencia de nuevos carteles como el Cártel Michoacán Nueva Generación, el Cártel Tabasco Nueva Generación (CTNG), el Cártel Chiapas-Guatemala; o el Cártel Gente Nueva Generación (GNG). Según ACLED, las tácticas bélicas y el armamento de los grupos de crimen organizado cada vez revisten mayor sofisticación y letalidad, en algunos casos imitando los métodos utilizados por grupos insurgentes colombianos. Así, en 2024 se duplicó el uso de explosivos y de métodos de violencia remotos, con un creciente uso de drones comerciales para fines bélicos.

Uno de los factores que tuvo mayor incidencia en la reconfiguración de alianzas entre grupos de crimen organizado en 2024 fue la fragmentación del Cartel de Sinaloa entre la facción liderada por los hijos del ex líder “El Chapo” Guzmán –conocido como los Chapitos– y la facción encabezada por Vicente “El Mayo” Zambada. El 26 de julio, las autoridades de EEUU detuvieron en Texas a Zambada y a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del “Chapo” Guzmán. En agosto, ya desde una prisión estadounidense, “El Mayo” acusó a Guzmán López de secuestrarlo y llevárselo de manera forzada a Texas después de haber alcanzado con EEUU un acuerdo sobre beneficios penitenciarios. Poco después, en septiembre, estallaron intensos enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa en varios lugares del estado de Sinaloa (especialmente en su capital, Culiacán), y en estados vecinos como Chihuahua o Sonora, provocando la muerte de más de 650 personas y la desaparición de otras 750 en el último cuatrimestre del año habrían provocado . En cuanto a las dinámicas de violencia en otros estados,

45 Causa en Común, “Galería del Horror: atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, 2024.

46 Estas “atrocidades” se catalogan en una lista de 21 categorías, entre ellas: masacres, asesinatos cometidos con tortura, violación agravada, asesinatos de mujeres con crueldad extrema, de niñas, niños y adolescentes, así como de políticos y autoridades en materia de seguridad.

47 Joel Cano, ”Narcomapa 2024: qué carteles tienen mayor presencia en México”, Infobae, 23 de abril de 2024.

48 ACLED, Mexico's new administration braces for shifting battle lines in the country's gang wars, 12 de diciembre de 2024.

cabe destacar los enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima (SRL) por el robo de combustible en Guanajuato (estado que concentra el 10% de los homicidios); la disputa entre CJNG y el Cártel de Sinaloa por el tráfico de migrantes, drogas y control de la frontera en Chiapas; o el incremento de la violencia en Tabasco por la fragmentación del grupo La Barredora y los crecientes enfrentamientos entre el CJNG y varios grupos locales. Poco después de tomar posesión del cargo en octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su nueva política de seguridad, centrada principalmente en algunos estados –Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa– y focalizada en el fortalecimiento de las policías y fiscalías estatales. En enero de 2025, Sheinbaum informó que en los primeros 100 días de su gobierno la media diaria de homicidios disminuyó en un 16%, atribuyendo tal disminución a su nueva Estrategia de Seguridad.

América del Sur

Bolivia	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La crisis política y social de Bolivia se remonta a la abrupta salida del país del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 –tras la represión de unas protestas antigubernamentales en las que más de 100 personas murieron–, y se prolongó durante los mandatos del expresidente Evo Morales (2006-2019), líder del MAS y primer presidente indígena de la historia del país. En dicho período, algunas de las acciones de Gobierno –como la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos o la aprobación de una nueva Constitución– se vieron obstaculizadas por la férrea oposición y las peticiones de mayor autonomía por parte de partidos políticos e instituciones del departamento de Santa Cruz y otras regiones orientales del país. En paralelo, también se incrementaron la conflictividad social y las movilizaciones vinculadas a demandas laborales sectoriales, la actividad de empresas extractivas o los derechos de los pueblos indígenas. La crisis del país se agudizó nuevamente tras las elecciones generales de octubre de 2019, en las que las acusaciones de fraude al oficialismo derivaron en movilizaciones masivas y, finalmente, en la renuncia a la presidencia y exilio de Evo Morales, que declaró haber sido víctima de un golpe de estado. Tras la presidencia interina de Jeanine Áñez –posteriormente condenada a 10 años de prisión— y la victoria de Luis Arce (MAS) en las elecciones de 2020, se inició un proceso de distanciamiento entre Morales y Arce acerca de la candidatura del MAS para las elecciones de 2025 y otros desacuerdos políticos.

Los dos principales focos de tensión en el país durante el 2024 fueron, por un lado, un presunto **golpe de Estado fallido en junio** –calificado de autogolpe presidencial por parte de algunas voces— y, por otro, las **multitudinarias movilizaciones y protestas** que protagonizaron en el último trimestre del año miles de seguidores del expresidente Evo Morales y del actual mandatario, Luis Arce, ambos con aspiraciones de postularse en nombre del partido gubernamental (MAS) a las elecciones presidenciales de 2025. En cuanto al primer aspecto, el 26 de junio, un grupo de militares liderados por el ex comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga –destituido el día anterior, por considerarse que sus reiteradas opiniones políticas y amenazas suponían una violación de la Constitución–, tomó la principal plaza de la capital (plaza Murillo) y rodeó el Palacio Quemado, sede presidencial, incluso derribando una puerta del edificio con un tanque y adentrándose en el palacio. Durante tales acontecimientos, el general Zúñiga denunció la situación política y económica del país y la existencia de presos políticos, exigió la liberación de los expresidentes Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho y anunció que en breve habría un nuevo gabinete de ministros. En las afueras, unas 10 personas resultaron heridas cuando los militares que controlaban el edificio trataban de dispersar a la multitud que se concentró en las afueras del Palacio en defensa del Gobierno de Luis Arce. Tras algunas horas, las tropas del general Zúñiga se retiraron y, posteriormente, tanto el general como otros 17 soldados fueron detenidos y la Fiscalía General presentó cargos contra Zúñiga por alzamiento armado y terrorismo. Aunque en el interior del Palacio el presidente Arce ordenó a Zúñiga que pusiera fin a la insubordinación y que retirara las tropas, algunas voces señalaron que fue la falta de refuerzos lo que motivó principalmente la decisión de poner fin a la asonada. Tras ser detenido, **Zúñiga declaró que fue el propio presidente Arce quien le ordenó llevar a cabo un autogolpe y sacar los tanques a la calle**. Aunque numerosos gobiernos y organizaciones internacionales denunciaron lo que consideraron un intento golpista, hubo algunos gobiernos y algunos partidos y sectores en la sociedad boliviana –incluyendo partidarios del expresidente Evo Morales– que consideraron que la intentona militar había sido orquestada por Arce para incrementar su popularidad y posicionarse mejor de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

El segundo eje de tensión fueron las **protestas multidinarias y los disturbios y enfrentamientos** que se produjeron desde mediados de septiembre en varias partes del país, y en los que alrededor de **90 personas fueron heridas**. Dichas manifestaciones fueron la culminación del enfrentamiento entre el actual presidente, Luis Arce, y el exmandatario Evo

Morales (2006-19), para liderar la candidatura del MAS en las elecciones presidenciales de 2025. Tal distanciamiento entre los dos representantes políticos, aliados durante mucho tiempo, se agudizó después de que, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional anulara la reelección presidencial indefinida, lo que suponía la inhabilitación de Evo Morales para las mencionadas elecciones de 2025. Tras varios meses de incremento de la tensión entre líderes y facciones distintas el MAS, a mediados de septiembre se inició una marcha (“Marcha para salvar Bolivia”) de miles de personas entre el departamento de Oruro y La Paz y una campaña de cortes de carreteras en todo el país.

Aunque buena parte de las movilizaciones fueron pacíficas, se registraron enfrentamientos y episodios de violencia en las que decenas de personas –incluyendo un elevado número de policías– resultaron heridas. Además, los bloqueos y la situación de inestabilidad agudizaron la situación de precariedad económica y desabastecimiento de productos que ya sufría el país antes del mes de septiembre. Arce acusó a Morales de intentar promover un golpe de Estado para interrumpir su mandato presidencial y de querer imponer por la fuerza su candidatura en los comicios de 2025. Por otra parte, algunos análisis sostienen que una parte de movilizaciones antigubernamentales no estaban solamente relacionadas con la candidatura de Morales a las elecciones presidenciales, sino que guardaban relación con acusaciones de mala gestión gubernamental o cuestiones de tipo económico o social.

La tensión en el país se incrementó notablemente después de que, a mediados de octubre, una fiscal ordenara la **detención de Evo Morales por trata de personas y la violación de una menor –con la que Morales habría tenido un hijo– después de que este no compareciera a declarar en el juzgado**. Morales consideró que tales acusaciones eran mentiras instigadas políticamente. Tras tales sucesos, se incrementaron los bloqueos y enfrentamientos en todo el país, especialmente en el Chapare (departamento de Cochabamba), región en la que Morales se recluyó y esquivó intentos de detención. A finales de octubre, Morales denunció un intento de asesinato por parte de agentes estatales, que habrían disparado contra su convoy en la provincia de Chapare. El Gobierno condenó tal acción, pero a la vez declaró que había sido el convoy de Morales quien había disparado primero en un puesto de control. Más tarde, a principios de noviembre, el Ejecutivo denunció que partidarios de Evo Morales habían atacado a tres unidades militares en el Chapare, reteniendo como rehenes a más de 200 militares y apropiándose de armamento de guerra y municiones. El Ejecutivo desplegó efectivos militares

adicionales en la región para ayudar a la Policía a restaurar el orden y a desmantelar los bloqueos de carreteras. A mediados de noviembre, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral ratificaron definitivamente la inhabilitación de Morales para postularse a los siguientes comicios presidenciales. El mismo día, los aliados de Morales en el Congreso interrumpieron la asamblea nacional, obligando a Arce a pronunciar su discurso anual desde el palacio presidencial. A pesar de las tensiones, a principios de noviembre, algunos de los líderes de las protestas decretaron pausa humanitaria de 72 horas y posteriormente, a mediados de mes, anunciaron que no se llevarían a cabo nuevos bloqueos, aunque reservándose la posibilidad de reanudarlos si Evo Morales era detenido.

Ecuador

Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

Síntesis:

En los últimos años, Ecuador ha experimentado uno de los incrementos de la violencia más pronunciados de toda América Latina. En 2022, el Gobierno sostenía que desde el año 2017 la tasa de homicidios se ha multiplicado casi por cinco, y que más del 80% de los asesinatos en el país están vinculados al narcotráfico. Si bien Ecuador había sido históricamente un lugar de tránsito de drogas ilícitas, algunos análisis sostienen que el país cada vez juega un rol más prominente en la cadena de suministro de drogas a escala internacional, especialmente de cocaína, con una mayor participación en el almacenaje, el procesamiento, la producción y la distribución internacional de estupefacientes, muy principalmente a través de las rutas del Pacífico –la ciudad costeña de Guayaquil concentra casi un porcentaje importante de los homicidios– y de la Amazonía, gracias a su frontera con Brasil. Tal contexto ha dado lugar a un incremento sustancial de los enfrentamientos por el control de lugares y rutas estratégicas entre grupos locales de crimen organizados (como Los Lobos, Los Choneros o Los Lagartos), carteles mexicanos (especialmente el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación), facciones disidentes de las FARC (como el Frente Oliver Sinisterra o la columna Urías Rondón) u organizaciones criminales internacionales.

Ante el incremento de la actividad armadas de las bandas de crimen organizado que operan en el país, a principios de 2024 el Gobierno declaró la existencia de un conflicto armado interno, impuso el estado de emergencia en varias ocasiones durante el año e incrementó la presión militar y policial contra tales

bandas armadas. En 2024 Ecuador tuvo **una de las tasas de homicidios más altas del mundo** y la más alta de América Latina (excluyendo el Caribe) y vivió un incremento en otros tipos de delitos. Según datos oficiales, en 2024 se registraron 6.964 homicidios, con una tasa de 38,8 homicidios cada 100.000 habitantes, muy superior a la de los siguientes países latinoamericanos con mayores tasas de homicidios de la región –como Venezuela (26,2), Colombia (25,4) o Honduras (25,3)–, pero inferior a la de siete países o territorios caribeños –Isla Turcas y Caicos, Haití, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Jamaica. El número de homicidios –así como el de otros indicadores de criminalidad y violencia– creció exponencialmente desde el año 2018 (menos de 1.000 asesinatos) hasta alcanzar un pico histórico en el año 2023 (8.237 homicidios). En los primeros días de 2024, el país registró una oleada de asesinatos (alrededor de 250) y de violencia en el seno de algunas cárceles del país. La situación de inseguridad se agudizó tras la fuga de prisión del Adolfo “Fito” Macías –jefe de la banda Los Choneros, una de las dos principales bandas armadas del país– justo antes de su traslado a una cárcel de alta seguridad. Con motivo del subsiguiente operativo masivo de la Policía y el Ejército para capturarlo y de la declaración del estado de emergencia por 60 días para hacer frente a la situación de violencia y retomar el control militar de las cárceles, numerosas bandas armadas iniciaron una oleada de violencia, saqueos, detonación de explosivos y motines carcelarios –con la toma de casi 200 rehenes– en varias partes del país, especialmente en Quito y Guayaquil. En tales circunstancias, dos de los episodios que provocaron mayor alarma fueron la fuga del líder de la otra gran banda armada del país –Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos– y la irrupción de un grupo de personas armadas en un programa de televisión que se estaba emitiendo en directo. Aunque dicha irrupción se resolvió con una intervención policial en la que 13 miembros de la banda Los Tiguerones fueron detenidos, ese mismo día **Noboa declaró el conflicto armado interno**, anunció la creación del Bloque de Seguridad –una estrategia para centralizar las acciones contra el crimen organizado– y el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir a 22 grupos del crimen organizado, a los que calificó de terroristas y como objetivos militares. **Ante la gravedad la situación, Perú y Colombia reforzaron su presencia de tropas a lo largo de la frontera, mientras que alrededor de 40 países ofrecieron asistencia militar a Ecuador.** Además, en los días siguientes, Quito firmó un acuerdo de cooperación en seguridad con otros miembros de la Comunidad Andina para hacer frente a redes criminales transnacionales. Como parte de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno, en abril se llevó a cabo un

referéndum en el que la mayoría de la población votó a favor de las nueve propuestas del Ejecutivo, como la intensificación de la militarización de la seguridad pública o el endurecimiento de penas para crímenes relacionados con el narcotráfico. En cuanto al alcance territorial de la violencia, las provincias más afectadas fueron Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Sucumbíos, Orellana y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. Ciertos municipios del país alcanzaron algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, como Durán (provincia de Guayas, cerca de Guayaquil), con una tasa de 149 homicidios cada 100.000 habitantes.

El Gobierno declaró en varias ocasiones a lo largo del año que la implementación de su nueva estrategia de seguridad, el incremento de presión policial y militar a la bandas armadas, la mayor cooperación internacional contra el crimen organizado y la utilización de medidas legales extraordinarias –estados de emergencia, toques de queda, militarización de las prisiones, declaración del conflicto armado interno– había logrado sus frutos,

motivando una disminución del 16% en el número de homicidios respecto del 2023.

Sin embargo, algunos análisis sostienen que tal reducción de homicidios se concentró principalmente en febrero (disminución del 63% de casos), inmediatamente después de las medidas adoptadas en enero por el Gobierno, pero que a partir de marzo (532 muertes violentas) volvió a recuperar sus niveles anteriores, incrementándose ligeramente durante el resto del año hasta alcanzar las 688 muertes violentas en diciembre. Además, el número de masacres –asesinato de tres personas en el mismo episodio de violencia– se mantuvo

en niveles muy elevados en 2024. Si bien en 2019 el número de víctimas en tales masacres fue de 17, en 2023 se registraron 223 masacres en las que 834 personas murieron. En 2024 se registró una ligera disminución en el número de masacres (645 personas asesinadas en 175 masacres, hasta principios de diciembre), pero el porcentaje sobre el total de homicidios se incrementó respecto a 2023. Según datos oficiales, en 2024 también se registraron un mayor número de delitos que en 2023. Cabe destacar, por ejemplo, el incremento del 13% en el número de secuestros –el 60% de los cuales se concentró en las provincias de Guayas, Los Ríos y Pichincha– o el aumento de un 11% en los delitos de extorsión, ambas prácticas íntimamente vinculadas a la actividad del crimen organizado, según el Gobierno. Siguiendo una tendencia parecida a la de otros tipos de delitos, la extorsión se ha incrementado en un más de 400% desde el año 2021 en Ecuador. Por otra parte, algunos análisis señalaron que **la intensificación de la respuesta del Estado contra las bandas armadas no solamente no condujo a una reducción significativa de**

Ante la gravedad la situación de seguridad en Ecuador, Perú y Colombia reforzaron su presencia de tropas en la frontera, mientras que alrededor de 40 países ofrecieron asistencia militar a Quito

la situación de inseguridad en el país, sino que también provocó una fragmentación y atomización de los grupos de crimen organizado, así como una diversificación de sus actividades delictivas más allá del narcotráfico. En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, la creciente infiltración y participación de grupos de crimen organizado en la minería informal y la explotación ilegal de oro, un sector que según algunos análisis es lucrativo, permite el blanqueamiento de capitales procedentes de otras actividades ilícitas y presenta menos riesgos de seguridad que el narcotráfico. A modo de ejemplo, solamente en el cantón de Camilo Ponce Enríquez, la banda Los Lobos controla directamente 20 minas, extorsiona a otras 30 empresas mineras y controla a unos 40 grupos de mineros ilegales e informales. Dicha actividad es especialmente importante en regiones como la Amazonía o las provincias de El Oro y Azuay. Finalmente, cabe señalar que, a pesar de que la militarización de la seguridad y de la gestión de las prisiones en particular hizo que se redujera sensiblemente el control y la influencia que algunas bandas ejercían en el sistema penitenciario, en 2024 en las cárceles del país siguieron registrándose numerosos hechos de violencia, como motines, asesinatos de funcionarios –en 2024 tres directores de prisión, entre otros– y enfrentamientos entre bandas –en noviembre, por ejemplo, 17 personas murieron y otras 14 resultaron heridas en uno de dichos enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral, la mayor del país. Entre 2021 y 2023, por ejemplo, más de 500 personas fueron asesinadas en las cárceles del país.

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La crisis multidimensional –política, social, institucional y humanitaria– que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó la muerte de Chávez en 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente, Nicolás Maduro. Algunos de los aspectos más destacados de la crisis de las últimas décadas son el incremento de la polarización social y de las movilizaciones masivas y sostenidas de sectores significativos de la población; la parálisis institucional en determinados momentos –especialmente tras el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas del 2015–; el incremento de la inseguridad ciudadana –hasta el punto de convertirse en uno de los países de América Latina con mayores tasas de homicidios—o la crisis económica y de escasez de alimentos y productos básicos, que se aceleró con la caída del precio internacional del petróleo a partir del año 2015. A pesar de que el oficialismo ha ganado todas las elecciones que se han celebrado desde finales de los años 90 –excepto las

legislativas de 2015–, sectores de la oposición y determinados gobiernos y organismos internacionales consideran que el país se halla en una situación de deriva autoritaria, acusando al Gobierno de fraude electoral recurrente, control de los tres poderes del estado, cierre del espacio cívico, violaciones de los derechos humanos y uso sistemático de la represión para hacer frente a las expresiones de descontento y oposición al gobierno. Como consecuencia directa o indirecta de tales circunstancias, Naciones Unidas estima que Venezuela es uno de los países del mundo del que han salido un mayor número de personas (7,7 millones de personas a mediados de 2024).

Tras las elecciones presidenciales de finales de julio, Venezuela vivió uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años, con protestas masivas y denuncias de represión y violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Además, Venezuela siguió registrando altos niveles de homicidios y conflictividad social. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se registraron 5.226 manifestaciones en 2024. Aunque hubo una reducción respecto del año anterior (6.956 manifestaciones), las movilizaciones de 2024 estuvieron mucho más vinculadas que en años precedentes a reivindicaciones y derechos de carácter político. En cuanto a los niveles de violencia, el Gobierno declaró que la tasa de homicidios en 2024 (4,1 cada 100.000 habitantes) era una de las más bajas del continente y estaba en sintonía con la tendencia a la reducción en los homicidios que se observa en Venezuela desde 2016, año en el que dicha tasa fue de 56. Sin embargo, otras fuentes consideran que el número de homicidios en el país es muy superior al que reflejan las cifras oficiales. Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), utilizados por otros centros de investigación en la materia, **la tasa de homicidios de Venezuela en 2024 fue de 26,2, ligeramente inferior a la de 2023 (26,8), pero la segunda mayor de América Latina (sin incluir al Caribe)**, solamente por detrás de Ecuador. Aunque el Gobierno considera que la reducción en los índices de criminalidad está relacionada con las políticas públicas en seguridad ciudadana, otras fuentes consideran que en los últimos tiempos se observa un traslado de grupos de crimen organizado a otros países –como Colombia, por ejemplo– por un cierto agotamiento de las economías ilícitas en el país. Además, otros análisis consideran que la consolidación de algunos grupos alineados o vinculados con el Gobierno podría haber motivado una cierta reducción en la necesidad de utilizar la violencia a gran escala para competir por territorios o actividades lucrativas.

Por otra parte, 2024 fue uno de los años de mayor tensión política de los últimos tiempos. **27 personas murieron, unas 200 resultaron heridas y más de 2.400 fueron detenidas en el marco de las protestas masivas que se produjeron en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó como vencedor a Nicolás Maduro** (52% de los votos) frente al principal candidato

oppositor, Edmundo González (43%), decisión que fue ratificada a finales de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia. La líder de la oposición, **María Corina Machado**, que no pudo concurrir a los comicios por estar inhabilitada, denunció un fraude masivo en las elecciones y declaró que González había ganado las elecciones claramente, imponiéndose en todos los estados del país. A principios de agosto, la oposición publicó las actas electorales escaneadas del 83,5% de las mesas de votación, pero el Gobierno declaró que estas eran falsas y que el hecho de hacer públicas las actas usurpaba las funciones de las autoridades electorales. Tras las elecciones, el Centro Carter, que había enviado una misión de observación invitada por el Gobierno, declaró que las elecciones no habían cumplido con los estándares internacionales de credibilidad y que no podían ser consideradas democráticas. En la misma línea, el informe provisional del Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas señaló, entre otras cuestiones, que las elecciones carecieron de las medidas básicas de transparencia e integridad para poder considerarlas creíbles. Asimismo, a principios de agosto, declaró que la falta de publicación de resultados por parte de las autoridades no tenía precedentes en la celebración de elecciones democráticas contemporáneas. De igual modo, numerosos gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales, como Naciones Unidas, la OEA o la UE, pusieron en duda la veracidad de los resultados e instaron a las autoridades a que publicaran las actas electorales de cada mesa de votación. A finales de septiembre, durante la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, más de 30 países firmaron una declaración en la que afirmaban que González logró la mayoría de los votos según los datos disponibles, aunque sin llegar a reconocerlo como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, en noviembre, **el Gobierno de EEUU reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela**. Posteriormente, otros países de la región hicieron lo propio y, además, suspendieron contactos diplomáticos con Caracas, como Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Panamá o Costa Rica.

Caracas rechazó todas las peticiones de publicación de resultados y llamó a consultas a los embajadores de varios países latinoamericanos que habían pedido mayor transparencia. Además, el propio Maduro acusó a la oposición, en particular a Machado y González, de ser los artífices de un intento de golpe de Estado y pidió penas de prisión para ambos. El Gobierno venezolano tampoco aceptó ninguna de las propuestas de los países que intentaron impulsar una solución negociada a la crisis (Brasil, Colombia y México), como una repetición electoral (previo establecimiento de un consejo electoral con participación de la oposición) o la conformación de un gobierno de coalición. La Fiscalía

abrió una investigación contra miembros de la oposición por la publicación de datos del recuento, acusándoles de delitos como falsedad documental e instigación a la desobediencia. A principios de septiembre, **el Gobierno español concedió asilo político a Edmundo González**, que previamente había permanecido unos días en la embajada holandesa en Caracas y en la residencia del embajador español. Machado denunció que González había sufrido un terrible hostigamiento y amenazas a su vida. Además, durante una intervención virtual en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrada a finales de septiembre, Machado denunció que todas las personas que tuvieron responsabilidad directa en el cuestionamiento de los resultados electorales se hallaban en la clandestinidad, el exilio o la cárcel. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, que conversó directamente

con Nicolás Maduro sobre la situación política del país, ofreció la mediación y buenos oficios de la organización, siempre y cuando las partes lo acordaran y lo pidieran. De igual modo, Guterres expresó su preocupación, tanto por los resultados de los comicios como por los informes de violencia poselectoral y violaciones de derechos humanos. Entre ellos, cabe destacar el informe que presentó a mediados de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Dicha misión, impulsada por Naciones Unidas, denunció un elevado riesgo de desintegración del

Estado, señaló que la represión contra los opositores alcanzó niveles sin precedentes y denunció que la comisión de violaciones de derechos humanos podría constituir crímenes de lesa humanidad. Entre las violaciones que se han podido documentar se encuentra la muerte de personas que participaban en protestas, detenciones arbitrarias y violaciones graves de los procesos judiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. **La misión de la ONU documentó como mínimo 25 muertes por la represión policial en las protestas antigubernamentales**, aunque la Fiscalía General consideró que la oposición es la principal responsable de dichas muertes. El informe de Naciones Unidas describe una estructura represiva del Estado que involucra a varios actores, como el propio presidente Maduro, las fuerzas de seguridad del Estado, las autoridades judiciales, la autoridad electoral e incluso la Asamblea Nacional. Por su parte, en agosto la **Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó prácticas que tildó de terrorismo de Estado**, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política. En esta misma línea, en marzo la Corte Penal Internacional (CPI) había decidido por unanimidad rechazar el recurso de apelación del Gobierno venezolano para detener el proceso de investigación sobre la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad –que incluyen detenciones arbitrarias,

En Venezuela, tras la proclamación de Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones de julio, se produjeron protestas masivas en las que 27 personas murieron, unas 200 resultaron heridas y más de 2.400 fueron detenidas

torturas o desapariciones forzadas—durante las protestas antigubernamentales en 2017, convirtiéndose así en el primer país de América Latina en el que la CPI iniciaba una investigación formal. Finalmente, cabe destacar que en diciembre el Gobierno anunció la liberación de cientos de personas arrestadas durante los disturbios posteriores a las elecciones de julio, aunque varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las fuerzas de seguridad seguían deteniendo a activistas de la oposición.

Venezuela – Guyana	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Venezuela, Guyana

Síntesis:

La tensión entre Venezuela y Guyana por la Guayana Esequiba (o Esequibo) —un territorio de casi 160.000 km² rico en minerales y otros recursos naturales, controlado y administrado formalmente por Guyana—se remonta la falta de acuerdo a finales del siglo XIX sobre la delimitación fronteriza entre Venezuela y el Imperio Británico. Mientras que Guyana, ex colonia británica, sostiene que el un Laudo Arbitral emitido en París en 1899 adjudicó el territorio en disputa al Imperio Británico, Venezuela no reconoció tal fallo y sustenta su posición en Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela y Reino Unido (en consulta con el Gobierno de Guyana, que obtuvo la independencia de Reino Unido ese mismo año), por el que las partes se comprometían a resolver el contencioso mediante negociaciones amistosas. La tensión se incrementó significativamente después de que en 2020 la Corte Internacional de Justicia se declarara competente para resolver y dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión —y Venezuela rechazara la jurisdicción de la CIJ en la materia—, de que Guyana concediera a varias empresas la exploración de yacimientos de hidrocarburos en aguas en disputa con Venezuela y de que, en diciembre de 2023, Caracas un referéndum sobre la soberanía del Esequibo.

En paralelo a la falta de avances en el proceso de resolución del contencioso histórico entre Guyana y Venezuela, durante el año se mantuvo una elevada tensión entre los dos países vinculada a las maniobras y alianzas militares respecto del Esequibo y a la ley aprobada por Venezuela en el mes de abril que declara al Esequibo como un nuevo estado venezolano. En cuanto a la tensión militar en la región, a pesar de que esta se redujo temporalmente tras la cumbre presidencial del 14 de diciembre de 2023, **a finales de diciembre de ese mismo año Venezuela lanzó una operación militar de envergadura considerable** (más de 5.600 efectivos militares, 28 aeronaves y 16 embarcaciones) frente a las costas del Esequibo, en el límite de las aguas

en disputa entre Guyana y Venezuela, en respuesta a la llegada a Guyana de un buque británico. Ambas partes se acusaron mutuamente de violar de manera flagrante la Declaración de Argyle firmada a mediados de diciembre, en la que, entre otras cuestiones, Guyana y Venezuela se comprometieron a no amenazarse ni utilizar la fuerza mutuamente; a abstenerse, de palabra o de hecho, de intensificar el conflicto y a cooperar para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones entre ellos. Posteriormente, a principios de abril, la tensión política y diplomática entre ambos países se incrementó después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. Entre otras cuestiones, **dicha ley declara al Esequibo como el estado número 24 del país, faculta al presidente para prohibir la firma de contratos con empresas que operan en el Esequibo o prohíbe mapas o documentación que no reconozcan la soberanía de Venezuela sobre dicha región.** Con motivo de la aprobación de dicha ley, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó al presidente de Guyana, Irfaan Ali, de ser un títere de la empresa petrolera estadounidense ExxonMobile, el Imperio Británico y el Comando Sur de los EEUU. En este sentido, Maduro declaró que los servicios de inteligencia venezolanos habían identificado la instalación de 26 bases secretas en el Esequibo (12 de la CIA y 14 del Comando Sur) con el objetivo de preparar acciones beligerantes contra Venezuela. Por su parte, el Gobierno de Guyana rechazó las acusaciones de instalación de bases secretas en su territorio nacional, declaró que la ley aprobada por el Parlamento venezolano implicaba la anexión de dos terceras partes de su territorio y advirtió que no toleraría la anexión, toma u ocupación de cualquier parte del Esequibo. Además, el Gobierno declaró que tal ley suponía no solamente una violación de la Declaración de Argyle, sino de los principios más fundamentales del derecho internacional y que, por tanto, buscaría el amparo de CARICOM, la Unión Parlamentaria Internacional y Naciones Unidas. En este sentido, tras recibir una carta del presidente de Guyana solicitando

una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, el 9 de abril este celebró una reunión a puerta cerrada sobre dicha disputa bajo el título de Amenazas a la paz y seguridad internacionales. El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, presente en la reunión, descartó cualquier intento de ocupación territorial, mientras que el Gobierno de Guyana declaró que el Consejo de Seguridad había enfatizado la importancia del respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que declara al Esequibo como el estado número 24 del país y faculta al presidente para prohibir la firma de contratos con empresas que operan en el Esequibo

En el plano militar, uno de los momentos de mayor tensión en todo el año se produjo en mayo, cuando **el Gobierno venezolano llevó a cabo un despliegue operacional terrestre, aéreo y naval en el llamado Frente Atlántico Esequibo como**

respuesta al sobrevuelo de dos aviones estadounidenses sobre Guyana y su capital, Georgetown. Según Maduro, la operación de ambos cazas desde del portaviones George Washington estaba plenamente coordinada y aprobada por el Gobierno guyanés. Caracas también señaló que su sistema de defensa aérea permanecía activo y en alerta ante cualquier intento de violación del espacio geográfico venezolano, incluyendo el Esequibo. A mediados de mayo el Gobierno de Guyana elevó su nivel de alerta después de denunciar un despliegue militar de Venezuela en su frontera común y una acumulación de tropas y equipamiento bélico en la isla de Ankoko y en la región fronteriza de Puerto Barima. Por su parte, dirigentes de la oposición venezolana expresaron sus temores de que Maduro pudiera utilizar cualquier altercado relacionado con el contencioso territorial con Guyana para suspender las elecciones presidenciales previstas para finales de julio, en las que según algunas encuestas Maduro podría ser derrotado. Previamente, en febrero, un conocido *think tank* estadounidense (el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales) publicó imágenes por satélite que sugerían que Caracas estaba ampliando sus bases militares en ambas zonas. En la misma línea, a finales de diciembre el Gobierno de Guyana protestó formalmente –y llamó a consultas al embajador venezolano– tras la finalización de un puente que conecta el territorio continental de Venezuela con una base militar de la isla Ankoko que según Guyana había sido construida ilegalmente. A principios de enero de 2025 la tensión entre ambos países volvió a escalar tras anunciar Maduro su intención de elegir, en los comicios regionales de mayo 2025, al primer gobernador de la Guayana Esequiba.

2.3.3 Asia y el Pacífico

2.3.3.1 Asia

Asia Meridional

Afganistán - Pakistán

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Afganistán, Pakistán

Síntesis:

Las relaciones entre Afganistán y Pakistán se han caracterizado históricamente por la complejidad y las disputas en torno a la demarcación fronteriza establecida durante la colonización británica de Pakistán y conocida como Línea de Durand y que dividió a la población pashtún a los dos lados de la frontera. En 1996 se estableció en Afganistán el Emirato Islámico, gobernado por los talibanes, movimiento religioso y militar conformado en 1994 por hombres que se habían formado en escuelas religiosas en Pakistán e impulsado por los servicios secretos de este país.

Pakistán fue uno de los pocos países en reconocer al Gobierno talibán de Afganistán. Tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001 y la caída del régimen talibán, Pakistán se alineó junto al Gobierno de EEUU, aunque los talibanes continuaron recibiendo apoyo pakistaní y establecieron importantes bases operativas en Pakistán. Si bien Pakistán siempre negó de manera oficial haber ayudado a los talibanes, sectores del Gobierno, los servicios secretos y de las Fuerzas Armadas prestaron apoyo logístico, militar y político a los talibanes durante las dos décadas de conflicto armado y presencia militar extranjera en Afganistán. Con el retorno de los talibanes al poder en Afganistán en 2021, el Gobierno de Pakistán presionó al nuevo Ejecutivo afgano para que ejerciera un control sobre la insurgencia talibán pakistaní –el grupo armado TTP. A su vez el Gobierno talibán afgano trató de mediar entre el Gobierno pakistaní y el TTP, pero tras el fracaso de las negociaciones, se incrementó la tensión entre Afganistán y Pakistán.

La tensión entre Afganistán y Pakistán se deterioró de forma considerable durante el año con diferentes episodios de violencia en la frontera entre ambos países que fueron escalando a lo largo del año. El incremento de la tensión se había originado en 2023, tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno de Pakistán y la insurgencia talibán pakistaní, así como el retorno forzado a Afganistán de centenares de miles de personas. La toma del poder por los talibanes en Afganistán en 2021 llevó a un fortalecimiento a su vez de la insurgencia talibán pakistaní y a las acusaciones por parte de Pakistán de que el nuevo Gobierno afgano estaba dando apoyo a esta oposición armada. Si bien ambos Gobiernos mantuvieron contactos durante todo el año encaminados a una mejora de las relaciones bilaterales, estos diálogos no fueron suficientes y la tensión fue escalando a lo largo del año. La entrada en territorio pakistaní de insurgentes procedentes de Afganistán estuvo detrás del deterioro de las relaciones entre ambos países, así como de diferentes episodios de violencia que involucraron a las fuerzas de seguridad afganas y pakistaníes. De hecho, durante el año se produjeron dos bombardeos aéreos de las Fuerzas Armadas pakistaníes en territorio afgano, marcando un incremento de la violencia.

En marzo se produjo un primer episodio de violencia que apuntó el inicio de la escalada y el deterioro de la relación entre los dos países. Un atentado del grupo armado TTP, con la explosión de un vehículo en un puesto de control militar en Waziristán Norte, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. A la explosión del vehículo le siguió el estallido de varias bombas, una de ellas detonada por un atacante suicida, lo que ocasionó la muerte de siete miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Tras el atentado múltiple se inició una operación militar en la que murieron seis insurgentes. Dos días después del atentado, las fuerzas de seguridad pakistaníes llevaron a cabo ataques aéreos contra territorio afgano, señalando que el ataque, que había sido reivindicado por el TTP, se había perpetrado desde suelo afgano. Los ataques aéreos estuvieron dirigidos contra supuestas bases del

TPP en las provincias de Paktika y Khost. En respuesta a las acciones militares pakistaníes en territorio afgano el Gobierno de Kabul respondió con bombardeos en el distrito pakistaní de Kurram, causando la muerte de un militar de Pakistán. Estas acciones armadas provocaron un incremento de la tensión entre ambos Gobiernos y en los siguientes meses persistió el cruce de acusaciones. El Gobierno pakistaní reclamó al afgano una acción más contundente para poner fin a la acción del TPP desde territorio afgano, mientras en paralelo incrementaba las operaciones de seguridad en su propio territorio en medio de una escalada de la violencia.⁴⁹ En agosto un soldado murió en enfrentamientos con fuerzas afganas en una zona fronteriza en la provincia de Baluchistán. El soldado habría muerto después de que tras aproximarse a la frontera en la zona de Noshki para llevar a cabo una reparación en la valla que separa ambos países fuera tiroteado por fuerzas de seguridad afganas. **En diciembre se produjo la mayor escalada de violencia**, con varios ataques pakistaníes en territorio afgano, dirigidos contra integrantes del TPP pero que, según diferentes fuentes, incluyendo Naciones Unidas, causaron decenas de víctimas mortales civiles. Después de varias acciones del TPP en Pakistán, que causaron la muerte de 16 soldados pakistaníes, las fuerzas de seguridad de Pakistán lanzaron varios ataques aéreos contra la provincia afgana de Paktia contra supuestas bases del TPP. Como consecuencia de estos bombardeos murieron al menos 46 civiles. Además, el Gobierno pakistaní afirmó que había dado muerte a varios líderes insurgentes. En respuesta a estas acciones pakistaníes, Afganistán llevó a cabo una respuesta militar que causó la muerte de un soldado pakistaní. Por su parte, el Gobierno talibán afirmó haber atacado bases del ISIS-KP en suelo pakistaní, acciones que fueron respondidas por las fuerzas de seguridad pakistaníes, causando a su vez la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad talibán afganas. De hecho, algunos análisis apuntaron que una de las razones por las que el Gobierno talibán no estaba actuando contra la presencia del TPP en territorio afgano –además de los vínculos históricos entre los talibanes a ambos lados de la frontera– sería el temor a que divisiones internas en las filas talibanes pudieran llevar a un fortalecimiento del ISIS-KP.

Bangladesh

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami)

Síntesis:

Desde la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971 tras su secesión de Pakistán en un conflicto armado que ocasionó tres millones de muertes, el país ha vivido una complicada situación política. Las elecciones de 1991 dieron paso a la democracia tras una sucesión de gobiernos militares autoritarios que dominaron el país desde la independencia. Los dos principales partidos, Bangladesh National Party (BNP) y Awami League (AL), se han sucedido desde entonces en el poder después de diferentes elecciones, siempre contestadas por la formación perdedora, dando lugar a gobiernos que no han dado respuesta a los principales retos del país como la pobreza, la corrupción o la baja calidad de la democracia, y que han respondido a intereses partidistas. En 2008, la AL accedió al poder después de un periodo de dos años dominado por un Gobierno interino militar que trató sin éxito de poner fin a la crisis política que había sumido al país en una situación de violencia en los meses previos y que llevó incluso al encarcelamiento de los líderes de los dos partidos. La convocatoria de elecciones para 2014 en un contexto político muy frágil y con una fuerte oposición del BNP a las reformas emprendidas por la AL, como la eliminación del Gobierno interino para supervisar los procesos electorales, derivaron en una grave y violenta crisis política durante el año 2013. En paralelo, el establecimiento en 2010 de un Tribunal para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971, instrumentalizado por el Ejecutivo para acabar con la oposición islamista, en particular el partido Jamaat-e-Islami, agravó la situación en el país. Las elecciones de 2018, con la victoria de AL, fueron un nuevo episodio de tensión y violencia con acusaciones de fraude y la encarcelación por corrupción de Khaleda Zia, líder del BNP y antigua primera ministra. En los años posteriores persistieron las tensiones políticas que escalaron hasta las masivas protestas sociales de 2024 que desembocaron en la formación de un Gobierno interino.

Bangladesh atravesó un año de profundos cambios políticos en el país, como consecuencia de la grave crisis política que llevó a la dimisión de la primera ministra tras las masivas protestas ciudadanas y la conformación de un nuevo Gobierno interino. En agosto, la primera ministra y líder del partido Awami League (AL), Sheik Hasina, se vio forzada a dimitir después de 20 años en el cargo, tras semanas de intensas protestas sociales. La represión policial derivó en **enfrentamientos violentos entre Policía y manifestantes en los que podrían haber muerto 1.400 personas**, según estimaciones de Naciones Unidas.⁵⁰ Las protestas se iniciaron como consecuencia del rechazo de los estudiantes a la reinstauración por parte de la Corte Suprema del país de un sistema de cuotas que reservaba un 30% de los puestos de funcionariado para descendientes de los participantes en la Guerra de Liberación de Bangladesh, que finalizó con la independencia del país de Pakistán en 1971. El importante crecimiento económico resultante de la expansión de la industria textil bangladesí –uno de los principales abastecedores del mercado textil internacional– no ha derivado en

49 Véase el resumen sobre Pakistán en el capítulo 1 (Conflictos armados).

50 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), [Fact-Finding Report Human Rights Violations and Abuses related to the Protests of July and August 2024 in Bangladesh](#), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), febrero de 2025.

una mejora del mercado laboral para los estudiantes universitarios, puesto que las trabajadoras de esta industria son fundamentalmente mujeres con sueldos muy reducidos y condiciones de trabajo muy precarias. Así pues, las organizaciones de estudiantes reclamaron la eliminación de la cuota y las protestas fueron en aumento ante el desprecio de la primera ministra por el movimiento estudiantil – que llegó a calificar a los estudiantes de ser los descendientes de los colaboracionistas con Pakistán durante el proceso de independencia–, ataques violentos por parte de organizaciones próximas al Gobierno y el cierre de todos los centros educativos. La muerte de 20 estudiantes el 18 de julio como consecuencia de la represión policial de las protestas llevó a que finalmente se iniciaran negociaciones con el Gobierno el 19 de julio y a que dos días después la Corte Suprema redujera la cuota al 7%. Sin embargo, las protestas persistieron y fueron aumentando con la participación de otros sectores de la sociedad civil. A principios de agosto se reanudaron los enfrentamientos entre Policía y manifestantes y el 3 de agosto el movimiento estudiantil señaló que su única demanda era la dimisión de la primera ministra Hasina. Las manifestaciones congregaron a cientos de miles de personas en la capital el 5 de agosto, en la conocida como “marcha a Dhaka”. El jefe de las Fuerzas Armadas se negó a actuar contra los manifestantes con más contundencia, forzando la dimisión y posterior abandono del país por parte de Hasina, que se refugió en la India.

Tras la marcha de Hasina se llevó a cabo la disolución del Parlamento por parte del presidente, Muhammad Shahabuddin Chuppu. Finalmente, y fruto de las negociaciones entre el presidente, las Fuerzas Armadas y representantes estudiantiles, se logró un acuerdo para la formación de un Gobierno interino encabezado por el economista y Premio Nobel, Muhammad Yunus, que debía liderar el país hasta la celebración de elecciones, que según la Constitución deberían tener lugar 90 días después de la disolución del Parlamento. Tras su nombramiento, el Ejecutivo –que incluyó en sus cargos a algunos representantes estudiantiles– se comprometió con una agenda de reformas económicas, electorales judiciales y mediáticas, aunque limitada por el mandato interino. Así, se sustituyó a los jefes de la Corte Suprema y del Banco de Bangladesh y el país se adhirió a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. No obstante, la tensión política y las protestas, aunque de menor intensidad, persistieron tras el nombramiento del nuevo Gobierno y al finalizar el año muchas instituciones educativas no habían recuperado aún el funcionamiento normal debido a la destitución de las direcciones. La oposición exigió un calendario electoral

y el jefe de las Fuerzas Armadas señaló que respaldaban al Gobierno interino y se mantendrían al margen de la política, apuntando a un periodo de transición de 18 meses.

En octubre, el nuevo Gobierno dio comienzo a un proceso de diálogo con los principales partidos a excepción de la AL para pactar las reformas electorales necesarias y finalmente, en diciembre el primer ministro interino, Muhammed Yunus, presentó un calendario electoral tentativo, señalando que los comicios tendrían lugar entre diciembre de 2025 y junio de 2026. En paralelo, en los meses siguientes a la conformación del Gobierno interino se produjeron detenciones de miembros del Gobierno de Hasina, incluyendo varios antiguos ministros. Asimismo, Hasina fue acusada junto a su familia de haberse apropiado de 5.000 millones de dólares destinados a infraestructuras, así como de desapariciones y tortura sistemática en centros de detención secretos, por lo que el Gobierno inició el proceso para pedir su extradición a la India.

India (Manipur)

Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)

Síntesis:

La tensión que enfrenta al Gobierno con los diferentes grupos armados que operan en el estado de Manipur y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgieron varios grupos armados, algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, que permanecerán activos a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcó el desarrollo de la conflictividad en Manipur, y fueron constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El empobrecimiento económico del estado y el aislamiento con respecto al resto del país han contribuido decisivamente a consolidar un sentimiento de agravio en la población de Manipur. Si bien en los últimos años se produjo una progresiva reducción de la violencia armada, en 2023 escaló gravemente la tensión, con enfrentamientos intercomunitarios entre población meitei y kuki que ocasionaron la muerte a más de 170 personas.

Durante todo el año persistió la tensión y la violencia en el estado indio de Manipur, en la región del nordeste del país. No obstante, el número de víctimas mortales como consecuencia de la violencia intercomunitaria y

de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos insurgentes activos en el estado se redujo considerablemente con respecto al año anterior. El South Asia Terrorism Portal (SATP)⁵¹ registró que durante el año 2024 murieron 87 personas como consecuencia de los diferentes episodios de violencia, frente a las 157 muertes registradas en 2023, año en el que se produjo una importante escalada de la tensión entre las comunidades meitei y kuki-zo. En mayo, coincidiendo con el primer año desde el inicio de la escalada de la violencia que tuvo lugar en 2023, International Crisis Group⁵² señaló que 67.000 personas habían resultado desplazadas a causa de la violencia y más de 220 habían muerto. Durante todo el año se produjeron enfrentamientos y tiroteos por parte de grupos de hombres armados de ambas comunidades que causaron decenas de víctimas mortales. También fueron objeto de ataques algunas comisarías de policía que fueron incendiadas o tiroteadas. Como consecuencia de la violencia y la inseguridad, las elecciones generales indias en abril se vieron seriamente afectadas en el estado y varios colegios electorales tuvieron que anular la votación. Como sucedió durante 2023 y en otras fases del conflicto, se repitieron los incidentes de violencia dirigidos específicamente contra las mujeres y estos incidentes a su vez incrementaron la tensión entre las comunidades meitei y kuki-zo. Así, 75 mujeres meitei fueron secuestradas por insurgentes kuki en mayo. En noviembre, insurgentes meitei tirotearon y violaron a una mujer kuki e incendiaron numerosas casas en una población kuki. Este ataque dio lugar a que insurgentes kuki mataran a una mujer en respuesta y a que las fuerzas de seguridad iniciaran una operación en la que murieron 11 insurgentes kuki, en el que habría sido el episodio de mayor violencia desde el inicio de la escalada en mayo de 2023. Por otra parte, desde octubre la violencia se extendió al distrito de Jiribam, habitado tanto por población kuki como meitei y que hasta el momento había permanecido al margen de las tensiones. Desde el inicio de la violencia en 2023 se ha incrementado notablemente la segregación de la población y se han reducido enormemente las zonas en las que conviven la población meitei y la kuki. Tras los incidentes de violencia de noviembre se produjo el despliegue adicional en el estado de 5.000 miembros de las fuerzas de seguridad y volvió a instaurarse la legislación antiterrorista conocida como Armed Forces Special Powers Act, que otorga amplios poderes a las fuerzas de seguridad y que ha sido persistentemente criticada por las organizaciones de derechos humanos por las graves violaciones que ha amparado, como la ejecución de población civil acusada de insurgencia o detenciones arbitrarias y torturas.

Asia Oriental

China – Filipinas

Intensidad: 3

Evolución: =

Tipología: Territorio, Recursos Internacionales

Actores: China, Filipinas, EEUU

Síntesis:

En el marco del conflicto entre varios estados por reclamos marítimos y territoriales en el Mar de la China Meridional, una de las disputas que en los últimos años ha tenido mayores implicaciones militares, políticas y diplomáticas ha sido el contencioso de soberanía entre China y Filipinas en el Mar Occidental de Filipinas, referido a aquellas partes del Mar de China Meridional que se hallan dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. En concreto, la mayor parte de colisiones e incidentes se han producido alrededor de dos formaciones terrestres que se hallan en dicho mar: el atolón Scarborough –ocupado por China desde 2012, tras un incidente naval entre ambos países— y el banco de arena Second Thomas Shoal (Ayungin en tagalo y Renai en chino), en el que Filipinas mantiene tropas permanentemente a bordo de un barco varado para garantizar su control. Ante el incremento de las acciones de intimidación de China, Filipinas elevó el contencioso al tribunal de arbitraje de la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que en 2016 dictaminó que no existía base legal para que China apele a derechos históricos dentro de la “línea de los diez puntos” —que abarca aproximadamente el 90% del Mar de la China Meridional— y señaló que China había violado los derechos de soberanía de Filipinas con respecto a su zona económica exclusiva. Sin embargo, China no reconoce la validez del fallo. Por otra parte, en varias ocasiones EEUU ha advertido a China sobre sus obligaciones militares hacia Filipinas en virtud del tratado bilateral de defensa mutua de 1951.

En 2024, se mantuvo la tensión militar y diplomática entre ambos países por el incremento de las acciones de coerción por parte de China en el Mar de Filipinas Occidental –que desembocaron en algunos incidentes marítimos y aéreos de gravedad–, y por la aplicación por parte del Gobierno filipino de una nueva estrategia de defensa más assertiva, que incluye una modernización de sus capacidades militares y una mayor cooperación en materia de defensa con algunos países. En cuanto al primer aspecto, en **2024 Beijing incrementó sustancialmente el envío de buques de la Armada, la Guardia Costera y la Milicia Marítima al Mar de Filipinas Occidental.**⁵³ Los tres puntos de dicha región que concentraron mayor número de incidentes fueron Second Thomas Shoal, Sabina Shoal y Scarborough Shoal. En Second Thomas Shoal⁵⁴ durante la primera mitad del año se registraron numerosos incidentes

51 SATP, *Manipur datasheet*, [consultado el 20 de marzo de 2025].

52 International Crisis Group, *India May 2024*, Crisiswatch, mayo de 2024.

53 Denominación oficial por parte de Manila de las partes del Mar de China Meridional dentro de la Zona Económica Exclusiva de Filipinas.

54 También conocido como Ayungin en tagalo y Renai en chino, pertenece al grupo de las Islas Spratly y se encuentra a unas 100 millas náuticas de la isla de Palawan, Filipinas.

marítimos entre guardacostas y navíos de la milicia marítima china y buques filipinos en misiones de rotación y reabastecimiento del barco BRP Sierra Madre, una nave de la Segunda Guerra Mundial varada desde 1999 para garantizar su control. Las acciones de intimidación por parte de China incluyeron maniobras peligrosas, embestidas deliberadas y el uso de cañones de agua de alta potencia. **La tensión entre China y Filipinas se incrementó drásticamente a mediados de junio después de que, según el Gobierno filipino, barcos de la Guardia Costera china embistieran a varios buques de la marina filipina** y marineros chinos –armados con hachas y cuchillos– abordaran el bote y agredieran a los tripulantes filipinos, destrozaran su equipo de comunicación, confiscaran sus armas y perforaran el casco. En dicho incidente, calificado por parte de Manila como el más agresivo de la historia reciente por parte de la Guardia Costera china, ocho miembros de la tripulación fueron heridos, cuatro embarcaciones resultaron dañadas, y otra fue remolcada forzosamente. Poco antes, a mediados de mayo, Beijing había aprobado una nueva regulación que permitía a sus guardacostas interceptar y detener a embarcaciones y tripulaciones extranjeras sospechosas de adentrarse en “aguas bajo jurisdicción china”.⁵⁵ Tras el incidente, el Gobierno chino declaró que habían sido los buques filipinos en misión de reabastecimiento los que habían impactado deliberadamente con los barcos chinos. Por su parte, **Manila descartó explícitamente calificar el incidente como un ataque armado –evitando así la activación del tratado de defensa mutua de 1951 con EEUU–, pero sí planteó revisar el Artículo 4 de dicho tratado a fin de definir mejor el concepto de “ataque armado”.** EEUU ofreció en varias ocasiones ayudar en el reabastecimiento de Second Thomas, pero Manila declinó la oferta, afirmando que agotaría todos los medios antes de buscar una intervención extranjera. En varias ocasiones en los últimos años, tanto Filipinas como EEUU han mencionado la vigencia de dicho tratado en referencia a las acciones de Beijing en el Mar de la China Meridional, que consideran tienen por objetivo alterar el estatus quo a través de la coerción e intimidación. Tras el mencionado incidente, China y Filipinas se reunieron en varias ocasiones y lograron un acuerdo –no público– para establecer una línea directa y para evitar incidentes similares. En la segunda mitad

del año, Filipinas pudo llevar a cabo sus misiones de reabastecimiento del BRP Sierra Madre.

El segundo escenario de fricciones militares se produjo en el atolón Sabina.⁵⁶ En abril Manila acusó a China de estar construyendo una isla artificial en el atolón Sabina con el objetivo de impedir que Filipinas extraiga gas en Reed Bank⁵⁷ y también de bloquear las misiones de reabastecimiento en el atolón Second Thomas. En respuesta, Manila desplegó varios buques –incluyendo el de mayor tamaño, el BRP Teresa Magbanua– en las aguas en torno a Sabina para evitar las “actividades ilegales” de China, mientras que China envió a decenas de buques cerca de la costa de Palawan (Filipinas). En agosto, en distintos incidentes aislados, buques guardacostas chinos embistieron y dañaron gravemente a patrulleras filipinas y bloquearon

misiones de reabastecimiento, obligando a Filipinas a utilizar helicópteros para hacer llegar suministros y, posteriormente, ya en septiembre, forzando al BRP Teresa Magbanua a retirarse del atolón Sabina por imperfectos en el casco, tripulación enferma y falta de víveres. Ello abrió la puerta a la **dominación de facto del atolón Sabina por parte de China** y generó críticas a Manila por haber cedido parte del territorio nacional. El tercer escenario de conflicto fue el banco de arena Scarborough

Shoal.⁵⁸ En mayo, por ejemplo, la Guardia Costera china dañó con cañones de agua a dos barcos filipinos que se dirigían a Scarborough Shoal, y también ahuyentó a una flotilla de reabastecimiento a pescadores locales en Scarborough Shoal organizada por un grupo civil filipino que reivindica la soberanía filipina del atolón. En agosto hubo **tres incidentes aéreos durante los cuales aviones militares chinos lanzaron bengalas en la trayectoria de un avión de patrulla filipino**. En diciembre, un buque chino disparó su cañón de agua contra un barco del Gobierno que transportaba suministros a los pescadores filipinos en Scarborough Shoal, y más adelante **desplegó aviones de combate, bombarderos y fuerzas navales para simular operaciones de combate alrededor de Scarborough Shoal**, que se unieron a los 10 buques que ya están estacionados en dicho atolón. Ante dichas acciones reiteradas por parte de China, Manila declaró que se reservaba el derecho de desplegar buques de guerra en la región. En noviembre, China publicó las coordenadas de las líneas de base⁵⁹ alrededor del

55 Cabe recordar que Beijing reivindica –a través de la llamada “línea de diez puntos”– una región que abarca aproximadamente el 90% del Mar de la China Meridional, incluyendo partes significativas del Mar de Filipinas Occidental.

56 Conocido como Escoda en Filipinas y Xianbin Jiao en China, forma parte del archipiélago Spratly y está dentro de la Zona Económica Exclusiva de Filipinas, pero su soberanía es reclamada por Filipinas, China, Taiwán y Vietnam.

57 Ubicado en el Mar de Filipinas Occidental, algunos informes sostienen que podría contener hasta 5.400 millones de barriles de petróleo y 55.000 millones de pies cúbicos de gas natural.

58 Denominado Huangyan Dao en chino, está dentro de la Zona Económica Exclusiva de Filipinas, pero permanece bajo control efectivo de China desde 2012 tras un enfrentamiento con Filipinas. Desde entonces, el Gobierno chino impide que barcos pesqueros filipinos se acerquen a los abundantes caladeros de la región, lo cual ha generado numerosos incidentes y protestas diplomáticas por parte de Filipinas (a finales de diciembre de 2024 se habían registrado casi 400 solamente durante la Administración de Ferdinand Marcos).

59 Las líneas de base son trazados a partir de los cuales se miden los distintos espacios marítimos de un Estado costero, como las aguas territoriales, la zona contigua o la zona económica exclusiva.

En 2024 Beijing incrementó sustancialmente el envío de buques de la Armada, la Guardia Costera y la Milicia Marítima al Mar de Filipinas Occidental

banco de arena Scarborough. Además, Beijing anunció la designación oficial –nombre en caracteres chinos y transliteración pinyin– y coordenadas de los atolones Second Thomas y Sabina y de otras 62 islas y arrecifes en el Mar de China Meridional, la mayoría en las Islas Spratly –también reclamadas, total o parcialmente, por Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunéi y Taiwán.

En respuesta a un aumento de las acciones coercitivas chinas, en enero de 2024 Filipinas había anunciado una nueva estrategia de defensa marítima –Concepto de Defensa Integral Archipelágica– con tres dimensiones principales: establecer una presencia efectiva en los territorios que el Gobierno considera propios pero que están en disputa; crear una disuasión efectiva mediante la modernización del equipo militar; y aprovechar y fortalecer las alianzas y asociaciones estratégicas. Esta nueva estrategia de Filipinas implicó reforzar patrullas aéreas y marítimas para monitorear las incursiones chinas, reabastecer a los pescadores filipinos, publicitar los incidentes con China y modernizar la infraestructura en Palawan y otras formaciones terrestres en el Mar de Filipinas Occidental. A principios de año el presidente Marcos aprobó un programa –Re-Horizon 3, valorado en más de 35.000 millones de dólares– para modernizar las Fuerzas Armadas de Filipinas durante la próxima década. Filipinas también participó en varios ejercicios militares terrestres, marítimos y aéreos bilaterales y multilaterales con EEUU, Australia y Japón, a los que se sumaron otros socios. A modo de ejemplo, en mayo Filipinas y EEUU llevaron a cabo el mayor ejercicio de su historia –denominado Balikatan, con unos 16.000 soldados y la observación de 14 países. Además, en abril Filipinas permitió el despliegue del sistema estadounidense Typhon, con capacidad para disparar misiles (SM-6 o Tomahawk) que cubran la Zona Económica Exclusiva de Filipinas y puedan alcanzar a tres de las mayores bases militares chinas en la región, en los arrecifes Fiery Cross, Mischief y Subi. En noviembre, Manila confirmó el despliegue en Palawan del Grupo de Trabajo Ayungin —una unidad de operaciones especiales de EEUU— para brindar asistencia técnica a las Fuerzas Armadas filipinas, siendo considerado por algunos análisis como una clara señal a China.

China – Japón

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio, Recursos Internacionales
Actores:	China, Japón, Taiwán, EEUU

Síntesis:

La disputa entre China y Japón por la soberanía y la administración de las islas Senkaku/Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente) en el Mar de la China Oriental se remonta a principios de los años setenta, cuando EEUU, que había administrado las islas desde 1945, cedió el control de éstas a Japón. La disputa por las islas Senkaku/Diaoyu, que

tienen un alto valor geoestratégico y que se estima podrían albergar enormes reservas de hidrocarburos, se enmarca en las conflictivas relaciones históricas que han mantenido China y Japón desde el primer tercio del siglo XX a raíz de la invasión japonesa de China en los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial. El contencioso territorial entre China y Japón se había gestionado de manera relativamente pacífica desde principios de los años setenta, pero la tensión entre ambos se incrementó significativamente desde que el Gobierno japonés comprara en 2012 tres de las islas en disputa a un propietario privado, y de que China en 2013 declarase unilateralmente una nueva Zona de Identificación de Defensa Aérea que incluye el espacio aéreo de las islas. En los años siguientes a tales decisiones se incrementó significativamente el número de incursiones de patrulleras de la Guardia Costera china y navíos chinos en las aguas contiguas e incluso territoriales (12 millas náuticas desde la costa) de las islas Senkaku/Diaoyu, así como el número de cazas desplegados por Japón en control y supervisión de su espacio aéreo. Por su parte, Japón adoptó una estrategia de seguridad nacional crecientemente asertiva en la región, incrementó notablemente su gasto militar y consolidó alianzas de defensa con otros países activos en la región como EEUU, que repetidamente ha manifestado su compromiso militar con la soberanía e integridad territorial de Japón en virtud del tratado bilateral de defensa de 1951. Taiwán (oficialmente la República de China) también considera las islas Senkaku/Diaoyu forman parte inherente de su territorio –por razones históricas, geográficas y de derecho internacional–, aunque su política respecto del contencioso ha generado comparativamente menor atención internacional y fricción con Japón, que detenta el control de las islas.

Se incrementó la tensión entre China y Japón por el aumento de la presencia de barcos chinos cerca de las islas Senkaku y de otras islas de Japón en el Mar de Asia Oriental, así como por la creciente cooperación militar entre China y Rusia y por el fortalecimiento de los vínculos en materia de defensa entre Japón y varios países, especialmente EEUU. En cuanto a la situación en las islas Senkaku/Diaoyu, el Gobierno de Japón declaró que en 2024 se había registrado la presencia de **1.351 buques oficiales chinos en la zona contigua de las islas** –entre 12 y 24 millas náuticas de la costa– durante 355 días, un **récord histórico tanto por el número de embarcaciones como por el número de días** desde que, en 2008, se confirmara por primera vez la navegación de buques chinos en la zona. Japón también denunció que buques chinos habían mantenido una presencia ininterrumpida en aguas contiguas durante 215 días consecutivos –la presencia continua más extensa hasta la fecha–, provocando especulaciones y análisis sobre la presunta intención de Beijing de estacionar buques gubernamentales de manera permanente en la zona. Además, Tokio denunció incursiones o invasiones de sus aguas territoriales (12 millas náuticas) por parte de China durante 42 días, la misma cantidad que en 2023.

Además de las islas Senkaku, en 2024 también hubo tensiones militares en otras localizaciones del Mar de la China Oriental, como el Estrecho de Miyako, una vía fluvial internacional estratégica. En marzo, Tokio envió aviones de combate en respuesta a las aeronaves

militares chinas con capacidad antisubmarina y de vigilancia marítima que patrullaban las aguas del Pacífico Occidental y cruzaban el estrecho de Miyako. En agosto, un dron de guerra electrónica chino voló dentro de su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) sobre aguas al sur del Estrecho de Miyako. A mediados de mes, Japón confirmó el avistamiento al sur de la isla de Miyako de un grupo de ataque de la armada china desplegado en el Mar de Filipinas, y días más tarde también identificó un buque de asalto anfibio y un destructor chinos mientras navegaban por el Estrecho de Miyako. En otro de los episodios que provocaron mayor tensión durante todo el año, a finales de agosto Japón denunció que una aeronave militar china había entrado en su espacio aéreo, una situación sin precedentes que consideró una grave violación de sus derechos territoriales y que provocó una importante crisis diplomática. En septiembre, Tokio declaró que un portaviones y dos destructores chinos entraron por primera vez en la zona contigua de las islas japonesas de Yonaguni e Iriomote, en el Mar de la China Oriental. También en septiembre, Tokio denunció el lanzamiento –sin previo aviso oficial– por parte de China de un misil balístico intercontinental que cayó en aguas internacionales en el océano Pacífico, el primero de este tipo en 44 años. En junio, el Gobierno de Países Bajos denunció que aviones de combate chinos se acercaron peligrosamente a una fragata y un helicóptero de su armada neerlandesa en el Mar de China Oriental, causando una situación potencialmente insegura.

Ante esta situación, Japón incrementó significativamente su gasto militar y fortaleció sus alianzas estratégicas en materia de defensa con EEUU y otros países, provocando todo ello las protestas por parte de China. En cuanto al primer punto, **Japón anunció el mayor presupuesto de defensa de su historia** –un incremento de más del 7% respecto del año anterior, en el que ya se alcanzó un récord histórico–, en línea con el objetivo de duplicar su gasto en defensa contemplado en su nueva estrategia de defensa anunciada en diciembre de 2022.⁶⁰ Según algunos análisis, el nuevo presupuesto acelerará el despliegue de cientos de misiles de crucero de largo alcance y la adquisición o fabricación de otras armas de disuasión de amenazas. En cuanto al segundo punto –el fortalecimiento de alianzas de defensa por parte de Japón–, el aspecto que provocó mayor tensión con China fue la idea del nuevo primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, de **crear una alianza de seguridad colectiva en Asia similar a la OTAN**. Aunque tal idea se expresó en septiembre en EEUU en un think tank (Hudson Institute), en noviembre Ishiba creó un comité en el seno del Gobierno para discutir y desarrollar su conceptualización. En varias ocasiones durante el año, Ishiba abogó por reforzar la disuasión regional mediante la integración en marcos de seguridad

existentes –como el Tratado de Seguridad ANZUS entre EEUU, Australia y Nueva Zelanda, o AUKUS, entre Australia, Reunión Unida y EEUU– o el fortalecimiento de alianzas de defensa bilaterales o multilaterales. Cabe destacar especialmente la relación entre Japón y EEUU, que en varios momentos del año llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos, incluyendo los de octubre y noviembre, en los que participaron más de 45.000 soldados y fueron los de mayor envergadura desde los años 80. En abril, el presidente de EEUU, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, identificaron las acciones de China en los mares de China Meridional y Oriental como una clara amenaza a su seguridad nacional y anunciaron numerosos acuerdos de cooperación en defensa, siendo descritos por Biden como **la mejora más significativa de la alianza entre EEUU y Japón desde su creación en los años 50**. Japón también llevó a cabo ejercicios militares conjuntos con EEUU, Corea del Sur y Australia, fortaleció su cooperación en defensa con India en el Indopacífico, impulsó un marco de cooperación regional en materia de seguridad con 14 países insulares del Pacífico Sur y firmó Acuerdos de Acceso Recíproco con Reino Unido y Australia –facilitando el despliegue recíproco de soldados en ambos países.

China – Taiwán

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio, Recursos, Sistema Internacional
Actores:	China, Taiwán, EEUU

Síntesis:

El conflicto entre la República Popular de China (China) y Taiwán (oficialmente República de China) se remonta al año 1949, tras la victoria del Partido Comunista en la guerra civil (1927-36 y 1945-49) contra el Gobierno de la República de China (creado en 1912 y liderado por el partido Kuomintang). Dicha victoria condujo a la proclamación por parte de Mao Tse Tung de la República Popular de China y a la huida del líder del Kuomintang, Chiang Kai Chek, y cientos de miles de personas a la isla de Formosa (Taiwán), donde el Kuomintang estableció un régimen autoritario de partido único y ley marcial hasta la democratización del país a finales de los años 80. Desde su creación en 1949, la República Popular China ha considerado a Taiwán como una provincia rebelde, negándose a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán y exigiendo a cualquier país que quiera mantener relaciones diplomáticas con Beijing que no reconozca a Taiwán. En sucesivas ocasiones, distintos mandatarios chinos han expresado su voluntad de lograr la reunificación bajo el principio de “un país, dos sistemas”, pero a la vez no han descartado el uso de la fuerza para lograr tal objetivo. Por su parte, la República de China (Taiwán), con control efectivo sobre Taiwán, Penghu, Kinmen, Matsu e islas más pequeñas, mantuvo su pretensión de ser el único representante legítimo de China y su territorio hasta

60 El incremento del gasto militar se inició aproximadamente en 2012 con la llegada al poder de Shinzo Abe, que también impulsó un cambio en la Constitución japonesa para transformar la naturaleza estrictamente defensiva de las Fuerzas Armadas del país.

1991, cuando dejó de considerar al Partido Comunista como un grupo rebelde y reconoció su jurisdicción sobre la China continental. Hasta 1971, la República de China (Taiwán) detentó la representación de China en Naciones Unidas (ocupando un asiento permanente en el Consejo de Seguridad), pero en tal fecha Naciones Unidas reconoció a Beijing como el único y legítimo representante de China, posición que también adoptó EEUU en 1979 en el marco de la normalización de sus relaciones diplomáticas. En paralelo a las tensiones políticas asociadas al estatus político de Taiwán, en el plano militar ha habido principalmente tres episodios bélicos significativos. En 1954-55, Beijing bombardeó las islas de Kinmen, Matsu y Tachen y tomó el control efectivo de las islas Yijiangshan, motivando la firma en 1954 del Tratado de Defensa Mutua Sino-Estadounidense. En 1958, la República Popular de China bombardeó nuevamente las islas de Kinmen y Matsu y hubo un enfrentamiento naval entre ambos países alrededor de la isla Dongding. En 1995 y 1996, Beijing lanzó varios misiles, coincidiendo con los comicios presidenciales de 1996, los primeros de elección directa tras el período de régimen autoritario.

Durante el 2024 se incrementó notablemente la tensión entre China y Taiwán por la celebración de las elecciones presidenciales en Taiwán, por el incremento de las actividades navales y aéreas de China alrededor de la isla y por el fortalecimiento de la cooperación política y militar de Taiwán con EEUU y, en menor medida, con otros países de la región. Algunos análisis sostienen que la actividad militar de China en torno a Taiwán y en el estrecho de Taiwán ha aumentado de forma constante desde 2020 –especialmente tras visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, en agosto de 2022– y también que la tensión entre China y Taiwán está en su punto más álgido desde 1996, cuando Beijing disparó misiles frente a la costa de Taiwán coincidiendo con la celebración de las primeras elecciones democráticas de Taiwán tras décadas de autoritarismo por parte del Kuomintang. En enero de 2025, el Gobierno de Taiwán declaró que durante 2024 se había incrementado notablemente la presión militar sobre la isla por parte de China y denunció que en 2024 se registraron 3.067 incursiones de aeronaves militares chinas en los alrededores de Taiwán, un aumento del 80% respecto al año anterior y el máximo histórico desde que se comenzó a documentar esta actividad. En noviembre, EEUU declaró que en los cinco meses anteriores el Ejército chino había incrementado sus vuelos alrededor de Taiwán en un 300%, ya fueran violaciones de la Zona de Identificación de la Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés) o cruces de la “línea media” del Estrecho de Taiwán. De igual forma, en enero Taipei declaró que en 2024 sufrió una media de 2,4 millones de ciberataques diarios –el doble que en 2023, el 80% de los cuales contra agencias gubernamentales– y que los elementos de desinformación provenientes de

China se incrementaron en un 60% respecto del 2023, centrándose en gran medida en noticias orientadas a aumentar el escepticismo sobre la fiabilidad de la asistencia de EEUU a Taiwán, la competencia del Gobierno o la eficacia del ejército taiwanés. Taipei denunció una estrategia por parte de China de utilizar la desinformación y las cuentas falsas para generar entre la población taiwanesa –especialmente entre la juventud– un sentimiento más favorable hacia China. Taipei también denunció que, en los últimos años, varios barcos chinos han cortado cables submarinos cerca de Taiwán con el objetivo de afectar las comunicaciones y aislar a Taiwán informativamente.

Además de ejercicios militares regulares y de una creciente presencia rutinaria de barcos y aeronaves alrededor de Taiwán, en 2024 China llevó a cabo tres ejercicios militares de gran envergadura. El primero –Joint Sword-2024A– se llevó a cabo a finales de mayo en reacción al discurso inaugural del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y simuló el cerco a Taiwán por parte de la Armada y las patrullas de la Guardia Costera de China. El segundo –Joint Sword-2024B– se llevó a cabo a mediados de octubre en respuesta al discurso presidencial del Día Nacional –10 de octubre– y

Durante el 2024 se incrementó notablemente la tensión entre China y Taiwán por la celebración de las elecciones presidenciales en Taiwán, por el incremento de las actividades navales y aéreas de China alrededor de la isla y por el fortalecimiento de la cooperación política y militar de Taiwán con EEUU

comportó altos niveles de actividad de aviación y la declaración de áreas de ejercicios en la zona contigua de Taiwán –el área marítima a continuación de las aguas territoriales, que se extiende entre 12 y 24 millas náuticas desde la costa. El tercero se llevó a cabo a mediados de diciembre y fue considerado por varios análisis como **las mayores operaciones navales de las últimas tres décadas**. China desplegó alrededor de 90 barcos –dos tercios de la Armada y un tercio de la Guardia Costera– desde las islas del sur de Japón hasta el Mar de China Meridional, abarcando las inmediaciones de Taiwán y de las islas Ryukyu de Japón y los mares de China Oriental y Meridional. Taiwán, que decretó el nivel de alerta máximo y activó el centro de respuesta a emergencias, señaló que el alcance del despliegue sugería que China no sólo estaba tratando de demostrar su capacidad de asfixia de Taiwán, sino también su capacidad de bloquear la posible ayuda de países aliados de EEUU en la región, como Japón o Filipinas. Numerosos medios señalaron que las operaciones navales de China estaban relacionadas con la visita que había hecho Lai Ching-te en noviembre a tres aliados diplomáticos de Taiwán en el Pacífico –Isla Marshall, Tuvalu y Palau–, con escalas en los territorios estadounidenses de Hawái y Guam.

Ante el incremento de las actividades militares y de la denominada “zona gris” –acciones de intimidación y hostigamiento pero que difícilmente pueden ser consideradas como un acto de guerra– por parte de China, Taiwán constituyó el Comité de Resiliencia para la Defensa

de toda la Sociedad, con el objetivo de reforzar asuntos clave en situaciones de crisis, como el entrenamiento y utilización de la fuerza civil; la distribución de suministros críticos; la protección de infraestructuras, instalaciones de evacuación y de la red de información, transporte y energía; o la atención médica a la población. En la misma línea, en enero el Gobierno llevó a cabo su primer simulacro de guerra con China –en un escenario de cooperación de esta con Irán, Corea del Norte y Rusia– con el objetivo de comprobar si Taiwán es capaz de hacer frente a un ataque o bloqueo. Además, en 2024 el servicio militar obligatorio pasó de ser de cuatro meses a un año.

En paralelo a la tensión entre Taiwán y China, las relaciones entre China y EEUU también se deterioraron por el incremento de la cooperación militar entre EEUU y Taiwán y el creciente reconocimiento político de EEUU a Taiwán. En dos ocasiones durante el año –en mayo y junio– el presidente Biden declaró la disposición de su Gobierno de defender militarmente a Taiwán en caso de invasión de la isla o bien de que Beijing trate de alterar unilateralmente y a través de la fuerza el estatus quo en la región. A pesar de que Biden había hecho declaraciones parecidas anteriormente, algunos analistas señalaron que tal compromiso suponía una desviación de la llamada política de “ambigüedad estratégica” que hasta entonces había seguido Washington (en 1979 EEUU puso fin al Tratado de defensa mutua que tenía con Taiwán, tras reconocer que el Gobierno de la República Popular de China era el representante legítimo de China y adherirse al principio de “Una Sola China”). Además, en varios momentos del año delegaciones bicamerales del Congreso o del Gobierno de EEUU visitaron Taiwán y se reunieron con el presidente Lai, provocando las protestas de Beijing. Por otra parte, en 2024 se produjeron cuantiosas ventas de armamento de EEUU a Taiwán y se alcanzaron los niveles de ayuda militar más altos desde principios de los años sesenta. Además, en abril las Fuerzas Armadas de EEUU y Taiwán llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos en el Pacífico Occidental, aunque no fueron reconocidos oficialmente por ninguno de ambos Gobiernos. Además, a principios de año trascendió que, por primera vez, tropas de las fuerzas especiales estadounidenses –denominados “Boinas Verdes”– estarían estacionadas de forma permanente –y no provisional o rotatoria, como hasta el momento– en Taiwán, concretamente en varias bases en Kinmen –un grupo de islas controladas por Taiwán a sólo 10 kilómetros de la ciudad portuaria china de Xiamen– y en las islas Pescadores, un grupo de unas 90 islas situadas en el estrecho de Taiwán. Hasta el momento, oficialmente solamente se había reconocido la presencia temporal de militares estadounidenses en tareas de formación o para proteger el Instituto Americano en Taiwán –embajada no oficial de EEUU. En la misma línea, durante el año trascendió –sin confirmación oficial– que soldados taiwaneses estaban

recibiendo formación militar en una base en Michigan, la mayor instalación de entrenamiento de la Guardia Nacional. Por otra parte, durante el 2024 países como Japón, Corea del Sur o Australia –todos ellos con alianzas estratégicas con EEUU– expresaron su preocupación por las actividades militares de China en el Estrecho de Taiwán y reforzaron sus vínculos en materia de defensa y seguridad con Taipéi. En el plano político, a finales de 2023 y principios de 2024 se incrementó notablemente la tensión entre China y Taiwán a raíz de las elecciones celebradas en Taiwán en enero, en las que el candidato del partido gubernamental Partido Progresista por la Democracia (DPP), Lai Ching-te, se impuso con el 40% de los votos, perdiendo la mayoría absoluta, pero obteniendo un tercer mandato consecutivo del DPP. Tras su victoria, Lai Ching-te declaró estar dispuesto a defender a Taiwán de amenazas e intimidaciones, pero a la vez se comprometió a dialogar con Beijing bajo los principios de dignidad y paridad y mostró su intención de reducir los niveles de confrontación. Aunque en épocas anteriores Lai Ching-te se había mostrado públicamente a favor de la independencia de Taiwán, y durante los meses anteriores a las elecciones fue tildado de instigador de la guerra por parte de China, algunos análisis remarcaron su intención de dar continuidad a la línea de su antecesora en el cargo, Tsai Ing-wen, y de priorizar el estatus quo (ni reunificación con China ni independencia, mantenimiento de la estabilidad y la paz en el Estrecho de Taiwán).

Corea del Norte - EEUU, Japón, Corea del Sur⁶¹

Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Corea del Norte, EEUU, Japón, Corea del Sur, China, Rusia

Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea del Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

61 Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano y afecta a otros países más allá de los que aparecen en la denominación del caso.

En paralelo al incremento de las hostilidades intercoreanas,⁶² durante el año se registraron tensiones políticas y militares importantes vinculadas al desarrollo del programa armamentístico de Corea del Norte, de la alianza militar entre Corea del Norte y Rusia y del fortalecimiento de la alianza estratégica entre Corea del Sur, EEUU y Japón. En cuanto al primer aspecto, en varios momentos durante el año Pyongyang declaró su intención de fortalecer su programa nuclear para hacer frente a la alianza militar en la región liderada por EEUU. A mediados de noviembre, por ejemplo, Kim Jong-un pidió una expansión “ilimitada” del programa de armas nucleares. Días después, el representante de Corea del Norte ante Naciones Unidas advirtió durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la disposición de su Gobierno a acelerar su programa armamentístico por considerar que la amenaza nuclear de EEUU –y de otros estados hostiles con armas nucleares– contra Corea del Norte había alcanzado un punto crítico en términos de escala y peligrosidad, advirtiendo que la situación potencial se estaba acercando al borde de la guerra. Poco antes, el 31 de octubre, **Pyongyang había realizado un ensayo con un misil balístico intercontinental Hwasong-19, que logró el vuelo más alto y largo hasta la fecha, con la capacidad de impactar a EEUU**, según varios análisis. Tal lanzamiento, el primero de este tipo desde que en diciembre de 2023 lanzara el Hwasong-18, provocó la condena de buena parte de la comunidad internacional. Previamente, en septiembre, medios norcoreanos publicaron imágenes de Kim Jong-un visitando una instalación de enriquecimiento de uranio para producir bombas nucleares, provocando preocupación sobre el estadio de desarrollo del arsenal nuclear norcoreano y generando especulaciones sobre futuros ensayos nucleares. Fuentes de inteligencia señalaron que Pyongyang disponía de suficiente material fisible como para producir una cifra de dos dígitos de bombas nucleares. En la misma línea, algunos estudios señalan que Corea del Norte posee unas 50 ojivas nucleares y material para producir hasta 90, mientras que otras fuentes señalan que Pyongyang tiene actualmente entre 80 y 90 ojivas nucleares de uranio y plutonio, y se espera que esa cifra aumente a más de 160 en 2030.⁶³ En esta misma línea, en marzo varios informes basados en imágenes satelitales indicaron que Corea del Norte seguía ampliando su planta industrial en el condado de Chollima, supuestamente para enriquecer uranio. En cuanto al desarrollo de su programa armamentístico, **durante prácticamente todo el año Corea del Norte lanzó misiles crucero o balísticos de corto alcance en varias localizaciones de la península coreana**. Además, en enero realizó un ensayo con un misil hipersónico de combustible sólido de alcance intermedio y una prueba de un avión no tripulado de ataque submarino con

capacidad nuclear; en abril lanzó otro misil balístico hipersónico de alcance intermedio; y en mayo lanzó un satélite, utilizando tecnología prohibida de misiles balísticos.

Otro foco de tensión internacional durante el año fue la **creciente cooperación en materia armamentística y de defensa entre Rusia y Corea del Norte**. Tras varios meses en los que ambos países incrementaron su colaboración –en marzo, por ejemplo, Moscú vetó la renovación del Panel de Expertos de la ONU sobre las sanciones a Corea del Norte, encargado de supervisar el cumplimiento de las sanciones–, en junio Vladimir Putin y Kim Jong-un se reunieron en Pyongyang y firmaron un nuevo tratado bilateral para fortalecer sus capacidades de defensa y promover la cooperación en ciencia y tecnología; los líderes firmaron un artículo de defensa mutua que obliga a ambas partes a “proporcionar asistencia militar y de otro tipo utilizando todos los medios disponibles” en caso de que cualquiera de las partes sea “atacada y se encuentre en un estado de guerra”. Varios analistas advirtieron sobre posibles violaciones de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU por el incremento de las transferencias de armas norcoreanas para reforzar la guerra en Ucrania, y por las transferencias de tecnologías militares rusas a Corea del Norte. En el marco de dicha colaboración, **se estima que miles de soldados norcoreanos –unos 11.000 según los Gobiernos de EEUU o Ucrania, hasta 100.000 según algunos medios de comunicación– se desplegaron en la frontera entre Rusia y Ucrania**. A finales de diciembre, Corea del Sur señaló que alrededor de 1.000 soldados norcoreanos habían muerto o resultado heridos en el frente, pero el presidente ucraniano elevó tal cifra hasta los 3.000. Por otra parte, a raíz de una visita de una delegación Corea del Norte a Irán a finales de abril, también se incrementaron las especulaciones entre la cooperación en materia militar entre ambos países.

Durante el año Corea del Sur, EEUU y Japón reforzaron su alianza estratégica en materia de defensa, mientras que EEUU y Corea del Sur profundizaron su cooperación en el ámbito nuclear. Washington y Seúl llevaron a cabo sus ejercicios militares conjuntos anuales en marzo y en agosto. Ante estos últimos ejercicios –cuyo objetivo es mejorar la capacidad de respuesta y disuasión nuclear ante un eventual ataque de Corea del Norte, y que contaron con la participación de unos 19.000 soldados surcoreanos–, Pyongyang declaró que podrían significar el preludio de una guerra nuclear. A mediados de julio, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Washington, ambos presidentes firmaron directrices conjuntas de disuasión nuclear y EEUU reiteró su compromiso de defender a Corea del Sur utilizando todas sus capacidades, incluidas las armas nucleares. A

62 Véase el resumen sobre Corea del Norte – Corea del Sur en este capítulo.

63 Con motivo de las conversaciones sobre la desnuclearización con EEUU, en 2018 Pyongyang se impuso una moratoria sobre los ensayos nucleares e incluso cerró y destruyó parcialmente las instalaciones en Punggye-ri en las que llevó a cabo los seis ensayos realizados hasta el momento (2006, 2009, 2013, dos en 2016 y 2017), pero tras el colapso de tales conversaciones el Gobierno norcoreano reactivó tales instalaciones y reanudó la producción de bombas nucleares.

finales de septiembre, un submarino estadounidense de propulsión nuclear atracó en el puerto de la ciudad de Busan para abastecerse; y más tarde, pocos días después de que Corea del Norte lanzara un misil intercontinental, un bombardero estadounidense sobrevoló cerca de la península coreana; provocando ambas acciones severas críticas por parte de Pyongyang. En cuanto a la relación entre EEUU, Corea del Sur y Japón, durante el año llevaron a cabo dos ejercicios militares conjuntos de una notable envergadura, en junio y en noviembre. Además, a mediados de noviembre los tres países formalizaron y profundizaron su alianza militar, creando una secretaría conjunta y contemplando, entre otras cuestiones, la ampliación de las maniobras militares aéreas conjuntas en la región. Kim Jong-un calificó tal alianza como la “OTAN asiática”, llamó a que su ejército estuviera preparado para la guerra y anticipó una expansión sin precedentes de sus armas nucleares.

Corea del Norte – Corea del Sur

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Territorio Internacional
Actores:	Corea del Norte, EEUU, Japón, Corea del Sur, China, Rusia

Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera *de facto* en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental.

En línea con la erosión de las relaciones entre ambos países que se observó en año anterior, en 2024 las relaciones intercoreanas alcanzaron uno de los momentos más tensos de los últimos años. A principios de 2024 Kim Jong-un declaró a Corea del Sur como el principal enemigo de su país y anunció su intención de renunciar al objetivo de la reunificación y de poner fin a la historia de casi 80 años de relaciones intercoreanas. Posteriormente, a lo largo del año, Pyongyang llevó a cabo varias medidas para concretar y visibilizar el cambio de política, como el despliegue de miles de soldados en la Zona Desmilitarizada (DMZ), la

destrucción de carreteras y vías férreas que conectan las dos Coreas –en octubre–, la colocación de miles de nuevas minas terrestres cerca de la Zona Desmilitarizada –en la que algunos soldados norcoreanos murieron o resultaron heridos–, la disolución de todas las agencias gubernamentales vinculadas a las relaciones intercoreanas o el reforzamiento de la frontera terrestre. Además, Kim Jong-un anunció que Corea del Sur ya no reconocería la frontera marítima de facto en el Mar Amarillo (o del Oeste) conocida como la Línea Límite del Norte y, posteriormente, acusó a Seúl de incursionar en territorio marítimo norcoreano y de violar frecuentemente la soberanía del país, advirtiendo sobre su disposición a utilizar la fuerza armada si

persistían tales provocaciones armadas. En octubre, se hizo público que Corea del Norte había modificado su Constitución para calificar a Corea del Sur como un estado hostil. Varios análisis señalaron que las medidas anunciadas por Kim Jong-un en enero e implementadas a lo largo del año era uno de los movimientos más asertivos de Pyongyang hacia Corea del Sur de los últimos años.

Por su parte, el Gobierno surcoreano incrementó la cooperación en materia de seguridad y defensa con países como EEUU y Japón, no descartó la adquisición de armas nucleares –siendo la primera vez en la historia del país en la que un ministro de Defensa realiza tales declaraciones– y respondió al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. En junio, **suspendió por completo –como ya hubiera hecho Corea del Norte en noviembre de 2023– el Acuerdo Militar Integral de septiembre de 2018, posibilitando así la reanudación de las actividades militares a lo largo de la Línea de Demarcación Militar** y las llamadas Islas del Noroeste. El Acuerdo Militar Integral, que ya había sido suspendido parcialmente por Seúl y completamente por Pyongyang a finales de 2023, estableció una serie de medidas para reducir las tensiones militares y los enfrentamientos accidentales, como el desmantelamiento de los puestos de guardia a lo largo de la zona desmilitarizada (DMZ), una zona de exclusión aérea a lo largo de la DMZ, el cese de los ejercicios de artillería con fuego real y los ejercicios militares a menos de tres millas de la Línea de Demarcación Militar (LMD), o la prohibición de ejercicios con fuego real y maniobras marítimas en las fronteras en los mares del Este y del Oeste.

En cuanto a los episodios de mayor tensión entre ambos países, a principios de enero Corea del Norte disparó más de 200 proyectiles de artillería cerca de la isla surcoreana de Yeonpyeong, situada en una zona en disputa en el Mar Amarillo y escenario del incidente en el que, en 2010, 46 tripulantes surcoreanos murieron

A principios de 2024 Kim Jong-un declaró a Corea del Sur como el principal enemigo de su país y anunció su intención de renunciar al objetivo de la reunificación y de poner fin a la historia de casi 80 años de relaciones intercoreanas

por proyectiles lanzados por Pyongyang. Corea del Sur –que ordenó a la población de la isla que se refugiara– respondió el mismo día con el lanzamiento de más de 400 proyectiles de artillería en la misma zona, provocando especulaciones sobre un conflicto militar en la región fronteriza. En marzo, tras los ejercicios militares conjuntos anuales entre EEUU y Corea del Sur, Pyongyang disparó tres misiles balísticos de corto alcance hacia aguas frente a la costa este de la península. Más tarde, ya en abril, Pyongyang declaró haber identificado objetivos en Corea del Sur en caso de “contraataque nuclear” y subrayó una vez más su intención de adquirir la capacidad de atacar a Corea del Sur con armas nucleares utilizando múltiples sistemas. La tensión se agudizó claramente a partir de finales de mayo y durante el mes de junio. En respuesta a los ejercicios militares de Corea del Sur con aviones de combate cerca de la frontera y al lanzamiento de folletos de propaganda hacia Corea del Norte por parte de activistas surcoreanos, a finales de mayo, Pyongyang lanzó –de manera fallida– un satélite que utiliza tecnología de misiles balísticos prohibidos, interfirió señales de GPS y envió hacia Corea del Sur cientos de globos llenos de basura y estiércol, algunos de ellos equipados con un sistema eléctrico para liberar la carga del globo. La cifra de tales globos enviados por Pyongyang entre finales de mayo y finales de noviembre se estima en entre 6.500 y 9.000. En respuesta a tales acciones, Corea del Sur suspendió por completo el mencionado Acuerdo Militar Integral de 2018 y, poco después, reanudó las transmisiones con altavoces desde la frontera –incluyendo noticias internacionales o canciones de K-pop. Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano el 10 de junio advirtió que los altavoces podrían provocar una “situación muy peligrosa” y se arriesgaban a provocar una “crisis de confrontación”. También en junio, **entre 20 y 30 soldados norcoreanos cruzaron la línea de demarcación entre ambos países en tres ocasiones a lo largo del mes y se retiraron poco después de que soldados surcoreanos dispararan tiros de advertencia**. En agosto, el Gobierno norcoreano consideró que los ejercicios militares anuales conjuntos entre Corea del Sur y EEUU –que contaron con la participación de unos 19.000 soldados surcoreanos, y que incluyeron simulacros con fuego real– era una provocación y el preludio de una guerra nuclear. Finalmente, cabe destacar que en octubre se incrementó nuevamente la tensión entre ambos países después de que Corea del Norte acusara a Corea del Sur de volar drones a través de la frontera y de lanzar panfletos antigubernamentales sobre la capital, y de que Corea del Norte hiciera lo mismo en Seúl poco después.

2.3.3.2 El Pacífico

Papúa Nueva Guinea

Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bougainville

Síntesis:

En las últimas décadas, se han registrado altos niveles de tensión y violencia intercomunitaria, clánica y tribal en varias regiones de Papúa Nueva Guinea, un país conformado por más de 600 islas y con una gran diversidad cultural (se hablan más de 850 lenguas). La mayor parte de tal violencia intercomunitaria, que afecta especialmente a provincias como Enga, Hela, Southern Highlands y Western Highlands, está vinculada a conflictos por la tenencia de la tierra –que en un porcentaje muy elevado se regula a través del derecho consuetudinario–, aunque históricamente también se han registrado episodios de violencia relacionados con otras cuestiones, como el control de los recursos, las rivalidades familiares o clánicas o las acusaciones de brujería y magia negra, que han provocado la muerte de decenas de personas. Las tensiones comunitarias se agudizan en períodos electorales (tal y como sucedió en 2022) y cada vez se tornan más letales por el creciente acceso a armas de fuego. Además, las regiones más afectadas por la violencia intercomunitaria se cuentan entre las que sufren mayores tasas de pobreza, menores niveles de educación formal y ausencia y fragilidad de instituciones vinculadas a la seguridad, la aplicación de la ley y el acceso a la justicia o la resolución de conflictos.

En paralelo a la imposición del estado de emergencia por unas protestas en enero –que provocaron la muerte de más de 20 personas–, el incremento de las tensiones políticas relacionadas con el estatus político de la isla de Bougainville y una crisis parlamentaria en septiembre, durante el 2024 siguieron registrándose **elevados niveles de violencia intergrupal en varias provincias del país**, especialmente en las de Enga (región de Tierras Altas) y de Sepik Oriental (región de Momase). En cuanto a la violencia de tipo comunitario, clánico y tribal, a mediados de febrero como mínimo 49 personas (65 según otras fuentes) murieron y otras muchas resultaron heridas durante los enfrentamientos que se registraron en una zona fronteriza entre los distritos de Wabag y Wapenamanda, en la provincia de Enga (región de Tierras Altas), siendo considerada por el Gobierno como **una de las peores masacres de la historia reciente**. Según las autoridades, los episodios de violencia enfrentaron principalmente a las tribus Ambulin y Sau Walep, con las comunidades Sikin, Kaekin y Palinu, pero miembros de hasta 17 tribus habrían participado en los enfrentamientos, que provocaron el desplazamiento de miles de personas y un importante impacto humanitario en la región. Tras la conmoción nacional que comportó

la mencionada masacre, en marzo los líderes de las dos principales alianzas tribales involucradas en la violencia –Yopo y Palinau– se reunieron en la capital bajo los auspicios del Gobierno y firmaron un acuerdo de alto de fuego de tres meses de deposición (pero no entrega) de las armas que también preveía, entre otras cuestiones, el cese de toda forma de violencia y comportamientos bélicos, hostiles o provocativos; el acceso de la Policía a todas las áreas en la que hubo violencia y el compromiso de trabajar junto con el Estado para abordar los conflictos y problemas en las comunidades afectadas. Más tarde, en septiembre y octubre, volvieron a producirse importantes brotes de violencia en la provincia de Enga. En septiembre, más de 30 personas murieron (hasta 50, según Naciones Unidas) y otras muchas resultaron heridas en la región del Valle de Porgera, durante cinco días de enfrentamientos entre los clanes Sakar y Piande relacionados con el control de una mina de oro y con la actividad de la minería no autorizada. Previamente, en agosto, ya había habido un incidente entre ambas comunidades. El Gobierno declaró el estado de emergencia durante dos meses en la zona, en la que en agosto ya se había registrado un incidente de violencia entre ambas comunidades. En octubre, un convoy de 30 vehículos escoltado por fuerzas de seguridad del Estado que se dirigía a la mina de Porgera para llevar combustible a la empresa que opera la mina (New Porgera Limited) fue atacado por hombres armados de la tribu Kipul. Dos semanas más tarde siete personas fueron asesinadas y otras 12 fueron dadas por desaparecidas después de que un grupo armado atacara a un autobús en el distrito de Lagaip (provincia de Enga), en un incidente que las autoridades vincularon con el mencionado episodio de principios de mes y con otras cuestionadas relacionadas con la minería ilegal. En los últimos años ha habido numerosos incidentes de violencia en los alrededores de dicha mina –el centro de investigación ACLED⁶⁴ contabiliza como mínimo la muerte de 127 personas desde el año 2021–, agudizados por la creciente afluencia de población que llega a la zona en busca de trabajo y por el importante crecimiento de la actividad de minería ilegal.

Otra de las regiones del país más afectada por la violencia fue la provincia de Sepik Oriental (región de Momase). A mediados de julio, como mínimo 26 personas (Naciones Unidas declaró que pudieron ser más de 50), entre ellas 16 menores, fueron asesinadas tras un ataque por parte de más de 30 miembros de la banda I Don't Care en tres aldeas del distrito de Angoram. Según las autoridades locales, el ataque duró varios días e incluyó formas de violencia y brutalidad extremas como violencia sexual, decapitaciones y amputaciones, fusilamientos y quema indiscriminada de viviendas. El Gobierno declaró que el ataque estaba relacionado con disputas de tierras y de derechos de propiedad y uso en un lago de la zona, pero también con represalias por incidentes de

violencia anteriores y por acusaciones de brujería. En los últimos cinco años la mencionada pandilla ya había participado en numerosos ataques y casos de violencia sexual –incluyendo cautiverio de niñas y matrimonios forzados. Según ACLED, en 2024 el número de incidentes violentos en la provincia (24) se incrementó notablemente respecto de los años anteriores (siete en 2023 y cuatro en 2022). En cuanto a las acusaciones de brujería, las autoridades locales sostienen que es una práctica cultural extendida en varias partes del país. Según algunas fuentes,⁶⁵ entre 2000 y 2020, unas 3.000 personas han sido asesinadas en violencia relacionada con acusaciones de brujería. El Gobierno sostiene que, aunque la violencia intercomunitaria vinculada a disputas de tierra, honor, venganza y episodios de delincuencia concretos es habitual en determinadas regiones del país, en los últimos años ha habido algunos factores que han hecho que la violencia sea más letal. Algunos de estos factores son el creciente uso de mercenarios –o de personas foráneas a la zona de conflicto que habían sido contratadas para participar en determinados ataques–, la mayor sofisticación del armamento utilizado en los ataques o la escasa presencia institucional del Estado, y en particular de la Policía –en la provincia de Enga, por ejemplo, hay unos 200 efectivos policiales para una población de unas 300.000 personas, una ratio muy inferior a la que recomienda Naciones Unidas.

Por otra parte, durante el año hubo otros focos de tensión en el país –como la creciente **insatisfacción en Bougainville respecto del lento avance de las negociaciones respecto del estatus político de la isla**; o las tensiones entre Gobierno y oposición, que llevaron al primer ministro a enfrentar una moción de censura en su contra–, pero cabe destacar especialmente las protestas salariales que se produjeron en enero por parte de funcionarios estatales y policías, y que derivaron en **numerosos enfrentamientos y disturbios en varias partes del país, en los que como mínimo 22 personas murieron**. Ante tal situación y la crisis de desabastecimiento de productos provocada por una oleada de saqueos de comercios, el Gobierno impuso el estado de emergencia.

2.3.4 Europa

Cáucaso Meridional

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)

Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Türkiye

64 ACLED, ACLED Explorer [consultado el 31 de enero de 2025].

65 Tim Swanston y Theckla Gunga, *Sorcery accusations in PNG can quickly spiral into a life-threatening attack, but this safe house offers victims a lifeline*, Abc Nwes, 12 de abril de 2024.

Síntesis:

Armenia y Azerbaiyán afrontan una tensión interestatal con diversas dimensiones. Por una parte, han mantenido una disputa en torno a la soberanía de Nagorno-Karabaj, un territorio habitado históricamente por población local armenia mayoritariamente, pero que fue integrado en 1923 por la URSS como región autónoma dentro de Azerbaiyán. A finales de los años 80, la población armenia de Nagorno-Karabaj y sus autoridades locales iniciaron una campaña para unirse a Armenia. Precedido de incidentes y violencia civil desde 1988, y en el contexto de descomposición de la URSS e independencia de Armenia y Azerbaiyán, el conflicto en torno a Nagorno-Karabaj escaló a un conflicto armado entre las fuerzas locales del enclave, apoyadas por Armenia, y Azerbaiyán. Finalizó con un alto el fuego en 1994. En esa guerra, las fuerzas de Nagorno-Karabaj tomaron el control del enclave y de los siete distritos de alrededor, pertenecientes a Azerbaiyán y cuya población azerbaiyana fue expulsada. Más de 24.000 personas (más 30.000, según algunas estimaciones) murieron y más de un millón de personas se desplazaron de Nagorno-Karabaj, Armenia y Azerbaiyán. Un proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán en años sucesivos no logró resolver el conflicto. Desde el alto el fuego de 1994 hubo diversas escaladas de violencia, como en 2016 con varios centenares de víctimas mortales. El conflicto se reabrió en 2020 con una ofensiva militar de Azerbaiyán y una guerra de 44 días, en la que Bakú retomó los distritos alrededor de Nagorno-Karabaj y un tercio de este. Varios miles de personas murieron y decenas de miles se desplazaron. Se alcanzó un acuerdo de cese de hostilidades, que autorizó el despliegue de tropas rusas de mantenimiento de la paz, pero dejó irresuelto el estatus político del territorio en disputa. Azerbaiyán lanzó una nueva ofensiva militar de un día en 2023 contra Nagorno-Karabaj, que llevó al éxodo a su población armenia y con la que Bakú forzó su reintegración en Azerbaiyán. En paralelo, Bakú y Ereván mantienen una disputa en torno a la delimitación de su frontera y apertura de rutas de transporte, agravada por su hostilidad histórica en torno a Nagorno-Karabaj. La disputa política va acompañada de incidentes de violencia transfronterizos.

Se redujo la tensión entre Armenia y Azerbaiyán y los dos Gobiernos continuaron negociando un acuerdo de paz,⁶⁶ un año después de la ofensiva militar de Azerbaiyán de septiembre de 2023 que resultó en su toma militar del conjunto del enclave de Nagorno-Karabaj y en el éxodo forzado de la inmensa totalidad de su población armenia. La autoproclamada administración de Nagorno-Karabaj dejó de existir el 1 de enero de 2024, como resultado de la ofensiva militar azerbaiyana de 2023. Las perspectivas de retorno de sus habitantes armenios (en torno a 100.000) eran escasas, según análisis. El Gobierno de Armenia extendió en octubre un año más el estatus de protección temporal a la población refugiada de Nagorno-Karabaj, hasta diciembre de 2025. Análisis señalaron dificultades económicas del Ejecutivo armenio

para apoyar la integración de la población armenia refugiada.⁶⁷ Azerbaiyán llevó a cabo nuevas acciones de destrucción de edificios y patrimonio armenio en Nagorno-Karabaj, incluyendo entre otros la demolición del parlamento de la región en Stepanakert/ Jankendi (marzo) y la destrucción de la localidad de Mokhrenes/Susanlyg, según documentó ACLED.⁶⁸ Organizaciones de la sociedad civil de Nagorno-Karabaj denunciaron destrucción y expropiación de patrimonio cultural e instaron a la UNESCO al envío de una misión que documente y prevenga nuevos ataques.

En 2024 se redujo la tensión militar, sin ofensivas ni episodios de violencia de gran escala, a diferencia de los últimos años desde la guerra de 2020. No obstante, se produjeron algunos incidentes de violencia en la frontera. ACLED contabilizó 102 eventos de violencia política (71 batallas, 29 eventos de explosiones/violencia remota y dos de violencia contra civiles) en los dos países.⁶⁹ En diferentes momentos del año Armenia instó a Azerbaiyán a acordar un mecanismo de prevención y abordaje de incidentes, sin respuesta por Azerbaiyán. Entre los incidentes en 2024, en febrero fuerzas azerbaiyanas mataron a cuatro soldados armenios, hirieron a otro y destruyeron un puesto militar en la región de Syunik en respuesta a un ataque armenio en que resultó herido un soldado azerbaiyano. Azerbaiyán lanzó acusaciones a Armenia de disparar contra áreas del enclave azerbaiyano de Najicheván, desmentidas por Ereván. Los dos Gobiernos siguieron con posiciones confrontadas respecto a la cuestión del llamado “corredor de Zangezur” para comunicar Azerbaiyán con el enclave azerbaiyano de Najicheván a través de la provincia armenia de Syunik. Ante los desacuerdos, acordaron dejar fuera del borrador de acuerdo de paz ese tema, pero la disputa sobre ese eje siguió generando riesgos de futuro conflicto. En diferentes ocasiones Azerbaiyán ha amenazado con el uso de la fuerza militar para establecer ese corredor.

En los primeros días de 2025 el presidente azerbaiyano emitió nuevas advertencias. Por otra parte, los dos países preveían nuevos aumentos de gasto militar para 2025, en el caso de Azerbaiyán hasta alcanzar la cifra récord de 5.000 millones de dólares (incremento del 17% respecto a 2024 y del 43% en comparación con 2023, año de la ofensiva militar contra Nagorno-Karabaj). Finalmente, con respecto a actores externos, en 2024 se inició y finalizó la retirada de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz de la región de Nagorno-Karabaj, que habían sido desplegadas en 2020 en el marco del acuerdo de cese de hostilidades de ese año. En 2024 también finalizó el Centro Conjunto de

La autoproclamada administración de Nagorno-Karabaj cesó de existir el 1 de enero de 2024, como resultado de la ofensiva militar azerbaiyana de 2023

66 Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán en el Capítulo 5 (Europa) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

67 International Crisis Group, *Armenia Struggles to Cope with Exodus from Nagorno-Karabakh*, ICG, 4 de marzo de 2024.

68 ACLED, *Destruction of Armenian heritage in Nagorno-Karabakh*, ACLED, 20 de septiembre de 2024.

69 ACLED, *Data Explorer* [Consultado el 31 de enero de 2025].

Observación de Rusia y Türkiye, establecido en 2020 con funciones de supervisión del cese de hostilidades. Azerbaiyán también reclamó la retirada de la misión de la UE en Armenia (EUMA), calificándola de “misión de la OTAN”.⁷⁰ Durante el año, Armenia y Azerbaiyán alcanzaron acuerdo para la delimitación de algunos tramos de la frontera y avanzaron en las negociaciones para un acuerdo de paz,⁷¹ pero continuaba la tensión en torno a condiciones exigidas por Bakú y a temas no resueltos que quedaron fuera de los borradores de acuerdo, como el mencionado corredor de Zangezur, lo que generaba incertidumbre sobre el rumbo futuro de la relación entre los dos países.

Europa Meridional

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional ⁷²
Actores:	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX

Síntesis:

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia. En 2011 las partes iniciaron un nuevo proceso negociador facilitado por la UE y con apoyo de otros actores. No obstante, continúa la disputa política entre Serbia y Kosovo, así como la tensión política y social entre las instituciones de Kosovo, por un lado, y actores políticos y sociales y población serbokosovar, por otro lado, con expresiones de violencia intermitentes.

La tensión entre Serbia y Kosovo se mantuvo elevada. Por una parte, se agravó la situación de seguridad. **En noviembre se produjo una explosión en Zubin Potok (norte de Kosovo, de mayoría serbokosovar) en un canal estratégico**, que suministraba agua tanto a dos centrales térmicas de carbón de Kosovo –principales generadoras de la electricidad en el territorio– como también a cientos de miles de personas en la zona norte de Kosovo y a parte de la capital. El Consejo de Seguridad de Kosovo (KSC) acusó de los ataques a las “organizaciones terroristas Defensa Civil y Brigada del Norte” y al expolítico serbokosovar Milan Radoičić de los ataques, bajo dirección del Gobierno y presidencia de Serbia.⁷³ El Gobierno serbio negó su implicación en la explosión del canal de Zubin Potok y acusó a Kosovo de instrumentalizar el ataque para incrementar su control sobre las áreas serbias del norte de Kosovo. El KSC aprobó medidas de despliegue de la Policía y de la Fuerza de Seguridad de Kosovo (KSF) en infraestructuras y servicios críticos (lagos, canales, puentes, antenas, subestaciones). **La OTAN incrementó la presencia de su misión KFOR en la zona, pero no autorizó al Gobierno de Kosovo a desplegar a las KSF en la zona norte.** Gobiernos y actores internacionales condenaron la explosión. Esta estuvo precedida de dos ataques con granada de mano ese mismo mes en Zvecan (norte), de los que el Ministerio de Interior de Kosovo acusó a estructuras criminales apoyadas por Serbia. Además, se produjo 14 meses después de la grave emboscada paramilitar de 2023 y atrincheramiento en el monasterio de Banjska (norte de Kosovo) por una treintena de hombres armados, y de los cuales Kosovo responsabilizó a individuos y grupos apoyados por Serbia, incluyendo a Radoičić.⁷⁴

Por otra parte, tanto Kosovo como Serbia llevaron a cabo en 2024 medidas unilaterales que incrementaron la tensión y la desconfianza. El Ejecutivo de Kosovo desmanteló en agosto cinco instituciones serbias en las localidades serbokosovares de Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok y Leposavic, consideradas por el Gobierno como ilegales y paralelas y que operan con apoyo de Belgrado a modo de proveedoras de servicios para la población serbokosovar. Actores internacionales como la UE y EEUU criticaron a Pristina por llevar a cabo la medida al margen del proceso negociador entre Kosovo y Serbia. Kosovo también prohibió el uso de la moneda dinar serbio para los pagos y transacciones en efectivo, permitiendo solo el euro (regulación de diciembre de 2023, con entrada en vigor en febrero de 2024 y tres meses de transición). La decisión afectó negativamente a la población serbokosovar dependiente de salarios, pensiones y ayudas pagadas por el Gobierno de Serbia, que tuvieron que pasar a desplazarse a Serbia para

⁷⁰ Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán en el Capítulo 5 (Europa) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

⁷¹ Ibid

⁷² La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

⁷³ *Communication of the Security Council of the Republic of Kosovo* en Telegrafi, “Security Council meeting, additional security measures around critical facilities”, Telegrafi, 30 de noviembre de 2024.

⁷⁴ Véase el resumen sobre Serbia-Kosovo en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2024! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2024.

dichos cobros. Serbia y Kosovo abordaron la cuestión de la prohibición del dinar serbio en el proceso negociador, sin llegar a acuerdo. Además, durante buena parte de 2024 Kosovo mantuvo su bloqueo a la importación de mercancías procedentes de Serbia, medida introducida en julio de 2023 bajo alegación de motivos de seguridad. A principios de octubre y previo a la celebración de la cumbre UE-Balcanes Occidentales de ese mes, Kosovo levantó la restricción. También incrementó la tensión medidas de expropiaciones en el norte de Kosovo por el Gobierno central y la decisión de la Comisión Electoral Central del 23 de diciembre de rechazar la participación del partido serbokosovar Lista Serbia en las elecciones parlamentarias de Kosovo del 9 de febrero, aunque finalmente autorizó al partido a participar.

Por su parte, Serbia adoptó medidas que también elevaron la disputa Serbia-Kosovo, como la adopción por el Gobierno de Serbia en octubre de un proyecto de ley que declara a Kosovo “zona de especial protección” y otro que organiza y establece competencia de las autoridades judiciales serbias para el procesamiento de delitos cometidos en el territorio de Kosovo. Kosovo calificó la legislación de acción hostil contra la integridad territorial, legalidad y soberanía de Kosovo. Por otra parte, Kosovo calificó de provocación los ejercicios militares de Serbia de abril a 30 kilómetros de la frontera con Kosovo.

2.3.5 Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Internacional Sistema, Gobierno
Actores:	Al-Houthistas/Ansar Allah, Israel, EEUU, Reino Unido, Resistencia Islámica de Iraq, Irán

Síntesis:

La crisis en Gaza y la consiguiente escalada entre diversos actores de Oriente Medio favoreció el inicio de un nuevo contexto de tensión que desde finales de 2023 ha tenido como escenario principal el Mar Rojo y que ha supuesto intercambios armados constantes del grupo armado yemení al-houthistas (o Ansar Allah) con Israel, EEUU y Reino Unido. Desde una posición declaradamente contraria a Israel y a EEUU –una postura que forma parte de su ideario político desde hace décadas– y argumentando solidaridad con la población palestina, los al-houthistas iniciaron a mediados de noviembre de 2023 ataques armados contra embarcaciones en el Mar Rojo, advirtiendo que mantendrían sus ofensivas hasta que Israel detuviera su campaña militar en la Franja. El grupo yemení amplió luego sus operaciones contra barcos mercantes de banderas diversas con destino

a Israel, afectando así el tráfico en una zona crucial para el transporte marítimo mundial. Esta deriva motivó el establecimiento de la operación militar Guardián de la Prosperidad (diciembre de 2023), liderada por EEUU y con participación destacada de Reino Unido, entre otros países. Desde entonces, las hostilidades se han intensificado y ampliado desde su epicentro en el Mar Rojo. Cabe destacar que la disputa también se enmarca y ve influida por las tensiones entre EEUU e Israel con Irán –los al-houthistas forman parte del denominado “eje de resistencia” que aglutina a diversos actores en la órbita de Teherán– y que esta tensión repercute también en las dinámicas del conflicto armado en Yemen y sus perspectivas de transformación a través de negociaciones.

Los intercambios armados del grupo armado yemení al-houthistas –también denominado Ansar Allah– con Israel y luego con EEUU y Reino Unido (entre otros países) que se iniciaron a finales de 2023 se intensificaron y ampliaron a lo largo de 2024, configurando una tensión de alta intensidad que tuvo como epicentro el Mar Rojo, pero que también involucró hostilidades en el Océano Índico, el Mar Arábigo y el Mediterráneo. A partir del segundo semestre, la tensión afectó de manera más intensa también al territorio yemení y a Israel. La disputa habría causado la muerte de entre 30 y 50 personas y dejado heridas a decenas, según ACLED y recuentos informales a partir de informaciones de prensa. La disputa se enmarca y se ha visto influida por una serie de acontecimientos y dinámicas regionales, particularmente tras los ataques del 7-O en Israel, la campaña militar israelí y el genocidio en Gaza y la consiguiente escalada de conflictos y tensiones entre diversos actores de Oriente Medio. Argumentando solidaridad con la población palestina, los al-houthistas iniciaron en noviembre de 2023 ataques armados contra embarcaciones en el Mar Rojo, advirtiendo que mantendrían sus ofensivas hasta que Israel detuviera su ofensiva y el bloqueo a la Franja. Las afectaciones que provocaron estos ataques en el tráfico y comercio marítimo mundial –el grupo yemení focalizó en un principio sus acciones contra navíos de propiedad israelí, pero luego amplió sus operaciones contra barcos de diversas nacionalidades con destino a Israel– motivaron el establecimiento de la operación militar Guardián de la Prosperidad (diciembre de 2023), liderada por EEUU (aliado estratégico de Israel en la región) y con participación destacada de Reino Unido, junto a otros países. **A lo largo de 2024, EEUU y Reino Unido interceptaron ataques lanzados por los al-houthistas y lanzaron continuas ofensivas contra posiciones del grupo yemení, que no disuadieron a la organización de persistir en sus acciones.** Los al-houthistas atacaron navíos mercantes –las primeras víctimas mortales se produjeron en marzo, cuando murieron tres tripulantes de un barco de Barbados–; además de barcos militares israelíes, británicos y estadounidenses; y también

reivindicaron el derribo de drones. Por su parte, EEUU y Reino Unido lanzaron decenas de ataques contra posiciones, depósitos de armas, sistemas de misiles e instalaciones subterráneas de los al-houthistas, en las provincias de Amran, al-Bayda, Hodeida, Hajjah, Saada y en la capital, Sanaa. Una serie de estas ofensivas en Hodeida, en mayo, habrían causado la muerte de 16 personas, según los al-houthistas, mientras que una decena de combatientes al-houthistas murió en otro ataque de EEUU en noviembre. **En febrero la UE estableció su propia misión marítima en la zona, EUNAVFOR Aspides** –descrita como defensiva y orientada a asegurar el tráfico marítimo en el Mar Rojo–, que no llevó a cabo ataques en territorio yemení.

En octubre, los al-houthistas reivindicaron haber atacado 196 barcos desde el inicio de su campaña en noviembre de 2023. En la segunda mitad del año se redujeron relativamente los ataques del grupo yemení en el ámbito marítimo. Los intercambios armados que alcanzaron territorio yemení e israelí, en cambio, se intensificaron. Los al-houthistas habían atacado la ciudad israelí de Eilat en marzo y junio y a principios de junio también reivindicaron por primera vez ataques con drones contra el puerto de Haifa en coordinación con Resistencia Islámica en Iraq, agrupación de milicias respaldada por Irán. En julio, uno de sus ataques con drones alcanzó Tel Aviv, causando la muerte de una persona y heridas a otras 10. Israel respondió con un intenso ataque –el primero reconocido contra suelo yemení– contra el puerto de Hodeida en el que murieron nueve personas y otras 87 resultaron heridas. En septiembre, en paralelo a la intensificación de la campaña militar israelí contra Hezbollah en Líbano,⁷⁵ los al-houthistas volvieron a lanzar un ataque con misiles contra Tel Aviv. La respuesta de Israel, en coordinación con EEUU, afectó los puertos de Hodeida y Ras Issa, matando a cinco e hiriendo a una veintena de personas. En octubre y noviembre se produjeron nuevos ataques al-houthistas contra Israel en Eilat, Jaffa, Tel Aviv, Ashkelon y la base militar de Nevatim en el desierto del Negev. En diciembre, los al-houthistas intensificaron sus acciones –según indicios, en coordinación con milicias iraquíes– en un intento por demostrar resiliencia del llamado “eje de resistencia” en un contexto de retrocesos del bloque liderado por Teherán en la región.⁷⁶ El grupo yemení lanzó una quincena de

ataques aéreos contra Israel, hiriendo a una veintena de personas. Israel, por su parte, emprendió su tercera incursión directa en Yemen, con varias ofensivas desde mediados de diciembre que golpearon infraestructura eléctrica en Sanaa; los puertos de Hodeida, Salif y Ras Issa; y el aeropuerto internacional de la capital –en momentos en que una delegación de la ONU (incluyendo el director de la OMS) se encontraba en el lugar. Las acciones israelíes dejaron 15 víctimas mortales. En este contexto, el secretario general de la ONU expresó su grave preocupación por esta escalada de violencia, por su impacto en civiles y por las previsibles consecuencias negativas de los ataques israelíes en la capacidad de los puertos yemeníes para importar alimentos en un momento crítico de necesidades humanitarias en el país y de crecimiento de la inseguridad alimentaria.⁷⁷

Tanto los al-houthistas como el Gobierno israelí intensificaron su retórica de amenazas al finalizar el año. Miembros del gabinete de Netanyahu alertaron sobre ataques contra la dirigencia del grupo, aludiendo a previos asesinatos de líderes de Hamas y Hezbollah. A petición de Israel, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión para analizar estos desarrollos y sus repercusiones en la paz y seguridad internacionales. **Israel precisó entonces que los al-houthistas habían lanzado más de 200 misiles y drones contra Israel en los últimos 14 meses.** En enero y junio, el Consejo había aprobado las resoluciones (2722 y 2739, respectivamente), instando a los al-houthistas a detener sus ataques contra barcos mercantes y a liberar a la tripulación de la nave Galaxy Leader, retenida desde noviembre de 2023.⁷⁸ Al finalizar el año, las perspectivas de evolución de este conflicto estaban condicionadas, en parte, por el retorno a la Casa Blanca de Donald Trump, que durante su primer mandato adoptó diversas medidas contra los al-houthistas y que acusó al Gobierno de Joe Biden de reaccionar con debilidad ante los hechos en el Mar Rojo. Tras el inicio de los ataques, Biden reinstauró (en enero de 2024) la clasificación de los al-houthistas como grupo terrorista, pero con una fórmula menos severa que la promovida por Trump al final de su primer mandato.⁷⁹ El enviado especial de EEUU para Yemen también abogó en distintos espacios por intensificar las sanciones contra los al-houthistas y fortalecer el mecanismo de verificación (UNVIM,

75 Véase el resumen sobre Israel – Hezbollah en el capítulo 1 (Conflictos armados).

76 Véase los resúmenes de Siria e Israel-Hezbollah en el capítulo 1 (Conflictos armados) y el de Israel-Irán en este capítulo.

77 Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 1 (Conflictos armados).

78 La tripulación del Galaxy Leader fue liberada en enero de 2025 tras la puesta en marcha del alto en fuego en Gaza.

79 El primer gobierno de Donald Trump (2016-2020) designó a los al-houthistas como organización terrorista extranjera a través de dos mecanismos: Foreign Terrorist Organization (FTO) y Special Designated Global Terrorist group (SDGT). Las dos involucran sanciones económicas, pero solo la FTO autoriza sanciones a quienes provean “apoyo material” al grupo designado. Biden levantó ambas calificaciones en febrero de 2021 y solo reimpuso la SDGT en enero de 2024. En enero de 2025, el nuevo Gobierno de Trump había iniciado el proceso para recalificar a los al-houthistas como FTO.

con sede en Djibouti) que vigila la implementación del embargo contra el grupo. Las dinámicas de este conflicto acabaron repercutiendo también en la situación interna en Yemen, derivando en un bloqueo de las negociaciones que habían dado algunas señales de avances en 2023.⁸⁰ Según trascendió, en 2024 se intentó abrir un canal de diálogo entre EEUU, Irán y los al-houthistas –con la facilitación de Omán– para una desescalada en la crisis del Mar Rojo, pero estos esfuerzos no prosperaron.

Mashreq

Israel – Irán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, Israel

Síntesis:

Las relaciones entre Israel e Irán han tenido altibajos, pero desde las últimas décadas del SXX se ha impuesto un clima de hostilidad entre ambos Estados. En 1947 Irán fue uno de los países que votó en contra del Plan de la ONU para la Partición de Palestina por las consecuencias que podría tener en la región y defendió una propuesta alternativa de un único Estado federal. Pese a ello, tras la primera guerra árabe-israelí (1948), Irán se convirtió –durante el mandato del sha Mohammed Reza Pahlevi– en el segundo país musulmán (después de Turquía) en reconocer oficialmente a Israel. A partir de 1953, cuando un golpe de Estado apoyado por EEUU y Reino Unido reinstrauró al liderazgo prooccidental en Irán, ambos países intensificaron sus relaciones económicas, militares y de seguridad. La revolución islámica de 1979 en Irán condujo a una ruptura de relaciones y a una dinámica de confrontación. La República Islámica, que asumió una posición más activa en la cuestión palestina, no reconoce a Israel. Israel, en tanto, considera a Teherán como una amenaza. Desde mediados de la década de 1980, Irán e Israel se han involucrado en conflicto por delegación que ha tenido repercusiones en toda la región y se han enfrentado en una guerra en la sombra, intercambiando ataques contra sus respectivos intereses. El programa nuclear iraní ha sido uno de los principales objetivos de los ataques. Israel, que posee armamento nuclear –a pesar de no reconocerlo públicamente– está determinado a evitar que Teherán pueda desarrollar un arma atómica. La confrontación entre Israel e Irán se había materializado principalmente a través de ataques indirectos, pero en 2024 –en el marco de una escalada en las tensiones regionales derivadas de la crisis en Gaza– ambos países traspasaron una línea roja en su disputa y se involucraron en ataques directos en sus respectivos territorios.

Durante el año se produjo una escalada de tensión entre Israel e Irán, en un marco regional crecientemente

volátil por las repercusiones de la crisis en Gaza. La confrontación entre ambos países se había materializado hasta entonces principalmente a través de ataques indirectos. Por un lado, asesinatos no reivindicados públicamente por Israel y ofensivas contra miembros de la Guardia Republicana (IRGC) iraní y milicias afines a Teherán en Iraq y Siria, y, por otro, acciones de actores de la órbita de Teherán del llamado “eje de la resistencia” contra Israel. **Sin embargo, en 2024 Israel e Irán cruzaron una línea roja en su relación de rivalidad y se enzarzaron en ataques directos,** en una dinámica de hostilidades sin precedentes que causó la muerte de al menos 38 personas. El punto de inflexión se produjo el 1 de abril, cuando Israel lanzó una ofensiva contra el consulado de Irán en Damasco, en la que murieron siete personas, cinco funcionarios iraníes y dos altos cargos de las IRGC, uno de ellos el brigadier general Mohammed Reza Zahed, veterano comandante de la fuerza al-Quds –involucrada en operaciones iraníes en el exterior, tanto en Siria como en Líbano. La envergadura y naturaleza del ataque, que afectó una sede diplomática de Teherán desafiando así la soberanía iraní, motivó inmediatas especulaciones sobre la respuesta de la república islámica. Irán había evitado una confrontación directa con Israel –que podía favorecer la estrategia del Gobierno de Netanyahu, de involucrar más activamente a EEUU en los conflictos de Oriente Medio–, pero no responder a la agresión israelí podía comprometer su credibilidad como poder regional y ante sus aliados en la zona.

Tras días de incertidumbre, Irán con apoyo de algunos de sus aliados lanzó un masivo ataque contra Israel el 13 de abril, que involucró más de 120 misiles balísticos, 30 misiles de crucero y 170 drones, en su primer ataque directo a Israel desde la instauración de la república islámica. Pese a lo espectacular de la ofensiva, la acción (Operación Promesa Verdadera) fue ampliamente anunciada, lo que contribuyó a que Israel interceptara el 99% de los proyectiles con la ayuda de EEUU, Reino Unido y Jordania. El ataque iraní dejó 12 personas heridas en el sur de Israel y causó daños menores en la base aérea de Nevatim, en el desierto del Negev. En una carta al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, Teherán justificó su ataque en el derecho a autodefensa bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Tras la ofensiva, la misión permanente de Irán ante la ONU dio el episodio por concluido, dando a entender que no pretendían una nueva escalada, pero advirtiendo que responderían de manera más severa si Israel cometía un nuevo “error”. Israel lanzó otro ataque contra la ciudad de Isfahán días más tarde (19 de abril), pero Teherán restó importancia a los hechos y no dio señales de impulsar nuevas acciones.

80 Para más información, véase el resumen sobre Yemen en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

En este contexto de tensión regional, se produjo el accidente en helicóptero que derivó en la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, su ministro de Exteriores y otras seis personas (19 de mayo). Las especulaciones sobre una posible responsabilidad de Israel fueron descartadas. En vísperas de la asunción en la presidencia de su sucesor, Masoud Pezeshkian, Israel lanzó un ataque en Teherán en el que resultó muerto el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh (31 de julio). El dirigente palestino se encontraba en Irán para asistir a la toma de posesión de Pezeshkian y hasta entonces era el líder de la delegación de Hamas en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. El episodio volvió a agitar las tensiones pero, según trascendió, tras diversos contactos diplomáticos Irán decidió reservarse el derecho a tomar represalias por el nuevo ataque israelí en su territorio, esta vez contra Haniyeh –y tampoco vengar la muerte de Fuad Shukr, comandante de Hezbollah asesinado en Beirut por Israel días antes– para no comprometer las negociaciones para el alto el fuego en la Franja que estaban siendo facilitadas por EEUU, Qatar y Egipto.⁸¹ El panorama regional, sin embargo, continuó deteriorándose por la intensificación de la ofensiva israelí sobre Gaza y, a partir de septiembre, por la decisión de Israel de centrar su campaña en el “frente norte”, en su confrontación con Hezbollah.⁸² Tras el asesinato de un alto comandante de las IRGC, Abbas Nilforoushan (27 de septiembre) y del líder histórico de la milicia shíí libanesa, Hassan Nasrallah (29 de septiembre) y poco después de que Israel lanzara su operación militar terrestre en el sur de Líbano y anunciara su intención de remodelar el orden regional, Irán volvió a lanzar un ataque aéreo contra Israel el 1 de octubre. La ofensiva iraní involucró unos 200 misiles balísticos, que en su mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa israelí y por EEUU. El ataque fue más contundente que el de abril, con un uso de misiles más avanzados y menos margen de aviso previo. Solo se informó de daños en las bases aéreas israelíes de Nevatim y Tel Nof y de la muerte de un civil palestino. Nuevamente Teherán argumentó que su acción era un acto de autodefensa ante los ataques israelíes previos en su territorio y a las ofensivas que estaba desplegando en Gaza y Líbano. El ministro de Exteriores subrayó que solo habían atacado objetivos militares y que daban su acción por concluida a menos que Israel decidiera escalar nuevamente la situación.

La respuesta directa de Israel tardó unas semanas. **El 26 de octubre Israel lanzó otra serie de ataques contra Irán que alcanzaron una veintena de objetivos**

–instalaciones de fabricación de misiles y sistemas de defensa encargados de la protección de infraestructuras energéticas– en las localidades iraníes de Teherán, Ilam, Karaj, Khuzestán y Semnan. Al menos cuatro militares iraníes y un civil murieron en estas acciones. EEUU habría solicitado a Israel que estos ataques no

afectaran a instalaciones nucleares por temor a que esa acción pudiera llevar a una escalada de mayor magnitud. El Gobierno de Netanyahu advirtió a Irán que no adoptara represalias y aseguró haber alcanzado todos sus objetivos. En noviembre el régimen iraní alertó sobre posibles cambios en su doctrina nuclear si su seguridad se veía amenazada y se

identificaron movimientos de armas de Irán a Iraq, que podrían indicar que una nueva acción de represalia contra Israel podría ser llevada a cabo por (o en coordinación con) milicias iraquíes.⁸³ En este contexto, diversas voces, entre ellas el secretario general de la ONU, se mostraron alarmadas por la continua escalada de violencia en Oriente Medio. Cabe destacar que al finalizar el año la posición de Irán en el tablero regional se veía afectada por la caída del régimen de Bashar al-Assad (8 de diciembre), al que había dado un apoyo clave en la última década.⁸⁴ Su salida del poder comprometía las posibilidades de Irán de proyectar su influencia en la región y los canales de comunicación y suministro a su otro gran aliado en la zona, Hezbollah. Cabe destacar que, según los datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR), al menos 25 miembros de las IRGC murieron en ataques de Israel en territorio sirio en 2024.⁸⁵

Israel – Siria

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, UNDOF

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. La guerra árabe-israelí de 1967 significó, entre otras cosas, la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios. En 1973, Siria intentó sin éxito recuperar este territorio por la vía militar en una acción concertada con Egipto, que a su vez pretendía retomar el control de la Península del Sinaí. La conocida como “guerra árabe-israelí de 1973” o “guerra de Yom Kippur” derivó en un alto el fuego y, en 1974, en un

81 Véase el resumen sobre Israel-Palestina en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

82 Véase el resumen sobre Israel-Hezbollah en el capítulo 1 (Conflictos armados).

83 Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

84 Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

85 SOHR, *Highest annual toll ever | Israel attacks Syria on 373 occasions in 2024, destroying over 1,000 targets and killing and injuring nearly 845 combatants and civilians*, 2 de enero de 2025.

acuerdo de repliegue de fuerzas entre Israel y Siria y en el establecimiento de una fuerza observadora de la ONU para supervisar su implementación en la zona del Golán (UNDOF). La ocupación de los Altos del Golán –una zona estratégicamente clave por sus reservas de agua y que Israel anexionó en 1981 en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional– junto al apoyo de Damasco al partido-milicia shíí libanés Hezbollah –surgado en el marco de la ocupación israelí del Líbano en 1982– han sido dos de los ejes de la tensión entre Israel y Siria. El estallido del conflicto armado en Siria en 2011 y su consiguiente regionalización e internacionalización, tuvieron un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa. En este contexto, Israel se involucró activamente en ataques a posiciones de Hezbollah, Irán y milicias respaldadas por Teherán en Siria. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, Israel amplió la ocupación de territorios sirios en la zona de los Altos de Golán y declaró su desvinculación del acuerdo de separación de fuerzas de 1974.

Durante la mayor parte de 2024, el conflicto armado sirio y la escalada regional derivada de la crisis en Gaza eclipsó las dinámicas de la tensión histórica entre Siria e Israel, que tiene entre sus ejes la ocupación israelí de los Altos del Golán. A lo largo del año, Israel se involucró en numerosos ataques en suelo sirio contra distintos actores, entre ellos milicias pro-iraníes, miembros de la Guardia Republicana iraní, Hezbollah y Hamas. Los ataques israelíes en diversos puntos del territorio sirio alcanzaron un nivel sin precedentes, causando la muerte de 482 personas en 2024, entre ellas 414 combatientes y 68 civiles.⁸⁶ Algunos de estos grupos también lanzaron ataques contra la zona de los Altos del Golán ocupados por Israel. Uno de estos ellos provocó la muerte de 12 civiles de la comunidad drusa en julio.⁸⁷ Las fuerzas israelíes incrementaron su ofensiva en Siria a partir de septiembre, en paralelo a la intensificación de su campaña militar contra Hezbollah en Líbano.⁸⁸ Según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), la inmensa mayoría de estas muertes (472) se produjeron entre enero y noviembre, antes de la caída del régimen de Bashar al-Assad el 8 de diciembre. **Tras el colapso del régimen, diversas acciones de Israel en Siria abrieron un nuevo capítulo de incertidumbre en la relación entre ambos países.** Horas de la toma de Damasco por fuerzas opositoras lideradas por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) –organización sucesora del antiguo Frente al-

Nusra, ex brazo armado de al-Qaeda en Siria–, **Israel lanzó una amplia ofensiva armada contra los arsenales sirios.** Los más de 500 ataques israelíes en el marco de la operación Flecha de Bashan destruyeron en torno al 70-80% de sus capacidades navales, aéreas, reservas de armas químicas y sitios de producción de armas, afectando a largo plazo las capacidades militares de Siria.

En paralelo, fuerzas israelíes avanzaron posiciones en la zona de los Altos del Golán más allá de la zona desmilitarizada y ocuparon nuevos territorios en Siria, bajo el argumento de prevenir posibles ataques contra Israel. El Gobierno de Netanyahu declaró que el acuerdo de separación de fuerzas suscrito por Israel y Siria en 1974 había “colapsado” y que ante el repliegue de las fuerzas militares sirias había ordenado a las fuerzas israelíes que ocuparan posiciones para prevenir su control por “fuerzas hostiles” o “grupos yihadistas”, en una acción que describió como defensiva. El acuerdo de 1974 estableció zonas de repliegue y una zona desmilitarizada en la que solo se permite la presencia de los 1.200 efectivos de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (United Nations Disengagement Observer Force, UNDOF). Según Israel, un día antes de la caída de al-Assad, grupos armados habían entrado a la zona desmilitarizada y robado equipamiento de la UNDOF, pero la propia misión aseguró con posterioridad que se trataba de un incidente puntual y que había recuperado el armamento sustraído. Diversos indicios apuntaban a la intención de permanecer en la zona. Si bien la versión en inglés del comunicado de Netanyahu aseveró que la presencia israelí en la zona sería “temporal” – hasta el establecimiento de una fuerza comprometida con el armisticio que pudiera garantizar la seguridad de Israel–, la versión en hebreo no hace referencia a esa temporalidad y días más tarde **el Gobierno de Netanyahu aprobó duplicar la población israelí en los Altos del Golán ocupados.**⁸⁹ Cabe destacar que en una declaración a mediados de diciembre la UNDOF calificó las acciones y presencia israelí en diversas localidades de la zona como una violación al acuerdo de 1974 y subrayó que los movimientos de Israel dentro del área de separación a lo largo de la línea de cese el fuego venían intensificándose desde julio de 2024. En noviembre, la UNDOF había advertido que algunos proyectos de construcción israelíes a lo largo de la Línea Alfa –que Israel no puede traspasar según el pacto de separación

86 Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

87 Israel y EEUU atribuyeron esta ofensiva a Hezbollah, que negó la autoría del ataque. Algunos analistas consideraron que se trataba de una ofensiva fallida. En represalia, Israel lanzó un ataque en Líbano en el que murieron el comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, y cinco civiles.

88 Véase el resumen sobre Israel – Hezbollah en este capítulo.

89 En enero de 2025, Israel anunció que permanecería en el nuevo territorio ocupado por un tiempo ilimitado.

de fuerzas de 1974– constituían severas violaciones al acuerdo.⁹⁰

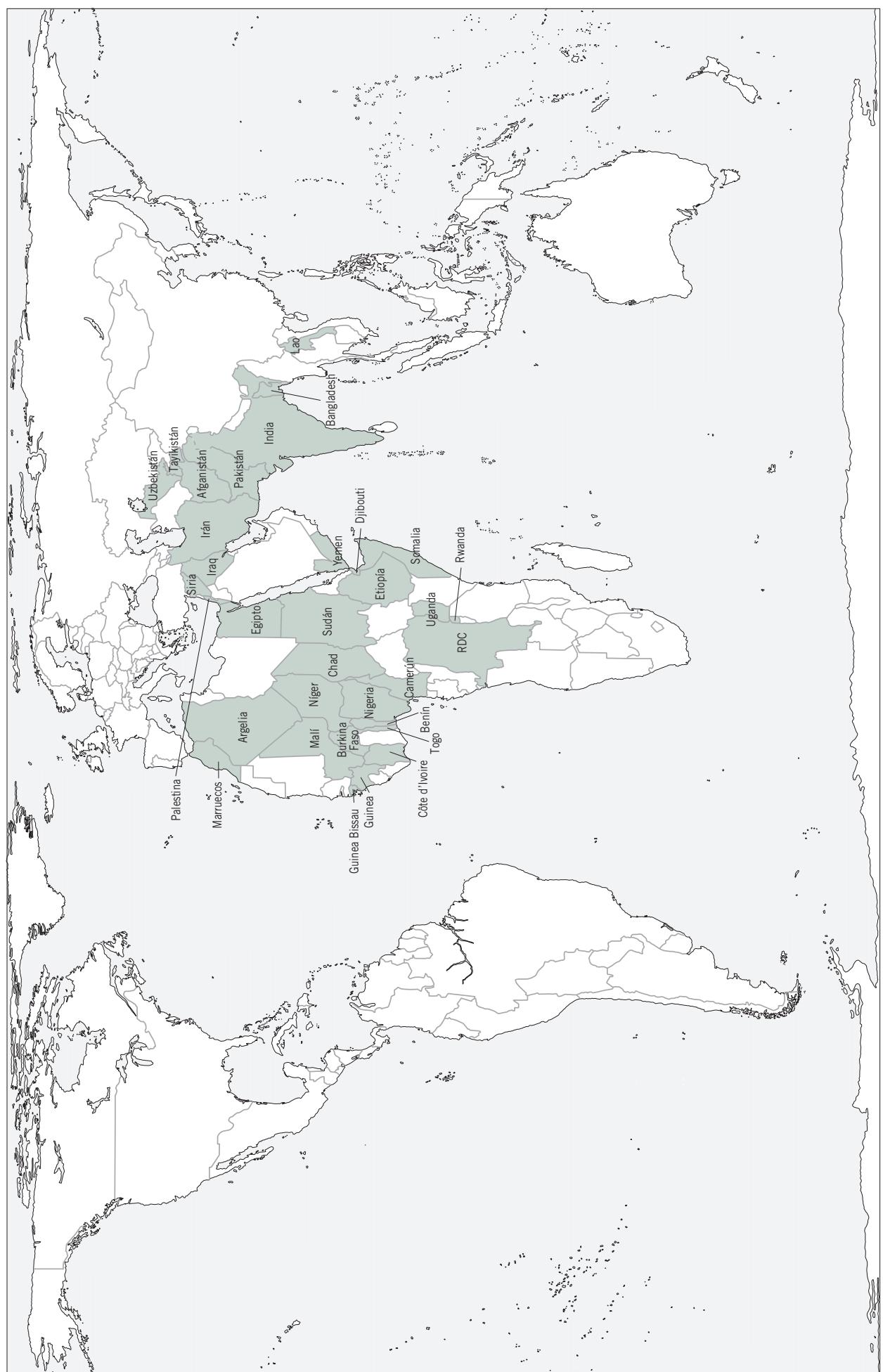
Las nuevas autoridades de Siria condenaron las acciones de Israel y declararon que no pretendían ser una amenaza para sus vecinos. A mediados de diciembre, HTS hizo una declaración pública explicitando que no buscaba una confrontación con Israel, pero advirtiendo que una vez que la influencia iraní y que la presencia de Hezbollah en el país habían

Israel lanzó más de 500 ataques en Siria que destruyeron en torno al 70-80% de sus capacidades militares

cesado –ambos eran aliados clave de Bashar al-Assad–, el Gobierno de Netanyahu no tenía excusas ni motivos para continuar bombardeando Siria. El posicionamiento fue interpretado como una señal de que la tensión podría escalar si Israel persistía en sus actividades en territorio sirio. Algunos análisis subrayaron que la caída de al-Assad fue celebrada en Israel por debilitar a Irán, pero que el antiguo régimen sirio había sido en la práctica un “rival conveniente” en las últimas décadas.

90 La Línea Alfa, al oeste, delimita el área que no pueden traspasar las fuerzas israelíes, mientras que la Línea Bravo, al este, demarca la zona que no pueden cruzar las fuerzas de Siria. Entre ambas líneas se encuentra la zona de separación desmilitarizada.

Mapa 3.1. Género, paz y seguridad



■ Países que son escenario de conflicto armado y/o tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género 2024

3. Género, paz y seguridad

- 22 de los 37 conflictos armados que tuvieron lugar en 2024 se dieron en países donde existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad de género.
- El 79% de los conflictos de alta intensidad transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajo de igualdad de género.
- En 2024 Naciones Unidas señaló que se había registrado una cifra récord de casos de violencia sexual durante 2023, con un aumento del 50% respecto al año anterior.
- El Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia que permitirá garantizar protección internacional a las mujeres víctimas de violencia de género, en consonancia con el Convenio de Estambul que reconoce esta violencia como una forma de persecución.
- Organizaciones de mujeres de Myanmar denunciaron la violencia sexual cometida por las Fuerzas Armadas birmanas en el marco del conflicto armado.
- La escalada del conflicto en RDC fue acompañada de un aumento generalizado de la violencia sexual.
- En relación a Israel-Palestina, la Comisión Internacional de Investigación Independiente de la ONU alertó sobre el uso sistemático por parte de Israel de la violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género contra la población palestina.
- 600 organizaciones de la sociedad civil exigieron al Consejo de Seguridad que se fortaleciera la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad.
- Activistas feministas sirias reclamaron formar parte activa del nuevo proceso político.

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales.¹ Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre la población como consecuencia de las desigualdades de género y la intersección con otros ejes de desigualdad y también cuáles son las aportaciones que las mujeres y la población LGTBIQ+ están haciendo a la construcción de la paz. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Desarrollo de Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Desarrollo de Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

1 El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales. Esta aproximación debe ir unida a un análisis interseccional que relacione el género con otros factores que estructuran el poder en una sociedad, como la clase social, la raza, la etnicidad, la edad, o la sexualidad, entre otros aspectos que generan desigualdades, discriminaciones y privilegios.

Tabla 3.1. Países que son escenario de conflicto armado con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género²

Nivel bajo de igualdad		
Afganistán	Malí (2) Malí Región Sahel Occidental	RDC (3) RDC (este) RDC (este-ADF) RDC (oeste)
Burkina Faso Región Sahel	Níger (2) Región Lago Chad Región Sahel Occidental	Siria
Chad Región Lago Chad	Nigeria Región Lago Chad	Somalia (2) Somalia Somalia (Somalilandia-SCC Khamuto)
Egipto Egipto (Sinaí)	Palestina Israel – Palestina	Sudán
Iraq		Yemen
India (2) India (Jammu y Cachemira) India (CPI-M)	Pakistán (2) Pakistán Pakistán (Baluchistán)	
Nivel medio-bajo de igualdad		
Camerún (2) Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) Región Lago Chad	Etiopía (2) Etiopía (Amhara) Etiopía (Oromiya)	

3.1. Desigualdades de género

Para evaluar la situación de desigualdad de género en los países afectados por conflictos armados y/o tensiones se han utilizado los datos proporcionados por el Índice de Desarrollo de Género (IDG) elaborado por el PNUD. Este índice mide las disparidades con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH)³ entre los géneros. El valor del Índice de Desarrollo de Género se calcula a partir de la proporción entre los valores del IDH para mujeres y hombres.⁴ El IDG incluye cinco agrupaciones de países según la desviación absoluta de la paridad de género en los valores del IDH.

De acuerdo con el IDG, los niveles de igualdad entre hombres y mujeres fueron medio-bajos

o bajos en 43 países, la mayoría situados en África, Asia y el Pacífico y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **22 de los 37 conflictos armados que tuvieron lugar en 2024 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de género** –Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental,⁵ RDC (este), RDC (este-ADF), RDC (oeste), Somalia, Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo), Sudán, Afganistán, India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M), Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Egipto (Sinaí), Iraq, Israel-Palestina, Siria, Yemen– y **nivel medio-bajo de igualdad de género** –

**22 de los 37
conflictos armados
que tuvieron lugar
en 2024 se dieron
en países donde
existían niveles
bajos o medio-bajos
de igualdad de
género**

- 2 Tabla elaborada a partir de los datos de conflictos armados de la Escola de Cultura de Pau y de los datos sobre países con nivel bajo y medio-bajo en igualdad del Índice de Desarrollo de Género del PNUD señalados en el Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024 (últimos datos sobre IDG disponibles). Se señala en negrita el país y debajo de cada país se especifica el conflicto o conflictos armados en ese país en 2024. Entre paréntesis se señala el número de conflictos armados en ese país cuando hay más de uno.
- 3 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable (longevidad), el conocimiento (educación) y un nivel de vida decente (ingreso per cápita). Para más información, véase PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024. Salir del estancamiento. Reimaginar la cooperación en un mundo polarizado*, PNUD, 2024.
- 4 Para establecer los diferentes niveles de desigualdad en los países se ha utilizado la clasificación que propone el PNUD, por la que los países se dividen en cinco grupos según la desviación absoluta de la paridad de género en los valores del IDH. Grupo 1: países con un alto nivel de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta inferior al 2,5%); grupo 2: países con un nivel medio-alto de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 2,5% y el 5%); grupo 3: países con un nivel medio de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 5% y el 7,5%); grupo 4: países con un nivel medio-bajo de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 7,5% y el 10%); y grupo 5: países con un bajo nivel de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de la paridad de los géneros superior al 10%).
- 5 El conflicto de Región Sahel Occidental se ha contabilizado como uno de los 20 conflictos armados en países con niveles bajos de igualdad. Este conflicto involucra a tres países con nivel bajo de igualdad (Malí, Côte d'Ivoire y Níger) y un país con nivel medio-bajo (Burkina-Faso).

Tabla 3.2. Países que son escenario de tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género⁶

Nivel bajo de igualdad		
Afganistán Afganistán – Pakistán Argelia Benín Burkina Faso Chad (2) Chad Chad – Sudán Côte d'Ivoire Djibouti Egipto (2) Egipto Etiopía – Egipto – Sudán Guinea Guinea Bissau India (4) India (Manipur) India (Nagalandia) India – China India – Pakistán	Irán (5) Irán Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán) Irán (programa nuclear) Israel – Irán Malí Marruecos Marruecos – Sáhara Occidental Níger Nigeria (3) Nigeria Nigeria (Biafra) Nigeria (Delta del Níger) Palestina	Pakistán (3) Pakistán Afganistán – Pakistán India – Pakistán RDC (2) RDC RDC – Rwanda Siria Israel – Siria Sudán Sudán – Sudán del Sur Togo Uganda Yemen Yemen (al-houthistas) – Israel, EEUU, Reino Unido
Nivel medio-bajo de igualdad		
Bangladesh Etiopía (5) Etiopía Etiopía – Egipto – Sudán Etiopía – Somalia Etiopía – Sudán Eritrea – Etiopía	Laos Rwanda (3) Rwanda Rwanda – Burundi RDC – Rwanda Tayikistán (3) Tayikistán Tayikistán (Gorno-Badakhshan) Kirguistán – Tayikistán	Uzbekistán (2) Uzbekistán Uzbekistán (Karakalpakistán)

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya). **No existían datos** sobre RCA y Sudán del Sur, países en los que transcurre un conflicto armado respectivamente.

En cuanto a intensidad de los conflictos, 15 de los 19 conflictos armados de violencia de alta intensidad de 2024 (79% de los casos) transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajo de igualdad y en el caso de Sudán del Sur no había datos del IDG. Asimismo, en otros ocho países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles altos de igualdad (Libia, Colombia, Tailandia, Rusia, Ucrania, Israel) o medios (Burundi, Mozambique, Filipinas, Myanmar, Türkiye), de acuerdo con el IDG. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, **48 de las 116 tensiones activas durante el año 2024 transcurrieron en países en los que existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad**.

El 79% de los conflictos de alta intensidad transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajos de igualdad de género

3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de utilidad para el análisis de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico y permite dar visibilidad a aspectos generalmente obviados en este análisis tanto en términos de causas como de consecuencias.

3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

Al igual que en años anteriores, durante 2024 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de

6 Tabla elaborada a partir de los datos de escenarios de tensión de la Escola de Cultura de Pau y de la información sobre países con nivel bajo y medio-bajo en igualdad del Índice de Desarrollo de Género del PNUD señalados en el Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024 (últimos datos sobre IDG disponibles). Se señala en negrita el país y debajo de cada país se especifica la tensión o tensiones en ese país en 2024. Entre paréntesis se señala el número de tensiones en ese país cuando hay más de una.

los conflictos armados activos.⁷ Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales.

En abril se celebró el **debate abierto anual en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados** y el secretario general presentó su informe anual sobre esta cuestión. La representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, señaló en 2024 que durante 2023 se había registrado una cifra récord de casos de violencia sexual verificados por Naciones Unidas, 3.688 casos, lo que implicaba un aumento del 50% con respecto al año anterior.⁸ Las mujeres y las niñas representaron el 95% de los casos verificados. Patten señaló que mientras las cifras de gasto militar no cesaban de aumentar, los presupuestos destinados a ayuda humanitaria y apoyo a las víctimas se habían visto seriamente reducidos.

El secretario general en su informe sobre violencia sexual en conflictos armados de 2024 –que abarcaba el periodo entre enero y diciembre de 2023– advirtió de que el surgimiento de nuevos conflictos durante el año y la intensificación de otros conflictos previamente activos y agravados por la proliferación de armamento y la creciente militarización, incrementaron significativamente la exposición de la población civil a situaciones de violencia sexual en contextos de conflicto. Tanto actores armados estatales como no estatales perpetraron violaciones, violaciones múltiples y secuestros contra civiles, en un contexto marcado por niveles históricos de desplazamientos tanto internos como internacionales. El secretario general señaló que la violencia sexual afectó de manera profunda los medios de subsistencia de las mujeres y obstaculizó el acceso de las niñas a la educación. Paralelamente, generó beneficios ilícitos para grupos armados y organizaciones extremistas violentas, que recurrieron, entre otras prácticas, a la trata de personas con fines de explotación sexual en el marco de dichos conflictos.

En el informe también se constató el impacto de la proliferación de armas pequeñas y ligeras y de municiones

en actos de violencia sexual perpetrados por actores armados en conflictos en la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán y Sudán del Sur, contribuyendo de manera directa a su incremento. La circulación indiscriminada de armamento fomentó la persistencia de conflictos armados y generó condiciones propicias para la comisión de actos de violencia sexual con un alto grado de impunidad. El secretario general apuntó a investigaciones de Naciones Unidas realizadas en zonas con datos disponibles, que certificaban que en aproximadamente entre el 70% y el 90% de los incidentes de violencia sexual relacionada con conflictos

se emplearon armas pequeñas o ligeras. También destacó el papel relevante que la violencia sexual desempeñó en la economía política de la guerra, al proporcionar beneficios económicos a los grupos armados mediante la trata de personas con fines de explotación sexual y, de forma creciente, a través de secuestros, en los cuales las amenazas o actos de violencia sexual eran utilizados para exigir rescates de mayor cuantía.

El informe anual presentado en 2024 por el secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos –que abarcaba el periodo entre enero y diciembre de 2023– identificó 58 actores armados sobre los que existían sospechas fundadas de haber cometido o de ser responsables de violaciones u otras formas de violencia sexual en contextos de conflicto armados en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.⁹ La mayoría de actores señalados por Naciones Unidas en su anexo eran actores armados no estatales aunque también se señalaron actores armados gubernamentales, en un total de 11 contextos (Haití, Iraq, Malí, Myanmar, Nigeria, RCA, RDC, Siria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur).

De los 11 contextos analizados en el informe del secretario general de la ONU, según las clasificaciones de la Escola de Cultura de Pau 9 eran países con conflictos armados de niveles elevados de intensidad durante 2023 –Iraq, Malí, Myanmar, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (este), RDC (este – ADF), Siria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur–, superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la

7 La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los “incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes, que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego”. UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

8 Secretario General de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General*, S/2024/292, 4 de abril de 2024.

9 Ibid.

Tabla 3.3. Actores armados y violencia sexual en conflictos¹⁰

El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos publicado en abril de 2024 incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual o de ser responsables de ellos en situaciones de conflicto armado, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.¹¹

	AGENTES ESTATALES	AGENTES NO ESTATALES
Haití		Familia G9 y aliados – Jimmy Cherizier (alias Barbeque); Pandilla 5 segundos – Johnson André (alias Izo); Pandilla Grande Ravine – Renel Destina; Pandilla Kraze Barye – Vitel'homme Innocent; Pandilla 400 Mawozo – Wilson Joseph
Iraq		Dáesh
Malí		Al-Qaida en el Magreb Islámico, parte de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin; Ansar Eddine; Grupo de Autodefensa de los Tuaregs Imgads y sus Aliados, miembro de la Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel; Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, miembro de la Coordinadora de Movimientos de Azawad
Myanmar	Fuerzas armadas de Myanmar y su Guardia de Fronteras	
Nigeria		Provincia de África Occidental del Estado Islámico; Jama'atu Ahlis-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (Boko Haram).
RCA	Fuerzas armadas nacionales	Azande Ani Kpi Gbe; Coalición de Patriotas por el Cambio – el ex-Presidente François Bozizé; Retorno, Reclamación y Rehabilitación – General Bobbo; antibalaka Mokom-Maxime Mokom; antibalaka Ngaïssona-Dieudonné Ndomate; Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana – Noureddine Adam y el Comandante de zona Mahamat Salleh; Movimiento Patriótico por la República Centroafricana – Mahamat Al-Khatim; Unidad por la Paz en la República Centroafricana – Ali Darrassa; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano – Abdoulaye Miskine; Ejército de Resistencia del Señor; Revolución y Justicia
RDC	Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo; Policía Nacional Congoleña	Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano-Janvier; Fuerzas Democráticas Aliadas; Chini ya Tuna; Cooperativa para el Desarrollo del Congo; Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda; Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri; Fuerzas Patrióticas Populares-Ejército del Pueblo; Ejército de Resistencia del Señor; Mai-Mai Apa Na Pale; Mai-Mai Kifuafula; Mai-Mai Malaika; Mai-Mai Perci Moto; Mai-Mai Raia Mutomboki; Mai-Mai Yakutumba; Movimiento 23 de Marzo (M23); Nduma Defensa del Congo; Nduma Defensa del Congo Renovado – facción liderada por el “General” Guidon Shimiray Mwissa y facción liderada por el Comandante Gilbert Bwira Shuo y el Comandante Adjunto Fidel Malik Mapenzi; Ngumino; Nyatura; Milicias twas; Twigwaneho; Unión de Patriotas para la Defensa de los Ciudadanos; Milicia Zaire.
Siria	Fuerzas gubernamentales, incluidas las Fuerzas de Defensa Nacional, los servicios de inteligencia y las milicias progubernamentales.	Ahrar al-Sham; Ejército del Islam; Dáesh; Hay'at Tahrir al-Sham.
Somalia	Ejército Nacional Somalí; Policía Nacional Somalí y sus milicias aliadas; Fuerzas de Puntlandia	Al-Shabaab
Sudán	Fuerzas Armadas Sudanesas	Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Fuerzas de Apoyo Rápido; Ejército de Liberación del Sudán-Abdul Wahid
Sudán del Sur	Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur; Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur	Ejército de Resistencia del Señor; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición - pro-Machar

violencia sexual relacionada con el conflicto armado. Según los datos de la Escola de Cultura de Pau, esos 10 conflictos siguieron activos en 2024 y con niveles de alta intensidad. Además, en seis de ellos también se produjo una escalada de la violencia durante el 2024 con respecto al año anterior –Haití, Myanmar, RDC

(este), Siria, Sudán y Sudán del Sur. La mayoría de los actores armados identificados por el secretario general de la ONU como responsables de violencia sexual en conflictos armados eran actores no estatales, algunos de los cuales habían sido incluidos en las listas de organizaciones terroristas de Naciones Unidas.

10 En esta tabla se utiliza la denominación de los actores armados tal y como aparece recogida en el informe del secretario general y que no necesariamente coincide con la utilizada en los capítulos 1 y 2 de este anuario.

11 Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General*, S/2024/292, 4 de abril de 2024.

En **Sudán**, informes de 2024 sobre violencia sexual revelaron el impacto desproporcionado de la guerra en las mujeres y las niñas, con continuas denuncias de violación, matrimonios forzados, esclavitud sexual y trata de mujeres y niñas, especialmente en Jartum, Darfur y Kordofán. Según datos de OCHA de 2024, desde el comienzo de la guerra en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el número de personas que necesitan servicios de atención a víctimas de violencia de género en Sudán aumentaron en más de un millón, llegando a 4,2 millones de personas, y se esperaba que esa cifra alcance los 6,9 millones al finalizar el año.¹² ONU Mujeres denunció al finalizar el año que desde diciembre de 2023, el número de personas sobrevivientes de violencia de género, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, que necesitan atención aumentó un 288%, lo que ilustra la magnitud de la crisis.¹³ En abril de 2024 la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, y la Subsecretaria General de Asuntos Humanitarios y Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia, Joyce Msuya, realizaron una declaración conjunta en la que hacían un llamamiento a una mayor participación internacional para combatir la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el país. Sin embargo, durante el año las denuncias de violencia sexual en el conflicto fueron una constante, tal y como constató la Misión Internacional Independiente de Investigación para Sudán que, en su informe de octubre de 2024, denunció a los paramilitares de las RSF como el principal grupo armado responsable de cometer actos de violencia sexual a gran escala en las zonas bajo su control, incluyendo violaciones en grupo y secuestros y detenciones de víctimas en condiciones que constituyen esclavitud sexual. Si bien el informe también documentó casos que involucran a las Fuerzas Armadas Sudanesas y grupos armados aliados, el informe concluye que la mayoría de las violaciones y la violencia sexual y de género fueron cometidas por las RSF, en particular en el Gran Jartum y los estados de Darfur y Gezira.

En lo concerniente a la **República Democrática del Congo (RDC)**, la escalada del conflicto en los últimos años y en especial en los últimos meses en el este del país fue acompañada de un aumento generalizado de la violencia sexual perpetrada por las Fuerzas Armadas

congolesas (FARDC), los diferentes grupos armados locales y proxy de los países vecinos (en especial, el M23, aliado de Rwanda), los cascos azules de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUSCO) así como incluso los propios miembros de las comunidades de origen de las víctimas de la violencia sexual, según un nuevo informe publicado por Physicians for Human Rights (PHR).¹⁴ La ONU estimó que solo en 2023 se reportaron al menos 113.000 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto.¹⁵ PHR reclamó una acción inmediata del Gobierno de RDC, los países vecinos y la comunidad internacional para apoyar a las sobrevivientes y poner fin a la violencia.

Se produjeron numerosas denuncias sobre violencia sexual en la guerra en Sudán y la misión internacional independiente señaló a los paramilitares RSF como principal responsable

En paralelo, nuevos datos pusieron de manifiesto el alcance y la escalada de la violencia sexual en RDC como consecuencia de la guerra. Según datos publicados en 2024 por la organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF), sus equipos atendieron a más de dos víctimas y supervivientes de violencia sexual cada hora en el país durante 2023, lo que supone un total de 25.166 víctimas de violencia sexual, el 98% de las cuales eran mujeres y niñas.¹⁶ Además, solo en los primeros cinco meses de 2024 la organización atendió a un total de víctimas equivalentes a casi el 70% de todo 2023. En años anteriores MSF había atendido a alrededor de 10.000 víctimas por año, lo que evidencia la escalada de la situación en las cinco provincias en las que opera la organización –Kivu Norte, Kivu Sur, Ituri, Maniema y Kasai Central, aunque el 91% de las víctimas atendidas se concentraban en Kivu Norte, epicentro del conflicto. La mayoría de las víctimas eran mujeres desplazadas como consecuencia de la violencia derivada de la ofensiva que está perpetrando el grupo armado M23, y en un 71% de los casos procedían de los campos de población desplazada situados en los alrededores de Goma, la capital de Kivu Norte, lo que evidencia el clima de inseguridad en los campos de población desplazada. En este sentido, otra investigación realizada por MSF en cuatro campos de población desplazada que acogen a alrededor de 200.000 personas situadas alrededor de Goma señalaba que una de cada 10 mujeres de entre 20 y 44 años habían sido violadas entre noviembre de 2023 y abril de 2024.¹⁷

En **Haití**, varias ONG y organizaciones internacionales advirtieron sobre un incremento sin precedentes en la violencia sexual contra mujeres y menores.

12 UN Women, “Women grapple with unplanned pregnancies after sexual violence in Sudan war”, 10 de abril de 2024.

13 *Ibid.*

14 Physicians for Human Rights, “Massive Influx of Cases”. Health Worker Perspectives on Conflict-Related Sexual Violence in Eastern Democratic Republic of the Congo, PHR, Reliefweb, 22 de octubre de 2024.

15 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, *Aplicación del Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región*, S/2024/278, 1 de abril de 2024.

16 Médicos sin Fronteras, ‘We are calling for help’: Sexual violence in DRC. 2023 Annual Report, MSF, 30 de septiembre de 2024.

17 Simons, Erica, *Enquête transversale de mortalité rétrospective, d'évaluation nutritionnelle, violence et de couverture vaccinale contre la rougeole dans les sites de Bulengo, Elohim, Rusayo et Shabindu, Zones de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo*, RDC, MSF, abril de 2024.

UNICEF denunció que en 2024 la violencia sexual contra menores se había incrementado en un 1000%, especialmente por parte de grupos armados que controlan más del 80% del territorio del país. En la misma línea, HRW¹⁸ publicó un informe en el que señala que los grupos criminales han recurrido con frecuencia a la violencia sexual para infundir miedo en territorios rivales. Según HRW, aunque en 2024 disminuyeron los enfrentamientos entre grupos armados, se registró un drástico incremento de la violencia sexual. En esta línea, según el subclúster de Violencia de Género (que incluye organizaciones de mujeres de base, organizaciones internacionales y entidades gubernamentales), entre enero y octubre de 2024, casi 4.000 niñas y mujeres denunciaron violencia sexual, incluyendo violación en grupo, cometida principalmente por miembros de grupos criminales. Sin embargo, tanto ONGs como el Gobierno haitiano señalaron que tales cifras son solamente una parte de los casos reales, pues la mayoría de agresiones no suelen denunciarse. En sintonía con HRW, Amnistía Internacional¹⁹ denunció que los menores en Haití son sometidos a numerosas violaciones de los derechos humanos, incluyendo reclutamiento forzoso, violaciones y otras formas de violencia sexual, secuestros, asesinatos y lesiones, especialmente por parte de grupos armados.

Se registraron múltiples denuncias de violencia sexual en el contexto del conflicto armado en **Myanmar**, que hicieron referencia fundamentalmente a la acción de las Fuerzas Armadas birmanas, conocidas como Tatmadaw, como el propio secretario general de la ONU recogió en su informe sobre violencia sexual. La organización Women's League of Burma señaló que había documentado 492 casos de agresión sexual contra mujeres, incluidos al menos 13 casos en los que las mujeres fueron también asesinadas, entre el 1 de febrero de 2021 y junio de 2024. Asimismo, diferentes organizaciones expresaron su preocupación por el impacto que la ley de conscripción forzada podría tener sobre las mujeres. Si bien inicialmente esta ley de reclutamiento forzado no afectaba a las mujeres, durante 2024 se inició la inclusión de mujeres en los listados de personas entre 18 y 25 años que podrían ser reclutadas. Organizaciones de mujeres de Myanmar expresaron su preocupación por el riesgo frente a la violencia sexual al que se verían expuestas las jóvenes que fueran reclutadas, en un contexto institucional fuertemente opresivo y lesivo frente a los derechos de las mujeres. En un comunicado conjunto de varias organizaciones de mujeres resaltaron los riesgos de violencia sexual y esclavitud sexual en un contexto de total impunidad para las fuerzas de seguridad birmanas.²⁰ En paralelo a los impactos en

términos de violencia sexual, las organizaciones de mujeres denunciaron que persistieron las detenciones y torturas de mujeres activistas, así como los asesinatos e impactos específicos de género del conflicto armado.

Con relación a la invasión de **Rusia** en **Ucrania** y guerra entre ambos países, diversos actores continuaron documentando y denunciando violencia sexual. El informe de diciembre de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania –basado en el trabajo de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés)– cuantificaba en 370 los casos documentados por ACNUDH de violencia sexual perpetrada por miembros de las fuerzas armadas de Rusia y otros agentes y autoridades rusas desde febrero de 2022.²¹ De estos, 252 casos se habían cometido contra hombres, 106 contra mujeres, 10 contra niñas y 2 contra niños. La gran mayoría de los casos documentados (306, un 82,7%) se produjeron en situaciones de detención, principalmente contra personas con estatus de prisioneros de guerra (209), así como contra civiles detenidos (88) y personas médicas retenidas (nueve). Según ACNUDH, otros 62 casos de violencia sexual documentados se produjeron contra civiles en áreas residenciales. Estos casos afectaron principalmente a mujeres y niñas (45 mujeres, 10 niñas, seis hombres y 1 niño). Por otra parte, desde el inicio de la invasión y hasta noviembre de 2024, ACNUDH documentó 51 casos de violencia sexual cometida por fuerzas armadas de Ucrania, agentes y servicios penitenciarios ucranianos. La mayoría de los casos (43) fueron perpetrados contra hombres. 26 de los 51 casos se cometieron contra personas con estatus de prisioneros de guerra y otros 25 contra civiles. Según ACNUDH, los casos consistieron en gran medida en amenazas de violación y de otras formas de violencia sexual.

En lo que respecta a **Israel-Palestina**, la Comisión Internacional de Investigación Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre el uso sistemático de la violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género desde el 7 de octubre de 2023. En una de sus investigaciones, la Comisión concluyó que los abusos y crímenes que involucran violencia sexual, reproductiva y de género se habían intensificado notoriamente, con la intención de vengar y castigar de manera colectiva a la población palestina por los ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados palestinos el 7-O.²² El informe

18 HRW, [Haiti: Scarce Protection as Sexual Violence Escalates](#), 25 de noviembre de 2024.

19 Amnistía Internacional, [Gangs' Assault on Childhood in Haiti](#), 12 de febrero de 2025.

20 [Public Statement: Women's Organizations Condemn Junta's Forced Conscription Law in Myanmar](#). Politics for Women Myanmar, Rory Women's Union – Dawei, Sisters 2 Sisters, Spouses of People's Soldiers, Women Advocacy Coalition – Myanmar, Women Alliance Burma, Women's League of Burma, Women Peace Network. 8 de marzo de 2024.

21 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, [Report on the human rights situation, 1 September - 30 November 2024](#), OHCHR, 31 de diciembre de 2024.

22 Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, ["More than a human can bear": Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since 7 October 2023](#), A/HRC/58/CRP.6, 13 de marzo de 2025.

de la Comisión destaca que funcionarios israelíes han tratado de movilizar apoyo a la campaña militar sobre la Franja de Gaza apelando a la violencia sexual contra mujeres israelíes el 7-O, desde una lógica en la que se interrelacionan nociones de masculinidad, militarismo y la idea de dignidad de la nación asociada a los cuerpos de las mujeres. Para potenciar ese mensaje se han utilizado vídeos de prisioneros palestinos que presuntamente confiesan actos de violación y otras formas de violencia sexual durante el 7-O. La Comisión explicita que no da validez a estas confesiones, obtenidas bajo abusos y torturas. El informe recopiló numerosos antecedentes sobre hechos de violencia sexual contra hombres y menores palestinos, incluyendo violaciones, golpes en genitales y desnudos forzados, entre otras. Muchas de estas prácticas han sido filmadas, fotografiadas y disseminadas como una forma de humillar e intimidar. La investigación aborda los abusos cometidos contra prisioneros y prisioneras palestinas, que en el caso de ellas también han incluido abusos y amenazas de carácter sexual.

La Comisión analizó hechos acontecidos en centros de detención, pero también durante las operaciones militares israelíes y en controles militares, incluyendo actos cometidos por militares israelíes, pero también por colonos, muchas veces en connivencia con las fuerzas israelíes. En este contexto, las mujeres palestinas han sido sometidas a registros invasivos y obligaciones de desvestirse o quitarse el velo en público, insultos con alusiones de carácter sexual y acciones de acoso online, a través de la divulgación de fotografías y videos. Este tipo de prácticas y otras, se dan en un contexto social y normativo que expone especialmente a las mujeres y a las niñas a situaciones de humillación y estigma social. El informe también detalla la destrucción de infraestructuras de salud sexual y reproductiva en Gaza –incluidas maternidades y la principal clínica de fertilidad de la Franja–, las afectaciones en la salud de las mujeres y niñas palestinas –por ejemplo, en lo referente al acceso a productos de higiene menstrual– y los severos impactos en la atención pre y postnatal de las mujeres palestinas. Entre otras consecuencias, por ejemplo, se identifica un aumento en la mortalidad materna, abortos, nacimientos prematuros y elevadas tasas de infecciones urinarias en mujeres y niñas por las condiciones insalubres de vida en Gaza derivadas de las operaciones militares. La violencia sexual, reproductiva y de género es considerada por la Comisión como un instrumento para acentuar la subordinación de la población palestina y mantener el sistema de opresión impuesto por Israel. Cabe destacar que la Comisión publicó en 2024 otro informe sobre los hechos del 7-O y la responsabilidad de Hamas y otros grupos palestinos. Este informe planteó que existían indicios

razonables sobre la comisión de crímenes de violencia sexual en Israel el 7-O, pero admitió que con los datos disponibles no era posible determinar la identidad de los perpetradores y si formaban parte del ala militar de Hamas, de otros grupos palestinos o si eran civiles de Gaza.²³ En ambos informes, la Comisión constató que Israel no había accedido a sus peticiones de información, ni permitido el acceso de sus investigadores para realizar sus pesquisas.

En **Yemen**, informes de la ONU y organizaciones de la sociedad civil yemení alertaron sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado. El Grupo de Expertos de la ONU sobre Yemen documentó hechos de violencia sexual contra mujeres, hombres y menores que, en su mayoría, se atribuyeron a los al-houthistas. Este grupo armado, que controla la capital y la mayor parte del norte del país, detuvo a mujeres por diversos motivos –presuntos vínculos con otras partes del conflicto, afiliación política, relación con organizaciones de la sociedad civil o de defensa de los derechos humanos o por actos catalogados por ellos como “indecentes”– y algunas de ellas fueron agredidas sexualmente y sometidas a pruebas de virginidad. En este sentido, Naciones Unidas advirtió que en Yemen –y en otros contextos, como Libia– la violencia sexual se utilizó también como táctica para silenciar a las mujeres, desincentivar sus actividades en la esfera pública e impedir su participación política. Informes de la ONU también alertaron de que bandas de traficantes vinculados a algunas de las partes en conflicto en Yemen también cometían abusos y malos tratos, incluyendo violencia sexual, contra población migrante y solicitantes de asilo, en especial mujeres y menores. Diversas voces alertaron también sobre la violencia sexual contra menores en Yemen. En su informe sobre la situación de las niñas y los niños en conflictos armados, el secretario general de la ONU verificó más de una veintena de casos en 2023, atribuidos a diversos actores armados que operan en el país. No obstante, organizaciones yemeníes alertaron que los casos que se conocen públicamente constituyen la punta del iceberg de un fenómeno invisibilizado, que se ha incrementado y que se ve favorecido por la impunidad y la falta de acceso a servicios. Organizaciones como Rasd Foundation for Human Rights, Justice for Yemen Coalition o Center for Strategic Studies to Support Women and Children in Yemen documentaron casos y denunciaron que las partes en conflicto no estaban abordando la violencia sexual contra menores y que estaban encubriendo estos crímenes, directamente conectados con el deterioro de la situación de seguridad en el país. Asimismo, advirtieron sobre los déficits en materia de protección y atención especializada a menores –tanto niños como niñas– víctimas de violencia sexual.²⁴

23 Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, *Detailed findings on attacks carried out on and after 7 October 2023 in Israel*, A/HRC/56/CRP.3, 10 de junio de 2024.

24 Daraj, “Unseen Wounds: How Sexual Violence Traps Yemen’s Children in Silence”, Daraj, 19 de noviembre de 2024.

3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

A lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, así como de lucha contra la impunidad en diferentes estamentos judiciales. A continuación se recogen algunas de ellas.

En relación a la **respuesta de Naciones Unidas frente a la explotación y abusos sexuales por parte de personal que desempeña servicio bajo su mandato**, continuó desplegándose la estrategia impulsada por el secretario general de la ONU, António Guterres, desde 2017, centrada en cuatro áreas de acción: dar prioridad a los derechos y dignidad de la víctimas; poner fin a la impunidad mediante el fortalecimiento de la presentación de denuncias; colaborar con los Estados, sociedad civil y actores asociados; y mejorar las comunicaciones. En su informe relativo a 2024 el secretario general²⁵ señaló que durante ese año se presentaron 675 denuncias de explotación y abusos sexuales contra miembros del personal de las Naciones Unidas (292) y contra partners asociados (383). En el 27% de esas denuncias había víctimas infantiles. Respecto a las denuncias específicas contra misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales, se presentaron 102 denuncias frente a las 100 presentadas en 2023. Así pues, por tercera vez en los últimos diez años se presentaron 100 o más denuncias en un solo año. Las víctimas identificadas con las denuncias de 2024 fueron 125, de las que 98 eran adultas y 27 menores. Nuevamente dos misiones concentraron la mayoría de denuncias. El 82% de las denuncias eran relativas a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC y la antigua Misión de Observación de las Naciones Unidas en la RDC, con 44 denuncias, y la MINUSCA, con 40 denuncias. El resto de las denuncias fueron relativas a las misiones UNMISS (7), la antigua UNMIL (4), la FPNUL (1), la antigua MINUSTAH (1), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (1), la UNAMA (1) y el Equipo de Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover la Rendición de Cuentas del Estado Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh, cuyo mandato ha concluido recientemente (1), y la UNSOS (2).

Nuevamente se señalaron retos pendientes, especialmente en lo relativo a la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad. A pesar de la valoración positiva que se hace del aumento de las denuncias, el informe constata que sigue habiendo grandes obstáculos para denunciar, lo que conlleva que los casos de explotación y abusos sexuales sean superiores

a los denunciados como consecuencia de las desiguales estructurales de poder y las dificultades de las víctimas para acceder a los sistemas de justicia.

En **Sudán del Sur**, según la Misión de las Naciones Unidas en el país (UNMISS), el conflicto armado que asola ciertas zonas del país siguió causando graves daños a mujeres y niñas. Según sus datos, al menos el 65% de las mujeres y niñas sufren violencia física, sexual y de género a lo largo de su vida.²⁶ En el año 2024 el Gobierno creó el primer grupo de trabajo nacional para combatir la violencia sexual de género y relacionada con los conflictos. Asimismo, la ONU instó al gobierno a tomar medidas urgentes para acelerar la aprobación de una nueva ley contra la violencia de género, establecer tribunales especializados, un centro de protección familiar, un fondo específico para proteger y apoyar a las víctimas, y fomentar la participación ciudadana para cambiar las normas sociales que perpetúan esta violencia.

Según el informe de ONU Mujeres y UNODC publicado en noviembre de 2024 sobre el feminicidio en el mundo, África tuvo la tasa más alta de feminicidio relacionado con la pareja en 2023. Con un estimado de 21.700 víctimas de feminicidio por parte de la pareja o de un familiar en 2023, África es la región con el mayor número de víctimas en términos agregados. Además, África sigue registrando el mayor número de víctimas de feminicidio por parte de la pareja o de un familiar en relación con su población (2,9 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2023).²⁷

En este sentido, en los últimos años se ha producido un incremento de la violencia sexual y de género en diferentes países del continente africano, en especial en **Kenya**. Entre septiembre de 2023 y enero de 2024, se registraron 7.107 casos de violencia sexual y de género, según destacó el secretario del gabinete de presidencia, Musalia Mudavadi.²⁸ Según el Africa Data Hub, al menos 546 mujeres fueron asesinadas entre 2016 y 2023. En los primeros cuatro meses de 2024, al menos 100 mujeres fueron asesinadas, principalmente por parejas o conocidos. Unas 10.000 mujeres salieron a las calles de Kenya en enero de 2024 para denunciar la gravedad de la situación y para exigir medidas para hacer frente a esta problemática, en lo que se convirtió en la mayor manifestación contra la violencia de género de la historia del país.²⁹ Un total de 14 mujeres fueron asesinadas en enero, lo que puso de manifiesto la gravedad de la situación. Entre el 39 y el 47% de las mujeres del país han sufrido violencia de género en algún momento de su vida, según análisis.³⁰ Como consecuencia de ello,

25 Secretario General de la ONU, *Special measures for protection from sexual exploitation and abuse. Report of the Secretary-General*, A/78/774, 2024.

26 UNifeed, "South Sudan / Conflict-Related Sexual Violence Taskforce", 2 de diciembre de 2024.

27 UNODC y UN Women, *Femicides in 2023: Global Estimates of Intimate Partner/Family Member Femicides*, Naciones Unidas, 2024.

28 Africanews, "Kenya's response to gender violence: a plan for women's protection", Africanews, 20 de diciembre de 2024.

29 Al Jazeera, "Stop killing us!: Thousands march to protest against femicide in Kenya", Al Jazeera, 27 de enero de 2024.

30 Sidibé, Safourata, "Kenya's urgent battle against femicide", Equal Measures 2030, 27 de noviembre de 2024.

el Gobierno declaró la violencia de género como la amenaza de seguridad más urgente del país y estableció una unidad policial especializada, además de un grupo de trabajo presidencial para abordar el problema.³¹

En Perú un tribunal penal condenó a 10 exmilitares por violencia sexual entre 1984 y 1995, durante el conflicto armado en el país que tuvo lugar y que se extendió entre 1980 y 2000. La condena hacía referencia a los abusos contra nueve mujeres en la región de Huancavelica en el caso conocido como Manta y Vilca, que fue calificado por el tribunal como de crimen de lesa humanidad. Las penas contra los militares oscilaron entre 12 y seis años de cárcel. Este caso fue incluido en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003, lo que dio paso a que la fiscalía provincial iniciase investigaciones preliminares. Las mujeres afectadas eran campesinas y quechuahablantes de las comunidades próximas a las bases militares de Manta y Vilca e incluyeron menores de edad que sufrieron abusos sexuales por parte de soldados de estas bases. El Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia señala que más de 5.300 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El juicio se extendió durante casi 10 años y era la primera vez que en Perú tenía lugar un juicio por violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el contexto del conflicto armado interno. El caso de Mata y Vilca era el tercero de estas características en América Latina, tras los casos de Sepur Zarco y Achí en Guatemala, en los que un tribunal nacional juzgaba la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad.

En los últimos años los niveles de violencia y letalidad relacionados con el conflicto armado en Iraq se han reducido relativamente en comparación con los años más críticos del conflicto. No obstante, desde una perspectiva de género se han registrado una serie de hechos y tendencias preocupantes, que involucran vulneraciones y amenazas a los derechos de las mujeres y las niñas iraquíes. Uno de estos asuntos, que está estrechamente vinculado al legado del conflicto armado en el país, es el aumento de la violencia de género y las elevadas tasas de abusos físicos, psicológicos y sexuales que padecen las mujeres y niñas iraquíes en sus propios hogares. Un estudio publicado en 2024 y que documenta las experiencias de 1.200 mujeres y menores expuestas a este tipo de violencias entre los años 2018 y 2023 expuso la conexión de la violencia a nivel doméstico con la condición de combatientes, excombatientes o víctimas de violencias por parte de los perpetradores.³² En 2022, los casos oficialmente registrados de violencia de género a nivel doméstico alcanzaron los 33.000, pero se estima que la realidad

sería muy superior debido a la infradenuncia de este tipo de agresiones. Pese a ello, a nivel político persistía el bloqueo al proyecto de ley que pretende sancionar la violencia doméstica. En contraste, otro de los temas de especial preocupación en 2024 fue la iniciativa parlamentaria que amenazaba con, entre otras cosas, legalizar el matrimonio infantil. Grupos de la sociedad civil iraquí se movilizaron durante 2024 para expresar su rechazo e intentar evitar que el Parlamento introdujera cambios a la Ley del Estatuto Personal que podían suponer la luz verde a matrimonios de niñas de hasta nueve años y de niños a partir de 15 –la norma establecía la edad legal para el matrimonio en 18 años. La tasa de matrimonio infantil de niñas se ha ido incrementando en Iraq en los últimos años y UNICEF estima que el 28% de las niñas en Iraq se habían casado antes de la edad legal de 18 años. Adicionalmente, un 22% de los matrimonios no registrados –que no se legalizan, pero son oficiados por autoridades tribales o religiosas– involucraban a niñas menores de 14 años.³³ La presión de la sociedad civil y en especial de organizaciones de mujeres lograron algunas mejoras respecto al borrador original de la ley, pero la reforma a la Ley del Estatuto Personal que se aprobó a principios de 2025 consagró en la práctica la existencia de regímenes legales diferentes –los matrimonios podrán regirse por la ley vigente desde 1959 o por un nuevo código que se desarrollará según la jurisprudencia islámica– y dio luz verde a que menores de 15 años puedan casarse dependiendo de su “madurez” y si cuentan con el permiso de un juez. Activistas iraquíes alertaron que la autoridad concedida a los clérigos para oficiar matrimonios también puede abrir la puerta a legalizar matrimonios temporales, denunciados como vehículos para la explotación sexual.

En Iraq, pero también en otros países como Libia o Yemen, autoridades locales o estatales han adoptado medidas para prohibir el uso del término “género” y están persiguiendo las actividades de quienes trabajan por la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. En casos como el de Yemen, las restricciones de movimiento impuestas a las mujeres han obligado a muchas de ellas a trabajar en un ámbito territorial limitado o a abandonar sus empleos.

3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de género. La impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos continuó siendo un elemento recurrente.

31 Star, “DCI boss Amin forms special team to probe femicide cases”, Star, 30 de enero de 2024.

32 Ceasefire Centre for Civilian Rights, *War waged in the home: Rethinking conflict and gender-based violence in Iraq*, 16 de abril de 2024.

33 Basiktey, Nibras, “Iraq’s new family law amendment could potentially legalize child marriage—and fracture the country”, Atlantic Council, 5 de septiembre de 2024.

El Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia que permitirá **garantizar protección internacional a las mujeres víctimas de violencia de género**, ya que establece que en estos casos se puede considerar a las mujeres como un grupo social objeto de persecución. El Tribunal señaló que la directiva 2011/95/UE – que establece los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional en la UE– debe interpretarse en consonancia con el Convenio de Estambul que reconoce la violencia contra las mujeres como una forma de persecución y tiene como objetivo prevenir, perseguir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Según esta sentencia las mujeres pueden considerarse como pertenecientes a un determinado grupo social, cuando se demuestre que, en su país de origen, están sometidas, por motivo de su género, a actos de violencia física o psicológica, incluidos la violencia sexual y la violencia doméstica. Además, el Tribunal también señala que en el caso de que no se den las condiciones para otorgar el estatuto de refugiada, las mujeres que lo soliciten podrán ser beneficiarias de protección subsidiaria, sobre todo cuando se encuentren “en caso de amenaza real de que las maten o de que un miembro de su familia o de su comunidad cometa actos de violencia contra ellas debido a una presunta transgresión de normas culturales, religiosas o tradicionales”. La sentencia se produjo en respuesta a la petición de una mujer turca en Bulgaria, víctima de malos tratos por su marido en su país de origen, cuya petición de asilo fue rechazada inicialmente por este país al señalar que no cumplía los requisitos para obtener el estatuto de refugiada.

El Observatorio de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC) publicó los datos anuales sobre **desplazamientos internos** y señaló que la cifra de personas desplazadas como consecuencia de los conflictos y la violencia fue de 73,5 millones, un incremento considerable con respecto a años anteriores.³⁴ Varios conflictos destacaron por tener impactos de género especialmente graves en términos de desplazamiento interno, de acuerdo con las cifras y análisis de este centro. Por ejemplo, señaló que la mayor parte de las personas que se desplazaron en la provincia de Cabo Delgado en Mozambique como consecuencia de los ataques de la insurgencia armada fueron mujeres y menores. En Sudán, IDMC señaló que 12 millones de personas estaban en situación de riesgo de sufrir violencia de género y que las mujeres y niñas desplazadas habían sido sometidas a violencia sexual en centros de acogida y en puestos de control ilegales que debían atravesar en su búsqueda de lugares seguros.

En Yemen, el 80% de las 4,8 millones de personas desplazadas internas eran también mujeres y niñas y niños con serias dificultades para acceder a ingresos y servicios básicos. Esto estaba teniendo consecuencias muy negativas en términos de abandono escolar, trabajo infantil y matrimonios precoces. En Siria, el 80% de los dos millones de personas viviendo en situación de desplazamiento en las gobernaciones del norte eran mujeres y menores. También se señaló cómo las mujeres habían sido sometidas a violencia de género en el contexto del desplazamiento forzado en Papúa Nueva Guinea.

Se deterioró la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica en **Türkiye**, con prohibiciones sistemáticas de manifestaciones, uso excesivo de fuerza, detenciones masivas y cargos criminales contra personas manifestantes según señaló un informe de la relatora de derechos humanos del Consejo de Europa.³⁵ Las prohibiciones de manifestaciones y eventos se dirigieron especialmente contra actos organizados por mujeres defensoras de derechos humanos, población LGTBIQ+ y defensores medioambientales o en apoyo de esos grupos, según el informe. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos denunciaron detenciones y criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos y constructoras de paz, como la reconocida activista Nimet Tanrıku, detenida en noviembre de 2024 junto a otros defensores, sindicalistas y políticos. Colectivos de derechos humanos como las Madres de los Sábados –madres y familiares de víctimas de desapariciones forzadas, y que desde 1995 realizan vigiliadas los sábados– continuaron afrontando restricciones a la libertad de reunión pacífica. Por otra parte, en 2024 las autoridades turcas impusieron nuevas destituciones y detenciones de alcaldes/alcaldesas electas, principalmente del partido prokurdio DEM. Analistas señalaron los impactos de género de la política del Gobierno desde 2016 de destituciones forzadas de alcaldías electas prokurdas y su sustitución por funcionarios designados por el Gobierno. Entre los impactos se incluyen el cierre de políticas, programas y servicios de apoyo a mujeres, como el cierre de centros de acogida para mujeres y de cooperativas de mujeres.³⁶ Según esos análisis, en los períodos posteriores a las elecciones locales de 2014 y 2019, 132 mujeres políticas de partidos prokurdos fueron desplazadas de sus funciones en alcaldías (el DEM –y partidos predecesores– concurren a las elecciones con co-alcaldes/co-alcaldesas).³⁷ El clima general de restricciones a los derechos de las mujeres y de otros sectores de la población contrastó en 2024 con el inicio de un proceso de diálogo entre el Gobierno y el PKK.³⁸

34 Internal Displacement Monitoring Centre, *Global Report on Internal Displacement 2025*, IDMC, 2025.

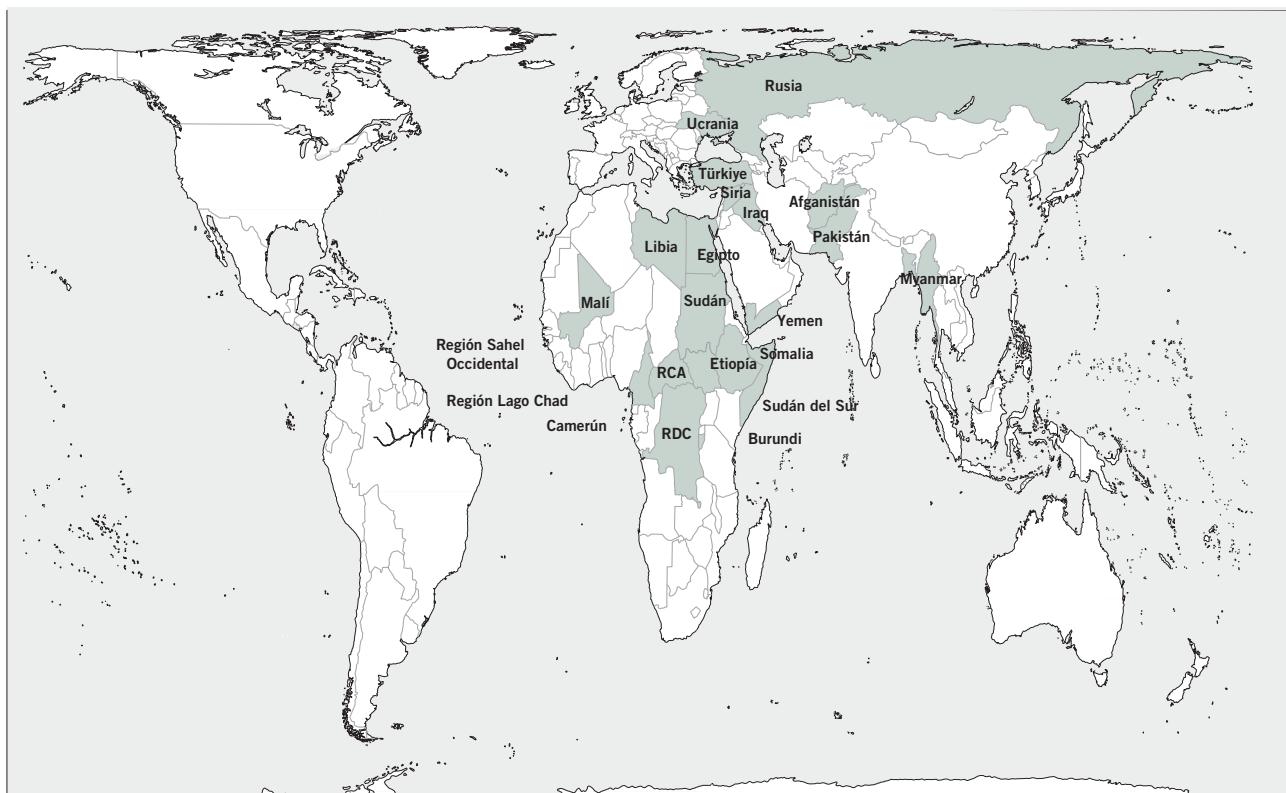
35 Comisionada para los derechos humanos del Consejo de Europa, *Memorandum on freedom of expression and of the media, human rights defenders and civil society in Türkiye*, Consejo de Europa, 5 de marzo de 2024.

36 Bodette, Megha, “Erdogan Declares War on Kurdish Mayors, Again”, *Kurdish Peace Institute*, 19 de noviembre de 2024.

37 Ibid.

38 Véase el resumen sobre Türkiye (PKK) en el capítulo 1 (Conflictos armados) de este informe y en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria 2025.

Mapa 3.2. Países en conflicto armado con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+



■ Conflictos armados en 2024 en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+

Tabla 3.4. Conflictos armados en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+³⁹

ÁFRICA	ASIA	ORIENTE MEDIO	EUROPA
Burundi Camerún (Ambazonia/North West y South West) Etiopía (Amhara) Etiopía (Oromiya) Libia Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental República Centroafricana RDC (este) RDC (este-ADF) RDC (oeste) Somalia Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) Sudán Sudán del Sur	Afganistán Myanmar Pakistán Pakistán (Baluchistan)	Egipto (Sinaí) Iraq Siria Yemen	Turquía (PKK) Rusia – Ucrania

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2025. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2025 y de Kellyn Botha, *Nuestras Identidades Bajo Arresto. Un panorama global de la aplicación de normas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo y las expresiones de género diversas*, ILGA, 2023.

Por otro lado, en **Sierra Leona** el Parlamento aprobó un proyecto de ley histórico que penaliza el matrimonio infantil con penas de cárcel de hasta 15 años o multas considerables para los perpetradores. Posteriormente, el 2 de julio el presidente Julius Maada Bio promulgó la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil de 2024.⁴⁰

En 2024, 25 de los 37 conflictos armados activos transcurrieron en países en los que la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) había documentado la aplicación de legislación o políticas criminalizantes contra población LGTBIQ+, agravando los impactos de la violencia en

39 Esta tabla incluye conflictos armados en 2024 en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+.

40 Amnesty International, “[Sierra Leone: Historic bill to end child marriage passed – sustained efforts to raise community awareness must now follow](#)”, AI, 3 de julio de 2024.

estos contextos. 16 de los 21 conflictos armados de alta intensidad de 2024 (76% de los casos) tuvieron lugar en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+. Fueron los conflictos de Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Myanmar, Pakistán, Rusia-Ucrania, Iraq, Siria y Yemen. En el caso de la invasión rusa y conflicto armado entre Rusia y Ucrania, solo Rusia era señalada como país con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+, y no Ucrania, según los datos de ILGA.

En **Uganda**, la ley que afianzaba la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo aprobada por el Parlamento el 21 de marzo de 2023 y ratificada meses después por el presidente Yoweri Museveni, volvió a ser ratificada por el Tribunal Constitucional a principios de abril de 2024, negándose el alto tribunal a revocarla.⁴¹ Activistas ugandesas habían impugnado la ley ante los tribunales.

El Gobierno de **Georgia** adoptó en septiembre una ley anti-LGTBIQ+ (Ley sobre la Protección de los Valores de la Familia y los Menores), que entró en vigor en diciembre. La ley restringe la libertad de expresión y reunión a la población LGTBIQ+, con prohibición de actos del Orgullo LGTBIQ+, ilegalización del cuidado afirmativo de género (como cirugías de reafirmación de género), prohibición de uniones civiles no heterosexuales, de adopción y acogida por parte de ciudadanía LGTBIQ+ y de referencias positivas en medios de comunicación y con censura a las referencias a la no heterosexualidad en medios de comunicación, publicidad, educación y obras creativas, entre otros ámbitos. Una treintena de organizaciones de la sociedad civil de Georgia, incluyendo colectivos LGTBIQ+ y organizaciones de mujeres, denunciaron la legislación en un comunicado conjunto.⁴² La Comisión de Venecia del Consejo de Europa había emitido en junio opinión desfavorable a su adopción.⁴³ Entre otros elementos, el Consejo de Venecia lamentaba el lanzamiento de una iniciativa legislativa sobre “temas muy sensibles” en un periodo de protestas masivas y tensiones políticas y sociales. Un día después de la adopción de la ley, fue asesinada la activista trans y modelo Kesaria Abramidze. Organizaciones de derechos humanos alertaron del deterioro de la situación para la población LGTBIQ+ en

16 de los 21 conflictos armados de alta intensidad de 2024 (76%) tuvieron lugar en países donde ILGA había documentado la aplicación de legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+

Georgia. En 2024 la población LGTBIQ+ autoorganizada no organizó actos públicos del Día del Orgullo, debido a los ataques violentos de 2023 por parte de grupos de extrema derecha y ultranacionalistas, y por los riesgos

de nuevos hechos violentos en el contexto de elecciones parlamentarias de 2024 y la retórica gubernamental de hostilidad anti-LGTBIQ+. Además, el colectivo Tbilisi Pride denunció que la homofobia estaba siendo usada como arma política de Rusia contra la sociedad y la soberanía de Georgia.⁴⁴ En años anteriores y en el marco de la tensión sociopolítica en Georgia en torno al modelo de gobierno y a su orientación en política exterior –con escalada de crisis en 2024–, el Gobierno georgiano ha ampliado la retórica anti-LGTBIQ+.

En **Iraq**, en abril de 2024, el Parlamento aprobó criminalizar la homosexualidad a través de una normativa que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con penas de entre 10 y 15 años de prisión. La norma también estableció sanciones de entre uno y tres años contra las personas que se sometan a intervenciones quirúrgicas para “imitar a las mujeres”.⁴⁵ La medida se produjo en un contexto caracterizado también por iniciativas recientes de sectores políticos iraquíes orientadas a prohibir el uso del término “género” y otras que pretenden reformas legales que suponen retrocesos para los derechos de las mujeres y las niñas del país.

3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad

En octubre se celebró una nueva sesión del debate abierto sobre mujeres, paz y seguridad y el secretario general presentó su informe anual sobre esta cuestión.⁴⁶ El tema central del año 2024, en un debate presidido en el Consejo de Seguridad por Suiza, fue el papel de las mujeres en la construcción de la paz en un entorno internacional cambiante. En su convocatoria

41 AP, “Ugandan court upholds anti-gay law that allows the death penalty in some cases”, AP, 4 de abril de 2024.

42 VVAA, Declaración de las organizaciones de la sociedad civil de Georgia, 17 de septiembre de 2024.

43 Comisión de Venecia, Consejo de Europa, *Opinion on the draft constitutional law on protecting family values and minors, Adopted by the Venice Commission at its 139th Plenary Session (Venice, 21-22 June 2024)*, CDL-AD(2024)021, 25 de junio de 2024.

44 Tbilisi Pride, “Announcement: No Pride Week in 2024”, 14 de junio de 2024.

45 Human Rights Watch, “Iraq: Repeal Anti-LGBT Law New Law Fuels Violence, Discrimination”, HRW, 20 de mayo de 2024.

46 Secretario General, *Las mujeres, la paz y la seguridad. Informe del Secretario General de la ONU*, S/2024/671, 24 de septiembre de 2024.

Tabla 3.5. Países con Planes de Acción Nacional 1325 que participan en negociaciones y procesos de paz

Camerún (2017)	EEUU (2011)
Chad (2023)	Filipinas (2009)
Malí (2012)	Armenia (2019)
Marruecos (2022)	Azerbaiyán (2020)
Mozambique (2019)	Chipre (2020)
RCA (2014 y 2019)	Georgia (2018)
RDC (2010)	Moldova (2018)
Senegal (2011)	Serbia (2017)
Somalia (2021)	Kosovo (2014)
Sudán (2020)	Ucrania (2016)
Corea del Sur (2014)	Palestina (2015)
Corea (2014)	Yemen (2019)
Colombia (2024)	Líbano (2019)

*Entre paréntesis año de aprobación del primer Plan de Acción Nacional de cada país

al debate, Suiza destacó que en los últimos años se habían constatado tendencias preocupantes en cuanto a la representación de las mujeres en los procesos de paz. El informe anual del secretario general de la ONU señaló en esta línea que los datos sobre participación de mujeres en procesos de paz recogidos por ONU Mujeres apuntaban a “una falta general de avances en la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en los procesos de paz”. Partiendo del análisis de más de 50 procesos de paz durante 2023, las mujeres constituían el 9,6% de los negociadores, el 13,7% de los mediadores y el 26,6% de los firmantes de acuerdos de paz y alto el fuego, aunque en este último caso, el porcentaje desciende al 1,5% si se excluye la firma de los acuerdos alcanzados en Colombia. En paralelo a la participación de las mujeres y en lo que respecta a los contenidos de las negociaciones de paz, el informe del secretario general señala que de 31 acuerdos firmados en 2023, solo 8 (26%) incluían en su texto referencias a las mujeres, las niñas el género o la violencia sexual. Esta cifra está por debajo del 28% de 2022. El informe también constató una deriva negativa en lo que respecta a la financiación de cuestiones relacionadas con igualdad de género en el ámbito de cooperación y ayuda humanitaria destacando, por ejemplo, que la ayuda bilateral a las organizaciones de mujeres y feministas y de defensa de los derechos de las mujeres en contexto de conflicto representó únicamente el 0,3% de la ayuda bilateral a los contextos de conflicto durante el periodo 2021-2022 y esto representaba una disminución con respecto al periodo 2019-2020.

Por otra parte, en el marco del debate abierto, más de 600 organizaciones de la sociedad civil de 110 países se dirigieron al Consejo de Seguridad con diez propuestas encaminadas a fortalecer la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. En los últimos años se ha constado una reducción de la participación de la sociedad civil en los debates del Consejo de Seguridad y una menor inclusión de aspectos relacionados con la

agenda mujeres, paz y seguridad en las resoluciones aprobadas por el Consejo, como consecuencia de las crecientes tensiones entre sus miembros, así como el rechazo a esta agenda por parte de diferentes gobiernos y actores internacionales. Las demandas de la sociedad civil incluían prevenir, evitar y poner fin a los conflictos; reformar el Consejo de Seguridad; detener las transferencias de armas; defender los derechos humanos de las mujeres; promover la justicia reproductiva; insistir en la presencia de mujeres en las mesas de negociaciones; apoyar la acción humanitaria basada en principios; exigir justicia y rendición de cuentas; apoyar a los movimientos feministas; y financiar la paz, no la guerra.

En 2024, 26 países que protagonizaban negociaciones de paz contaban con un Plan de Acción, que debía promover la participación de las mujeres en estos procesos. Once de estos países estaban en África (Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mozambique, RCA, RDC, Senegal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur), dos en Asia y el Pacífico (Corea del Sur y Filipinas), dos en América (EEUU y Colombia), ocho en Europa (Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Moldova, Serbia, Kosovo y Ucrania), tres en Oriente Medio (Líbano, Palestina y Yemen). Así, en 34 de las 52 negociaciones activas durante 2024 al menos uno de los actores gubernamentales negociadores contaba con un plan de acción que debía guiar su actuación en materia de inclusión de la perspectiva de género y de participación de las mujeres. Las 34 negociaciones y procesos de paz fueron: Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste); Chad; Etiopía-Egipto-Sudán; Malí; Marruecos-Sáhara Occidental; Mozambique; RCA; RDC; Senegal (Casamance); Somalia; Somalia-Somalilandia; Etiopía-Somalia (Somalilandia); Sudán; Sudán del Sur; Sudán-Sudán del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; Corea del Norte-EEUU; Filipinas (MILF); Filipinas (MNLF); Filipinas (NDF); Colombia (ELN); Colombia (EMC); Colombia (FARC); Colombia (Segunda Marquetalia);

Armenia-Azerbaiyán; Chipre; Georgia (Abjasia, Osetia del Sur); Moldova (Transnistria); Rusia-Ucrania; Serbia-Kosovo; Israel-Palestina; Palestina; Yemen; e Israel-Líbano (Hezbollah). Sin embargo, a pesar de contar con esta herramienta, la mayoría de negociaciones de paz continuaron excluyendo a las mujeres y tampoco se incorporó la perspectiva de género en las dinámicas de los procesos de paz, poniendo en entredicho la eficacia de los planes de acción como herramientas de construcción de paz inclusiva.

En **Colombia**, el Gobierno presentó el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad de la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (PAN 1325). Junto a la presentación del PAN 1325 estableció un Comité de Seguimiento y Monitoreo Del Plan. El plan fue presentado por la Vicepresidenta del país, Francia Márquez que señaló la importancia del plan, destacando no solo el papel crucial que las mujeres han desempeñado en la construcción de la paz en Colombia, sino que de los 9,8 millones de víctimas del conflicto armado el 50,2% son mujeres. El plan de acción colombiano establece siete líneas estratégicas: mujeres guardianas de paz; salud y bienestar para mujeres y niñas en sus diversidades; vida libre de violencias contra las mujeres; acceso a las justicias de las mujeres y niñas víctimas; protección del territorio de las acciones de grupos armados ilegales e industrias extractivas generadoras de violencias; autonomía económica de las mujeres; y movilidad humana de mujeres desplazadas, refugiadas y migrantes. El PAN 1325 se elaboró mediante un proceso consultivo y participativo que contó con las aportaciones de 1.500 mujeres de diferentes territorios del país. El comité de seguimiento estará conformado por los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Igualdad y Equidad y este último detentará la secretaría técnica.

3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz

Varios procesos de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2024.⁴⁷ Organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa.

En **Sudán**, a principios de julio tuvo lugar en Kampala (Uganda) una conferencia titulada “Diálogo de Paz de Mujeres de Sudán”, que reunió a más de 60 mujeres

sudanesas de diversos orígenes. Entre las participantes se encontraban representantes de organizaciones de paz, grupos políticos, organizaciones religiosas y la sociedad civil. La conferencia fue convocada por el presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, a través de la Oficina del Enviado Especial para la Mujer, la Paz y la Seguridad y bajo el liderazgo del Grupo de Alto Nivel de la UA sobre Sudán (HLP-Sudán). Su objetivo era elevar las voces de las mujeres sudanesas en los esfuerzos para lograr una paz y seguridad duraderas en Sudán. En ella, las participantes demandaron una inclusión integral de las mujeres sudanesas en todos los procesos políticos y de paz, y que se asegure que las voces de las mujeres no solo sean escuchadas, sino que sean fundamentales para la toma de decisiones y la implementación. Asimismo, también se formuló una agenda común para un proceso de paz que tenga en cuenta las cuestiones de género y se centre en la inclusión, la justicia y el desarrollo sostenible. El diálogo concluyó con el compromiso de seguir abogando por la representación de las mujeres en las próximas negociaciones de paz. Las participantes también acordaron criterios para seleccionar a las mujeres representantes en el diálogo político y elaboraron estrategias para construir un movimiento de mujeres de base amplia en apoyo de la paz en Sudán.

En la tensión existente entre **Sudán – Sudán del Sur**, principalmente enmarcada en la violencia en el enclave de Abyei, si bien se observaron algunos avances con relación al aumento de la participación de las mujeres en las actividades relacionadas con la reconciliación y la mediación, con una mayor presencia de mujeres en las conferencias y comités de paz, su participación siguió siendo muy inferior a la de los hombres. Durante el año, las actividades realizadas para promover la participación de las mujeres lograron que en la conferencia que se celebró en Noong en mayo de 2024 entre comunidades dinka ngok y miseriya (137 participantes, incluidas 41 mujeres) participaran muchas más mujeres que en la conferencia anterior de noviembre de 2023 (118 participantes, incluidas 22 mujeres). En una de las sesiones de la conferencia se trataron las preocupaciones de género en la trashumancia y se pusieron de relieve los problemas y los riesgos que afrontan distintos grupos y la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Por otro lado, y en relación con la participación de las mujeres en los comités de protección comunitaria, que cuentan con 1.223 miembros, al finalizar el año 181 eran mujeres, siendo un número mayor que el año anterior.

En **Colombia** se constató la participación de mujeres en todas las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno y las diferentes insurgencias activas en el país en el marco de la política impulsada por el Ejecutivo colombiano y conocida como Paz Total. Hubo

⁴⁷ Para una información más exhaustiva sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz actualmente activos, puede consultarse en el anuario de la Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria editorial, 2025.

representación de mujeres tanto en las delegaciones negociadoras gubernamentales –la delegación del Gobierno en las negociaciones con el grupo armado ELN está encabezada por una mujer, Vera Grabe, desde el año 2003– como, en menor medida, en las de los grupos armados. No obstante, no se diseñaron ni implementaron mecanismos específicos de inclusión de mujeres y población LGTBIQ+ y diferentes organizaciones de mujeres señalaron que a los déficits en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC se unía un debilitamiento de la participación de las mujeres y de las agendas de género en las actuales negociaciones de paz.

En **Papúa Nueva Guinea**, Naciones Unidas propició la participación de varias mujeres en el principal espacio de negociación entre el Gobierno central y el Gobierno de Bougainville: el Órgano de Supervisión Conjunta (OSC). Concretamente, tres mujeres de la Cámara de Representantes del Bougainville, tres mujeres de diferentes departamentos del Gobierno de Bougainville, además de otras mujeres líderes con roles importantes en Bougainville, participaron en las reuniones del OSC y también de los Comités Técnicos Conjuntos. Por otra parte, en junio el Gobierno Autónomo de Bougainville presentó su Política de Igualdad de Género ante representantes ONU Mujeres y de los Gobiernos de Australia y Nueva Zelanda.

3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Durante 2024 tuvieron lugar diferentes iniciativas de construcción de paz lideradas y protagonizadas por organizaciones de mujeres de la sociedad civil. En este apartado se recogen algunas de ellas.

Durante todo el año continuaron activas diferentes iniciativas para impulsar el reconocimiento del **apartheid de género** como un crimen internacional. La campaña internacional fue impulsada por mujeres afganas e iraníes y tiene entre sus objetivos enmendar el Proyecto de Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad a fin de incluir el apartheid de género, incluyendo la dimensión de género, en la tipificación específica del crimen de apartheid. A este respecto, se solicitó el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, así como de gobiernos para impulsar el reconocimiento y tipificación de esta grave violación de los derechos humanos. La campaña tiene como objetivo la expansión de la definición legal de apartheid tanto en las legislaciones internacionales como en las nacionales. En esta misma línea se pronunció también el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas de Naciones Unidas.

En **Chipre** se creó en 2024 una nueva iniciativa de paz de mujeres, conocida como la Coalición Bicomunal de

Mujeres de Chipre (CWBC, por sus siglas en inglés) e integrada por mujeres de diferentes trayectorias y esferas políticas y profesionales, para promover una solución inclusiva al conflicto. En su comunicado fundacional,⁴⁸ destacan el triple objetivo de promover una solución urgente al conflicto en la isla; la participación plena, igualitaria y sustantiva de las mujeres de Chipre en todos los niveles del proceso negociador y la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones; y el fortalecimiento del papel de las mujeres en la construcción de paz, mediante la promoción de la cultura de paz y la reconciliación. La CWBC alertó en julio del estancamiento del proceso y llamó al secretario general a un rediseño de las negociaciones, para que el proceso no recaiga solo en la responsabilidad de los dos líderes y se adopte un enfoque más participativo y transparente. Esta nueva coalición realizó diversas actividades durante el año.

En **Sudán del Sur**, la Coalición de Mujeres de Sudán del Sur por la Paz (SSWCP, por sus siglas en inglés) en un foro celebrado en agosto en la capital de Etiopía, Addis Abeba, exigió un aumento de la participación de las mujeres en todos los procesos de paz y desarrollo que llegara al 35% de representación. La coalición, formada en septiembre de 2017, es una organización de más de 50 mujeres y organizaciones dirigidas por mujeres sursudanesas y de Kenia y Uganda. Sin embargo, en los diálogos enmarcados en la denominada Iniciativa Tumaini que se están desarrollando en Kenya, la participación de las mujeres en 2024 fue residual. La UNMISS informó que en apoyo a la inclusión y la participación de las mujeres en la Iniciativa y el proceso de paz en general, la institución prestó apoyo financiero a cinco mujeres líderes, que representaban al Bloque de Mujeres de Sudán del Sur, el mundo académico y las organizaciones de la sociedad civil, para que asistieran a la Iniciativa Tumaini en Nairobi como observadoras.

En **Siria**, la caída del régimen de Bashar al-Assad a principios de diciembre de 2024 abrió un nuevo escenario político en el país y alentó diversos posicionamientos de grupos de mujeres sirias respecto a la fase de transición. Desde un primer momento, activistas feministas sirias insistieron en la intención de las mujeres de formar parte activa en el nuevo proceso político en el país y elevaron la voz para que el trabajo que han estado desarrollando durante todos los años de conflicto armado fuera reconocido por las nuevas autoridades. Desde posiciones en las que se combinaron la esperanza y la cautela, activistas sirias expresaron su esperanza en las perspectivas que ofrecía la nueva etapa, pero paralelamente manifestaron dudas ante el historial de gobernanza de las nuevas autoridades en las áreas de Siria en las que habían mantenido el control (Idlib). En este sentido, reiteraron la necesidad de poner en el centro el respeto a los derechos de las mujeres. En este nuevo

48 Cyprus Women Bi-communal Coalition, *Press Statement: Launch of the Cyprus Women Bi-communal Coalition (CWBC)*, 11 de mayo de 2024.

y crucial contexto, numerosas organizaciones sirias – incluidas aquellas que en los últimos años habían estado trabajando desde la diáspora– presentaron sus hojas de ruta y su visión para el futuro del país. Grupos como el Syrian Women's Political Movement (WSWP) subrayaron la importancia de mantener el compromiso con los valores de libertad, democracia y justicia que inspiraron la revuelta contra el régimen de al-Assad en 2011; la necesidad de un proceso político inclusivo y de una representación efectiva y sustantiva de las mujeres en los espacios de decisión; la relevancia de garantizar la protección de civiles en todo el territorio sirio así como el retorno seguro de la población refugiada; y la importancia de impulsar mecanismos de justicia transicional para que todos los perpetradores de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos respondan por sus abusos, asumiendo que la rendición de cuentas y la justicia son aspectos fundamentales de una construcción de paz sostenible en el país. Los planteamientos de WSMP también demandaron poner atención a la situación de personas detenidas y desaparecidas, a la necesidad de apoyar a la sociedad civil y a la participación de la juventud en la definición de la nueva Siria.

En **Filipinas**, la Comisión de Mujeres de Bangsamoro, el Centro Filipino para el Islam y la Democracia y la Mindanao State University impulsaron un diplomado

en Mujeres, Paz y Seguridad (el primero en Filipinas) en el marco de la implementación tanto del Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad 2023-2033 –de ámbito nacional– como del Plan de Acción Regional de Bangsamoro sobre Mujeres, Paz y Seguridad 2023-2028, impulsado por el Gobierno de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, en ambos casos con la colaboración del sistema de Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales y gobiernos locales.

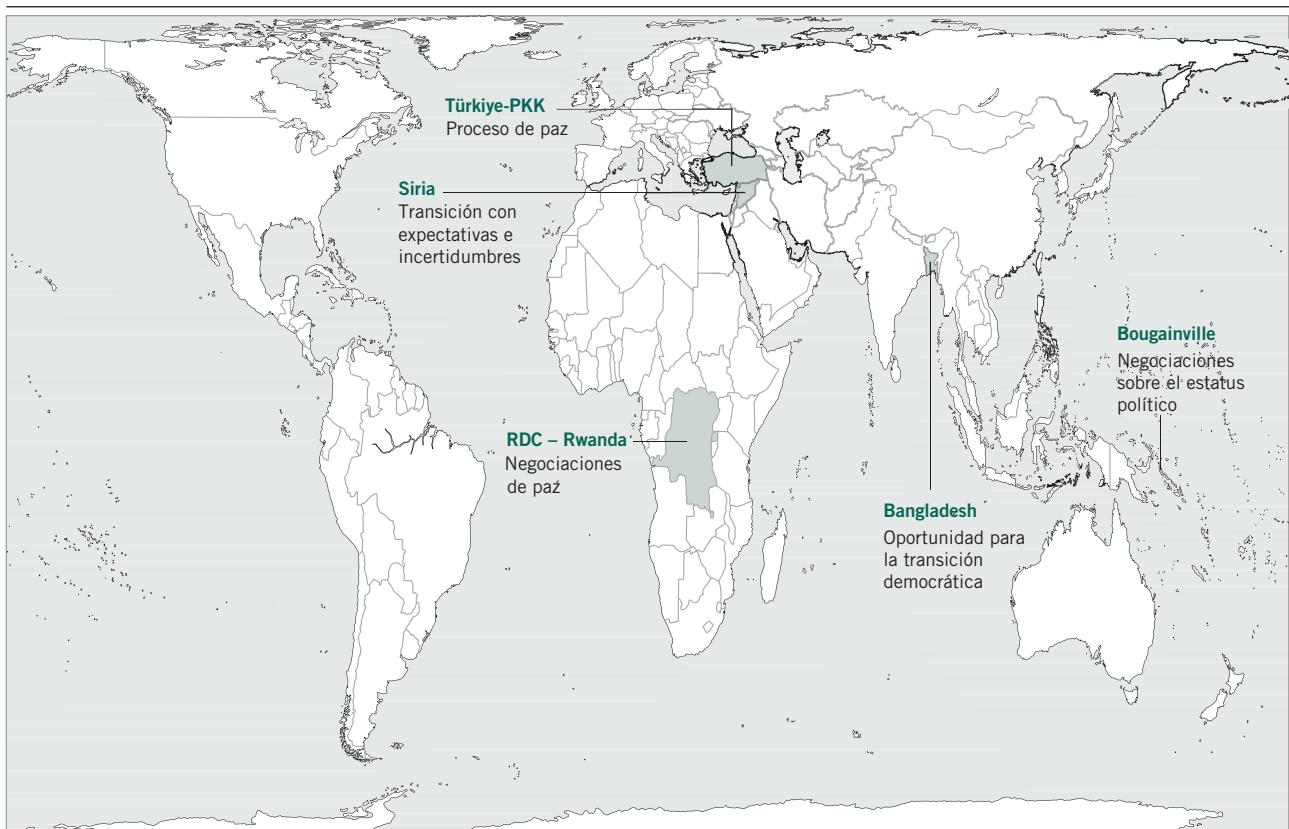
En **Venezuela**, durante el año prosiguió activo el Grupo de Mujeres por el Diálogo y la Paz de Venezuela, una iniciativa creada en 2022 por mujeres venezolanas de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos con el objetivo de incluir la perspectiva de género en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Dicho grupo, impulsado por la Asociación Cauce, trabaja entre otras cuestiones para la incorporación en las negociaciones entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria de todos los sectores sociales del país –en especial de mujeres, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, o mujeres con discapacidad–; la creación de un grupo de trabajo de seguimiento de los acuerdos con participación paritaria y representación de diversos sectores sociales; y la financiación de proyectos implementados por mujeres en la defensa de sus derechos, especialmente en el ámbito de la salud y la alimentación.

4. Oportunidades de paz

Tras analizar el año 2024 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el futuro. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades de paz identificadas hacen referencia a las negociaciones entre RDC y Rwanda que podrían contribuir a resolver uno de los conflictos más prolongados en África; a las posibilidades de una transición democrática en Bangladesh después de la severa crisis política que atravesó el país en 2024; a las negociaciones sobre el estatus político de la isla de Bougainville en Papúa Nueva Guinea; al nuevo diálogo entre Türkiye y el grupo armado kurdo PKK; y a las perspectivas de la nueva etapa histórica en Siria tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad a finales de 2024.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 4.1. Oportunidades de paz



- El análisis de cada contexto parte de la base de la revisión anual de los acontecimientos ocurridos en 2024 y recoge algunos elementos y dinámicas relevantes del primer cuatrimestre de 2025.

4.1. Una nueva oportunidad para la paz entre la República Democrática del Congo y Rwanda

La actual coyuntura diplomática en la región de los Grandes Lagos africanos presenta una nueva oportunidad de paz entre la República Democrática del Congo (RDC) y Rwanda, dos países cuyas relaciones han estado marcadas por décadas de violencia, desconfianza mutua y profundas heridas históricas. Tras años de fracasos diplomáticos y avances militares del grupo armado M23 –respaldado por Kigali, según la ONU, EEUU y la UE, entre otros–, **las recientes negociaciones en Doha y Washington han abierto una ventana de oportunidad que podría transformar el conflicto prolongado del este de la RDC.** El 18 de marzo, los presidentes Félix Tshisekedi y Paul Kagame, con la mediación del emir de Qatar, firmaron una declaración conjunta en Doha en la que llamaban a un alto el fuego inmediato. Poco después, el 25 de abril, los ministros de Exteriores de ambos países firmaron en Washington una “declaración de principios” bajo los auspicios de EEUU, comprometiéndose a redactar un acuerdo de paz antes del 2 de mayo, aunque cumplida esta fecha no se había alcanzado. Aunque los enfrentamientos persisten sobre el terreno y los actores involucrados han violado repetidamente treguas previas, estos pasos representan un nuevo impulso para resolver uno de los conflictos más prolongados y devastadores de África.

Sin embargo, para que esta oportunidad de paz sea sostenible y no otro intento fallido, resulta imprescindible hacer frente a las causas profundas que se encuentran en la génesis de este conflicto. No basta con acordar ceses al fuego o establecer negociaciones formales si no se abordan los factores históricos, sociales, económicos y políticos que han convertido el este de la RDC en un escenario recurrente de guerra. Uno de ellos es la cuestión de la propiedad y el uso de la tierra. Las disputas por tierras, agravadas por los desplazamientos forzados y la colonización informal de territorios abandonados, han sido sistemáticamente explotadas por grupos armados que instrumentalizan estas tensiones para reclutar combatientes y legitimar su violencia como una forma de defensa comunitaria. En paralelo, aunque los recursos naturales no explican por sí solos el origen del conflicto, su existencia ha contribuido a consolidar y perpetuar el statu quo de violencia e inestabilidad. El este de la RDC alberga vastas reservas de minerales estratégicos –como el coltán, el cobalto, el oro o el estaño–, altamente demandados por las industrias tecnológicas y energéticas globales, cuestión que ha despertado el interés de EEUU en facilitar iniciativas de diálogo entre las partes enfrentadas en los últimos años y se esperaba un acuerdo entre ambos Gobiernos sobre el acceso a

estos recursos minerales. Estos recursos han sido una fuente de financiación tanto para grupos armados como para redes de corrupción institucional, creando un ciclo perverso en el que el control territorial se traduce en poder económico. La explotación ilícita de minerales, a menudo con la complicidad de actores estatales y empresas internacionales, ha generado incentivos para prolongar el conflicto y ha reforzado una economía de guerra que excluye a las comunidades locales de los beneficios derivados de sus propios recursos.

Otro elemento fundamental en la génesis y persistencia del conflicto es la instrumentalización de las diferencias étnicas. Si bien las identidades étnicas por sí mismas no son la causa de la guerra, en el caso de la RDC, las élites políticas, los grupos armados y los intereses

externos han utilizado las divisiones étnicas como herramienta de movilización y de manipulación social. La comunidad tutsi congoleña, los banyamulenge, ha sido históricamente marginada y estigmatizada, lo que ha llevado a ciertos sectores a reivindicar su protección mediante las armas. El M23 se presenta como defensor de esta comunidad, cuyos miembros denuncian discriminación y violencia sistemática. En este contexto, el genocidio de 1994 en Rwanda y la posterior creación de las FDLR –grupo armado fundado por antiguos responsables del genocidio refugiados en RDC– han alimentado una narrativa de amenazas existenciales que tanto Kigali como sus opositores han explotado para justificar su acción militar.

La debilidad crónica del Estado congoleño, particularmente en sus instituciones de seguridad, justicia y gobernanza territorial, ha contribuido a mantener una situación en la que más de cien grupos armados operan con impunidad en el este del país. El Estado, lejos de representar una figura neutral o garante de derechos, ha sido percibido como ausente, parcial o incluso cómplice de ciertos actores armados. Esta falta de legitimidad institucional ha generado un vacío de poder ocupado por actores no estatales, y ha permitido que la violencia se convierta en un mecanismo habitual para resolver disputas y obtener beneficios. Los sucesivos gobiernos de Kinshasa han utilizado el conflicto como una herramienta de gestión del poder, mostrando escasa voluntad de implementar reformas estructurales que pudieran reducir las causas del conflicto.

Los procesos de paz impulsados hasta la fecha han fracasado en buena parte por reproducir estas

Las recientes negociaciones entre la RDC y Rwanda en Doha y Washington han abierto una ventana de oportunidad que podría transformar el conflicto prolongado del este de la RDC

dinámicas. Los acuerdos de Pretoria, los pactos de 2009 tras la rebelión del CNDP, y los más recientes procesos de Luanda y Nairobi, han estado marcados por una lógica de negociación entre élites políticas y militares, sin participación significativa de la sociedad civil, las comunidades afectadas, las mujeres o los jóvenes. Estas iniciativas, además, han carecido de mecanismos creíbles de implementación y seguimiento. La mayoría de los acuerdos se han basado en la buena voluntad de las partes sin establecer sanciones claras ante su incumplimiento. Como resultado, los compromisos han sido violados de forma sistemática, alimentando una cultura de impunidad y desconfianza. A esto se suma el fracaso del programa de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). Miles de excombatientes han terminado reingresando en grupos armados, alimentando un círculo vicioso de violencia. La reforma del sector de seguridad ha sido igualmente deficiente, manteniendo a las Fuerzas Armadas divididas, mal equipadas y, en muchas ocasiones, involucradas en violaciones graves de derechos humanos.

En este contexto, los esfuerzos diplomáticos recientes ofrecen una posibilidad real de cambio. La mediación de Qatar y el impulso estadounidense han introducido un nuevo dinamismo, alejándose de los procesos regionales anteriores que habían perdido credibilidad. La reunión entre Tshisekedi y Kagame en Doha supuso el primer contacto directo entre ambos mandatarios en tres años. Posteriormente, el compromiso firmado en Washington comprometió a ambas partes a cesar su apoyo a grupos armados y a respetar mutuamente su soberanía, lo cual sienta las bases para un acuerdo más amplio.

No obstante, esta nueva oportunidad también presenta riesgos considerables. El primero es el profundo déficit de confianza entre las partes. Desde el inicio de la ofensiva del M23 a finales de 2021, se han alcanzado al menos seis treguas que colapsaron en cuestión de días o semanas. Las acusaciones cruzadas de incumplimientos y el uso de sanciones internacionales –como las impuestas por la UE a líderes del M23 y altos funcionarios rwandeses– han añadido tensión a unas negociaciones ya frágiles. El M23, por ejemplo, se negó a participar en una reunión en Angola tras conocer dichas sanciones, alegando que estas socavaban la posibilidad de diálogo. A ello se suma el complejo

escenario político interno en la RDC. La reaparición del expresidente Joseph Kabila, acusado de mantener vínculos con el M23, ha generado divisiones en el seno del Gobierno. La detención de altos cargos de su administración, el levantamiento de su inmunidad parlamentaria y su visita a Goma han intensificado las sospechas y la polarización política. Esta fragmentación podría minar la capacidad del Gobierno de Tshisekedi para implementar eventuales acuerdos y debilitar su posición frente a las demandas del M23.

Por su parte, Rwanda sigue negando cualquier apoyo al M23, a pesar de que informes de Naciones Unidas han documentado la presencia de entre 4.000 y 7.000 soldados rwandeses en territorio congolés. La falta de sanciones efectivas contra Kigali y la ambigüedad de algunos actores internacionales han permitido que el statu quo persista. El peso simbólico del genocidio de 1994 y el sentimiento de culpa de Occidente frente a su inacción histórica siguen frenando una política más firme hacia el Gobierno de Paul Kagame.

Aun así, el proceso de paz en marcha podría marcar un punto de inflexión si se construye sobre bases sólidas. Para ello, deberá ser inclusivo –incorporando a la sociedad civil, comunidades locales y mujeres–, abordar las causas estructurales del conflicto –como la propiedad de la tierra, la marginalización étnica, la debilidad institucional y la explotación ilegal de recursos–, y establecer mecanismos creíbles de implementación, verificación y rendición de cuentas. Asimismo, será esencial mantener la presión internacional y garantizar que los incentivos económicos vinculados al proceso –como la inversión en minería e infraestructuras– beneficien a las poblaciones locales y no perpetúen nuevas formas de saqueo.

En conclusión, el proceso de paz entre la RDC y Rwanda representa una oportunidad histórica para romper con décadas de conflicto cíclico, procesos fallidos y promesas incumplidas. A diferencia de esfuerzos anteriores, esta vez convergen una mayor presión internacional y un posible interés geopolítico por estabilizar una región clave para los flujos globales de minerales estratégicos. No será un camino fácil ni lineal. La fragilidad política, la desconfianza mutua y la complejidad del conflicto auguran obstáculos importantes.

4.2. La crisis política de Bangladesh, una oportunidad de transición

La crisis política que atravesó Bangladesh durante 2024 abrió la oportunidad de una transición política de carácter democrático, como consecuencia de la caída del Gobierno de la líder de la Liga Awami, Sheik Hasina, y la conformación de un Gobierno interino que liderará el país hasta las próximas elecciones. El país, potencia de la industria textil internacional, pero en el que paradójicamente la población no goza de oportunidades de trabajo con garantías de respeto a los derechos laborales, especialmente para la población más joven, atravesó un periodo en 2024 de intensas protestas sociales como consecuencia del descontento social con la situación política y económica del país. La magnitud de las protestas forzó la dimisión de la primera ministra, que además tuvo que abandonar el país y exiliarse en la India, fruto de las acusaciones de corrupción y de uso excesivo de la fuerza en la respuesta a la contestación social en las calles del país, especialmente en la capital. En el marco de las manifestaciones de protesta y en un contexto de fuerte represión policial, se produjo la muerte de 1.400 personas según Naciones Unidas, dando lugar a una de las mayores crisis políticas del país de las últimas décadas.

El desencadenante de las protestas fue la negativa del movimiento estudiantil a aceptar la reinstauración por parte de la Corte Suprema del país de un sistema de cuotas que reservaba y adjudicaba el 30% de las plazas de funcionariado a los descendientes de quienes participaron activamente en la llamada Guerra de Liberación de Bangladesh, como se conoce al conflicto que derivó en la independencia del país de Pakistán en 1971. Tras la partición del subcontinente indio y la proclamación de la independencia de India y Pakistán, este último quedó dividido entre su parte oriental y occidental. Bangladesh surge como país independiente fruto de este nuevo proceso de división formal del hasta entonces territorio pakistaní. El descontento estudiantil que dio lugar a la crisis de 2024 hunde sus raíces en la falta de mejoras en las condiciones de trabajo y la precarización del mercado laboral para los estudiantes universitarios. El importante crecimiento económico resultado de la expansión de la industria textil bangladesí –uno de los principales abastecedores del mercado textil internacional– no ha derivado en una mejora de las oportunidades de trabajo para los estudiantes universitarios, puesto que las trabajadoras de esta industria son fundamentalmente mujeres con sueldos muy reducidos y condiciones de trabajo muy precarias. La cuota objeto de la disputa era percibida por amplios sectores de la población civil, y especialmente

los estudiantes, como una herramienta de consolidación del poder político por parte de la primera ministra y la reclamación de su eliminación se convirtió en el lema central de las protestas inicialmente.

Más de 1.400 personas murieron en las mayores protestas contra el Gobierno de las últimas décadas

La actitud despectiva de la primera ministra frente a las organizaciones de estudiantes –que llegó a calificarles de ser los descendientes de los colaboracionistas con Pakistán en la independencia–, unida a los ataques violentos por parte de organizaciones próximas al Gobierno y el cierre de todos los centros educativos llevaron a una escalada en la protesta. Si bien las manifestaciones habían tenido un carácter pacífico inicialmente, su enorme crecimiento tras las polémicas declaraciones de la primera ministra fue respondido por las autoridades con un aumento de la represión policial, lo que ocasionó la muerte de 20 estudiantes el 18 de julio. Estos acontecimientos forzaron el inicio de negociaciones con el Gobierno el 19 de julio y dos días después la Corte Suprema redujo la cuota al 7%. Sin embargo, las protestas persistieron y fueron aumentando con la participación de otros sectores de la sociedad civil. A principios de agosto se reanudaron los enfrentamientos entre policía y manifestantes y el 3 de agosto el movimiento estudiantil señaló que su única demanda era la dimisión de la primera ministra Hasina. Las manifestaciones congregaron a cientos de miles de personas en la capital el 5 de agosto, en la conocida como “marcha a Dhaka”. El jefe de las Fuerzas Armadas se negó a actuar contra los manifestantes con más contundencia, forzando la dimisión y posterior abandono del país por parte de Hasina, que se refugió en la India.

La salida de Hasina de Bangladesh abrió una oportunidad en el país en clave de democratización y diálogo entre diferentes actores políticos y sociales del país. Tras la marcha de la hasta entonces primera ministra, el presidente Muhammad Shahabuddin Chuppu disolvió el Parlamento, permitiendo así que avanzara el diálogo y fruto de las negociaciones entre el presidente, las Fuerzas Armadas y representantes estudiantiles se logró un acuerdo para un Gobierno interino encabezado por el economista y Premio Nobel Muhammad Yunus, personalidad de reconocido prestigio local e internacional. El nuevo Ejecutivo tenía el encargo de liderar el país para que pudieran convocarse nuevos comicios, que según la Constitución deberían tener lugar 90 días después de la disolución del Parlamento. El nuevo Gobierno interino –que incluyó en sus cargos a algunos representantes estudiantiles– se comprometió

con una agenda de reformas económicas, electorales judiciales y mediáticas, aunque limitada por el mandato interino. Así, se sustituyó al Jefe de la Corte Suprema y al Gobernador del Banco de Bangladesh y el país se adhirió a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En paralelo, en los meses siguientes a la conformación del Gobierno interino se produjeron detenciones de miembros del Gobierno de Hasina, incluyendo varios antiguos ministros. Asimismo, Hasina fue acusada junto a su familia de haberse apropiado de 5.000 millones de dólares destinados a infraestructuras, así como de desapariciones y tortura sistemática en centros de detención secretos y el Gobierno inició el proceso para pedir su extradición a la India.

Si bien en los meses posteriores persistió la tensión política en el país, el anuncio de Yunus de un calendario electoral con una previsión de que las elecciones tendrían lugar entre diciembre de 2025 y junio de 2026, unido al apoyo del jefe de las Fuerzas Armadas, quien señaló que respaldaban al Gobierno interino y se mantendrían al margen de la política, apuntando a un periodo de transición de 18 meses, sirvió para contener una nueva crisis. No obstante, el gobierno interino deberá hacer frente a múltiples retos en este nuevo periodo preelectoral para garantizar una transición razonablemente exitosa que permita consolidar algunas de las propuestas de reforma. Algunos de los obstáculos tienen que ver con los propios actores protagonistas de la transición política, puesto que una vez cesado el Gobierno de Hasina el protagonismo político pasó a manos del hasta entonces principal partido de la oposición, el BNP, cuya trayectoria al frente de Gobiernos anteriores de Bangladesh también adolecía de conductas autoritarias. Si bien el Gobierno interino logró impedir que se agravara la crisis económica que atraviesa del país y que en parte motivó las protestas, tanto el Gobierno interino como el nuevo Ejecutivo deberán hacer frente con la mayor urgencia

a esta situación para impedir un mayor deterioro de las precarias condiciones de vida de una gran parte de la población del país.

Otro de los retos que deberá abordar el Gobierno surgido de las urnas será las relaciones con los países vecinos, especialmente con India y Myanmar. En el caso de India, este país fue uno de los principales sustentos del Ejecutivo de Hasina y así es percibido por amplios sectores de la población. La tensión entre ambos países ha ido en aumento desde el cambio de gobierno. Sin embargo, su carácter de potencia regional hace imprescindible que Bangladesh cuide las relaciones con India, dadas las implicaciones políticas y económicas que este contacto tiene para el futuro del país. Al mismo tiempo, el deterioro en la situación de violencia de Myanmar podría tener graves consecuencias, especialmente por la escalada de la violencia en el estado Rakhine, puesto que Bangladesh ya es país de acogida de centenares de miles de personas refugiadas rohingya procedentes de esta zona de Myanmar.

Las expectativas a las que debe hacer frente tanto el Gobierno interino como el nuevo Ejecutivo que emerja de las urnas son elevadas, dado el enorme deseo de cambio político y económico en amplios sectores de la población, especialmente entre la juventud. Se abre una oportunidad de profundización en la democracia así como de mayor justicia económica para una población que ha permanecido al margen de los beneficios que la expansión de la industria textil en el país ha generado, y que también ha tenido graves impactos medioambientales, especialmente en la contaminación de agua y emisiones tóxicas. Así pues, los nuevos Gobiernos deberán priorizar una transición inclusiva con garantías de pluralismo político, que siente las bases para las reformas legales, constitucionales y económicas y para la mejora de las relaciones con los países vecinos, desde un enfoque de garantía de derechos para la población bangladesí.

4.3. Las negociaciones acerca del estatus político de la isla de Bougainville

En 2024 y en los primeros meses de 2025 se produjeron una serie de circunstancias que podrían acelerar el proceso de negociación entre los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno Autónomo de Bougainville para determinar el estatus político de la isla de Bougainville. Tras el referéndum de autodeterminación de 2019, en el que un 97,7% de la población de Bougainville votó a favor de la independencia, en los siguientes cinco años el diálogo entre ambos gobiernos ha visto obstaculizado por la irrupción de la pandemia de la COVID19 y también por desacuerdos políticos de fondo y también de orden metodológico y procedimental sobre la propia negociación y validación de los resultados del referéndum. La ralentización y en muchos momentos parálisis del diálogo provocó no solamente críticas y acusaciones cruzadas entre las partes, sino también el surgimiento de voces que alertaban sobre un posible incremento de la tensión y la conflictividad en Bougainville. En marzo de 2025, ante representantes de la comunidad internacional, el propio primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, en 2025 se hizo eco de la posible circulación de armas en la isla e interpeló asertivamente sobre tal cuestión a Naciones Unidas, que en su momento lideró el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes. Cabe recordar que Bougainville vivió un conflicto armado (1988-98) entre las Fuerzas Armadas de Papúa Nueva Guinea y el grupo armado de oposición Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA, por sus siglas en inglés) en el que se estima que murió aproximadamente un 10% de la población de la isla. El propio presidente de Bougainville, Ishmael Toroama, es un antiguo dirigente del BRA.

Ante la incertidumbre provocada por el bloqueo de la negociación, **en septiembre de 2024 ambas partes anunciaron la elección como Moderador Independiente del diplomático neozelandés Jerry Mateparae**, antiguo Gobernador-General de Nueva Zelanda, jefe de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda y Comandante del Grupo de Supervisión de la Paz de Bougainville, y persona clave en la firma de un acuerdo de alto el fuego en 1998 que puso fin a las hostilidades. En 2001, se firmó el acuerdo de paz definitivo que contemplaba, entre otras cuestiones, la celebración de un referéndum de autodeterminación una vez se hubiera logrado el desarme del BRA y el establecimiento de un gobierno autónomo en Bougainville. Poco después de ser designado para el cargo, Mateparae se reunió con ambas partes y manifestó su optimismo sobre el futuro del proceso de negociación. **Ambas partes expresaron su convencimiento de que la designación acordada de un facilitador para el diálogo podría ser un poco de inflexión para la negociación, especialmente el Gobierno**

de Bougainville, que hacía tiempo que reivindicaba la participación de una tercera parte internacional en el diálogo. En 2020, el ex primer ministro de Irlanda, Bernie Ahern (1997-2008), que había presidido durante años la Comisión sobre el Referéndum de Bougainville, aceptó facilitar las negociaciones posteriores a la celebración del mismo, pero finalmente no acabó desempeñando ningún rol en el diálogo. Tras el nombramiento de Mateparae, Naciones Unidas declaró públicamente su disposición a seguir apoyando el proceso de negociación. Ambos Gobiernos decidieron que el mandato de Mateparae se prolongue hasta aproximadamente junio de 2025, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales en Bougainville, y también acordaron que su labor además de facilitar el diálogo entre ambos Gobiernos, también incluya la asistencia al Comité bicameral sobre Bougainville del Parlamento, la institución que, según el acuerdo de paz del 2001, debe decidir en última instancia sobre el estatus político de Bougainville.

La designación de un moderador independiente y la mayor predisposición de parte de la comunidad internacional a involucrarse en la negociación podrían acelerar el diálogo en Bougainville

También en el plano internacional, otra cuestión que podría incidir positivamente en el proceso de negociación es la mayor disposición a involucrarse en el diálogo por parte de las dos principales organizaciones intergubernamentales en el Pacífico – el Foro de Islas del Pacífico (PIF) y el Melanesian Spearhead Group (MSG)–, dos organizaciones que históricamente habían considerado el conflicto de Bougainville como un asunto interno de Papúa Nueva Guinea y que habían remarcado la primacía de la soberanía nacional de sus estados miembro por encima de otras consideraciones. En contraposición a las reticencias históricas a inmiscuirse en asuntos internos de sus estados miembro, en marzo de 2025 el secretario general del PIF, Baron Waqa, declaró la disposición de la organización a abordar la resolución del conflicto si se solicitara formalmente desde instancias oficiales en Bougainville, remitiendo cualquier decisión al respecto a la cumbre anual del PIF que se celebrará en las Islas Salomón en septiembre. Por otra parte, aún más explícitas fueron las declaraciones del director general del MSG, Ilan Kiloe, que también en 2025 declaró su disposición a brindar asistencia a Bougainville y señaló que el propósito y la razón por la que se estableció inicialmente el MSG fue promover los intereses colectivos de los países melanesios, ayudar a aquellos que aún no habían alcanzado la independencia y brindarles apoyo en su objetivo de convertirse en países independientes. El MSG se formalizó como una agrupación subregional en 2007 y está integrada por Fiji, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu y el Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista (FLNKS) de Nueva Caledonia, que pretende la independencia de la isla. En 2024, Toroama ya anunció su intención de convertir

a Bougainville en miembro observador del MSG. A diferencia de otros territorios que fueron o todavía son parte del proceso de descolonización impulsado por Naciones Unidas (como Papúa Occidental en Indonesia, Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Guam o Samoa Americana), la autodeterminación de Bougainville está establecida en la constitución de Papúa Nueva Guinea. En virtud del Acuerdo de Paz de Bougainville de 2001 Papúa Nueva Guinea tiene la competencia de los asuntos exteriores del país, pero permite que el Gobierno Autónomo de Bougainville interactúe externamente con organizaciones regionales. Sin embargo, varios análisis han puesto de manifiesto la importancia que tiene Papúa Nueva Guinea en las organizaciones regionales del Pacífico, pues es el país más poblado de la región tras Australia (unos 11 millones de habitantes, más del doble que Nueva Zelanda y más que toda la población del resto de países de la región).

Otro aspecto que puede incentivar y acelerar avances en el proceso de negociación son las elecciones generales que se celebrarán en 2025 en Bougainville. En febrero, por ejemplo, el ministro para la Implementación de la Independencia de Bougainville, Ezekiel Masatt, declaró que ambos gobiernos se habían comprometido a resolver los asuntos procedimentales más controvertidos de la negociación antes de las mencionadas elecciones, y que para ello habían acordado reunirse las veces que hiciera falta. Algunas fuentes incluso apuntaron a la posibilidad de que algunas de dichas reuniones tuvieran lugar en Nueva Zelanda, país de origen del Moderador Independiente y lugar en el que a finales de los años 90 ya habían tenido lugar conversaciones preliminares que condujeron a la firma del acuerdo de paz en 2001. En este sentido, Masatt reiteró el acuerdo entre ambos gobiernos de que el mandato de Mateparae concluya antes de los comicios, idealmente a finales de junio.

Además de la fecha de los comicios, otros factores han puesto presión y trasladado urgencia al Ejecutivo de Papúa Nueva Guinea para desbloquear la negociación. En marzo de 2025, en una reunión con Jerry Mateparae y representantes de la comunidad internacional, Ishmael Toroama anticipó su intención de declarar la independencia de Bougainville el 1 de septiembre de 2027, pues considera que es coherente con la Hoja de Ruta para la Implementación de los Resultados del Referéndum (conocida como la “Hoja de Ruta de Wabag”), que establece el plazo para la declaración de independencia será “no antes de 2025 ni después de 2027”. Poco antes de tal declaración de Toroama, el Foro de Consulta sobre la Independencia de Líderes de Bougainville emitieron un comunicado oficial advirtiendo que Papúa Nueva Guinea no tiene autoridad para vetar el resultado del referéndum y recomendaron el 1 de septiembre de 2027 como fecha de declaración de independencia. En marzo de 2025, Toroama también señaló que, en su opinión, el proceso de negociación de la independencia concluyó con el referéndum y que la moderación del diálogo por parte de Mateparae debería centrarse en la búsqueda de un acuerdo sobre la implementación del resultado

del referéndum de independencia y sobre los términos de la nueva relación entre Bougainville y Papúa Nueva Guinea como dos estados soberanos independientes. Toroama instó a Marape a concluir el proceso de independencia durante la actual legislatura. En línea con la intención de Toroama de declarar la independencia de la isla en septiembre de 2027, en los últimos años, y especialmente en 2024, el Gobierno Autónomo de Bougainville ha ido tomando iniciativas para prepararse para una eventual independencia del país, como la presentación, en marzo de 2024, de un primer borrador de una Constitución de Bougainville por parte de Comisión de Planificación Constitucional de Bougainville.

A pesar de la designación de un moderador independiente, de la mayor predisposición de parte de la comunidad internacional a involucrarse la negociación y de los elementos de política doméstica que podrían acelerar el diálogo, algunos análisis también han destacado las dificultades que enfrenta tal proceso. El más importante de todos ellos, sin duda, es el desacuerdo profundo respecto del estatus político de la isla. Mientras que el Gobierno de Bougainville ha dejado claro que no aceptará ninguna otra opción que no sea la independencia –en el sentido de un nuevo país separado de Papúa Nueva Guinea–, Port Moresby ha insistido en la poca viabilidad económica de Bougainville como país independiente, señalando que actualmente la isla es altamente dependiente de las transferencias del Gobierno nacional y de países donantes y advirtiendo que la independencia económica de Bougainville debe anteceder a la independencia política. Aunque algunas voces señalan que reapertura de la mina de Panguna –una de las mayores del mundo, operada por la empresa multinacional Rio Tinto– podría garantizar la sostenibilidad a largo plazo de Bougainville, otros análisis sostienen que tal opción entraña riesgos medioambientales y políticos –la actividad de dicha mina estuvo en el epicentro del conflicto armado en la isla–. El Gobierno de Papúa Nueva Guinea también ha insistido en el carácter no vinculante del referéndum de independencia de 2019 y ha recordado que es el Parlamento Nacional quien, según el acuerdo de paz de 2001, tiene la competencia para tomar cualquier decisión sobre el estatus político de Bougainville. Port Moresby también ha recalcado que, al contrario que otros casos del Pacífico, Bougainville no es una región pendiente de descolonización. Además de los desacuerdos políticos, también ha habido cuestiones de orden procedural que obstaculizan el avance de la negociación, como la mayoría necesaria en el Parlamento para validar los resultados del referéndum de independencia. Mientras que el Gobierno de Papúa Nueva Guinea considera que tal decisión debería ser aprobada por una mayoría cualificada de dos tercios, el Gobierno de Bougainville cree que debería ser ratificada por una mayoría simple.

A pesar de las dificultades, y aunque no parece realista la consecución de un acuerdo definitivo a corto plazo, ambas partes han expresado que las perspectivas a mediados de 2025 son más positivas y esperanzadoras de lo que eran a principios de 2024.

4.4. Nuevo diálogo Türkiye-PKK

Desde 2024 se ha abierto en Türkiye una nueva oportunidad de paz en torno al largo conflicto armado que desde 1984 ha enfrentado al Estado turco y al movimiento armado kurdo PKK. Se trata de un conflicto armado que es expresión de la llamada cuestión kurda, una problemática que hace referencia a la discriminación y vulneraciones de derechos (culturales, lingüísticos y de representación política) que ha afrontado históricamente la población kurda de Türkiye y cuyos orígenes se remontan a la configuración de la república a principios del siglo XX. El conflicto armado entre Türkiye y el PKK, que en los últimos años ha sido de baja intensidad y ha tenido el norte de Iraq como principal escenario de la contienda, acumula un legado de impactos en seguridad humana (varias decenas de miles de fallecidos, centenares de miles de personas desplazadas internas, exilio y cárcel, tortura y violencia sexual, militarización y economía política de la violencia). Ahora, en un contexto interno y regional cambiante y afectado por numerosos retos, se ha iniciado un nuevo proceso de paz, en el que convergen elementos de oportunidad, pero también factores de riesgo.

El nuevo proceso abierto es de naturaleza compleja y multiforme. Recibe diferentes nombres, énfasis y lenguajes por diferentes actores: “Türkiye sin terrorismo”, por la coalición gubernamental, frente a “proceso de paz y sociedad democrática” por el PKK, entre otras denominaciones. Informaciones periodísticas sitúan la existencia de conversaciones exploratorias no públicas entre el Estado y el PKK al menos desde abril de 2024. **En la esfera pública el proceso comenzó a desplegarse a partir de octubre de 2024, de la mano de diversos gestos de acercamiento y medidas, que fueron ampliándose** y que fueron acompañados de declaraciones al nivel de liderazgos políticos sobre el inicio de un nuevo periodo y la existencia de una oportunidad, aunque manteniendo denominaciones y focos diferentes. A partir de octubre y, mayormente, a partir de diciembre, se dio paso a la autorización de visitas familiares y políticas al líder del PKK, Abdullah Öcalan –en prisión desde 1999–, tras las cuales se fue socializando a la opinión pública la posición y visión del líder del PKK respecto al proceso y se fueron produciendo consultas entre la delegación del partido prokurdo DEM que visitaba a Öcalan y la mayoría de partidos políticos parlamentarios de Türkiye.²

En conjunto, se configuró un proceso de paz (con dimensión pública y no pública) que por ahora consiste en **conversaciones entre representantes del Gobierno y el líder del PKK; comunicación entre Öcalan y el PKK;**

visitas a Öcalan por la delegación del partido prokurdo DEM y socialización posterior a la opinión pública por parte de la delegación; y rondas de reuniones bilaterales entre la delegación del DEM y la gran mayoría de partidos políticos parlamentarios de Türkiye –incluyendo el gubernamental AKP y su socio MHP. Además, está en debate la creación de una comisión parlamentaria que aborde cuestiones relativas al proceso, que aportaría un espacio coral más institucionalizado. La delegación del DEM se ha reunido también con actores kurdos de Iraq y de Siria. Asimismo, esta nueva iniciativa de paz mantiene interrelación con el diálogo desplegado, desde la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad,³ entre el Gobierno de transición sirio y las SDF (coalición opositora a Al-Assad apoyada por EEUU en la lucha contra ISIS y encabezada por las milicias kurdas YPG/YPJ, con vínculos con el PKK y control territorial en el noreste de Siria) sobre el encaje kurdo en la nueva Siria. **En la nueva iniciativa en Türkiye convergen diversos elementos de oportunidad.** Por una parte, el nuevo proceso no surge en un vacío, sino que cuenta con aprendizajes acumulados de las experiencias previas, incluyendo las más recientes (diálogo de Oslo 2008-2011 y el proceso de 2013-2015). Converge en el proceso una aparente voluntad de las partes de llevar a cabo un proceso negociador que genere resultados, aunque –como se señala más adelante– está atravesada por motivaciones diferentes y factores de incertidumbre y riesgo.

Además, **el proceso está desplegándose y avanzando, generando ya algunos primeros resultados significativos en lo que está siendo el foco inicial, las armas.** Destaca el comunicado de Öcalan del 27 de febrero de 2025 en que llama al PKK a convocar un congreso, deponer las armas y disolverse, en el marco de una visión de solución basada en la paz, una sociedad democrática y apertura del espacio político. El PKK respondió con un comunicado el 1 de marzo en el que declararon un alto el fuego unilateral y respaldaron en su totalidad el mensaje de Öcalan. A principios de mayo, tras la celebración de su 12º congreso (5-7 mayo), el PKK anunció la finalización de la lucha armada y la disolución de la organización. Es decir, el proceso ha generado ya el silencio de las armas, lo que supone en sí un hito. El esquema de comenzar con el fin de las armas, presumiblemente por presión e interés de Türkiye, en todo caso saca de la ecuación el que ha sido el principal argumento de Türkiye para reprimir a actores políticos y sociales kurdos: su supuesta vinculación a un PKK considerado terrorista. Por su parte, el PKK llevaba décadas defendiendo una solución negociada al conflicto. En los últimos años,

2 Para una cronología detallada de los pasos entre octubre de 2024 y abril de 2025, véase “Türkiye-PKK” en Escola de Cultura de Pau, *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz*, enero de 2025 y Türkiye-PKK” en Escola de Cultura de Pau, *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz*, abril de 2025. Véase también el resumen sobre Türkiye (PKK) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

3 Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados) y “¿Una oportunidad para la paz en Siria?: perspectivas ante una frágil transición” en este capítulo.

el grupo se ha visto afectado por una mayor presión militar de Türkiye, de la mano de factores como el uso intensivo de drones, que le habría debilitado y llevado a un repliegue y estrategias defensivas. Potencialmente la disolución del PKK deja sin razones a la lucha contra el terrorismo como vía de abordaje de la cuestión kurda y podría fortalecer la esfera política y social y a los actores políticos kurdos –especialmente si desemboca en liberación de figuras políticas kurdas en prisión–. No obstante, el proceso de paz coexiste con dinámicas de autoritarismo y represión política en Türkiye.

Otro elemento de oportunidad radica en la falta de disensos internos en el PKK a su decisión histórica de finalización de la lucha armada y disolución, así como en la amplia mayoría de partidos políticos de Türkiye que apoyan el proceso, incluyendo el gobernante AKP y su socio ultranacionalista turco MHP. Otro elemento positivo, interrelacionado, es la atención puesta en los actores parlamentarios y en el potencial papel que puede desempeñar el Parlamento a través de una futura comisión. En cuanto a la participación de mujeres, destaca el inicio de reuniones específicas entre mujeres representantes de los distintos partidos políticos que apoyan la iniciativa de paz. El foco histórico del movimiento kurdo en los derechos de las mujeres podría tener repercusiones positivas en el proceso, como esta nueva dinámica de reuniones.

No obstante, **los elementos riesgo y de incertezza son relevantes. Aún está por ver cómo se gestionará el desarme, desmovilización y reintegración y una posible ley de amnistía y si se abordarán, y con qué grado de alcance, demandas kurdas de derechos culturales, lingüísticos, garantías de participación política y una mayor descentralización administrativa –al menos municipal. Además, la opacidad y falta de transparencia –en parte motivada para fortalecer el proceso frente a filtraciones y ataques– genera una elevada incertidumbre, incluso sobre si las partes disponen de un marco negociador/hoja de ruta consensuado o no.** Por otra parte, **la dinámica de represión interna en Türkiye y los riesgos de autoritarismo son otro factor en contra**, en tanto que pueden limitar el margen de decisión sobre reformas y derechos –relativos a la cuestión kurda y al conjunto del país– y alejan al principal partido opositor, el CHP, y sus bases. En ese sentido, algunos análisis han señalado que entre los factores que operan en la nueva iniciativa estaría la pérdida de apoyo electoral del AKP –con el CHP como primera fuerza en las elecciones municipales de 2024– y los intentos de la coalición gubernamental de erosionar una cierta cooperación electoral entre el principal partido opositor turco, el CHP, y el partido prokurdo DEM. Además, a través de la iniciativa, el AKP podría intentar lograr apoyo kurdo a una futura modificación de la Constitución que recogiese algunas demandas kurdas pero que también modificase el límite de mandatos presenciales y abriese la puerta a la reelección de Erdogan en los próximos comicios previstos para 2028 –o buscar apoyo kurdo en un eventual adelanto electoral. La iniciativa de paz transcurre en paralelo a una fuerte represión del régimen

contra el CHP, incluyendo destitución de varios alcaldes y detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, y principal rival de Erdogan para las presidenciales, que desencadenó protestas masivas. Esta dinámica se añade a la represión histórica que ha afrontado el movimiento kurdo para el ejercicio de sus libertades civiles y políticas y a la criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y activistas pacifistas, feministas y LGTBIQ+, entre otros.

La volatilidad regional y el factor kurdo sirio generan también incertidumbre. Ante el complejo tablero regional de los últimos años, especialmente desde la crisis en Gaza y la intensificación de disputas regionales (crisis Israel-Irán, caída de Bashar al-Assad en Siria, tensiones Türkiye-Israel, entre otras), Türkiye ha priorizado un enfoque de reducir riesgos y amenazas y buscar proyección exterior política, comercial y militar. Así, como parte de una visión de priorizar intereses nacionales más amplios en un Oriente Medio en reconfiguración, Ankara negocia con el PKK y acepta las negociaciones en marcha entre el Gobierno sirio de transición y las SDF sobre el encaje de los combatientes kurdos de Siria y el futuro encaje kurdo en la nueva Siria.⁴ Aparentemente Türkiye estaría en una posición de cautela y de interlocución con las SDF, en contraste con la línea roja que ha supuesto la existencia de la región autónoma kurda de Siria (DAANES, por sus siglas en inglés, popularmente conocida como Rojava) para Türkiye en estos años. No obstante, la volatilidad en Oriente Medio y la complejidad e incerteza en torno al proceso Damasco-SDF puede ralentizar el propio proceso de paz en Türkiye, y cómo evolucione este último también podría influir en el primero.

Otro factor de incerteza es el grado de apropiación y transformación. Por parte del movimiento kurdo se han desplegado iniciativas de socialización del proceso con sus bases, para favorecer participación y apoyo, pero está por ver si en el conjunto de Türkiye se avanzará hacia vías de participación más amplias, que permitan mayor sintonía social con el reto abierto y que acompañen el proceso negociador con vías complementarias de construcción de paz, incluyendo en lo relativo a transformación de la imagen del enemigo, cohesión social, verdad, memoria, justicia y reparación, entre otros.

En conclusión, se ha abierto un nuevo proceso negociador en Türkiye en torno al histórico conflicto armado entre el Estado y el PKK, con elementos que lo fortalecen, pero también con factores de riesgo e incertidumbre de dimensión interna y regional. Para que el proceso vaya más allá del silencio de las armas y de acomodo de intereses en un formato de paz negativa en un contexto de tendencia de autoritarismo, y, en cambio, se puedan abordar cuestiones de fondo relativas a la cuestión kurda y que revierta en una mayor democratización y apertura política se requiere de esfuerzos de acompañamiento de la iniciativa y de vías de participación y movilización que empujen hacia ese horizonte.

⁴ Ibid.

4.5. ¿Una oportunidad para la paz en Siria?: perspectivas ante una frágil transición

Siria afronta una coyuntura histórica. Después de más de una década de conflicto armado, la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 y el fin del gobierno autoritario instaurado por su padre hace más de medio siglo han abierto una nueva etapa. El escenario es complejo y está pleno de retos, internos y externos, en un entorno regional convulso y volátil. Pero es indudable que **el nuevo contexto ha alentado esperanzas y expectativas de cambio en buena parte de la población, que aspira a dejar atrás un ciclo de violencia devastador y a imaginar las posibilidades de una nueva Siria.** “Por primera vez en décadas tenemos la oportunidad de dejar de ser súbditos y convertirnos en ciudadanos de nuestro país”, destacaba un analista sirio. Tras el derrocamiento del gobierno y la asunción de las nuevas autoridades, la evolución de acontecimientos en los primeros meses de 2025 refuerza el diagnóstico de que la transición es frágil y que los análisis prospectivos deben recoger matices e incertidumbres.

Desde el cambio de régimen, **uno de los principales ejes de preocupación tiene que ver con la evolución de la transición política, su grado de inclusividad –en un país multiétnico y multiconfesional y fragmentado por años de guerra– y el papel que desempeñarán las nuevas autoridades sirias en esta etapa.** El líder de las fuerzas opositoras que derrocaron a al-Assad, Ahmed al-Sharaa, se ha puesto a la cabeza del proceso de transición y ha impulsado una serie de medidas con las que, entre otras cosas, ha intentado apaciguar los recelos que dentro y fuera del país generaba su organización, Hayat al-Sham (HTS), y su propia figura, por sus pasados vínculos con al-Qaeda. En sus primeras declaraciones públicas, las nuevas autoridades apelaron a la unidad y a principios de justicia, libertad y dignidad, intentando conectar así con las aspiraciones de la revolución siria. Las nuevas autoridades consideraron que el marco negociador promovido sin éxito durante más de una década por la ONU y anclado a la resolución 2254 (2015) estaba “obsoleto” –fue concebido para mediar entre el régimen de al-Assad y la oposición– y diseñaron su propia hoja de ruta. En los meses siguientes, las políticas y procesos desplegados han tenido valoraciones dispares, con algunos elementos positivos y otros que han expuesto la complejidad y riesgos del nuevo escenario.

Uno de los primeros hitos fue la celebración de una conferencia de diálogo nacional, que reunió a unos 900 participantes a finales de febrero. En el encuentro de dos días –que estuvo precedido en las dos semanas

previas por consultas a nivel local en distintos puntos del país– las personas participantes abordaron temas como la futura Constitución, libertades o los retos de la economía. El diálogo tuvo una dimensión simbólica –una reunión de esta naturaleza en Damasco era impensable tres meses atrás– y desembocó en una declaración con un compromiso general en torno a la unidad, igualdad, reformas institucionales y garantías de derechos, con menciones específicas a la necesidad de proteger las libertades de pensamiento y expresión o la importancia de incorporar a la sociedad civil en la definición de la Siria post-Assad. El diálogo nacional, sin embargo, también despertó recelos y preocupación por no abordar algunos temas clave, por la falta de claridad sobre de qué manera se implementarían sus resultados y por cuestiones de representatividad y procedimiento –por el tiempo limitado para la discusión, su precipitación (muchas invitaciones se enviaron a última hora), o la opacidad sobre los criterios para escoger a las personas participantes e integrantes en el comité de preparación, entre otros factores. Algunos observadores enfatizaron que el espacio de diálogo parecía formar parte de un “checklist” que las nuevas autoridades debían cumplir de cara al exterior –en especial ante actores occidentales–, mientras que otros valoraron que, pese a sus imperfecciones, la iniciativa ofrecía una posibilidad para avanzar en las discusiones sobre una nueva Siria.⁵ Otras voces subrayaron que las autoridades deberían construir a partir de esta experiencia y dar continuidad al diálogo en pro de la reconciliación.⁶

En marzo se produjeron otros dos hitos. A mediados de mes se publicó una declaración constitucional que definió las prerrogativas del nuevo gobierno y el sistema que estará vigente durante el período de transición, previsto para cinco años hasta la adopción de una nueva Carta Fundamental y la celebración de elecciones. Elaborada por un comité de siete expertos legales designado por al-Sharaa, la declaración garantiza la separación de poderes, la libertad de credo, la igualdad entre los ciudadanos sin discriminación en base de raza, religión o género y que el Estado garantizará derechos y libertades fundamentales. En paralelo, sin embargo, el texto también consagra un sistema fuertemente presidencialista, que –advierten analistas– entraña una propensión al autoritarismo: el presidente designa un tercio de los miembros del parlamento de transición, designa al comité encargado de nombrar los otros dos tercios, nombra a vicepresidentes y ministros y también a los miembros de la Corte Suprema Constitucional.⁷

5 Ibrahim al-Assil, *The national dialogue in Syria: A step forward or a concerned trajectory?*, Middle East Institute, 5 de marzo de 2025; Justin Salhani, *Key takeaways from Syria's National Dialogue conference*, Al-Jazeera, 26 de febrero de 2025.

6 Quataiba Idlibi, Charles Lister y Marie Forestier, *Reimagining Syria. A Roadmap for Peace and Prosperity Beyond Assad*, Atlantic Council, Middle East Institute, European Institute of Peace, marzo de 2025.

7 International Crisis Group, *What lies in store for Syria as a new government takes power*, Q&A Middle East –North Africa, 25 de abril de 2025.

Bajo este nuevo marco legal, a finales de marzo se anunció el nuevo gobierno de transición que reemplazó al gobierno en funciones que había asumido en diciembre de 2024 justo después del derrocamiento de al-Assad. El gabinete de 23 integrantes es diverso e incluye un número importante de figuras independientes con trayectorias reconocidas, tecnócratas y personas de la sociedad civil. Nueve son miembros de las principales minorías del país, sin afiliación a grupos políticos. No obstante, HTS concentra en sus manos los cargos de mayor poder (Exteriores, Defensa, Interior, Justicia). El anuncio del nuevo gobierno motivó reacciones variadas dentro y fuera del país y provocó recelos en grupos como las fuerzas kurdas, que lideran las SDF y controlan el noreste de Siria. Después de que el líder de las SDF y al-Sharaa firmaran un acuerdo en marzo para la integración de las fuerzas kurdas en las instituciones del Estado, las SDF rechazaron la declaración constitucional por no reconocer explícitamente los derechos políticos, culturales y lingüísticos de las minorías étnicas y religiosas de Siria. En el nuevo gabinete, la figura kurda nombrada como ministra de Educación no tiene relación política con las SDF. Previsiblemente, las negociaciones entre el gobierno central y las SDF continuarán navegando entre obstáculos, influidas también por la marcha del diálogo entre Türkiye y el PKK.⁸

Otra de las críticas al nuevo gobierno sirio apuntó al déficit de inclusión desde una perspectiva de género por la designación de tan solo una sola mujer en el gabinete. El nombramiento de Hind Kabawat como ministra del Trabajo y Asuntos Sociales fue considerado por algunas voces como reflejo de una aproximación *tokenística*. La propia Kabawat – conocida opositora del régimen de al-Assad, activista por los derechos de las mujeres, integrante de la minoría cristiana y experta en resolución de conflictos– reconoció que había presionado sin éxito por la presencia de más ministras, pero que existía el compromiso de nombrar a más mujeres en puestos de alto nivel.⁹ Según Kabawat, al-Sharaa es consciente de que no puede gobernar solo, aunque está por verse si eso podría ser un aliciente para trascender el compromiso retórico en materia de inclusión de las mujeres. Tanto el diálogo nacional como las comisiones preparatorias de éste y de la declaración constitucional contaron con la participación de mujeres –25% de las participantes en el primer caso, dos de las siete personas integrantes en lo que respecta a las comisiones–, pero las aspiraciones de las mujeres sirias

trascienden la fijación de una cuota mínima. Desde antes de la caída de al-Assad, activistas feministas sirias –organizadas en la diáspora y dentro del país– vienen exigiendo tener un papel determinante en la definición del futuro de Siria¹⁰ y tras la caída del régimen algunas han expuesto con detalle las prioridades que, desde su punto de vista, son claves para la fase de transición.¹¹ Se espera que las mujeres sirias continúen presionando y haciendo incidencia en esta línea. Así lo atestiguaba, entre otros, el trabajo del Consejo Asesor de Mujeres Sirias –promovido en 2016 por el Enviado Especial de la ONU para Siria– que en 2025 celebró su primera reunión en territorio sirio y aprovechó la ocasión para interpelar a las nuevas autoridades sobre el rol de la sociedad civil y las garantías para la participación política de las mujeres. La designación del parlamento provisional será, previsiblemente, una prueba más sobre las políticas de inclusión en la nueva Siria.

La nueva coyuntura ha alejado expectativas de cambio en buena parte de la población, que aspira a dejar atrás un ciclo de violencia devastador y a imaginar las posibilidades de una nueva Siria

Otro de los grandes ejes de preocupación tiene que ver con cómo dejar atrás las dinámicas de violencia que han impactado el país en la última década, cómo afrontar los retos de seguridad y avanzar en paralelo en procesos de rendición de cuentas que contribuyan a la reconciliación. Los hechos de violencia que afectaron principalmente a la comunidad alauí en marzo de 2025 constituyeron un dramático llamado de atención sobre los riesgos en este ámbito. El rápido establecimiento de una comisión de investigación por parte del gobierno de al-Sharaa fue bien valorado inicialmente, pero tras su puesta en marcha la iniciativa ha sido objeto de críticas de falta de transparencia e insuficiente colaboración con organizaciones de derechos humanos. Otras iniciativas impulsadas por las nuevas autoridades en este ámbito también han motivado valoraciones mixtas o con matices. En mayo, a través de sendos decretos presidenciales, se establecieron la Comisión Nacional para la Justicia Transicional y la Comisión Nacional para las Personas Desaparecidas, valoradas como un paso relevante en el reconocimiento de las reivindicaciones de las víctimas y sus familias, como una señal de los esfuerzos por responder a las extendidas vulneraciones a los derechos cometidas durante el conflicto armado en Siria y como una oportunidad para emprender un proceso nacional de verdad, sanación y rendición de cuentas.¹² Sin embargo, voces expertas señalaron su inquietud por las limitaciones del mandato de estas instancias. En el caso de la Comisión Nacional de Justicia Transicional, se ha criticado su foco solo en las vulneraciones cometidas

8 Véase “Nuevo diálogo Türkiye-PKK” en este capítulo.

9 Hélène Sallon, *Hind Kabawat, the only woman in Syria's transitional government: 'Al-Sharaa has a vision, and he knows he cannot govern alone'*, Le Monde, 2 de abril de 2025.

10 Ruth Michaelson, ‘We've proved we can do anything': the Syrian women who want a say in running the country, The Guardian, 5 de enero de 2025.

11 Syrian Women's Political Movement, Press Release on the Syrian Women's Political Movement's Strategic Vision to Achieve a Free and Democratic Syria, 12 de diciembre de 2025.

12 ICJT, ICTJ Welcomes Establishment of Syria's New National Commissions for Transitional Justice and the Missing, 22 de mayo de 2025.

por el régimen de al-Assad, excluyendo así a víctimas de abusos por otros actores armados. Las nuevas autoridades sirias han sido interpeladas, por tanto, para impulsar un proceso de justicia transicional inclusivo, priorizar la participación genuina de las víctimas en el trabajo de estas comisiones, y construir sobre la base del enorme trabajo desarrollado durante más de una década por grupos de la sociedad civil, abogados y familias de víctimas en la documentación de abusos y búsqueda de justicia.¹³ Labor que, entre otras cosas, ha desembocado en el establecimiento en 2023 por parte de Asamblea General de la ONU de la Institución Independiente para las Personas Desaparecidas en Siria.¹⁴ Pasos de este tipo parecen claves para cumplir con las expectativas de la población sobre una justicia transicional en Siria.

Un tercer eje de preocupación tiene que ver con las condiciones materiales de vida en el país, con una situación económica gravemente deteriorada por los impactos del conflicto. Según OCHA, las necesidades humanitarias eran inmensas para una población donde el 90% de la población vive en condiciones de pobreza, cerca de la mitad afronta inseguridad alimentaria severa y millones de personas padecen las consecuencias del desplazamiento forzado por la violencia. Pese a esta crítica situación y a las incertezas de la situación política y de seguridad, diversos informes constatan que **un gran número de personas desplazadas dentro del país o que vivían fuera como refugiadas están regresando a sus lugares de origen en la Siria post-Assad**. Estimaciones de ACNUR indican que en los primeros meses de 2025 1,7 millones de personas (entre ellas medio millón de refugiadas) habían regresado a sus hogares y que esa cifra podría duplicarse para finales de año. Estos retornos obedecen a múltiples motivaciones, pero reflejan en parte las expectativas de la población siria sobre el nuevo escenario en el país. En este ámbito será clave mantener la atención para evitar los retornos forzados –antes de la

caída del régimen, diversos países se habían mostrado dispuestos a acuerdos con al-Assad para favorecer el regreso de población refugiada siria– y atender a las ingentes necesidades económicas, de reconstrucción y servicios básicos en una Siria devastada por los años de guerra. En esta ecuación, desde diversos ámbitos se ha destacado la relevancia del levantamiento de sanciones que databan de la era al-Assad y que se han mantenido por las suspicacias ante las nuevas autoridades sirias. En este sentido, los anuncios en mayo de EEUU y la UE sobre el levantamiento de sanciones económicas –que seguirán condicionadas a la evolución del proceso político– abrían una ventana de oportunidad en este ámbito. Especialmente llamativo fue el anuncio en el caso de EEUU, tras una sorpresiva e inédita reunión en Arabia Saudita entre Donald Trump y al Sharaa (la primera entre presidentes de ambos países en 25 años), que escenificó el reconocimiento a un líder que hasta hace pocos meses estaba en las listas de terroristas de Washington.

La evolución de la situación en Siria no dependerá solo de los ejes analizados hasta ahora. Seguirá siendo determinante la gestión de los temas de gobernanza, la manera en que se sorteen las disputas políticas y territoriales, el afrontamiento a los retos de seguridad y al desafío de supongan actores armados –pro-Assad, ISIS, entre otros–, las repercusiones de las ofensivas de Israel en el Golán y sus agresivos intentos de desestabilización –incluyendo a través de la instrumentalización de minorías como la drusa–, las posibles injerencias de otros actores externos, o las consecuencias de las tensiones y conflictos en la región, entre otros múltiples factores. A corto y medio plazo, no obstante, muchísimos sirios y sirias parecen mantener la esperanza en que pese a los riesgos e incertezas, vale la pena creer en que otra Siria es posible y que es imperativo desplegar esfuerzos para evitar una nueva escalada de violencia y confrontación.

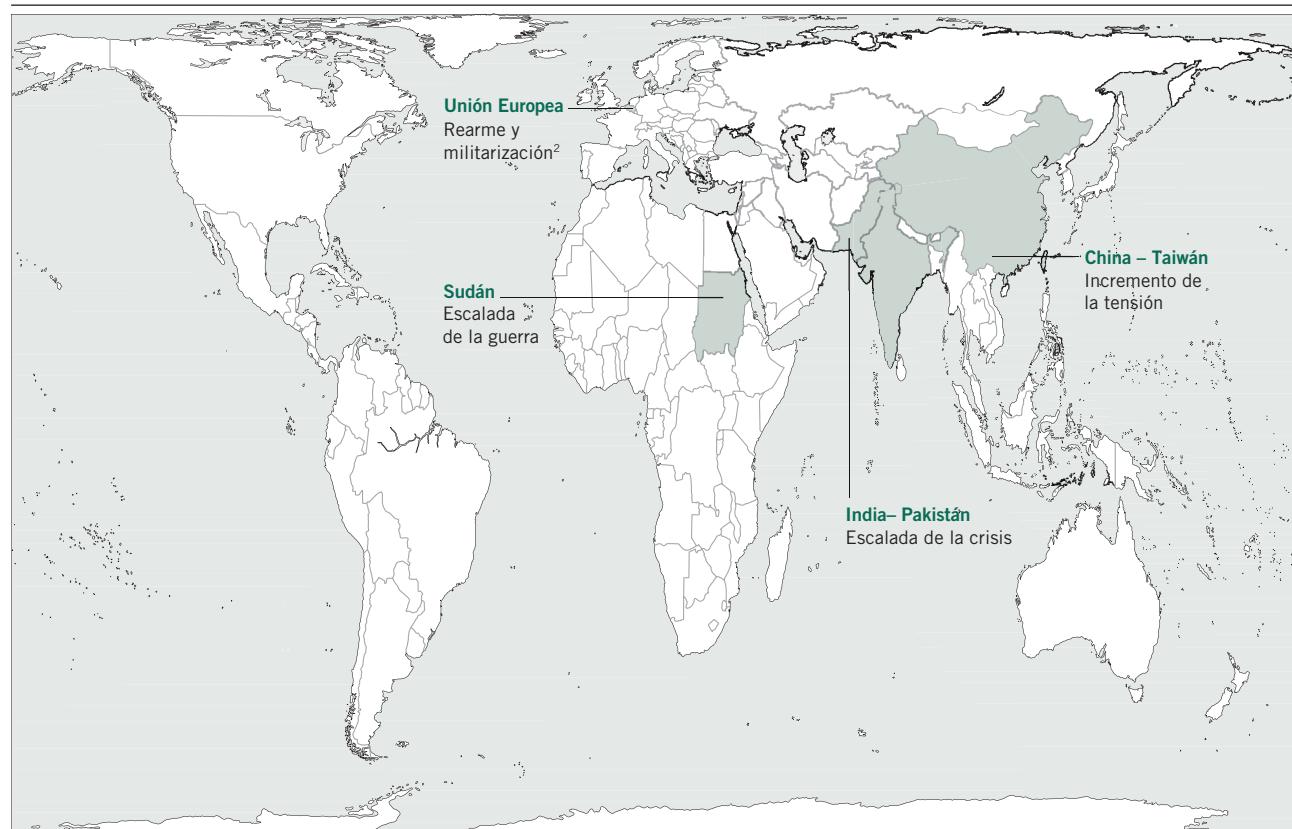
13 Ibid y Human Rights Watch, *Syria's Transitional Justice Commission: A Missed Opportunity for Victim-Led Justice*, 19 de mayo de 2025.

14 Más información en la web de la [Independent Institution on Missing Persons in Syria](#) (IIMP).

5. Escenarios de riesgo

A partir del análisis de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial en el año 2024,¹ la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cuatro contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2025 o incluso a más largo plazo. Los escenarios de alerta hacen referencia a los riesgos de la deriva de la guerra civil y la crisis humanitaria en Sudán; al potencial de conflicto armado a gran escala entre India y Pakistán en un contexto de disputas históricas no resueltas; al notable incremento de la tensión política y militar entre China y Taiwán y de la confrontación entre China y EEUU acerca de la posición de Washington hacia Taiwán; y la escalada militarista en Europa, de la mano del plan “ReArmar Europa”, y los riesgos de incremento de tensión en el continente, entre otras posibles consecuencias.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo



1 El análisis de cada contexto parte de la base de la revisión anual de los acontecimientos ocurridos en 2024 y recoge algunos elementos y dinámicas relevantes del primer cuatrimestre de 2025.

2 El escenario de riesgo sobre la escalada militarista en Europa aparece señalado en este mapa de manera simplificada, por razones de representación gráfica. No se han marcado todos los países que integran la UE, sino Bélgica como país que acoge la sede de las principales instituciones de la UE.

5.1. Sudán al borde del colapso: guerra civil, crisis humanitaria y diplomacia fallida

Desde el 13 de abril de 2023 Sudán ha estado sumido en una guerra civil devastadora entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), bajo el mando de Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. La extensión de la violencia a prácticamente todo el territorio sudanés y la participación creciente de milicias comunitarias y grupos armados regionales han convertido el conflicto en una guerra fragmentada, altamente localizada y difícil de contener.

Aunque, recientemente, el Ejército ha recuperado parcialmente Jartum y otras áreas, las RSF conservan el control de regiones cruciales como Darfur y Kordofán. Estas áreas no solo son estratégicamente vitales por su tamaño y recursos, sino también por su valor simbólico e identitario. La persistencia de las RSF en Darfur ha hecho surgir preocupaciones sobre una partición de facto del país, donde dos gobiernos paralelos podrían consolidarse: uno dominado por el Ejército en el norte y otro dominado por las RSF en el oeste.

La guerra ha desencadenado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con aproximadamente 30 millones de personas, más de la mitad de la población sudanesa, en situación de necesidad de asistencia urgente. La inseguridad alimentaria afecta a 26 millones, con 14 zonas en riesgo inminente de hambruna entre junio y septiembre de 2025. Asimismo, el sistema sanitario está en ruinas: uno de cada tres hospitales ha dejado de operar. La malnutrición afecta gravemente a más de 4,9 millones de niños y mujeres embarazadas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido que solo ha recibido el 21% de los fondos necesarios para enfrentar la situación, lo que refleja un déficit crítico en el compromiso internacional. La guerra también ha generado que el país padezca la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo, con más de 12 millones de personas desplazadas internamente y más de 4 millones refugiadas en países vecinos. Particularmente grave es la situación en Darfur Occidental, con informes de genocidio y crímenes de guerra cometidos por las RSF.

La posibilidad de que el conflicto se expanda a países vecinos es real. No solo, como denuncia la ONU debido a que los flujos masivos de personas desplazadas puedan desestabilizar a Chad, Egipto, Sudán del Sur y otros países fronterizos, sino también por la creciente tensión entre las partes en conflicto con Estados vecinos que están apoyando a la otra parte, como el caso de

la creciente tensión entre el Ejército sudanés y Chad, debido al apoyo de este último a las RSF.

En este sentido, el conflicto sudanés está evolucionando hacia un enfrentamiento geopolítico por poder en África del Norte y el Sahel. Irán ha reforzado su apoyo al Ejército, mientras que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y otros actores han sido acusados de armar a las RSF. Esta intervención indirecta ha convertido a Sudán en un tablero de ajedrez para potencias regionales e internacionales, exacerbando la duración y la intensidad del conflicto. Países como China y Rusia han jugado un papel ambivalente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque ambos países votaron a favor de extender el embargo de armas a Darfur en 2024, Rusia bloqueó una resolución más amplia promovida por Reino Unido y Sierra Leona que buscaba un alto el fuego y negociaciones inmediatas.

Desde 2023, múltiples intentos de mediación han fracasado. Las conversaciones en Jeddah, Bahrein y Ginebra han sido intermitentes y marcadas por ausencias, condiciones previas inaceptables y agendas irreconciliables. En marzo de 2025, las RSF participaron en negociaciones en Suiza, pero el Ejército no asistió, argumentando que no se habían cumplido las condiciones mínimas (como la retirada de las RSF de zonas civiles). La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, Arabia Saudita, la Unión Africana (UA) y la ONU, ha seguido presionando por una solución diplomática. La cumbre de París de abril de 2025 consiguió compromisos de ayuda humanitaria por 2.100 millones de dólares, pero los esfuerzos para reanudar las negociaciones de paz se han visto constantemente obstaculizados por la falta de voluntad política de las partes.

El 4 de marzo de 2025, las RSF instauraron el llamado “Gobierno de Paz y Unidad” con Hemedti como presidente del Consejo Presidencial. Este gobierno ha sido rechazado ampliamente por carecer de legitimidad democrática y por nacer de la fuerza militar y no del consenso civil. En contraste, el Ejército y sus aliados han promovido una propuesta de transición política liderada por la coalición “Coordinación de Fuerzas Nacionales”, que aboga por un gobierno de transición de tres años con participación civil y militar. No obstante, la fragmentación de actores políticos y la desconfianza mutua han impedido cualquier avance tangible hacia una gobernanza unificada.

Frente a esta situación, se dibujan diversos escenarios en el país. Por un lado, la opción más probable a corto

La guerra en Sudán ha desencadenado una de las crisis humanitarias más graves del mundo

y medio plazo es la prolongación del conflicto con episodios de violencia intermitente. La falta de un cese al fuego duradero, la fragmentación de actores y el apoyo externo a ambos bandos dificultan cualquier resolución inmediata. Las consecuencias incluirán más desplazamientos, hambruna, debilitamiento institucional y riesgo de colapso total del Estado sudanés. En segundo lugar, la amenaza de que la guerra pueda generar una partición de facto del país, dado que las RSF controlan gran parte del oeste y sur del país, y el Ejército mantiene el dominio sobre el norte y el centro, lo que podría consolidarse en una división territorial de facto. Esta situación podría dar lugar, en la práctica, al establecimiento de dos estructuras de poder paralelas que dificultarían cualquier tipo de reconciliación nacional en el futuro. Un tercer escenario, poco viable actualmente, es lograr una solución negociada como única vía viable hacia una paz duradera, pero requiere condiciones que actualmente no existen, como: confianza mutua, presión sostenida de actores internacionales clave (especialmente los que financian o arman a las partes), y una hoja de

ruta aceptada por civiles y militares. De momento, los esfuerzos diplomáticos no han conseguido traducirse en avances significativos.

En definitiva, las expectativas para una resolución del conflicto en Sudán durante 2025 son bajas. La guerra no solo ha destruido vidas y ciudades, sino que ha fragmentado el tejido político, social y económico del país. La comunidad internacional debe redoblar esfuerzos para ejercer presión efectiva sobre los actores involucrados, imponer restricciones a la venta de armas y promover un proceso de transición inclusivo, con participación real de la sociedad civil. A menos que se produzca un cambio drástico en las dinámicas actuales –como un colapso militar de una de las facciones o una intervención diplomática concertada de gran escala–, Sudán corre el riesgo de entrar en una espiral prolongada de violencia, semejante a la que sufrió Somalia durante décadas. El tiempo apremia. Sudán no solo necesita paz: necesita justicia, reconstrucción y un futuro posible para las millones de personas que hoy viven entre el hambre, la guerra y el exilio.

5.2. El incremento de la tensión política y militar entre China y Taiwán

En 2024 y en la primera mitad de 2025 se incrementó notablemente la tensión política y militar entre China y Taiwán, así como la confrontación entre China y EEUU acerca de la posición de Washington hacia Taiwán. La presión de China hacia Taiwán aumentó drásticamente tras la elección de William Lai Ching-te en las elecciones presidenciales taiwanesas de enero de 2024. Algunos análisis sostienen que la actividad militar de China en torno a Taiwán y en el estrecho de Taiwán ha aumentado de forma constante desde 2020 –especialmente tras la visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, en agosto de 2022– y también que la tensión entre China y Taiwán está en su punto más álgido desde 1996, cuando Beijing disparó misiles frente a la costa de Taiwán coincidiendo con la celebración de las primeras elecciones democráticas de Taiwán tras décadas de autoritarismo por parte del Kuomintang. Como reacción a tal incremento de las acciones por parte de Beijing, el nuevo Gobierno de Lai Ching-te también aumentó el gasto militar y anunció el desarrollo de su capacidad de defensa, incrementó los ejercicios militares, desplegó nuevas medidas de seguridad nacional e incrementó sus lazos en materia de defensa con EEUU y otros países. Por su parte, la nueva administración estadounidense de Donald Trump incrementó la retórica contra Beijing y a la vez explicitó su compromiso con la defensa de Taiwán. Aunque en varias ocasiones en 2024 el ex presidente Biden ya había declarado la disposición de su Gobierno de defender militarmente a Taiwán en caso de invasión de la isla o bien de que Beijing tratara de alterar el estatus quo en la región a través de la fuerza, la mayor asertividad de la administración Trump al respecto provocó suspicacias por parte de Beijing acerca de si tal compromiso suponía una desviación de la llamada política de “ambigüedad estratégica” que hasta entonces había seguido Washington. En 1979, EEUU puso fin al Tratado de defensa mutua que tenía con Taiwán, tras reconocer que el Gobierno de la República Popular de China era el representante legítimo de China y adherirse al principio de “Una Sola China”. Desde entonces, los sucesivos Gobiernos de EEUU habían sido “estratégicamente ambiguos” (evitando comprometerse explícitamente con la defensa militar de Taiwán) con el objetivo de disuadir tanto la agresión militar de China a Taiwán como la proclamación de la independencia por parte de Taipeí.

En cuanto a la presión política y militar de China sobre Taiwán, Taipeí denunció que en 2024 se registraron más de 3.000 incursiones de aeronaves militares chinas en los alrededores de Taiwán, un aumento del 80% respecto al año anterior y el máximo histórico desde que se comenzó a documentar esta actividad. En la misma línea, en abril de 2025 el jefe del Comando

Indo-Pacífico de EEUU declaró que en 2024 las acciones militares agresivas de China cerca de Taiwán –que calificó de ensayos y no simples ejercicios— se incrementaron en un 300% respecto del año anterior. Además del sustancial incremento en el número de violaciones de la Zona de la Identificación de la Defensa Aérea o cruces de la “línea media” del Estrecho de Taiwán, y de una creciente presencia rutinaria de barcos y aeronaves alrededor de Taiwán, en 2024 China llevó a cabo tres ejercicios militares de gran envergadura –*Joint Sword-2024*– en la zona contigua de Taiwán –el área marítima a continuación de las aguas territoriales, que se extiende entre 12 y 24 millas náuticas desde la costa. Cade destacar que el tercero de ellos en diciembre –desplegando alrededor de 90 barcos desde las islas del sur de Japón hasta el Mar de China Meridional– fue considerado por varios análisis como las mayores operaciones navales de las últimas tres décadas. En abril de 2025, el Gobierno chino también llevó a cabo ejercicios militares a gran escala con fuerzas aéreas y navales con fuego real alrededor de Taiwán –*Strait Thunder 2025*–, simulando el bloqueo de la isla y la neutralización de infraestructuras y objetivos críticos de Taiwán. Beijing difundió videos de ciudades taiwanesas con puerto siendo impactadas por cohetes y misiles balísticos. En respuesta, Taipeí envió aviones y barcos y desplegó sistemas de misiles terrestres. Varios analistas señalaron que tales ejercicios no solamente trataban de demostrar su capacidad de bloqueo o invasión de Taiwán, sino también su capacidad de bloquear o contrarrestar la posible ayuda de países aliados de EEUU en la región, como Japón o Filipinas. Por otra parte, el Gobierno de Taiwán denunció un incremento sin precedentes del corte de cables submarinos para afectar las comunicaciones en Taiwán y aislarlo informativamente, así como de ciberataques y de campañas de desinformación orientadas a aumentar el escepticismo sobre la fiabilidad de la asistencia estadounidense a Taiwán, la competencia del Gobierno de Lai Ching-te o la eficacia del ejército.

En paralelo a las acciones en el terreno militar, Beijing también ha incrementado la presión política sobre Taiwán. En los últimos años, en numerosas ocasiones altos cargos del Gobierno y el propio Xi Jinping han declarado que la “reunificación pacífica” de Taiwán con China continental es una de sus máximas prioridades, pero advirtiendo repetidamente que no renunciarían al uso de la fuerza si fuera necesario. En febrero de 2025, el ministerio de Defensa chino reiteró que Beijing no podía garantizar su renuncia al uso de la fuerza –en supuestos de actividades encaminadas a la independencia de Taiwán o de injerencia externa– y añadió que tarde o temprano se produciría la toma de Taiwán. Beijing ha señalado públicamente (y así está

recogido en su ordenamiento jurídico interno) que una declaración de independencia por parte de Taiwán propiciaría la invasión militar de la isla. Sin embargo, algunos análisis sostienen que este escenario es altamente improbable porque no hay una mayoría social en Taiwán favorable para tal declaración y porque tanto Taipei como EEUU son conscientes de las consecuencias que tal acción acarrearía. Además, Taipei considera que una declaración de independencia no es necesaria porque Taiwán ya disfruta de una independencia de facto. Según algunas fuentes, Beijing es consciente de las dificultades de lograr la reunificación pacífica –no existe mayoría social en Taiwán a la reunificación ni voluntad política a abordar la cuestión por parte de los sucesivos gobiernos taiwaneses. Sin embargo, Beijing ha puesto tanto énfasis en la reunificación que la inacción –o la no consecución de tal objetivo– podrían dañar su credibilidad. Ante tal escenario, numerosos análisis sostienen que la estrategia de Beijing pasa por presionar a Taiwán para la reunificación pacífica y a la vez preparar la intervención militar.

De hecho, aunque Beijing jamás ha mencionado ninguna fecha para que se haya conseguido la reunificación, algunas fuentes han situado en 2027 la fecha de una posible invasión de la isla. En esta línea, en abril de 2025, el secretario de Defensa adjunto para asuntos de seguridad del Indo-Pacífico, John Noh, señaló en la Cámara de Representantes que Xi Jinping habría ordenado al Ejército Popular de Liberación (EPL) que esté listo para invadir Taiwán en 2027.

Ante el incremento por parte de China de la presión política, las actividades militares y las llamadas “acciones de zona gris” –acciones de intimidación y hostigamiento militar pero sin llegar a ser consideradas como un acto de guerra–, tanto en 2024 como en el primer trimestre de 2025 el Gobierno de Taiwán ha tomado numerosas medidas, como la reinstauración del servicio militar obligatorio (que en 2024 pasó de cuatro meses a un año); la realización en enero de 2025 de su primer simulacro de guerra con China –en un escenario de cooperación de esta con Irán, Corea del Norte y Rusia– con el objetivo de comprobar si Taiwán es capaz de hacer frente a un ataque o bloqueo; o bien la constitución del Comité de Resiliencia para la Defensa de toda la Sociedad, con el objetivo de reforzar la respuesta en situaciones de crisis. En la misma línea, en marzo de 2025 el presidente taiwanés declaró a China como “fuerza extranjera hostil” y anunció varias medidas para contrarrestar lo que Lai denunció como una creciente infiltración de China en el Gobierno, sociedad y Ejército, como el endurecimiento de las restricciones a las personas que viajen a China o la reinstauración de los tribunales militares para casos como el espionaje.

La presión de China hacia Taiwán aumentó drásticamente tras la elección de William Lai Ching-te en las elecciones presidenciales taiwanesas de enero de 2024

Finalmente, el último factor que hizo incrementar la tensión alrededor del contencioso entre China y Taiwán fue la creciente assertividad de la administración estadounidense y el aumento de la retórica entre China y EEUU al respecto. Durante la campaña electoral estadounidense en 2024 y en los primeros compases de la Administración Trump a principios de 2025, algunas voces en Taiwán mostraron su sorpresa y preocupación por la tibieza y ambigüedad con la que Donald Trump se expresó respecto de sus vínculos y compromisos con Taiwán. De hecho, Trump fue bastante claro a la hora de pedir a Taiwán que incrementase sustancialmente el presupuesto destinado a su propia defensa. Ante estas declaraciones, hubo algunos análisis que sugirieron que Trump podría impulsar un viraje significativo de la política exterior estadounidense hacia Taiwán de sus predecesores. Sin embargo, a medida que avanzaba el 2025, varios altos destacados estadounidenses hicieron declaraciones contundentes contra China y mostraron su voluntad de impedir que Beijing altere unilateralmente y por la fuerza el estatus quo en el Estrecho de Taiwán. A modo de ejemplo, en mayo de 2025, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, advirtió que un ataque militar chino contra Taiwán podría ser inminente y pidió a sus aliados en el Indo-Pacífico que aumenten el gasto de defensa para incrementar su capacidad disuasoria ante Beijing. Hegseth dijo que cualquier intento de China de invadir Taiwán tendría consecuencias devastadoras para el Indo-Pacífico y el mundo, y advirtió que EEUU no buscaba un conflicto con China, pero que no permitiría que sus aliados y socios se vieran subordinados a China.

El secretario de Defensa de EEUU acusó a China de querer convertirse en la potencia hegemónica en Asia, de hostigar a Taiwán y a otros países en el Mar de China Meridional y también de utilizar sus capacidades cibernéticas para atacar infraestructuras críticas en EEUU. En la misma línea, el secretario de Defensa adjunto para asuntos de seguridad del Indo-Pacífico, John Noh, declaró ante la Cámara de Representantes que Xi Jinping habría ordenado al EPL que estuviera listo para invadir Taiwán en 2027. Noh advirtió que para contrarrestar la creciente amenaza que supone China en el Indo-Pacífico EEUU debería restablecer la disuasión con fuerzas militares creíbles. Por su parte, el jefe del Comando Indo-Pacífico de EEUU también advirtió que China estaba superando a EEUU en capacidad aérea, marítima y balística, mientras que el ministro de Defensa de Australia afirmó que China ha experimentado el mayor desarrollo militar del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, algunos análisis también especularon con la posibilidad de que la Administración Trump incremente drásticamente las ventas de armas a

Taiwán, superando ampliamente las ventas de su primer mandato (estimadas en unos 18.300 millones de dólares, según Reuters) y las del mandato de Biden (unos 8.400 millones, según la misma fuente). A pesar de no tener lazos diplomáticos formales (por la política de “Una Sola China”), EEUU es el principal proveedor de armas de Taiwán. Además, la Administración Trump estaría presionando a Taiwán para incrementar el gasto en defensa hasta el 3% de su PIB. Por su parte, Beijing expresó su tajante oposición tanto al incremento de transferencias de armas de EEUU a Taiwán como al incremento del presupuesto militar de Taiwán. En varias ocasiones Beijing ha exigido a EEUU que deje de inmiscuirse en lo considera un asunto interno y de crear nuevos ejes de tensión en la región. De hecho, en una conversación telefónica entre Trump y Xi Jinping, este último instó a EEUU a gestionar con prudencia la cuestión de Taiwán para evitar que las “fuerzas

separatistas de Taiwán” arrastren a China y EEUU al peligroso terreno de la confrontación e incluso del conflicto.

Aunque a corto plazo parece improbable cualquier escalada militar de Beijing contra Taiwán, así como un escenario de confrontación directa entre EEUU y China por dicha cuestión, en los últimos años, y en particular tras las elecciones presidenciales de enero de 2024, Beijing ha incrementado notablemente su presión política y militar sobre Taiwán y ha reiterado la posibilidad de usar la fuerza para lograr el objetivo de la reunificación. Por su parte, Taiwán también ha anunciado su intención de incrementar claramente sus capacidades de defensa, mientras que EEUU ha manifestado su disposición a involucrarse decisivamente para evitar que Beijing altere unilateralmente el estatus quo en el Estrecho de Taiwán.

5.3. India y Pakistán al borde de un conflicto armado a gran escala

Tras unos años de calma tensa en las relaciones entre India y Pakistán, un atentado en Cachemira perpetrado el 22 abril de 2025 por el grupo armado de oposición The Resistance Front, situó a ambos países al borde un conflicto armado a gran escala. 26 hombres murieron como consecuencia de un tiroteo en la localidad turística cachemir de Pahalgam, en su práctica totalidad turistas hindúes procedentes de otras zonas de la India, aunque entre las víctimas también se hallaba un turista nepalí y un trabajador local. The Resistance Front, considerado una ramificación del grupo armado Lashkar-e-Taiba y surgido en 2019 tras la pérdida de Jammu y Cachemira de su condición de estado, reivindicó el atentado a través de un mensaje de Telegram, si bien días después publicó un comunicado en su página web negando su responsabilidad en el atentado. Este grupo había llevado a cabo ataques previos contra población de origen no cachemir residente en el estado, gran parte de ellos trabajadores migrantes procedentes de otras zonas de la India, como denuncia por lo que considera un intento de transformación demográfica de Jammu y Cachemira promovido por las autoridades indias. En los últimos años, el Gobierno indio ha eliminado diferentes protecciones constitucionales, que reservaban trabajos gubernamentales y propiedad de la tierra a la población local, generando rechazo hacia estas medidas entre la población cachemir musulmana.

En respuesta al atentado del 22 de abril, el Gobierno indio respondió inicialmente con diferentes medidas diplomáticas, como por ejemplo la suspensión del Tratado de las Aguas del Indo—que rige el uso compartido del agua del río Indo por parte de India y Pakistán—, la expulsión de diplomáticos de Pakistán —todos los agregados de Defensa— y la orden de abandono del país en un plazo de 48 horas para visitantes pakistaníes con determinados visados, además del cierre del cruce fronterizo terrestre de Wagah y la paralización del comercio entre los dos países. Pakistán replicó varias de las medidas y también cerró su espacio aéreo a la India, medida que fue imitada por el Ejecutivo indio. Además, se produjo también intercambio de disparos en diferentes zonas de la Línea de Control, frontera de facto que separa a ambos países.

Tras varios días de escalada diplomática y retórica, en un contexto de creciente preocupación internacional por el incremento de la tensión entre dos potencias nucleares, India finalmente decidió iniciar una respuesta militar a la crisis y dio comienzo a la conocida como Operación Sindoor el 7 de mayo. En esta operación militar de las Fuerzas Armadas indias se llevaron ataques contra nueve emplazamientos en territorio pakistaní —en la provincia de Punjab— y en Cachemira, que la India

señaló como bases operativas de grupos terroristas pakistaníes. Se llevaron ataques aéreos contra lo que India describió como cuarteles de los grupos armados Jaish-e-Mohammed y Lashkar-e-Taiba. Pakistán consideró estos ataques como un acto de guerra y señaló que 31 personas habían muerto, incluyendo mujeres y menores. En respuesta a los ataques, Pakistán señaló que había neutralizado varios aviones de combates en el estado indio de Punjab y se difundieron en redes sociales informaciones sobre ataques con drones pakistaníes en varias ciudades indias. India señaló que su acción militar en respuesta al atentado de Pahalgam se hallaba plenamente amparada por Naciones Unidas, en referencia a la declaración emitida por el Consejo de Seguridad sobre el atentado del 22 de abril.³ Si bien el Gobierno indio señaló que los ataques habían estado dirigidos exclusivamente contra “infraestructura terrorista”, Pakistán señaló que se habían visto afectadas mezquitas y otros edificios.

En los días siguientes el conflicto escaló considerablemente con ataques recíprocos y acusaciones mutuas. India llevó a cabo nuevas acciones aéreas contra instalaciones militares pakistaníes en diversos lugares, incluyendo la ciudad de Rawalpindi, situada a 15km de la capital Islamabad y sede del cuartel general de las Fuerzas Armadas de Pakistán y del aeropuerto de uso militar. Entre los objetivos estaba la base aérea de Nur Khan en esta ciudad, situada en las inmediaciones del cuartel general de la División de Planes Estratégicos de Pakistán, que supervisa y protege el arsenal nuclear pakistaní, si bien las cabezas nucleares están repartidas en diferentes lugares del país. India señaló que se trataba de acciones en respuesta a ataques pakistaníes. El 10 de mayo el Gobierno pakistaní inició la Operación Buryan ul Marsoos, atacando varias instalaciones militares indias, como el propio Gobierno indio reconoció a posteriori. Como consecuencia de la violencia durante los días que duró el conflicto, India señaló que habían muerto 21 civiles y cinco militares, y Pakistán afirmó que 40 civiles y 11 militares habían muerto.

La escalada de la violencia y el riesgo de que el propio arsenal nuclear pakistaní se viera comprometido dio lugar a múltiples llamamientos diplomáticos por parte de diferentes Gobiernos requiriendo a las partes un alto el fuego, especialmente por parte de EEUU. Si bien el vicepresidente de EEUU, JD Vance, había descartado previamente involucrarse en la crisis, el riesgo nuclear impulsó un cambio de posición diplomática El 10 de mayo ambas partes anunciaban un alto el fuego con efecto inmediato. Poco antes del anuncio por parte de los Gobiernos indio y pakistaní, el presidente de EEUU, Donald Trump, había informado en su red social Truth

³ International Crisis Group, *Pulling India and Pakistan Back from the Brink*, Statement, International Crisis Group, 8 de mayo de 2025.

el acuerdo de alto el fuego, si bien ni India ni Pakistán hicieron ninguna referencia a la administración estadounidense al proclamar públicamente el acuerdo. El anuncio oficial del Departamento de Estado de EEUU señaló que se trataba de un alto el fuego facilitado por EEUU. Desde el inicio del conflicto varios Gobiernos, entre ellos los de EEUU, Arabia Saudita, Irán y Turquía, habían mantenido conversaciones con representantes indios y pakistaníes para tratar de desescalar la tensión.

La crisis entre ambos países fue la de mayor gravedad desde el conflicto armado en 1999 y se producía después de varios años de desescalada de la violencia, si bien en 2019 los dos rivales históricos atravesaron también una grave crisis, con episodios de violencia. Desde entonces, el Gobierno indio cambió su aproximación a la situación de Cachemira, transformando su estatus administrativo para reducir las cotas de autonomía del entonces estado indio, dividiéndolo en dos territorios de la unión: Jammu y Cachemira por un lado, y Ladakh por otro. La violencia en la Cachemira administrada por la India se había reducido notablemente en los últimos años, y públicamente el Gobierno indio había dado prácticamente por finalizado el conflicto. No obstante, en 2023 y 2024 se produjeron ataques contra población no autóctona, similares aunque de menor gravedad al de Pahalgam, y habían sido numerosas las voces que habían advertido del riesgo de que este tipo de ataques se intensificaran. En comparación con la crisis de 2019, el conflicto de la primavera de 2025 ha escenificado un mayor riesgo de confrontación abierta a gran escala. La respuesta militar por ambas partes ha sido mayor que en anteriores ocasiones, y el peligro de que las armas e instalaciones nucleares se incorporaran a la ecuación también se incrementó notablemente, hasta el punto de que motivó a diferentes actores internacionales a jugar un papel más relevante y asertivo, especialmente en el caso de EEUU, que previamente había optado por mantenerse al margen de la crisis. Históricamente, India ha rechazado la internacionalización de la confrontación y en esta ocasión señaló públicamente que el acuerdo de alto el fuego había sido pactado bilateralmente. No solo la cuestión nuclear estuvo en juego, sino que por primera vez ambos países utilizaron equipamiento militar como drones en su confrontación, propiciando una escalada más rápida que en anteriores ocasiones.

Además, India consolidó su opción de hacer frente a ataques terroristas con respuestas militares de alta intensidad y apuntando que cualquier acción de actores que operan desde Pakistán tendrá la consideración de acto de guerra.

A pesar de los enormes riesgos y de la mayor escalada en la confrontación entre India y Pakistán, finalmente se logró acordar un alto el fuego que se ha mantenido, incluso a pesar de acusaciones mutuas de violaciones. Los canales de comunicación entre autoridades militares y asesores de seguridad de ambos países han permanecido abiertos, aunque no ha trascendido públicamente que el diálogo haya avanzado más allá de las cuestiones relativas al alto el fuego. Si bien se abre una oportunidad para una conversación más amplia que podría permitir la desescalada y el establecimiento de medidas de confianza, como ocurrió en otras fases de la relación entre los dos países, por el momento no parece haber sucedido. El papel de los actores internacionales para empujar una ampliación del diálogo sería fundamental, máxime en un momento en que la internacionalización del conflicto ha permitido evitar una confrontación abierta de mayor intensidad y de consecuencias impredecibles para la región. El reequilibrio de alianzas en la región en un contexto de pugna geopolítica entre EEUU y China ha generado también un nuevo escenario en la región que se une a años de tensión de elevada intensidad entre China e India por las disputas fronterizas que las enfrentado y el acercamiento chino a Pakistán –parte del armamento usado para responder los ataques indios por Pakistán era chino–, dotando a la crisis entre India y Pakistán de una mayor complejidad.

Así pues, si bien la oportunidad para transformar el conflicto por la vía del diálogo permanece abierta, India y Pakistán han cruzado líneas rojas en su histórica confrontación, situando su relación y las perspectivas de respuesta ante futuras crisis en una situación de mayor riesgo de escalada que en anteriores fases del conflicto. Los riesgos son evidentes y la comunidad internacional debería fortalecer todos los canales diplomáticos a su disposición para evitar nuevas crisis con impredecibles consecuencias en un contexto fuertemente militarizado y con presencia de armas nucleares.

5.4. La escalada militarista en la Unión Europea

La UE y sus Estados miembro han adoptado un plan de rearme masivo, ReArmar Europa, que profundiza la carrera armamentista global, genera riesgos de escalada de tensiones en el continente y de impactos en seguridad humana y medioambiental. Adicionalmente, la iniciativa desvía recursos y liderazgo requerido para promover vías de resolución negociada de tensiones y conflictos abiertos y para recuperar y fortalecer marcos multilaterales de control de armamento y desarme.

La escalada militarista de la UE se ha acelerado en los primeros meses de 2025, si bien llega precedida de años de militarización en la UE y sus Estados miembro. Según datos del SIPRI, en 2024 el gasto militar total en Europa alcanzó los 693.000 millones de dólares, un aumento del 83% respecto a 2015 y por encima de los niveles registrados al final de la Guerra Fría.⁴ Entre los períodos 2015-2019 y 2020-2025, los países europeos de la OTAN incrementaron sus importaciones de armas en un 105%.⁵ Aunque a mucha distancia del gasto militar al nivel de los países, el presupuesto comunitario de la UE en seguridad y defensa también ha aumentado, con nuevos instrumentos y programas desde 2017: la Acción Preparatoria de Investigación en materia de Defensa (PADR), 2017-2019, de 90 millones de euros; el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (EDIDP), 2019-2020, con 500 millones de euros; el Fondo Europeo de Defensa, FED, con 8.000 millones en el Marco Financiero Plurianual (MFP) de 2017-2027; el instrumento Apoyo a la Producción de Municiones (ASAP), establecido en 2023, con 500 millones de euros; el programa e instrumento de Refuerzo de la Industria Europea de Defensa mediante la Adquisición Común (EDIRPA), creado también en 2023, con 310 millones de euros; el Programa para la Industria de Defensa Europea (EDIP), de al menos 1.500 millones de euros para 2025-2027, con el que implementar la Estrategia de Defensa Industrial Europea (EDIS) adoptada en 2024.⁶ A todo ello se añaden otros instrumentos en el presupuesto comunitario vinculados

La escalada militarista de la UE se ha acelerado en los primeros meses de 2025, si bien llega precedida de años de militarización en la UE y sus Estados miembro

a aspectos de “seguridad interior” y control de fronteras; y también fuera del presupuesto comunitario, a través del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP).⁷

En los primeros meses de 2025 se intensificó el rumbo de rearne. La presidenta de la Comisión Europea presentó el 4 de marzo de ese año el plan “ReArmar Europa” (“Rearm Europe”),⁸ con diversas propuestas de medidas para impulsar de forma masiva el gasto en defensa, y cuyo coste económico asumirían principalmente los Estados miembro. El plan fue respaldado por el Consejo Europeo del 6 de marzo (conclusiones EUCO 6/25). A su vez, la Comisión Europea presentó en marzo el Libro Blanco de la Defensa. De acuerdo con el análisis de ENAAT, el Libro Blanco recoge las medidas del plan Rearne, las amplía, y alinea esa batería de medidas con las otras ya existentes en el ámbito de la industria militar en Europa.

Según ENAAT, la novedad se situaría en la magnitud o gran escala de los nuevos pasos respecto a la senda de militarización que ya seguía la UE.⁹ Tras el Plan ReArmar y el Libro Blanco la Comisión Europea ha ido dando nuevos pasos para promover la implementación el Plan ReArmar Europa.¹⁰

Ambos consisten en un conjunto de medidas para un rearne masivo en Europa que busca movilizar 800.000 millones de euros en cuatro años, que se suman

al elevado gasto previo. La UE señala siete ámbitos de capacidades de defensa a fortalecer: defensa aérea y antimisiles; sistemas de artillería –incluyendo sistemas de misiles con capacidad para ataques de precisión y larga distancia–; munición y misiles; drones y sistemas antídrones; movilidad militar (red de corredores terrestres, aeropuertos, puertos marítimos y elementos y servicios de apoyo que faciliten el traslado rápido de tropas y equipamiento militares a través de los países europeos y países socios); guerra electrónica y cibernetica e inteligencia artificial militar e informática cuántica para defensa; facilitadores estratégicos y protección de infraestructura considerada crítica (incluyendo transporte aéreo, aeronaves de repostaje,

4 Liang, Xiao et al., *Trends in world military expenditure*, 2024, SIPRI Factsheet, abril de 2025.

5 George, Mathew et al., *Trends in military arms transfers*, 2024. SIPRI Factsheet, marzo de 2025.

6 Séoud, Laëtitia, “ReArm Europe, or the myth of a European defence for peace”, Rosa Luxemburg Stiftung Brussels Office, 15 de abril de 2025; VVAA, *Por una política de paz y desarme en Europa. Propuestas para una Europa de la distensión, la paz y la seguridad compartida*, Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Informe núm. 65, septiembre de 2024; Arteaga, Félix, *Europa en guerra y la defensa europea: ¿Cómo siempre?, Real Instituto Elcano*, ARI 117/2024, 9 de septiembre de 2024, pág.3.

7 Jones, Chris, Jane Kilpatrick y Yasha MacCannico, *At what cost? Funding the EU's security, defence, and border policies, 2021–2027. A guide for civil society on how EU budgets work*, Transnational Institute y Statewatch, abril de 2022.

8 El plan “Rearnar Europa” fue posteriormente renombrado “Preparación 2030” por empuje del Gobierno español, pero sin que haya cambiado su contenido de promoción de rearne de gran escala.

9 Séoud, Laëtitia, “ReArm Europe, or the myth of a European defence for peace”, Rosa Luxemburg Stiftung Brussels Office, 15 de abril de 2025.

10 Comisión Europea, “EU budget set for defence-related boost under new regulation”, 22 de abril de 2025; ENAAT, “News from the Brussels' Bubble”, NBB #2025-2, 30 de abril de 2025.

inteligencia y vigilancia, alerta marítima, entre otros).¹¹ La UE también señala la esfera de la “protección de fronteras” (terrestres, marítimas y aéreas). Además del incremento de capacidades de los Estados miembro, el Libro Blanco recoge prioridades y medidas dirigidas a un mayor apoyo militar a Ucrania, que define como “estrategia del puercoespín” (asistencia militar en la guerra y como vía de disuasión de futuros ataques) y que considera también como una vía de impulsar la competitividad de Europa en el ámbito de defensa.¹²

La Comisión de la UE y los Gobiernos de la UE no han profundizado en argumentos y justificaciones para esta nueva carrera de rearme. Señalan como objetivo “fortalecer la seguridad de la Unión Europa y la protección de nuestra ciudadanía” y alegan que “Europa debe ser más soberana y más responsable de su propia defensa”.¹³ El Libro Blanco de la Defensa señala una proliferación de amenazas a la seguridad europea y que ponen en riesgo “nuestro modo de vida”, incluyendo desafíos derivados de guerras, migración y cambio climático en regiones vecinas; terrorismo y extremismo violento, crimen organizado; competición sistémica entre actores y rivalidad geopolítica en diferentes partes del mundo; Rusia entendida como “amenaza fundamental” a la seguridad de Europa; amenazas híbridas; carrera tecnológica global; riesgos al suministro de materias primas críticas. Según el Libro Blanco, la UE debe gastar masivamente en defensa para desarrollar capacidades militares que disuadan agresiones armadas. En paralelo, en diferentes documentos y discursos de la UE se pone especial énfasis también en que el plan de apoyo masivo a la defensa militar tiene el objetivo de impulsar la competitividad industrial y tecnológica europea.

El Plan parece considerar el militarismo como único o principal camino posible y convierte en dogma la teoría de la disuasión militar, frente al abanico posible de estrategias y vías de acción no militares que han sido infravalorizadas por la UE y sus Estados miembro para afrontar conflictos armados y tensiones (actuales y en fases anteriores de menor intensidad), como el fortalecimiento de la propia acción exterior europea y de los servicios diplomáticos de los Estados miembro con una dotación de recursos al nivel de la propuesta para la acción militar, mayores esfuerzos en diálogo político y mediación, el apoyo a otros actores mediadores y facilitadores, el fomento a gran escala de capacidades de apoyo al diálogo y de integración de la sensibilidad al conflicto en la acción exterior e interior, programas destinados a investigación y acción sobre capacidades

de prevención y transformación no violenta de conflictos, apoyo al tejido social de acción no violenta en Europa y terceros países, programas e instrumentos de abordaje de nexos entre militarismo, violencia y masculinidades hegemónicas, el fortalecimiento de sistemas públicos, bienes públicos y cohesión social (tanto dentro de la UE como fuera), el refuerzo de instrumentos y marcos de control de armamento y desarme regionales y globales.

Respecto a la amenaza específica de Rusia, la UE y Estados miembro han desatendido en fases pasadas y anteriores a la invasión de Ucrania opciones a explorar como fortalecimiento del diálogo continental en el ámbito político y de seguridad. La invasión ilegal por parte de Rusia, atravesada por elementos de dinámica imperialista de Rusia y por otros de confrontación con las instituciones euroatlánticas, tiene consecuencias devastadoras y de larga duración para la población

Con su plan de rearme, la UE y sus Gobiernos desatienden vías de acción no militares para afrontar conflictos y construir seguridad

ucraniana y ha generado dilemas legítimos entre amplios sectores de población sobre la necesidad de apoyo militar a Ucrania para hacer frente a la invasión. Ante la invasión, ocupación e hipermilitarismo de Estado de Rusia, se necesitan más esfuerzos para llevar la confrontación hacia una desescalada militar tanto en relación a la guerra Rusia-Ucrania como en la tensión Rusia-UE/OTAN. La combinación de “estrategia del puercoespín” (apoyar masivamente capacidades militares de

Ucrania a largo plazo) y de rearme masivo en la UE como vía de disuasión militar frente a Rusia pueden agravar la tensión y militarización en el continente y empeorar, en lugar de disipar, los riesgos de seguridad y los focos de conflicto. **Por parte de la UE y sus Gobiernos podría potenciarse una mayor acción política y diplomática, de manera concertada junto a actores de fuera del espacio geopolítico de Occidente, para favorecer vías de salida negociada a la guerra Rusia-Ucrania, aun si difícil y costoso.** La UE podría explorar diálogo orientado a medidas de desescalada y de construcción de confianza en el ámbito de seguridad en relación a la tensión Rusia-UE/OTAN.

Por otra parte, aun si el plan ReArmar Europa se centra en apoyar a Ucrania y a las capacidades militares de Europa, las medidas pueden acabar suponiendo un incremento de exportaciones de la industria militar europea a terceros países –en base a la búsqueda de rendimiento económico y economías de escalada de las empresas de la industria militar–, incluyendo exportaciones a países con vulneraciones de derechos humanos, tensiones y conflictos y con violencia de género. La militarización y el armamento actúan como combustible y elemento facilitador de tensiones y conflictos armados, con

11 European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Joint White Paper for European Defence Readiness 2030*. JOIN(2025) 120 final, 19 de marzo de 2025, págs. 6-10.

12 Ibid., p. 10

13 European Council, *Special meeting of the European Council (6 March 2025) – Conclusions*, EUCO 6/25, 6 de marzo de 2025.

graves impactos en las poblaciones civiles en zonas de conflicto armado, incluyendo riesgos de exposición a violencia sexual.

Además, la estrategia de rearme de la UE y sus Estados miembro agravará la crisis climática, que paradójicamente la propia UE percibe como una amenaza a su seguridad. Estudios han señalado que los ejércitos mundiales son “los mayores consumidores fósiles del planeta y también y también los mayores emisores de gases de efecto invernadero que provocan la crisis climática, con un 5.5% del total de emisiones globales”.¹⁴ Además, el plan pone de manifiesto un enfoque reduccionista respecto al objetivo de crecimiento industrial y competitividad, fomentando de manera proactiva y masiva una industria, la militar, que contribuye con sus exportaciones de armamento al agravamiento de tensiones y conflictos y a los impactos en las poblaciones afectadas, en detrimento del apoyo a industrias no militares que den respuesta a necesidades básicas de las poblaciones y en detrimento del apoyo a una necesaria transición ecosocial en el contexto de emergencia climática.

Análisis críticos han señalado la influencia de la industria armamentística en el rumbo de militarización adoptado por la UE. A través de una ingente acción de lobby, la industria militar ha generado vínculos estrechos con las instituciones europeas y actores decisores y ha influido en las decisiones que la UE ha ido tomando desde hace años, incluyendo en relación a la adopción de fondos específicos para el sector, la flexibilización de programas civiles y su apertura a la entrada de la industria militar o la adopción de arquitectura y espacios de diálogo continuado con la industria militar.¹⁵ **Las facilidades al lobby armamentístico contrastan con la falta de transparencia de los fondos de la UE a la industria de seguridad y defensa,**¹⁶ y con la falta de un debate amplio político y social sobre las propuestas de rearne de la UE y alternativas posibles.

El Plan ReArmar Europa aspira a que el grueso del gasto masivo en defensa militar salga de los presupuestos públicos estatales. Para ello, la UE propone que los Estados soliciten la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (la conocida como “cláusula de escape”). Según la medida, la UE permitirá a los Estados que lo soliciten gastar por encima del umbral del 3% de déficit, para aumentar anualmente su gasto en defensa militar en un 1,5% del PIB, sin penalización y durante un periodo de cuatro años. Con ello, la medida anima a los Estados a

gastar en defensa militar a costa de deuda pública que los Estados y sus ciudadanías habrán de retornar, en detrimento de otras vías de afrontamiento no militar –y más económicas– de los desafíos señalados por la UE para justificar su plan ReArme. Fuera de la UE, Reino Unido ya ha anunciado planes de recortes en gasto social y en cooperación al desarrollo para incrementar su gasto en defensa. Aun si Estados miembro como España han afirmado que no habrá retrocesos en gasto social, incluso los gastos adicionales en defensa que provengan de fuentes de ingresos adicionales (y no de recortes o de déficit fiscal) implican una decisión política de destinarlos a defensa en detrimento a otros fines, como necesidades en sistemas públicos de vivienda, educación, sanidad, transporte, cuidados, transición ecosocial en el contexto de emergencia climática sectores, prevención y abordaje de violencia de género, fraude fiscal y lucha anticorrupción, u otros, fines que fortalecerían a las poblaciones y países en Europa frente a desafíos internos y externos.

Análisis críticos han señalado la influencia de la industria armamentística en el rumbo de militarización adoptado por la UE

Por otra parte, la UE promueve un nuevo instrumento (Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa, SAFE, cuya propuesta legislativa se presentó en marzo también). Mediante este instrumento la UE recaudará 150.000 millones de euros en mercados de capitales y proporcionará préstamos con procesos simplificados, prefinanciación y sin IVA a los Estados, bajo demanda, para facilitar “inversión pública urgente y sustancial” en la industria europea de la defensa, con compras conjuntas. **Una tercera medida principal del plan ReArmar Europa consiste en posibilidades e incentivos para que los Estados miembro utilicen fondos provenientes de los programas de política de cohesión para aumentar gasto nacional en defensa.** La Política de Cohesión de la UE abarca diversos fondos que buscan fomentar el crecimiento económico y la cohesión social y territorial y corregir desequilibrios entre países y regiones. Incluye instrumentos como el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Transición Justa, entre otros. Modificar la razón de ser de esos fondos, o de parte de ellos, para pasar a abarcar la opción de gasto en defensa implica militarizar la política de cohesión y restarle recursos, lo que es especialmente grave en el contexto de emergencia climática y necesidad de transicional ecosocial justa, así como de desafíos específicos tanto para áreas rurales como urbanas.

Por otra parte, el plan incluye también medidas desregulatorias para facilitar el acceso de la industria militar a financiación pública y privada, y que favorecen

14 Arnal Calvo, Beatriz, *Hacia una política climática libre de combustibles fósiles. Aportes desde el feminismo pacifista*, WILPF, octubre de 2024, pág.13.

15 Akkerman, Mark y Chloé Maulewaeter, *From war lobby to war economy How the arms industry shapes European policies*, ENAAT, septiembre de 2023.

16 Brunet, Pere, *Fondo Europeo de Defensa. Uso opaco de los fondos públicos*, Centre Delàs d'Estudis per la Pau y ENAAT, Informe núm. 70, diciembre de 2024.

la producción militar y la movilidad militar, según señala ENAAT, que alerta a su vez de que esto afectará a regulaciones medioambientales y sociales.¹⁷ Entre otras medidas, se han levantado las restricciones a la financiación a actividades militares, con excepción de armamento letal, por parte del Banco Europeo de Inversiones.

El salto a una mayor militarización y rearme en la UE y sus Gobiernos llega influido también por la posición de la alianza militar OTAN y por la incertezza sobre las relaciones transatlánticas bajo el nuevo mandato del presidente de EEUU, Donald Trump. Si en la cumbre de la OTAN de 2014 –año de la anexión militar de Crimea por Rusia– la alianza acordó un horizonte de alcanzar el 2% del PIB de los Estados miembro para gasto en defensa, ahora la OTAN y EEUU y actores de la UE presionan para acordar mayores umbrales de gasto en la cumbre de 2025, entre el 3% y el 5%. Como con el plan ReArmar Europa, continuar la senda de rearne y militarización –sea con un 3%, 3,5% o 5%– y de desatención de vías

no militares de construcción de seguridad continental y global agravará las tendencias de conflictividad, con especial impacto para las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Frente a ello, actores de la sociedad civil se han movilizado en denuncia del rearne promovido por la UE y la OTAN y en defensa de otras vías de construcción de seguridad.

En lugar de mimetizar dinámicas globales de militarización y confrontación, los Gobiernos de los Estados miembro y la UE podría promover otras formas de relaciones internacionales a través del multilateralismo y la desescalada militar. Ante el contexto actual de senda militarista por parte de los Estados de la UE, se requiere de esfuerzos en múltiples niveles, incluyendo por Parlamentos, partidos políticos, gobiernos sub-estatales, universidades, sindicatos, movimientos pacifistas, feministas, antirracistas y medioambientales, entre otros, para articular alianzas y propuestas alternativas de promoción de seguridad multidimensional.

¹⁷ Sédou, Laëtitia, “ReArm Europe, or the myth of a European defence for peace”, Rosa Luxemburg Stiftung Brussels Office, 15 de abril de 2025.

Glosario

- 11S:** 11 de septiembre
- 3R:** Retour, Réclamation et Réhabilitation
- AA:** Arakan Army (Ejército de Arakan)
- AAPP:** Asociación de Asistencia a los Presos Políticos
- ABSDF:** All Burma Students' Democratic Front (Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania)
- ABM:** Ansar Beit al-Maqdis
- ACLED:** Armed Conflict Location and Event Data Project
- ACNUDH:** Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- ACSS:** Africa Center for Strategic Studies
- ACT:** Ambazonia Coalition Team
- ADF:** Allied Democratic Forces (Fuerzas Democráticas Aliadas)
- ADF:** Ambazonia Defence Forces
- ADF-NALU:** Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda
- AFF:** Afghanistan Freedom Front
- AFL:** Afghanistan Liberation Movement
- AGC:** Autodefensas Gaitanistas de Colombia
- AGovC:** Ambazonia Governing Council
- AI:** Amnistía Internacional
- AIEA:** Agencia Internacional de la Energía Atómica
- AKP:** Adalet ve Kalkınma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
- ALAF:** Fuerzas Armadas Árabes de Libia
- ALBA:** Alianza Bolivariana para las Américas
- ALDEA:** Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo
- ALP:** Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
- AMISOM:** Misión de la Unión Africana en Somalia
- ANP:** Autoridad Nacional Palestina (También Autoridad Palestina -AP-)
- ANRHI:** Arab Network for Human Rights Information
- AOD:** Ayuda Oficial al Desarrollo
- APCLS:** Alliance de Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano)
- AQMI:** Al-Qaeda en el Magreb Islámico
- AQPA:** Al-Qaeda en la Península Arábiga
- ARS:** Alianza para la Re liberación de Somalia
- ARSA:** Arakan Rohingya Salvation Army (Ejército de Salvación Arakan Rohingya)
- ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
- ASWJ:** Ahlu Sunna Wal Jama'a
- ATMIS:** Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia
- AUBP:** Programa de Fronteras de la Unión Africana
- BDB:** Brigadas de Defensa de Bengasi
- BH:** Boko Haram
- BIFF:** Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (Luchadores por la libertad islámica de Bangsamoro)
- BINUH:** Oficina Integrada de la ONU en Haití
- BJP:** Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio)
- BLA:** Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
- BLF:** Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
- BLT:** Baluch Liberation Tigers (Tigres de Liberación Baluchi)
- BM:** Banco Mundial
- BRA:** Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
- BRN:** Barisan Revolusi Nasional
- BRP:** Baloch Republican Party (Partido Republicano Baluchi)
- CCMSR:** Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République (Consejo de Comando Militar para la Salvación de la República)
- CEDEAO:** Comunidad Económica de Estados de África Occidental
- CEEAC:** Comunidad Económica de Estados de África Central
- CENCO:** Conferencia Episcopal Congolesa
- CERAC:** Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos
- CHD:** Centre for Humanitarian Dialogue
- CICR:** Comité Internacional de la Cruz Roja
- CIDE:** Centro de Investigación y Docencia Económicas
- CJNC:** Cártel Jalisco Nueva Generación
- CJTF:** Fuerza de Tarea Conjunta Civil
- CMA:** Coordinadora de Movimientos de Azawad
- CMC:** Coalition of Movements for Change
- CMDPH:** Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
- CMPFP:** Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
- CMT:** Consejo Militar de Transición
- CNDD-FDD:** Congrès National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
- CNDP:** Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
- CNF:** Chin National Front (Frente Nacional Chin)
- CNL:** Congrès National pour la Liberté (Congreso Nacional por la Libertad)
- CNRD-Ubwiyunge:** Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie
- CODECO:** Coopérative pour le développement du Congo
- CODNI:** Comité Organizador para el Diálogo Nacional Inclusivo
- CONAIE:** Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador
- COP 27:** 27^a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022
- CPA:** Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
- CPC:** Coalición de Patriotas por el Cambio
- CPCR:** Cade permanent de concertation et de réflexion
- CPI:** Corte Penal Internacional

CPI-M: Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)
CSFA: Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
DAG: Dyck Advisory Group
DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración
DGCIM: Dirección General de Contrainteligencia Militar
DIH: Derecho Internacional Humanitario
DKBA: Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)
DMLEK: Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)
DNIS: Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano
DPA: Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)
EAC: East African Community (Comunidad de África del Este)
EAU: Emiratos Árabes Unidos
EDA: Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)
EEUU: Estados Unidos de América
EFDM: Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)
EHRC: Ethiopian Human Rights Commission
EIC: Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)
EIPJD: Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)
ELF: Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)
ELK: Ejército de Liberación de Kosovo
ELN: Ejército de Liberación Nacional
ENSF: Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)
EPC: Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)
EPL: Ejército Popular de Liberación
EPDF: Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)
EPR: Ejército Popular Revolucionario
EPRDF: Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etiópe)
ERPI: Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
ESL: Ejército Sirio Libre
ESN: Red de Seguridad del Este
ETA: Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)
ETIM: East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)
ETLO: East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)
EUCAP NESTOR: Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África
EUCAP SAHEL Mali: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Malí
EUCAP SAHEL Níger: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Níger

EUFOR: Fuerza de la Unión Europea
EULEX: Misión Civil de la Unión Europea en Kosovo
EUNAVFOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta
EUTM Mali: Misión de la Unión Europea para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí
EUTM Mozambique: Misión de la Unión Europea para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Mozambique
EUTM Somalia: Misión Militar de la Unión Europea para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia
EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FACT: Frente para el Cambio y la Concordia en Chad
FADM: Fuerzas Armadas Mozambiqueñas
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAR-LP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal
FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina
FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)
FDS: Fuerzas Democráticas Sirias
FFC: Forces for Freedom and Change (Fuerzas para la Libertad y el Cambio de Sudán)
FFC-CC: Forces for Freedom and Change-Central Command (Fuerzas para la Libertad y el Cambio -Comando Central de Sudán)
FIS: Frente Islámico de Salvación
FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)
FMI: Fondo Monetario Internacional
FML: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)
FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)
FPB: Forces Populaires du Burundi (Fuerzas Populares de Burundi)
FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina
FPR: Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)
FPRC: Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrrique (Frente Patriótico por el Renacimiento de la República Centroafricana)
Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro
FRELIMO: Frente de Liberación de Mozambique
FRUD-armé: Front uni pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie-Armé
G20: Grupo de los Veinte
G5 SAHEL: Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel
G7: Grupo de los Siete
GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados
GBAO: Región Autónoma de Gorno-Badakhshan
GERD: Gran Presa del Renacimiento Etiópe

GFT: Gobierno Federal de Transición
GNA: Gobierno de Acuerdo Nacional
GSIM: Group to Support Islam and Muslims (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes)
GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad
HIMARS: Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad
HM: Hermanos Musulmanes
HRMMU: Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania
HRW: Human Rights Watch
HTS: Hay'at Tahrir al-Sham
IBC: Iraq Body Count
ICG: International Crisis Group
IDG: Índice de Desarrollo de Género
IDH: Índice de Desarrollo Humano
IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre
IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)
IG SAKO: Interim Government - Sako
IG SISIKU: Interim Government - Sisiku
IGAD: Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
IISS: International Institute for Strategic Studies
ILGA: Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex
IMN: Islamic Movement of Nigeria (Movimiento Islámico de Nigeria)
INEC: Comisión Electoral Nacional Independiente
IPAC: Institute for Policy Analysis of Conflict
IPI: International Press Institute
IPOB: Pueblo Indígena de Biafra
IRGC: Guardia Revolucionaria Iraní
ISCAP: Estado Islámico Provincia de África Central
ISGS: Estado Islámico en el Gran Sáhara
ISIS: Estado Islámico
ISIS-KP: Estado Islámico de la Provincia de Jorasán
ISMP: Estado Islámico Provincia de Mozambique
ISWAP: Estado Islámico en la Provincia de África Occidental
IWF: Iduwini Volunteers Force (Fuerzas Voluntarias de Iduwini)
JAS: Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad
JAS-Abubakar Shekau: Jama'atu Ahlus-Sunna facción Abubakar Shekau
JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action (Plan de Acción Integral Conjunto)
JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)
JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)
JMB: Jamaat-ul-Mujahideen (Asamblea de Muyahidines)
JNIM: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes
KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenia)
KCP: Kangleipak Communist Party (Partido Comunista Kangleipak)
KDP: Partido Democrático de Kurdistán

KDPI: Partido Democrático Kurdo de Irán
KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo
KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)
KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)
KNDF: Karen Nationalities Defence Force
KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)
KNPP: Karen National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)
KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)
KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)
KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)
KRG: Gobierno Regional del Kurdistán
KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)
LAAF: Fuerzas Armadas Árabes de Libia (también conocido como LNA)
LDU: Lahu Democratic Union
LeJ: Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi)
LeT: Lashkar-e-Toiba
LGTBIQ+: Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersex, Queer y más
LNA: Ejército Nacional de Libia ((también conocido como LAAF))
LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)
LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)
M-19: Movimiento 19 de Abril (Colombia)
M23: Movimiento 23 de Marzo (RDCongo-Rwanda)
MAA: Movimiento Árabe de Azawad
MARA Patani: Majlis Amanah Rakyat Patani (Consejo Amanah para el Pueblo Patani)
MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra)
MDM: Movimiento Democrático de Mozambique
MENA: Medio Oriente y Norte de África
MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)
MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)
MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)
MINUJUSTH: Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití
MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en República Centroafricana
MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí
MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
MIT: Mujahidin Indonesia Timur (Muyahidines de Indonesia Oriental)

MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)

MLCJ: Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia)

MLF: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)

MLRS: Sistema de Cohetes de Lanzamiento Múltiple

MNDAA: Myanmar National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar)

MNJTF: Multinational Joint Task Force (Fuerza Regional de Tarea Conjunta)

MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad

MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)

MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni)

MPC: Mouvement Patriotique por la Centrafrique (Movimiento Patriótico por la República Centroafricana)

MPSR: Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración

MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)

MS13: Mara Salvatrucha

MSF: Médicos Sin Fronteras

MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental

NAS: Frente de Salvación Nacional

NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)

NDA: Niger Delta Avengers (Vengadores del Delta del Níger)

NDAA: National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Nacional Democrática)

NDC-R: Nduma défense du Congo-Rénové

NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)

NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)

NDFB (IKS): National Democratic Front of Boroland (IK Songbijit)

NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate (Mandato de Justicia de Greenland del Delta del Níger)

NDM-PF: National Democratic Movement-Patriotic Front (Movimiento Nacional Democrático-Frente Patriótico)

NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)

NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)

NLAW: Arma Antitanque Ligera de Próxima Generación

NNL: Línea Límite Norte

NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)

NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)

NGO WGWP: NGO Working Group on Women, Peace and Security (ONG Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Paz y Seguridad)

NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)

NRF: Frente Nacional de Resistencia

NSCN (K-K): National Socialist Council of Nagaland (Kole-Kitovi) (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia (Kole-Kitovi))

NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)

NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Khaplang)

NSCN-R: National Socialist Council of Nagaland-Reformation (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Reforma)

NSLA: National Santhal Liberation Army) Ejército Nacional Santhal

NSF: Fuerzas de Seguridad de Nigeria

NSSSOG: Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios

NST: Nigeria Security Tracker

NTF-ELCAC: Grupo de Trabajo Nacional para Terminar con el Conflicto Armado Comunista Local

OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

OCI: Organización para la Cooperación Islámica

OEA: Organización de los Estados Americanos

OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)

OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)

OLP: Organización para la Liberación de Palestina

OMC: Organización Mundial de Comercio

ONG: Organización No Gubernamental

ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)

ONU: Organización de las Naciones Unidas

OPC: Oromo People's Congress (Congreso Nacional Oromo)

OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)

OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte

OTAN KFOR: Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo liderada por OTAN

OTSC: Organización del Trabajo de Seguridad Colectiva

OVCS: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

OVV: Observatorio Venezolano de Violencia

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PANDEF: Pan Niger Delta Forum

PCF: Partido Comunista de Filipinas

PDF: Popular Defence Forces (milicias sudanesas)

PDKI: Partido Democrático Kurdo

PIJ: Jihad Islámica Palestina

PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán

PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán

PLA: People's Liberation Army
PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
PML-N: Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz
PNLO: Pa-O National Liberation Organisation
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PP: Partido de la Prosperidad (Prosperity Party)
PPP: Pakistan People's Party
PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)
PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)
PROVEA: Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos
PS: Provincia de Sinaí
PULO: Patani United Liberation Organisation (Organización Unida de Liberación de Patani)
PYD: Democratic Union Party (Partido Unión Democrática)
R-ARCC: Acuerdo Revitalizado sobre la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur
RASD: República Árabe Saharaui Democrática
RCA: República Centroafricana
RCSS: Restoration Council of Shan State
RDC: República Democrática del Congo
RED-Tabara: Résistance pour un État de Droit au Burundi (Resistencia por un Estado de Derecho en Burundi)
RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña
REWL: Red Egbesu Water Lions
RFI: Radio Francia Internacional
RNLF: Rabha National Liberation Front
RPD Corea: República Democrática Popular de Corea
RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)
RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)
RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)
RSF: Rapid Support Forces (Fuerzas de Apoyo Rápido)
RUD-Urunana: Ralllement pour l'unité et la démocratie (RUD)-Urunana
SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)
SAMIM: Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral
SCACUF: Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front (Frente Unido del Consorcio de Ambazonia del Sur de Camerún)
SCDF: Southern Cameroons Restoration Forces (Fuerzas de Restauración del Sur de Camerún)
SCF: Shiite Coordination Framework
SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
SIGI: Índice de Instituciones Sociales y Género
SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)
SLA: Sudan Liberation Army (Ejército de Liberación de Sudán)

SLA-AW: Sudan Liberation Army-Abdul Wahid (Ejército de Liberación de Sudán – Abdul Wahid)
SLA-MM: Sudan Liberation Army- Minni Minnawi (Ejército de Liberación de Sudán – Minni Minnawi)
SLDF: Sabaot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot)
SNNRPS: Southern Nations, Nationalities and People's State, SNNPS (Naciones, Nacionalidades y Estado Popular del Sur, SNNPS)
SOCADEF: Southern Cameroons Defence Forces (Fuerzas de Defensa del sur de Camerún)
SOHR: Observatorio Sirio de Derechos Humanos
SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés)
SPLA-IO: Sudan People's Liberation Army in Opposition (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en Oposición)
SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)
SPLM/A: Sudan People's Liberation Movement/Army (Movimiento-Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés)
SPLM-FD: Sudan People's Liberation Movement-Freed Detainees (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Detenidos liberados)
SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)
SRF: Sudan Revolutionary Forces (Fuerzas revolucionarias de Sudán)
SSA: Shan State Army (Ejército del Estado de Shan)
SSA-N: Shan State Army – North (Ejército del Estado de Shan - Norte)
SSC: Sool, Saanag y Cayn
SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)
SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)
SSOMA: South Sudan Opposition Movements Alliance (Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur)
SSPDF: Ejército de Sudán del Sur
SSPP/SSA: Shan State Progress Party/ Shan State Army
SSPP: Shan State Progress Party (Partido del Progreso del Estado Shan)
SSUF: South Sudan United Front (Frente Unido de Sudán del Sur)
STC: Southern Transitional Council
TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistán
TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TNLA: Ta-ang National Liberation Army (Ejército Nacional de Liberación Ta-ang)
TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigré)
TRF: The Resistance Front
TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan
UA: Unión Africana
UDA: United Democratic Alliance
UDRM/A: United Democratic Revolutionary Movement/ Army (Movimiento/Ejército Revolucionario Democrático Unido de Sudán del Sur)

UE: Unión Europea

UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)

UFR: Unión de Fuerzas de Resistencia

ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)

ULFA-I: United Liberation Front of Assam-Independent (Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente)

UMP: Unidades de Movilización Popular

UNAMA: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán

UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq

UNAMID: Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (o FPNUL)

UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

UNITAMS: Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán

UNJHRO: Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (RDCongo)

UNLF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)

UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia

UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur

UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNOWAS: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel

UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo

UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia

UPC: Union pour la Paix en Centrafrrique (Unión por la Paz en la República Centroafricana)

UPDF: Fuerzas Armadas Ugandesas

UPLA: United People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Unido)

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

UTI: Unión de Tribunales Islámicos

UTS: Unión Tribal del Sinaí

UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)

VRAEM: Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro

WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad)

YBS: Unidades de Resistencia de Sinjar

YPG: People's Protection Unit (Unidad de Protección del Pueblo)

YPJ: Women's Protection Units (Unidades de Protección de Mujeres)

YPS: Civil Protection Units (Unidades Civiles de Protección)

ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización.

Los principales ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- **Investigación.** Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, la dimensión de género en los conflictos y construcción de paz y la educación para la paz.
- **Educación y formación.** El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.
- **Diplomacia paralela.** La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, con diferentes actores y en diversos ámbitos de acción.
- **Servicios de consultoría.** La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.
- **Sensibilización.** Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau

Edificio B13, Carrer de Vila Puig, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra (España)

Tel: +34 93 581 14 14

Email: pr.conflictes.escolapau@uab.cat / Web: <http://escolapau.uab.cat>

Alerta 2025! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2024 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios del conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.



Con la colaboración de:

En un momento especialmente convulso, marcado por el deterioro del multilateralismo y la intensificación de conflictos armados, el informe *Alerta!* se consolida como una herramienta indispensable. Desde 2001, este anuario ofrece una lectura rigurosa y comprometida sobre la conflictividad global, con un enfoque que permite identificar tanto riesgos como oportunidades para la construcción de paz. Este año, en que se conmemoran los 25 años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, en un contexto de conflictos que han expuesto violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género contra la población civil, en tiempos de incertidumbre y disputas por el rumbo del orden internacional, el informe *Alerta!* contribuye de forma valiosa a reflexionar sobre los desafíos persistentes para una paz verdaderamente inclusiva, que sitúe la justicia de género en el centro.

Patsilí Toledo Vásquez

Integrante del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

La mirada crítica y con perspectiva histórica de los conflictos armados es una premisa fundamental para identificar riesgos y oportunidades factuales que nos permitan avanzar hacia una paz con seguridad humana. A través de una clasificación precisa y un estudio minucioso de la conflictividad armada, el equipo investigador de la Escola de Cultura de Pau nos ofrece una visión holística, tanto a nivel regional como estatal, de los conflictos y tensiones en el mundo, analizando sus raíces y causas estructurales, su evolución e intensidad, así como el impacto de los mismos desde una perspectiva de género. Un año más, el informe *Alerta!* sigue siendo un anuario de referencia para comprender la conflictividad y contribuir a las perspectivas de construcción de paz del mundo actual.

Enric Gonyalons

Responsable para América Latina y el Caribe de DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance

En un contexto geopolítico tan complejo como el actual es difícil valorar adecuadamente el trabajo de construcción de paz que hacen centenares de instituciones y organizaciones en todo el mundo. Necesitamos radares que ubiquen con precisión el estado de los conflictos armados y de las tensiones actuales, que expliquen la situación de las negociaciones de paz que existen, y también necesitamos brújulas que pongan en valor las oportunidades para la paz que se dan, como islas de esperanza que señalan el buen camino. Desde hace 24 años el informe *Alerta!* ofrece esto: una herramienta de análisis que relaciona los conflictos con los derechos humanos y la construcción de paz.

Xavier Masllorens

Presidente del ICIP (Institut Català Internacional per la Pau)